RICARDO MARTÍN DE LA GUARDIA

1989, el año que cambió el mundo

Los orígenes del orden internacional después de la Guerra Fría

akal



Akal / Universitaria / Serie Historia contemporánea / 339

Directora de la serie: Elena Hernández Sandoica

Ricardo Martín de la Guardia

1989, el año que cambió el mundo

Los orígenes del orden internacional después de la Guerra Fría



Hay fechas en la Historia en las que los acontecimientos se aceleran, momentos que recogen la trayectoria de las décadas pasadas para

convertirse en su epítome a la vez que aportan las grandes líneas directrices del futuro inmediato.
El año1989 es, sin duda, una de estas fechas: en Paraguay, la eterna dictadura de Stroessner llegaba a su fin, mientras que unos kilómetros más al oeste, en Chile, la oposición democrática vencía en las elecciones libres a una dictadura no menos emblemática, la de Augusto Pinochet. En Asia el régimen de los ayatolás enterraba aquel año a su líder, Jomeini, mientras que el gigante chino, todavía subestimado económica y políticamente, ofrecía su lado más oscuro en la matanza de estudiantes de Tiananmen.
Pero fue sobre todo la caída del Muro de Berlín en noviembre lo que, simbólicamente, inició el final de los regímenes comunistas de Europa central y oriental y abrió las puertas a la desintegración de la Unión Soviética dos años más tarde. El fin del orden internacional consagrado en Yalta cincuenta años atrás daba paso a una nueva realidad, más abierta –también más confusa–, donde la indiscutible primacía norteamericana debería conjugarse con una serie de potencias emergentes.
Apenas pasadas dos décadas desde aquel año que cambió el mundo, esta magnífica monografía analiza cómo lo sucedido entonces dio origen al nacimiento de un nuevo orden internacional.

Ricardo Martín de la Guardia es catedrático de Historia contemporánea de la Universidad de Valladolid, donde dirige el Instituto Universitario de Estudios Europeos. Entre sus últimas publicaciones destacan *Chechenia, el infierno caucásico. Historia de un conflicto inacabado* (2012, con Rodrigo González Martín) y *La Europa báltica* (2010, con Guillermo Á. Pérez Sánchez).

Diseño de portada
RAG

Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.

Nota editorial:

Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.

Nota a la edición digital:

Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.

© Ricardo Martín de la Guardia, 2012

© Ediciones Akal, S. A., 2012

Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España

Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028

www.akal.com

ISBN: 978-84-460-4111-5

Introducción

Hay fechas en la historia en las que los acontecimientos se aceleran, momentos que recogen la trayectoria de las décadas pasadas para convertirse en su epítome a la vez que aportan las grandes líneas directrices del futuro inmediato. El año de 1989 es, sin duda, una de estas fechas. La caída del Muro de Berlín en noviembre, que simbólicamente inició el final de los regímenes comunistas de Europa central y oriental y abrió también las puertas, aunque de manera indirecta, a la desintegración de la Unión Soviética, fue además el año en que, en la otra parte del mundo, llegó a su fin una dictadura casi tan larga como las comunistas, la de Stroessner en Paraguay, a la vez que unos kilómetros más al oeste, en Chile, la oposición democrática vencía en las elecciones libres a una dictadura no menos emblemática, la de Augusto Pinochet. En Asia, el régimen de los ayatolás enterraba aquel año a su líder, Jomeini, pero lo que para muchos analistas supondría una cierta flexibilización de la teocracia iraní daría lugar precisamente a lo contrario: a que la opinión pública internacional se familiarizase con el fundamentalismo islámico de raíz chiita. Por su parte, el gigante chino, todavía subestimado económica y políticamente, ofrecía su lado más oscuro en la matanza de estudiantes de Tiananmen, mientras en el continente africano los rescoldos del largo y penoso proceso de descolonización ardían todavía en Namibia: el territorio de lo que había sido África del Sudoeste era abandonado por las fuerzas militares del régimen racista de Pretoria, que al año siguiente, obligado por la presión internacional, liberaría de la prisión a Nelson Mandela, otro de los iconos del siglo que se cerraba.

Entre la caída del Muro en noviembre de 1989 y la desaparición de la Unión Soviética en diciembre de 1991 se diluyó irremediablemente el orden internacional consagrado en Yalta hacía ya cincuenta años, dando paso a una nueva realidad más abierta, pero también más confusa, donde la indiscutible primacía norteamericana debía conjugarse con una serie de potencias emergentes. Una vez

clausurado el conflicto de bloques, las organizaciones internacionales en general y la ONU en particular parecían estar en condiciones de velar por la paz en el mundo y luchar contra las desigualdades más flagrantes para garantizar el respeto universal de los derechos humanos. Sin embargo, detrás del esquema de confrontación de la Guerra Fría, excesivamente simplista, existía una realidad más compleja, forjada también durante aquel periodo y que ahora irrumpía con fuerza. Cientos de millones de personas sufrían el fracaso de planes y proyectos de modernización socioeconómica cuya virtualidad había sido en demasiadas ocasiones servir antes a los intereses de las grandes potencias que generar riqueza y estabilidad social. De esta forma viejos y nuevos conflictos se desgranaron por todo el mundo augurando una etapa no menos traumática que la precedente. Ni la ONU ni las grandes potencias, comenzando por Estados Unidos, fueron capaces de generar un clima de estabilidad que permitiera albergar a medio plazo esperanzas de una situación más pacífica y próspera.

Apenas pasadas dos décadas desde aquel año que cambió el mundo, presentamos al público una reflexión sobre la trascendencia de esta fecha y sobre cómo sus repercusiones condicionaron el nacimiento de un nuevo orden internacional. Se trata, por tanto, no de un análisis exhaustivo de cada uno de los aspectos que aborda, sino de una monografía de contenido histórico que pone sobre la mesa cómo lo sucedido en aquel año y en sus inmediaciones forjó un escenario cuyas consecuencias todavía se dejan sentir en nuestros días.

I. Todo empezó en Berlín

Probablemente, un acontecimiento no tan conocido como tantos otros que le sucederían tuvo una trascendencia mucho mayor para el inicio de la descomposición del mundo soviético: el 27 de junio de 1989 los ministros de Exteriores de Austria y Hungría, Alois Mock y Gyula Horn, se encontraron cerca de la localidad fronteriza de Sopron para cortar un trozo del alambre de espino que separaba a estas dos naciones; y así –aunque, en realidad, la frontera austrohúngara ya estaba abierta desde mayo[1]– a principios de aquel verano el Telón de Acero comenzó a desaparecer no sólo simbólica, sino también físicamente. El Gobierno húngaro había tomado esta determinación apelando tanto a la Conferencia de Helsinki de Cooperación y Seguridad en Europa –celebrada en 1975– como al documento firmado en Viena en enero de aquel mismo año de 1989, que mencionaba la libertad de movimientos como un derecho fundamental de la persona y que continuaba el espíritu de la Declaración Final emitida en Helsinki[2].

Cientos de fotógrafos y cámaras de televisión recogieron el emotivo momento, una noticia que iba a circular con enorme rapidez entre la población del Este de Europa. Las consecuencias no se hicieron esperar. Miles de checoslovacos y alemanes orientales que disfrutaban de sus vacaciones en territorio húngaro decidieron de inmediato no regresar a sus países de origen: se calcula que en los tres primeros días unos doce mil alemanes del Este huyeron al Oeste, mientras otros varios miles de ciudadanos de la RDA se dirigían a Checoslovaquia, adonde podían desplazarse sin visado, para pedir asilo en la embajada de la República Federal. Después de que las fuerzas del orden checoslovacas impidieran el paso a la sede diplomática, la mayor parte de ellos tampoco regresó, a la espera de encontrar alguna fórmula que les permitiera pasar a Hungría.

El 10 de septiembre el Gobierno de Budapest optó por conceder a todos los alemanes orientales un permiso para que sin ningún tipo de cortapisas pudieran cruzar la frontera hacia Occidente. A las

imágenes de los parques de las ciudades húngaras rebosantes de refugiados con la incertidumbre en el rostro siguieron las de júbilo en los pasos fronterizos. Algunas estimaciones posteriores alcanzaban la cifra de cuatrocientos mil alemanes orientales acogidos en la RFA a lo largo de 1989[3]. De hecho, no se sabía qué hacer con la población huida, y fue necesario improvisar[4].

En aquel mes de junio de 1989, mientras se abría la frontera austrohúngara, se celebraron elecciones en Polonia, de las cuales salió el primer ejecutivo de carácter no comunista en la historia de estos sistemas de dominación. Dirigido por Tadeusz Mazowiecki, la prudente actitud del Gobierno ante la herencia recibida, junto a su arrojo para iniciar un auténtico proceso de reforma, terminaría por no contentar a muchos, pero indudablemente, desde una perspectiva histórica, hay que reconocer su amplitud de miras teniendo en cuenta el contexto en el que actuaba. Era difícil cumplir las expectativas de los millones de obreros golpeados por el crecimiento del desempleo, los mismos que habían pugnado por conquistar las libertades. También era difícil satisfacer las demandas de las masas de católicos, para muchos de los cuales la nueva Polonia no caminaba exactamente por donde ellos hubieran deseado. Para desengaño de un buen número de polacos, no hubo persecución política contra los cuadros del Partido Comunista, y la inflación y el paro constituyeron la cara más oscura del cambio. En estas circunstancias, no había grandes posibilidades de que fuera de otra manera y, aunque le tocó la etapa más difícil de aquellos primeros momentos, corresponde al Gobierno de Mazowiecki el mérito de lograr poner las bases sobre las que pronto se asentaría una transición pacífica y, a la postre, exitosa. Según el periodista Adam Michnik, consejero de Lech Wałęsa e impulsor de *Gazeta Wyborcza,* el diario más influyente en aquellos años, «nos dimos cuenta también de que para la democracia polaca sería recomendable seguir el camino de España, la senda de la evolución de la dictadura a la democracia, mediante el compromiso y la reconciliación: sin venganzas, sin vencedores ni vencidos, con gobiernos que en el futuro fueran elegidos libremente»[5].

Precisamente, entre los gestos de buena voluntad de Mazowiecki, uno de los más significativos fue la invitación a Helmut Kohl a visitar Polonia. El 9 de noviembre de 1989 el canciller alemán llegó a Varsovia para lo que iba a ser una estancia de seis días para alentar la reconciliación entre ambos pueblos. Por supuesto, a Kohl no se le pasaba por la cabeza que esa misma noche el Muro dejaría de ser una de sus preocupaciones. En efecto, apenas llegado, durante la cena ofrecida por Mazowiecki, los rumores sobre lo que estaba ocurriendo en Berlín fueron convirtiéndose en noticias contrastadas. Como declaró el propio Kohl al evocar aquel momento, «nos sentíamos casi como si estuviésemos en otro planeta»; al día siguiente, antes de abandonar anticipadamente Polonia, ofreció una rueda de prensa en el hotel Marriott y durante su transcurso afirmó que el proceso iniciado la tarde anterior formaría parte de la historia universal.

En el año 2009, pocos días antes de la celebración del vigésimo aniversario de la caída del Muro, el octogenario Günter Schabowski ingresó en el hospital a causa de una nueva dolencia cardiaca. Schabowski había sido, en aquel año crítico de 1989, portavoz del Comité Central del Partido Socialista Unificado (SED, por sus siglas en alemán) y su nombre había pasado a la historia por ser quien durante la rueda de prensa del 9 de noviembre, a las 18:53 horas, había informado a los periodistas de que los puestos fronterizos entre las dos zonas de Berlín quedaban abiertos desde ese momento. A las 19:04 la Deutsche Presse Agentur (DPA) emitía un comunicado urgente según el cual los ciudadanos de la RDA podían salir del país por cualquier paso fronterizo con la RFA. Sobre las nueve y media de la noche los primeros germanoorientales entraron en Berlín Oeste sin ninguna dificultad. La noticia saltó en los teletipos de todas las agencias ante la incredulidad de unos, el estupor de otros y la sorpresa de la mayoría.

Sin duda, el Muro de Berlín había sido eficaz. Entre su construcción en agosto de 1961 y su caída en noviembre de 1989, tan sólo unas cinco mil personas habían podido atravesarlo valiéndose fundamentalmente de la imaginación y de su férrea voluntad de refugiarse en el Oeste; una cifra verdaderamente

pequeña si consideramos el espacio de tiempo y el número de intentos[6]. El símbolo por excelencia de la Guerra Fría desaparecía sin que las consecuencias estuvieran previstas en la mente de los reformadores germanoorientales[7]. A lo largo de 1988 y 1989, según demuestran las intervenciones públicas de los políticos de la época y los estudios de los analistas internacionales más avezados, ni unos ni otros esperaban un acontecimiento como este [8].

La República Democrática de Alemania: un fabuloso mundo de ficción

Una primavera para las celebraciones

La conmemoración del cuadragésimo aniversario del nacimiento de la República Democrática de Alemania a comienzos de octubre de 1989 no pudo ocultar el malestar de la población. Al contrario que en ocasiones previas, la profusa e insistente campaña de propaganda lanzada por el aparato estatal para celebrar los éxitos del régimen de Honecker no consiguió contar con la aquiescencia de los ciudadanos. A pesar de la represión, muchos mostraron públicamente su rechazo al sistema mientras otros optaban por salir del país. Por si ello fuera poco, el 7 de octubre Gorbachov afirmó en Berlín Este que el respaldo de la URSS seguiría solamente en el caso de que la República Democrática abriera una vía reformista[9]. Asimismo, el líder reconocía públicamente que la RDA atravesaba una situación difícil, por lo que convendría a sus dirigentes dar una respuesta adecuada a los problemas sin perder de vista las transformaciones globales que operaban en el mundo[10].

En efecto, la pérdida de apoyo soviético fue un hecho desde la llegada de Gorbachov a la Secretaría General del PCUS puesto que su política transformadora no influyó de manera determinante en el comportamiento de los dirigentes del SED. Sucedió más bien al contrario: la incoación de expedientes y la expulsión de afiliados del Partido aumentaron para tratar precisamente de atajar cualquier veleidad reformista. En 1988 fueron expulsados de la organización

más de cuatro mil militantes; al año siguiente, antes del 8 de noviembre, se habían dado de baja sesenta y seis mil[11]. En ese mismo año de 1988, también en noviembre, las autoridades germanoorientales prohibieron el semanario *Sputnik,* que, editado en la URSS, había asumido la línea propia de la perestroika y vendía la nada despreciable cifra de 200.000 ejemplares. En enero de 1989, en el colmo de la paradoja, las fuerzas policiales tuvieron que reprimir con violencia una manifestación que conmemoraba los asesinatos de los líderes espartaquistas Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht y en la que se recordaban las palabras de aquella: «La libertad es la libertad de los que piensan de forma diferente». La legitimidad, no ya del SED sino de la propia RDA por la inextricable unión Partido-Estado, que cobraba su sentido dentro del marco ideológico de referencia propiciado por la URSS, quedaba sensiblemente herida como consecuencia del nuevo rumbo político impuesto desde el Kremlin[12].

Todavía confusos por la trascendencia de lo acontecido, el día 13 de noviembre se reunió la Asamblea legislativa o *Volkskammer* para debatir y definir las líneas de actuación en un futuro próximo. Todo el país pudo contemplar las discusiones entre los representantes de las distintas tendencias del SED y los del resto de los partidos del Frente Nacional, la organización que, para dar un aire de pluralidad, agrupaba desde los primeros momentos de vida de la RDA al SED y a otras formaciones históricas sometidas completamente a la disciplina de aquel. Sin embargo, con la caída del Muro, algunos de estos partidos, como la CDU (Unión Demócrata Cristiana) y los liberales, intentaron revivir y para ello ofrecieron puntos de vista diferenciados del discurso oficial, al menos en parte[13]. La unidad de criterios había desaparecido por completo y, con ella, la sensación de seguridad hasta hacía poco mantenida con el control que ejercía el poder político. La pérdida de rumbo del Partido y del Gobierno y el fortalecimiento de la oposición influyeron de manera determinante en la *Volkskammer* para que esta eligiera un nuevo responsable del ejecutivo. La elección recayó en el líder del SED en Dresde, Hans Modrow, imbuido en las últimas semanas de un espíritu reformador y un talante de diálogo, y tanto las encuestas realizadas en el

interior del país como los comentarios foráneos coincidieron en señalar sus buenas aptitudes para convertirse en el hombre clave en el proceso de transición a la democracia en Alemania Oriental.

El Gobierno Modrow, presentado cuatro días después, se componía de un número menor de miembros que el anterior e incluía figuras nuevas como el democristiano Lothar de Maizière para los asuntos religiosos o Christa Luft para la economía; no todos los ministros, pues, pertenecían al SED. El gabinete quiso enfrentarse a los graves problemas del país con hechos y no con el voluntarismo propio de los programas de renovación anteriores, y los anuncios democratizadores de Modrow se concretaron en una mayor precisión al hablar de la reforma educativa o la económica, así como en las medidas de liberalización política y descentralización administrativa. Incluso los grupos de oposición, representados ampliamente en el nuevo equipo ministerial, aceptaron de buen grado las propuestas del jefe de Gobierno hasta la celebración de elecciones[14].

En esta insólita situación, la precaria estabilidad del SED acabó por desaparecer. Millares de militantes abandonaban la formación política mientras desde distintos sectores de lo que quedaba del Partido se insistía en una profunda reforma interna para atajar el camino sin rumbo que parecía haber tomado la organización. También, sobre todo desde la juventud comunista, se pedía el reemplazo de los jefes locales y de distrito así como la convocatoria de un congreso extraordinario para determinar la línea de actuación del SED.

Contestatarios y refugiados

El crecimiento de la disidencia en la República Democrática de Alemania durante la década de los ochenta estuvo en relación directa con el retroceso del nivel de vida y con la incapacidad del Gobierno para frenarlo[15]. La revolución cívica en este país se encuadraba, por tanto, dentro de los procesos que se desarrollaron en el resto de la Europa central y oriental. Los sectores más sensibilizados de la sociedad –el embrión de la futura oposición–

comenzaron a movilizarse ante lo que consideraban el aumento de la represión después de aprobarse y aplicarse la ley contra los responsables de los desórdenes públicos de 1984 y de reforzarse la denominada «Educación Patriótica», es decir, una nueva vuelta de tuerca del adoctrinamiento comunista en las escuelas. La militarización de la vida pública era, quizá, la respuesta más llamativa del régimen germanooriental para neutralizar cualquier conato de contestación al poder omnímodo del Partido Único.

Como en otros países del área, la Iglesia, en este caso protestante, iba a desempeñar en los últimos años del régimen un papel cuya relevancia ha sido puesta de manifiesto con más énfasis por la historiografía que por la propia realidad. En este sentido, al amparo de la Confesión Evangélica nacieron la Iniciativa para la Paz y los Derechos Humanos en 1985 y la Biblioteca del Medio Ambiente un año después. También por entonces comenzaron a realizarse en la iglesia de San Nicolás de Leipzig una serie de veladas de carácter semanal donde además de plegarias se hacían llamamientos a la paz y a la libertad, por lo que fueron rápidamente prohibidas[16].

Una vez dicho lo anterior, es preciso señalar que todavía en aquellos años la mayor parte de los sectores críticos con la política oficial pugnaba por la defensa de un orden socialista en Alemania, una suerte de regeneración de las estructuras del Estado que condujera a un socialismo más eficaz, fiel a la tradición del «socialismo de rostro humano». De este proyecto participaba la influyente Federación de Iglesias Evangélicas, cuyo presidente, Werner Leich, animaba en 1988 tanto a las autoridades como a la sociedad a colaborar en la construcción de un sistema más justo, equitativo y democrático de inequívoca naturaleza socialista. Este rasgo característico de la mayor parte de la disidencia en unos momentos tan tardíos no bastó para tranquilizar a las autoridades. Antes bien, sucedió todo lo contrario: el secretario general del SED, el veterano Erich Honecker, continuó insistiendo en la fuerza inquebrantable del Estado de los Obreros y Campesinos y tachando de contrarrevolucionarios a quienes osasen levantar la voz, mientras la policía secreta del Estado, la temible Stasi, incrementaba su acción para arrancar de raíz cualquier conato de oposición, bien fuera

deteniendo a sus promotores, bien clausurando sus sedes o censurando cualquier tipo de publicación contraria a las tesis oficiales[17].

Mientras se desarrollaban estos acontecimientos, la mayor parte de la sociedad no iba a optar por reformar el régimen desde dentro sino que, cuando se dieran las circunstancias adecuadas, decidiría, sencillamente, abandonar el país. La huida de la población respondería a motivos de diversa índole, pero sobre todos ellos figuraba alguno derivado de hechos objetivos: la ausencia de libertades y de perspectivas para mejorar las condiciones de vida. Fue precisamente este éxodo de ciudadanos el que, con mayor fuerza que los movimientos de contestación interna, minó decisivamente la legitimidad del régimen germanooriental, pues mostraba tanto el colapso económico como la generalización de un sentimiento de fracaso político y social.

Pronto se presentaron esas circunstancias adecuadas: como hemos visto anteriormente, el 2 de mayo de 1989 el Gobierno de Hungría ordenó desmantelar los puestos de vigilancia a lo largo de la frontera con Austria como un gesto más de la nueva política de buena vecindad. Sin duda, las autoridades húngaras no habían calibrado las repercusiones que este acto iba a tener para el futuro de la República Democrática de Alemania. Durante aquel verano de 1989 flujos constantes de ciudadanos germanoorientales franquearon como pudieron las fronteras o aprovecharon el regreso de sus vacaciones en otros países del Este para refugiarse en las embajadas de la República Federal de Alemania en algunas capitales de las democracias populares. Esta fue la clave: la huida masiva sirvió para deslegitimar todavía más el régimen, pero fue un factor que no operó desde dentro del país.

Incapaz de cualquier autocrítica y cada vez más ajeno a la realidad circundante, Erich Honecker siguió abogando por la viabilidad del socialismo revolucionario como fuerza irresistible para acabar con todos los traidores atraídos por los cantos de sirena del capitalismo. Parecían, sin embargo, demasiados traidores para justificar la cerrazón de los dirigentes máximos del SED: se estiman en unas 400.000 las personas –la mayoría, jóvenes cualificados

profesionalmente– que entre mayo y septiembre fueron acogidas en territorio de la RFA, sobre todo después de que el día 10 de septiembre se abriera definitivamente la frontera húngara[18].

Fue durante aquel otoño de 1989, en vísperas del colapso definitivo de la República Democrática de Alemania, cuando los movimientos cívicos de oposición a la dictadura se consolidaron y se hicieron visibles a través de manifestaciones y marchas pacíficas, sobre todo en las grandes ciudades: entre otras, Leipzig y Dresde volvieron a saltar a las páginas de la prensa mundial, esta vez no por los trágicos recuerdos de la guerra, sino por acoger a las masas que expresaban su descontento[19]. El movimiento cívico surgía ante los ciudadanos de la RDA y ante la opinión pública europea en general como una nueva forma pacífica de hacer la revolución[20], si bien lo hacía con enorme retraso y no con demasiada influencia en un proceso de deterioro interno que llegaba entonces a su fin[21]. Tal era el caso, por ejemplo, de Neues Forum: aunque fue el grupo que mejor canalizó las quejas contra el sistema en esta última fase de poder socialista en Alemania Oriental, no se fundó hasta el 9 de septiembre de 1989; auspiciado por varios intelectuales de muy distinta procedencia ideológica, hacía una llamada para la creación de un espacio abierto dentro del cual todo el que quisiera pudiera debatir sobre el presente y el futuro del país de manera que de ese debate surgieran propuestas para transformar su vida pública.

De la escasa fuerza numérica de los movimientos contestatarios nos da cuenta un detallado informe de la Stasi estudiado por el profesor Konrad Jarausch[22]: en el verano de 1989 la policía secreta detectó ciento cincuenta grupos de oposición en todo el territorio de la RDA. La mayor parte de sus efectivos contaba entre veinticinco y cuarenta años de edad y estaba relacionada con el mundo intelectual o de los trabajadores cualificados, principalmente, en ciudades importantes como Halle, Dresde, Chemnitz, Leipzig y Berlín. Tanto por la cantidad de grupos como por la extracción profesional de sus miembros pudiera parecer que el país se encontraba amenazado por la disidencia interna; sin embargo, se trataba de apenas unos miles de activistas.

Limitada en efectivos y reprimida por las instancias oficiales, la fuerza social de la oposición a la altura del otoño de 1989 hacía pensar que en sus primeros momentos –esto es, desde mediados de la década– el revulsivo del sistema no había sido la sociedad civil, sino otro muy distinto: la profunda crisis económica y de legitimidad del Gobierno comunista.

La República Federal de Alemania: un Estado pujante

La ola de conservadurismo que en los años ochenta recorrió el mundo occidental en respuesta a la crisis del consenso de posguerra sobre el crecimiento y la seguridad –con los triunfos electorales de Margaret Thatcher en Gran Bretaña y de Ronald Reagan en Estados Unidos– alcanzó por las mismas fechas la República Federal de Alemania. Después de trece años de primacía de los socialdemócratas y tras una moción de censura, el 1 de octubre de 1982 llegó al poder Helmut Kohl al frente de una coalición de liberales (FDP) y cristianodemócratas (CDU-CSU). El nuevo Gobierno convocó elecciones para el 6 de marzo de 1983, en las que los alemanes ratificaron con su voto el viraje político iniciado unos meses antes, como volverían a hacerlo en las de 1987. En efecto, aquella década fue el gran momento de los conservadores en la República Federal.

Tras años de incertidumbres y confusión provocadas por la política socialdemócrata, Alemania atravesaba una crisis que, además de en la economía, se reflejaba en un cierto estado de postración general, de ahí que la declaración de Kohl del 13 de octubre de 1983 manifestase su voluntad a favor de un gran cambio. Imbuida de las ideas neoliberales en boga, la coalición gubernamental aspiraba a resolver los problemas económicos, en concreto, a reducir la tasa de desempleo más elevada de toda la historia de la República Federal y a impulsar la economía para recuperar una posición de influencia en los mercados internacionales. Receloso del Estado del bienestar, que tenía a la población acostumbrada a un gasto público excesivo e inducía a algunos sectores a depender cómodamente de las ayudas,

el equipo de Kohl apostó decididamente por las medidas liberalizadoras, la responsabilidad individual, la movilidad en el empleo y la competitividad. El Estado dejaba de ser la solución para el crecimiento económico y se convertía en parte del problema.

En este contexto, el objetivo prioritario de la coalición consistió en frenar el déficit público, que disminuyó en un tercio entre 1982 y 1986 gracias, en gran parte, a limitar el crecimiento del sueldo de los funcionarios, a suprimir parte de las ayudas concedidas a los centros escolares y estudiantes y a rebajar las prestaciones de jubilación y desempleo, así como otros subsidios[23]. Sin embargo, la pregonada austeridad no fue uniforme; si las partidas sociales experimentaron un descenso ostensible, no fue así en el caso de muchos de los capítulos restantes del gasto público.

El ligero crecimiento del PNB puso de manifiesto que, a pesar de todos los problemas, se iniciaba una tímida recuperación económica. Tras la contracción de 1982, aumentó con altibajos una media del 2,4 por 100 entre 1983 y 1988, mientras la inflación retrocedía significativamente a partir de 1982 (5,3 por 100) hasta estabilizarse en torno al 1,5 por 100 como promedio de los seis años siguientes.

Junto a la reducción del gasto público y al control de la inflación, se consolidaron las exportaciones, favorecidas por la coyuntura internacional y, sobre todo, por la baja del dólar: en 1986 la República Federal figuraba como el primer exportador mundial, por encima incluso de Estados Unidos. El éxito fue debido, sobre todo, al aporte de los productos mecánicos y químicos (Daimler-Benz, la primera empresa alemana por el volumen de negocios, empleaba a unos 257.000 trabajadores). Fruto de todo ello fue que la participación alemana en el comercio mundial alcanzara el 17 por 100 a mediados de la década, lo cual la hacía muy superior a la presencia británica, francesa o japonesa[24].

Frente a la solidez de la economía germana, los datos del paro no mejoraban. Entre 1983 y 1988 el promedio de la población sin empleo se mantuvo en torno al 8 por 100, cifra equivalente a unos dos millones de personas. La política gubernamental para atajar esta situación consistió en dotar de mayor flexibilidad al mercado de trabajo y emprender una serie de medidas tales como el fomento del

trabajo a tiempo parcial –especialmente en la población femenina– y de la jubilación anticipada.

A pesar de los enfrentamientos constantes con los sindicatos, que abogaban por acabar con la precariedad de los contratos y reducir la semana, el gabinete del canciller Kohl endureció la legislación laboral a partir de 1986. La Oficina Federal de Trabajo dejó de sufragar las indemnizaciones compensatorias a los obreros despedidos o en paro técnico y traspasó a los sindicatos la financiación de estas ayudas, de ahí que las huelgas adelgazaran las arcas sindicales al tener estas que suplir la retirada de fondos federales.

Respecto a la política internacional, el Gobierno de Kohl volvió la mirada hacia la alianza atlántica al considerarla el marco más seguro para la seguridad y defensa alemanas, sobre todo por la capacidad nuclear norteamericana ante un eventual enfrentamiento con el bloque soviético. La llegada de Gorbachov al poder modificó sensiblemente la situación, ya que la nueva actitud de Moscú, favorable al desarme progresivo, tuvo especial incidencia en el territorio alemán. Junto a la política proatlantista, el europeísmo fue otra constante en la posición del ejecutivo, como lo había sido con los socialdemócratas[25]. En efecto, en aquellas décadas la RFA fue un pilar de la integración, una de cuyas grandes beneficiadas era ella: concentraba la tercera parte de las reservas monetarias y absorbía la cuarta parte del comercio intracomunitario en calidad de principal abastecedor de la práctica totalidad de socios europeos[26].

Las relaciones interalemanas no sufrieron grave deterioro tras el despliegue en la República Federal de los misiles de alcance medio a finales de 1983. Al menos hasta la anulación de la visita de Honecker a Alemania Occidental en septiembre de 1984, la República Democrática mantuvo sus contactos incluso a pesar de la desaprobación soviética. Ambas Alemanias disponían de un relativo margen de maniobra por lo que se refiere a sus respectivos sistemas de alianzas y buscaban mantener una convivencia que, sin renunciar a la realidad de aquellos, mitigase en la región la gravedad del conflicto Este-Oeste.

Al igual que en otras facetas, con Gorbachov en la Secretaría General del PCUS la mejora de las relaciones entre las superpotencias influyó decisivamente en Alemania. Se multiplicaron los convenios y acuerdos gubernamentales entre los dos Estados hermanos, máxime después de que Erich Honecker, secretario general del SED, visitase finalmente Alemania Occidental entre el 7 y el 11 de septiembre de 1987. Por primera vez en la historia un jefe de Estado de la RDA había sido recibido oficialmente en la RFA. La mejora de los lazos entre Berlín Este y Bonn repercutió favorablemente en la economía de la República Democrática, que fue adquiriendo un estatus de cierto privilegio como socio comercial de la Comunidad Europea.

Los últimos años de la década coincidieron con la publicidad de una serie de escándalos políticos que golpearon, sobre todo, a algunos miembros de la coalición gubernamental o a compañeros de partido en algunos gobiernos regionales. Precisamente cuando la popularidad de Kohl se situaba en los niveles más bajos y su autoridad comenzaba a ser tan contestada dentro de las filas de su propia organización como desde la socialdemocracia, cayó el Muro de Berlín. Las voces que abogaban por su sustitución al frente del Gobierno de coalición se diluyeron, lo cual le permitió sacar provecho de las circunstancias y erigirse, contra toda expectativa, en el artífice de la nueva Alemania reunificada[27].

Hacia la unificación de los dos Estados alemanes

¿«Somos el pueblo» o «Somos un pueblo»?

Desde finales de noviembre de 1989 la cuestión de la reunificación emergió con fuerza entre las masas populares. Las numerosas manifestaciones que seguían recorriendo las calles y plazas de las ciudades de la República Democrática contaban cada vez con más pancartas y hojas volanderas en donde se llamaba a la unidad de la nación alemana. Si los ciudadanos manifestaron en los primeros momentos su deseo de reforma y de transformaciones en su propio

país –*Wir sind das Volk* («Somos el pueblo»)–, en estos últimos días de noviembre parecían ya aspirar a la unificación –*Wir sind ein Volk* («Somos un pueblo»).

Por su parte, en cambio, la mayoría de los líderes del movimiento cívico opositor trataba de calmar los ánimos apelando al patriotismo de los alemanes del Este en defensa de la soberanía e independencia del país dentro de una vía democratizadora. En esto coincidían con Modrow, el cual buscaba denodadamente en el exterior el apoyo suficiente para afirmar también esa independencia de la República Democrática. De hecho, en aquellos dos últimos meses de 1989 tanto Gorbachov como los mandatarios franceses y norteamericanos hicieron al respecto declaraciones que evidenciaban su apoyo al mantenimiento de los dos Estados alemanes.

Sin embargo, la presión popular no pasaba fácilmente desapercibida y tuvo su reflejo en los movimientos internos de las organizaciones políticas. En diciembre, liberales, socialdemócratas y verdes de la RDA tomaron posiciones más favorables al inicio del diálogo sobre la «cuestión alemana», e incluso Democracia Ahora (uno de los grupos de protesta más destacados) instó al resto de fuerzas a seguir «un plan de tres fases para la unidad nacional». Como ha escrito Konrad Jarausch:

> En todas las instancias del Gobierno, las relaciones entre las dos Alemanias se estrecharon. El 5 de diciembre Hans Modrow y Rudolf Seiters se avinieron a crear un fondo de moneda común para facilitar los desplazamientos y acabar con el «dinero de acogida» de los occidentales y el «cambio obligatorio» del Este […]. En Berlín, los alcaldes de ambas zonas crearon una «comisión regional» [para tratar asuntos comunes y mejorar las relaciones]. Los ministros de Economía Helmut Haussmann y Christa Luft acordaron formar una comisión conjunta para facilitar las inversiones occidentales[28].

Los cambios, verdaderamente, habían sido impensables hasta muy poco tiempo antes. No sólo había caído el Muro y se descomponía el régimen comunista de la República Democrática, paradigma del supuesto éxito soviético en Europa, sino que, casi a la vez, se producía un acercamiento que operaba a favor de la colaboración

cada vez más asidua entre los dos Estados alemanes, hasta entonces antagonistas.

Con todo, lo más sorprendente estaba todavía por llegar. El desarrollo de los acontecimientos había desbordado con mucho las previsiones del SED, el cual, incapaz de reaccionar, se sumió en una crisis irreversible. El 1 de diciembre se abolió formalmente el principio constitucional del «papel dirigente» de la sociedad atribuido al Partido Comunista, con lo que este perdió su hegemonía en la dirección y control de la política germanooriental. Pocos días después, y prácticamente aislado, Egon Krenz abandonó la Secretaría General, y el Comité Central dimitió en pleno para facilitar una renovación profunda de la organización, tal como habían solicitado las bases.

Mientras tanto, el Gobierno de Bonn, favorecido por la desorientación de su homólogo de la RDA y por la fuerte presión ciudadana, no desaprovechó ningún momento para potenciar la vía unitaria. El 19 de diciembre Helmut Kohl viajó a Dresde con varios miembros de su gabinete para acercar posturas en las ayudas económicas y proponer la intensificación de las relaciones desde todos los ámbitos y la necesidad de mantener la estabilidad en la zona. El propio canciller, ante las manifestaciones de júbilo de la población cuando tomó la palabra, no pudo disimular en su discurso el apoyo a un impulso rápido al proceso de unificación. De hecho, hasta la caída del Muro no hubo en el Gobierno de Kohl una idea sobre la reunificación digna de tal nombre[29].

También se debatió la cuestión de la unidad en el congreso del Partido Socialdemócrata occidental (SPD, por sus siglas en alemán), que durante esos días celebraba sus reuniones en Berlín Oeste. Las diferencias notables entre algunos de los líderes más conspicuos pudieron finalmente reducirse gracias a la mediación del presidente Hans-Jochen Vogel, que logró obtener un acuerdo en defensa de una vía unitaria pero gradual[30]. Por su parte, el SED organizó su congreso extraordinario a finales de diciembre. Así se barrieron los restos de la ortodoxia, con una afiliación activa reducida ya a un millón de miembros. El marxismo-leninismo dejaba de ser la filosofía política inspiradora del Partido, definido ahora como socialista y

marxista reformista. Para alejarse de las vinculaciones con el pasado reciente, la organización pasaba poco después a denominarse Partido del Socialismo Democrático (PDS) y elegía como presidente a Gregor Gysi, un abogado de talante reformador que había estado relativamente al margen de la estructura de poder en la RDA. Su elección, con el 95,3 por 100 de los votos, como máximo dirigente de la organización en diciembre de 1989, el peor momento de la crisis interna del Partido y del Estado germanooriental, sorprendió a los militantes más veteranos, para quienes era un desconocido[31]. Entre otros, la Juventud Alemana Libre y la Confederación de Sindicatos, antiguas correas de transmisión del SED, desaparecían como tales sin poder adaptarse a los nuevos tiempos.

El Partido del Socialismo Democrático nacía, por tanto, tratando de preservar los principios socialistas como informantes de una fuerza política capaz de luchar por su programa dentro de las nuevas estructuras pluralistas hacia las que parecía encaminarse el país, máxime teniendo en cuenta, como acabamos de comentar, que el Parlamento había modificado el 1 de diciembre el primer artículo de la Constitución, de modo que ya no correspondía al Partido Socialista Unificado el papel dirigente ni de la clase obrera, ni de la sociedad germanooriental. El PDS modernizaba su discurso al tomar una posición decidida a favor de la democracia radical, el Estado de derecho, el humanismo, la justicia social, la protección del medio ambiente y la igualdad de la mujer. De contar con 2,8 millones de afiliados en el otoño de 1989, el Partido pasó a 350.000 en junio de 1990 y, un año después, a 240.000[32].

Mientras tanto, el Gobierno Modrow continuó dando muestras de buena voluntad. El 22 de diciembre se ordenó abrir la puerta de Brandeburgo: «Una de las horas más felices de mi vida», comentaría Helmut Kohl ante el espectáculo de millares de berlineses que festejaban el hecho. Las vacaciones navideñas sirvieron para regularizar este nuevo inicio de vida en común: las estadísticas germanooccidentales calcularon que unos 765.000 berlineses del Oeste y otros 385.000 de la República Federal pasaron a la RDA mientras que 1,2 millones de alemanes orientales viajaron en sentido contrario.

Alarmados por los acontecimientos, las fuerzas más reacias al proceso unificador intentaron desesperadamente cambiar la situación con las mismas armas que sus oponentes: las manifestaciones masivas. El 4 de enero de 1990 el PDS y otros grupos sociales y políticos vinculados al antiguo Frente, con el soporte ideológico de algunos intelectuales de la RDA, convocaron a unas 250.000 personas en una marcha a Treptow. El recién nombrado líder comunista Gysi recordó los viejos fantasmas del pasado (regreso del fascismo, poder del capitalismo financiero, etc.) para que la «derecha capitalista» no «arruinase la oportunidad del socialismo democrático en la República Democrática de Alemania»[33]. Pero la búsqueda de una tercera vía, antiestalinista y anticapitalista, a la que tan aficionados eran los intelectuales de la izquierda y por la que apostaban amplios sectores del PDS o los representantes del movimiento cívico, no convenció en absoluto a una población cansada de utopías y experimentos que no revertían en la ampliación de libertades o en la mejora de los niveles de vida. Ni las recomendaciones de un incombustible Günter Grass[34] sobre la necesidad de generar una conciencia crítica para abordar sin sentimentalismos ni nostalgias las relaciones interalemanas, ni las perseverantes críticas de la socialdemocracia occidental a la posición defendida por el canciller Kohl (el cual, por cierto, había remontado en las encuestas el desprestigio de su gestión previa al otoño de 1989) parecían hacer mella en unas masas populares cada vez más identificadas en el Este alemán con el proceso unificador. También desempeñó un papel fundamental la ilusión compartida por los ciudadanos de elevar sus niveles retributivos beneficiándose de la avanzada economía capitalista de la RFA.

En efecto, en la sesión de la *Volkskammer* del 11 de enero de 1990, Modrow expuso sin ambages la catástrofe económica del sistema planificado de la República Democrática. El problema principal, con todo, no era el déficit acumulado, tal y como difundían los medios de comunicación. Los escasos incentivos al trabajo, la baja productividad, la obsolescencia del equipamiento industrial, la dificultad para introducir nuevas tecnologías en sectores clave de la economía nacional, el deterioro progresivo de los procesos de

asignación de recursos y de distribución y el sistema de precios –establecidos al margen de cualquier racionalidad generada por el mercado– eran algunos de los males detectados que de pronto, como había ocurrido en el resto de las economías socialistas, salían a la luz pública cuando las posibilidades reales de variar el rumbo de la situación dentro de los parámetros definidos eran nulas. El fracaso de la socialización radical de la industria y de la tierra era incuestionable.

En estas circunstancias, la confusión política y el estado de la economía hicieron temer en enero de 1990 un vacío de poder en la República Democrática de Alemania[35]. El Gobierno Modrow se debatía entre la incapacidad de hacerse con el control dentro del país y las presiones tanto internas como externas para transformar la realidad del poder. Los partidos coaligados en el Frente no respetaban ya la autoridad de los comunistas del antiguo SED, disgregados entre los partidarios de regresar a la ortodoxia, los socialdemócratas, los marxistas reformistas y otros, mientras las fuerzas de oposición reunidas en una Mesa Redonda solicitaban al jefe del Gobierno medidas drásticas para acelerar la reforma[36]. Sobre este panorama planeaba, además, un déficit presupuestario estimado en diecisiete mil millones de marcos de la RFA. El 15 de enero, con el objetivo de escapar cuanto antes del estancamiento, Modrow ofreció a los miembros de la mesa su incorporación al Gobierno, petición que reiteró el día 21. Dentro de esta búsqueda de un entendimiento amplio, el 28, después de una semana de largas conversaciones y de una reunión de casi siete horas, Gobierno y oposición aceptaron el 18 de marzo como fecha para la celebración de las elecciones generales libres, además de convenir que cada una de las ocho organizaciones opositoras tendría un representante permanente en las reuniones ministeriales, con lo que el control sobre el Gobierno sería más eficaz.

El 5 de febrero, cuando las autoridades económicas reconocían oficialmente que la producción global de manufacturas sólo iba a alcanzar las cotas de 1985, Modrow presentó el nuevo gabinete ministerial de «responsabilidad nacional» a la *Volkskammer.* Entre los miembros del equipo de Gobierno estaban personalidades

emblemáticas de la disidencia, como el historiador y teólogo Wolfgang Ullmann (Democracia Ahora), el conocido activista por el desarme atómico y militante socialdemócrata Walter Romberg, la feminista Tatjana Böhm (Asociación de Mujeres Independientes) y el físico nuclear Sebastian Pflugbeil (Neues Forum), especialista en problemas medioambientales. La mayor parte del movimiento opositor veía en este ejecutivo la posibilidad real de abrir el horizonte a las reformas reclamadas con insistencia desde el otoño. Las medidas debían ser tan rápidas como contundentes, en especial en el terreno económico. Christa Luft, responsable de esta trascendental cartera, quiso precipitar el paso de la economía planificada a la de mercado con el reconocimiento explícito de la propiedad privada y la reforma de los precios, mientras solicitaba a su vez al Gobierno de la RFA quince mil millones de marcos occidentales para avalar e impulsar el proceso de transición.

Sin embargo, a estas alturas, el pueblo alemán del Este, en vista de los escasos cambios producidos en la vida cotidiana y, tal como recalcaban las autoridades, ante la perspectiva de mayores sacrificios si se quería salvar la RDA, abandonaron su confianza no sólo en el Gobierno, sino también en el movimiento cívico. «Nuestra apuesta es Helmut Kohl»: pancartas y pintadas de esta índole manifestaban que en este imaginario colectivo la reunificación acababa identificándose siempre con la prosperidad y la abundancia occidentales[37], de tal modo que casi el 80 por 100 de la población de la República Democrática era proclive a unir sus destinos con la República Federal. Un histriónico Günter Grass afirmaba que si el Estado nacional había conducido a Auschwitz, la reunificación facilitaría el camino hacia un nuevo Holocausto[38], pero los recelos y rechazos de algunos intelectuales izquierdistas germanooccidentales no hicieron mella en la mayoría del pueblo. Mientras entre noviembre de 1989 y mayo de 1990 el apoyo al proceso unificador creció del 70 al 78 por 100, unas tres cuartas partes de esta misma población de la RFA se mostraba firmemente partidaria de la ayuda económica a sus hermanos del Este; por su parte, en marzo de 1990 más del 90 por 100 de los alemanes

orientales estaba de acuerdo con la unificación al margen del partido político de su preferencia[39].

Por su parte, los nuevos dirigentes de la RDA comenzaron a darse cuenta de que el proceso de reformas abierto entrañaba un grave peligro para la legitimidad y existencia del país como Estado independiente. Con las transformaciones que parecían alumbrarse en la Europa del Este, gran parte de los alemanes orientales miraban abiertamente al futuro y pensaban que si su país también avanzaba por este camino, no iba a tener sentido mantener dos estructuras estatales alemanas basadas ambas en la democracia pluralista y la economía de mercado. Muchos recordaban las palabras del presidente de la RFA, Richard von Weizsäcker, pronunciadas el 13 de diciembre de 1989: «Mi opinión es que somos una nación y lo que está unido debe crecer precisamente unido»[40].

Para afrontar las elecciones a la *Volkskammer* con ciertas garantías, algunos partidos y organizaciones políticas procedieron a establecer una serie de coaliciones electorales. Así formaron Alianza por Alemania los cristianodemócratas (CDU y CSU) y Despertar Democrático; Alianza de los Demócratas Libres, los partidos liberales (LDP y FDP); y Alianza 90, diversos movimientos cívicos. También concurrieron a los comicios, entre otros, el Partido Socialdemócrata (SPD) y el Partido del Socialismo Democrático (PDS).

En estas elecciones, celebradas –como vimos que se decidió– el 18 de marzo de 1990 con una elevadísima participación (93 por 100 del electorado), la coalición Alianza por Alemania, dirigida por los cristianodemócratas de De Maizière, obtuvo la victoria con el 48 por 100 de los votos y 195 escaños de 400. Los socialdemócratas del SPD lograron algo más del 21 por 100 de los sufragios y 88 escaños; los antiguos comunistas del PDS llegaron al 16 por 100 de los votos y 66 escaños; y los liberales, al 6 por 100 de los sufragios y 21 escaños. Alianza 90 sólo pudo conseguir el apoyo del 3 por 100 de los electores y 12 escaños, y las restantes organizaciones obtuvieron menos votos todavía[41]. En cierto modo, los resultados electorales constituyeron una sorpresa, no tanto por el triunfo de Alianza por Alemania (confirmado posteriormente en las elecciones locales del 6 de mayo) como por el escaso respaldo que recibió Alianza 90

teniendo en cuenta el papel desempeñado por los movimientos cívicos en los años clave; también fue muy significativa la derrota del SPD, partido sin vinculación al bloque comunista en la antigua RDA. Sin embargo, por otra parte, dichos resultados demostraron, entre otras cosas, la decisión de los alemanes orientales de caminar decididamente hacia la reunificación de Alemania que desde el Oeste auspiciaba Kohl, líder de la CDU y canciller de la RFA.

El 4 de abril de 1990 quedó constituido el nuevo Gobierno de la República Democrática de Alemania encabezado por Lothar de Maizière, líder de los cristianodemócratas de Alemania del Este. Este Gobierno de coalición entre la CDU, el SPD, los liberales y dos pequeñas organizaciones conservadoras no iba a durar mucho tiempo como tal. Su principal objetivo fue impulsar el proceso de reunificación, además de transformar las estructuras políticas y económicas del Estado comunista en un Estado de derecho para facilitar, precisamente, la vía unitaria. Los graves problemas con los que se enfrentaba el equipo gubernamental y las disparidades, en algunos casos muy notables, dentro del mismo acabaron por provocar la salida de la coalición de liberales y socialdemócratas al no ponerse de acuerdo en algunos asuntos trascendentales como la forma de llevar a cabo las privatizaciones, la entrada de una moneda común o el propio proceso de integración de las dos Alemanias. Pero la confianza del electorado no cambió de signo a pesar de estas discrepancias: las elecciones municipales celebradas el 6 de mayo en el territorio de la República Democrática ratificaron con variaciones mínimas los resultados anteriores y, aunque el porcentaje de votantes fue mucho menor (78 por 100), dejaron libre la vía hacia una unificación rápida.

El 18 de mayo se firmó el Tratado Interestatal de Unión Monetaria, Económica y Social entre la República Democrática y la República Federal –en palabras de Juan Carlos Monedero, «auténtico tratado fundacional de la nueva Alemania»[42]–, cuya entrada en vigor quedó fijada para el 1 de julio. Según este tratado, la economía social de mercado sería el fundamento para la Unión Monetaria; por ello quedaría sin eficacia cualquier artículo de la Constitución germanooriental que entrara en conflicto con los principios de

propiedad privada, libre competencia o formación de precios según los mecanismos de la oferta y la demanda. La Unión Económica fue un hecho no sólo real sino muy simbólico para la población del Este, que veía inminente su entrada en la sociedad de consumo. El *Bundesbank* pasó a ser el único banco emisor encargado de controlar la actividad monetaria y todo el sistema crediticio; por tanto, el marco occidental se convirtió en la única moneda de circulación en los dos territorios mediante un tipo de cambio de 1 a 1 «en los salarios y en el ahorro hasta un límite de 4.000 marcos, y de 1 a 2 para el resto del ahorro y las deudas de las empresas», como rezaba la letra del tratado.

Junto a las medidas tomadas para hacer efectiva la Unión Monetaria, se preveía que desde el 1 de enero de 1991 la legislación social germanooccidental pasara a aplicarse a los antiguos ciudadanos de la RDA, si bien con algunas «medidas transitorias» establecidas a tenor de las grandes diferencias de precios y salarios entre los dos Estados. Intentando acomodar el funcionariado del Este a la normalidad constitucional, el *Bundesrat* o Cámara Alta aprobó en mayo una serie de medidas para facilitar y potenciar el traslado de personal de la Administración a los antiguos *Länder* orientales. Aquellos que decidieran optar por la movilidad recibirían el mismo salario que en su lugar de origen, pero el tiempo trabajado en el Este contaría el doble de cara a la jubilación.

Una Alemania unida para el siglo XXI

Sin solución de continuidad, la nueva Cámara de la RDA dio el 23 de agosto de 1990 el visto bueno, en virtud del artículo 23 de la Ley Fundamental, a la incorporación a la República Federal de los territorios del antiguo Estado germanooriental, previamente convertidos en estados federales el 22 de julio; la mayoría parlamentaria había preferido para la reunificación dicho artículo al 146, el cual, de hecho, hubiera significado la apertura de un proceso constituyente. Ocho días más tarde, el 31, se rubricó en el *Kronprinzenpalais* de Berlín el Tratado de Unificación. Las cerca de

mil páginas estructuradas en cuarenta y cinco artículos y anexos fijaban las «modalidades de transición y de adaptación de los dos sistemas en los campos jurídico, económico y social»[43]. Finalmente, la soberanía plena de Alemania se proclamó el 12 de septiembre y se convirtió en hecho consumado el 3 de octubre –fiesta nacional desde entonces–, cuando los *Länder* de la extinta República Democrática quedaron plenamente integrados en la República Federal. En esa misma jornada se disolvió el Ejército Popular de la RDA y una parte de él pasó a integrar las filas del Ejército federal. Kohl había declarado el día anterior:

> Como todos sabemos, tenemos por delante un difícil tramo del camino. Queremos recorrer juntos ese camino. Si nos mantenemos unidos y estamos dispuestos al sacrificio, tenemos todas las probabilidades de alcanzar juntos el triunfo. Las condiciones económicas de la República Federal son actualmente excelentes. Nunca habíamos estado mejor preparados para superar las tareas económicas de la reunificación.

Pocos días después, el 14 de octubre, se celebraron elecciones para los Parlamentos de los nuevos estados federados (Mecklemburgo-Antepomerania, Brandeburgo, Sajonia-Anhalt, Sajonia y Turingia), que dieron una victoria casi generalizada a la CDU. Tan sólo en Brandeburgo triunfaron los socialdemócratas y pudieron nombrar al ministro-presidente de dicho estado.

El 2 de diciembre tuvieron lugar las primeras elecciones generales en la nueva Alemania unificada, que, con 357.000 km^2 y cerca de ochenta millones de habitantes, constituía en Europa el país más poblado y el tercero en extensión. En general, la fusión de los partidos políticos más importantes de la República Federal con sus afines de los territorios orientales fortaleció las respectivas organizaciones sin variar en absoluto la línea ideológica característica[44]. En el caso de la CDU, la defensa de la economía social de mercado y su resuelta posición en favor de la integración alemana en las Comunidades Europeas continuó siendo su programa básico de acción. Su militancia alcanzó los 750.000 miembros en 1992, de los cuales algo más de 100.000 pertenecían a los estados federados orientales. Como símbolo de integración, en 1990 Lothar

de Maizière pasó a ser vicepresidente de la CDU unificada y fue sustituido al año siguiente por Angela Merkel, también oriunda del Este. La CSU, a pesar de su aproximación en la zona oriental a partidos minoritarios de parecido talante, continuó manteniendo su fuerza en Baviera, incluso después de morir en 1988 su carismático líder, Franz Joseph Strauss, cuyo puesto pasó a ocupar el ministro federal de Hacienda, Theo Waigel.

La ya tradicional moderación del programa reformista del SPD fue reforzada en el congreso de Berlín de diciembre de 1989. Aun cuando en la declaración programática se insistió en la preocupación ecológica o en la influencia necesaria del Estado para evitar grandes desigualdades sociales, el SPD aceptaba plenamente la economía de mercado y la libre competencia. Después de septiembre de 1990 (cuando, también en Berlín, unió sus fuerzas con los socialdemócratas del Este) el partido contaba con unos 900.000 militantes. Por su parte, el FDP pasó por momentos difíciles, como demostró el escaso respaldo obtenido en distintas elecciones generales o regionales, y en agosto de 1990 se fusionó con otras tres organizaciones de corte liberal de escasa implantación en el Este.

Con una participación elevada (en torno al 70 por 100), la victoria de aquel 2 de diciembre volvió a corresponder a los cristianodemócratas, que junto a los liberales obtuvieron el 54 por 100 de los votos a pesar de las malas expectativas existentes sobre el FDP. Los comunistas del PDS entraron en el *Bundestag* gracias a que no se aplicó la cláusula del 5 por 100 en el territorio de la ex-RDA, mientras que Los Verdes no obtuvieron representación parlamentaria, sumidos como estaban en una crisis interna.

El SPD cosechó los peores resultados desde 1959 y no alcanzó ni el 34 por 100 de los sufragios. En un ambiente de euforia generalizada, la desconfianza del líder socialdemócrata Oskar Lafontaine ante la vía rápida de unificación favorecida por el artículo 23 y ante las gravosas consecuencias económicas que esta podía tener para el Oeste no tuvo buena acogida y se hicieron oír, incluso desde su propio partido, numerosas voces discrepantes, algunas de ellas tan caracterizadas como las de los dos últimos cancilleres

federales del SPD, Willy Brandt y Helmut Schmidt. De hecho, el malestar dentro de la organización, ocasionado por la peculiar personalidad de Lafontaine, y el atentado que durante la celebración de un acto electoral había sufrido el 25 de abril de 1990, cuando una mujer le acuchilló en el cuello, le hicieron abandonar su lucha por la Cancillería y al día siguiente de las elecciones decidió dedicarse a sus tareas de ministro-presidente del Sarre y dejar la jefatura de la formación en manos de Björn Engholm, ministro-presidente de Schleswig-Holstein, que sería confirmado en el cargo seis meses más tarde, durante el congreso del Partido.

El nuevo Parlamento quedó constituido el 20 de diciembre y el 16 de enero de 1991 el reelegido canciller federal Helmut Kohl presentó oficialmente su nuevo Gobierno, tres de cuyos miembros provenían de los territorios de Alemania del Este: los cristianodemócratas Günter Krause, en Tráfico y Angela Merkel, en Mujer y Juventud, y el liberal Rainer Ortleb, en la cartera de Educación y Ciencia.

A mediados de 1991 Berlín volvió a convertirse en la capital de la República Federal de Alemania. Además de su trascendencia histórica y simbólica, el traslado de la capital al Este serviría de incentivo a la integración de la población y de los territorios orientales con la esperanza de construir un futuro común[45]. Además, la sede del Parlamento iba a residir en el *Reichstag,* depositario de la identidad política nacional. La reunificación cerraba la cuestión alemana; en este sentido, con la caída del Muro y el surgimiento de una nueva Alemania concluía el siglo xx[46].

La unificación de Alemania, metáfora de una Europa unida

Paralela a la evolución de los acontecimientos de carácter interno en los dos Estados alemanes, la coyuntura internacional facilitó el proceso de unificación[47]. La puesta en práctica de la perestroika en la URSS constituyó un factor decisivo en la hecatombe final de la República Democrática y en los acontecimientos subsiguientes. «Si tu vecino tapiza las paredes de tu casa, tú no estás obligado a hacer lo mismo», comentaba uno de los ideólogos más destacados del

Partido Socialista Unificado germaooriental, Kurt Hager, refiriéndose a los cambios promovidos por Gorbachov. Sin embargo, la realidad de la RDA era que sus elites de poder necesitaban un apoyo económico y militar explícito de la Unión Soviética para mantener su hegemonía y no quedar en todos los órdenes al arbitrio de la desastrosa situación interna del país, que generaba una protesta social cada vez más intensa. Por su parte, el nuevo secretario general del PCUS veía en la potente economía germanoocidental una pieza decisiva para apoyar la reconstrucción de la economía soviética, tal como él pretendía. El escaso eco que en la RDA encontraban sus propuestas renovadoras provocó entre los Gobiernos respectivos un distanciamiento que resultó fatal para el porvenir de la Alemania comunista.

En verano de 1989 Gorbachov viajó a Bonn para visitar a Kohl; en un ambiente relajado y de entendimiento entre ambos mandatarios, la declaración conjunta que cerró el encuentro abogaba por el respeto absoluto del derecho internacional y de la libertad de los pueblos para decidir sobre su futuro. El cambio de actitud de la URSS era evidente y todos los analistas coincidieron en interpretarlo como el apoyo de Moscú a las transformaciones que comenzaban a operarse en toda la Europa del Este[48]. Es más, la caída del Muro iba a ser capitalizada por el propio Gorbachov para legitimar a los ojos de Occidente su voluntad reformista: el responsable soviético de Asuntos Exteriores, Shevardnadze, mostró un talante abierto a la negociación siempre que el desarme fuera real y que todas las potencias implicadas en la «cuestión alemana» estuvieran dispuestas a discutir y definir asuntos tales como la delimitación de las fronteras, la inclusión de Alemania en el sistema de seguridad europea o los costes económicos de la integración.

Si en un principio Kohl había sido muy despectivo con Gorbachov, después le había ido cobrando aprecio gracias a los buenos oficios de su ministro de Exteriores, el liberal Hans-Dietrich Genscher. Según este, el viraje de la política de Moscú podía convertir a Alemania en un socio privilegiado desde el punto de vista económico, fortaleciendo su posición no ya en la CEE sino en toda Europa. Por supuesto, este principio de acercamiento había provocado las críticas

del dirigente germanooriental Erich Honecker, cada vez más persuadido de la amenaza que la perestroika suponía para su régimen.

La sustitución de Honecker por Egon Krenz el 18 de octubre de 1989 supuso, pues, un auténtico alivio para Gorbachov. Además, por su obstinada renuencia a emprender cualquier tipo de reforma, por mínima que fuera, el viejo dirigente germanooriental era probablemente el líder comunista más detestado por el secretario general del PCUS. Ciertamente, Gorbachov hubiera preferido para el cargo a Hans Modrow y no a alguien como Krenz, que poco antes había defendido la brutal respuesta del Gobierno chino a los manifestantes de Tiananmen, pero, de todos modos, cualquier paso hacia la reforma de las anquilosadas estructuras de la República Democrática de Alemania era ya de por sí un éxito. Tampoco había gustado a Gorbachov la apertura a China de la RDA, el primero de los regímenes comunistas de Europa en retomar las relaciones oficiales con el gigante asiático después de un viaje girado por Honecker a este país a finales de 1987. Con ello intentaba convertir a Berlín Este en el centro del diálogo entre el ámbito de influencia soviética y Pekín, además de buscar un apoyo más sólido en lo económico y lo político frente a los cambios ocasionados por la perestroika.

La reacción de Gorbachov tras caer el Muro no fue siquiera tan traumática como hubiera cabido esperar; más bien, todo lo contrario: al margen de su preocupación, en aquel momento, por la deriva de Lituania, el líder soviético esperaba que la nueva situación le permitiese capitalizar el proceso de normalización de las relaciones entre las dos Alemanias, resucitando así su idea de la «Casa Común Europea». Nada mejor para relanzar sus propuestas pacificadoras y de entendimiento entre el Este y el Oeste que hacerlo desde el epicentro de la Guerra Fría[49].

Por su parte, Kohl despejó pronto sus dudas sobre el futuro de Alemania. Con extremada prudencia, el 28 de noviembre de 1989, tan sólo diecinueve días después de caer el Muro, el canciller alemán había expuesto en el *Bundestag* un plan pergeñado apresuradamente y denominado «Los Diez Puntos» cuyo fin era

trazar las líneas directrices para el acercamiento entre las dos repúblicas alemanas con el objetivo de la unidad a cinco años vista. La unidad sólo podría producirse después de celebrarse elecciones libres y crearse una confederación para, finalmente, establecer un sistema federal. Sin embargo, las masivas manifestaciones dentro del Estado de los Obreros y Campesinos a favor de una unificación exprés y la positiva actitud mostrada por el Gobierno estadounidense le justificaron para cambiar drásticamente sus planes. De hecho, como hemos visto en el apartado anterior, Alianza para Alemania –el movimiento auspiciado en el Este por la CDU-CSU como alternativa política en las elecciones a la cámara legislativa germanooriental, convocadas con urgencia para el 18 de marzo de 1990– alzó como bandera de su campaña la creación de un único Estado para las dos Alemanias y el 48 por 100 de los votantes le dio la razón.

Ni británicos ni franceses estaban entusiasmados con la trepidante sucesión de acontecimientos, temerosos ante la inminencia de convivir de nuevo con un gigante en el centro de Europa; sin embargo, ante la disyuntiva de aceptar y apoyar el proceso o negarse taxativamente, la última opción no era viable debido tanto a la antes citada acogida favorable de Washington como a la sorprendente respuesta soviética, que, frente a lo que había esperado Mitterrand, invitaba al diálogo sin cerrar las puertas a la reunificación. Con ello se frustraba el intento ensayado por el presidente francés de paralizar el proceso –por lo demás, ya en marcha– mediante un gesto tan simbólico como viajar a la República Democrática de Alemania ese mismo mes de diciembre e influir en el Kremlin para hacer un frente común. Mitterrand hubo de conformarse con presionar a Bonn para que aceptara el anclaje en las Comunidades Europeas y evitara aventuras solitarias capaces de generar un nuevo dominio sobre la Europa central y oriental[50]. Con todo, está comprobado que antes, incluso, de caer el Muro París y Bonn barajaban la posibilidad de la unidad alemana, si bien como algo remoto y circunscrito a la Europa unida[51].

En cambio, el Gobierno norteamericano se mostró firme partidario de la unificación[52]. Al fin y al cabo, la desaparición del Telón de Acero podía interpretarse como una victoria de sus posiciones

tradicionales en defensa de la democracia parlamentaria y la economía de libre mercado, sin olvidar el ahorro que supondría la reducción de los cuantiosos gastos militares derivados de su presencia en Europa. Ello no obstante, la rápida disolución de la RDA fue un motivo de preocupación para la Administración norteamericana, que movilizó a sus expertos en cuestiones alemanas. En la primavera de 1990 –una vez rechazada la idea, primero, de que las discusiones tuvieran lugar en el seno de la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea por el elevado número de Estados integrantes y las dificultades consiguientes de llegar a acuerdos operativos, y, después, de que fueran Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética quienes, en exclusividad, decidieran sobre el porvenir alemán– los asesores del Departamento de Estado Robert Zoellick y Dennis Ross apostaron por crear un marco estable de negociación sobre el futuro de Alemania en el que participaran la RDA y la RFA, así como las cuatro potencias de ocupación. Surgía así, a propuesta del secretario de Estado James Baker, la llamada «Conferencia 4 + 2».

El respaldo norteamericano resultó decisivo no sólo para el proceso de unidad alemana, sino para el futuro de toda Europa, ya que contemplaba una estrategia de Posguerra Fría. A través de su unificación, los vínculos de Alemania con Estados Unidos quedarían sellados al ampliarse la influencia norteamericana en todo el continente. Además, venciendo sin trabar combate, la OTAN saldría igualmente fortalecida. En la intención de George H. W. Bush estaba extender la idea de una alianza defensiva cuyo sentido se sustentase más en los valores democráticos compartidos por sus miembros que en la dimensión militar de una serie de Estados unidos para combatir por las armas a sus enemigos.

Dada la difícil situación de Gorbachov desde comienzos de aquel año de 1990, su reacción al aceptar los hechos consumados no sorprendió demasiado. Aun cuando cerca de 350.000 de sus efectivos estaban acantonados en el territorio de la RDA y la posibilidad de veto soviético se mantenía en pie, el fin de la Doctrina de Soberanía Limitada había sido determinante en el derrumbe del sistema comunista en la Europa del Este, donde los gobiernos no

avanzaban precisamente hacia la reforma y el fortalecimiento del socialismo –como había soñado el secretario general en un primer momento–, sino hacia la democratización de las estructuras políticas y económicas en clave liberal.

Resultaba claro para todos los actores internacionales que la preeminencia norteamericana en el Viejo Continente bajo el paraguas de la OTAN desplazaba al poder soviético y el propio Gorbachov fue, sin duda, el primero en asumirlo, como tuvo que asumir el plan 4 + 2 –esto es, según hemos visto, la vía abierta a la unificación y pergeñada por Washington–. En enero de 1990, acompañado de su ministro de Exteriores, HansDietrich Genscher, Helmut Kohl visitó Moscú con el propósito de terminar de convencer a Gorbachov de la conveniencia de la unificación alemana y rendir así la resistencia de algunos sectores del Kremlin, entre los cuales, ciertamente, no se encontraba Eduard Shevardnadze, uno de los políticos más poderosos del entorno de Gorbachov y destacado defensor, en aquel momento, de respetar la voluntad de los alemanes. El canciller supo así aprovechar la coyuntura favorable que atravesaban las relaciones exteriores entre las grandes potencias –especialmente en el terreno del desarme, tal como se plasmaría en la Conferencia de Ottawa de febrero de 1990, de gran trascendencia para Europa– para obtener garantías de Gorbachov en relación con su plan sobre la futura unificación alemana. De igual modo, el 15 de marzo del mismo año, el jefe del ejecutivo alemán conseguía de la Comunidad Europea el apoyo a sus proyectos[53].

Todo ello hizo posible que, a partir de aquella primavera, el proceso de unificación de Alemania fuera abordado en la Conferencia 4 + 2 de manera conjunta por las potencias de ocupación y por los propios interesados. Las conversaciones fructificaron rápidamente: al comenzar el verano, el 21 de junio, el *Bundestag* de la República Federal y la *Volkskammer* de la República Democrática salvaron un importante escollo diplomático al reconocer la actual frontera entre Alemania y Polonia en la línea Oder-Neisse. Con esta demostración de buena voluntad por parte de los legítimos representantes del pueblo alemán, el 17 de julio, después de una reunión de Kohl y Gorbachov, la URSS ratificó los acuerdos de la Conferencia, la cual

había aceptado la unificación de Alemania sin que ello supusiera menoscabo alguno de sus derechos de adscripción a los tratados interestatales: en otras palabras, la Alemania unificada podía encuadrarse dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Por último, el 12 de septiembre de 1990 los ministros de Asuntos Exteriores de las cuatro antiguas potencias de ocupación, el ministro de Asuntos Exteriores de la República Federal y el jefe de Gobierno de la República Democrática firmaron el Tratado sobre el Reglamento Definitivo de la Cuestión Alemana, que devolvía el ejercicio de la soberanía plena a la nueva Alemania unificada. Las autoridades teutonas aceptaban la reducción del ejército conjunto a 370.000 efectivos, para lo cual disponían de hasta cuatro años, y mantenían además su renuncia expresa a la posesión de armas químicas o nucleares.

Por su parte, la Unión Soviética comenzó a organizar el regreso a casa de los soldados y funcionarios que vivían en territorio germanooriental. El deterioro de la URSS en todos los órdenes hacía evidente la necesidad de concentrar todos los esfuerzos en mantenerse en el poder y en preservar el sentido de las reformas en su país, aunque estas fueran ya una mera entelequia. En tales circunstancias, Gorbachov sólo podía condicionar la previsible unidad alemana en algunos aspectos para, al menos, salvar la apariencia de fortaleza de la otrora superpotencia. La diplomacia del marco sirvió para aquietar las conciencias más críticas; las autoridades germanooccidentales optaron por ofrecer sustanciosos créditos y ayudas directas a modo de compensación, así como por hacerse cargo de un problema que se iba a repetir dramáticamente y que evidenciaba, una vez más, la debilidad intrínseca del imperio de los soviets –e, inmediatamente después, de la Federación Rusa–: correría con los gastos ocasionados por la retirada de los cerca de 350.000 soldados y oficiales soviéticos desplegados en la RDA y el retorno de 200.000 de sus familiares. La salida y reacomodación del personal soviético concluyó el 31 de agosto de 1994 con el abandono de los últimos 2.100 soldados rusos después de algo más de cuarenta y nueve años de ocupación de la Alemania Oriental, pero las enormes dificultades económicas y de toda índole para

repatriar a su propio personal mostraron con crudeza los pies de barro de la considerada, durante la Guerra Fría, segunda potencia mundial[54]. De este modo, finalmente, el Kremlin impuso tan sólo condiciones económicas y se vio obligado a aceptar la entrada de la nueva Alemania en la OTAN. Aunque es difícil precisar cifras, se habla de unos 70.000 millones de dólares entre 1990 y 1994: una magra recompensa por asumir la unificación.

Por lo que a Bruselas se refiere, el proceso abierto en Alemania favorecía las aspiraciones comunitarias de desarrollar una Política Exterior y de Seguridad Común de carácter netamente europeo, si bien en este terreno, como iba a apreciarse en un futuro inmediato, «el grado de consenso que surgió en torno a esta cuestión era bastante más reducido que el existente en otros ámbitos de la integración europea, ya que, mientras algunos esperaban notables avances en su configuración, otros seguían sintiéndose mucho más cómodos bajo la cobertura atlántica, sintiendo que una dimensión europea de la seguridad podría incentivar el aislamiento norteamericano respecto de sus aliados»[55]. Aun así, la unidad alemana sirvió de estímulo para reconsiderar los retos de seguridad europea en el inicio del fin de la Guerra Fría; es más, el nuevo concepto de seguridad cobraba sentido en el orden internacional en ciernes al quedar resuelta la cuestión alemana dentro de los márgenes ofrecidos por la Comunidad: entre la población y sus gobernantes era un sentir general que Alemania nunca debería ser una fuente de inestabilidad para el futuro, por lo que su unificación sólo podía contemplarse dentro del proceso de construcción europea[56].

La CEE había seguido muy de cerca el curso de los acontecimientos. En abril de 1990 el Consejo Europeo había aprobado un programa cuyo objetivo consistía en lograr que los antiguos territorios de la República Democrática se integrasen en las estructuras comunitarias de la forma menos traumática posible. La primera fase del proyecto se inició con la ya citada Unión Monetaria y Económica, lo cual ya era de por sí una aproximación a las formas económicas occidentales. En una segunda etapa, la unión política de las dos Alemanias a partir del 3 de octubre de 1990 supuso el

ingreso formal y pleno de los antiguos *Länder* orientales en la CEE, puesto que desde esa fecha los tratados comunitarios cobraron vigencia también en dichos territorios, si bien con algunas medidas transitorias. Finalmente, y ya para la nueva República Federal, se aplicó a todos los efectos el derecho comunitario.

Por todo ello la nueva República Federal de Alemania mostró desde los primeros momentos un «interés vital»[57] por la integración de los antiguos países sovietizados del Este en la Unión Europea. La obligación moral de restituir la unidad a Europa estuvo presente en todas las grandes declaraciones de principios de Kohl y Genscher, miembros de una generación forjada en la Guerra Fría. Por otro lado, desde el inicio de la década de los noventa las inversiones alemanas crecieron y se extendieron por Hungría, Polonia y la República Checa, algo fácilmente cuantificable en términos de beneficios económicos. Debemos añadir, además, la preocupación del Gobierno por que la estabilidad de sus fronteras orientales redundara en la seguridad global del país. El empeño por favorecer la integración de los países antes sovietizados desde el mismo momento en que comenzaron sus transiciones a la democracia manifestaba no sólo el interés por reafirmar la estabilidad de Alemania y su influencia en *Mitteleuropa* sino también que estos objetivos estratégicos, nacidos con la nueva situación europea después de 1989, se unirían y matizarían la tradicional acción exterior germana hacia esos países vecinos[58]. Estos, por su parte, no tardaron en reconocer a Alemania como intermediario privilegiado ante la Unión Europea –recordemos cómo Bonn era la primera visita obligada de los nuevos presidentes elegidos democráticamente en Polonia, República Checa y Hungría–, lo cual redundaba a su vez en las expectativas federales de influir más en Bruselas.

A lo anterior debe añadirse, como antes indicamos, que la influencia económica alemana en la zona creció de forma espectacular en los años que siguieron a la caída del comunismo. Si nos centramos tan sólo en el periodo 1993-1995, el comercio exterior alemán con los países del centro y este de Europa se incrementó en más del 30 por 100. En la última de estas fechas las

exportaciones germanas a la zona superaron, incluso, a las estadounidenses, aunque fuera por un pequeño margen que se convertía en sustancial para el caso de las importaciones. A mediados de los años noventa Alemania era, pues, el socio comercial comunitario más importante para Polonia, Hungría, República Checa, Eslovenia, Letonia, Lituania, Rumanía y Bulgaria; el segundo para Eslovaquia (después de la República Checa) y el tercero para Estonia (después de Finlandia y Suecia). La Alemania unificada no sólo había afirmado su posición en su zona tradicional de influencia centroeuropea, sino que la extendía con fuerza a los países bálticos y a los Balcanes[59].

En definitiva, el Gobierno alemán concebía la ampliación al Este como el mejor camino para salvaguardar la seguridad en la región y fortalecer sus intereses económicos y comerciales. En los primeros años noventa Kohl insistió en que la línea Oder-Neisse no debería ser la frontera oriental de Europa[60]; el propio presidente alemán Roman Herzog pronunciaría en marzo de 1995 un discurso donde enumeraba los principales desafíos de su país, entre otros, la protección de las conquistas sociales del Estado del bienestar, la mejora de los mecanismos democráticos y la apuesta decidida por la integración del Este en la Unión Europea[61]. A este interés se unía el hecho, no menos importante para la percepción alemana del proceso integrador,

> de que la generación de posguerra creció con la idea de que sobre sus espaldas pesaba una parte sustancial de la responsabilidad moral del destino de *Mitteleuropa* después de 1945. Por ello no debe sorprender que durante la era Kohl el compromiso alemán de acercamiento entre los países de la Europa escindida fuera de mayor intensidad que el de cualquier otro miembro de la Unión[62].

El año 1994 se presentaba como un buen momento para conocer la respuesta de la opinión pública alemana al modo de efectuarse la unificación y a las repercusiones de esta en la vida cotidiana. Las encuestas preveían un castigo a los cristianodemócratas de Kohl por el desgaste propio de la acción de poder y por los costes, muy superiores a los previstos, de la reactivación de la economía alemana en su conjunto. Sin embargo, aunque las elecciones legislativas de

octubre redujeron las distancias entre la CDU y el SPD, volvió a formarse un Gobierno de coalición entre los cristianodemócratas y los liberales del FDP. De este modo, a mediados de los años noventa quedaba formalmente cerrado el itinerario de la unificación, síntoma inequívoco del final de la Guerra Fría en Europa.

[1] En efecto, el 2 de mayo de 1989 las autoridades húngaras habían decidido abrir la frontera con Austria, gracias a lo cual, durante aquel verano, muchos ciudadanos de la RDA, provistos de visados turísticos, tuvieron la oportunidad de llegar a la República Federal a través de Hungría. El primer contingente atravesó la frontera la noche del 19 de agosto sin que la guardia húngara hiciera nada por impedirlo.

[2] A. Heraclides, *Security and Co-operation in Europe: the Human Dimension, 1972-1992,* Londres, Frank Cass, 1993, pp. 107-148.

[3] H. Wendt, «Die Deutsch-Deutschen Wanderungen. Bilanz einer 40jähringen Geschichte von Flucht und Ausreise», *Deutschland Archiv* 24, 4 (1991), pp. 390-391.

[4] D. Marsh, *Germany and Europe. The Crisis of Unity,* Londres, Mandarin, 1994, p. 25.

[5] Entrevista a Adam Michnik, *Deutschland. Revista de política, cultura, economía y ciencias* 5 (octubre-noviembre de 1999), p. 24.

[6] G. Jackson, *Civilización y barbarie en la Europa del siglo xx,* Barcelona, Planeta, 1997, p. 405.

[7] Sobre la historia del Muro, véase F. Taylor, *El Muro de Berlín: 13 de agosto de 1961-9 de noviembre de 1989,* Barcelona, RBA, 2009; la narración de los acontecimientos aparece en J. M. Gonin y O. Guez, *La caída del Muro de Berlín: crónica de aquel hecho inesperado que cambió el mundo,* Madrid, Alianza, 2009. Para una relación diaria de lo sucedido de octubre a diciembre de 1989, véase H. Bahrmann y Ch. Links, *The Fall of the Wall: the Path to German Reunification,* Berlín, Links, 1999.

[8] Sobre la desorientación general a la hora de anticipar los acontecimientos, véase R. Fritsch-Bournazel, *Europa und die deutsche Einheit,* Stuttgart, Bonn Aktuell, 1991.

[9] J. R. Díez Espinosa y R. Martín de la Guardia, *Historia contemporánea de Alemania (1945-1995),* Madrid, Síntesis, 1995, p. 256.

[10] «Mikhail Gorbachev on the 40th Anniversary of the GDR, 6 October 1989», en K. H. Jarausch y V. Gransow (eds.), *Uniting Germany. Documents and Debates 1944-1993,* Oxford, Berghahn Books, 1994, pp. 53-55.

[11] P. Barker, «From the SED to the PDS: Continuity or Renewal?», en P. Barker (ed.), *The Party of Democratic Socialism in Germany. Modern Post-Communism or Nostalgic Populism?,* Ámsterdam-Atlanta (Georgia), Rodopi, 1998, p. 7.

[12] M. Fulbrook, *Anatomy of a Dictatorship: Inside the GDR, 1949-1989,* Nueva York, Oxford University Press, 1995, pp. 201-242.

[13] Sobre los partidos integrantes del Frente, véase P. J. Lapp, *Die Blockparteien im politischen System der DDR,* Melle (Alemania), Ernst Knoth, 1988 y, sobre su desintegración

final, del mismo autor, *Ausverkauf. Das Ende der Blockparteien,* Berlín, Das Neue Berlin, 1998.

[14] P. J. Winters, «Ein neues Demokratiegefühl. Die Volkskammer ist nicht mehr sprachlos», *Deutschland Archiv* 22, 12 (1989), p. 1134.

[15] Un estudio clásico sobre los orígenes y evolución de los movimientos de protesta en la RDA es la obra de K.-W. Fricke *Opposition und Widerstand in der DDR. Ein politischer Report,* Colonia, Verlag Wissenschaft und Politik, 1984.

[16] R. Schröder, «The Role of the Protestant Church in German Unification», *Daedalus* 123/1 (invierno de 1994), pp. 251-261.

[17] Sobre la voluminosa y compleja documentación de la Stasi, un Estado dentro del Estado, véase S. Wolle, «In the Labyrinth of the Documents: the Archival Legacy of the *SED*-State», *German History* 10, 3 (1992), pp. 352-365. Como obra de referencia para entender la organización conviene destacar W. Kalinka y M. Schell, *Stasi und kein Ende: die Personen und Fakten,* Fráncfort del Meno, Ullstein, 1991.

[18] Stefan Heym, escritor germanooriental crítico con el régimen, aunque luego diputado por el PDS (Partido del Socialismo Democrático, por sus siglas en alemán), reflexionaba sobre lo ridícula que había resultado la crisis final de la RDA, precipitada no por grandes convulsiones, sino por el abandono de sus habitantes. *Stalin verlässt den Raum,* Leipzig, Reclam, 1990, p. 271.

[19] E. Pond, *Beyond the Wall. Germany's Road to Unification,* Washington D. C., The Brookings Institution, 1993, pp. 101-120. Para un seguimiento muy detallado de lo ocurrido día a día, véase H. Bahrmann y Ch. Links, *Wir sind das Volk. Die DDR im Aufbruch: eine Kronik,* Berlín, Aufbau, 1990.

[20] B. Lindner, *Die demokratische Revolution in der DDR 1989/90,* Bonn, Bundeszentrale für Politische Bildung, 1998, pp. 141-153.

[21] K. H. Jarausch, *The Rush to German Unity,* Nueva York, Oxford University Press, 1994, pp. 39-52.

[22] *Ibidem,* p. 38.

[23] W. Süss (ed.), *Die Bundesrepublik in den achtziger Jahren. Innenpolitik, Politische Kultur,* Opladen, Leske + Budrich, 1991.

[24] J. Leaman, *The Political Economy of Germany under Chancellors Kohl and Schröder: Decline of the German Model?,* Nueva York, Berghahn Books, 2009, pp. 43-97.

[25] R. Martín de la Guardia, «Continuidad o discontinuidad en la política exterior alemana después de la reunificación», en M. Samaniego Boneu (coord.), *Reflexiones sobre Europa,* Siena, Centro di Ricerca sull'Integrazione Europea-Università degli Studi di Siena, 2003, pp. 72-75.

[26] Véase H. Stark, *Helmut Kohl, l'Allemagne et l'Europe: la politique d'intégration européenne de la République fédérale 1982-1998,* París, L'Harmattan, 2004.

[27] Para una visión general de la política alemana en la década de Kohl véanse E. Martin, *Zwischenbilanz, Deutschlandpolitik der 80er Jahre,* Stuttgart, Bonn Aktuell, 1986 y K. Korte, *Deutschlandpolitik in Helmut Kohls Kanzlerschaft: Regierungsstil und Entscheidungen 1982-1989,* Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1998.

[28] K. H. Jarausch, *The Rush to German Unity,* cit., p. 88. Esta y las demás traducciones son nuestras.

[29] K. Korte, *Deutschlandpolitik in Helmut Kohls Kanzlerschaft: Regierungsstil und Entscheidungen 1982-1989,* cit., p. 481.

[30] Véase B. Seebacher-Brandt, *Die Linke und die Einheit,* Berlín, Siedler, 1991.

[31] G.-J. Glaessner, *The Unification Process in Germany: from Dictatorship to Democracy,* Londres, Pinter, 1992, p. 50.

[32] M. Gerner, *Partei ohne Zukunft? Von der SED zur PDS,* Múnich, Tilsner, 1994, p. 113; S. Suckut y D. Staritz, «Alte Heimat oder neue Linke? Das SED-Erbe und die PDS-Erben», *Deutschland Archiv* 24, 10 (1991), p. 1046.

[33] Cit. en R. Martín de la Guardia, «Los orígenes del Partido del Socialismo Democrático (1989-1993): el ave fénix roja en Alemania», *Ayer. Revista de Historia Contemporánea* 60, 4 (2005), p. 296.

[34] En una fecha tan tardía como el 18 de diciembre de 1989, durante el transcurso del congreso del Partido Socialdemócrata en Berlín, el escritor declaró que «las posibilidades de la RDA tras el año 1945 continúan teniendo vigencia en la actualidad». G. Grass, *Alemania, una unificación insensata,* Madrid, Aguilar, 1990, p. 9.

[35] Sobre la incapacidad real de transformar el Estado germanooriental, controlado por el omnipresente Partido Único y la policía política, así como su completa dependencia de las directrices soviéticas, véase G.-J. Glaessner, *Der schwierige Weg zur Demokratie. Vom Ende der ddr zur deutschen Einheit,* Opladen, Westdeutscher Verlag, 1992.

[36] Respecto a las fuerzas disidentes agrupadas en la mesa redonda, véase U. Thaysen, *Der Runde Tisch. Oder: Wo blieb das Volk,* Opladen, Westdeutscher Verlag, 1990.

[37] D. Grosser, S. Bierling y F. Kurz (eds.), *Die sieben Mythen der Wiedervereinigung,* Múnich, Ehrenwirth, 1991, pp. 75-90.

[38] G. Grass, *Ein Schnäppchen namens DDR. Letzte Reden vom Glockengeläut,* Fráncfort del Meno, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1990, p. 13.

[39] P. H. Merkl, *German Reunification in the European Context,* University Park (Pensilvania), Pennsylvania State University, 1993, p. 133.

[40] Al respecto resultan de gran interés sus reflexiones sobre aquellos acontecimientos, recogidas en R. von Weizsäcker, *De Alemania a Europa. El impulso de la Historia,* Barcelona, Galaxia Gutenberg, 1995.

[41] I. von Münch (ed.), *Dokumente der Wiedervereinigung Deutschlands,* Stuttgart, Kröners Taschenbuch, 1991, p. xxv.

[42] J. C. Monedero, «El hechizo de la montaña mágica. El proceso de unificación alemana: causas y consecuencias», en J. C. Monedero (comp.), *El retorno a Europa. De la perestroika al Tratado de Maastricht,* Madrid, Editorial Complutense, 1993, p. 120.

[43] D. Rauschning, «Der deutsch-deutsche Staatsvertrag als Schritt zur Einheit Deutschlands», *Aus Politik und Zeitgeschichte* 33 (1990), pp. 3-16.

[44] Sobre la campaña, véase M. Janué i Miret, *La nova Alemanya. Problemes i reptes de la unificació,* Gerona, Eumo Editorial, 2002, pp. 190-201.

[45] Las experiencias del primer año tras la euforia de la reunificación aparecen recogidas en W. Herles, *Geteilte Freude. Das erste Jahr der dritten Republik: eine Streitschrift,*

Múnich, Kindl Verlag, 1992.

[46] Para un análisis general del proceso de desintegración de la RDA y unificación de las dos Alemanias, véase Ch. Maier, *Dissolution: The Crisis of Communism and the End of East Germany,* Princeton, Princeton University Press, 1997.

[47] Para una visión general de la unificación alemana en su contexto internacional, véase K. Kaiser, *Deutschlands Vereinigung: Die internationalen Aspekte,* Bergisch Gladbach, Bastei-Lübbe, 1991; las páginas 130-384 recogen documentación original.

[48] H. Adomeit, «Gorbachev and German Unification: Revision of Thinking, Realignment of Power», *Problems of Communism* 39, 4 (julio-agosto de 1990), pp. 1-24.

[49] Véase W. Seiffert, *Die Deutschen und Gorbatschow: Chancen für einen Interessenausgleich,* Erlangen, Straube, 1989.

[50] J. Lion Bustillo, «La diplomacia francesa ante la unificación alemana (1989-1990)», *Revista de Historia Actual* 1 (2003), pp. 127-139.

[51] K. Diekmann y R. G. Reuth, *Helmut Kohl: yo quise la unidad de Alemania,* Barcelona, Círculo de Lectores, 1997, pp. 101-102. Como dice el profesor J. M. Cuenca Toribio sobre esta obra, «pocas veces la historiografía dispondrá de un testimonio más rico y objetivo del principal de los *dramatis personae* de un capítulo crucial del mundo contemporáneo». *Intelectuales y políticos contemporáneos,* Sevilla, Universidad de Sevilla, 2010, p. 154.

[52] Sobre la diplomacia norteamericana ante la cuestión alemana, véase E. Pond, *After the Wall. American Policy Toward Germany,* Nueva York, Twentieth Century Foundation, 1990.

[53] D. Spence, «The European Community and German Unification», en Ch. Jeffery y R. Sturm (eds.), *Federalism, Unification and European Integration,* Londres, Frank Cass, 1993, pp. 136-163.

[54] W. Pfeiler, «UdSSR und die deutsche Einheit», en W. Weidenfeld y K. Korte (eds.), *Handwörterbuch zur deutschen Einheit,* Fráncfort del Meno, Campus, 1992, pp. 684-686.

[55] J. Lion Bustillo, *La reunificación alemana y la seguridad europea,* Alzira (Valencia), Edicions La Xara, 2008, p. 118.

[56] V. Berghahn, G. Flynn y P. M. Lützeler, «Germany and Europe. Finding an International Role», en K. H. Jarausch (ed.), *After Unity. Reconfiguring German Identities,* Oxford (Reino Unido), Berghahn Books, 1997, p. 181.

[57] M. Jopp, «Germany and EU Enlargement», en K. Kaiser y M. Brüning (eds.), *East-Central Europe and the EU: Problems of Integration,* Bonn, Europa Union Verlag, 1996, p. 107.

[58] S. D. Collins, *German Policy-Making and Eastern Enlargement of the EU during the Kohl era: Managing the Agenda?,* Mánchester, Manchester University Press, 2002, pp. 38-96.

[59] R. Martín de la Guardia, «Continuidad o discontinuidad en la política exterior alemana después de la reunificación», cit., pp. 72-73.

[60] T. Pedersen, *France, Germany and the Integration of Europe,* Londres, Pinter, 1998, p. 189.

[61] R. Herzog, «Die Grundkoordinaten deutscher Aussenpolitik: Gekürzte Fassung einer Rede anlässlich der 40-Jahr-Feier der deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik am 11.

März 1995», *Internationale Politik* 4 (1995), pp. 3-11.

[62] J.-M. Trouille, «France, Germany and the Eastwards Expansion of the European Union: towards a Common *Ostpolitik*», en H. Ingham y M. Ingham (eds.), *EU Expansion to the East. Prospects and Problems,* Cheltenham, Edward Elgar, 2002, p. 56.

II. El ocaso de la utopía soviética y la deriva de la Federación Rusa

La llegada de Gorbachov: el Nuevo Pensamiento en política exterior

Coincidiendo con la puesta en marcha de la Doctrina Reagan, pugnaz con el sistema político y económico hasta entonces impuesto desde el Kremlin, el acceso, en abril de 1985, de Mijail Gorbachov a la Secretaría General del Partido Comunista de la Unión Soviética iba a acarrear grandes transformaciones en la teoría y en la práctica de la política internacional de su país. De hecho, fue en el campo de la acción exterior donde el líder soviético trató de fundamentar su prestigio mundial como defensor de la paz y de los derechos humanos. La guerra nuclear significaría la destrucción total, certeza ante la cual no cabía sino una reformulación de las relaciones internacionales. Tal y como lo planteaba el nuevo mandatario, ahí radicaba la necesidad de buscar la cooperación y entendimiento entre las superpotencias y entre estas y el resto del mundo[1].

El concepto gorbachoviano de política exterior, conocido en Occidente como Nuevo Pensamiento, transformaba las bases sobre las que se había articulado la acción exterior soviética con el fin de fijar en el diálogo abierto con Estados Unidos el instrumento principal para encauzar las negociaciones sobre el control armamentístico y desactivar los focos de tensión entre ambas potencias[2]. Indudablemente, el Nuevo Pensamiento formaba parte del vasto proyecto de reformas que pronto se conocería en Occidente como «perestroika». Sus objetivos eran superar el estancamiento heredado de la época de Brezhnev y transformar la estructura económica mediante la introducción de mecanismos que mejorasen su eficacia. Gorbachov conocía muy bien el fracaso de otros secretarios generales del PCUS a la hora de introducir cambios en el sistema económico soviético; por ello buscó el apoyo directo de la población para enfrentarla a la *nomenklatura* y a las burocracias

locales, que desde mucho tiempo atrás venían obstaculizando estos procesos al ver en ellos una seria amenaza contra sus privilegios, y lo hizo de forma taxativa y directa, apelando tanto a las clases mejor formadas como a los trabajadores para presionar y derribar el estado de cosas que avanzaba en contra de sus intereses legítimos de mejora.

De igual modo procedió en la política exterior. Como acabamos de señalar, el secretario general, excelente conocedor de la fuerza de la opinión pública, desarrolló en compañía de su esposa Raisa una febril actividad para cambiar radicalmente la imagen de su país en el extranjero. Nada tenía que ver el matrimonio Gorbachov con sus pleistocénicos predecesores en el cargo. Si buscaba elevar la coexistencia pacífica a regla fundamental e indiscutida de las relaciones internacionales del futuro, había que demostrar la voluntad de reforma no sólo en las reuniones de altos dignatarios o en los planes de desarme, sino también ganando puntos entre la población de los países del otro bloque.

Este cambio en las formas vino acompañado de una profunda transformación en la estructura de los ministerios implicados. En 1985, apenas llegado al poder, Gorbachov reemplazó al sempiterno Andrei Gromiko por Eduard Shevardnadze en la primordial cartera de Exteriores. Shevardnadze iba a convertirse en un pilar fundamental de la nueva concepción de la política exterior del país: fue muy significativo que la ocasión de su primer viaje como ministro fuera la conmemoración en Viena del décimo aniversario de la Conferencia de Helsinki[3].

Tanto el XXVII Congreso del PCUS, que se celebró en Moscú del 25 de febrero al 6 de marzo de 1986, como la XIX Conferencia del mismo, desarrollada en junio de 1988, recogieron los originales principios del Nuevo Pensamiento, sobre todo la concepción de un mundo interdependiente donde la política exterior soviética debía orientarse hacia posiciones pacifistas y avanzar por la senda del entendimiento con los países occidentales. Así recuerda Shevardnadze el programa reformista que el Kremlin pergeñaba para las relaciones internacionales:

> Estas eran unas líneas de trabajo perfectamente claras: detener los preparativos materiales para la guerra nuclear; conducir las relaciones soviético-norteamericanas a un estado de diálogo civilizado y normal [...]; buscar vías para acabar con las pruebas nucleares y eliminar los misiles de medio alcance norteamericanos y soviéticos; retirar las tropas soviéticas de Afganistán; crear un sistema de seguridad en Europa basado en el procedimiento de Helsinki [...]; entablar relaciones con países vecinos basadas en el respeto a sus intereses y la no intervención en sus asuntos internos y empezar a abordar los problemas globales[4].

Unas bases de actuación como las anteriores eran, sin duda, revolucionarias, al menos en la teoría, ya que suponían una drástica alteración del *statu quo* mundial al readaptar la política exterior soviética en tres de sus aspectos fundamentales: la reducción de recursos destinados a la industria armamentística con el objetivo de revitalizar los restantes sectores de la economía soviética; la eliminación de la Doctrina de Soberanía Limitada, vigente para los países de Europa, con la consiguiente reformulación de la política de la URSS hacia sus aliados comunistas[5] y, por último, como veremos, un giro en los planteamientos que sustentaban sus relaciones con el Tercer Mundo.

Según el propio Gorbachov, el Nuevo Pensamiento hundía sus raíces en el leninismo, si bien esta llamada a los fundamentos tradicionales de la ideología soviética parecían más destinados a una legitimación teórica que a una vía de hecho. Como escribía su valedor, «[...] surgió, claro está, bajo el efecto de una convicción irrefutable: si no cesa la carrera armamentística y no se detiene la creciente hostilidad de las potencias nucleares, la humanidad no evitará la catástrofe»[6]. Si la URSS había podido colaborar con los países occidentales y Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, e incluso había alcanzado acuerdos puntuales a lo largo de las décadas siguientes, no debía extrañar que en el contexto internacional de finales de la década de los ochenta el conflicto entre bloques pudiera ser reemplazado por la colaboración con el fin de hacer frente a los grandes desafíos del momento: la carrera nuclear y el desastre ecológico[7].

Por si ello no fuera suficiente, Gorbachov fue el primer secretario general del PCUS que de manera explícita reconoció que el gasto

desmesurado en tecnología militar estaba minando materialmente a la URSS. Si el país se había erigido en adalid de la lucha por los derechos de los explotados y oprimidos en el mundo, su liderazgo en uno de los bloques políticos de la Guerra Fría había provocado un grave deterioro de la economía del país, hipotecada para mantener su seguridad militar y sus intereses en todo el orbe. Gorbachov, más consciente de la realidad que sus predecesores, admitió muy pronto que si continuaban los crecientes gastos militares se acabaría la viabilidad de la Unión. En efecto, si en la década de los setenta el país de los soviets había podido equipararse con Estados Unidos en poder militar, el resultado había sido desastroso: una parte sustancial del presupuesto estatal, que implicaba la utilización de amplísimos recursos humanos y medios materiales, se dedicó a partidas militares, y ello impidió un aumento equilibrado de los sectores industriales no bélicos y subordinados, en última instancia, a la seguridad del bloque comunista.

Una concepción teórica de las relaciones internacionales como esta, alejada de los fundamentos estalinistas, justificaba la imposibilidad de alcanzar el potencial militar de Estados Unidos, sobre todo después de la Iniciativa de Defensa Estratégica de Reagan. Durante aquellos años Gorbachov habló insistentemente de «seguridad mutua», apelando a la cooperación entre las dos grandes potencias y a la responsabilidad de todo el bloque occidental para frenar la carrera armamentística nuclear. El desarrollo de la tecnología militar había alcanzado un punto que impedía tanto a los norteamericanos como a los soviéticos obtener una seguridad fiable e independiente[8]. Gorbachov lo había explicado con acierto en 1987 en *Perestroika:*

> El principio fundamental de la nueva perspectiva política es muy sencillo: la guerra nuclear no puede ser un medio para conseguir objetivos políticos, económicos, ideológicos o de cualquier otra clase. Esta conclusión es verdaderamente revolucionaria ya que significa descartar las nociones tradicionales de guerra y paz […]. No habría ni vencedores ni vencidos en un conflicto nuclear global, y la civilización mundial perecería inevitablemente[9].

El líder soviético ponía en tela de juicio las formulaciones anteriores en cuanto no servían para analizar y tratar de resolver los problemas concretos y acuciantes derivados de la posibilidad real de un conflicto nuclear.

Aun cuando los derroteros por los que debía continuar la URSS eran los inspirados por el socialismo y el internacionalismo, no había razón para mantener una posición de permanente beligerancia con el mundo occidental. Las relaciones internacionales en general y las democracias liberales y capitalistas en particular habían sufrido cambios notables desde el final de la Segunda Guerra Mundial, máxime desde que la amenaza nuclear era un hecho irrefutable que podía destruir en poco tiempo la vida en el planeta. Gorbachov no rechazó del todo la idea de que los conflictos fueran un factor básico en el progreso de la humanidad hacia la sociedad sin clases, pero sí la desplazó en su teoría para conceder mayor importancia a la interdependencia mundial, abriendo así las puertas a un mayor acercamiento entre los dos sistemas. La primacía de la revolución, entendida dentro de la lógica del enfrentamiento de clases, dejó paso, a mediados de los años ochenta, a una mayor preocupación por la búsqueda de la paz como valor universal[10]. Si ambas potencias asumían juntas el interés por prevenir un conflicto mundial –en junio de 1988 Shevardnadze había proclamado «el mantenimiento de la paz como la mayor prioridad»[11]–, nada mejor que diluir esa tensión permanente entre bloques para llevarla a la mesa de negociaciones. La ortodoxia ideológica pasaba el testigo al pragmatismo que imponían las circunstancias[12].

Así, respecto a sus aliados europeos, ya a finales de 1986 Gorbachov había expuesto en privado a distintos mandatarios de los partidos comunistas y jefes de Estado de las «democracias populares» europeas que las fuerzas armadas soviéticas no volverían a servir de salvaguarda de la autoridad en ellas si se producían en algún momento alteraciones del orden que la hiciesen peligrar[13]. Además, el secretario general del PCUS apelaba a las conciencias de los líderes socialistas para que iniciaran en sus respectivos países vías de reforma similares a las que él había emprendido en la URSS, a la vez que insistía en la necesidad de mejorar los órganos de

representatividad y la eficacia del sistema, aunque con ello el Partido Comunista viera reducido su poder.

Gorbachov pensaba que si relajaba el sistema de control que el Kremlin ejercía sobre estos países, unido al inicio de políticas nacionales verdaderamente reformistas, su reconocimiento internacional aumentaría notablemente. El líder llegó, incluso, a negar explícitamente su apoyo a la expansión del comunismo en beneficio del respeto y la tolerancia a las distintas formas de entender el mundo:

> Al basar nuestra política en una nueva manera de pensar, no nos proponemos limitarnos a las ideas a las que estamos acostumbrados y al lenguaje político que es típicamente nuestro. No tenemos la intención de convertir a nadie al marxismo. El nuevo pensamiento político puede y debe absorber la experiencia de todos los pueblos y asegurar el mutuo enriquecimiento y la confluencia de las diversas tradiciones culturales[14].

Además, en el terreno de la práctica, Gorbachov tuvo la habilidad de sortear a la vieja y poderosa cúpula militar y el coraje de dejar en manos del equipo de Asuntos Exteriores el cambio estratégico hacia el desarme y la distensión de las relaciones internacionales. Conocedor de la delicada situación de la URSS, el líder ruso atendió las consideraciones y consejos de los miembros de la Academia de Ciencias y de expertos en política exterior y relaciones entre bloques, uniendo todo ello a su talento personal para aprender de la evolución de los acontecimientos y amoldar su forma de pensar a la realidad de su país y de todo el mundo. Tanto Margaret Thatcher como François Mitterrand, entre otras personalidades de aquella época, reconocieron la excelente disposición de Gorbachov para entender argumentos discrepantes y aceptar puntos de vista contrarios.

Como ya hemos apuntado, el Nuevo Pensamiento y los problemas económicos soviéticos marcaron también el cambio de actitud respecto a la expansión mundial del comunismo. La estrategia de ayuda a las fuerzas prosoviéticas en el Tercer Mundo, trazada desde la era Brezhnev, fue limitando su esfera de actuación desde 1987. Los vietnamitas abandonaron Camboya en 1989 y los cubanos

hicieron lo mismo con Angola en 1990, el mismo año en que el Frente Sandinista de Liberación Nacional perdió el poder en Nicaragua tras unas elecciones democráticas. En poco tiempo había cambiado radicalmente la percepción de la Unión Soviética como gran potencia. En este sentido, la Doctrina Reagan había triunfado plenamente. Si los comunistas se habían comprometido desde tiempo atrás a apoyar a fuerzas revolucionarias cuya meta era desestabilizar o suplantar regímenes democráticos, Estados Unidos había reaccionado logrando frenar la expansión soviética.

Aunque en los primeros años de su mandato Gorbachov insistió en que el capitalismo era el principal culpable de la trágica situación económica y social de los países subdesarrollados de África, Asia e Iberoamérica, el Nuevo Pensamiento impuso una visión mucho menos retórica. Era obvio que si la Unión Soviética afrontaba graves problemas económicos y no podía seguir el ritmo creciente de su producción militar, tampoco podía ya pensar en mantener las ayudas financieras y armamentísticas a los «países hermanos» o a los partidos y guerrillas a los que hasta entonces había ayudado a continuar en la lucha. La satisfacción ideológica de saberse la patria de quienes en el mundo trabajaban por la emancipación del proletariado ocupó un lugar marginal en la visión internacional de Gorbachov. Como escribiría Carlos Taibo algunos años después, «el Tercer Mundo ha perdido de manera manifiesta relieve en una política, la soviética, presta a reducir cargas económicas y a atenuar solidaridades ideológicas. Economización y desideologización han pasado a ser palabras clave para entender el entramado de relaciones que la URSS ha intentado impulsar en los últimos años en el Tercer Mundo»[15].

La diplomacia soviética inició toda una serie de gestos novedosos de trascendencia inusitada para la pacificación de algunas zonas conflictivas del mundo. Dos hechos marcaron muy especialmente este viraje: el 14 de abril de 1988 un acuerdo entre la URSS, Estados Unidos, Pakistán y Afganistán estipulaba la retirada progresiva del ejército de los soviets establecido en este último país, operación que concluiría a mediados de febrero del año siguiente. En segundo lugar, en el conflicto iraquí librado entre agosto de 1990 y enero de

1991, la posición de Moscú estuvo muy cerca de la norteamericana a la hora de resolverlo[16]. En definitiva, como acabamos de señalar, la normalización de la vida política nicaragüense, el fin de la misión soviética en Vietnam y Camboya y los acuerdos para dar por concluida la guerra de Angola constituyeron algunos de los ejemplos más significativos de la puesta en práctica del Nuevo Pensamiento en las áreas más sensibles del planeta.

No menos trascendencia revistió el acercamiento de Gorbachov al Vaticano. En diciembre de 1989, en plena descomposición del sistema de dominación soviética en el este de Europa, el secretario general del PCUS, en una inusitada iniciativa, viajó a la Santa Sede para entrevistarse con el papa Juan Pablo II. El encuentro podría calificarse de verdaderamente histórico si esta manida expresión no estuviera ya tan vacía de contenido. En aquellos momentos Gorbachov jugaba, como veremos, la carta de la Casa Común Europea para tratar de salvar los restos del naufragio del socialismo real en un nuevo escenario donde, desde la península Ibérica a los Urales, los europeos dirimieran sus asuntos en paz y en concordia, permitiendo la coexistencia de las distintas formas de concebir la política y la economía, pero siempre sobre los principios del diálogo y el entendimiento. Un papa eslavo podría comprender bien la retórica de Gorbachov, para quien las posibilidades de futuro pasaban por la mejora de las relaciones entre el Este y el Oeste, siempre dentro del marco europeo, tratando así de marginar a un Estados Unidos proclive a imponer su modelo.

Sin duda, la figura de Juan Pablo II iba a ser determinante en la evolución de los acontecimientos en toda la Europa del Este en general y en su país natal, Polonia, en particular. A principios de la década de los ochenta era evidente la crisis profunda del Partido Obrero Unificado Polaco y, junto a ella, la de la legitimidad comunista. La llegada del arzobispo de Cracovia a la cátedra de San Pedro muy poco antes de que Solidaridad iniciara su andadura no podía pasar desapercibida en el mundo de la disidencia. Ya en sus primeros discursos el papa Wojtyła se había destacado por su ferviente defensa de los derechos humanos y por sus críticas a los regímenes totalitarios[17]. Además, como demostraron sus viajes a

Polonia en 1979, 1983 y 1987, el abrumador poder de convocatoria del sumo pontífice respondía al alejamiento del pueblo respecto a sus dirigentes políticos[18]. Por si esto fuera poco, su decidida defensa de los católicos uniatas en Ucrania, del catolicismo en Lituania (siempre muy beligerante con los dictados de Moscú) y de la minoría católica en Rumanía, donde las iglesias de rito bizantino habían sido prohibidas en 1948, afectaba a todo el sistema soviético.

Gorbachov fue sensible a la influencia de las llamadas de Juan Pablo II a la *recristianización* de Europa al entender que, al menos en cierta medida, él mismo podría capitalizar el renacimiento espiritual en su propio país; prueba de ello fue su apoyo a la celebración, en 1988, del milenario del Bautismo de Rusia. Consciente de que distintas encuestas y estudios de opinión mostraban la pérdida de fuerza del ateísmo y el fortalecimiento de la Iglesia ortodoxa, el secretario general procuraba auspiciar una reforma que le permitiera presentarse ante la opinión internacional como defensor de los derechos humanos y, entre estos, de la libertad de culto y de reunión[19].

Decidido como estaba Gorbachov a mantenerse a flote, es probable que no cayera en la cuenta de que el pontífice polaco también tenía su propia visión de Europa, donde la libertad constituía la piedra angular. En 1988 había visto la luz su encíclica *Sollicitudo rei socialis (Sobre la inquietud social)*, la cual, aunque interpretada de muy variadas formas, suponía indudablemente una crítica tanto a la cosificación laboral del socialismo real como a la deriva más materialista del sistema capitalista[20].

Por su parte, aunque cautelosa, la reacción de Estados Unidos y Europa occidental fue claramente favorable a la actitud del líder soviético, que además, como hemos visto, jugaba sus cartas con enorme habilidad para atraerse a la opinión pública. Su apuesta por esa Casa Común Europea donde cupieran todos al margen de los regímenes políticos y económicos, su insistencia en preservar la paz a través de la reducción del arsenal de armas y su talante abierto gozaban de enorme predicamento entre las masas, como pudo comprobarse con ocasión de sus desplazamientos a las principales capitales del Viejo Continente a lo largo de 1989. El secretario

general había introducido esta noción de la Casa Común Europea en un discurso pronunciado en Londres el 7 de abril de aquel año, y sobre esos mismos principios iba a insistir también en julio, durante su intervención en el Consejo de Europa[21]. Del Atlántico a los Urales, Gorbachov proponía fortalecer las relaciones entre todos los países mediante una colaboración sincera conducente a una mayor interdependencia; con ello quedaría arrumbada definitivamente la posibilidad de una guerra entre europeos. La ampliación de los lazos tanto bilaterales como multilaterales tejería una red de cooperación, origen de un entendimiento novedoso sobre el cual sentar los pilares de un sistema más pacífico y estable no sólo europeo, sino mundial.

De Moscú a Washington: un puente entre las superpotencias

Vistas las directrices de la política exterior definida por Gorbachov, cabía la esperanza de que los dos grandes mandatarios llegasen a un entendimiento. El primer encuentro entre Ronald Reagan y Mijail Gorbachov tuvo lugar en Ginebra los días 19 y 20 de noviembre de 1985. El líder soviético pretendió que los norteamericanos reconsiderasen su estrategia de seguridad y renunciasen a la Iniciativa de Defensa Estratégica. No hubo consecuencias prácticas, pero la reunión tuvo una gran repercusión mediática en todo el mundo y sirvió para romper el hielo entre Estados Unidos y la URSS además de para presentar internacionalmente la nueva cara de Moscú.

En efecto, la mejora de las relaciones entre las dos superpotencias fue ostensible desde la llegada de Gorbachov al Kremlin. En este sentido, las conversaciones sobre reducción de armamento, en gran parte paralizadas desde que en 1979 no se ratificaran los Acuerdos SALT II, cobraron un nuevo impulso en octubre de 1986 al reunirse en Reikiavik el presidente de Estados Unidos y el emprendedor secretario general del PCUS. Los dos mandatarios convinieron en poner sobre la mesa de discusión sus opiniones sobre el arsenal armamentístico global (convencional, químico y nuclear) en Europa. Sin duda, el encuentro constituyó una apuesta al evaluar en toda su

crudeza su auténtica capacidad destructiva y poner en marcha un plan de eliminación progresiva de armas.

Llegados a este punto, conviene traer a colación un hecho importante en la historia de la URSS, ocurrido unos meses antes y que afectó profundamente al ánimo de Gorbachov: la explosión ocurrida en la central nuclear de Chernóbil el 26 de abril de 1986, causante de unas ocho mil muertes directas y cuyas secuelas, debidas a la contaminación radiactiva, se calcula que afectaron a medio millón de personas. No necesitaba el líder soviético mejor ejemplo de lo que podía provocar un ensayo de guerra nuclear.

Gorbachov tenía, pues, verdadero empeño en demostrar en Reikiavik la sinceridad y la radicalidad de su iniciativa. En el transcurso de una de las reuniones, su ayudante Anatoli Cherniaev le pasó una nota que rezaba: «Si le entendí correctamente, el objetivo principal de Reikiavik es conseguir que Reagan quede encantado con nuestro atrevido, e incluso arriesgado, enfoque del problema central de la política mundial»[22]. En efecto, el domingo 11 de octubre, del encuentro celebrado en la Hofdi House, residencia para mandatarios del Gobierno islandés, surgieron –aunque tardarían en cumplirse– propuestas novedosas y de gran impacto en la opinión pública internacional; entre ellas, la de reducir a la mitad el arsenal estratégico de cada una de las potencias durante los cinco años siguientes y acabar con la totalidad de los misiles balísticos en una década. Respecto a la situación de Europa, la idea de suprimir los euromisiles de alcance intermedio instalados en el continente fue igualmente aplaudida. Aunque para muchos no se había logrado un avance sustancial, el tiempo acabaría dando la razón a Gorbachov cuando se dirigió al primer ministro de Islandia, un tanto apesadumbrado por no haber conseguido mayores compromisos reales en el desarme, con estas palabras: «Esta reunión será más fructífera de lo que pueda pensarse. Por primera vez en cuarenta años las dos grandes potencias han intentado eliminar todas las armas nucleares. Esto es el comienzo del fin de la Guerra Fría»[23].

Y así fue. El encuentro de Gorbachov y Reagan en Estados Unidos en diciembre de 1987 y la devolución de la visita en Moscú al año siguiente fueron hitos mucho más que simbólicos: en aquella

ocasión, el día 8, los dos mandatarios firmaron en Washington el Tratado sobre Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance, que abría las puertas a la esperanza de continuar por la vía de la reducción de armas en el mundo. Después de ocho años al frente de la presidencia norteamericana, la reunión de Reagan con el secretario general del PCUS fue muy distinta de las de los años anteriores. La relación entre ambos mandatarios era óptima y el viaje sirvió para hacer aún más explícito el respaldo de la política norteamericana a la perestroika cuando esta ofrecía signos inequívocos de agotamiento y Gorbachov, respetado internacionalmente, estaba en cambio perdiendo enteros ante la opinión pública de su país.

El escollo insalvable fue la Iniciativa de Defensa Estratégica norteamericana, cuestión por la que Ronald Reagan mostraba especial interés. La finalidad de la conocida como «Guerra de las Galaxias» (por hacer referencia a la película de George Lucas) era netamente defensiva. Con ella se pretendía crear una red de pantallas capaces de desactivar misiles lanzados por el enemigo. De hecho, el Gobierno estadounidense había aprobado un presupuesto de 26.000 millones de dólares para este proyecto durante el periodo 1985-1989. De este modo, la Iniciativa de Defensa Estratégica variaba por completo el equilibrio de seguridad entre Moscú y Washington al desplazarlo a favor de una hegemonía norteamericana[24]. El argumento de Reagan para potenciar la Iniciativa estaba justificado en el caso de que el Kremlin abandonase súbitamente sus compromisos respecto al control armamentístico. La otra cara de la moneda era la imposibilidad de la economía soviética de dar una respuesta acorde con los ambiciosos objetivos del programa de Reagan; de ahí la insistencia en que este lo abandonase[25].

Mientras continuaban las conversaciones con Washington sobre la reducción del armamento nuclear y Reagan instaba a Gorbachov a respetar los derechos individuales en la URSS como paso previo a la negociación de otros asuntos, el secretario general del PCUS movió ficha y, tras su histórica decisión de retirar por completo las fuerzas desplegadas en Afganistán, escogió el mejor escenario posible para

un golpe de efecto: las Naciones Unidas. En su discurso de diciembre de 1988, precisamente cuando, al dejar Reagan la presidencia, esperaba encontrar un mejor interlocutor en Bush, se comprometió a retirar de forma unilateral medio millón de efectivos soviéticos, una reducción de gran relevancia para la Europa del Este, donde Gorbachov iba a prescindir de cincuenta mil soldados[26]. El elemento cuantitativo del mensaje era de importancia, pero más aún lo era el cualitativo: frente a quienes aún recelaban de la sinceridad de su pacifismo, las palabras pronunciadas en el foro de las Naciones Unidas pretendían acabar con la permanente amenaza que se cernía sobre Europa occidental a causa de la posibilidad real de un ataque de las fuerzas del Pacto de Varsovia. Todavía más: al aminorar ostensiblemente la presencia militar en su zona de influencia en el Este Gorbachov reafirmaba su compromiso de permitir que sus países hermanos avanzaran por el camino de las reformas sin la presión de una intervención directa de Moscú. Probablemente, aquel discurso de Gorbachov en la Asamblea General de la ONU haya sido la mejor síntesis de la doctrina del Nuevo Pensamiento[27].

Ciertamente, Gorbachov había roto, como dice Z. A. B. Zeman, con todas las «vacas sagradas» de la política exterior soviética: los gastos elevados en armamento, el impulso a la carrera de armas nucleares y el mantenimiento de una frontera de prevención contra el mundo capitalista bajo la forma de una zona de seguridad en el este de Europa[28]. Como hemos dicho, ya poco después de tomar posesión había reconocido el secretario general la gravedad de los problemas económicos de la Unión Soviética y su intención, para tratar de paliarlos, de introducir medidas severas de reforma tales como el recorte en los gastos militares, lo cual suponía aceptar implícitamente la imposibilidad de competir con el ritmo de crecimiento presupuestario estadounidense en materias de Seguridad y Defensa.

Historiador experto en la Europa comunista, el propio Zeman reconoce que, si bien a finales de 1988 era evidente que los regímenes iban a tener que cambiar, lo impensable a esas alturas era que cayeran tan repentinamente como iban a hacerlo en poco más de un año. En marzo de 1989, invitado por la Academia de

Ciencias de Hungría, Zeman visitó el Instituto de Marxismo-Leninismo, la cantera de los dirigentes comunistas; en él recuerda una atmósfera similar a la de Praga durante la primavera de 1968. Muchos de los que allí vio eran conscientes de la relajación de los vínculos entre el Partido y la sociedad, y por tanto, de la necesidad profunda de reformas; eran gente con inquietudes, y no las «tediosas y disciplinadas filas del Partido»[29].

Para entonces, Gorbachov era tan sólo una sombra de lo que había sido tres años antes. Las cancillerías occidentales eran conscientes de su pérdida de prestigio tanto en el escenario internacional como, de forma mucho más dramática, dentro de su propio país. En julio de aquel año de 1989 pronunció ante el Consejo de Europa un discurso donde refrendó las declaraciones que había hecho el mes anterior durante su visita a la República Federal de Alemania y que mostraban su voluntad de aceptar las decisiones democráticas tomadas por cada país de la esfera de influencia soviética. Apelando a su inquebrantable defensa de los derechos fundamentales de la persona, el líder soviético volvió a negarse taxativamente a cualquier injerencia en los procesos liberalizadores abiertos tanto en Polonia como en Hungría.

Durante la primavera y el verano de aquel año Gorbachov había ordenado la salida de efectivos militares de varios países de la Europa del Este, medida criticada por los sectores más ortodoxos de su país y de aquellos afectados. Como era de esperar, la reunión del Comité Político del Pacto de Varsovia en Bucarest en julio de 1989 hizo patentes las discrepancias entre los líderes comunistas a la hora de interpretar la política soviética. Erich Honecker, Todor Zhivkov y Gustáv Husák, mandatarios, respectivamente, de la República Democrática de Alemania, Bulgaria y Checoslovaquia, además del anfitrión, Nicolae Ceauşescu, no dudaron en atacar –en algunos casos, con dureza– la tibia respuesta del Kremlin a los impulsos reformistas de los Gobiernos polaco y húngaro. De aquella reunión salió un comunicado donde los firmantes señalaban la apuesta decidida por hacer desaparecer las dos grandes alianzas militares. Se trataba de una idea defendida ya desde hacía varios años y, por tanto, nada novedosa; sin embargo, el documento mostraba a su

vez el apoyo a la autonomía de cada Estado socialista para definir de forma independiente su propia actuación política, lo cual sí suponía un cambio sustancial de estrategia[30].

Por su parte, la determinación de Gorbachov confirmaba la información suministrada medio año antes por su máximo representante en Estados Unidos, según la anécdota relatada por John O'Sullivan:

> La noche de la investidura de Bush el embajador soviético sorprendió al enemigo de clase en una cena celebrataria *[sic]* del *National Review* cuando dijo que la Unión Soviética no intervendría si los Estados de Europa oriental decidieran abandonar el socialismo para seguir el camino del capitalismo. William Safire sacó su bolígrafo de periodista y comenzó a tomar nota mientras Jeane Kirkpatrick empezaba a interrogar al embajador, que se mantuvo firme en la idea de neutralidad soviética[31].

El contenido de esta declaración iba a conocerse universalmente como Doctrina Sinatra: los países del Este quedaban liberados de la tutela soviética para avanzar política y económicamente cada uno «a su manera». De este modo, la Doctrina Sinatra clausuraba otra de mucho mayor recorrido, la Doctrina Brezhnev de Soberanía Limitada. El líder soviético esperaba que, al liberalizar la toma de decisiones respecto a la acción exterior de sus países hermanos de la Europa del Este, esta nueva política contribuyera a reforzar –ahora sin imposiciones– los sistemas socialistas, permitiéndoles profundizar en la vía reformista tal y como venía haciendo Gorbachov en la URSS. No pensaba el mandatario que su mensaje iba a ser interpretado en las capitales de la Europa central y oriental en el sentido contrario, es decir, como justificación de su acercamiento a Occidente.

Las dudas respecto a la verdadera intención de Gorbachov –insinuada en el discurso ante la ONU al dar por finalizada la Doctrina Brezhnev, confirmada en la susodicha reunión del Pacto de Varsovia de julio de 1989 y proclamada en Helsinki el 25 de octubre de aquel año– se despejarían pronto, cuando en los últimos días de 1989 y primeros de 1990 se negase a intervenir militarmente y dejase a su suerte a los esclerotizados partidos comunistas. En efecto, como bien señala Carlos Alonso Zaldívar, «lo inesperado de esta historia es que, en semejante contexto, llegara a situarse al frente de la URSS

un dirigente que se negó a utilizar la fuerza de que disponía para sostener el poder comunista y que se orientó a pedir ayuda al mundo exterior para reformarlo. Esto es lo que hizo Gorbachov y ello suponía una inversión radical de las percepciones soviéticas hasta entonces dominantes»[32].

Si había un testigo destacado de la división de bloques, este era, sin duda, la existencia de las alianzas militares; de ahí que la extinción del Pacto de Varsovia marcara como ningún otro acontecimiento el final del orden nacido tras la Segunda Guerra Mundial[33]. Los ministros de Defensa del Pacto, en marzo de 1989, y los de Asuntos Exteriores, al mes siguiente, mantuvieron sendas reuniones en las que se manifestaron abiertamente a favor de una eliminación paulatina pero simultánea de las dos grandes estructuras militares de la Guerra Fría. Las declaraciones públicas de los responsables del Pacto eran inusitadamente transparentes y aludían a temas hasta hacía poco vedados, tales como el fortalecimiento de los lazos entre los bloques militares previo a la disolución de estos o la puesta en marcha de canales de información[34].

Por su parte, la OTAN, por boca de Manfred Wörner, su secretario general, celebraba la buena disposición de su contrincante pero negaba de forma rotunda que la Alianza fuera a desaparecer[35]. Aquel año del gran cambio coincidió con la conmemoración del cuadragésimo aniversario de la organización, celebrada en la reunión de sus miembros en Bruselas los días 29 y 30 de mayo. En un contexto tan cambiante e imprevisible como aquel, la actitud de sus responsables fue cautelosa, primando las manifestaciones favorables a la distensión internacional y el desarme, aunque haciendo hincapié tanto en la validez de sus principios constitutivos como en su capacidad para acomodarse a los nuevos tiempos que se estaban viviendo.

A finales de año, en su reunión de los días 14 y 15 de diciembre, la OTAN emitió un comunicado donde despejaba las dudas sobre su futuro: continuaría manteniendo su función como garante de la paz, la seguridad y la cooperación en la nueva Europa que se avecinaba, refutando así las voces que auguraban su disolución a tenor de los acontecimientos de los meses previos. Ello no obstante, los

profundos cambios operados en el Viejo Continente y, pronto, en gran parte del mundo afectaron a la Alianza, en cuyo seno se discutiría sobre el sentido mismo de la organización y sus fines. En junio de 1990 la Declaración de Turnberry indicaba la necesidad de reconsiderar la estrategia, y así ocurriría inmediatamente, al menos en tres direcciones: en un primer término, variarían los fundamentos doctrinales de la acción militar a causa de la desaparición de la Unión Soviética y la rápida descomposición del Pacto de Varsovia, tal como vamos a ver a continuación. Derivado de este hecho, en segundo lugar, surgía en el horizonte la posibilidad –impensable hasta hacía poco tiempo– de extender la Alianza hacia el este de Europa a petición de las antiguas democracias populares. Por último, el fortalecimiento de los vínculos con la ONU y la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE) permitirían a la organización erigirse en una suerte de fuerzas armadas al servicio de la seguridad colectiva internacional[36].

En efecto, la adaptación a la realidad mundial emergente resultó clave para la continuidad de la OTAN, cuyo papel fue decisivo en los Balcanes. El fin de la Guerra Fría alteraba la naturaleza de muchos de los conflictos armados, pero no los eliminaba, y ahí subyacía el sentido de la Alianza, como quedó expuesto en su Nuevo Concepto Estratégico, de noviembre de 1991: buscar la cooperación multinacional y tener a la vez una capacidad de respuesta rápida en caso de necesidad[37].

Con los cambios políticos iniciados en algunos de los países del Este y la convocatoria de elecciones libres en la República Democrática de Alemania para el 18 de marzo de 1990, el Pacto de Varsovia no podía mantenerse como hasta entonces, ni tenía la fuerza suficiente para presionar a la OTAN para que iniciara su proceso de desmantelamiento. Así, pues, el fin de la Doctrina de Soberanía Limitada obligó a Moscú a cambiar de estrategia, preocupada como estaba por la rápida pérdida de legitimidad en su zona de influencia europea. En esta situación, el Kremlin estimó conveniente mantener la estructura, aunque fuese modificándola radicalmente, antes que hacerla desaparecer. A principios de junio de 1990 la capital soviética fue el lugar escogido para una reunión

del Pacto cuyo fin fuera el de reformar en profundidad sus funciones y cometidos hasta transformar la Alianza mediante un tratado entre «Estados iguales y soberanos, basados en principios democráticos, que cooperen de una *forma* constructiva con la OTAN»[38]. No debemos olvidar que entre los primeros ministros presentes estaban el checoslovaco Václav Havel y el húngaro József Antall, ambos de inequívoca actitud reformista: sin duda, la hegemonía soviética peligraba, y por ello los encuentros posteriores estuvieron encaminados, más que a dar un giro a la institución, a disolverla. Los dos líderes antes citados llegaron, incluso, a hablar abiertamente de que sus países podrían firmar con la OTAN acuerdos de naturaleza diversa.

El 1 de julio de 1991 la Unión Soviética, Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia, Polonia y Rumanía (tras el abandono de la RDA en 1990) firmaron en Praga el «Protocolo para la finalización del Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua», adelantándose así a la reunión prevista para 1992 en Helsinki, donde se iba a abordar la cuestión. Sin embargo, había sido unos meses antes, el 25 de febrero de 1991, cuando el Comité Consultivo político del Pacto, reunido en Budapest bajo la presidencia de Géza Jeszensky, había decidido desmantelar los órganos y estructuras militares de dicho Tratado para el 31 de marzo de 1991, gesto que había constituido la auténtica acta de defunción de la alianza defensiva de la Europa comunista. Los países de Europa central y oriental iniciaban un camino en solitario para definir sus políticas de defensa en consonancia con sus cambios democratizadores, negándose de manera tajante a aceptar el Nuevo Modelo de Cooperación. Bajo esta denominación surgía una propuesta soviética para mantener con estas naciones, en la medida de lo posible, un marco de relaciones privilegiadas dentro del cual quedaban contempladas las materias de Seguridad[39].

Con todos estos cambios, y con unos Gobiernos convencidos de la necesidad de entrar cuanto antes en las estructuras comunitarias, los países europeos antes sovietizados volvían la mirada hacia la OTAN. Los contactos habían aumentado desde mediados de 1989 y, tras una larga serie de encuentros y comunicados, los jefes de

Estado o de Gobierno de la Alianza, reunidos en Roma el 7 y 8 de noviembre de 1991, acordaron institucionalizar la cooperación con estos países, así como con las repúblicas bálticas, en materia tanto política como de seguridad. De este modo, apenas dos semanas más tarde, el 20 de noviembre, se celebraba el primer encuentro del Consejo de Cooperación del Atlántico Norte; a él acudieron los ministros de Exteriores de los países de la Europa central y oriental y de los tres bálticos. Este acontecimiento abría las puertas a una nueva etapa en la historia de las relaciones entre los ya extintos bloques enfrentados durante la Guerra Fría.

La URSS en 1989: el fracaso de la perestroika

El sistema político, un callejón sin salida

En el campo de la política, el fracaso de las reformas podía preverse a tenor del contradictorio espíritu que las animaba. En un país regido durante setenta años por el poder omnímodo del Partido Comunista, Gorbachov y su equipo habían abogado por una regeneración del sistema cuyo pilar indiscutible fuera el propio Partido, que debía así impulsarla a través de sus propios cauces. La finalidad era, en teoría, dotar de contenido real y eficacia ejecutiva a las viejas instituciones revolucionarias, en especial a los soviets, para acabar con el anquilosamiento, cuando no parálisis y corrupción del sistema de dominación. El resultado lógico, para el líder soviético, debía ser la creación de un «Estado socialista basado en la ley», capaz de canalizar «constitucionalmente» las prerrogativas de la *nomenklatura* para devolver al pueblo su poder de decisión en todos los ámbitos de la actividad política.

Gorbachov creía ingenuamente contar con el PCUS como solución válida –en última instancia, seguiría ostentando su papel dirigente de la sociedad soviética–, cuando en realidad era más bien un problema, quizá el más grave de todos. Ello era así, en primer lugar, porque los grupos privilegiados dentro de la organización política, y por ende, del Estado, no parecían dispuestos a perder un ápice de

su preeminente posición, mantenida a lo largo de los últimos decenios; es más, la fuerte estructura jerarquizada y consolidada a través de un largo proceso de burocratización se iba a mostrar inmune a cualquier cambio renovador. En segundo término, el propio Gorbachov no parecía saber con claridad hasta dónde quería avanzar en la democratización del proceso político. Sus alegatos en pro del imperio de la ley, el respeto a las libertades fundamentales o al pluralismo entraron en flagrante contradicción con el mantenimiento del Partido Único, que durante su mandato, y hasta disolverse en la práctica, manejó los resortes de poder tales como el Soviet Supremo o el Ejército.

Sistema constitucional y hegemonía del PCUS fueron incompatibles, y el intento de acomodación entre ambos dejó insatisfecho a todos. Una parte importante de la población vio frustradas sus esperanzas de caminar hacia una democracia real, mientras que el Partido se vaciaba en lo ideológico y se desarmaba en lo organizativo. Ello provocó una consecuencia fatal en un doble sentido: la *nomenklatura* y los dirigentes políticos en todos los niveles funcionales y territoriales no sólo perdieron credibilidad ante el pueblo, sino ante la propia estructura de la organización. En consecuencia, el Partido se desintegró paulatinamente en facciones y grupos y surgieron otras alternativas al margen de él.

El desmoronamiento del sistema llegó a todas partes. Incluso los dirigentes locales, a la vista de la pérdida de confianza de la sociedad, abandonaron los principios del centralismo democrático, interesándose más por promover las peticiones de sus electores –sobre todo, en las cuestiones nacionalistas– ante el peligro manifiesto de ser relevados de sus funciones bien en unos próximos comicios, bien por desórdenes públicos. Las llamadas de Moscú fueron quedando apartadas poco a poco, y muchos de los antiguos líderes comunistas de los distintos territorios de la URSS utilizaron el control sobre el Partido no para apoyar el proceso reformista sino para intentar beneficiarse de la nueva situación, lo cual contribuyó aún más a crear desorden y a facilitar las tendencias disgregadoras. Ello se debía a que la supuesta descentralización del sistema soviético era una nueva ilusión, pues generaba un nuevo centralismo

en cada república o territorio en torno a los dirigentes y sus grupos de apoyo allí establecidos, que no dudaban en mantener el control en sus respectivas áreas por cualquier medio[40].

En este estado de cosas, el Partido quedó fuera de control. Las más altas autoridades en Moscú perdieron su predicamento sobre las autoridades de las repúblicas, muchas de estas lo perdieron sobre los representantes del Partido en otras tantas áreas geográficas de su territorio, y así sucesivamente, lo que generó una crisis de autoridad a todos los niveles y una incapacidad de los prebostes del Partido para hacerse con la situación. Uno de los síntomas más evidentes fue la huelga minera del verano del 89, en el transcurso de la cual fueron unos comités creados *ad hoc,* y no los dirigentes comunistas locales, quienes coordinaron las acciones. Parecía lógico que si el PCUS había sido durante tantos años la fuerza articuladora más importante del Estado, su desintegración supusiera la del propio Estado soviético[41].

Gorbachov, insistimos, había creído sinceramente en la viabilidad del proyecto socialista. En toda ocasión recordaba la validez del legado de Lenin y la necesidad de mantener al PCUS como fuerza dirigente, a la vez que lanzaba duras invectivas contra el sector comunista más ortodoxo y contra los sectores demócratas radicales, a quienes tachaba de inductores del proceso de deterioro en el que estaba sumida la Unión. Pero aquella creencia resultó falsa. Los hechos demostraron que el Partido-Estado no admitía regeneración posible. El resultado del proceso reformista alteró profundamente los cimientos del poder soviético. A través de las fisuras provocadas por la perestroika política, otros nuevos centros de poder –aun cuando la mayor parte de ellos salió del propio Partido– pugnaron por consolidar su situación y minaron al PCUS hasta terminar disolviéndolo sin que pudiese surgir una alternativa auténticamente democrática que comenzara siquiera a consolidarse.

Tensiones socioeconómicas en la patria del proletariado

El vacío producido en el sistema económico soviético ante la escasa operatividad del impulso reformista intentado entre 1987 y 1989 y el marasmo subsiguiente obligaron a Gorbachov –a quien la opinión pública occidental empezaba a cuestionar[42]– y a sus asesores a intentar lo más difícil, esto es, reformar la reforma y proclamar la necesidad de avanzar hacia la economía de mercado, pero sin abjurar aún totalmente del sistema de dirección centralizada. La falta de decisión para romper con el pasado y las contradicciones entre los reformistas dieron lugar a una serie sucesiva de planes económicos que, en poco menos de dos años (entre el otoño de 1989 y el verano de 1991), al fracasar, terminaron arrastrando a la propia Unión Soviética hacia la desintegración[43].

En noviembre de 1989 Leonid Abalkin, vice primer ministro encargado de la reforma económica, presentaba su programa de «economía mixta de plan y de mercado planificado»; por su parte, el primer ministro Nikolai Ryzhkov anunció en diciembre el suyo propio, que pretendía una «economía de mercado regulada»[44] y que fue aceptado por el Congreso de los Diputados del Pueblo el 19 de diciembre de 1989, aunque no pudo tener continuidad en el tiempo por las críticas que recibió. Ante semejante situación, en mayo de 1990 el propio Ryzhkov presentó un nuevo programa de reforma que, como veremos, se volvería a estudiar en septiembre –«como un estudiante que no hubiera aprobado en junio», según la Agencia TASS– y en el que se posponía indefinidamente el *viraje decisivo* hacia la economía de mercado. Dicho proyecto, que entorpecía más aún el camino de la transición económica, fue rechazado de plano.

Al analizar estos decisivos meses de la vida económica soviética, Ken Jowitt constata en el primer semestre de 1990 un giro en la actuación política de Gorbachov debido a que los intentos de mejorar la economía a través de una planificación inspirada, en definitiva, en principios leninistas habían ido fracasando uno tras otro[45]. No tenía sentido; es más, no podía existir una «economía de mercado regulada». Si a esto unimos que la dirección centralizada fallaba por todas partes, diluyendo responsabilidades e impidiendo la puesta en marcha de medidas rápidas y efectivas, podemos imaginar la apremiante necesidad de transformaciones, las

cuales no eran posibles cuando, a mediados de 1990, existían al menos tres instancias superiores con competencias económicas, con intereses y presupuestos de actuación muy diferentes: por un lado, estaba el *Gosplan,* controlado por el Consejo de Ministros; por otro, la Comisión Estatal para la Reforma Económica, creada en julio de 1989; por último, estaba el propio Consejo presidencial de Gorbachov, que debía formular las líneas maestras de la política económica y entre cuyos miembros estaba Stanislav Shatalin. A todas ellas se añadía el poder que el Soviet Supremo tenía para aprobar o rechazar dicha política.

Para intentar salir de este círculo vicioso, en el mes de septiembre, Shatalin logró conciliar un esbozo de plan radical que estaba elaborando el Gobierno de la Federación Rusa con algunos aspectos del antiguo plan de Ryzhkov y presentó un nuevo programa conocido como el «Plan de los 500 Días», que era justamente el periodo de tiempo en que se debería dar el salto a la economía de mercado. Aunque su entrada en vigor fue fijada para el 1 de octubre de ese mismo año de 1990, el plan fue finalmente rechazado[46]. Una vez más quedaba patente que una economía de mercado sólo podía existir gracias al libre juego de la oferta y la demanda, amparada por unas instituciones democráticas que sirvieran de garante al mismo[47]. El plan era una ruptura clara, sin falsos maridajes, con el aparato comunista de Estado y por ello se frustró. La pugna entre el viejo sistema y la aplicación del innovador plan se dirimió a favor de la pervivencia de las viejas estructuras y supuso, incluso, el final del proceso privatizador puesto en marcha a finales de 1986[48].

Mientras tanto, y ante los sucesivos saltos en el vacío de los planes de reforma, que no habían hecho más que agravar la crisis[49], Gorbachov obtuvo plenos poderes en materia económica, primero, el 24 de septiembre de 1990 y, por segunda vez, el 31 de marzo de 1992; unido a ello, el 19 de octubre de este último año logró que el Soviet Supremo diera el visto bueno a las «Orientaciones básicas para la estabilización económica y la transición a una economía de mercado», que el líder soviético justificaba de la siguiente manera:

> La situación de la economía continúa deteriorándose. El volumen de producción está descendiendo. Los vínculos económicos se están rompiendo. Aumenta el separatismo. El mercado de consumo está en un estado calamitoso. El déficit presupuestario y la soberanía del Gobierno están en niveles críticos. El crimen y los comportamientos antisociales están aumentando. El pueblo encuentra la vida cada vez más difícil y pierde su interés en el trabajo y su fe en el futuro. La economía está en un gran peligro. El antiguo sistema administrativo de dirección ha sido destruido, pero falta ímpetu para trabajar en un sistema de mercado[50].

La situación era, sin embargo, muy comprometida ya desde comienzos de 1990. Las pocas medidas reformistas que habían entrado realmente en vigor no llevaron consigo cambios significativos, de no ser un agravamiento del día a día de la población. La inflación creciente, la inconvertibilidad del rublo y una estructura de precios caótica presionaban sobre los más desprotegidos. No parecían –o no querían– entender los mandatarios soviéticos, con Gorbachov a la cabeza, que el proceso de formación de precios racionales sólo podía darse en una economía de mercado. La práctica liquidación de la incipiente demanda de consumo terminaba con los precarios incentivos materiales al trabajo y conducía a unas tasas de productividad muy bajas, junto a una relajación de la disciplina laboral[51]. Por otro lado, y si la alternativa estaba fallando (o se la frustraba antes de nacer), el obsoleto sistema burocrático ya no se podía regenerar, mientras que los intereses nacionalistas de las repúblicas –cada vez más preocupadas por que no faltaran los abastecimientos de víveres para la población y las materias primas y fuentes energéticas para sus industrias– habían hecho olvidar las quimeras solidarias del proletariado soviético de otros tiempos. Finalmente, las luchas dentro del grupo de poder por el control del país dilataban aún más la toma de medidas rápidas y certeras. En este sentido, y como dice Grigori Khanin, a partir de la segunda mitad de 1990 no cabe hablar de crisis económica, sino de catástrofe[52]. El empobrecimiento del capital fijo, la caída en la producción de materias primas, la crisis monetaria internacional y la lamentable situación del mercado de trabajo tenían su plasmación en las cifras que el Comité Soviético de Estadística no ocultaba. La renta nacional había caído en un 3,5 por

100 entre julio y septiembre de 1990, comparada con el mismo periodo de 1989, y volvería a caer un 8,5 por 100 en los tres últimos meses de 1990. Al corregir estos datos considerando la inflación oculta, el descenso total de la renta nacional para todo el año estaba entre un 13,5 y un 14,5 por 100. La opinión pública soviética tomaba buena cuenta de los «logros» del reformismo de Gorbachov y así, entre mayo y junio de 1990 la proporción de ciudadanos que expresaban una total confianza en el líder del país cayó del 14 al 7 por 100, en una tendencia que continuó en descenso[53]. Al respecto, sin embargo, no basta considerar los datos cuantitativos, por negativos que estos sean; como señala Marie Lavigne,

> debemos añadir el empeoramiento en términos cualitativos: escasez de todo tipo de bienes, especialmente de alimentos; trueque en sustitución del comercio, tanto en el ámbito doméstico como en sus relaciones internacionales; y un deterioro importante de la calidad de vida, con un aumento del crimen, el colapso de los servicios públicos del «Estado del bienestar soviético» (vivienda, salud, educación), y la incertidumbre sobre el futuro[54].

Al comenzar el año 1991 las cosas no habían mejorado en absoluto y la autoridad de Gorbachov estaba en tela de juicio. El mejor ejemplo de ello es la continua superposición de planes de reforma: el 23 de abril de 1991 el Soviet Supremo aprobaba un nuevo plan, el llamado «Programa Anticrisis» que habían pactado el nuevo primer ministro de la URSS, Valentin Pavlov, y los dirigentes de las repúblicas y que pretendía llegar a la economía de mercado a través de una tercera vía mucho más lenta. Dos meses después, en junio, se conocerían otros planes de estabilización y transición al mercado pergeñados esta vez por personajes próximos a Gorbachov: el consejero económico Grigori Yavlinski y el profesor de Harvard Graham Allison. Ante la falta de consenso entre los principales dirigentes del país, Gorbachov capitaneó el enésimo y último plan de reforma, que era una síntesis del Plan Anticrisis y del Plan Yavlinski-Allison. Los acontecimientos de agosto de 1991 terminaron con los sucesivos y contrapuestos intentos de reforma que había conocido la URSS desde 1985, al demostrarse la ineficacia de todas las medidas encargadas y quedar al descubierto las contradicciones que había

soportado la Unión Soviética y que, al final, se mostraron insuperables.

Cómo se extingue una superpotencia

a) Del problema nacional al Tratado de la Unión

Entre 1986 y 1991 el problema nacional de la URSS se exacerbó ante la falta de contenido real de los principios federalistas e igualitarios entre las repúblicas, que habían conducido a la primacía de Rusia sobre el resto de los pueblos soviéticos[55]. La rápida descomposición de la Unión generaría una multiplicidad de Estados que, sobre todo en el Cáucaso y en Asia central, iban a convertirse en zonas conflictivas en la Posguerra Fría.

La crisis en el Cáucaso afectó a las tres repúblicas de la zona: Armenia, Azerbaiyán y Georgia. Especial virulencia revistió en la segunda de ellas, donde armenios y azeríes se enfrentaron por el control del enclave armenio de Nagorno-Karabaj en Azerbaiyán. Entre las causas del conflicto no sólo se encontraban la reivindicación territorial, ya que esta ocultaba aspectos tales como las diferencias religiosas entre Armenia –cristiana– y Azerbaiyán –islámico–, sino también la gravedad de la situación económica y el empeoramiento de las condiciones de vida. Ante el fracaso de todas las soluciones de compromiso que arbitró Moscú, las hostilidades degeneraron prácticamente en una guerra civil que Gorbachov trató de evitar a través de la intervención directa del ejército en Bakú el 20 de enero de 1990. Ni siquiera esta operación bastó para atajar el conflicto, mientras Moscú, ante la descomposición del sistema, iba cediendo el protagonismo a las partes beligerantes[56].

En las repúblicas asiáticas (Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán y Kirguistán) dos factores importantes determinaron la evolución del nacionalismo. Por un lado, su deplorable situación socioeconómica, por estar, en general, alejadas del proceso de industrialización y sometidas a una sobreexplotación de la tierra que las había convertido en abastecedoras masivas de productos agrarios

sin transformar. En segundo lugar estaba el peso del islam como articulador y unificador de los pueblos que allí habitaban. La perestroika, con su respeto a la libertad de culto, permitió el fortalecimiento de la religión musulmana en estas repúblicas que vivían a las puertas de Irán.

El poder soviético achacó el estallido de las crisis interétnicas en Asia central a la acción interesada de políticos corruptos capaces de manipular a grupos de población marginada –los cuales, en última instancia, habrían provocado los incidentes– para hacer ver a Moscú que las reformas sólo podrían ponerse en práctica si pasaban por el filtro de las autoridades republicanas: valga como ejemplo la violencia desatada contra la población rusa de Almá-Atá, a la sazón capital de Kazajistán, el 17 de diciembre de 1986. En otros casos, la explosión de violencia habría sido producida por una combinación de este convencimiento y del efecto de la religión islámica en su versión más fundamentalista en una población sin demasiadas esperanzas. Sin embargo, a la hora de explicar las agresiones, los mandatarios soviéticos obviaban de forma interesada la dejadez sufrida tradicionalmente por la economía en estos territorios; su escasa, por no decir nula, modernización social[57].

Un carácter muy distinto presentó el conflicto surgido en las tres repúblicas bálticas: Estonia, Lituania y Letonia. Por otra parte, el hecho de que se diera en estos territorios de la URSS no debe sorprendernos si consideramos que tenían un desarrollo económico en general mayor que el resto de la Unión, unas relaciones tradicionalmente más fuertes con Occidente y una sociedad civil que había tomado conciencia de sus derechos históricos, sabedora de que habían sido Estados independientes desde 1918 hasta 1939, cuando por el Pacto Ribbentrop-Molotov se incorporaron a la Unión Soviética. Así, la aparición, a lo largo de 1988, de los frentes populares bálticos respondió, más que a un apoyo formal a la perestroika, a la voluntad de recuperar la soberanía nacional. Después de numerosos incidentes con las autoridades de Moscú, un paso fundamental en su camino para constituirse como Estados libres e independientes se produjo cuando, tras las elecciones de 1990, los dirigentes de las repúblicas de Georgia, Bielorrusia y

Moldavia reconocieron el derecho de Lituania, Estonia y Letonia a la secesión[58].

Estos hechos hicieron comprender a Gorbachov que uno de los problemas más graves que se planteaban en la URSS era el problema nacional. La falta de perspectiva política, así como la impericia en el tratamiento de las sucesivas crisis nacionalistas que se fueron planteando desde 1986 le llevaron a un punto sin retorno. Si al principio de su mandato todavía hubiera sido posible preservar la URSS a través de la puesta en marcha de una Confederación de Estados Soberanos, a finales de 1990 o al empezar 1991 esta aspiración ya no tenía sentido. Fracasaron los primeros intentos de negociación sobre el futuro tratado de la Unión cuando, en el mes de junio de 1990, las repúblicas bálticas ni siquiera participaron, y pronto se retiraron Armenia, Georgia y Moldavia. Las nueve repúblicas restantes (República Rusa, Bielorrusia, Ucrania, Azerbaiyán, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán y Kirguistán), coordinadas por la Unión Soviética, obligaron a Gorbachov a negociar en la ciudad de Novo Ogarievo, durante la primavera y el verano, el llamado «9 + 1». El texto aceptado por todas las partes, que suponía la base de un nuevo Tratado de la Unión, debería firmarse solemnemente el día 20 de agosto de 1991.

El Tratado de la Unión fijaba una Unión de Repúblicas Soviéticas que eludía cualquier llamada al socialismo. La Unión tenía derechos exclusivos en materias como la dirección del ejército, la declaración de guerra y la firma de la paz, la policía, la aprobación y puesta en marcha del presupuesto federal y de las grandes líneas de política económica interna y externa, la reserva de divisas y la emisión de moneda, la investigación espacial y militar y la regulación y control de la energía nuclear. Sin embargo, y como era lógico a tenor de la estructura federal que se intentaba implantar, los poderes debían en su mayor parte ser desempeñados conjuntamente por las repúblicas y los órganos centrales: política impositiva, sistemas de créditos y financiación, gestión de recursos y protección del medio ambiente, transporte, comunicaciones, política de bienestar social, educación, promoción de la actividad científica y tecnológica y puesta en

práctica del programa de la Unión para los desarrollos regionales[59].

b) El intento de golpe de Estado

Las cesiones en política exterior realizadas por la URSS desde 1989 discurrieron paralelas al deterioro progresivo de su situación interna, golpeada por la incapacidad de enderezar el rumbo económico y por el fortalecimiento de los movimientos nacionalistas. En efecto, las tensiones centrífugas mostraban, con creciente preocupación para el Kremlin, no sólo una crítica a los desajustes del sistema soviético sino también a la perestroika por no aceptar esta el fondo de las reivindicaciones de las repúblicas. Todo ello inquietaba a Washington, cuyas autoridades temían la posibilidad de que un golpe de Estado pusiera fin a la política de Gorbachov.

A lo largo de 1990 y 1991, ante el fracaso de las reformas institucionales y económicas, el descontento se extendió entre una población que cada vez esperaba menos de sus dirigentes políticos. Para el equipo de Gorbachov resultaba gravísima esta pérdida de confianza de la población en una política que, más allá de las grandes palabras, había empeorado el nivel de vida en general. Por otro lado, el nuevo Tratado de la Unión venía a refrendar los temores de los sectores comunistas más ortodoxos ante una posible desaparición de la URSS. Los crecientes titubeos de las medidas emprendidas por Gorbachov parecían conducir a un callejón sin salida. La situación era propicia para maquinaciones entre quienes nunca habían comulgado con los cambios democratizadores, máxime cuando algunos de sus más conspicuos elementos ostentaban cargos de responsabilidad en el Partido y en el Estado. La notoria pérdida de poder frente a Occidente y la inacción a la hora de erradicar la disidencia separatista en el seno de la Unión hicieron saltar las alarmas entre los sectores a los cuales la evolución de los acontecimientos parecía dar la razón: la perestroika había resultado nefasta para el país de los soviets.

Con este difícil panorama, y a partir de septiembre de 1990, Gorbachov optó por hacer algunos cambios de suma importancia en la cúpula del Partido en beneficio de los grupos antirreformistas. A la cabeza, respectivamente, del KGB y del Ministerio del Interior, entre otras instancias, fueron nombrados Vladimir Kriuchkov y Boris Pugo. En diciembre el ministro de Asuntos Exteriores Eduard Shevardnadze, una de las figuras más importantes en el diseño de la perestroika y de gran prestigio internacional, dimitía al no estar de acuerdo con los derroteros que tomaba el país.

Los nuevos responsables de la política soviética pensaron que el desajuste económico, la pérdida de prerrogativas constitucionales del Partido Comunista, la paulatina descomposición de la Federación, la falta de liderazgo internacional de la URSS y el malestar de la población ante el empobrecimiento de su calidad de vida actuarían como caldo de cultivo para el triunfo del golpe de Estado que proyectaban. Los objetivos de los golpistas estaban muy claros: regresar a la senda del marxismo-leninismo, preservar la unidad del Estado soviético, dar por concluidas las desastrosas reformas de la perestroika y apartar a Gorbachov de la Secretaría General del PCUS y, por ende, de la presidencia de la URSS.

A primeros de agosto de 1991, con Gorbachov de vacaciones en Foros (Crimea), los conspiradores decidieron poner en marcha el plan y así, al parecer, constituyeron el día 16 el autodenominado «Comité de Emergencia». Este envió el 18 una comisión a Crimea, pero no logró persuadir a Gorbachov para que declarase el estado de emergencia, presentara la dimisión de sus cargos y firmara el traspaso de poderes. A la mañana siguiente, el 19, el paisaje urbano de la capital moscovita apareció tomado por la presencia de carros de combate; sin duda, uno de los hechos más insólitos por lo inverosímil que hubiera resultado tan sólo unos años antes. En un tono y estilo completamente anacrónicos, propios de los años más duros de la Guerra Fría, unas fantasmagóricas autoridades soviéticas proclamaron el estado de excepción y, bajo el subterfugio de la precaria salud del secretario general, declararon su intención de preservar la paz, la integridad territorial y la independencia de la

URSS. La obra de Gorbachov amenazaba desplomarse como un castillo de naipes. En palabras del historiador Ernst Nolte:

> Nunca hasta entonces había ocurrido en la historia de la humanidad que un acontecimiento no bélico y casi incruento, como el golpe de agosto en la Unión Soviética, provocara tanto seguimiento, incluso directo, de la televisión. Aquel día pareció como si los comunistas ortodoxos fueran a recuperar el poder, y que la obra de Gorbachov, el comunista reformador, tuviera los días contados. Por las capitales occidentales se extendió el pánico, el temor a una posible vuelta a la Guerra Fría; los países del Este se sintieron atenazados por el temor; los Estados bálticos se prepararon para constituir gobiernos en el exilio, pero lo ocurrido sólo mereció un apoyo tibio por parte de lo que quedaba del «socialismo real»[60].

Ante las presiones internacionales y el escaso apoyo en el interior, el golpe fracasó. En la madrugada del día 22 Gorbachov llegó por fin a Moscú. Una vez instalado en el Kremlin y en el uso de sus prerrogativas, procedió a anular todos los decretos y órdenes de rango inferior emitidos por el ya extinto Comité de Emergencia y ordenó sin dilación la detención de todos los implicados[61].

Definitivamente, se podía dar por terminado el intento de golpe de Estado del 19 de agosto. La falta de respaldo y la clara incompetencia de los sediciosos, que no supieron articular en torno a sí una red jerarquizada y compacta capaz de adoptar decisiones rápidas, dieron al traste con su plan. El reformista Alexander Yakovlev comentó con posterioridad a James Baker, secretario de Estado norteamericano, que los rebeldes «hicieron por nosotros en tres días lo que hubiéramos tardado quince años en conseguir»[62]. En efecto, las consecuencias inmediatas del estrepitoso fracaso de la conspiración fueron, por un lado, la liquidación casi definitiva de las instituciones comunistas y, por otro, la desintegración de la URSS.

De este modo, tras unos meses a la deriva y ante la marcha ineluctable de los acontecimientos, el presidente Gorbachov renunció a su cargo en un mensaje transmitido por televisión el 25 de diciembre de 1991. Al terminar el comunicado se arrió en el Kremlin la bandera roja y en su lugar apareció la tradicional enseña rusa azul, blanca y roja. Unos días antes, el 12 de aquel mes, los parlamentarios rusos habían aprobado la anulación del Acta

Fundacional de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El imperio de los soviets era ya parte de la historia.

c) Hacia la transición: la Rusia de Yeltsin

El fallido golpe de Estado de agosto de 1991 terminó por convencer a una gran parte de la elite reformista proveniente de la URSS de que Gorbachov había perdido definitivamente la partida y convenía pasar a un terreno de juego plenamente democrático, al menos en las formas. Personalidades como Yuri Cernichensko, Yegor Gaidar y Alexander Yakovlev, por citar tan sólo los casos más conocidos, abandonaron a Gorbachov para seguir los dictados de Boris Yeltsin y desembarazarse del gravoso legado soviético que con tanta vehemencia habían defendido hasta hacía muy poco. Con la perestroika habían comenzado a hacerse más visibles dentro del sistema distintas corrientes de opinión; serían precisamente estas las que en las repúblicas federadas darían paso a los frentes populares. Según todos los observadores, y aunque hasta octubre de 1990 no se aprobó la Ley de Asociaciones Públicas, dentro de la cual entrarían en funcionamiento las formaciones políticas, estas comenzaron a ser toleradas seis meses antes, con la reforma constitucional de marzo. Las elecciones al Congreso de los Diputados del Pueblo celebradas ese mismo año de 1990 sirvieron de ensayo democratizador, así como de esbozo de una suerte de sistema de partidos –esto es, de presentación en el escenario político de aquellas tendencias que iban a mantenerse con el paso del tiempo– cuya consolidación, no obstante, iba a verse impedida por la deriva autoritaria del ejecutivo y por la debilidad de los demás poderes del Estado.

En el caso particular de Rusia, ya Gorbachov había iniciado una transformación de enorme envergadura –un ensayo de cambio socioeconómico sin contar con la población, como era ya tradición consolidada en la historia de Rusia–, y ya hemos visto que la reacción en cadena provocada trajo consigo el desmantelamiento de las estructuras políticas, sociales y económicas sin reemplazarlas por

otras con visos de constituir una garantía viable[63]. La aceleración de los acontecimientos a partir de 1989 favoreció en todos los órdenes de la vida pública la aparición de aventureros que, estimulados por el caos reinante, obtuvieron sustanciosos privilegios en el reparto y venta de los bienes estatales. La fragilidad del Estado y la falta de definición de las opciones políticas, al servicio de unas elites irresponsables, iban a impedir una transición sin sobresaltos. Esto explica que, frente a procesos formalmente parecidos en Polonia, Checoslovaquia y Hungría, resulte difícil denominar «transición democrática» a lo ocurrido en Rusia. Por otro lado, el cambio era todavía más difícil en un país en cuya historia jamás había existido una democracia que mereciera llevar tal nombre; un país donde los derechos y las libertades individuales no habían sido objeto de un reconocimiento pleno: era en ese pobre sustrato, precisamente, donde habían actuado Lenin y sus sucesores. Como sabemos, el resultado fue devastador: en palabras de Furet, «el comunismo termina en una especie de nada, dejando una sociedad convertida en escombros […]. La Revolución de Octubre cierra su trayectoria no con una derrota en un campo de batalla, sino liquidando por sí misma todo lo que se había hecho en su nombre […]. Su rápida disolución no deja nada en pie, ni principios, ni códigos, ni siquiera una historia»[64].

Entre todos aquellos que supieron adaptarse a la convulsa situación de la URSS a finales de los ochenta emergieron personalidades con capacidad de liderazgo, y paradigma de todas ellas fue Boris Yeltsin, cuya figura resultó determinante para la evolución del proceso. Yeltsin había desarrollado un *cursus honorum* propio de la *nomenklatura* soviética. Secretario del Comité del Partido en la región de Sverdlovsk, a la llegada de Gorbachov a la Secretaría General del PCUS era jefe del Departamento de Industria de la Construcción del Comité Central del Partido. En julio de 1985 pasó a formar parte del Secretariado de dicho comité; poco después era miembro suplente del Politburó. Con los cambios introducidos por Gorbachov en la dirección del Partido, en diciembre de ese mismo año fue nombrado primer secretario del Partido en Moscú. Yeltsin supo jugar muy bien sus bazas entre las distintas facciones

de la organización comunista, mostrándose a favor de la perestroika a la vez que muy crítico con los sectores ortodoxos. Su popularidad en alza le valió una abultada victoria en las elecciones de marzo de 1989 para el Congreso de los Diputados del Pueblo[65]. En esta fulgurante carrera, sostenida por su popularidad, un año después fue elegido para el Soviet Supremo ruso, del que fue nombrado presidente en mayo[66].

Las decisiones adoptadas a renglón seguido por Yeltsin no defraudaron a sus seguidores. El 12 de junio de 1990 proclamó la primacía de la legislación rusa sobre la soviética y tras el XXVIII Congreso del PCUS, celebrado a comienzos de julio, abandonó el Partido, después de criticar su deriva antirreformista. También reforzó su imagen de paladín de las esencias rusas mientras las medidas para incentivar la economía de la URSS fracasaban sucesivamente y los movimientos independentistas crecían no sólo en el mar Báltico sino también a lo largo y ancho de toda la Unión.

Un año más tarde, en junio de 1991, Yeltsin triunfaba, también por abrumadora mayoría, en las elecciones a la presidencia de la Federación para regir desde allí los destinos de la nueva Rusia. Con el 57,3 por 100 de los votos sacó cuarenta puntos de ventaja al siguiente candidato más votado, el comunista Nikolai Ryzhkov, que apenas alcanzó el 17 por 100. Yeltsin había contado con el incondicional apoyo de un movimiento de amplio espectro social denominado Rusia Democrática. Con tan apabullante respaldo popular la consolidación de Yeltsin en el poder resultó decisiva para el presente y el futuro del país; de ahí la trascendencia de los primeros años noventa. No le faltaba razón a Tony Judt cuando afirmó:

> Al llegar la primavera de 1991, en la periferia todo el mundo estaba esperando a ver qué ocurría en el centro. Evidentemente, la clave estaba en la propia Rusia, que, con la mitad de la población del país, tres quintos de su producto nacional bruto y tres cuartos de su territorio, era con mucho la república principal de la Unión. En cierto sentido, Rusia, como país, no existía: durante siglos había sido o aspirado a ser un imperio. Rusia, que recorría once husos horarios y que comprendía a decenas de pueblos diferentes, siempre había sido algo demasiado grande como para reducirlo a una sola entidad o a una única meta común[67].

Yeltsin mantuvo el aparato de poder que había heredado sin apenas transformar las instituciones para, en cambio, introducir las prometidas reformas estructurales en el campo económico[68]. Era de la opinión de que se podía canalizar con eficacia la enorme potencialidad de Rusia una vez que esta se viese liberada del pesado lastre soviético, y trató de llevar a cabo su plan con el apoyo de dos de sus hombres de mayor confianza: Yegor Gaidar, a quien nombró para la cartera de Finanzas, y Anatoli Chubais, presidente de la Comisión Estatal para llevar a cabo el proceso de privatizaciones. El aumento de los precios, completamente desacompasado con el de los salarios, y el fortalecimiento de la elite económica gestora de las empresas estatales (la única con posibilidades reales de hacerse con el control de las empresas privatizadas) generaron un profundo malestar social que se reflejaría, entre otras cosas, en la caótica proliferación de partidos políticos y en las primeras fisuras serias del entramado de poder ideado por el presidente. Tanto el checheno Ruslan Jasbulatov como el ruso Alexander Rutskoi lograron agrupar en torno a sí a sectores descontentos con las reformas, fácilmente manipulables mediante un acendrado discurso nacionalista. La fuerza de estos grupos emergentes pudo constatarse a finales de 1992 en la oposición mostrada por el Soviet Supremo a la designación de Gaidar como primer ministro.

Ante la dificultad de enderezar la situación económica y acallar las críticas de una oposición creciente, la figura de Yeltsin perdió enteros de popularidad y se debilitó en el escenario europeo. Obligado a arrumbar las promesas de una mejora generalizada, ya no podía echar la culpa a las presiones de una URSS ahora inexistente. El caos político y administrativo y el aumento de la pobreza y de la delincuencia eran las realidades de una nueva Rusia a la deriva.

En estas circunstancias era factible que aparecieran alternativas políticas cuyo punto de mira estuviera centrado en el retorno al pasado, como efectivamente sucedió. A pesar de su impecable denominación, el Partido Liberal Democrático, fundado en 1990 y dirigido por Vladimir Zirinovski, abogaba abiertamente por una fórmula autoritaria. En realidad, la tendencia a concentrar en una sola persona el poder efectivo estaba también muy presente en el

pensamiento del propio Yeltsin, superado cada vez más por los acontecimientos y temeroso de perder el control. Sin embargo, los opositores calcularon mal el envite y la respuesta no se hizo esperar. El 20 de marzo de 1993, adelantándose a una situación que podía resultarle muy comprometida, Yeltsin anunció a los ciudadanos la convocatoria de un referéndum para que adoptaran una posición clara ante sus proyectos de reforma, incluido uno que le otorgaba poderes especiales. La cita, celebrada al mes siguiente, confirmó sus intenciones: con un 64,5 por 100 de participación, el 58 por 100 le otorgó su confianza y un 52 por 100 aprobó sus políticas económicas[69].

No todo iba a ser tan fácil. Los acontecimientos del otoño de 1993 mostrarían las dificultades de traspasar los límites de una democracia formal para constituir un verdadero Estado de derecho. En 1991, al llegar al poder, Yeltsin se había encontrado con un Legislativo formado por el Congreso de los Diputados del Pueblo –la cámara creada por Gorbachov– y por el Soviet Supremo, ambos claramente contrarios a los planes de un líder legitimado por las urnas, reconocido y apoyado por la comunidad internacional y poco dispuesto a transigir para compartir el poder con dichos órganos estatales. Por ello, procurando evitar el control del Legislativo, Yeltsin gobernó mediante decretos con el fin de sacar adelante su ambicioso programa económico de reconversión radical al mercado. La contundencia de esta política liberalizadora emprendida a comienzos de 1992 provocó la creciente oposición de un Parlamento muy dividido internamente pero en conjunto receloso de un cambio tan drástico. Ante el bloqueo de las iniciativas legales y amparado por su victoria en el referéndum, Yeltsin se jugó el todo por el todo: el 21 de septiembre de 1993 decretó la disolución tanto del Congreso de los Diputados del Pueblo como del Soviet Supremo y del poder judicial para tener así las manos libres y continuar gobernando por decreto hasta las siguientes elecciones legislativas. Por si esto no fuera suficiente, la Asamblea que saliera de las urnas tendría como meta elaborar una nueva Constitución[70].

Alegando la flagrante ilegalidad del decreto de disolución, un grupo de diputados disconformes se encerró en la cámara y

destituyó a Yeltsin para nombrar en su lugar a Alexander Rutskoi, uno de sus más destacados enemigos políticos. De las luchas callejeras entre partidarios de unos y otros –murieron casi ciento noventa personas– y de la inseguridad sobre cómo reaccionarían las fuerzas armadas salió fortalecido el presidente, que el 2 de noviembre ordenó el bombardeo del Soviet: llegado a un punto sin retorno, el enfrentamiento entre los poderes se resolvió por la vía armada. Así, al menos por el momento, sólo el autoritarismo de Yeltsin pudo salvar la innegable debilidad estructural de la Federación Rusa, confirmación escandalosa del desorden general existente en todo el espacio exsoviético.

A los ojos del mundo, el orden ruso comenzaba a institucionalizarse de forma violenta y, en consecuencia, la popularidad del Presidente, aquel hombre arrojado que, subido a un carro de combate, había contribuido de forma notoria a paralizar el golpe de Estado de 1991 y que se había convertido en la imagen de la firmeza reformista, se deshacía para dejar paso a la preocupación en Europa occidental y en Estados Unidos por el futuro del país heredero de la potencia soviética. Las imágenes del asalto a la Casa Blanca rusa concitaron la preocupación europea por lo imprevisible del futuro en el gigantesco vecino eslavo. Por un lado, el mundo occidental respiró con alivio ante la perspectiva de que la vuelta atrás en la vía reformista hubiera sido abortada pero, por otro, los acontecimientos revelaban la fragilidad institucional de la nueva Rusia y sus dificultades para convertirse en una fuerza de equilibrio en la Posguerra Fría.

Después de disolver el Congreso de los Diputados del Pueblo Yeltsin convocó elecciones para un nuevo Parlamento, constituido ahora por una Asamblea bicameral de carácter federal[71]. Las primeras elecciones rusas desde 1917 celebradas con listas electorales transcurrieron con total normalidad. De las trece agrupaciones que concurrieron, ocho superaron el 5 por 100 necesario para tener representación: con su mensaje nacionalista y contestatario del poder, el Partido Liberal Democrático de Rusia obtuvo el 22,9 por 100; Opción Rusia, la formación que apoyaba al presidente, el 15,5 por 100 y el Partido Comunista de la Federación

Rusa, reconstituido después de haber estado fuera de la ley desde el golpe de Estado hasta octubre de 1992, el 12,4 por 100[72].

Las expectativas sobre la deriva autoritaria de Yeltsin se cumplieron sobradamente con la aprobación de una nueva Constitución de corte presidencialista en diciembre de 1993[73]. En ausencia de una sociedad civil desarrollada y con una oposición muy debilitada y escindida (salvo en el caso del Partido Comunista), Yeltsin y sus acólitos forjaron un entramado político y económico capaz de sustituir a la vieja elite en el control del poder, tan reacios como esta a favorecer una verdadera democracia representativa. Tras el autogolpe de 1993 a Yeltsin no le interesó siquiera constituir un partido político moderno digno de tal nombre. Tanto en las elecciones de aquel año como en las de 1995, Opción Rusia y Nuestra Casa Es Rusia constituyeron el sostén del presidente. Convertidas en pseudopartidos, más que organizaciones políticas fueron una red financiada desde las altas instancias, sin una definición programática ni ideológica clara más allá del objetivo de ganar una mayoría parlamentaria suficiente como para preservar la hegemonía decisiva de Boris Yeltsin[74]. Por si esto no bastase, la privatización del inmenso patrimonio económico estatal había favorecido a determinados grupos cercanos al presidente. Según el Banco Mundial, en los años noventa el 85 por 100 de las empresas privatizadas había pasado a ocho grandes emporios industriales, evidentemente, en connivencia con el poder político[75].

Como en el resto del espacio exsoviético, el paso a una economía de mercado repercutió con gran dureza en las masas populares. La liberalización de los precios provocó altas tasas de inflación: más de un 650 por 100 entre enero y abril de 1992 y siempre superior al 200 por 100 hasta 1995, aun cuando desde el primer año el Gobierno había puesto en marcha una política de estabilización macroeconómica. En estas circunstancias, la economía negra pasó de suponer un 15 a un 42 por 100 del PIB entre 1990 y 1995. El déficit presupuestario, mucho más preocupante todavía por la incapacidad del Estado de recaudar impuestos con regularidad, unido al hundimiento de los salarios reales y del ahorro privado, provocó en poco tiempo un enorme deterioro de las condiciones de

vida: algunos analistas hablaron de que la pobreza había alcanzado a uno de cada tres rusos. Las empresas carecían de reconocimiento general, lo cual incidía en la dificultad de atraer recursos en un entorno industrial por lo demás muy precario. Esta situación explica en parte el fortalecimiento de mafias organizadas capaces de ocupar el lugar de las instituciones políticas y económicas.

La privatización comenzó en octubre de 1992 mediante la entrega de un vale de 10.000 rublos a cada ciudadano en un número que alcanzó los 148 millones de cupones. Estos podían canjearse por moneda, hecho que contribuyó a incrementar más aún la tasa de inflación. El entonces primer ministro Viktor Chernomirdin, muy crítico con este proceso en un primer momento, lo comparó a la manera en que durante los años estalinistas se había llevado a cabo la colectivización obligada de la agricultura[76].

Al respecto, y con aguda precisión, en 1994 el historiador Yuri Afanasiev identificaba las causas de que la democracia no funcionara en Rusia con una serie de problemas heredados de la época comunista pero agravados en los últimos años: en primer lugar se encontraba el poder del aparato burocrático de casi veinte millones de personas acostumbradas, cada una en su particular instancia de decisión, a convivir con la corrupción e incluso a practicarla. El segundo lastre venía de la mano de los millones de campesinos que, controlados por los antiguos directores de las granjas colectivas y faltos de cualquier tipo de estímulo, no hacían nada por tratar de mejorar su situación. Finalmente, la elite que dirigía el entramado de la gran industria, sobre todo de la energética y militar, propugnaba los cambios formales teóricamente democratizadores mientras, en realidad, hacía todo lo posible por no perder su situación de privilegio[77].

Junto a los problemas económicos y de estabilidad política, la transición rusa se vio sacudida por la irrupción de algunos movimientos nacionalistas que trataron de aprovechar la supuesta debilidad de la Federación para reivindicar su independencia; entre todos ellos, el caso checheno revistió especial interés por sus violentas repercusiones.

En efecto, en 1989 Chechenia e Ingusetia constituían una sola república dentro de Rusia. Ocupaban una superficie de 19.300 km^2 y albergaban una población de 1.400.000 habitantes, de los cuales 58 de cada 100 eran chechenos. Como en el resto de territorios y repúblicas soviéticas, a lo largo de 1988 habían surgido grupos de oposición a la dirección del Soviet de Chechenia-Ingusetia, controlado por comunistas promoscovitas[78]. Ante el intento de golpe de Estado de agosto de 1991, el Partido Comunista local hizo una declaración pública de apoyo a los rebeldes a la vez que el denominado Congreso Nacional del Pueblo Checheno mostraba su firme respaldo a Gorbachov. Esta fuerza política había nacido en los últimos meses de 1990 de la mano de Yojar Dudáyev, un general del ejército soviético que gozaba de gran popularidad en la república por el hecho de ser checheno.

El fracaso del golpe aceleró los acontecimientos. Con el apoyo de Moscú fue disuelto el Partido Comunista local y se convocaron elecciones, donde, sin muchas garantías de limpieza en el proceso, venció el Congreso Nacional por más del 85 por 100 de los votos. Con este masivo respaldo, la deriva hacia la independencia dejó perplejo al propio Boris Yeltsin, que contemplaba con estupor cómo se desmoronaba el Estado ruso una vez liberado de la carga soviética, y en noviembre de 1991 el Parlamento checheno declaró unilateralmente su separación de la Federación Rusa[79].

Como ocurría en otras zonas de la antigua URSS, el autoritarismo caracterizó el comienzo de esta nueva etapa. Dudáyev se rodeó de fieles, militarizó la sociedad y no hizo nada por atajar el crecimiento de las redes de corrupción, que controlaban los ingresos derivados del petróleo. Menos de dos meses después de proclamada la independencia, el líder checheno clausuró el Parlamento y concentró más aún en su persona la toma de decisiones. En junio de 1992 Ingusetia se separaba de su república hermana.

La economía del enclave se deterioró rápidamente a causa de la congelación de las transferencias financieras provenientes de los presupuestos de la Federación Rusa. Sin embargo, Moscú no actuó contra las autoridades de Grozni; incluso tuvieron lugar hechos sorprendentes, muy expresivos del escaso interés que parecía

mostrar el Kremlin por el curso de los acontecimientos. Como recuerda Carlos Taibo,

> a mediados del año mencionado [1992], el Ministerio de Defensa ruso envió una delegación a Chechenia con el propósito de clarificar el futuro de los contingentes militares todavía presentes en la república secesionista. Se alcanzó un acuerdo en virtud del cual Rusia se comprometía a retirar todos sus soldados –lo hizo materialmente– y a dejar sobre el terreno la mitad de las armas anteriormente a disposición de aquellos [...]; quedaron en Chechenia todas esas armas[80].

Sin embargo, esta dejadez oficial respecto del conflicto cambió ostensiblemente a lo largo de 1994. Las autoridades moscovitas comenzaron a ver con claridad que el ejemplo checheno podía cundir en territorios cercanos del siempre complejo Cáucaso y poner en evidencia la debilidad interna de la Federación Rusa y su incapacidad para responder con contundencia precisamente cuando su imagen internacional estaba más erosionada. Por otra parte, entraba en juego no sólo una cuestión de prestigio, sino de profunda raíz económica: el control de las reservas petrolíferas y de la red de oleoductos en la región, cuya trascendencia geoeconómica y geoestratégica no escapaba a ningún observador. La propia situación interna de Rusia en sus primeros años como país independiente, con un grave deterioro de su sistema productivo y financiero y un aumento del descontento social, influyó en la decisión del Kremlin de intervenir directamente en Chechenia y recomponer así el maltrecho orgullo nacional ruso. En estas circunstancias, en diciembre de 1994, las fuerzas armadas de la Federación penetraron en territorio checheno rebosantes de un optimismo que los hechos pronto disiparon. Fueron muy difundidas las palabras del ministro de Defensa de Yeltsin Pável Grachov: «Grozni será tomada como mucho en dos horas por un grupo de paracaidistas».

Nada más lejos de la realidad. A medida que no se resolvía, el conflicto se fue haciendo más sangriento. El mundo entero conoció las imágenes de las destrucciones masivas practicadas sobre el terreno por el ejército ruso conforme pasaba el tiempo y se mostraba incapaz de hacerse con las riendas de la situación. Las intenciones del Gobierno ruso se volvieron contra él y revelaron en

toda su crudeza la debilidad de la presunta gran potencia heredera de la URSS[81]. Por si fuera poco todo lo anterior, la internacionalización del conflicto parecía inminente ante la llamada de los rebeldes chechenos a la solidaridad de todos los musulmanes con el fin de buscar ayuda en la lucha contra el opresor: el imperialismo ortodoxo ruso. Inevitable parecía, también, el contagio a previsibles movimientos secesionistas de otros territorios del Cáucaso norte.

La opinión pública rusa fue mostrando su rechazo a la guerra según avanzaban los meses y sus tropas no lograban una victoria definitiva. En agosto de 1996, tras la muerte de Dudáyev en abril a consecuencia de un bombardeo, las partes acordaron poner fin a las hostilidades y establecer un periodo de cinco años durante los cuales se recondujeran la situación en la república y las relaciones entre Moscú y Grozni con el fin de discutir un modelo de gobierno para Chechenia. Los rusos retirarían sus efectivos militares mientras los insurgentes se comprometían a abandonar las armas.

El espejismo de la Comunidad de Estados Independientes

El fin de la Unión Soviética cerraba un capítulo de la historia iniciado en 1945. Continuaban –y continuarían– existiendo estados comunistas, algunos notablemente poderosos, como China, pero el sistema de relaciones internacionales trabado sobre el juego de las dos superpotencias en el tablero mundial desaparecía sin remisión. A pesar de sus profundos problemas económicos, de asignación de recursos y de distribución, la URSS había sido hasta el final una gran potencia militar, una ingente máquina de producción industrial y agraria. Sin embargo, el gigantesco Estado, aglutinador de infinidad de instituciones que alcanzaban desde Riga hasta Novosibirsk, quedó vacío de contenido; sencillamente, se desplomó sin que nadie tratase de salvarlo. No hubo guerras intestinas que desangraran económica y demográficamente al país de los soviets, ni golpes de Estado violentos, ni un enfrentamiento bélico con otros países. El agotamiento del modelo, la inanidad de su discurso y la

imposibilidad de reformar el sistema hicieron por sí solos más que el despliegue armamentístico nuclear o la Iniciativa de Defensa Estratégica.

La desintegración súbita de la Unión Soviética oscureció otros procesos cuya trascendencia no fue valorada en sus justos términos. Para una potencia de tradición imperial como Rusia, y en unas circunstancias internas extraordinariamente delicadas, la retirada de su ejército de su zona de influencia en el este de Europa y en el mar Báltico terminaba entre 1994 y 1995 con su preeminencia secular en algunas de estas regiones. Este hecho obligaba a reformular toda su política exterior y de seguridad, además de que ofrecía al mundo una desoladora imagen de quien hasta hacía muy poco había rivalizado con Estados Unidos. En este aspecto resulta relevante considerar el hecho de que tras el final de la URSS Rusia adoptara la forma del Estado-nación por primera vez en su historia; de ahí la insistencia con que Boris Yeltsin hablaba de construir y fortalecer una nación propiamente rusa, al margen de un imperio cuya evolución había terminado por asfixiarla, como tantas veces recordó en aquellos primeros años noventa Alexander Solzhenitsyn[82]. El reencuentro del país con sus fronteras y el olvido cuando no la renuncia expresa a redefinir sus límites territoriales para incorporar regiones rusoparlantes supusieron un importante avance en el intento de estabilizar las regiones limítrofes.

Bajo la batuta del ministro Andrei Kozyrev, la política exterior rusa continuó al principio en la esfera del Nuevo Pensamiento. La mejora de las relaciones con Estados Unidos y Europa, ya iniciada con Gorbachov, resultó de trascendental importancia para un país necesitado de ayudas económicas e inversiones y en busca, además, de que su seguridad fuera garantizada por una suerte de alianza europea complementaria de la OTAN. La buena disposición del Kremlin a la unificación de Alemania, el peso económico adquirido por la nueva República Federal y su preponderancia en todo el ámbito centroeuropeo convirtieron a esta en un actor de suma relevancia en el fortalecimiento de los lazos entre Moscú y Bruselas[83]. Por otra parte, ante la previsible intensificación de la acción exterior estadounidense en Asia, y como forma de contener el

avance norteamericano, el equipo de Yeltsin valoró, en primer lugar, la posibilidad de estrechar las relaciones con China e India –países que visitaría en diciembre de 1992 y enero de 1993, respectivamente– y, en segundo, la conveniencia de mantener un buen entendimiento con el régimen iraní, retomando así la política de acercamiento a los países del golfo Pérsico.

La nueva realidad del espacio postsoviético era muy confusa e, indudablemente, demandaba una reordenación de la propia política exterior de Moscú ante los retos derivados directamente de la disolución de la URSS. Una de las primeras preocupaciones al respecto fue clarificar lo antes posible las relaciones con las antiguas repúblicas federadas, donde habitaban más de veinte millones de rusos y con las que los vínculos económicos, comerciales y militares hacían urgente un reajuste de la posición rusa para preservar cierta influencia. Además, la inestabilidad del Cáucaso y de algunas repúblicas de Asia central podía causar problemas al Kremlin en su afán de asegurar las fronteras. Brzezinski hablaba de un «pluralismo geopolítico» de la antigua Unión Soviética, lo cual presuponía que la Federación Rusa se hallaba rodeada de Estados de menor entidad en todos los aspectos, pero a los que ya no podía dominar ni económica ni militarmente. Un ejemplo característico era el caso de Ucrania, potencia nuclear, y de algunas repúblicas caucásicas y asiáticas que comenzaban a fortalecer sus relaciones con Estados Unidos hasta el punto de permitir a Washington que mantuviera una presencia militar en su territorio[84].

Así, con la desaparición de la URSS, los intentos de reflotar una unión de Estados en el antiguo espacio soviético encontraron escaso eco en las capitales de las nuevas repúblicas, que aceptaron participar en la Comunidad de Estados Independientes antes por motivos de dependencia económica que por voluntad propia[85]. La Carta de Fundación de la CEI data del 8 de diciembre de 1991, fecha de la reunión en Minsk de representantes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Pocos días después, el 21 del mismo mes, se sumaron en Almá-Atá Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. También lo hizo Moldavia, decisión que el Parlamento moldavo se negaría a ratificar. Asimismo, dos años

después, el 9 de diciembre de 1993, la república de Georgia ingresaba en la comunidad[86].

Los principales objetivos de la CEI eran mantener las privilegiadas relaciones económicas y comerciales entre estas repúblicas exsoviéticas sin por ello dejar de fomentar los vínculos con otros espacios económicos. Sus miembros pretendían, además, preservar infraestructuras comunes de las que no convenía prescindir para facilitar cuanto antes una salida viable a la crisis que en mayor o menor medida a todos afectaba. Sus postulados no preveían la existencia de procesos de integración económica o de decisiones supranacionales, intentando así evitar cualquier reminiscencia del pasado soviético; de ahí que se definiera como una entidad de «carácter consultivo y coordinador»[87]. La sede quedó establecida en Minsk, con una Asamblea interparlamentaria constituida por delegaciones de cada uno de los países y un ejecutivo interestatal.

Ya desde sus comienzos pudo comprobarse su falta de funcionalidad y el escaso alcance de las medidas adoptadas, muchas de las cuales no llegaron siquiera a cumplirse[88]. A las suspicacias de las capitales exsoviéticas se unía la falta de tacto de la diplomacia rusa, como revela su reacción ante la secesión de las repúblicas bálticas: a principios de enero de 1992 el ministro Kozyrev se había referido a todos los países recientemente independizados como «algo que probablemente podría denominarse "extranjero cercano"».

Sin instituciones propiamente supranacionales, durante los primeros años de su existencia la actividad de la CEI se redujo en la práctica a revitalizar los lazos multilaterales entre los distintos miembros. A partir de la Carta de la Comunidad de Estados Independientes, adoptada en la cumbre de Minsk del 22 de enero de 1993, nos hallaríamos ante una «organización intergubernamental de ámbito regional y de fines generales, caracterizada por la parcialidad, la asimetría y las geometrías variables»[89]: parcial, en el sentido de que no todos los Estados participantes asumían los acuerdos alcanzados; asimétrica, por la evidente posición hegemónica de la Federación Rusa y las profundas diferencias de todo tipo entre sus miembros; y de geometrías variables, dadas las

numerosas combinaciones posibles entre los instrumentos de cooperación interestatal, siempre bajo la mirada vigilante de Moscú.

Las reuniones de la organización en Asjabad (Turkmenistán), en diciembre de 1993, y Moscú, en abril de 1994, constituyeron un éxito de la diplomacia rusa al lograr que acudieran representantes de todas las antiguas repúblicas de la URSS (salvo las bálticas), ya que, como hemos visto, en la primera de ellas Georgia ingresó de forma efectiva en la Comunidad, convirtiéndose así en el duodécimo Estado integrado. Aunque por aquellas mismas fechas –concretamente, en febrero de 1994– Kozyrev expuso como una de las prioridades de su Ministerio potenciar los mecanismos de integración dentro de la CEI, lo cierto es que el recelo continuó presente en la actitud con la que las capitales del espacio exsoviético recibían cualquier propuesta del Kremlin[90]. Junto a ello, el fracaso del establecimiento de un nuevo rublo para el espacio CEI, la incapacidad para solucionar conflictos heredados en Chechenia y –como veremos en el siguiente capítulo– Transnistria y, por último, la dependencia energética de Rusia de muchos de los socios oscurecieron el empeño de profundizar en la integración[91]; sin olvidar que, por si esto no fuera suficiente, la política de seguridad rusa entendía las antiguas fronteras de la URSS como propias, a modo de cinturón de protección de su extenso territorio (de hecho, la teórica defensa colectiva de los límites de la CEI recaía en buena medida sobre la Federación Rusa). Para el Kremlin resultaba de vital interés, por un lado, contribuir a la estabilidad interna de estos países para evitar posibles contagios en el interior de sus fronteras y defender los derechos de sus amplias minorías en algunas de estas repúblicas y, por otro, preservar su hegemonía frente al surgimiento de potencias regionales como Turquía, India y China. Ello explica que el Concepto de Política Exterior Rusa de 1993 hiciera hincapié en los factores geopolíticos y considerase todos aquellos territorios ahora emancipados como una zona de interés prioritario.

En definitiva, la voluntad de integración y colaboración entre las antiguas repúblicas soviéticas se vio superada por las políticas fuertemente nacionalistas de estos Estados sucesores que, en un intento de justificar su existencia y afirmar su identidad,

mantuvieron una posición ambigua frente a Moscú, cuya asistencia económica y energética todavía necesitaban.

[1] M. Azcárate, «*Perestroika* y Socialismo», *Sistema* 93 (1989), pp. 7-8.

[2] Para una aproximación general realizada por importantes especialistas en esta materia, véanse los trabajos recopilados por A. Brown (dir.), *New Thinking in Soviet Politics,* Londres, Macmillan, 1992.

[3] Mucho más cauteloso fue Gorbachov en Defensa: dos años tardó en nombrar a Dimitri Yazov, hombre de su entera confianza, aprovechando así la deteriorada imagen del Ministerio después del famoso aterrizaje en la Plaza Roja de Moscú del joven piloto alemán Mathias Rust, que sin aparente dificultad había logrado salvar desde su avioneta Cessna 172-B todos los controles aéreos soviéticos.

[4] E. Shevardnadze, *El futuro pertenece a la libertad,* Barcelona, Ediciones B, 1991, pp. 75-76.

[5] R. Fritsch-Bournazel, «L'ostpolitik et l'effet Gorbatchev», *Politique Internationale* 37 (otoño de 1987), pp. 201-215.

[6] M. Gorbachov, *Memoria de los años decisivos (1985-1992),* Madrid, Acento Editorial, 1993, p. 24.

[7] G. Holden, *Soviet Military Reform,* Londres, Pluto, 1991, p. 105.

[8] Ph. D. Stewart y M. G. Hermann, «The Soviet Debate over "New Thinking", and the Restructuring of United States-Soviet Relations», en G. E. Hudson (ed.), *Soviet National Security Policy under Perestroika,* Boston, Unwin Hyman, 1989, pp. 47-69.

[9] M. Gorbachov, *Perestroika. Mi mensaje a Rusia y al mundo entero,* Barcelona, Ediciones B, 1990, p. 130.

[10] «Pero ahora, con la aparición de un armamento masivo, capaz de provocar una destrucción universal, existe un límite objetivo para la confrontación de clases en la arena internacional […]. Por primera vez, surge un interés humano, común, real, no especulativo, y remoto para salvar a la humanidad del desastre». *Ibidem*, p. 135.

[11] Cit. en S. Kull, *Burying Lenin. The Revolution in Soviet Ideology and Foreign Policy,* Boulder (Colorado), Westview Press, 1992, p. 29.

[12] «En concreto, Gorbachov ha dicho que la ideología debe suprimirse por completo de las relaciones interestatales y que, por consiguiente, las prioridades de la política exterior soviética deben reorganizarse. Esto implica que se debe abandonar la idea de que el conflicto Este-Oeste es el elemento principal, y la noción de que la política mundial está dominada por una hostilidad fundamental e irreconciliable entre estados procapitalistas y procomunistas. En esencia, Gorbachov defiende que el modelo de conflicto en la política mundial puede haber sido adecuado en el pasado, pero ya no sirve para los intereses nacionales de la Unión Soviética», en S. Woodby, *Gorbachev and the Decline of Ideology in Soviet Foreign Policy,* Boulder (Colorado), Westview Press, 1989, p. 3.

[13] M. MccGwire, *Perestroika and Soviet National Security,* Londres, The Brookings Institution, 1991, p. 356.

[14] M. Gorbachov, *Perestroika. Mi mensaje a Rusia y al mundo entero,* cit., p. 145.

[15] C. Taibo, *Unión Soviética. La quiebra de un modelo,* Madrid, Los Libros de la Catarata, 1991, p. 110.

[16] F. J. Peñas, «La URSS, la gestación de la crisis del golfo Pérsico y el orden mundial», *Cuadernos del Este* 2 (1991), pp. 83-92.

[17] Véanse, por ejemplo, sus discursos del 25 de abril de 1990, sobre su reciente visita a Checoslovaquia; del 10 de octubre de 1990, sobre Oriente Próximo; del 28 de abril de 1993, sobre Albania; o la homilía de la misa celebrada en el Vaticano el 23 de enero de 1994 por la paz en los Balcanes. Juan Pablo II, *Vi racconto la mia vita,* Ciudad del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2009, pp. 157, 159, 168 y 172-173, respectivamente.

[18] A tenor de las repercusiones causadas por los viajes de Su Santidad, el Gobierno cubano fue mucho más consciente que otros de la amenaza que la visita del papa podía suponer para la estabilidad de su régimen, por lo que decidió anular la que estaba prevista para 1990. Tendrían que pasar ocho años para que, en un contexto internacional muy diferente, Juan Pablo II pudiera realizar su viaje pastoral por la isla.

[19] J. Garrard y C. Garrard, *Russian Orthodoxy Resurgent*. *Faith and Power in the New Russia,* Princeton, Princeton University Press, 2008, pp. 36-70.

[20] Tres años más tarde aparecía *Centesimus annus*, reflexión sobre el conocimiento como base del desarrollo y de la riqueza con la perspectiva de un nuevo sistema económico distinto del capitalismo heredado de la Revolución Industrial.

[21] Véase A. Tiraspolsky y G. Mink, «La maison commune européenne», número monográfico, *Le Courrier des Pays de l'Est* 349 (1989).

[22] Cit. en R. Reeves, *President Reagan: the Triumph of Imagination,* Nueva York, Simon & Schuster, 2005, p. 341.

[23] Cit. en E. Morris, *Dutch: a Memoir of Ronald Reagan,* Nueva York, Random House, 1999, p. 599.

[24] Sobre las distintas respuestas de la comunidad internacional a la Iniciativa, véase J. Ayuso Canals, *La América que deja Reagan,* Madrid, Espasa-Calpe, 1988.

[25] Véase D. Z. Robinson, *The Strategic Defense Initiative: its Effects on the Economy and Arms Control,* Nueva York, New York University Press, 1987. El anuncio, el 23 de marzo de 1983, de la Iniciativa de Defensa Estratégica redujo la efectividad del acuerdo antimisiles balísticos firmado en 1972. J. Voas, *Soviet Attitudes towards Ballistic Missile Defence and the ABM Treaty,* Oxford (Reino Unido), Brassey's for the International Institute for Strategic Studies, 1990, p. 68.

[26] D. N. Nelson, «The Costs of Demilitarization in the USSR and Eastern Europe», *Survival* 4 (julio-agosto de 1991), pp. 312-326.

[27] M. MccGwire, *Perestroika and Soviet National Security,* cit., pp. 281-291.

[28] Z. A. B. Zeman, *The Making and Breaking of Communist Europe,* Oxford (Reino Unido), Basil Blackwell, 1991, p. 314. La interpretación de Zeman ha sido corroborada en numerosos análisis posteriores. Véase, por ejemplo, M. Cox, «The End of the Cold War and Why We Failed to Predict It», en A. Hunter (ed.), *Rethinking the Cold War,* Filadelfia, Temple University Press, 1998, pp. 157-174.

[29] Z. A. B. Zeman, *The Making and Breaking of Communist Europe,* cit., pp. 312 y 319.

[30] Ch. D. Jones, «Protection from One's Friend: the Disintegration of the Warsaw Pact», en D. Leebaert y T. Dickinson (dirs.), *Soviet Strategy and New Military Thinking,* Cambridge, Cambridge University Press, 1992, pp. 100-126.

[31] J. O'Sullivan, *El Presidente, el Papa y la Primera Ministra. Un trío que cambió el mundo,* Madrid, Gota a Gota, 2006, p. 467.

[32] C. Alonso Zaldívar, *Variaciones sobre un mundo en cambio,* Madrid, Alianza, 1996, p. 66.

[33] Sobre la función del Pacto de Varsovia como mecanismo de dominio soviético en el este de Europa hasta poco antes de la llegada de Gorbachov, véase Ch. D. Jones, *Soviet Influence in Eastern Europe: Political Autonomy and the Warsaw Pact,* Nueva York, Praeger, 1981.

[34] En junio de 1990 Shevardnadze declararía que el Pacto de Varsovia no tenía vocación de perpetuarse en el tiempo; se podría mantener como una suerte de agrupación política si era capaz de atender las necesidades definidas por sus propios miembros. T. Malleret y M. Delaporte, *L'Armée rouge face à la Perestroika,* Bruselas, Éditions Complexe, 1991, p. 276.

[35] M. A. Caracuel Raya, *Los cambios de la OTAN tras el fin de la Guerra Fría,* Madrid, Tecnos, 2004, p. 55.

[36] Ch. Zorgbibe, *Histoire de l'OTAN,* Bruselas, Éditions Complexe, 2002, pp. 183-196.

[37] R. S. Jordan, «NATO's Structural Changes for the 1990s», en S. V. Papacosma y M. A. Heiss (eds.), *NATO in the Post Cold War Era: Does it Have a Future?,* Nueva York, St. Martin's Press, 1995, pp. 41-70.

[38] Cit. en M. A. Caracuel Raya, *Los cambios de la OTAN tras el fin de la Guerra Fría,* cit., p. 57.

[39] A. A. Michta, *East Central Europe after the Warsaw Pact. Security Dilemmas in the 1990s,* Nueva York, Greenwood Press, 1992, p. 69.

[40] R. Krooth y B. Vladimirovitz, *Quest for Freedom. The Transformation of Eastern Europe in the 1990s,* Jefferson (Carolina del Norte), McFarland & Comp. Inc., 1993, p. 47.

[41] Rachel Walker ha descrito muy bien la situación originada en los últimos años del régimen soviético. El Partido mantenía el control sobre una parte importante de los recursos del país, pero carecía de legitimidad ante la población: había perdido su cohesión interna y la eficacia en su funcionamiento. Los nuevos soviets elegidos democráticamente tenían la legitimidad, pero adolecían de coordinación insuficiente en sus pautas de actuación y, desde luego, ejercían muy poco control sobre los recursos. Tampoco podían, pues, resultar eficaces. Mientras tanto, la Presidencia Ejecutiva, a pesar de su denominación, no tenía un poder ejecutivo *efectivo;* en realidad, estaba vacía de autoridad. En definitiva, el nuevo sistema político, particularmente el sustentado por las instituciones salidas de las reformas, no era tal *sistema,* sino una «guerra de guerrillas» entre los múltiples poderes emergentes que no hizo sino viciar y confundir aún más la situación. *Six Years that Shook the World. Perestroika, the Impossible Project,* Mánchester, Manchester University Press, 1993, p. 159.

[42] Véase J.-F. Revel, *El renacimiento democrático,* Barcelona, Plaza & Janés-Cambio 16, 1992, pp. 222-224.

[43] Sin duda, la asignación de recursos había sido muy deficiente a lo largo de la historia soviética posterior a 1945; la obsesión industrializadora y su atención preferente a la producción pesada generaron un gran crecimiento económico en muy pocos años, pero hipotecaron el futuro. Desde mediados de los años cincuenta, los intentos de reformar la estructura colectivista no prosperaron, y la excesiva centralización en la toma de decisiones y el desorden introducido por la proliferación de la burocracia malgastaron ingentes recursos. Los problemas derivados del artificial sistema de precios nunca consiguieron subsanarse y, en última instancia, la falta de mercado y de incentivos reales a los trabajadores y a los directivos de unas empresas sin competencia resultó letal para la economía.

[44] Como se puede percibir fácilmente, dicho programa encerraba una flagrante antinomia, ya que, como ha señalado el profesor Rojo, «nadie sabe qué es la "economía de mercado planificada" […]». «La URSS, sin plan y sin mercado», en L. Á. Rojo, J. A. Sánchez Asiaín y A. Mas-Colell, *Reforma económica y crisis en la URSS,* Madrid, Espasa-Calpe, 1991, p. 49.

[45] K. Jowitt, *New World Disorder. The Leninist Extinction,* Berkeley, University of California Press, 1992, p. 247.

[46] Ante la presión de los elementos más ortodoxos del sistema, Gorbachov, ya con escaso apoyo dentro de sus propias filas, se vio obligado a sacrificar políticamente a Shatalin –y, con él, su proyecto de cambio en la economía–. Un extracto del Plan de los 500 Días se encuentra en S. Shatalin *et al.*, «El hombre. La libertad. El mercado», *Komsomólskaia pravda,* 5 de septiembre de 1990, que puede consultarse en J. P. Duch y C. Tello (comps.), *La polémica en la URSS. La perestroika seis años después,* México, Fondo de Cultura Económica, 1995, pp. 95-103.

[47] Como sabemos en la actualidad, pronto desmentiría este parecer la evolución de la República Popular China.

[48] J. S. Berliner, «Strategies for Privatization in the USSR», en M. Keren y G. Ofer (eds.), *Trials of Transition. Economic Reform in the Former Communist Bloc,* Boulder (Colorado), Westview Press, 1992, pp. 215-237.

[49] «La descomposición de los mecanismos estatales no ha sido sustituida por el predominio de nuevos mecanismos de carácter económico […]. En consecuencia, de manera paulatina, las principales variables han ido escapando al control estatal y el proceso económico ha ido paralizándose». E. Palazuelos, *La economía soviética más allá de la Perestroika,* Madrid, Ediciones Ciencias Sociales, 1990, p. 223.

[50] Cit. en J. Velarde, «Introducción», en L. Á. Rojo, J. A. Sánchez Asiaín y A. Mas-Colell, *Reforma económica y crisis en la URSS,* cit., p. 31. Para Shatalin y su equipo las «Orientaciones básicas» «no constituyen un plan práctico de reformas, sino un esquema general de tal plan», S. Shatalin *et al.,* «¿Por qué ya no es posible realizar el "programa de los 500 días"», *Komsomólskaia pravda,* 4 de noviembre de 1990, que puede consultarse en J. P. Duch y C. Tello (comps.), *La polémica en la URSS. La perestroika seis años después,* cit., p. 107.

[51] O. T. Bogomolov, «The Collapse of the Communist Empire: an Avenue to European Civilization», en M. Keren y G. Ofer (eds.), *Trials of Transition. Economic Reform in the*

Former Communist Bloc, cit., p. 29.

[52] G. Khanin, «The Soviet Economy from Crisis to Catastrophe», en A. Aslund (ed.), *The Post-Soviet Economy. Soviet and Western Perspectives,* Londres, Pinter, 1992, pp. 9-24.

[53] M. Ellman y V. Kontorovich, *The Disintegration of the Soviet Economic System,* Londres, Routledge, 1992, p. 67.

[54] M. Lavigne, «Perspectivas sobre el futuro de la reforma económica en la antigua Unión Soviética», *Cuadernos del Este* 7 (1992), p. 91.

[55] Ofrece un estudio general muy ponderado A. Cucó, *El despertar de las naciones. La ruptura de la Unión Soviética y la cuestión nacional,* Valencia, Publicaciones de la Universidad de Valencia, 1999.

[56] Sobre esta crisis y sobre la «libanización» del Cáucaso, véase H. Carrère d'Encausse, *El triunfo de las nacionalidades. El fin del imperio soviético,* Madrid, Rialp, 1991, pp. 80-110.

[57] Respecto a los movimientos nacionalistas en Asia central durante la era de Gorbachov, véanse A. Kamilov, «Internal Conflicts in Soviet Central Asia: Causes and Consequences» y T. Saidbaev, «Inter-Ethnic Conflicts in Central Asia: Social and Religious Perspectives», en K. Rupesinghe, P. King y O. Vorkunova (eds.), *Ethnicity and Conflict in a Post-Communist World. The Soviet Union, Eastern Europe and China,* Londres-Nueva York, St. Martin's Press, 1992, pp. 141-150 y 164-180, respectivamente.

[58] Respecto a los procesos de independencia en los países bálticos, véanse A. Lieven, *The Baltic Revolution: Estonia, Latvia, Lithuania and the Path to Independence,* New Haven, Yale University Press, 1994 y R. Martín de la Guardia y G. Á. Pérez Sánchez, *La Europa báltica. De repúblicas soviéticas a la integración en la Unión Europea (1991-2004),* Madrid, Síntesis, 2010.

[59] Sobre el Tratado de la Unión, véase J. Miller, *Mikhail Gorbachev and the End of Soviet Power,* Londres-Nueva York, St. Martin's Press, 1993, pp. 183-200.

[60] E. Nolte, *Después del comunismo. Aportaciones a la interpretación de la historia del siglo xx,* Barcelona, Ariel, 1995, p. 35.

[61] Para un seguimiento pormenorizado de los acontecimientos, véanse R. Poch de Feliu, *Tres días de agosto. Golpe y revolución en la URSS,* Barcelona, La Vanguardia, 1991 y M. Sixsmith, *Moscow Coup. The Death of the Soviet System,* Londres, Simon & Schuster, 1991. También resultan muy ilustrativos los recuerdos del propio secretario general en M. Gorbachov, *El golpe de agosto. La verdad y sus consecuencias,* Barcelona, Ediciones B, 1991.

[62] Cit. en R. V. Daniels, *The End of the Communist Revolution,* Londres, Routledge, 1993, p. 53.

[63] A. Brown, *Seven Years that Changed the World. Perestroika in Perspective,* Oxford, Oxford University Press, 2007, pp. 227-330.

[64] F. Furet, *El pasado de una ilusión. Ensayo sobre la idea comunista en el siglo xx,* México, Fondo de Cultura Económica, 1995, p. 10.

[65] Para una crítica sobre los claroscuros de la vida política de Yeltsin desde su primera militancia en el PCUS hasta la ruptura con el Partido tras el intento de golpe de Estado de agosto de 1991, véase J. Morrison, *Boris Yeltsin: from Bolshevik to Democrat,* Nueva York,

Penguin Books, 1992. Su edulcorado recuerdo de la época comunista queda recogido en B. Yeltsin, *El líder de la nueva URSS. Memorias,* Madrid, Ediciones Temas de Hoy, 1990.

[66] S. White, «The Election to the USSR Congress of People's Deputies March 1989», *Electoral Studies* 9, 1 (1990), pp. 59-66.

[67] T. Judt, *Postguerra. Una historia de Europa desde 1945,* Madrid, Taurus, 2006, p. 935.

[68] Resulta muy esclarecedora la comparación entre Gorbachov y Yeltsin ofrecida por G. W. Breslauer en «Evaluating Gorbachev and Yeltsin as Leaders», en A. Brown y L. Shevtsova (eds.), *Gorbachev, Yeltsin and Putin: Political Leadership in Russia's Transition,* Washington D. C., Carnegie Endowment for International Peace, 2001, pp. 45-66.

[69] A. Garrido Rubia, «Diseño constitucional y democracia», en C. Flores Juberías (ed.), *Estudios sobre la Europa Oriental,* Valencia, Publicaciones de la Universidad de Valencia, 2002, p. 203.

[70] Véanse J. de Andrés Sanz, «La disolución del Parlamento en septiembre de 1993, ¿un autogolpe en la transición rusa?», *Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol* 41/42 (otoño de 2002-invierno de 2003), pp. 7-23 y M. Galeotti, *The Age of Anxiety. Security and Politics in Soviet and Post-Soviet Russia,* Nueva York, Longman, 1995, pp. 163-172.

[71] N. Petrov, «Partidos políticos y perspectivas de la democracia», *Vanguardia Dossier. 9. Rusia. Democracia y autocracia* (2004), p. 32.

[72] J. de Andrés Sanz, «Partidos, sistema de partidos y cultura política en la nueva Federación Rusa», *Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol* 26/27 (invierno-primavera de 1999), p. 43.

[73] Sobre los graves problemas del año 1993, véase O. Rumiantsev, «Reforma constitucional en la Federación Rusa», *Economía Exterior* VII, 33 (1993), pp. 85-98.

[74] Sobre la recuperación del nacionalismo ruso y su influencia transversal en todos los partidos políticos, véase L. T. Zapater Espí, *El nacionalismo ruso. La respuesta euroasiática a la globalización,* Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, 2005, pp. 133-303.

[75] M. O. Montes, *La transición postcomunista en la Federación Rusa,* Córdoba (Argentina), Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Córdoba, 2007, p. 52.

[76] W. Andreff, «El capitalismo ruso», *Vanguardia Dossier. 9. Rusia. Democracia y autocracia,* cit., pp. 39-40.

[77] Y. Afanasiev, «Russian Reform is Dead: Back to Central Planning», *Foreign Affairs* 73, 2 (marzo-abril de 1994), pp. 21-26.

[78] Para una visión general pero aquilatada de este conflicto secular, véase R. Seely, *Russo-Chechen Conflict, 1800-2000: a Deadly Embrace,* Londres, Frank Cass, 2001.

[79] Una primera aproximación en español a la situación de Chechenia en aquellos momentos, véase C. Taibo, «El conflicto de Chechenia: una guía de urgencia», *Cuadernos Bakeaz* n.º 7 (febrero de 1995). Para profundizar en el tema, véase R. González Martín y R. Martín de la Guardia, Chechenia, el infierno caucásico. Historia de un conflicto inacabado, Alzira (Valencia), Edicions La Xara, 2012.

[80] C. Taibo, «El conflicto de Chechenia», *Ayer. Revista de Historia Contemporánea* 65, 1 (2007), p. 132.

[81] Véase V. Bennett, *Crying Wolf. The Return of War to Chechnya,* Londres, Macmillan, 1999, así como las reflexiones de A. Lieven, *Chechnya. Tombstone of Russian Power,* New Haven, Yale University Press, 1999.

[82] A. Solzhenitsyn, *El «problema ruso» al final del siglo xx,* Barcelona, Tusquets, 1995.

[83] Como recordaba Rafael Dezcallar, «el propio Yeltsin, tan criticado en ocasiones, no ha traducido sus ocasionales excesos formales por otros excesos más peligrosos, sino que ha mantenido una actitud en general prudente y cooperativa en política exterior». «La Rusia ex soviética», *Política Exterior* XIII, 70 (julio-agosto de 1999), p. 116.

[84] Véase Z. Brzezinski, *Out of Control,* Nueva York, Scribner's Sons, 1993.

[85] L. Holmes, «Russia's Relations with the Former External Empire», en A. Saikal y W. Maley (dirs.), *Russia in Search of its Future,* Cambridge (Reino Unido), Cambridge University Press, 1995, pp. 123-141.

[86] Sobre la CEI, véanse F. Valdés y O. Tarasov, «La Comunidad de Estados Independientes: génesis y perspectivas», *Política Exterior* VII, 33 (1993), pp. 25-46 y R. Walker, *Six Years that Shook the World. Perestroika, the Impossible Project,* cit., pp. 289-307.

[87] C. R. Aguilera de Prat, *La crisis del estado socialista. China y la Unión Soviética durante los años ochenta,* Barcelona, PPU, 1994, p. 234.

[88] La escasa trascendencia de la Comunidad de Estados Independientes, desde una perspectiva de finales de los años noventa, queda recogida en C. R. Aguilera de Prat, «Rusia y la CEI, ¿relaciones de política exterior o interior?», *Revista CIDOB d'Afers Internacionals* 42 (1998), pp. 7-20.

[89] A. Blanc Altemir, *La herencia soviética. La Comunidad de Estados Independientes y los problemas sucesorios,* Madrid, Tecnos, 2004, p. 59.

[90] Sobre la configuración de la CEI y sus problemas iniciales, véase *ibidem,* pp. 26-57.

[91] R. Sakwa y M. Webber, «The Commonwealth of Independent States: Stagnation and Survival, 1991-1998», *Europe-Asia Studies* 51, 3 (1999), pp. 393-396. Por ejemplo, la Federación Rusa suministraba el 89 por 100 del petróleo y el 56 por 100 del gas natural consumidos en Ucrania; el 91 y el 100 por 100, en Bielorrusia y el 82 y el 77 por 100, en Georgia, respectivamente. C. Taibo, *La Rusia de Yeltsin,* Madrid, Síntesis, 1995, p. 226.

III. Crisis y transición en la Europa del Este

El principio del fin de la Europa sovietizada

La sensación de perplejidad ante los sucesos que estaban ocurriendo en la Unión Soviética y los países del este de Europa en la segunda mitad de los años ochenta fue general entre los ciudadanos de las democracias occidentales por poco interesados o informados que estuvieran sobre la política de más allá del Telón de Acero. En 1989 la perplejidad dio paso a la sorpresa y con ella llegó un sentimiento de que en aquellos momentos se vivían acontecimientos verdaderamente históricos[1]. Ciertamente, la caída del muro de Berlín, el hundimiento de las dictaduras comunistas en el Viejo Continente y, finalmente, la desintegración de la Unión Soviética fueron hechos que conmovieron el mundo.

Las «Revoluciones Gloriosas» de 1989, fórmula acuñada con éxito por Ágnes Heller y Ferenc Fehér, hicieron concebir grandes esperanzas de cambio a sociedades enteras que llevaban décadas sometidas a regímenes tiránicos. A la pregunta «¿Qué salió mal?», un conspicuo opositor de la RDA, Kurt Masur, respondió al periodista: «Nunca lo sabremos. Todo era viejo, todo estaba paralizado, petrificado, y nada puede funcionar sin libertad, que es lo que quería la gente. Libertad antes que bienestar, si bien la libertad aporta bienestar»[2]. Sin embargo, una vez pasados el súbito estallido de júbilo y las emociones multitudinarias desatadas para celebrar el final de una era, había que pensar en el futuro inmediato, en cómo abordar políticamente los tiempos nuevos; tiempos, indudablemente, de transiciones. Pocos años después François Fejtö describía con agudeza el ambiente de incertidumbre reinante en los primeros momentos: «Nadie conocía el método establecido para llegar allí: como máximo, la celebración de elecciones libres, la proclamación de la libertad de empresa y la convertibilidad de la moneda serían suficientes para poner a la sociedad en el buen camino. El resto vendría por añadidura»[3].

Sin duda alguna, los parámetros políticos y económicos occidentales (democracia liberal, economía de mercado, reconocimiento y defensa de los derechos humanos) fueron rápidamente proclamados por quienes se hicieron con el poder en Varsovia, Praga o Sofía, pero, claro está, el resto no vino por añadidura. Una «revolución económica y social»[4] tan drástica como la que iba a acabar con el socialismo real en Europa no podía conducir sin más a una serie de transformaciones estructurales fáciles y ordenadas. El profundo deterioro de la economía, la desintegración del tejido social y la ineficacia de los aparatos estatales heredados de la hegemonía de los partidos comunistas constituían obstáculos casi insalvables para proceder a un cambio sin traumas. Si nos fijamos en el mundo occidental en su conjunto, la premura y el atropellamiento de los sucesos hicieron de la improvisación la respuesta más generalizada ante «la gran transformación» del Este europeo[5].

Ello no obstante, lo que sí parecía compartido por todos era la voluntad de alcanzar el final del proceso recorriendo el camino en sentido contrario al que hasta entonces se había llevado. La creación de sistemas de organización política democrática y de economía de mercado constituyó el programa básico de los partidos y agentes sociales que en los primeros años noventa comenzaron a desarrollar los gobiernos para llevar a cabo las transformaciones necesarias y desmantelar así los antiguos aparatos de poder. Los cambios institucionales, las leyes privatizadoras, la desarticulación de las fuerzas represivas –denominadas eufemísticamente «de seguridad del Estado»–, en resumen, todo el cúmulo de medidas cuyo fin era adecuar política, económica y socialmente las anquilosadas estructuras comunistas a las formas de organización occidentales, pretendían normalizar la vida pública de los países del Este para integrarlos en la Europa unida, de tal modo que no cabe entender los procesos de transición de esta área geográfica, por complejos y diferentes que sean, si no es dentro del consenso generalizado de las fuerzas políticas y sociales para «retornar a Europa», entendido este regreso como participación plena en la Unión Europea. Así, transición y europeización fueron indisolublemente unidas porque,

como escribió Roman Szporluk en aquel momento, «unirse a Europa es la clave que sintetiza la totalidad de aspiraciones de la Europa poscomunista»[6].

Las poblaciones de los países antes satelizados por la URSS se cuidaron mucho de admitir fórmulas mixtas o programas fundamentados en «terceras vías» de resultados insospechados por imposibles de contrastar. Se intentó reducir la incertidumbre cuanto fuera posible; a pesar de la precaria situación de partida y de las graves repercusiones sociales (cierre de fábricas, índices elevados de desempleo, inflación), los Gobiernos optaron por desarrollar vías rápidas de acceso a la economía de mercado y por reducir progresivamente el hasta entonces hipertrofiado aparato estatal. Salvo organizaciones extremistas, siempre minoritarias, nadie puso en duda la necesidad de acometer reformas estructurales drásticas para transformar el sistema financiero, educativo o agrario asumiendo, incluso, los tremendos costes sociales derivados. Conviene destacar que la actitud de la mayoría de la población refrendó el camino iniciado en la transición como el único posible –pese a las penalidades– al continuar otorgando en las urnas su confianza a los partidos mayoritarios, los cuales no ponían en entredicho el objetivo último y sólo albergaban discrepancias respecto a las estrategias que debían desarrollarse y a los plazos en que estas deberían cumplirse para alcanzar el fin deseado por todos: la democratización efectiva de las instituciones, el buen funcionamiento de la economía de mercado y la adhesión a la Unión Europea. De esta forma las sociedades civiles del Este contribuyeron en la transición a forjar la legitimidad de sus respectivos Estados en cuanto adoptaron un «conjunto de actitudes positivas hacia el sistema político considerado como merecedor de apoyo»[7].

Sin embargo, como bien conocemos por la historia de Hungría, Checoslovaquia, Polonia o los países balcánicos, la tradición democrática de aquellas naciones era escasa, ya fuera por haber estado sometidas durante largos periodos de tiempo a poderes foráneos cuyas instituciones estatales tampoco eran democráticas (pensemos en el Imperio otomano), ya fuera por su propia evolución interna, netamente estatalista, donde los Gobiernos gozaban de

vastas competencias que seguían ampliando arbitrariamente. Por este motivo, la división clásica de poderes, el parlamentarismo y la primacía de la autoridad civil ya estaban insuficientemente desarrolladas antes de establecerse las dictaduras comunistas o, sencillamente, sólo existían en la retórica.

Por otra parte, el adoctrinamiento sistemático en los principios del socialismo real, cuyo objetivo era crear un *homo sovieticus* –un hombre nuevo incontaminado, desde su nacimiento hasta la muerte, por los pseudovalores burgueses, decadentes, propios del mundo occidental– fracasó de manera estrepitosa. Las nuevas generaciones nacidas en años durante los cuales ya funcionaba el sistema totalitario comunista no respondieron a las expectativas generadas; por el contrario, se convirtieron con el paso del tiempo en uno de los catalizadores principales de las revoluciones de 1989. Ni el control omnímodo de los ámbitos culturales ni el sistema educativo sirvieron para eliminar las conciencias críticas; de hecho, en los primeros atisbos de cambio, después de la llegada de Gorbachov a la Secretaría General del PCUS, pudo comprobarse cómo todavía seguían siendo válidos los argumentos esgrimidos desde tiempo atrás por uno de los mejores conocedores de las «culturas políticas» de los países comunistas, el profesor oxoniense Archie Brown, para quien los efectos de la socialización eran mucho menos acusados de lo que se pensaba[8].

Sin duda alguna, la efervescencia de movimientos contestatarios aparecidos a lo largo de 1989 en todos estos países y ampliamente difundidos por los medios de comunicación en Occidente podría cegarnos respecto a su fuerza y efectividad; por el contrario, si reflexionamos sobre la cronología de los acontecimientos podemos concluir que la crisis del sistema comunista no fue provocada por la irrupción de la sociedad civil, sino que esta sólo cobró importancia al empezar a descomponerse un sistema cuyos fundamentos económicos estaban profundamente erosionados y que se mostraba incapaz de reaccionar ante los cambios que acontecían en el panorama internacional. Antes del momento en que cayeron los regímenes comunistas –exceptuando el caso de Polonia–, el único movimiento verdaderamente contestatario estaba constituido por la

disidencia, un término bastante escurridizo que comprendía, sobre todo, a intelectuales que por lo general no compartían las inquietudes del ciudadano medio; muchos de sus miembros, incluso, continuaban afirmando su fe izquierdista para proponer una reforma que en ningún caso suponía una alternativa liberal y capitalista.

También se ha hablado mucho de la importancia de la Iglesia como institución crítica con el poder establecido y refugio para los grupos contestatarios. Una vez más, el caso polaco es particular si consideramos que allí la Iglesia católica ha sido secularmente el punto de apoyo de la sociedad a lo largo de su traumática historia, y no únicamente durante las décadas de dominación comunista. En efecto, desde los primeros años la Iglesia no sólo alentó, sino que también acogió y defendió el movimiento Solidaridad en su lucha contra el Partido Obrero Unificado Polaco, asumiendo así una función política en el proceso de recuperación de las libertades, una función que pronto supieron reconocer y valorar los polacos, católicos en su mayoría.

En el resto de países, pues, la reacción de las instituciones eclesiásticas en contra de los Gobiernos comunistas llegó mucho más tarde y vino a coincidir con la descomposición final del sistema; así sucedió, por ejemplo, en la República Democrática de Alemania. En los casos de Rumanía y Bulgaria, los más flagrantes, las autoridades ortodoxas apenas habían cuestionado las dictaduras; de hecho, en numerosas ocasiones habían llegado incluso a mostrar connivencia con ellas. Tampoco la Iglesia católica húngara, de gran peso en el país, se había caracterizado por criticar los abusos del poder, exceptuadas algunas de sus personalidades.

La debilidad de la disidencia y, en general, de los movimientos contestatarios coadyuvó a que durante los procesos de transición a la democracia la sociedad civil se mostrase endeble y desarticulada. Las pruebas son muchas y muy evidentes: valgan, por citar sólo algunas, la escasa entidad de los partidos políticos recién creados, a menudo abocados a someterse a la influencia de algunos dirigentes fuertes, muchos de ellos provenientes de los antiguos partidos comunistas hegemónicos; la inoperancia de las organizaciones sindicales, en parte rechazadas por la sociedad por haber servido de

correas de transmisión de los intereses de la cúpula del Partido, sordas a las necesidades de los trabajadores; las enormes dificultades para construir un tejido empresarial digno de tal nombre, causantes de prácticas corruptas en la privatización de los bienes públicos y, finalmente, el ínfimo papel desempeñado por las organizaciones no gubernamentales y otras de representación intermedia de la población.

A grandes rasgos, todos los procesos de transición y consolidación democrática en la zona fueron similares. Las primeras elecciones trajeron consigo la entrada en los nuevos Parlamentos de formaciones políticas muy variadas y en general con poca o ninguna experiencia, lo cual se tradujo en un cierto desorden que, sin embargo, sirvió para clarificar las identidades, los programas y las relaciones entre los recién organizados partidos. Las fuerzas democratizadoras aunaron esfuerzos para luchar contra el régimen comunista y, una vez derrotado este e iniciado el cambio, las diferencias entre las distintas opciones políticas rompieron el consenso previo para dar lugar a la formación de partidos o coaliciones que compitieran entre sí en elecciones libres.

Los partidos comunistas hegemónicos renunciaron al privilegio constitucional que les reservaba el papel dirigente en la sociedad, una cláusula cuyo sentido último era dejar en sus manos el monopolio del ejercicio del poder. En Hungría, ese paso fundamental hacia el reconocimiento del pluripartidismo se dio el 6 de octubre de 1989; en Checoslovaquia, el 29 de noviembre; en la República Democrática de Alemania, el 1 de diciembre; en Bulgaria tuvo lugar el 15 de junio de 1990 y en Polonia, dos semanas después, el día 29. El hecho de que, bien después de negociar con la oposición mediante la fórmula de mesas redondas (como en Hungría, Polonia y, un poco más tarde, Bulgaria), bien después de abandonar el poder (casos de la RDA y Checoslovaquia), los partidos únicos renunciaran a su posición de privilegio sin que mediara un conflicto sangriento e, incluso, sin excesivos alborotos en las calles tendría gran trascendencia para el propio futuro de estas organizaciones.

Vemos, pues, que la secuencia cronológica del desplome de los regímenes comunistas y el inicio de las transiciones fue rapidísima;

los efectos de una tuvieron efecto en las otras y así, de forma sucesiva, provocaron una bola de nieve cada vez mayor de manera que los actores internacionales tuvieron también que responder con premura. Especialista en la influencia exterior en las transiciones de Europa oriental, Geoffrey Pridham ha demostrado[9] cómo Estados Unidos y Europa occidental buscaron un reacomodo de la situación internacional en el cual, apuntamos nosotros, tuvieron que contar casi desde el mismo inicio de los procesos democratizadores con el concurso de los partidos sucesores a la hora de redefinir sus relaciones con las nuevas democracias. Así, los contactos de los líderes de los partidos poscomunistas con sus colegas europeos o norteamericanos tuvieron una consecuencia muy positiva para ellos, al quedar más legitimados aún ante su electorado y, en general, ante la población de sus respectivos países. De este modo, y salvo casos extremos, la relación entre los partidos sucesores poscomunistas y el proceso de transición democrática fue beneficiosa para modelarla y consolidarla.

Las Revoluciones Gloriosas: Polonia, diez años; Hungría, diez meses; Alemania Oriental, diez semanas; Checoslovaquia, diez días; Rumanía, diez horas

Los años ochenta supusieron la disolución progresiva del sistema de poder en Polonia. Aunque a partir de mayo de 1982, tras suspenderse el toque de queda, las autoridades militares fueron relajando la ley marcial, el proceso de normalización ensayado por los comunistas no rindió los frutos esperados. En otros periodos convulsos de la historia polaca después de 1945 los cambios superficiales introducidos por el Partido habían conseguido aquietar a una población que había mostrado su descontento, pero esta vez la mayoría dio la espalda a la política de Wojciech Jaruzelski.

Por si esto no bastase, en la segunda mitad de la década las medidas tomadas para dinamizar la economía se mostraron insuficientes. Las campañas propagandísticas del régimen resultaron incapaces de convencer a la sociedad polaca de que existían

posibilidades reales de reforma dentro del sistema comunista. Al respecto, uno de los fracasos más clamorosos fue el rechazo popular al referéndum promovido por el Gobierno de Zbigniew Messner en noviembre de 1987. En él se proponía una teórica democratización de las instituciones, así como un programa de reforma económica, eso sí, dentro de los parámetros del sistema socialista. A pesar de la presión gubernamental, sólo el 45 por 100 de los votantes apoyó la iniciativa.

Como explica la socióloga Izabela Barlinska, la sociedad civil parecía salir de su letargo espoleada por una creciente sensación de absurdo que se hizo meridiana a finales de la década[10]. Era, en primer lugar, una situación derivada de la imposibilidad de remontar la crisis económica. El nivel de vida de los polacos se había deteriorado a lo largo de esos años y este era un hecho tangible que afectaba a la mayor parte de la población, la cual, movilizada o no, desconfiaba de los visos de mejora después del reiterado fracaso de las medidas reformistas publicitadas por el Gobierno. En segundo lugar estaba el reconocimiento generalizado de que los mecanismos que el Estado ponía en marcha para permitir la participación de los ciudadanos eran completamente ineficaces: no servían ni para que un individuo pudiera promocionarse o, siquiera, aspirar legítimamente a mejorar sus condiciones de existencia, ni tampoco para que contribuyera con su esfuerzo a mejorar el sistema.

En nuestra opinión, en la situación de bloqueo institucional y económico de la Polonia de mediados de los ochenta la única solución para muchos era bien salir del país para tratar de satisfacer las aspiraciones que no podían cumplirse dentro de él, bien entrar a formar parte de un movimiento opositor canalizado por Solidaridad, el sindicato que desde el inicio de la década –y a diferencia de los restantes países del Este– había logrado alcanzar gran notoriedad y un apoyo social cifrado en unos diez millones de militantes[11]. En este sentido, en el inicio de la transición a la democracia desempeñaría un papel primordial la fuerza de una sociedad con intereses muy dispersos, pero que Solidaridad supo cohesionar en el momento más difícil: el de enfrentarse abiertamente al Estado. De ahí se desprende la amplia legitimidad popular de Solidaridad, que

en sus intervenciones públicas, en sus manifiestos, en sus conversaciones con las autoridades comunistas, siempre se identificó con el todo social –se refería a sí mismo como «la sociedad»– frente a la artificiosidad del aparato del Partido y de la República Popular[12].

A pesar de las críticas que se hayan podido verter sobre la actuación del sindicato Solidaridad, lo cierto es que en aquella década traumática, frente a lo ocurrido en otros países de la Europa sovietizada, generó confianza y entusiasmo entre la población polaca ante la posibilidad de transformar el Estado. Solidaridad sirvió de cauce de las inquietudes y esperanzas de una sociedad dispuesta al cambio y ofreció, al margen del institucional, un espacio público en cuyo seno se configurarían las bases de una auténtica democracia y germinaría una sociedad abierta.

No cabía esperar una cohesión social similar cuando cayera el régimen comunista. Una vez derribado el enemigo común, Solidaridad tenía que disolverse para liberar todas aquellas tendencias dispares que hasta entonces había aglutinado. Algunos de los acontecimientos sucedidos a finales de 1990 ilustraban los nuevos retos que debía afrontar la sociedad: la unidad interna que había caracterizado al sindicato ya no tenía sentido y el propio Lech Wałęsa[13] insistía en que, una vez cumplida su misión, debía desaparecer. En la carrera hacia la presidencia el líder tuvo que competir con quien había sido uno de sus más fieles colaboradores, Tadeusz Mazowiecki. La elección no pudo decidirse en la primera vuelta, ya que ninguno de los candidatos alcanzó el 50 por 100 de los votos, y fue en la segunda, celebrada el 9 de diciembre de ese mismo año, donde Wałęsa se alzó finalmente con el triunfo.

Este hecho permite reflexionar sobre la pluralidad de intereses y visiones acerca del futuro de quienes habían trabajado codo con codo por acabar con el régimen, pero también acerca de la desmotivación de la sociedad ante esta importante cita electoral, que se saldó con una significativa abstención del 47 por 100. De igual modo, en las primeras elecciones completamente libres, convocadas para el 27 de octubre de 1991, fueron notas características tanto la dispersión del voto como, de nuevo, una elevada abstención en

torno al 60 por 100. En la Dieta o Parlamento tuvieron cabida veintinueve partidos, muestra de la fragmentación política de los primeros instantes de la transición[14]. La imagen, en buena medida ideada por Solidaridad, de una sociedad civil como un todo en su pugna contra la fuerza del Estado comunista se difuminaba una vez iniciado el proceso de transición y consolidación democráticas. La situación era completamente distinta y por tanto demandaba respuestas diferentes. Las enormes dificultades materiales de la población, agravadas por el paso a una economía de mercado, hacían que esta se mostrase más pendiente de sus problemas cotidianos que de las vicisitudes de la política nacional. Ello no obstante, y aun cuando la educación cívica fuera a exigir un largo periodo de adaptación, la sociedad polaca mostró desde el primer momento una tendencia a canalizar sus intereses por las vías que ofrecía el nuevo Estado democrático, con quien ahora, a pesar de las dificultades, se mostraba dispuesta a colaborar[15].

El caso opuesto a Polonia se encuentra en Rumanía, donde a comienzos de 1989 el poder absoluto ejercido por Nicolae Ceauşescu y su clan familiar parecía no correr peligro. Para evitar posibles contagios, el dictador en persona había rechazado poner en marcha la más mínima reforma que pudiera afectar a la estructura o contenido de su régimen y menos aún que hiciera peligrar su continuidad al frente del país.

Inopinadamente, la situación comenzó a enturbiarse a propósito de la orden de búsqueda y captura decretada por el Ministerio del Interior contra el pastor calvinista de origen húngaro László Tökés, que se había distinguido por la defensa de las minorías y por sus críticas constantes al sistema. En Timişoara, la firme protesta por la detención de Tökés los días 16 y 17 de diciembre de 1989 fue reprimida sin dilaciones por la Policía de la Seguridad del Estado *(Securitate),* pero su actuación no logró apaciguar los ánimos de una población al límite de la resistencia mental y material. El 21 de diciembre los disturbios volvieron a producirse, esta vez en Bucarest, durante un acto clásico de adhesión inquebrantable al *Conducător:* un encuentro organizado por el propio Ceauşescu para contrarrestar

los ataques recibidos desde la naciente oposición. La muchedumbre apostada ante el palacio presidencial, con los alumnos universitarios al frente, mostró su rechazo total a los incidentes de Timişoara y, por ende, al propio dictador, lo cual provocó enfrentamientos entre los manifestantes y la *Securitate.* El día 22, para evitar nuevas protestas populares –completamente espontáneas, dada la ausencia de oposición e, incluso, de disidencia en el país–, las autoridades decretaron el estado de excepción en toda Rumanía.

Las medidas preventivas dispuestas por el Gobierno no produjeron los efectos deseados. Apenas había entrado en vigor el estado de excepción cuando un nutrido grupo de manifestantes consiguió entrar en la sede central del Partido Comunista, de donde momentos antes Ceauşescu y su esposa habían huido en helicóptero. El golpe de Estado produjo un inesperado vacío de poder que fue rápidamente aprovechado por el primer núcleo de oposición propiamente dicha para dirigirse al país por televisión, medio de comunicación que de emitir tan sólo dos horas al día pasaba ahora a desempeñar un papel de primera magnitud. En nombre del grupo habló el poeta Mircea Dinescu para anunciar que la nación se encontraba ante una revolución pacífica –«la revolución de todos»–, que el dictador había caído y que el país era libre y los rumanos debían afrontar el destino por sí mismos. Las noticias sobre la situación del país se sucedieron vertiginosamente y en el telediario vespertino de ese mismo día 22 de diciembre se anunció que Ceauşescu y su esposa habían sido detenidos en la localidad de Târgovişte. Serían ejecutados el día de Navidad[16].

Los acontecimientos se precipitaron: el sistema no podía seguir siendo comunista, así que el nuevo equipo se adaptó a las circunstancias. Fue en esos momentos cuando hizo acto de presencia a través de las ondas (muy especialmente, en Radio Moscú) el Frente de Salvación Nacional, una estructura heterogénea pero con un núcleo bastante compacto –al menos, al principio– formado por los herederos del antiguo régimen, con el comunista contestatario Ion Iliescu como portavoz y principal dirigente. Su propósito fue tranquilizar a la población en momentos tan delicados y, haciendo profesión de fe reformista, prometer que Rumanía

abordaría de inmediato las transformaciones necesarias para construir el Estado de derecho. Con el objetivo evidente de ganar a la población para su causa, los líderes del Frente de Salvación Nacional tomaron de inmediato una serie de medidas liberalizadoras tales como suprimir la censura y eliminar las restricciones al consumo de energía en los hogares.

El Frente parecía dominar la situación, pero no representaba a una sociedad que, como venimos diciendo, aún carecía de impulso organizativo, según reflejaban los pequeños grupos de estudiantes universitarios o de defensores de los derechos humanos surgidos en los últimos días del año. Así se explica que esta incipiente sociedad civil no tuviera oportunidad de controlar las acciones del Frente, y menos aún de ser el motor de una incipiente transición a la democracia. De hecho, su vigor se había mostrado tan sólo en los días finales de la dictadura, y lo había hecho siempre a través de manifestaciones de descontento espontáneas, no organizadas, tal como cabía esperar de la inexistencia de una oposición digna de tal nombre[17].

En mayo de 1990 tuvieron lugar las elecciones generales a la Gran Asamblea Nacional (Cámara de Diputados y Senado) y las presidenciales. En las primeras correspondió el triunfo, con mayoría absoluta en ambas cámaras, al FSN; en las segundas salió elegido Iliescu con el 86 por 100 de los votos. En junio comenzó a actuar el nuevo Gobierno, presidido por Petre Roman; en diciembre de 1991 una nueva Constitución de tipo presidencialista fue aprobada en referéndum. Con todo, la tarea más urgente era transformar las estructuras económicas del país en clave de mercado para paliar las penurias de la población y lograr un desarrollo estable. Así, con el fin de facilitar las inversiones extranjeras, la reforma bancaria y fiscal y la liberalización de los precios fueron aprobadas en julio de 1990 y en agosto de 1991 leyes sobre reactivación y privatización de los sectores productivos, además de la ley de reforma agraria en febrero de este último año.

Conviene añadir una consideración importante sobre lo que a primera vista podría parecer un relevo en el poder. Por un lado, tal como habían prometido, las autoridades del Frente –comunistas

teóricamente críticos con el *Conducător*– se vieron obligadas a poner en marcha el proceso de reformas que derogase todas las normas constitucionales del periodo anterior y anunciase para primavera la convocatoria de elecciones libres y abiertas; sin embargo, por otro, al gobernar sin tener en cuenta a la población no hacían sino detentar el poder tal como habían hecho sus predecesores. Todo ello hace pensar que, al menos en un principio, no llegó a producirse un auténtico cambio de régimen[18].

El poder omnímodo ejercido no ya por el Partido Comunista, sino por la camarilla de Ceauşescu durante las décadas de su mandato había provocado una desintegración absoluta de la sociedad, la cual, ante el riguroso sistema de control, fue incapaz de reaccionar a través de la disidencia[19]. Al contrario, pues, que en Polonia o en la República Democrática de Alemania –aun tratándose de casos, como hemos visto, muy diferentes entre sí–, la falta de organizaciones intermedias toleradas por el régimen impidió que surgiese cualquier conato de oposición y dio lugar, en cambio, a que en los primeros años de transición el régimen de Iliescu actualizase muchas de las antiguas estrategias de poder comunista, incluida entre ellas una corrupción generalizada que le permitiera mantenerse en el poder. Sin otros referentes que los puramente emocionales, una parte de la sociedad se sintió atraída por los cantos de sirena del nacionalismo y de la xenofobia –fundamentalmente, hacia húngaros y gitanos– en vez de preocuparse por los graves problemas cotidianos[20]. En definitiva, la apatía política y la desmovilización a las que habían conducido los años de Ceauşescu favorecieron la permanencia de su sucesor en el poder y retrasaron la aparición de organizaciones sociales con capacidad suficiente como para fiscalizar las actuaciones del Gobierno, por lo que podríamos concluir que la inexistencia de una sociedad civil hipotecó los primeros años de transición en Rumanía.

Por su parte, en Checoslovaquia, el fracaso de la reforma económica dirigida por Gustáv Husák llevó al sistema del socialismo real a un callejón sin salida. Aunque, dada la pérdida del control de la sociedad por parte del Partido Comunista, Husák fue apartado del

cargo de primer secretario, los nuevos responsables del Partido no fueron capaces de recomponer la crítica situación que atravesaba el país. Ante la evolución de los acontecimientos, la disidencia lograba unificar sus fuerzas y fundaba en Praga, en noviembre de 1989, el Foro Cívico, con Václav Havel al frente mientras los grupos opositores eslovacos creaban Público Contra Violencia. El primer éxito de la oposición fue obligar al Gobierno a entablar negociaciones conjuntas con el objetivo de romper con el pasado y avanzar hacia el Estado de derecho. En esta situación, el Politburó renunció en pleno y a finales de noviembre el Partido perdió el monopolio de la actividad política; pocos días después el Gobierno cesó en sus funciones. El 11 de diciembre se formó un nuevo Gobierno de Unidad Nacional apoyado por el Foro Cívico y de mayoría no comunista, presidido por el reformista Marian Čalfa; a continuación, el 29 de diciembre, Havel fue nombrado por la Asamblea presidente interino de la república hasta la convocatoria de elecciones libres. Celebradas en junio de 1990, el Foro Cívico y Público Contra Violencia lograron la mayoría absoluta. La nueva cámara confirmó a Havel y a Čalfa en los puestos de presidente de la república y primer ministro.

El camino de la transición estaba expedito y los nuevos dirigentes debían afrontar importantes problemas tanto económicos como nacionalistas. Para empezar, se resaltaba el carácter federal del Estado, que tomaba el nombre de República Federativa Checa y Eslovaca. Sin embargo, los sectores independentistas eslovacos no tardaron en radicalizar la cuestión nacional. Por lo que se refiere a la economía, en la primavera de 1990 se pusieron las bases para avanzar hacia el mercado: con la cancelación de la planificación centralizada tomaba carta de naturaleza la iniciativa privada. Al comenzar el año 1991 entró en vigor un plan de estabilización de la economía que postulaba, entre otras cosas, la convertibilidad de la moneda, la liberalización de los precios y la privatización a gran escala de los sectores productivos. Finalmente, a pesar de los esfuerzos, la consolidación del Estado de derecho no pudo evitar la ruptura nacional y el 1 de enero de 1993 Eslovaquia alcanzó la independencia.

En el otoño de 1988 los comunistas húngaros partidarios de la reforma, que habían logrado hacerse con el poder dentro del Politburó, declararon su voluntad de «crear un Estado constitucional moderno». Para avanzar en esa línea, en el invierno de 1989 –una vez que el Partido Único renunció a sus prerrogativas– fue regulado el pluripartidismo y en octubre de ese mismo año la Asamblea Nacional aprobó un cambio constitucional que convirtió a Hungría en «Estado democrático de derecho, donde los valores de la democracia burguesa y del socialismo democrático se reconocen por igual»[21]. Ese mismo mes se disolvía el Partido Socialista Obrero Húngaro; de sus cenizas surgió una formación de carácter socialdemócrata que iba a desempeñar un papel de gran importancia en el proceso de transición y consolidación democráticas. Por otra parte, el impulso reformista también llegó a la economía, donde comenzó a aplicarse un plan de austeridad que conllevaba la privatización de empresas estatales.

Con el propósito de alcanzar la normalidad política, las autoridades, encabezadas por Miklós Németh como presidente del Consejo de Ministros, aceptaron negociar con la oposición. De aquella Mesa Redonda salió el acuerdo de convocar elecciones libres en la primavera de 1990. En los comicios del 25 de marzo y 8 de abril resultó vencedor el Foro Democrático Húngaro, seguido de la Alianza de Demócratas Libres. Una vez constituida la nueva cámara, esta dio su confianza al Gobierno de József Antall, dirigente del Foro, y nombró a Árpád Göncz para el cargo de presidente de la república. La gran tarea pendiente de Gobierno y oposición era lograr con el menor coste social posible la transformación radical de las estructuras del país; y por ello, con el objetivo puesto en la futura vinculación a las Comunidades Europeas, Hungría se esforzó en controlar la economía para reducir la deuda externa a límites tolerables, mejorar los niveles de producción y productividad y frenar la tasa de desempleo.

El fracaso de las reformas emprendidas en Bulgaria por Todor Jivkov siguiendo la estela de la perestroika de Gorbachov, junto al deterioro de la actividad económica, hizo posible cambiar parte de la

elite del Partido-Estado, con el comunista reformista Petar Mladenov como figura principal. A la voluntad de renovación se unió el impulso de una primera oposición muy sensible a la defensa de los derechos humanos. El Gobierno reformó el Código Penal, aprobó una amnistía para los delitos políticos y anunció la celebración de elecciones libres. Al mismo tiempo, el Partido Comunista renunció a ejercer el monopolio del poder y en abril de 1990, después de la celebración del XIV Congreso, de marcado carácter reformista, tomó el nombre de Partido Socialista.

En aquella coyuntura, la nueva formación heredera del Partido Único obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones de junio de 1990, seguida a gran distancia por la Unión de Fuerzas Democráticas. La convergencia de criterios entre la mayoría parlamentaria y la oposición hizo renunciar a Mladenov y la Asamblea Nacional nombró presidente de la República a Jeliu Jeliev, antiguo disidente y líder de la Unión. Antes de que terminase el año tomaba posesión un Gobierno de coalición con el principal cometido de poner en marcha un plan de ajuste y reestructuración de la economía y redactar un nuevo texto constitucional que, aprobado en julio de 1991, haría de Bulgaria un Estado de derecho.

El camino hacia la democracia y sus retos: la integración en la Unión Europea

Transiciones en el Este ¿hacia dónde?

Por lo que respecta a los estudiosos de las ciencias sociales, y sobre todo a los expertos en transiciones, el ámbito de sus análisis creció tras 1989 hasta tal punto que se les exigió una revisión profunda del bagaje teórico de que disponían. En general, el concepto de transición había servido hasta los años ochenta para explicar el paso de regímenes autoritarios a democracias liberales y, dentro de la tradición de pensamiento marxista, el tránsito de estas últimas al socialismo. La década de los noventa, «por una curiosa ironía de la historia», comentaba Jacques Sapir[22], transmutó y

amplió el concepto de transición: del comunismo se pasaba a la economía capitalista. De esta forma, el cambio inopinado en el sentido profundo de la palabra «transición» invalidaba en parte el uso de las categorías manejadas hasta entonces por los politólogos. No había en la literatura científica modelos o conceptos que pudieran servir para emprender el análisis riguroso de los acontecimientos desencadenados en la Europa del Este.

En realidad, lo que acababa de producirse era, según expresión de sir Ralf Dahrendorf, «el colapso del centro»[23]: la desintegración del sistema, el desplome del edificio, hacía completamente inútil el intento de reforma o de rehabilitación. Manteniendo el recurso de la metáfora arquitectónica, tan cara a la «Transitología», se podría decir que la transición trajo como consecuencia una edificación con nuevos materiales en la que se hacía desaconsejable utilizar los elementos anteriores. Por tanto, el conjunto fue destruido para dar opciones a que surgiera una *constitutio libertatis*[24]. La evolución de los acontecimientos en los países del área demostró la oportunidad de estas apreciaciones: los cambios constitucionales, las privatizaciones, la transformación de los sistemas educativos, cualquier política pública sectorial que se analizase ofrecía un ejemplo de eliminación y reemplazo de las prácticas del antiguo régimen.

Para empezar, en casos como los de Polonia, Hungría y la propia Unión Soviética, las transformaciones operadas a partir de cambios de criterio en la actuación política fueron provocadas desde los centros de decisión de los comités centrales de los respectivos partidos únicos. Fueron las elites dirigentes las que, por la presión de grupos opositores, por ser conscientes de la gravedad de la situación económica y política o por ambas causas, introdujeron elementos de cambio cuyo objetivo era regenerar el propio sistema, tal como muestran las declaraciones y escritos de Gorbachov entre 1985 y 1989.

Por otra parte, una de las causas explicativas de la rápida caída de los regímenes y de la simultaneidad de los procesos radica en una consideración generalizada entre la población según la cual los sistemas de dominación comunista eran exógenos, provocados en su

origen y dirigidos desde su instauración por intereses ajenos a los nacionales. Eran dictaduras «soviéticas», foráneas, y al producirse el colapso del centro dejaron de ostentar legitimidad interna. Al respecto, el final de la Doctrina de Soberanía Limitada, proclamada por Gorbachov antes de la desintegración de la URSS, desempeñó un papel de enorme trascendencia en la caída en cascada de los regímenes de partido único y precedió necesariamente a las mesas redondas que se fijaron para alcanzar consensos entre la dirección comunista y la oposición sobre, por ejemplo, el futuro de Polonia o Hungría, una vez recuperada la soberanía nacional.

En cuanto a la citada simultaneidad de los procesos, también aquí el desencadenante exterior –la actitud del Kremlin– incidió más que la influencia recíproca entre los países del Este. No hubo tiempo para que los primeros cambios democratizadores alcanzados en un país –como Polonia– influyeran decididamente en el discurso revolucionario de las fuerzas opositoras de otro –como Bulgaria– y estas elevaran, en consecuencia, el número y el peso de sus reivindicaciones al Gobierno comunista. Todo sucedió demasiado rápido.

Si seguimos la argumentación de Leslie Holmes[25], en todos los países de Europa central y oriental se produjo una secuencia parecida desde el inicio de la desintegración del sistema: una crisis en la gerontocracia que lo controlaba, con la destitución de los dirigentes históricos –Kadar, Honecker, Ceauşescu–; otra crisis simultánea que afectó a los respectivos partidos comunistas, cada vez más rechazados por la población; y en tercer lugar, la aceptación del pluripartidismo y la consiguiente legalización de las fuerzas opositoras, todo lo cual condujo a la celebración de elecciones libres. Como consecuencia del cambio de legitimidad y de las variaciones legales, los diferentes Estados fueron aprobando constituciones nuevas o reformando en lo sustancial las antiguas de tal forma que se generalizaron los derechos civiles.

Las transiciones en el este de Europa constituyeron, pues, un ejemplo netamente diferenciado hasta el punto de no admitir una homologación con los procesos de cambio emprendidos en la cuenca mediterránea o en Iberoamérica en los años setenta y ochenta. Este

carácter novedoso, único hasta entonces, presentó a la vez una secuencia múltiple: la transición en la Europa sovietizada afectó al sistema de organización política, económica y social, así como a sus valores y principios informantes considerados en conjunto; como alternativa global a la democracia liberal y al capitalismo, el proceso de toma de decisiones, el desarrollo institucional y la planificación económica revistieron un carácter distintivo e interrelacionado de tal forma que la aplicación de políticas de sustitución no sirvió al ser estas parciales o sectoriales. En efecto, la transición afectó al modelo en sí, a todo el modelo, y en consecuencia su reemplazo debía ser completo. El sociólogo Claus Offe hablaba de una transformación triple: en el ámbito nacional –articulación institucional de sus territorios para sentar los pilares del Estado-nación–, en el ámbito constitucional –reforma profunda del ordenamiento jurídico o elaboración de nuevas constituciones para desarrollar plenamente la democracia pluripartidista– y en el económico –paso de la planificación a las estructuras capitalistas–[26].

Si nos fijamos en la cuestión política, como hemos escrito en otro lugar, «el cambio en el Este influye en dos aspectos básicos: primero, en la recuperación de la independencia y la soberanía después de todas las limitaciones impuestas por la estrategia soviética de confrontación de bloques; después, en la construcción del Estado de derecho según la división de poderes y de acuerdo con los valores de la democracia liberal-parlamentaria y pluripartidista»[27]. Los problemas derivados del control hegemónico ejercido por los partidos comunistas a lo largo de periodos tan dilatados de tiempo, además de la escasa tradición democrática antes de la sovietización, se convirtieron en grandes obstáculos a la hora de implantar partidos programáticamente coherentes, democráticos en su funcionamiento interno y con capacidad real de generar expectativas entre la población, ya que esta se mostraba reacia a formar parte de organizaciones cuyo recuerdo las asimilaba a las estructuras dependientes de los partidos comunistas.

En segundo término, muchos autores advirtieron de la trascendencia de llevar a buen puerto una transición económica

ordenada y paulatina para evitar una multiplicación incontrolada de los costes sociales que condujera a un colapso. El paso de un modelo de planificación centralizada a la economía de mercado conforme a las pautas de competencia y predominio de la libre empresa no constituía un reto más en las ya de por sí complejas transiciones, sino quizá el más difícil: por encima de la aprobación de leyes privatizadoras, del fomento del comercio con áreas vedadas a los países del Este durante la época comunista o de la mejora de la eficacia productiva, el cambio de los parámetros del funcionamiento económico era «una revolución de los comportamientos, de las normas y de las costumbres», como advirtió Alain Gélédan en un artículo de *Le Monde Diplomatique* de noviembre de 1994[28]. El adiestramiento en formas de trabajo a las que la mayoría de la sociedad había estado ajena exigía mucho más tiempo del que difícilmente se estaba dispuesto a esperar.

La tercera esfera de transformaciones operaba en el resbaladizo terreno del cambio social. El aprendizaje de pautas y comportamientos democráticos, en mayor grado aún que las formas de trabajo comentadas en el párrafo anterior, requiere mucho más tiempo que cualquier reforma institucional o económica; afecta a las mentalidades colectivas, y estas siempre ofrecen unos mecanismos de resistencia a las innovaciones mucho más sólidos que, obviamente, no desaparecen por simple imperativo legal[29]. Aunque no exento de cierta visión estereotipada, el modelo cultural occidental, identificado acríticamente con los valores de libertad, tolerancia y respeto mutuo, ganó predicamento entre las elites de la transición en su frenética marcha hacia la Unión Europea, panacea de todos los males. La búsqueda de este paraíso perdido impulsó a los Gobiernos a introducir cambios rápidos –incluso bruscos en ocasiones– para sustituir los principios sobre los que se asentaban el retórico igualitarismo comunista, el internacionalismo proletario, la solidaridad entre los pueblos humillados y el largo etcétera de tópicos de las dictaduras soviéticas e instalarse así en un discurso de referentes sociales occidentales, difícilmente alcanzables a corto plazo. Este retraso generó no pocas frustraciones y reacciones adversas en aquella parte de la población para quien la transición no

había satisfecho las expectativas creadas. En efecto, si la justicia social debía ser compatible con el funcionamiento de la lógica de mercado, la protección a los sectores menos favorecidos tendría que figurar como elemento destacado de los programas de los partidos políticos implicados en la transición; por ello, la dificultad de edificar un sistema genuino de seguridad social poscomunista resultó un duro escollo en la legitimación de los nuevos sistemas.

Algunas transformaciones socioeconómicas en Europa del Este fueron realmente vertiginosas, como el paso de un patrón de consumo caracterizado por la uniformidad de los productos y su relativa escasez a un crecimiento extraordinario de la oferta en contraste con los bajos salarios y el aumento del paro. Los desempleados se convirtieron en un fenómeno novedoso; de inexistentes en las estadísticas oficiales de los países comunistas pasaron a formar un nutrido grupo social cuya válvula de escape terminó siendo la emigración hacia Europa occidental. Las expectativas de la población también dieron un viraje importante respecto al tipo de trabajo que podía desempeñar. La profunda crisis y reconversión de unas estructuras industriales obsoletas favoreció el desarrollo rápido del sector servicios, hacia donde dirigieron su mirada las nuevas generaciones.

El mito del retorno a Europa: el proceso de integración de la Europa del Este en la UE

Además de los procesos de transición a la democracia y a la economía social de mercado, el tercer gran reto de los equipos reformistas que durante los primeros años noventa tomaron el relevo a los comunistas en los países del Este y del Báltico fue lograr el retorno de Europa, es decir, integrarse lo antes posible en las instituciones comunitarias. Las declaraciones públicas y los programas de las principales fuerzas políticas que comenzaban a organizarse insistían en la voluntad decidida de fortalecer las relaciones tanto bilaterales con cada uno de los países de Europa occidental como con la CEE en su conjunto[30]. Los responsables de

las Comunidades Europeas, dispuestos a apoyar el cambio que estaban protagonizando los países del antiguo bloque soviético, respondieron a estas demandas y en el Consejo Europeo celebrado en Estrasburgo los días 8 y 9 de diciembre de 1989 animaron a los países de la Europa central, sudoriental y báltica a perseverar en el camino recientemente iniciado hacia la libertad, la democracia y el respeto de los derechos humanos, a la vez que les aseguraban todo su apoyo institucional en la tarea de reconstrucción en la que estaban inmersos.

Por si esto no fuera suficiente, poco antes del colapso definitivo del sistema del socialismo real en la zona, y vista la evolución de los acontecimientos en Europa del Este, el grupo de países más desarrollados (G-7) acordó, en la cumbre celebrada en París en julio de 1989, delegar en la Comunidad Europea[31] la coordinación del programa Polonia-Hungría: Ayuda a la Reestructuración Económica (PHARE), el más sustancioso aporte financiero a fondo perdido para apoyar las reformas en marcha dentro de estos países. El PHARE estaba centrado en sectores básicos (agricultura, infraestructuras de transporte, energía, entre otros) y prestaba además ayuda a la transformación de las estructuras financieras y a los procesos de privatización en todos los campos de la economía. Para lograr la mayor efectividad posible, el Gobierno del país receptor de la ayuda y la Comisión Europea diseñarían cada año un plan de actuación que comprendía las prioridades en los sectores más necesitados.

Obviamente, el plan no podía quedar restringido a tan sólo dos países. De forma inmediata, el G-24 y las Comunidades Europeas alentaron a los restantes de la zona a seguir la senda marcada por Polonia y Hungría[32] y en mayo de 1990, conforme a las previsiones del Plan de Acción que habían aprobado, incluyeron dentro del Programa PHARE a Checoslovaquia, Rumanía, Bulgaria, la República Democrática de Alemania y Yugoslavia, aunque la aplicación del programa a este último país se suspendería en el otoño de 1991 debido al conflicto bélico desencadenado en su territorio.

Pero no era suficiente. Una vez conocido el alcance de la desastrosa política de planificación socialista, los abrumadores

problemas económicos del antiguo espacio europeo de influencia soviética obligaban a los dirigentes de los países más desarrollados a conceder ayudas más sustanciosas todavía. Para ello estos firmaron el protocolo de constitución del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo de Europa del Este (BERD), integrado en la red PHARE [33] y operativo a partir de abril de 1991.

Unos días antes las Comunidades también habían dado un paso importante. El Consejo Europeo celebrado en Dublín el 28 abril había anunciado su propósito de facilitar el acercamiento entre la CEE y los antiguos países del Este. Para ello se habían establecido los denominados «Acuerdos Especiales de Asociación» o «Acuerdos Europeos», que debían fomentar cuatro aspectos básicos: el libre comercio; la cooperación industrial, científica y técnica; la asistencia financiera, y la creación de foros permanentes para el diálogo en todos los ámbitos, especialmente el político.

A continuación, el 8 de junio de ese mismo año de 1990 el vicepresidente de la Comisión Europea Frans Andriessen señaló en Bruselas que para poder concretar los Acuerdos de Asociación, los candidatos debían manifestar con claridad su intención de evolucionar de manera «irreversible hacia la democracia efectiva con plena apertura a la economía de mercado». A pesar de la dureza de los procesos de transición, por sus perjudiciales consecuencias inmediatas para la mayoría de los habitantes, los Gobiernos poscomunistas mantuvieron firme el timón de las reformas institucionales y económicas para favorecer el mercado de acuerdo con programas de estabilización en gran parte diseñados por el Fondo Monetario Internacional. En Hungría el proceso de reformas fue menos traumático gracias a que en los primeros años ochenta los dirigentes del país habían introducido algunos cambios liberalizadores[34]; en cambio, en Checoslovaquia y en Polonia, país este último donde había un grave riesgo de inflación, se aplicaron severas terapias de choque que dejaron poco margen a medidas más prudentes.

En cualquier caso, los sacrificios fueron pronto recompensados. En diciembre de 1991 las Comunidades Europeas firmaron con Polonia, Hungría y Checoslovaquia (después, con la República Checa y

Eslovaquia, lo refrendarían en octubre de 1993) Acuerdos de Asociación que entraron en vigor al mes siguiente[35], y en noviembre de 1992 se firmaron también con Bulgaria y Rumanía sendos acuerdos de este tipo, en vigor desde febrero y marzo de 1993, respectivamente[36].

Tampoco quedaron en el olvido las repúblicas bálticas, aunque habían formado parte de la Unión Soviética. En primer lugar, como paso previo a los Acuerdos de Asociación, la recién constituida Unión Europea[37] suscribió en mayo de 1992 una serie de pactos comerciales y de asistencia técnica y económica con Lituania, Letonia y Estonia, además de con Albania; posteriormente, en junio de 1995, los países bálticos firmaron sus Acuerdos de Asociación. En cuanto a las repúblicas yugoslavas, la Unión Europea sólo firmó un acuerdo europeo con Eslovenia en junio de 1996, después de que estuviera en vigor durante varios años un acuerdo de cooperación global económica y financiera. Además, todos los países citados ingresaron también en el Consejo de Europa, el cual certificaba así sus credenciales democráticas para que pudieran optar a la integración en las Comunidades Europeas.

El fortalecimiento de los vínculos entre la Europa comunitaria y los países recientemente salidos de la órbita soviética aumentaba de forma irreversible. Así, al menos, lo entendió el Consejo Europeo de Copenhague al reiterar su firme voluntad de ampliación al Este en la histórica promesa del 22 de junio de 1993: «Los países asociados de Europa central y del Este que lo deseen ingresarán en la Unión Europea en cuanto sean capaces de asumir las obligaciones de la pertenencia, satisfaciendo las condiciones económicas y políticas exigidas».

Quedaba abierta, ahora ya de forma definitiva, la vía hacia la cuarta ampliación de la Unión. El ingreso tendría lugar en cuanto los candidatos fueran capaces de cumplir las obligaciones derivadas de la adhesión, esto es, los criterios conocidos desde entonces como «Criterios de Copenhague». Estos incluían aspectos de carácter político (instituciones democráticas y estables garantes del Estado de derecho y salvaguarda de los derechos humanos, del respeto y la protección de las minorías) y económico (una economía de mercado

en funcionamiento con capacidad suficiente para hacer frente a la presión de la competencia dentro de la Unión), a la vez que exigía asumir los objetivos de la unión política, económica y monetaria. A estos tres tipos añadió el Consejo Europeo de Madrid de los días 15 y 16 de diciembre de 1995 un cuarto requisito, traducido en el mantenimiento de unas instituciones administrativas y judiciales con recursos para aplicar con eficacia el *acquis communautaire.*

El avance significativo en las relaciones entre las Comunidades y los antiguos países del Este no presuponía que estos se vinculasen de derecho a las estructuras comunitarias, pero debía facilitar que los Estados «asociados» se adhiriesen paulatinamente a las instituciones, máxime después de haber conseguido que el Consejo de Europa reunido el 8 y el 9 de octubre de 1993 apoyase sus pretensiones de vincularse a la Unión. En estas circunstancias, el 31 de marzo de 1994 Hungría presentó oficialmente su candidatura de integración en la Unión Europea, y el 5 de abril lo hizo Polonia[38].

Los Consejos Europeos de Corfú (24 y 25 de junio de 1994) y Essen (9 y 10 de diciembre de 1994) perfilaron las estrategias de preadhesión, que comprendían una serie de instrumentos facilitados a los países candidatos para que en su camino reformista satisficieran con prontitud los Criterios de Copenhague. Versaban sobre el mantenimiento de los Acuerdos Europeos, la adopción sistemática del acervo comunitario y la continuación de las ayudas estructurales aportadas por el programa PHARE, el ISPA o Instrumento Estructural de Preadhesión (programa destinado a inversiones en el sistema de transportes y en el medio ambiente) y el SAPARD o Programa de Ajuste Estructural para la Agricultura y el Desarrollo Rural[39]. Estas resoluciones fomentaron la fluidez de las relaciones entre la Unión Europea y los países de la Europa central, sudoriental y báltica al insistir en concretar un escenario de reuniones periódicas y, sobre todo, al convencer a los gobiernos respectivos de la necesidad de actuar con rapidez y firmeza si querían preparar a sus países para asumir el acervo comunitario[40].

Los avances conseguidos[41] animaron a las autoridades de los países del Este a solicitar la adhesión. Siguiendo la estela de Hungría y Polonia –pioneros, como hemos visto, en la primavera de 1994–,

los restantes países de la Europa central, sudoriental y báltica presentaron sus candidaturas: en 1995 lo hicieron Rumanía (22 de junio), Eslovaquia (27 de junio), Letonia (27 de octubre), Estonia (28 de noviembre), Lituania (8 de diciembre) y Bulgaria (14 de diciembre); en 1996 se sumaron la República Checa (17 de enero) y Eslovenia (10 de junio)[42]. Año y medio más tarde, el Consejo Europeo de Luxemburgo de 12 y 13 de diciembre de 1997 autorizó la puesta en marcha del proceso de ampliación a estos países, aunque recordó que había que reforzar las instituciones de los candidatos para que se acomodasen a las disposiciones del Tratado de Ámsterdam[43] de 2 de octubre de 1997. Los países candidatos seleccionados para una primera etapa fueron Polonia, Hungría, República Checa, Eslovenia y Estonia, y a ellos se sumó Chipre; Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia, Letonia y Lituania quedaron para la segunda etapa. Las negociaciones comenzaron el 31 de marzo de 1998 y, para evitar rivalidades que pudieran conducir a enfrentamientos entre los candidatos en su pugna por ser los primeros en cumplir los requisitos, el Consejo Europeo de Helsinki, celebrado en diciembre de 1999, dejó claro que el proceso de conversaciones con cada candidato avanzaría al ritmo con el que este satisficiera las condiciones exigidas. Al mismo tiempo, las autoridades comunitarias anunciaron que a partir de enero de 2000 los cinco países considerados hasta entonces en la segunda etapa (es decir, Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia, Letonia y Lituania), además de Malta y Turquía, serían incluidos en la fase de ampliación en marcha[44].

En resumen, el año 1989 supuso un auténtico golpe para los gobernantes comunitarios: cuando parecía que con la ampliación al norte la Europa unida se fortalecía todavía más frente al bloque soviético, la disolución del binomio Este-Oeste en el Viejo Continente los obligaba de pronto a replantearse el futuro de Europa. Las líneas argumentales diferían en las explicaciones sobre *por qué* ampliar, unidas a una preocupación que, si bien menos explícita, se apoyaba en ese porqué para abrir un nuevo debate, también relevante, sobre *hasta dónde* ampliar. En el caso de los antiguos países comunistas, la instauración de la democracia pluripartidista y la economía de

mercado se entendía como parte del proceso de integración en las estructuras comunitarias y no hace falta que nos remitamos a las proclamas políticas de los partidos tanto en el Gobierno como en la oposición que, salvo grupos extremistas y, como ya hemos comentado en otra ocasión, apoyaron sin reservas dicho proceso. Es razonable pensar que esta unanimidad de opiniones y la ausencia generalizada de crítica fueron fruto de la poderosa influencia que el «paraíso comunitario» ejercía en el imaginario colectivo de aquellas poblaciones, deseosas de salir cuanto antes del atraso socioeconómico. Más difícil de explicar resulta la actitud de la UE en las ocasiones en que pareció olvidar el mandato de Copenhague de ampliar siempre y cuando se estuviera lo suficientemente preparado (una vez más, la cuestión de la profundización frente a la ampliación). Razones históricas y de solidaridad intraeuropea impusieron un discurso oficial donde las apelaciones al «mito de Yalta» y al «retorno a Europa» terminasen por legitimar el proceso de ampliación, asegurasen la estabilidad interna y fortaleciesen las fronteras.

En general, los analistas consideran hoy en día que la última gran ampliación al Este generó problemas económicos por la debilidad de las estructuras productivas de los nuevos miembros y afectó a la eficacia en la toma de decisiones y a la gobernabilidad de la UE dadas las dificultades de ajustar las instituciones al marco comunitario ampliado. Sin embargo, durante el proceso nunca se cuestionó el fin último –la ampliación–, al cual, además, se pretendía llegar con la máxima celeridad posible. Los principios y valores defendidos por los Estados miembros (derechos humanos, democratización política, etcétera) se interpretaron de distintas formas dependiendo muchas veces del objetivo táctico o estratégico de los actores estatales para obtener mayores beneficios, lo cual favorecería en última instancia el proceso de integración en tanto en cuanto el juego o la manipulación argumental de los distintos Estados no puso en entredicho el objetivo final; es más, los distintos argumentos fueron utilizados *dentro* de ese marco institucional futuro: la Unión Europea ampliada.

En este debate sobre «hasta dónde ampliar» seguía quedando pendiente el caso turco. Con las riendas del país en manos de los militares desde comienzos de los años ochenta, los contactos entre la CEE y Turquía –como en su momento le ocurrió a Grecia– se habían reducido a la mínima expresión hasta restablecerse los gobiernos civiles en 1983 de la mano de una nueva Constitución aprobada en referéndum el 7 de noviembre del año anterior[45].

De vuelta a la normalidad constitucional, Turquía había redoblado los esfuerzos en su política de acercamiento a la Europa comunitaria y presentado, el 14 de abril de 1987, su candidatura oficial a la adhesión plena a las Comunidades. La Comisión Europea emitió el preceptivo dictamen el 18 de diciembre de 1989, aunque en este caso sin previsión de apertura de negociaciones. Los peores presagios para el Gobierno de Ankara se cumplieron al año siguiente al resultar desestimada la petición turca. En tal decisión pesó, sin duda, la situación socioeconómica y política del país, pero también las peculiaridades culturales y de civilización, con raíces, no debemos olvidarlo, entroncadas en el islam. La actitud de las Comunidades no arredró a las autoridades turcas, que desde los primeros años noventa iniciaron un proceso de profunda reforma en consonancia con los criterios exigidos para la adhesión de nuevos miembros y aprobados por el Consejo Europeo de Copenhague en junio de 1993[46].

De este modo, en 1995 Bruselas y Ankara acordaron impulsar la tercera fase del Acuerdo de Asociación, que culminaría con la negociación para la adhesión. El proceso ya marchaba con retraso; según el acuerdo,

> en ese año debía haberse alcanzado el objetivo final, es decir, haberse completado la tercera fase, una vez pasados los más de treinta años de adaptación previstos en la firma del Tratado. La razón en la demora venía propiciada sobre todo por la crisis general que Turquía había vivido desde los años setenta y que había paralizado los avances hacia la armonización con las Comunidades. Esta decisión, no obstante, fue muy positiva en el recorrido turco hacia Europa ya que desde entonces la adecuación de la legislación turca a la comunitaria comenzó a experimentar un claro avance[47].

En efecto, los esfuerzos de los turcos por homologarse con los países de la Europa comunitaria se vieron reconocidos cuando el 1 de enero de 1996 entró en vigor una unión aduanera para productos industriales y agrícolas transformados, pero nada más. La marcada peculiaridad económica, cultural y geoestratégica de Turquía impidió que el final de la Guerra Fría despejase de una vez por todas las dudas sobre su futura incorporación a la Unión Europea[48].

Las repercusiones de la ampliación en la defensa y seguridad europeas de la Posguerra Fría

La década de los noventa fue fructífera en encuentros y acuerdos relacionados con la seguridad y la defensa europeas. Los gobiernos comunitarios eran conscientes de que el camino recorrido en la cooperación económica o en el fortalecimiento institucional no se correspondía con el peso que por capacidad y recursos debía desempeñar la Unión Europea en el mundo. Más aún, el previsible ingreso de los nuevos países del Este tanto en las estructuras comunitarias como en la OTAN variaba el mapa estratégico del continente durante la Guerra Fría, cambio sustancial que demandaba la definición de una política exterior de seguridad nítida y acorde con los tiempos.

El Acta Única Europea, aprobada en 1986, constituyó un hito importantísimo en la definición de la Política Exterior de Seguridad Común al ser el primer documento de este tipo que hacía referencia a la cuestión[49]. La PESC tendría como meta salvaguardar la independencia de la Unión fortaleciendo los vínculos defensivos y la seguridad de los Estados miembros; además, debería promover la cooperación internacional y luchar por el respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales y los valores compartidos por todos los miembros de la Unión. Como era previsible, en los primeros años noventa surgieron las diferencias de criterio entre aquellos que, como Gran Bretaña, los Países Bajos y Portugal, sostenían que la OTAN debía seguir siendo el pilar defensivo de Europa y los que, como Alemania, Francia o Bélgica, afirmaban que

la Unión Europea tendría que desarrollar una política propia de seguridad y defensa y proporcionar para ello los instrumentos adecuados, uno de los cuales era necesariamente la integración de la Unión Europea Occidental en la Unión Europea[50].

La reactivación de la UEO durante los primeros años noventa fue un hecho constatado[51] al que, evidentemente, no fueron ajenas las profundas transformaciones provocadas después de 1989. El 19 de junio de 1992 la pequeña localidad de Petersberg, cerca de Bonn, sirvió de punto de encuentro para una reunión de ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa convocada para abordar su futuro en general y la cuestión de la mejora y ampliación de sus operaciones en particular. Los máximos responsables ministeriales seguían así el mandato de la «Declaración de Maastricht sobre el papel de la UEO y sus relaciones con la UE y la OTAN», de 10 de diciembre de 1991, emitida para aclarar los cometidos de la Unión Europea Occidental en el futuro. Las decisiones tomadas en Petersberg resultaron trascendentales para la organización al dotarla de unidades militares operativas cuya participación en escenarios conflictivos tendría como fin desarrollar tareas humanitarias, de pacificación y de preservación de la paz. La decisión última de tomar parte en estas misiones (las conocidas a partir de entonces como «misiones Petersberg») correspondería a los Estados miembros de acuerdo con sus legislaciones al respecto[52].

En esta misma línea de actuación, el Consejo de Ministros de la UEO celebrado en Luxemburgo el 9 de mayo de 1994 formuló la denominada «Declaración Kirchberg», según la cual «los medios y capacidades colectivos de la alianza podían estar bajo el mando operativo de la UEO, fortaleciendo así la vertiente defensiva de la Unión Europea»[53]. Otro de los elementos importantes de la declaración se encontraba en la creación de un estatuto de «asociación» para los países de la Europa central, oriental y báltica que ya habían firmado los Acuerdos Europeos con la Unión, estatuto que complementaría el de cooperación con la OTAN (sobre todo, dentro de ella, a través de la Asociación para la Paz).

Sin negar las dificultades para concretar una política de seguridad y defensa común dados los diferentes –y en ocasiones encontrados–

intereses de los Estados miembros, no puede dudarse que la Unión Europea trató de establecer unas pautas de actuación comunes como garantes de la seguridad de las nuevas fronteras y de la estabilidad interna en los países recién incorporados. Cerrado el último proceso integrador con la adhesión de Rumanía y Bulgaria, las consecuencias fueron beneficiosas tanto para la UE en su conjunto, al emerger como actor de mayor peso específico en el concierto internacional, como para los países de la antigua Europa del Este, cuyos antagonismos se matizarían en el marco de la Europa unida.

a) Los retos a la estabilidad interna en los nuevos socios comunitarios

La historia del proceso de ampliación de las Comunidades Europeas puso de manifiesto la inequívoca voluntad de estas de avanzar en el camino abierto por el Tratado de Roma cuando exponía en su preámbulo el objetivo de alcanzar «una unión cada vez más estrecha de los pueblos de Europa», afirmación ambigua pero a la vez de gran calado para el futuro en un momento en el que no se vislumbraba en el horizonte cercano la posibilidad de que desapareciese el bloque soviético. Las declaraciones de los diferentes Gobiernos europeos, de la CEE y luego de la UE, a favor de la ampliación permitían entender este proceso como ineluctable y sin marcha atrás en función de las concepciones sobre la Unión Europea defendidas por los «padres fundadores» de las Comunidades; por otra parte, sin embargo, el proceso resultó evidentemente mucho más problemático y complejo de lo que dichas declaraciones permitían entrever.

Desde que en la década de los noventa los antiguos países sovietizados del Este y las repúblicas bálticas mostraran su interés por incorporarse a la Unión Europea, el proceso de ampliación sirvió a la vez para fortalecer la estabilidad política y para desactivar antiguos problemas territoriales y de relaciones entre comunidades nacionales; se trataba, pues, de un proceso de ampliación que

difería mucho de los anteriores y no sólo por el número de candidatos, sino porque buscaba dar respuesta a un sistema geopolítico europeo surgido como consecuencia de la caída de los regímenes comunistas[54].

Algunas regiones pueden servirnos de ilustración para comprobar, por una parte, cómo las grandes transformaciones operadas tras el final de la Guerra Fría –y, en concreto, una vez extinguido el dominio soviético en el este de Europa– hicieron estallar conflictos hasta entonces más o menos latentes y, por otra, cómo el factor de estabilización introducido por las Comunidades Europeas sirvió para neutralizarlos. Por ejemplo, en Transilvania, como en otras zonas fronterizas semejantes, la caída de los sistemas comunistas en Europa se vivió con la esperanza de que los nuevos regímenes apostaran por la defensa de los derechos y libertades básicas de las poblaciones étnicamente minoritarias[55]. El poder tiránico ejercido en Rumanía por Ceauşescu se había mostrado implacable con cualquier atisbo de reivindicación nacionalista magiar, de ahí que su muerte sirviera para alentar una movilización amplia de esta población asentada en el norte del país. El régimen había prohibido a los húngaros que visitaban a sus familiares en territorio rumano alojarse con ellos en sus viviendas; en 1967 había suprimido la provincia autónoma y en la década siguiente había procedido a «rumanizar» el territorio con un aporte de inmigrantes obligados a instalarse en aquella zona y acabar así con la idiosincrasia de la población autóctona.

Por todo ello, una vez llegado el momento, las fuerzas sociales húngaras se reorganizaron inmediatamente: en la Navidad de 1989 nació en Cluj la Alianza Democrática de los Húngaros de Rumanía, que coordinaría la acción de dieciséis organizaciones de muy diversa impronta ideológica bajo la dirección del ya mencionado László Tökés, uno de los líderes de la revuelta contra el *Conducător*[56]. Después, en febrero de 1990, las manifestaciones pacíficas en Târgu Mureş a favor de la reincorporación de la lengua húngara al sistema formativo fueron recibidas con violencia por grupos vinculados a Vatra Românească, el partido de extrema derecha rumano: los enfrentamientos se saldaron con la muerte de ocho personas y unos

trescientos heridos[57]. La respuesta del Gobierno no fue precisamente tranquilizadora, pues este culpó de los luctuosos hechos a la población húngara, la cual, en su opinión, intentaba desestabilizar la zona y fomentaba con este fin el odio entre sus habitantes. Con tal pretexto Bucarest tomó una serie de medidas para amordazar a los descontentos magiares, erosionando sus derechos. El acto más simbólico de todos fue la unificación de las universidades húngara y rumana de Cluj en un único centro superior supuestamente multicultural que, en realidad, descuidaba la enseñanza en húngaro[58]. Por fortuna, la victoria electoral de Emil Constantinescu al frente de una coalición de partidos de la derecha moderada favoreció a partir de 1996 el entendimiento con la minoría húngara hasta el punto de que el partido de esta, la ya citada Alianza Democrática, apoyó la gestión gubernamental hasta el año 2000. De hecho, el 16 de septiembre de 1996 los gobiernos de Bucarest y Budapest firmaron un Tratado de Buena Vecindad por el que ambas partes aceptaban cumplir el Tratado Marco para la Protección de las Minorías Nacionales.

Como segundo ejemplo de este tipo de consecuencias de la nueva situación, también fue preocupante en un primer momento la situación de los húngaros en Eslovaquia (unas seiscientas mil personas), sobre todo después de la llegada al poder del Movimiento por la Eslovaquia Democrática. Su dirigente, el nacionalista Vladimir Mečiar, ganó las elecciones en junio de 1992 y en octubre de 1994 y, por consiguiente, fue nombrado jefe de Gobierno en ambas ocasiones. Aunque la Constitución de 1992 garantizaba a la población húngara el derecho a usar su propia lengua al amparo del artículo sexto, los derechos lingüísticos de estos húngaros fueron pisoteados a menudo[59] y también, incluso, su identidad personal (hubo un proyecto frustrado de obligarlos a eslavizar sus apellidos).

Las instituciones europeas se mantuvieron a la expectativa del giro que podían tomar los acontecimientos, y los temores, finalmente, no resultaron infundados. En noviembre de 1995 el Parlamento de Bratislava aprobó una ley sobre el uso del idioma del Estado –el eslovaco– que, aunque en teoría no conculcaba el derecho sobre el uso de lenguas minoritarias contemplado en la Constitución, sirvió

en la práctica para perjudicarlo. La comunidad húngara, muy homogénea culturalmente, apenas acusó el golpe. Nadie ponía en duda su ciudadanía eslovaca ni su derecho a participar en la vida política, social o económica del país; lo preocupante era la actitud gubernamental favorable a generar conflictos innecesarios ya que «para algunos eslovacos las relaciones entre etnias eran entendidas como si estuvieran en un equilibrio inestable, pues la mejora de las condiciones de una comunidad sólo podía conseguirse a expensas de otra»[60].

Algunas de las reflexiones de Robert Cooper son aplicables a la seguridad europea dentro de un «orden internacional posmoderno» en el que ni la imposición de un poder imperial ni el equilibrio de poderes entre los Estados explicaría la senda que ha tomado el Viejo Continente. El final de la Guerra Fría supuso un cambio positivo en la concepción de los Estados europeos que vieron, en el acuerdo y el compromiso mutuos, mecanismos para lograr unas relaciones globales menos tensas. Las «medidas para infundir confianza» tales como el intercambio más fluido de información, el conocimiento de las debilidades propias y ajenas, las prácticas militares conjuntas, la armonización de políticas económicas, sociales o de otro tipo; en definitiva, la relación más estrecha entre antiguos rivales o incluso enemigos tendía a rebajar la conflictividad. El aumento subsiguiente de la seguridad dependería de la pérdida de soberanía a favor de una institución supranacional –la Unión Europea, en este caso– en la que los Estados miembros fueran depositando la confianza y cediendo competencias a favor de la seguridad común[61].

Ciertamente, la ampliación de la Unión a los países del Este generó en principio mayores problemas de seguridad, puesto que «quizá la diferencia más importante entre esta ampliación y las anteriores se encuentra en sus implicaciones geográficas»[62]. En efecto, la nueva situación geopolítica, la cercanía a la Federación Rusa y los problemas históricos de fronteras y minorías se habían incorporado al seno de la Unión y podían perjudicar a la ya de por sí débil Política Exterior y de Seguridad Común. Sin embargo, a la hora de pronunciarse sobre cuestiones de seguridad y defensa la Unión

Europea ampliada iba a manifestarse en numerosas ocasiones con una única voz, fortaleciendo así su proyección y peso internacionales. En segundo lugar, también ayudó a desactivar en los países del Este buena parte de los problemas fronterizos y, sobre todo, étnicos gracias a una presión eficaz sobre los Gobiernos para que eliminaran prácticas discriminatorias y cumplieran los criterios de Copenhague sobre protección de minorías. Finalmente, desde una perspectiva también histórica, la influencia de Rusia y las potencias occidentales (especialmente Francia, Gran Bretaña y Alemania) había resultado nefasta para la convivencia entre estos países: las presiones ejercidas por aquellas, cuyos intereses nacionales primaban, habían ocasionado a estos el desarrollo de conflictos y favorecido los sentimientos de rechazo cuando no de odio mutuos. Por ello, a instancias de las organizaciones europeas, los acuerdos bilaterales firmados entre los países de Europa central y oriental incluyeron una cláusula de reconocimiento mutuo de inviolabilidad de las fronteras para acabar de raíz con sueños irredentistas y neutralizar en la medida de lo posible las reivindicaciones de los partidos extremistas. Este fue, por ejemplo, el sentido del tratado húngaro-ucraniano de 1993 o de los que Rumanía y Eslovaquia firmaron, cada una por su parte, con Hungría en 1995, tratados que también salvaguardaban los derechos individuales de las minorías nacionales a expresarse y educarse en su lengua vernácula[63].

La Unión Europea fue consciente de la importancia de solucionar los conflictos étnicos y fronterizos presentes en las relaciones entre algunos países del Este antes de que estos pasaran a integrarse[64]. Si, a pesar de las dificultades ya señaladas, quería desarrollar su pilar estratégico de seguridad y defensa, no podía permitirse asumir riesgos potenciales o reales que contribuyeran a extender entre la población y los Gobiernos nacionales una sensación de inestabilidad dentro de sus fronteras. Con este fin, durante la década de los noventa las instituciones europeas pusieron en marcha una serie de medios a través de los cuales trataban de anular las tendencias nacionalistas más extremas, surgidas en los países del Este en los primeros momentos de la transición democrática como rechazo al

internacionalismo soviético y como vehículo de movilización popular. Las secuelas de esta tendencia se comprobaban en la formulación de discursos etnonacionalistas que ponían trabas a la libertad de las minorías presentes dentro de estos países, y por ello los respectivos Acuerdos Europeos firmados a partir de 1991 entre la CEE o la UE y los países candidatos incluyeron en su artículo sexto el «respeto de los principios democráticos y de los derechos del hombre enunciados en el Acta Final de Helsinki y en la Carta de París para una nueva Europa»[65].

De este modo, el Tratado Marco para la Protección de las Minorías Nacionales suscrito por el Consejo de Europa el 1 de febrero de 1995 avalaba la necesidad de que los países firmantes reconociesen la diversidad cultural y fomentasen el espíritu de tolerancia y concordia que debía presidir las relaciones entre comunidades nacionales diferenciadas dentro del Estado; su artículo primero comenzaba afirmando que «la protección de las minorías nacionales y los derechos y libertades de las personas pertenecientes a esas minorías forma parte integral de la protección internacional de los derechos humanos y, por lo tanto, queda bajo el amparo de la cooperación internacional».

El respeto de los derechos de las minorías, la seguridad europea y el reconocimiento de las fronteras existentes articularon el Pacto de Estabilidad para Europa firmado en 1995 por cincuenta y dos Estados miembros de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa). Unidos a las recomendaciones de la Comisión y el Parlamento Europeos, estos documentos resultaron esenciales al influir en los líderes políticos de la Europa central, oriental y báltica y lograr que abandonasen las inclinaciones más nacionalistas y adoptasen una postura pragmática como medio para ingresar cuanto antes en el club europeo. La misión pacificadora de la UE también ejerció esta presión crucial al incluir en los criterios políticos de Copenhague la defensa de las minorías[66].

En definitiva, la Unión Europea desempeñó un papel de trascendencia histórica al atajar problemas de enorme potencialidad conflictiva relacionados con las minorías nacionales y las cuestiones fronterizas en países que en general, junto a su deseo de integrarse,

mostraron gran seriedad a la hora de poner solución a asuntos tan delicados. Por otra parte, la incorporación progresiva de la Europa central, oriental y báltica a la política defensiva europea y atlántica sirvió para romper el marco geoestratégico de la Guerra Fría y propiciar un clima de entendimiento con la Federación Rusa[67]. Se presentaba, además, un futuro algo más seguro y estable en esta frontera oriental de la Unión, allí donde cabía esperar que el asentamiento del Estado de derecho y el respeto de las libertades fundamentales permitieran una colaboración más estrecha con Moldavia, Ucrania y Bielorrusia.

b) La nueva frontera oriental de la Unión Europea

En efecto, una de las consecuencias más relevantes de los cambios producidos a partir de 1989 fue la movilidad de la frontera oriental de las Comunidades Europeas. La voluntad de los países sovietizados de adherirse a estas extendió los límites del territorio comunitario hasta antiguas repúblicas de la URSS que habían accedido a la independencia mediante procesos beneficiosos para las elites comunistas, lo suficientemente hábiles como para reconducir la situación a favor propio. Este hecho había llevado a la formación de regímenes muy inestables, escasamente democratizados, a menudo étnicamente heterogéneos y con una gran dependencia económica del exterior, sobre todo de la Federación Rusa: nos referimos a las repúblicas de Moldavia, Ucrania y Bielorrusia.

En el primero de estos casos, salvo en los momentos inmediatamente posteriores a la euforia de la independencia, la población moldava perdió rápidamente el interés por unirse a Rumanía. Económicamente, nada podía ofrecer un país tan atrasado y con unas elites políticas heredadas de Ceauşescu que entre 1991 y 1992 habían iniciado un proceso liberalizador más formal que real. Por ello, en marzo de 1995 un 95 por 100 de los moldavos apostó por un país soberano con las fronteras reconocidas por la ONU.

De los seiscientos mil habitantes de la región oriental moldava de Transnistria (también denominada Transdniéster), prácticamente la mitad eran eslavos cuando se produjo el principio del fin de la Unión Soviética. En 1990, adelantándose a los acontecimientos, la población rusófona proclamó su independencia de la República

Socialista Federativa Moldava para mostrar inmediatamente su voluntad de mantener los vínculos con la URSS[68]. Sin embargo, esta rebelión de la población eslava no parecía relacionada con la conculcación de sus derechos, ya que el Soviet moldavo contaba con representantes del Transdniéster; es más, en realidad fue una cuarta parte de la población de este territorio la que consiguió hacerse con el poder e instaurar un «régimen» profundamente autoritario: si consideramos el censo soviético de 1989, sólo el 25 por 100 de la población era rusa frente al 28 por 100, ucraniana y el 40 por 100, moldava[69].

En vano reaccionaron las autoridades de Chisinau con llamadas constantes a la negociación y en vano entraron en contacto con los líderes secesionistas. En octubre de 1991 llegaron, incluso, a crear una comisión de conciliación que ante la beligerancia de los eslavos dejaría de funcionar al mes siguiente. Consciente de la necesidad de mantener relaciones de buena vecindad con Rusia, el Gobierno moldavo no opuso una política de «rumanización» a las provocaciones de la población de la margen izquierda del Dniéster e insistió en que se respetasen las lenguas y culturas minoritarias. El 24 de febrero de 1992 el presidente Mircea Snegur anunció la concesión de la carta de ciudadanía moldava a todos los residentes en el país, incluidos los soldados soviéticos allí establecidos. De esta forma cortaba de raíz cualquier posibilidad de establecer leyes de ciudadanía discriminatorias parecidas a las aprobadas por aquellas mismas fechas en Estonia o Letonia.

Al hacer caso omiso de las peticiones del Gobierno moldavo, el enfrentamiento armado fue inevitable. Tras una breve guerra entre marzo y junio de 1992, el Estado hubo de aceptar la situación. No podía ser de otra manera, dada su palmaria inferioridad ante el XIV Ejército Soviético, el cual, acantonado en la zona del Transdniéster, apoyó a los sublevados. Este cuerpo de ejército había sido un eslabón importante en el engranaje militar de la URSS; disponía de misiles nucleares tácticos y, en caso de guerra abierta, debía avanzar por los Balcanes para controlar el estrecho del Bósforo y los Dardanelos. Aunque en abril de 1992 el presidente Yeltsin asumió el mando ruso del XIV Ejército y su tamaño y operatividad se vieron

muy reducidos desde entonces, las autoproclamadas «autoridades» de la «República del Transdniéster» siguieron utilizando depósitos de munición y armas convencionales que desde la disolución de la Unión Soviética estaban fuera de control o en manos de organizaciones paramilitares prorrusas de este territorio. Todo ello repercutió en la multiplicación de dificultades a la hora de lograr a corto plazo una solución pacífica para el conflicto.

Las conversaciones continuaron, no obstante, entre Moscú y Chisinau. De hecho, desde el Kremlin se había lanzado la idea de mantener la unidad estatal moldava dentro de la cual Transnistria mantuviera un estatuto especial de carácter autónomo, propuesta que, obviamente, no había podido surtir efecto. El Soviet Supremo del Transdniéster defendió una confederación de los tres territorios que fue inmediatamente rechazada por las autoridades moldavas. Tampoco la misión de la OSCE en Moldavia, establecida el 4 de febrero de 1993, dejó lugar a dudas sobre la necesidad de llegar a un acuerdo basado en el principio de la integridad territorial del Estado moldavo. Su falta de operatividad se debió a la escasa cooperación de los cabecillas insurgentes: la OSCE no consiguió el control de los depósitos de armas y municiones para destruirlos y, aunque mantuvo observadores en algunas consultas electorales y favoreció encuentros entre políticos y expertos para elaborar informes sobre la situación real de los derechos humanos en aquella zona, sus críticas a las violaciones constantes de la libertad de información, educación y participación política en el Transdniéster tuvieron poca repercusión.

El 21 de octubre de 1994 los gobiernos de Rusia y Moldavia firmaron un acuerdo de retirada escalonada de las tropas de este último país en un plazo no superior a tres años, acuerdo que se desbarató después de que la Duma rusa lo rechazase y declarase la región de Transnistria «zona de interés estratégico ruso»[70]. En esta misma línea de actuación y en el transcurso de los dos años siguientes la Duma también aprobó diversas medidas económicas y políticas de cooperación con los rebeldes. A finales de 1995 la «República del Transdniéster» llegó, incluso, a aprobar una Constitución después de que en junio de ese mismo año la población

participara en un referéndum de unión con Rusia y Bielorrusia que iba a resultar favorable por el 65 por 100 de los votos. El gobierno del «presidente» Igor Smirnov, caudillo independentista elegido en 1996, desarrolló una política firmemente intervencionista y antidemocrática con el fin de evitar la oposición de los habitantes moldavos del territorio que controlaba.

El enconamiento provocó el retraso de la OSCE en conseguir que Rusia y Ucrania, las dos potencias más implicadas, reconocieran la integridad territorial de Moldavia. En el memorándum firmado el 8 de mayo de 1997 se aceptaron las fronteras de 1990, acto meramente formal puesto que en ningún momento fueron ratificadas por los secesionistas del Transdniéster. Además, el texto pretendía normalizar las relaciones entre la república de Moldavia y su región rebelde con el fin de mejorar los intercambios comerciales y potenciar las inversiones en ambas partes, en gran medida complementarias, ya que la industrializada Transnistria presentaba un paisaje económico muy diferente del agrícola sur moldavo, y en todo caso uno y otro necesitaban una mínima estabilidad para empezar a prosperar.

Por lo que se refiere a Crimea, su Soviet aprobó en noviembre de 1990 la celebración de un referéndum sobre su cambio de estatuto administrativo de región *(oblast)* a República Socialista Autónoma y el 12 de enero de 1991 más del 93 por 100 de los votantes aceptaron la propuesta[71]. Por detrás de esta transformación administrativa latía el temor de que el territorio fuera controlado por una Ucrania independiente y perdiera así sus vínculos tradicionales con Rusia. En efecto, el 6 de febrero de 1992 el Parlamento ucraniano rechazó frontalmente la petición rusa de soberanía sobre Crimea alegando que el traspaso efectivo de esta se había hecho legalmente en 1954. Los problemas de convivencia no tardaron en aparecer, primero, con el regreso paulatino de la población tártara –que ya en 1995, con 250.000 individuos, constituía el 10 por 100 del total de la población de la península[72]–; después, con la radicalización de los partidos prorrusos en aquel territorio: a principios de 1994 había accedido a la presidencia de Crimea Yuri Meshkov, dirigente del Movimiento Republicano de Crimea, que

inmediatamente anunció que el 27 de marzo de ese mismo año, coincidiendo con las elecciones parlamentarias ucranianas, se celebraría un referéndum sobre la independencia.

La amenaza de intervención armada lanzada desde Kiev arredró al líder independentista, y la derrota de los nacionalistas ucranianos de Leonid Kravchuk en las elecciones llevó a la presidencia de la república de Ucrania a Leonid Kuchma, líder de un grupo de formaciones de izquierda partidarias de un mejor entendimiento con la Federación Rusa. Gracias a todo ello comenzaron a relajarse las tensas relaciones con Crimea. Con la nueva realidad política parecía llegado el momento de alcanzar un acuerdo sobre la Flota Soviética del Mar Negro, que tenía su principal base en aquella península y suponía motivo de disputas constantes entre Rusia y Ucrania una vez disuelta la URSS. El clima de cordialidad entre ambas después de la victoria de Kuchma se plasmó en un primer acuerdo sobre la división de la flota entre ellas, acuerdo que, aunque no se llevó a la práctica, propició sin embargo un diálogo más fluido y un segundo acuerdo, esta vez definitivo, que se firmó el 28 de mayo de 1997[73]. El resultado, por traspaso o compra, fue que Rusia mantuvo en su poder las cuatro quintas partes de los buques de guerra. Sebastopol, el antiguo cuartel general de la Flota Soviética del Mar Negro, pasaba a control ucraniano aunque durante veinte años los rusos podrían mantener estacionados unos efectivos navales limitados.

La nueva frontera este de la Unión Europea ampliada no era, pues, exclusivamente geográfica, sino también una «cuestión de política e ideología»[74], una «zona gris» constituida por Bielorrusia, Ucrania y Moldavia, áreas en general económicamente atrasadas, con serios problemas para consolidar el proceso de democratización tanto por conflictos étnicos y territoriales muy acusados como por la ominosa presencia de auténticos dictadores. Era reveladora la deriva de la primera de ellas: el 10 de julio de 1994 el 82 por 100 de los votantes bielorrusos otorgaron su confianza a Alexander Lukashenko para la presidencia de la república. Muy popular por haber sido miembro del comité anticorrupción del Parlamento entre 1993 y 1994, sus intentos de estabilizar la economía y mejorar el nivel de vida de la población no iban a fructificar, aunque la unión económica

con Rusia resultaría beneficiosa. La conculcación de los derechos humanos, la persistencia de la planificación productiva y el control gubernamental de la economía, de los medios de comunicación y de la vida cultural fueron notas características de las progresivas tendencias dictatoriales del régimen de Lukashenko, que en ocasiones llegó a reconocer su admiración por Stalin y Hitler.

Todas estas fuentes constantes de inestabilidad configuraron, en definitiva, un rostro de Jano vuelto por un lado hacia la Federación Rusa, de la que en buena medida dependían tanto económica como energéticamente y con la que secularmente habían mantenido firmes lazos comerciales y culturales, mientras que con la otra cara miraba con atención, pero también con recelo, las oportunidades que ofrecía la Unión Europea. De este modo, la frontera este de la Unión se convirtió en un reto importante para la seguridad y estabilidad de esta[75]. El hecho de que estos territorios constituyeran ahora una zona fronteriza y ajena a los nuevos vínculos estratégicos de la UE exigía de esta el compromiso de seguir apoyando sus transformaciones internas, potenciar la cooperación y disipar los temores de conflictividad latente.

El polvorín yugoslavo

El ocaso del ideal yugoslavista

Al margen de las justificaciones basadas en la historia o en las diferencias lingüísticas y religiosas, lo cierto es que la obra del mariscal Tito en la república federativa de Yugoslavia había resultado fallida a la hora de lograr un equilibrio socioeconómico entre las distintas entidades territoriales[76]. Si Eslovenia representaba en 1990 en torno al 8 por 100 de la población de la Federación, su peso demográfico era despreciable comparado con su potencia exportadora: casi el 30 por 100 del total yugoslavo frente a, por ejemplo, el 4 por 100 de Macedonia. El nivel de alfabetización en Eslovenia era muy elevado, acercándose al 100 por 100, mientras Serbia, con la mitad del PIB de aquella, sobrepasaba el 10 por 100

de iletrados. Por otra parte, la mortalidad infantil superaba en Kosovo el 50 por 1.000 frente al 12 por 1.000 de Croacia. Cualquier dato cruzado que se manejase abriría un profundo abismo entre la realidad global del país y las posibilidades de desarrollo en cada una de las repúblicas que lo constituían. No era extraño, pues, que la unidad comenzara a fracturarse una vez desaparecido en 1980 Josip Broz Tito, su líder histórico, a los ochenta y siete años de edad[77].

A finales de la década de los ochenta Yugoslavia estaba, pues, desarticulada socialmente y fragmentada en lo nacional. Además, los intentos de estabilizar la economía mediante la supresión de las prácticas autogestionarias, intentos llevados a cabo por los distintos Gobiernos federales durante aquellos años, tampoco alcanzaron los objetivos previstos de preservar la unidad económica para iniciar la transición sobre pautas del libre mercado occidental, sin olvidar la oposición de las repúblicas a dichos planteamientos. Ello supuso la paralización del aparato productivo y la aparición de graves desajustes económicos: crecimiento dramático del paro hasta alcanzar cifras millonarias, aumento desorbitado de la inflación y de la deuda externa, reducción drástica de la inversión y consiguiente caída del PNB, disminución de la *renta per capita* y, en consecuencia, la reducción del nivel de vida real de la población. Ante el deterioro manifiesto de la situación interna, la crisis final del comunismo vivida en Europa del Este a partir de 1989 supuso el golpe de gracia no solamente al régimen titoísta, sino también a la propia estructura del Estado federal yugoslavo, que comenzó a deslizarse por la senda de la desintegración[78].

La incapacidad de las autoridades para afrontar con energía y decisión el deterioro de la economía a lo largo de aquella década condujo tanto a incrementar la deuda con los países de la Europa comunitaria como a la emisión incontrolada de moneda y el consiguiente inicio de un proceso de inflación. En estas circunstancias, las elites comunistas de Eslovenia y de Croacia –territorios donde, por su mayor desarrollo relativo, se acusaban más los efectos de la crisis– comenzaron a jugar la baza del nacionalismo. Según ellas, los males provenían de las autoridades federales, que desde Belgrado trataban de salvar sus posiciones

privilegiadas sin importarles a qué coste, por lo que la autonomía en la toma de decisiones resultaba vital para la supervivencia de ambas repúblicas. Pronto se entremezclaron la cuestión económica y la reivindicación de autogobierno con el fácil discurso de la recuperación de las señas de identidad en forma de lengua, religión o cualquier otro signo de distinción para enfrentarlo a la corrupción y el despotismo, ahora identificados con la no tan lejana Administración federal.

También en Serbia resurgieron con fuerza los sentimientos nacionalistas, alimentados por el fiasco económico, el desempleo y la habilidad manipuladora del dirigente de la Liga de los Comunistas serbios, Slobodan Milošević[79]. El reclamo identitario movía las voluntades de millones de personas en el este de Europa y en el interior de la URSS, pero en ningún lugar venía a hacerlo con mayor radicalidad que en la Federación. Ya desde 1987 Milošević discurseaba en un fragor ininterrumpido de mítines, luciendo sin rubor los distintivos de los *chetniks* serbios, de tan infausto recuerdo desde la Segunda Guerra Mundial[80]. La exhibición del símbolo del odio contra los croatas obtenía una respuesta similar en los improperios contra musulmanes y serbios lanzados por Franjo Tudjman (Tuđman), el emergente líder de la comunidad croata.

Como era de prever, la elección de Milošević, en mayo de 1989, como presidente de la república de Serbia, y de Tudjman, un año más tarde, de la de Croacia, terminó por agravar el enfrentamiento en el seno de Yugoslavia. Llevaba Milošević un mes en el cargo cuando visitó Kosovo para asistir a la conmemoración de la mitificada batalla de Kosovo Polje contra los musulmanes, librada hacía seiscientos años. Así reafirmaba su resuelta voluntad de apoyar por todos los medios a la población serbia de la región ante cualquier atisbo de secesión kosovar.

Con el control del poder en Serbia y una influencia indiscutible en Montenegro, Kosovo y Voivodina, Milošević dio un paso adelante al reclamar un cambio profundo del texto constitucional con el fin de dotar a las instituciones serbias de una capacidad de decisión todavía mayor en el conjunto de la Federación y de anular competencias de sus provincias autónomas. Así, a lo largo de 1989

la Asamblea de Serbia introdujo en la Constitución de la república una serie de enmiendas que ponían fin a la autonomía de Kosovo y Voivodina. Las huelgas y manifestaciones de estudiantes y trabajadores albaneses convocadas a lo largo de febrero y marzo, masivamente secundadas por la población de Kosovo, se reprimieron con violencia y acabaron con el encarcelamiento de los líderes albaneses que habían incitado a la protesta.

Ante la iniciativa de Belgrado de cercenar las libertades de dichos territorios, entendida en Eslovenia y Croacia como el primer paso hacia la «Gran Serbia», estas dos repúblicas comenzaron a pergeñar un proyecto de confederación sobre la base de un sistema político flexible y descentralizado que debía empezar por la transformación de la Liga Comunista de Yugoslavia. El hecho de que en el XIV Congreso de la Liga Comunista el bloque serbio (Serbia, Montenegro, Kosovo y Voivodina) no aceptase esta reforma produjo la ruptura de la unidad en el seno de la organización y en el propio Estado yugoslavo. Cuando, en mayo de 1990, se quiso volver a reunir el XIV Congreso extraordinario, aplazado *sine die* el 23 de enero, los comunistas eslovenos, croatas y macedonios lo impidieron[81]: la Liga Comunista de Yugoslavia había dejado de existir y con ella, en la práctica, también las demás instituciones de la Federación.

A lo largo de 1990 la desarticulación de la liga llevó aparejada la descomposición del poder comunista en el seno de la Federación, así como en todas las repúblicas salvo en Serbia y Montenegro, donde mantuvo la hegemonía aunque bajo denominación socialista. Al mismo tiempo surgieron nuevas formaciones políticas de toda índole –desde liberales y reformistas hasta neocomunistas conservadoras y, de modo destacado, las de carácter nacionalista, tanto moderadas como radicales– cuyo objetivo era la celebración de elecciones libres y pluralistas en cada una de las repúblicas. Con la puesta en marcha de dicho proceso, la desintegración de la Federación era un hecho consumado.

Una vez celebrados los comicios de 1990, los representantes de estas formaciones adquirieron de pronto la legitimidad de las urnas mientras los dirigentes federales pasaban de repente a ser «no

representativos» de un pueblo que ya había dejado de identificarse con los valores del antiguo Estado común yugoslavo. Este «diferencial de legitimidad» entre unos y otros contribuyó a radicalizar el proceso de ruptura institucional y explica el fracaso que cosechó en los comicios de 1990 el Partido Reformista, fundado por el primer ministro Ante Marković y de marcado carácter yugoslavista.

En efecto, los resultados electorales dieron el triunfo a las propuestas nacionalistas y mostraron que las instituciones federales habían perdido toda legitimidad y ya no tenían sentido. Ello llevó a que eslovenos y croatas volvieran a insistir, durante el otoño de 1990 y la primavera de 1991, en la necesidad de la refundación del Estado con una estructura confederal, proyecto rechazado por los serbios y montenegrinos, que seguían apostando por mantener la Federación aunque estaban dispuestos a aceptar una cierta autonomía cultural para las repúblicas. Fue imposible conciliar perspectivas tan dispares: los serbios advirtieron a las demás repúblicas que modificarían los límites territoriales con el objetivo de englobar a todos los serbios en un mismo Estado si el proyecto confederal salía adelante; por su parte, eslovenos y croatas no dudaron en señalar que romperían todo vínculo con la Federación si el Estado yugoslavo mantenía inalterado su actual marco constitucional. Así, pues, las negociaciones entraron en un callejón sin salida y al finalizar el primer trimestre de 1991 quedaron interrumpidas. Los ánimos se enconaron en marzo, cuando Milošević se negó a reconocer la autoridad de la presidencia colectiva y dos meses después, en mayo, el bloqueo serbio a la elección del croata Stjepan Mesić para dirigir la más alta magistratura del país paralizó el funcionamiento de la Federación.

Un último intento por resolver la crisis corrió a cargo de las repúblicas de Bosnia-Herzegovina y Macedonia. Los dirigentes de estas dos comunidades nacionales no apoyaban el plan esloveno-croata de disolver la Federación, pero tampoco estaban dispuestas a mantenerse dentro de un Estado común dominado por Serbia. El 6 de junio de 1991 Bosnia-Herzegovina y Macedonia presentaron un proyecto alternativo, una especie de fórmula de compromiso que apostaba por mantener los vínculos entre las comunidades

sudeslavas dentro de un Estado común de estructura mixta de tipo federal y confederal. Finalmente, y a pesar de los esfuerzos, tampoco se logró un principio de acuerdo y el plan fue rechazado.

El estallido de las primeras tensiones internas en Yugoslavia no pareció preocupar demasiado a sus vecinos occidentales. A comienzos de 1990 la euforia se había generalizado entre las cancillerías europeas[82]. La Guerra Fría parecía entrar en una vía de desaparición rápida y Occidente se erigía en campeón de aquella victoria. La evolución de los acontecimientos en la Europa del Este, la precariedad soviética, la más que probable inminencia de la unificación alemana y la fuerza del proyecto de integración europea jugaban a favor del poderío económico y militar de Estados Unidos y de Europa.

En este ambiente de optimismo ante el futuro inmediato, los Gobiernos europeos no escaparon a la fascinación que les producía contemplar la descomposición del sistema socialista, sin poder imaginarse que el inicio del fin en Yugoslavia iba a revestir unos rasgos mucho más trágicos que en el resto del escenario de influencia soviética. En cambio, Washington se mostró más prudente. Todavía en junio de 1991 James Baker, secretario de Estado norteamericano, afirmó en Belgrado que su Gobierno estaba dispuesto a mantener una Yugoslavia «democrática y unida». Como si sus palabras hubieran servido de catalizador en el proceso contrario, pocos días después, como veremos, Eslovenia y Croacia daban un paso decisivo hacia la independencia al proclamar unilateralmente su separación de Yugoslavia[83].

En aquel verano de 1991 Eslovenia fue, en efecto, la primera en conseguir dejar a un lado a sus repúblicas federadas hermanas[84]. Poco duraron las refriegas entre el ejército yugoslavo y los independentistas: bajo el auspicio de las Comunidades Europeas, la «Guerra de los Diez Días», como pasaría pronto a ser conocida, terminó el 7 de julio con los Acuerdos de Brioni, otro éxito en el haber de las autoridades de Bruselas, siempre dispuestas a contribuir al entierro del Estado articulado por el mariscal Tito[85]. Sin embargo, la vía pactada no iba a servir para dar el proceso por concluido, como habían confiado los socios europeos. La apertura de

la caja de Pandora trajo desastrosas consecuencias para los Balcanes y desbarató la idea de la CEE de actuar como mediador entre las repúblicas yugoslavas para dotar de seguridad a la región. El optimismo no tardó en dar paso a una sensación de incapacidad para operar de manera conjunta y clara ante los acontecimientos que se iban a desencadenar.

A finales de año Bruselas intentó favorecer un proceso ordenado de cambio para una Yugoslavia en trance de desaparición. El plan de lord Carrington proponía que las Comunidades Europeas apoyasen la voluntad de las repúblicas integradas en la Federación bien para independizarse, bien para continuar dentro de ella según fórmulas pactadas. En todo caso, debía quedar siempre completamente garantizado el respeto a los derechos humanos y, muy especialmente, en aquel contexto, la defensa de las minorías. Sin embargo, el 15 de diciembre el ministro alemán de Exteriores Hans-Dietrich Genscher sorprendió a sus colegas al afirmar en el transcurso de una reunión que su país reconocería la independencia de Eslovenia y Croacia al margen de las decisiones adoptadas por sus socios: para disgusto de Francia, la nueva Alemania mostraba su determinación de desempeñar un papel relevante en el nuevo escenario abierto en Centroeuropa y los Balcanes. Faltaban pocas semanas para firmar en Maastricht el Tratado de la Unión Europea y el resto de los socios comunitarios, convencidos de que la Federación se extinguía irremediablemente, se abstuvo de elevar el tono de los reproches a las autoridades alemanas por un hecho que consideraban prácticamente consumado.

Por su parte, dos meses antes, el 3 de octubre de 1991, las autoridades de Serbia y Montenegro habían excluido de la presidencia colectiva a los representantes de las cuatro repúblicas independentistas (Croacia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia y Eslovenia, que ya era independiente *de facto*), se habían hecho con el control de la misma –conculcando, de nuevo, la Constitución de 1974– e, invocando el artículo 316 de la Carta Magna, relativo al «peligro de guerra inminente», habían decretado unilateral e ilegalmente el «estado de guerra», que suponía la ruptura irreversible de Yugoslavia en dos partes fatalmente enfrentadas

entre sí. Este golpe de mano encubierto suponía un atentado a la legalidad de la Federación, reducida ahora al bloque serbio tras despojar este a las restantes repúblicas federales de sus derechos constitucionales.

El último episodio de la desarticulación se produjo en noviembre: cuando Milošević, presidente de Serbia y hombre fuerte de la situación, rechazó los planes de la Comunidad Europea para poner fin al conflicto yugoslavo, el primer ministro Marković abandonó su cargo y certificó así la defunción de la República Socialista Federativa de Yugoslavia. En el otoño de 1991, con la parálisis sufrida por las principales instituciones federales, la Yugoslavia postitoísta había dejado de existir. En palabras de Dušan T. Bataković, la desintegración de Yugoslavia constituía «una victoria absoluta del principio nacional y un fracaso de todos los demás sobre los cuales se fundamenta la Europa moderna, sobre todo, aquellos económicos y democráticos»[86].

Serbia y la pequeña Yugoslavia

En la república de Serbia, lo mismo que en Montenegro, el proceso de cambio político hacia el pluralismo estuvo dominado por los antiguos comunistas. En las elecciones celebradas en Serbia los días 9 y 23 de diciembre de 1990 la antigua Liga Comunista, rebautizada como Partido Socialista de Serbia, logró la victoria con el 45 por 100 de los votos al alcanzar la mayoría absoluta en el Parlamento unicameral serbio (194 escaños de un total de 250); el segundo lugar, a gran distancia del anterior, correspondió al Partido de la Renovación, movimiento de carácter nacionalista. También en las elecciones presidenciales triunfó el hombre fuerte del Partido Socialista, Slobodan Milošević, que obtuvo el 65 por 100 de los votos en la primera vuelta, si bien en Kosovo sólo participó el 15 por 100 de la población con derecho a voto, al preconizar la abstención la oposición albanesa.

En Montenegro, la victoria en los comicios de diciembre de 1990 correspondió a la Liga Comunista montenegrina (reconvertida en

1992 en el Partido de la Democracia Socialista) al conseguir el 60 por 100 de los votos y la mayoría absoluta en la Asamblea (83 escaños de un total de 125). Al mismo tiempo, el líder de la liga, Momir Bulatović, estrechamente vinculado a Milošević –que lo había apoyado para hacerse con el control del país en enero de 1989– fue elegido presidente de la república con el 77 por 100 de los votos. La estrategia empleada por Milošević terminó de fructificar plenamente cuando el 29 de febrero de 1992 Montenegro aceptó en referéndum la continuidad de la Federación Yugoslava, fortaleciendo así mucho más su vínculo indeleble con Serbia.

Antes de que Bosnia-Herzegovina y Macedonia proclamasen su independencia los serbios todavía consideraban que, aunque limitada al bloque serbio y a dichas repúblicas, era deseable mantener la Federación para salvaguardar tanto sus intereses geoestratégicos como los derechos de gran número de serbios residentes en aquellas. Fue en el momento en que Bosnia y Macedonia siguieron los pasos de Eslovenia y Croacia cuando el bloque serbio pretendió ser reconocido fuera de sus fronteras como el único Estado sucesor de la extinta Federación en calidad de último defensor del ideal yugoslavista. Para ello, el 27 de abril de 1992 las Asambleas Nacionales de Serbia y Montenegro aprobaron la refundación de la República Federal de Yugoslavia, lo cual «no hacía más que reanimar artificialmente un Estado jurídicamente moribundo, económicamente desarticulado y políticamente muerto»[87].

El paso siguiente consistió en intentar obtener lo antes posible el reconocimiento internacional de la nueva república. Con este fin, el 31 de mayo de 1992 se celebraron en ambos territorios elecciones cuya limpieza fue puesta en duda por el Movimiento Democrático de Serbia (DEPOS), una coalición constituida una semana antes de la convocatoria por cuatro formaciones políticas en abierta oposición al régimen de Milošević. Como cabía esperar, el resultado fue favorable al líder serbio: de los 138 escaños de la Asamblea de Diputados, el Partido Socialista obtuvo 73 actas y otras 23 logró su aliado en Montenegro, mientras que el Partido Radical Serbio de Vojislav Šešelj, representante de la derecha ultranacionalista, se convirtió en

la segunda fuerza política al ganar 33 escaños. Acto seguido, con el objetivo de dividir a la oposición y evitar cualquier crítica a su labor, Milošević apoyó como candidato para la presidencia de la república al escritor Dobrica Ćosić, antiguo disidente comunista, coautor del *Memorándum* de 1986 –documento del que hablaremos más tarde– y convertido en el más firme defensor de los valores tradicionales de Serbia, pisoteados, en su opinión, por el sistema comunista de Tito[88].

Una vez convertido en presidente, Ćosić nombró primer ministro a Milan Panić, un importante empresario de origen serbio afincado en Estados Unidos. Sin embargo, el plan ideado por Milošević para lograr el necesario respaldo internacional, delegando la representación de la República Federal en las figuras de Ćosić y Panić, no dio resultado y la Comunidad Europea, que se abstuvo de reconocer a la nueva Yugoslavia, solicitó para ella el aislamiento y la aplicación de sanciones por su política panserbia en el conflicto que estaba asolando a las demás repúblicas yugoslavas. La actitud europea de rechazo fue refrendada por la ONU: el 19 de septiembre de 1992, de acuerdo con la Resolución 777, la República Federal de Yugoslavia fue excluida de la Organización y varios meses después, el 17 de abril de 1993, la Resolución 820 autorizó el bloqueo total contra Belgrado[89].

En el interior del país, sin embargo, Milošević prosiguió la forja de un poder omnímodo sin importarle las advertencias de la comunidad internacional. En diciembre de 1992 volvió a obtener la confianza de la población, en especial la del mundo rural, al ser elegido presidente de la república con el 57 por 100 de los votos, superando claramente a su más directo rival, Panić, que sólo logró el 35 por 100. En las elecciones legislativas del mismo mes el Partido Socialista no consiguió repetir la mayoría absoluta, aunque con los apoyos de las formaciones nacionalistas siguió manteniendo el control de la cámara. El partido de Šešelj continuó siendo la segunda fuerza política mientras que la coalición opositora DEPOS, en tercer lugar, quedó sin capacidad de influir en la política diseñada por sus dos rivales. Tras haberse enfrentado con Milošević, Panić fue acusado por sus enemigos de «atentar contra los intereses del pueblo serbio»

y a finales de aquel mes, después de recibir un voto de censura en la Asamblea, renunció al cargo de primer ministro[90]. En esta situación, en las elecciones presidenciales y legislativas de Montenegro –celebradas también por aquellas mismas fechas– el Partido de la Democracia Socialista de Bulatović repitió victoria.

Con el respaldo de las urnas y el apoyo incondicional de su partido, Milošević lograba mantenerse al frente de los destinos de Serbia en los años siguientes. Además de atender a los importantes problemas exteriores derivados del conflicto balcánico y a los propiamente políticos del interior, aumentados por la creciente oposición del DEPOS, las autoridades tuvieron que afrontar de manera prioritaria la gravísima crisis socioeconómica. Durante la primera mitad de los noventa el PNB se había reducido más de una tercera parte respecto a finales de la década anterior, sin poder controlar una hiperinflación que paralizaba cualquier atisbo de desarrollo. En cuanto a las condiciones de vida y trabajo, estas se habían ido degradando al paso del deterioro de la economía, lo cual había dado lugar a un drástico descenso del nivel de vida: aumento del desempleo –que alcanzaba casi a la mitad de la población activa–, racionamiento de los productos de primera necesidad y un tercio de los habitantes en el umbral de la pobreza.

La guerra estalla en la Europa balcánica

Siguiendo los pasos de Eslovenia, Croacia no tardó en poner en marcha su propio proceso de ruptura con el estado federal yugoslavo partiendo de su derecho a la soberanía nacional. Para llevarlo a la práctica, sin embargo, tuvo que hacer frente a grandes dificultades derivadas de la oposición de los serbocroatas –especialmente en Krajina– a la desintegración de Yugoslavia.

Con el fin de despejar el camino hacia la independencia, a finales de 1989 las autoridades croatas dieron luz verde a la instauración del pluripartidismo y acordaron la celebración inmediata de elecciones. De este modo, en los comicios del 22 de abril y 5 de mayo de 1990 la Unión Democrática Croata de Franjo Tudjman

(HDZ), formación política surgida de la unión de diversos grupos de la derecha nacionalista, logró la victoria y la mayoría absoluta al obtener 209 de los 365 escaños de las cámaras de la Asamblea Nacional. Su más directo rival fue el poscomunista Partido del Cambio, que sólo logró 81 escaños; los 91 escaños restantes quedaron repartidos entre los demás grupos políticos[91]. A continuación, los días 30 y 31 de mayo la Asamblea eligió presidente de la república al exgeneral Tudjman y nombró al ya citado Stjepan Mesić, también de la HDZ, para el cargo de primer ministro. Tudjman había publicado en 1989 *La verdad histórica sin caminos,* donde minimizaba las atrocidades cometidas por las milicias *ustachi* durante la Segunda Guerra Mundial; al año siguiente declararía que «se sentía sinceramente afortunado de que su madre no fuera serbia ni judía»[92]. Sin duda alguna, ni el carácter de Milošević ni las palabras de su homólogo croata ofrecían motivos para esperar un entendimiento entre los presidentes de las recién estrenadas repúblicas vecinas.

Legitimados por las urnas, los dirigentes nacionalistas de la HDZ pronto proclamaron su objetivo de crear un «Estado nacional del pueblo croata». Las minorías del país, incluidos los serbocroatas más moderados, consideraron discriminatorios los mensajes lanzados por las autoridades de Zagreb y los recibieron con gran recelo. El 25 de julio de 1990 la Asamblea croata proclamó el derecho a la soberanía nacional, lo que no dejaba de atentar contra la legalidad aún vigente en Yugoslavia. Pocos meses más tarde, en diciembre de 1990, se votó la nueva Constitución, fundamentada en «la continuidad histórica del Estado croata», dejando de lado la trágica experiencia *ustachi.* Según el texto, la república de Croacia era un Estado «unitario e indivisible», aunque en el artículo 140 todavía se estipulaba que «la república croata continúa en el marco de la República Socialista Federativa de Yugoslavia hasta el momento en que se llegue a un nuevo acuerdo entre las distintas repúblicas yugoslavas o mientras la Asamblea Nacional croata no decida lo contrario».

Ante el cambio político que se estaba produciendo en Croacia, comunidad con una importante minoría serbia (12 por 100 del total

de la población), en el verano de 1990 se constituyó en la localidad de Srb un autodenominado «Consejo Nacional Serbio», apoyado por Belgrado y compuesto por representantes de trece municipios de la zona de Knin, en Dalmacia[93]. Inmediatamente, en clara oposición a las autoridades de Zagreb, el recién constituido Consejo proclamó la autonomía de los serbios de Croacia, que fue refrendada por la población mediante un referéndum celebrado a finales de agosto y primeros de septiembre. Meses más tarde, en diciembre, se crearon las Regiones Autónomas Serbias (RAS) de Krajina –región poblada mayoritariamente por serbios– y de Eslavonia Oriental –donde los serbios eran minoría–. En la primavera de 1991 la RAS de Krajina anunció su propósito de escindirse de Croacia para vincularse como entidad autónoma al Estado serbio, disipando así toda esperanza de lograr un acuerdo que hiciera posible la convivencia entre las distintas comunidades que vivían en Croacia.

Como en el caso esloveno, también en Croacia se celebró, el 19 de mayo de 1991, un referéndum en el cual el 90 por 100 de los votantes apoyó el derecho a la soberanía. Ante la victoria de los postulados de la HDZ, Tudjman advirtió a las autoridades de Belgrado que si los serbios de Croacia seguían en su línea «contestataria y separatista» el Estado soberano de Croacia no apoyaría la recreación de Yugoslavia sobre nuevas bases federales ni confederales. El 25 de junio de 1991 –el mismo día que Eslovenia– la Asamblea croata proclamó la independencia de la república a la vez que los serbocroatas proclamaban su escisión de Croacia y su intención de permanecer dentro del Estado yugoslavo. En estas condiciones, el conflicto nacionalista que enfrentaba a croatas y serbios de Croacia, estos últimos apoyados por Belgrado, no tardó en degenerar en guerra abierta. Para hacerle frente con el mayor respaldo posible, Tudjman nombró el 1 de agosto un Gobierno de «Unión Nacional».

El final de la guerra en Eslovenia –llamada, como hemos visto, «de los Diez Días»– no supuso la paz en la antigua Yugoslavia, sino el comienzo, en ese mismo mes de julio de 1991, de las hostilidades en Croacia. Allí, con el objetivo de activar un conflicto bélico a gran escala, los representantes de la minoría serbia organizaron milicias

de autodefensa. Contaban para ello con el apoyo de unidades militares estacionadas en la república o procedentes de Eslovenia, pertenecientes todas ellas al Ejército Federal Yugoslavo, convertido ya de hecho en ejército serbomontenegrino. A finales de año, en tan sólo unos meses, la guerra había provocado decenas de miles de muertos y un éxodo de cientos de miles de personas: huían de la depuración o «limpieza étnica» practicada por las milicias serbias, las cuales controlaban un tercio del territorio croata –sustancialmente, Krajina y Eslavonia Occidental y Oriental–: la caída en poder serbio de Vukovar el 18 de noviembre de 1991 se convirtió en el símbolo de la debacle croata[94]. Por su parte, al igual que las milicias serbias, los croatas tampoco dudaron en recurrir al procedimiento de limpieza étnica en los territorios reconquistados durante las últimas semanas de 1991, especialmente en la región de Eslavonia Occidental, tal como se denunció en el Tercer Informe Mazowiecki sobre el respeto de los derechos humanos en la antigua Yugoslavia[95]. No le faltaba razón a Jacques Krulic al afirmar que la singularidad de la evolución yugoslava entre 1989 y 1991 no era tanto la desintegración como la guerra[96].

Ante la tragedia producida por la guerra, la comunidad internacional trató de frenar el conflicto por todos los medios a su alcance. A finales del verano de 1991 la Comunidad Europea, en función de un informe de una junta jurídica de arbitraje –la Comisión Badinter– sobre la conveniencia de reconocer la independencia de Eslovenia y Croacia de acuerdo con la Carta de la ONU y el Acta Final de Helsinki, culpó a Serbia de la agresión bélica que sufría Croacia y la instó a que pusiera final a la contienda; la recomendación fue apoyada por Estados Unidos. Asimismo, los esfuerzos desplegados en la Conferencia de Paz sobre Yugoslavia, celebrada en La Haya del 7 de septiembre al 5 de noviembre de 1991, no fructificaron y, ante la negativa serbia a todo tipo de acuerdo, el comisario europeo para las relaciones con los antiguos países del Este, Hans van den Broek, dio por fracasado el intento cuando afirmó que no se podía «proseguir indefinidamente la Conferencia sobre la Paz en Yugoslavia» porque esta no era sino un mero instrumento de cobertura para proseguir los combates.

Al mismo tiempo, la ONU había comenzado su actuación en la zona. El 25 de septiembre el Consejo de Seguridad aprobó por la Resolución 713 un embargo de armas en todo el territorio de la antigua Yugoslavia y el 13 de diciembre dio el visto bueno para el estacionamiento de cascos azules en la zona e instó a las partes a poner fin a las hostilidades. El 3 de enero de 1992 serbios y croatas firmaron un acuerdo de alto el fuego, que ambas partes mantuvieron, aunque a veces precariamente. Para garantizar el cumplimiento efectivo de dicho alto el fuego, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó las Resoluciones 743 y 749 –de 21 de enero y 7 de abril de 1992, respectivamente– que autorizaban el estacionamiento en Croacia de una Fuerza Multinacional de Interposición formada por catorce mil cascos azules[97].

El 15 de enero de 1992, poco después de hacerse efectivo el acuerdo de alto el fuego, Croacia había obtenido el reconocimiento de la Comunidad Europea, inducida esta por el gesto de Alemania, que lo había hecho un mes antes; no obstante, según el informe de la Comisión Badinter, había que supeditar dicho reconocimiento a la aprobación en la Asamblea croata de la Carta de los Derechos de las Minorías. Con el establecimiento de relaciones diplomáticas plenas con Bruselas y su posterior ingreso en la ONU cuatro meses después, las autoridades croatas recibieron el respaldo internacional que necesitaban para proceder a consolidar su nueva y ansiada unidad estatal.

Una vez más, para lograr el refrendo popular a la política desarrollada por el equipo gubernamental que dirigía, el presidente Tudjman convocó a los croatas a las urnas el 2 de agosto de 1992. La victoria volvió a corresponder a la HDZ, que obtuvo el 43 por 100 de los votos y la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados; las restantes fuerzas políticas que obtuvieron representación (el Partido Social-Liberal y los poscomunistas) quedaron a gran distancia del vencedor. Como era de esperar, también en los comicios presidenciales obtuvo Tudjman el respaldo popular a su gestión y fue elegido presidente de la república con el 57 por 100 de los votos, en esta ocasión por sufragio universal. Con las lacras de la guerra muy presentes y las regiones de Krajina y Eslavonia Oriental todavía en

poder de los serbocroatas y sus aliados, el presidente Tudjman y su Gobierno presentaron el restablecimiento de la unidad nacional como la gran tarea pendiente del Estado croata. Además, Croacia tenía que afrontar el gran reto de culminar su transición política y socioeconómica para vincularse así al círculo de influencia de la Comunidad Europea.

A los pocos meses de quedar sofocado el conflicto en Croacia, uno nuevo estalló en Bosnia-Herzegovina[98]. Recién estrenada la primavera de 1992, los serbobosnios consideraron como declaración de guerra, en primer lugar, la aprobación de la independencia de la república en un referéndum que, con una participación del 63 por 100 de la población, había obtenido el respaldo del 99 por 100 de los votos y, en segundo, el posterior reconocimiento internacional tanto de los países de la Europa comunitaria como de Estados Unidos. Para contrarrestar esta actitud y afirmar su voluntad identitaria, los serbios de Bosnia –los cuales, obviamente, no habían participado en el referéndum– proclamaron en abril la llamada «República Serbia *(Srpska)*», presidida por el nacionalista radical Radovan Karadžić. Los peores presagios se cumplieron e inmediatamente comenzó una nueva fase de la guerra yugoslava sin que la comunidad internacional fuera capaz de hacer nada para evitarlo[99]. Las fuerzas serbo-bosnias no tardaron en ocupar dos tercios del territorio del nuevo país y Karadžić procedió a llevar a cabo su plan de expulsar o eliminar a la población musulmana para lograr enclaves étnicamente puros. Sin duda, el detonante de lo que ya se conocía como «limpieza étnica» no era tanto el odio ancestral entre pueblos ni las diferencias religiosas como la capacidad de algunas elites para instrumentalizarlos en su beneficio y así controlar el poder[100].

Limpieza étnica y violación de los derechos humanos

La guerra en la antigua Yugoslavia llevó de nuevo la desolación a la mayor parte de la población de la península de los Balcanes: decenas de miles de víctimas ocasionadas entre muertos y heridos,

además de los millones de desplazados o refugiados. Por ello, el 29 de julio de 1992 el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) inauguró en Ginebra una conferencia permanente sobre los refugiados del conflicto yugoslavo; poco después, en un informe de octubre de 1992 –es decir, cuando la guerra ya se había enseñoreado de Bosnia-Herzegovina–, advirtió sin ambages a los dirigentes de las instituciones europeas que el Viejo Continente «se hallaba a las puertas de una catástrofe humana sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial».

Pero el hecho más trágico de la guerra fue el empleo, a lo largo de todo el conflicto, del procedimiento conocido como «limpieza étnica». Según escribió Florence Hartmann en *Le Monde* el 31 de agosto de 1992, este concepto, «que despierta siniestras reminiscencias, era obra de dieciséis miembros de la Academia de las Ciencias y las Artes de Belgrado», autores de un documento que desde 1986 circulaba clandestinamente con el nombre de *Memorándum.* El texto sirvió para atizar los odios ancestrales y llamar a la hegemonía serbia y a su defensa en aquellos lugares donde se veía amenazada por otros pueblos balcánicos[101].

El objetivo básico de esta práctica consistía en depurar un territorio extirpando de él cualquier elemento potencialmente nocivo para la existencia de una nación étnicamente pura. Desde un primer momento, la ONU, por la Resolución 771 de 13 de agosto de 1992, no dudó en condenar sin paliativos tal procedimiento, que recordaba demasiado a las «soluciones finales» ensayadas durante la Segunda Guerra Mundial. Ante el escaso eco de la condena internacional entre los responsables de la depuración racial practicada a gran escala durante la conflagración, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de acuerdo con las directrices de la Resolución 780, creó el 6 de octubre de aquel año una comisión de investigación encargada de evaluar el alcance de tales acciones. En el Segundo Informe Mazowiecki sobre la antigua Yugoslavia, elaborado después de la visita del enviado especial de la ONU a la zona en la tercera semana de aquel mismo mes de octubre de 1992, se hacía mención expresa del procedimiento de limpieza étnica,

tanto *in situ* como en los campos de tránsito o de exterminio construidos a tal efecto:

> La depuración étnica aparece no como la consecuencia de la guerra, sino más bien como el objetivo. En gran medida, este fin ya ha sido alcanzado mediante asesinatos, palizas, violaciones, destrucciones de casas y amenazas. Estas prácticas se han multiplicado en el transcurso de las últimas semanas, y cada vez se constata menos resistencia por parte de la población no serbia, entre la que una parte creciente está preparada para abandonarlo todo y huir de la guerra[102].

Todas las partes implicadas en la guerra de la antigua Yugoslavia utilizaron en algún momento dicho procedimiento, pero fueron los serbios quienes lo emplearon en mayor medida y en todas las fases del conflicto. Durante el tiempo que duró la guerra en Croacia, las milicias serbias llevaron a cabo una ocupación integral de los territorios conquistados para terminar con todo vestigio croata, incluso de tipo cultural, lo que el historiador y médico croata Mirko Grmek denominó «memoricidio»[103]. Así se produjeron las primeras oleadas de desplazados, como la que tuvo lugar en agosto de 1991 en Eslavonia Oriental, cuando casi cien mil personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Como venganza, algunas comunidades de serbios de Croacia recibieron represalias por parte de las milicias croatas, las cuales, como ya hemos señalado, no dudaron en utilizar los mismos procedimientos empleados en Serbia contra sus hermanos.

Fue en la guerra de Bosnia-Herzegovina donde la limpieza étnica alcanzó su mayor capacidad destructiva. El ejército serbio dedicó gran parte de sus esfuerzos a la eliminación sistemática del *otro* dentro del territorio bosnio. De esta manera y hasta mediados de 1993, en Croacia y, sobre todo, en Bosnia, la limpieza étnica y los estragos de la guerra convencional habían ocasionado unas doscientas cincuenta mil víctimas y casi tres millones de desplazados o refugiados, en su inmensa mayoría croatas y musulmanes. Las dimensiones de la catástrofe humanitaria llevaron a la ONU, por medio de la Resolución 808, a autorizar el 17 de septiembre de 1993 la constitución en La Haya de un tribunal internacional con la misión de perseguir, juzgar y castigar a los responsables –tanto inductores

como ejecutores– de los crímenes de guerra, considerados como delitos contra la humanidad.

Hacia los Acuerdos de Dayton

Ni el desgaste de los contendientes en la guerra, ni la constante presión internacional, ni las primeras derrotas de los serbobosnios sirvieron para convencer a estos para que aceptaran un plan de paz; es más, todavía en febrero de 1994 atacaron brutalmente zonas de seguridad decretadas por la ONU en Goražde, Žepa y Srebrenica[104]. Sólo los bombardeos continuados de las fuerzas de la alianza atlántica desde el mes de agosto lograron reducir a la mínima expresión el potencial bélico serbio y forzar el proceso de paz, cuya última fase, a pesar de las dificultades, comenzaría en Dayton el 1 de noviembre de 1995[105]. En las negociaciones participaron, junto a los presidentes de Bosnia-Herzegovina, de Croacia y de Serbia, representantes del Grupo de Contacto, de la Unión Europea y de la ONU, además de la delegación estadounidense liderada por Richard Holbrooke. Tres semanas de trabajos ininterrumpidos duraron las negociaciones hasta alcanzar el 21 de noviembre un acuerdo final que fuera aceptado por todas las partes.

El Acuerdo de Paz de Dayton, que ponía fin al más trágico conflicto sufrido en Europa en los últimos cincuenta años, fue ratificado en París el 14 de diciembre de 1995: la unidad estatal de Bosnia-Herzegovina, por precaria que fuera, quedaba restablecida. Más que cualquier otra cosa, el acuerdo podía considerarse una gran oportunidad para terminar con la guerra en los Balcanes, con la esperanza añadida, tal como se especificaba en las líneas de actuación, de contribuir a la consolidación de «la paz, la justicia, la tolerancia y la reconciliación» de los pueblos yugoslavos[106].

Una vez apaciguada Bosnia estalló en Kosovo un conflicto incubado durante la primera mitad de aquella década[107]. El comportamiento autoritario de los serbios en la provincia había sido reiteradamente contestado por un amplio sector de los diputados de

la Asamblea de Kosovo, suspendida en sus funciones a finales de junio de 1990; a continuación, el 2 de julio, fecha del referéndum constitucional promovido por Milošević para consolidar la hegemonía serbia en la Federación Yugoslava, 114 de los 180 antiguos diputados kosovares habían tomado la decisión de proclamar la independencia y aprobar la constitución de una República Soberana Yugoslava de Kosovo. El gesto había sido rechazado por las autoridades de Serbia, que habían procedido el 5 de julio a disolver tanto la Asamblea como el gobierno kosovar.

Como era previsible, la situación había seguido empeorando. Durante la segunda mitad de la década comenzó a actuar el denominado Ejército de Liberación de Kosovo (UCK) a favor de la independencia. La reacción de la policía y del ejército serbios consistió en lanzar una represión encarnizada contra los albanokosovares de la zona. Para evitar un nuevo episodio de limpieza étnica, Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y la OTAN, en nombre de la comunidad internacional, forzaron a serbios y albanokosovares a negociar el fin del conflicto, que no llegaría hasta 1999[108].

La determinación estadounidense, apoyada en la eficacia militar de la OTAN, resultó esencial para poner fin al conflicto de Kosovo y conseguir la posterior pacificación de la provincia e influyó decisivamente en los dirigentes de la Europa comunitaria. En efecto, la Unión Europea no sólo secundó la actuación de la alianza atlántica, sino que de forma inmediata contribuyó con sus propios medios diplomáticos, técnicos y económicos al proceso de estabilidad iniciado en la zona y en el que comprometió a aquellos de sus vecinos candidatos a la integración: Bulgaria, Rumanía, Eslovenia y Hungría.

En este tipo de enfrentamiento, extendido con profusión después de concluir el orden internacional surgido de 1945, se diluyeron, como ha precisado Mary Kaldor, las diferencias tajantes entre la guerra entendida de forma convencional, el crimen organizado y la conculcación sistemática de los derechos humanos mediante la brutalidad ejercida por instituciones o grupos sociales contra las personas[109]. Evidentemente, los procesos de globalización

favorecieron estas «nuevas guerras» donde el tráfico de armas y la transnacionalización de las fuerzas en liza permitían que se extendieran los focos de tensión y los grupos armados fuera de control ante la incapacidad de algunos Estados de mantener el monopolio de la violencia legítima[110].

De hecho, el orden de Posguerra Fría impidió en la práctica la declaración de guerra entre Estados sólidamente asentados: tanto la inmensa capacidad destructiva como los acuerdos sobre control armamentístico logrados durante las décadas de los ochenta y noventa impulsaron el entendimiento en este terreno y relegaron el conflicto armado a las zonas más marginadas e inestables. En ellos las instituciones carecían de autoridad real sobre el territorio de su soberanía y, en consecuencia, la corrupción, el autoritarismo y la lucha entre facciones tribales, nacionales y de intereses económicos los hundían más en el marasmo y la desintegración. La guerra de Bosnia-Herzegovina, que duró más de tres años –entre abril de 1992 y octubre de 1995– y causó más de un cuarto de millón de víctimas, constituyó el paradigma de esta nueva forma de conflicto armado[111].

En aquellos años, la dejadez de las organizaciones internacionales –comenzando por la ONU– a la hora de frenar la masacre se unió al rotundo fracaso de la Unión Europea para fijar respecto a la guerra en Bosnia una política conjunta y eficaz. En estas circunstancias, el Gobierno norteamericano –también reacio a intervenir, al menos en un principio– se vio obligado a actuar directamente, por lo que podría decirse que el alto el fuego del 12 de octubre de 1995 se logró, en buena medida, gracias a la habilidad negociadora de Richard Holbrooke, vicesecretario de Estado norteamericano en aquel momento.

[1] Para Ignacio Sotelo, profesor de Ciencia Política en la Universidad Libre de Berlín durante más de tres décadas, los años de 1989 y 1990 clasuraron toda una época y dieron paso a una historia verdaderamente universal. Entrevista de Blanca Berasátegui a Ignacio Sotelo en *El Cultural* de *El Mundo,* 6-12 de noviembre de 2009, p. 11.

[2] Recogido en F. Colombo, *La tercera posguerra. Conversaciones sobre el poscomunismo,* Barcelona, Tusquets, 1991, p. 106.

[3] F. Fejtö, *La transition en Europe. Économie privée et action publique,* París, La Documentation Française, 1993, pp. 15-16.

[4] Así la califican también los citados Á. Heller y F. Fehér, *De Yalta a la «Glasnost»,* Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1992, p. 271.

[5] Z. Brzezinski, «La gran transformación», *Política Exterior* VIII, 38 (abril-mayo de 1994), p. 5.

[6] R. Szporluk, «The Burden of History Made Lighter by Geography?», *Problems of Communism* XXXIX, 5 (julio-agosto de 1990), p. 45.

[7] L. Morlino, *Cómo cambian los regímenes políticos,* Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1985, p. 177.

[8] A. Brown (ed.), *Political Culture and Communist Studies,* Armonk (Nueva York), M. E. Sharpe, 1985, pp. 149-204.

[9] G. Pridham, «The International Dimension of Democratization Theory: Practice and Inter-Regional Comparisons», en G. Pridham, E. Herring y G. Sanford (eds.), *Building Democracy? The International Dimension of Democratization in Eastern Europe,* Nueva York, St. Martin's Press, 1994, pp. 12-20.

[10] I. Barlinska, *La sociedad civil en Polonia y Solidaridad,* Madrid, CIS, 2006, pp. 166-167.

[11] La importancia de Solidaridad en el proceso de formación de los partidos políticos polacos en la transición a la democracia aparece explicada en M. Herrero de la Fuente, «La influencia de Solidaridad en el desarrollo del pluralismo político en Polonia», *Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol* 26-27 (1999), pp. 97-125.

[12] A. A. Michta, «Democratic Consolidation in Poland after 1989», en K. Dawisha y B. Parrott (dirs.), *The Consolidation of Democracy in East-Central Europe,* Cambridge (Reino Unido), Cambridge University Press, 1997, pp. 66-108.

[13] Sobre la personalidad y trayectoria política del líder polaco, véase J. Kurski, *Lech Wałęsa: Democrat or Dictator?,* Boulder (Colorado), Westview Press, 1993.

[14] A. A. Michta, «The Presidential Parliamentary-System», en R. F. Staar, *Transition to Democracy in Poland,* Nueva York-Londres, St. Martin's Press, 1998, p. 96.

[15] I. Barlinska, «El cambio social: el paso de la cultura del súbdito a la cultura del ciudadano (el ejemplo de la sociedad polaca en la Transición», en C. Flores Juberías (dir.), *Europa, veinte años después del Muro,* Madrid, Plaza y Valdés, 2009, pp. 45-75.

[16] El mejor relato de la confusa Revolución rumana se encuentra en N. Ratesh, *Romania: the Entangled Revolution,* Nueva York, Praeger, 1991.

[17] Sobre el surgimiento de la oposición después –y no antes– de la muerte de Ceauşescu, véase F. Veiga, *La trampa balcánica,* Barcelona, Grijalbo, 1995, pp. 195-206.

[18] Como escribe Silvia Marcu, «la ruptura entre el antiguo y el nuevo orden se manifestó en Rumanía menos que en cualquier otro país de la Europa central y oriental. Más que en cualquier otro Estado del antiguo bloque del Este, los servicios secretos poscomunistas continuaron influyendo en el proceso político, obteniendo información relacionada con personalidades políticas y vigilando tanto a periodistas e intelectuales como a personas con domicilio en el extranjero que en su día manifestaron hostilidad frente al régimen. La mayor parte de los disidentes de la época de Ceauşescu fue marginada y hasta

noviembre de 1996 la televisión oficial estuvo controlada de hecho por el presidente». «La transición política de Rumanía: entre la ilusión y el fracaso», en C. Flores Juberías (ed.), *Estudios sobre la Europa Oriental,* cit., p. 75.

[19] Véase M.ª M. Cornudella i Llamarca, «La transición rumana hacia la democracia: Constitución, Partidos y Elecciones», *Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol* 26/27 (invierno-primavera de 1999), pp. 169-194.

[20] V. Tismaneanu, «Romanian Exceptionalism? Democracy, Ethnocracy, and Uncertain Pluralism in Post-Ceauşescu Romania», en K. Dawisha y B. Parrott (eds.), *Politics, Power, and the Struggle for Democracy in South-East Europe,* Cambridge (Reino Unido), Cambridge University Press, 1997, pp. 419-438.

[21] Cit. en R. Martín de la Guardia y G. Á. Pérez Sánchez, *La Europa del Este, de 1945 a nuestros días,* Madrid, Síntesis, 1995, p. 176.

[22] J. Sapir, *¿Adiós al sistema soviético?,* Madrid, Acento, 1993, p. 179.

[23] R. Dahrendorf, «Roads to Freedom: Democratization and its Problems in East Central Europe», en P. Volten (comp.), *Uncertain Futures: Eastern Europe and Democracy,* Boulder (Colorado), Westview Press, 1990, pp. 4-5.

[24] Á. Heller y F. Fehér, *El péndulo de la modernidad. Una lectura de la era moderna después de la caída del comunismo,* Barcelona, Ediciones Península, 1994, p. 37.

[25] L. Holmes, *Post-Communism. An Introduction,* Cambridge (Reino Unido), Polity, 1997.

[26] C. Offe, «¿Capitalismo como objetivo democrático? La teoría democrática frente a la triple transición en la Europa central y oriental», *Debats* 40 (junio de 1992), pp. 39-40.

[27] R. Martín de la Guardia y G. Á. Pérez Sánchez, «Las transiciones en Europa del Este: dificultades de aproximación a un modelo teórico», en Á. Soto Carmona *et al.* (eds.), *Historia de la transición y consolidación democrática en España (1975-1986),* Madrid, UNED, 1995, vol. II, p. 10.

[28] Recogido en A. Gélédan, *Transitions à l'Est,* París, Le Monde-Édition, 1995, p. 125.

[29] Periodista de *La Vanguardia* y gran conocedor del universo soviético, Rafael Poch de Feliu sintetizó con estas sarcásticas palabras la naturaleza del comunismo en el Este poco antes de su disolución: «No hay paro, pero nadie trabaja. Nadie trabaja, pero los planes se cumplen. Los planes se cumplen, pero en las tiendas no hay nada. En las tiendas no hay nada, pero las despensas de la gente están llenas. Las despensas están llenas, pero todos están descontentos. Todos están descontentos, pero votan a favor». R. Poch de Feliu, *La gran transición. Rusia, 1985-2002,* Barcelona, Crítica, 2003, p. 14.

[30] Al estudio de dicho proceso ha dedicado una serie de números monográficos, coordinados por R. Martín de la Guardia y G. Á. Pérez Sánchez, la *Revista de Estudios Europeos* del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid. Véanse Polonia: n.º 26 (septiembre-diciembre de 2000), pp. 3-62; República Checa: n.º 29 (septiembre-diciembre de 2001), pp. 3-64; Rumanía: n.º 32 (septiembre-diciembre de 2002), pp. 3-100; Hungría: n.º 35 (septiembre-diciembre de 2003), pp. 3-121; países bálticos: n.º 38 (septiembre-diciembre de 2004), pp. 3-76; y Bulgaria, Rumanía, Croacia y Turquía: n.º 42 (enero-abril de 2006), pp. 3-173. Un precedente de estos monográficos puede verse en R. Martín de la Guardia y G. Á. Pérez Sánchez (eds.), *Los países de la*

antigua Europa del Este y España ante la ampliación de la Unión Europea / The Former Eastern European Countries and Spain in Relation to the European Union Enlargement, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2001.

[31] Con la supervisión del G-24, formado por Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, los doce Estados miembros de las Comunidades Europeas, Austria, Finlandia, Suecia, Noruega, Islandia, Suiza y Turquía.

[32] «Tras las audaces decisiones de las autoridades de Polonia y Hungría por las que se adoptan programas de reforma de largo alcance, la comunidad internacional en su totalidad ha recibido favorablemente la ampliación de la reforma a otros países de Europa central y oriental. Corresponde ahora a los países industrializados aceptar el reto representado por el valor y la determinación de los pueblos más directamente afectados». Extracto de las Conclusiones del Plan de Acción de la Comisión Europea para la ampliación de la asistencia del G-24: cit. en VVAA, *La Comunidad Europea y sus vecinos del Este,* Luxemburgo, Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 1991, p. 20.

[33] Según el artículo primero de sus Estatutos, el BERD tenía por objeto «favorecer la transición a una economía abierta de mercado y promover la iniciativa privada y empresarial en los países de Europa central y oriental que suscriban y apliquen los principios de la democracia pluripartidista, el pluralismo y la economía de mercado». Cit. en *ibidem,* p. 19.

[34] Sobre el modelo húngaro de transición a una economía abierta, véase F. Alonso Guinea, *Hungría. A las puertas de la Unión Europea. Un modelo de transición al mercado,* Madrid, Erica, 2000.

[35] Vinculados entre sí por acuerdos económicos y de seguridad y defensa, estos países formaban el llamado Grupo de Visegrado, constituido formalmente en febrero de 1991 a instancias de las Comunidades Europeas. El fin principal del grupo era poner las bases para crear una zona de libre comercio que pudiera servir de ensayo y de ejemplo para ampliaciones posteriores; otro de sus objetivos era la integración en la OTAN. Véase M. A. Rupp, «The Pre-accession Strategy and the Governmental Structures of the Visegrad Countries», en K. Henderson (ed.), *Back to Europe. Central and Eastern Europe and the European Union,* Londres, UCL Press, 1999, pp. 189-106.

[36] Sobre la importancia de estos acuerdos preparatorios de la integración, véase I. Pouli-Pleros, *L'intégration des pays de l'Europe Centrale et Orientale dans une Europe en transition,* Bruselas, Bruylant, 2002, pp. 96-135.

[37] El Tratado de Maastricht fue firmado el 7 de febrero de 1992.

[38] Sobre la evolución política de los países del Este y sus relaciones con las Comunidades Europeas entre 1989 y 1995, véase G. Schoepflin, *Politics in Central and Eastern Europe,* Oxford (Reino Unido), Basil Blackwell, 1995.

[39] Las ingentes cifras aportadas por la UE en los distintos programas de ayuda se encuentran en VVAA, *La Unión Europea sigue creciendo,* Luxemburgo, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 2001.

[40] El acervo comunitario englobaba tres elementos fundamentales: por un lado, el Libro Blanco de 1985 sobre el mercado, en especial en lo referente a cuestiones fiscales y financieras para unificar mercados; en segundo lugar, el Acuerdo Europeo, que propicia la circulación, por los territorios comunitarios y sin restricciones, de personas y mercancías; en

tercer lugar, otros aspectos relacionados con el sector primario, transportes, fuentes energéticas, ecología y política interior de los países.

[41] Efectivamente, entre 1994 y 1998 las transformaciones estructurales y el estrechamiento de relaciones de todo tipo con la UE fueron decisivos para el futuro de la ampliación. Para los

países del Este y bálticos fueron años marcados por la salida progresiva de la depresión económica, la consolidación del sistema democrático –ejemplificado, entre otras cosas, en la alternancia de los partidos en el Gobierno– y la adecuación de las instituciones administrativas y judiciales mediante la aprobación de leyes de reforma. Véase A. Garrido Rubia, «La consolidación de la democracia en Europa Oriental: una perspectiva comparada», *Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol* 41/42 (otoño de 2002-invierno de 2003), pp. 97-132.

[42] Por su parte, al comenzar la década de los años noventa también Croacia tenía por delante la tarea de consolidarse como Estado nacional dentro del proceso de triple transición en marcha –democrática, económica y social– y el objetivo añadido de integrarse en la Europa comunitaria. El 15 de enero de 1992 Croacia obtuvo el reconocimiento de las Comunidades Europeas siempre y cuando la Asamblea croata aprobase la Carta de los derechos de las Minorías. Con este establecimiento de relaciones diplomáticas plenas con las Comunidades Europeas y con su ingreso en la ONU cuatro meses después, las autoridades croatas recibieron el respaldo internacional que necesitaban para alcanzar su nueva y ansiada unidad estatal y afrontar el reto de culminar su transición política y socioeconómica para vincularse al círculo de influencia de la Unión Europea. La política croata para con la Unión Europea desde la década de los noventa puede seguirse en W. Bartlett, *Croatia: between Europe and the Balkans,* Londres, Routledge, 2003.

[43] Firmado el 2 de octubre de 1997, modificaba el Tratado de Maastricht en cuestiones relativas a la cooperación en materias de Justicia e Interior.

[44] Sobre las negociaciones de ampliación de los países de la Europa central, oriental y báltica, véanse las siguientes monografías: L. Andor, *Hungary on the Road to the European Union: Transition in Blue,* Westport (Connecticut), Praeger, 2000; K. Cordell (ed.), *Poland and the European Union,* Londres, Routledge, 2000; B. Ferfila y P. Phillips, *Slovenia: on the Edge of the European Union,* Lanham (Maryland), University Press of America, 2000; J. Figel y W. Roth (eds.), *Slovakia on the Road to EU Membership,* Baden-Baden, Nomos, 2002; J. Rupnik y J. Zielonka (eds.), *The Road to the European Union. Volume 1. The Czech and Slovak Republics,* Mánchester, Manchester University Press, 2003; V. Pettai y J. Zielonka (eds.), *The Road to the European Union. Volume 2. Estonia, Latvia and Lithuania,* Mánchester, Manchester University Press, 2003.

[45] No era la primera vez que los militares intervenían en política de manera directa: ya había ocurrido en 1960 y 1971. Al respecto debe señalarse que el Ejército turco es el garante de la orientación prooccidental y de la naturaleza laica del Estado desde que lo fundó Kemal Atatürk. Véase A. Kazancigil, «Du Coup d'état militaire à l'Union Européenne: 1980-2004», en A. Kazancigil (dir.), *La Turquie au tournant du siècle,* París, L'Harmattan, 2004, pp. 15-44.

[46] Véase E. Hochleitner, «The Political Criteria of Copenhagen and their Application to Turkey. An Analysis and Assessment», *Cuadernos Europeos de Deusto* 33 (2005), pp. 121-151.

[47] S. Núñez de Prado, «Turquía. La llamada del desencuentro entre dos culturas», *Revista de Estudios Europeos* 42 (2006), p. 81.

[48] Poco después, en diciembre de 1997, la Declaración Final del Consejo Europeo de Luxemburgo reconocía a Turquía la «capacidad para adherirse a la Unión Europea» y señalaba a continuación que «será juzgado conforme a los mismos criterios [los de Copenhague] que se apliquen a los demás estados candidatos». Para un análisis pormenorizado de las posibilidades de esta integración a través de la situación económica, política e internacional, véase H. Arikan, *Turkey and the EU: an Awkward Candidate for EU Membership?,* Aldershot, Ashgate, 2006.

[49] Para uno de los mejores estudios sobre la PESC en su compleja evolución histórica, véase F. Terpan, *La politique étrangère et de sécurité commune de l'Union Européenne,* Bruselas, Bruylant, 2003.

[50] Sobre el triángulo de seguridad UE-UEO-OTAN en los años ochenta y noventa, véase E. Barbé, *La seguridad en la nueva Europa,* Madrid, Los Libros de la Catarata, 1995, pp. 157-197.

[51] Véase L. Hottiaux y J. Liponska-Laberou, *La Politique européenne de défense,* París, L'Harmattan, 2000, pp. 43-61.

[52] *WEU, Council of Ministers. Petersberg Declaration, 19 June 1992,* Sections II.2, II.3, II.4. [http://www.weu.int].

[53] *WEU, Council of Ministers. Kirchberg Declaration, Luxembourg, 9 May 1994,* Section A.I.2. [http://www.weu.int].

[54] M. Álvarez Verdugo, «The Enlargement of the European Union and the European Security and Defense Policy», en E. Barbé y E. Johansson-Nogués (eds.), *Beyond Enlargement: the New Members and New Frontiers of the Enlarged European Union,* Barcelona, Instituto Universitario de Estudios Europeos, 2003, p. 90.

[55] Para un excelente repaso histórico y de los problemas actuales de la región, véase G. Andreescu y G. Molnár, *The Transylvanian Question,* Bucarest, Polirom, 1999.

[56] Sobre esta organización, véase M. Shafir, «The Political Party as National Holding Company: the Hungarian Democratic Federation of Romania», en J. P. Stein (ed.), *The Politics of National Minority Participation in Post-Communist Europe: State Building, Democracy and Ethnic Mobilization,* Armonk (Nueva York), East West Institute-M. E. Sharpe, 2000, pp. 101-128.

[57] B. Kovrig, «Partitioned Nation: Hungarian Minorities in Central Europe», en M. Mandelbaum (ed.), *The New European Diasporas: Nationl Minorities and Conflict in Eastern Europe,* Nueva York, Council of Foreign Relations Press, 2000, p. 62.

[58] El censo rumano de 1992 reconocía hasta dieciséis minorías nacionales dentro de una población total de 22,7 millones de habitantes; la minoría principal, con 1,6 millones, era la húngara.

[59] S. L. Wolchik, «Democratization and Political Participation in Slovakia», en K. Dawisha y B. Parrott (dirs.), *The Consolidation of Democracy in East-Central Europe,* cit., p.

234.

[60] K. Henderson, «Slovakia and the Democratic Criteria for European Union Accession», en K. Henderson (ed.), *Back to Europe. Central and Eastern Europe and the European Union,* cit., p. 230.

[61] R. Cooper, *The Postmodern State and the World Order,* Londres, Demos, 2000, pp. 185-188.

[62] A. Inotai, «Tareas y retos específicos de la ampliación "oriental" de la Unión Europea», *Lamusa. Pensamiento, Universidad y Red* 2 (2003-2004), p. 52.

[63] I. Szilágyi, *Hungría y el mundo,* Veszprém, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2001, p. 115.

[64] Véase R. Ferrero Turrión, «La gestión de la diversidad en la nueva Europa. Protección de las minorías y flujos migratorios en el contexto de la adhesión a la Unión Europea», en C. Flores Juberías (dir.), *Europa, veinte años después del Muro,* cit., pp. 215-233.

[65] En http://eur-lex.europa.eu/es/treaties/index.htm puede accederse a los diferentes Tratados de Adhesión.

[66] En 1997 la Comisión obligó de forma tajante a que se cumplieran los requisitos incluidos en todos los acuerdos y tratados citados anteriormente por considerarlos parte del acervo comunitario. R. Ferrero Turrión, «Derechos de minorías y el proceso de ampliación de la UE hacia el este de Europa», en J. de Andrés Sanz, P. Chaves y F. Luengo (eds.), *La ampliación de la Unión Europea. Economía, política y geoestrategia,* Barcelona, El Viejo Topo, 2002, p. 216.

[67] Para una visión general sobre los problemas de las minorías en Europa del Este después de la caída de los regímenes del socialismo real, véase R. Ferrero Turrión, «La situación de las minorías nacionales en Europa centro-oriental diez años después», en R. Martín de la Guardia y G. Á. Pérez Sánchez (coords.), *La Europa del Este. Del Telón de Acero a la integración en la Unión Europea,* Madrid, Biblioteca Nueva, 2002, pp. 79-96.

[68] Véase J. A. López Jiménez, «Las relaciones interétnicas en la Moldavia postsoviética: Gagauzia y Transnistria (1990-1994)», *Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol* 28/29 (verano-otoño de 1999), pp. 23-50.

[69] S. D. Roper y J. Chinn, «Ethnic Mobilization and Reactive Nationalism: the Case of Moldova», *Nationalities Papers* 23, 2 (1995), p. 306.

[70] Cit. en J. A. López Jiménez, «Transnistria: evolución de un modelo de secesionismo en el seno de la República de Moldova (1995-2000)», en C. Flores Juberías (ed.), *Estudios sobre la Europa oriental,* cit., p. 312.

[71] Según el censo de 1989, los rusos constituían el 67 por 100 y los ucranianos, el 27,7 por 100 de la población de Crimea, aunque entre los ucranianos un 47,4 por 100 utilizaba como primera lengua el ruso.

[72] F. Martínez Laínez, «Crimea: la península rebelde», *Revista Española de Defensa* 88 (junio de 1995), p. 64.

[73] A. Blanc Altemir, *Conflictos territoriales, interétnicos y nacionales en los Estados surgidos de la antigua Unión Soviética,* Valencia, Tirant Lo Blanch, 2004, pp. 47-70.

[74] C. Wallace, O. Chmouliar y E. Sidorenko, *The Eastern Frontier of Western Europe: Mobility in the Buffer Zone,* Viena, Institute of Advanced Studies, 1997, p. 8.

[75] Véanse R. Martín de la Guardia, «La frontera oriental de Europa. Nuevas perspectivas para viejos problemas», *Saitabi* 55 (2005), pp. 123-141 y, del mismo autor, «La ampliación de la Unión Europea al Este: viejas historias, nuevas regiones», en J. M. Delgado Idarreta y S. Andrés Cabello (eds.), *La Rioja, España, Europa,* Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2006, pp. 175-208.

[76] Como escribió Jacques Rupnik, «la causa profunda de la crisis yugoslava fue la ligazón de la crisis del sistema comunista y la del Estado multinacional». «Aux origines d'une tragédie», en J. Rupnik (dir.), *De Sarajevo à Sarajevo. L'échec yougoslave,* Bruselas, Éditions Complexe, 1992, p. 14.

[77] Entre las numerosas biografías de este personaje conviene destacar S. K. Pavlowitch, *Tito: Yugoslavia's Great Dictator: a Reassessment,* Londres, Hurst, 1992 y J. Ridley, *Tito*, Londres, Constable, 1994.

[78] Al respecto resultan muy pertinentes las reflexiones hechas en aquella época por H. Lydall en *Yugoslavia in Crisis,* Oxford, Oxford University Press, 1989.

[79] Para un estudio crítico de esta figura, véase F. Veiga, *Slobo. Una biografía no autorizada de Milošević,* Barcelona, Debate, 2004.

[80] Milošević venía utilizando para su provecho los sentimientos, reales o supuestos, de humillación y frustración de la población serbia. S. K. Pavlowitch, «L'héritage titiste», en J. Rupnik (dir.), *De Sarajevo à Sarajevo. L'échec yougoslave,* cit., p. 70.

[81] J. Krulic, *Histoire de la Yougoslavie. De 1945 à nos jours,* Bruselas, Éditions Complexe, 1993, p. 195.

[82] H. Stark, *Les Balkans. Le retour de la guerre en Europe,* París, Institut Français des Relations Internationales, 1993, pp. 177-191.

[83] Sobre la evolución de las tensiones nacionalistas durante la época de Tito hasta desembocar en la desintegración de Yugoslavia, véase S. P. Ramet, *Nationalism and Federalism in Yugoslavia, 1962-1991,* Bloomington-Indianápolis, Indiana University Press, 1992.

[84] H. Stark, *Les Balkans. Le retour de la guerre en Europe,* cit., pp. 55-61 y 121-122.

[85] Para una sucinta pero clarificadora visión de la transición en Eslovenia, véase F. Juri, «Eslovenia: una transición entre la Europa central y el Mediterráneo», en J. Girón y S. Pajović (eds.), *Los nuevos Estados de la antigua Yugoslavia,* Oviedo, Universidad de Oviedo, 1999, pp. 139-159.

[86] D. T. Bataković, *Yougoslavie. Nations. Religions. Idéologies,* Lausana, L'Âge d'Homme, 1994, p. 289.

[87] J. Krulic, «L'explosion», en J. Rupnik (dir.), *De Sarajevo à Sarajevo. L'échec yougoslave,* cit., p. 87.

[88] Véase D. Ćosić, *La Yougoslavie et la question serbe,* Lausana, L'Âge d'Homme, 1992.

[89] A finales de mayo de 1992 el Consejo de Seguridad de la ONU había aprobado la Resolución 757 «por la que se impone el bloqueo comercial, aéreo, diplomático, cultural, científico y deportivo a la nueva Yugoslavia», endurecida en noviembre al prohibir la venta al país de petróleo, carbón y otros recursos. T. Christakis, «Les sanctions contre la RFY

(Serbie et Monténégro): un bilan», en Y. Daudet y R. Mehdi (dirs.), *Les Nations Unies et l'Ex-Yougoslavie,* París, A. Pedone, 1998, pp. 65-66.

[90] Un procedimiento parecido se emplearía contra Ćosić a mediados de 1993.

[91] P. Garde, *Vie et mort de la Yougoslavie,* París, Fayard, 1992, p. 280.

[92] Cit. en F. Veiga, *La trampa balcánica,* cit., pp. 291-292.

[93] Sobre la dispersión de la población serbia en otras repúblicas yugoslavas al inicio de la guerra, véase M. Roux, «Guerre civile et enjeux territoriaux en Yougoslavie», *Hérodote. Revue de Géographie et de Géopolitique* 63 (octubre-diciembre de 1991), pp. 32-38.

[94] La violencia desatada entre croatas y serbios al estallar la guerra aparece recogida en B. Magaš, *The Destruction of Yugoslavia. Tracking the Break-up, 1980-1992,* Nueva York, Verso, 1993, pp. 293-294.

[95] «Troisième rapport Mazowiecki», en VVAA, *Le livre noir de l'ex Yougoslavie. Purification ethnique et crimes de guerre,* París, Arléa, 1993, p. 344.

[96] J. Krulic, *Histoire de la Yougoslavie. De 1945 à nos jours,* cit., p. 209.

[97] Sobre la guerra en Croacia véase P. Garde, *Vie et mort de la Yougoslavie,* cit., pp. 314-334.

[98] Para un estudio completo véase S. L. Burg y P. S. Shoup, *The War in Bosnia-Herzegovina. Ethnic Conflict and International Intervention,* Armonk (Nueva York), M. E. Sharpe, 1999.

[99] Así lo señala José M.ª Mendiluce, enviado de la ONU en Bosnia entre 1992 y 1994, en «Esperanzas y riesgos en Bosnia», *Política Exterior* X, 54 (noviembre-diciembre de 1996), p. 66.

[100] R. Martín de la Guardia y G. Á. Pérez Sánchez, «Derechos humanos y guerra en Bosnia-Herzegovina», *Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol* 26/27 (invierno-primavera de 1999), pp. 296-297.

[101] P. Garde, *Vie et mort de la Yougoslavie,* cit., pp. 254-256.

[102] El texto del informe se encuentra en H. Stark, *Les Balkans. Le retour de la guerre en Europe,* cit., pp. 133-140.

[103] Había acuñado el término en una serie de conferencias que impartió a lo largo de 1991, pero el concepto sólo trascendió tras el ataque a la Biblioteca Nacional Bosnia de Sarajevo en agosto de 1992. V. Blazina, «Mémoricide ou la purification culturelle: la guerre contre les bibliotèques de Croatie et de Bosnie-Herzégovine», *Documentation et Bibliotèques* 42 (1996), pp. 149-164.

[104] Es más, estos dos últimos enclaves, de mayoría musulmana, fueron tomados por las fuerzas de Ratko Mladić a mediados del año siguiente.

[105] Véase L. Sell, *Slobodan Milosevic and the Destruction of Yugoslavia,* Durham (Carolina del Norte), Duke University Press, 2000, pp. 223-260.

[106] Sobre la conculcación sistemática de los derechos humanos a lo largo del conflicto, véanse R. Martín de la Guardia y G. Á. Pérez Sánchez, «Derechos humanos y guerra en Bosnia-Herzegovina», cit., pp. 293-308 y, de los mismos autores, *Derechos humanos y comunismo,* Madrid, Arco Libros, 1999, pp. 53-60.

[107] Merecen atención las reflexiones de M. Milošević en *El trigo de la guerra. Nacionalismo y violencia en Kosovo,* Madrid, Espasa, 2001.

[108] Ante el callejón sin salida al que habían conducido las negociaciones, Holbrooke se reuniría el 22 de marzo de 1999 con Milošević, que iba a despreciar esta «última oportunidad», tal como la denominó la diplomacia. Al quedar zanjada la vía diplomática, en la tarde del 24 de marzo comenzaba, sin el aval del Consejo de Seguridad de la ONU, la operación militar de la OTAN denominada «Fuerza Determinante» contra los intereses militares e industriales serbios, primero en Kosovo y a continuación en toda Serbia. El 10 de junio, bajo el control de la OTAN, iniciaron su retirada de Kosovo las fuerzas armadas serbias. Dos días más tarde entró en acción la Fuerza de Paz para Kosovo (KFOR), autorizada por la Resolución 1244 de 10 de junio de 1999 del Consejo de Seguridad de la ONU y que preveía el despliegue de hasta cincuenta mil soldados en la provincia kosovar, provisionalmente administrada por Naciones Unidas con apoyo militar internacional. C. Taibo, *Guerra en Kosova. Un estudio sobre la ingeniería del odio,* Madrid, Los Libros de la Catarata, 2001, pp. 115-135.

[109] M. Kaldor, *Las nuevas guerras. Violencia organizada en la era global,* Barcelona, Tusquets, 2001, p. 16.

[110] De este modo, en cierto sentido, «el *nacionalismo integracionista* de los estados de Yalta se derrumba para dar paso al *nacionalismo fragmentador* de la posguerra fría: una nueva ola de crisis de los imperios y de surgimiento de nuevos Estados nacionales». F. J. Peñas Esteban, *Occidentalización, fin de la Guerra Fría y relaciones internacionales,* Madrid, Alianza, 1997, p. 238.

[111] Véase M. Kaldor, *Las nuevas guerras. Violencia organizada en la era global,* cit., pp. 49-92.

IV. El mundo occidental ante el final de la Guerra Fría

Estados Unidos, al frente del liderazgo mundial

Tras la vacilante política exterior desplegada por el presidente Carter, la llegada a la Casa Blanca del republicano Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos entre enero de 1981 y enero de 1989, sirvió para reorientar e insuflar nuevos aires a la acción internacional de la superpotencia[1]. Nadie puede negar la popularidad y el amplio apoyo que la sociedad norteamericana brindó al veterano actor. Con prácticamente el 91 por 100 de los votos electorales (victoria revalidada y superada en 1984 al llegar hasta el 97,5 por 100), su figura pública salió todavía más fortalecida después del atentado sufrido en marzo de 1981, apenas inaugurado su primer mandato.

El amplio respaldo popular y la bonanza de la economía[2] le permitieron poner en práctica una ambiciosa política exterior. La conocida «Doctrina Reagan»[3] partía de un supuesto básico: la convicción de la superioridad neta del sistema liberal capitalista en los ámbitos moral, político y económico en comparación con los regímenes de inspiración soviética. De este presupuesto derivaba la necesidad de que Estados Unidos pusiera todos los medios a su alcance para favorecer la extensión de las prácticas democráticas que, finalmente, desplazarían al totalitarismo, contrario a la naturaleza humana. Ya en 1983 creó Reagan una agencia específica para canalizar las ayudas económicas en favor de los procesos de democratización en el mundo (el *National Endowment for Democracy*), dejando a un lado la retórica de la convergencia de sistemas y con ella, la aceptación sumisa de la existencia del mundo comunista (en aquellas fechas, incluso, denominó a la URSS «Imperio del Mal»).

En esta línea de actuación, era de esperar que Reagan no renunciase, ni mucho menos, a dar en todos los frentes batalla a los

soviéticos para evitar su expansión. Así, por ejemplo, defendió con vehemencia al Estado de Israel, aprobó una intervención preventiva en la isla de Granada, ayudó a las guerrillas afganas contra Moscú, hostigó con ataques aéreos a Libia y proporcionó medios económicos y militares a la «Contra» nicaragüense. De igual forma, y sin renunciar, como veremos, a mantener con el Kremlin conversaciones sobre el futuro del armamento, pergeñó la Iniciativa de Defensa Estratégica, un plan defensivo para recuperar la supremacía militar. Son falsas las elucubraciones respecto a que Reagan y su equipo hubieran elaborado un plan perfectamente definido con el objetivo de acabar con la URSS. Su estrategia de enfrentamiento se encontró con una Unión Soviética mucho más debilitada de lo que pensaban los analistas norteamericanos. De hecho, el Kremlin fue incapaz de reaccionar desarrollando una tecnología militar lo suficientemente avanzada como para contrarrestar la Iniciativa, y por tanto el equilibrio se rompió claramente a favor de Estados Unidos. Ello no obstante, Reagan cambiaría paulatinamente su percepción de la política soviética; aunque no tan cautivado por Gorbachov como Margaret Thatcher, sí iba a creer en las intenciones reformistas del dirigente soviético y en la oportunidad real si no de eliminar, al menos de reducir a la mínima expresión el riesgo de conflicto nuclear[4]. Además, Reagan estaba convencido de que la Guerra Fría no acabaría si no se democratizaba la URSS y no se terminaba su hegemonía en el este de Europa.

Sin embargo, esta política acabó pasando factura a Reagan al estallar el caso *Irangate* a finales de 1986, después de que el presidente tratara de soslayar los impedimentos del Congreso para la ayuda a la guerrilla antisandinista. El director adjunto del Consejo de Seguridad Nacional, John Poindexter, había dado luz verde a un programa de asistencia a la «Contra» cuyos fondos provenían de los ingresos por la venta de armas a Teherán[5]. Obviamente, el equipo de Reagan implicado en la acción calculó mal las repercusiones que esta podía tener si trascendía a la opinión pública. El ayatolá Jomeini y su Revolución Islámica tenían una imagen deplorable a lo largo y ancho del país y la confirmación del envío de armamento a Irán –un país que, rompiendo el derecho diplomático, había retenido a

ciudadanos norteamericanos–, unida al hecho de que, además, esos beneficios sirvieran para financiar una guerra sucia en Nicaragua, causó un enorme impacto en la sociedad norteamericana. El caso, aireado hasta la saciedad a finales de 1986 y a lo largo de 1987 por los medios antirrepublicanos, erosionó el pugnaz discurso contra el terrorismo del que había hecho gala Reagan durante su mandato.

Con las dos cámaras parlamentarias en manos de los demócratas las posibilidades de actuación para Reagan quedaron seriamente limitadas. Con todo, el hasta entonces vicepresidente George Herbert Walker Bush ganó las elecciones de 1988 apelando al legado de Reagan, que abandonó la Casa Blanca el 11 de enero de 1989. Como broche final de una época, su último acto oficial consistió en enviar a Margaret Thatcher una carta en la que le expresaba su afecto y su gratitud por todo el apoyo que de ella había recibido[6].

La estela de Reagan continuó durante el mandato de su vicepresidente y sucesor, si bien, como parecía lógico después de una presidencia de tan marcado carácter, habían sido mucho menos numerosos los norteamericanos (un 49 por 100) que habían acudido a las urnas. En el legado de su predecesor Bush también encontró, entre otras, alguna carga especialmente gravosa: el elevado déficit público y, en comparación con Europa occidental y Japón, la baja productividad de la industria norteamericana. La tendencia no se corrigió y en el otoño de 1992 el desempleo afectaba a diez millones de personas, una preocupante cifra repetida incesantemente en los medios de comunicación. A pesar de las promesas de la campaña electoral, aumentaron los impuestos tanto directos como indirectos, lo cual redundó en una imagen cada vez más negativa del presidente[7].

Por lo demás, en una clara línea de continuidad con la política exterior de Reagan, se mantuvieron los gastos de Defensa e incluso crecieron ligeramente entre 1991 y 1993. Continuaron los éxitos en las intervenciones en América Latina con el derrocamiento del general Noriega en Panamá, la lucha contra el narcotráfico mediante el apoyo a la acción emprendida por el presidente Virgilio Barco en Colombia y la firma del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá (TLCAN). La voluntad norteamericana de apostar por la

democracia en el Nuevo Continente parecía, por tanto, terminante. Al menos, así fue en el caso de Haití: cuando, en septiembre de 1991, el presidente Jean-Bertrand Aristide fue depuesto por un golpe de Estado, Washington no reconoció al Gobierno *de facto* y procedió al bloqueo de la isla. La presión surtió efecto en 1994, momento en que Aristide fue repuesto en sus funciones[8].

Con James Baker al frente del Departamento de Estado, Dick Cheney en Defensa y Brent Scowcroft en el Consejo Nacional de Seguridad, el presidente Bush no estaba, ni mucho menos, tan seguro como Reagan de que la reducción armamentística nuclear fuera la solución más adecuada para mejorar la situación en el mundo. Como cabía esperar, pues, la reacción de Gorbachov a esta nueva actitud de Washington fue muy crítica, ya que ponía en peligro los avances hasta entonces conseguidos en la materia. No se daba cuenta de que su principal problema a mediados de 1989 era la estabilidad interna del país, donde perdía incesantemente apoyo mientras crecían las tensiones nacionalistas en las repúblicas.

Bush trató de ganar el pulso a las propuestas de Gorbachov sobre desarme, calificándolas de retóricas y proponiendo, frente a la Casa Común Europea, una nueva Europa que hundiera sus raíces en la defensa de los derechos humanos y las libertades, comenzando por las de pensamiento, opinión y movimiento. Por otra parte, en mayo de 1989, con motivo del cuadragésimo aniversario de la fundación de la OTAN, Bush lanzó un discurso de respaldo absoluto al sentido, evolución e influencia que debía continuar teniendo la Alianza, pieza clave, en su opinión, para el mantenimiento y expansión del mundo libre.

De este modo, la contraofensiva dialéctica del líder norteamericano logró en poco tiempo imponerse a las iniciativas gorbachovianas y reconducirlas por la vía de los intereses de la Casa Blanca: en septiembre de 1989 Eduard Shevardnadze aceptaba reabrir el diálogo sobre el armamento nuclear sin que Estados Unidos suspendiera su Iniciativa de Defensa Estratégica; era evidente que Bush y Baker habían vencido en la singular batalla iniciada por Reagan. De igual forma, las conversaciones en torno al Tratado sobre Fuerzas Convencionales en Europa, iniciadas en Viena

en marzo de 1989, se aceleraron en los primeros meses del año siguiente y concluyeron al firmarse dicho acuerdo el 19 de noviembre de 1990. Su objetivo era limitar el equipamiento en el Viejo Continente eliminando el sobrante: de los 600.000 militares soviéticos y los 350.000 estadounidenses, las superpotencias acordaban reducir sus contingentes en Europa hasta el número de 195.000 efectivos cada una.

En aquellas mismas fechas, para evitar que los cambios en el contexto mundial repercutiesen en la seguridad, los treinta y cuatro miembros de la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa dieron un nuevo impulso institucional a su organización y convocaron una reunión de sus jefes de Estado o Gobierno que fue celebrada en París entre el 19 y el 21 de noviembre de 1990, conmemorando así los quince años de la firma del Acta de Helsinki. El periodo transcurrido desde aquella lejana fecha de 1975 había sido decisivo para el cambio en las relaciones internacionales. De la susceptibilidad y el recelo dominantes en el encuentro de los años setenta se había pasado a respirar un aire de optimismo ante la inminencia del final de un orden basado en la confrontación de bloques. El último día se aprobó el documento conocido como «Carta de París», que pretendía sentar las bases del entendimiento para un futuro pacífico en el mundo. Con ella se introducía la creación de varios organismos internos para dotar a la conferencia de mayor peso en el sistema internacional emergente. Así nacieron el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores –con la obligación de reunirse al menos una vez al año–, una Secretaría permanente, una Asamblea de carácter parlamentario y un Centro de Prevención de Conflictos, ubicado cada uno de ellos en distintas ciudades de Europa. Los representantes reafirmaron su convicción de que en el futuro sólo cabía la democracia como forma de gobierno y, partiendo del respeto de los derechos humanos y de la voluntad de compromiso con la paz, instaron a continuar con la reducción de los arsenales armamentísticos.

El cambio ostensible en las relaciones entre Estados Unidos y la URSS se dejó ver ya en la primera entrevista entre Gorbachov y Bush, en el curso de una reunión celebrada en Malta los días 2 y 3

de diciembre de 1989, es decir, apenas caído el Muro de Berlín. Los mandatarios analizaron el panorama internacional y coincidieron en afirmar que se iniciaba en ese momento una nueva etapa de las relaciones internacionales que dejaba atrás la Guerra Fría. Volverían a reunirse, esta vez en Estados Unidos, en junio de 1990. La atmósfera cordial creada con Reagan se mantenía; en el acto de bienvenida al dirigente soviético su anfitrión había afirmado que «en estos días no resolveremos todos los problemas del mundo, pero trabajando honradamente podemos dar pasos importantes para construir un mundo mejor»[9]. Entre otras cuestiones, en la mesa de negociación se trataron dos de candente actualidad y trascendencia: la situación creada en Alemania con el inicio del proceso de unificación y los problemas nacionalistas que desde los territorios bálticos se extendían como un reguero de pólvora por el resto de repúblicas soviéticas.

Aunque consciente de su posición de superioridad, Bush supo jugar sus bazas con cautela para no inquietar todavía más a un Gorbachov preocupado por la pérdida paulatina del estatus de la URSS como superpotencia. Con el fin de corregir –en la medida de lo posible– la desastrosa evolución de la economía, el presidente norteamericano dio a su homólogo esperanzas de firmar un tratado comercial con una cláusula de nación más favorecida y basado en el apoyo a la perestroika. Asimismo, mientras se comprometía a no alentar los movimientos nacionalistas que amenazaban con socavar los cimientos del Estado soviético, Bush arrancó de Gorbachov la promesa de no actuar con violencia en los países bálticos, asumiendo así, aunque fuera implícitamente, que la política norteamericana influyese sobre las decisiones del Kremlin dentro de sus competencias soberanas. La reunión supuso un cambio cualitativo en las relaciones ya que Gorbachov hubo de aceptar que en el comunicado final aparecieran citados los «valores democráticos» como impulsores de la transición en aquellos países que hasta hacía muy poco habían pertenecido al sistema de dominación soviético. En todo caso, lo más sustancial del encuentro residió, desde un primer momento, en la actitud de colaboración entre ambos mandatarios, y así se reflejó cuando se trataron

abiertamente cuestiones que en los años inmediatamente anteriores hubiera sido impensable abordar.

Siguiendo esta línea de colaboración, en el verano de 1991 los soviéticos se avinieron a suscribir el Tratado START I *(Strategic Arms Reduction Treaty I)* sobre reducción de armas nucleares, cuyas negociaciones se habían emprendido en el lejano año de 1986. Contenía el documento una detallada referencia al número, tipos y despliegue de armas de las superpotencias, así como del plan pergeñado para su control y eliminación progresiva[10]. Desde la firma, el 8 de diciembre de 1987, del Tratado sobre Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance entre Moscú y Washington, se abrió una época de acuerdos entre los que, además de los START I y II, tuvo gran repercusión el ya citado Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales. Realmente, el cambio de década fue esperanzador no sólo al diluirse la amenaza de guerra, sino al manifestarse también la voluntad de eliminar del territorio europeo armas tanto nucleares como convencionales[11]. La Guerra Fría agonizaba.

Indudablemente, la caída del Muro de Berlín había alimentado las expectativas del presidente George H. W. Bush de dar un salto definitivo a la hora de desempeñar un papel relevante en el escenario internacional. Con un equipo que incluía, como hemos visto, algunos de los mayores expertos en Asuntos Exteriores, Estados Unidos podía trazar a grandes rasgos el orden global que se vislumbraba. Ya antes de la desaparición de la URSS la primera Guerra del Golfo mostró la capacidad de iniciativa norteamericana frente a la fallida estrategia negociadora de Gorbachov cuando intentó que Irak se retirase de Kuwait. Con la rápida victoria Washington iba a reafirmar su hegemonía dentro del sistema internacional y a fortalecer su posición ante sus aliados occidentales.

El 11 de septiembre de 1990 el presidente estadounidense George Bush habló ante el Congreso norteamericano sobre la futura ordenación de las relaciones internacionales, «más libre de la amenaza del terror, más vigorosa en la realización de la justicia y más segura en la búsqueda de la paz; una era en la que las naciones de todo el mundo, Este y Oeste, Norte y Sur, puedan prosperar y

vivir en armonía»[12]. Recordando el moralismo wilsoniano, el presidente apeló a un «nuevo orden mundial» donde la primacía del derecho y el respeto a la legalidad internacional terminasen por imponerse sobre los ataques indiscriminados y el abuso de poder en los que había incurrido el régimen iraquí. En este contexto, lo inapropiado de justificar la Guerra del Golfo en términos de control estratégico de los recursos petrolíferos contribuyó a orientar el discurso oficial de Washington hacia motivos de índole humanitaria o de justicia internacional.

La posición de preeminencia norteamericana, revestida de una voluntad de distensión en los puntos calientes del planeta, y en especial en Oriente Medio, tendría su plasmación en el discurso pronunciado por Bush ante el Congreso el 6 de marzo de 1991. Su exposición resultó muy clarificadora respecto a la necesidad de detener el alarmante crecimiento del arsenal armamentístico en aquella región y prometió empeñar sus esfuerzos en frenar hasta desactivar por completo el secular enfrentamiento árabe-israelí. No obstante, tampoco olvidó Bush, en los planes trazados para después del conflicto de Irak, mantener una presencia militar más activa en los países del Golfo[13]. La hiperpotencia tomó buena nota del éxito propagandístico de la primera guerra de Irak. Aun cuando su capacidad militar le permitía batir por sí sola a los ejércitos de Sadam Husein y expulsarlos de Kuwait, la legitimidad internacional lograda al encabezar una amplia coalición demostraba a las autoridades norteamericanas la pertinencia de la vía diplomática para lograr un apoyo multilateral a sus intervenciones en el exterior. De hecho, a partir de entonces, en algunos de los conflictos de la inmediata Posguerra Fría la Casa Blanca optó por justificar su participación a través de operaciones de «mantenimiento de la paz» e «intervención humanitaria»[14]. Gracias a ello contaría con la ayuda de sus aliados occidentales, tratando de diluir sus objetivos como potencia mundial dentro del conglomerado más amplio de países defensores de la democracia.

Otros gestos del gigante norteamericano parecían anunciar una mayor voluntad de acercamiento a las preocupaciones de amplios sectores de la población mundial. Entre el 3 y el 14 de junio de 1992

Río de Janeiro albergó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo –conocida como «Cumbre de la Tierra»–, adonde acudieron más de un centenar de jefes de Estado o de Gobierno y seis mil quinientos delegados de setenta y ocho países. Por primera vez en la historia un presidente de Estados Unidos y el líder de la Revolución cubana posaron juntos al lado del resto de mandatarios después de haber escuchado sus intervenciones. La Cumbre de la Tierra había sido diseñada para discutir sobre la preservación de la naturaleza y los límites del crecimiento económico. Aunque fueron aprobados varios documentos, como el Convenio sobre Diversidad Biológica y Cambio Climático, destacaron más las diferencias de perspectiva entre los participantes, sobre todo entre Estados Unidos, China y otros grandes productores mundiales, por un lado, y quienes los acusaban directa o indirectamente de contribuir al deterioro del planeta, por otro. Por si esto fuera poco, a pocos kilómetros de la sede oficial del encuentro casi quince mil representantes de organizaciones no gubernamentales se habían reunido en un Foro Global para llegar a unas conclusiones muy distintas.

Una vez definido su predominio durante los años de George H. W. Bush, la Casa Blanca optó por dar mayor solidez a las relaciones económicas globales potenciando el ámbito de las nuevas tecnologías para tratar de otorgar mayor estabilidad y eficacia al proceso económico. Las intervenciones exteriores limitaron su radio de acción (Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Plan Colombia), tratando siempre de dar a sus aliados occidentales mayor cabida en la toma de decisiones. De hecho, algunos autores[15] han hablado de una suerte de gobernanza global que, auspiciada y supervisada por Washington, diera juego a otros Gobiernos e instituciones supranacionales a la hora de marcar las pautas de un mundo progresivamente globalizado.

Esta política coincidía con el programa electoral con que Bill Clinton había derrotado a Bush en las elecciones presidenciales de noviembre de 1992. El demócrata había obtenido un importante respaldo electoral (ganó en treinta y dos estados) gracias a una

convicción bien manifiesta en su campaña: *The economy, stupid!.* En efecto, al pueblo estadounidense el final de la Unión Soviética y las transformaciones del orden internacional le importaban mucho menos que sus problemas cotidianos. Durante los últimos años republicanos el estancamiento, cuando no el empeoramiento, del nivel de vida había alcanzado a amplias capas sociales. La política exterior tuvo, pues, poca relevancia en la campaña electoral; los más de nueve millones y medio de parados y el abrumador peso del déficit público, junto con la sensación de fracaso en el intento de remontar la crisis económica sí fueron determinantes para los electores que después de doce años de presidencia de los republicanos les dieron la espalda[16]. Muy significativo fue en este aspecto el discurso inaugural de su presidencia. La mayor parte de la intervención estuvo referida a las susodichas cuestiones internas, al esfuerzo por dejar a un lado la recesión económica, a la lucha contra la corrupción y la discriminación de todo tipo y a la firme determinación de combatir la pobreza. Al menos en la exposición del presidente Clinton, las aventuras exteriores de la etapa Bush quedaron aparcadas ante la urgencia de reconducir la política económica del país.

Elocuente y con una gran capacidad mediática, Clinton ganó al electorado con la idea de que América volviera a pensar en sí misma, buscando soluciones tangibles a la crisis económica. Su plan de reforma de la Administración redujo el elevado número de empleados en el ámbito federal mientras recortaba las partidas militares con el fin de controlar el déficit público, verdadera lacra del sistema estadounidense en aquellos años. La reestructuración de la fiscalidad, con un ascenso muy moderado de los tributos, unida a la ostensible mejora de las inversiones privadas y públicas, neutralizó la tendencia a la depresión económica: el resultado positivo pudo comprobarse en la creación de empleo y en el control del déficit federal.

De este modo, durante el primer mandato de Clinton la economía norteamericana creció de forma considerable. Las tasas de desempleo fueron insignificantes, mientras que el incremento productivo y el volumen exportador generaron un estado de

optimismo que se reflejó en la Bolsa. El déficit público se contrajo, al igual que la inflación. En este contexto, la acción exterior norteamericana –no olvidemos que se trataba del gran vencedor de la Guerra Fría– centró sus esfuerzos en potenciar las relaciones comerciales en busca de nuevos destinos para sus productos y servicios. Sin duda, el Tratado de Libre Comercio suscrito con Canadá y México en 1993 resultó modélico, al igual que la apertura del mercado japonés.

Estados Unidos continuaba siendo el ejemplo del éxito económico y la primacía militar. Como recordaría en el año 2002 Joseph S. Nye, antiguo presidente del Consejo Nacional de Inteligencia y secretario adjunto de Defensa del Gobierno Clinton:

> ¿Cómo es de grande la disparidad entre nuestro poder y el del resto del mundo? En cuanto a poderío militar, somos el único país con armas nucleares y fuerzas convencionales de alcance global. Nuestros presupuestos militares son mayores que los de los siguientes ocho países juntos, y somos los primeros en la denominada «revolución del sector militar», basada en la información. Económicamente, generamos un 27 por 100 de la producción mundial, que a precio de mercado es igual a la de los tres siguientes países combinados (Japón, Alemania, Francia)[17].

Frente a ese éxito, en cambio, la política de la Administración de Clinton de dar ayudas y estímulos económicos para impulsar la democracia en el mundo tuvo, como veremos, sus limitaciones, según demostraron Oriente Próximo[18] o buena parte de África, áreas conflictivas donde nada parecía cambiar. Así fracasó, en gran parte del planeta, el llamado *soft power,* definido por el propio Nye en la década de los ochenta como la estrategia empleada para obtener los resultados apetecidos en el ámbito internacional mediante una adhesión voluntaria, no violenta, a los fundamentos de la democracia y el libre mercado defendidos por Estados Unidos. Ciertamente, la globalización permitió a la potencia norteamericana exportar masivamente y por vías pacíficas sus principios y formas de vida, pero no siempre lo hizo con éxito a la hora de convencer a los demás de las bondades de su sistema.

El final del siglo en el Viejo Continente

Después de la crisis económica de los años setenta, los países occidentales resolvieron tomar medidas para establecer un marco dentro del cual fuera posible un crecimiento sostenido. Para ello resultaba fundamental lograr la estabilidad en los precios y salarios, perfeccionar los mecanismos del mercado para fortalecerlo y reducir el déficit presupuestario controlando con mayor rigor el gasto público. En efecto, Europa occidental experimentó un crecimiento económico notable desde 1981 hasta los últimos meses de 1985, para repuntar a principios de 1987. Los principales países capitalistas habían introducido reformas estructurales encaminadas a flexibilizar y desregular el mercado de trabajo, revisar el sistema tributario y privatizar buena parte de los restos de las empresas estatales. Entre 1985 y 1989, exceptuando el fenómeno de la cohabitación en Francia, la política europea transcurrió por cauces bastante tranquilos. El proceso comunitario ensanchó sus horizontes mientras se respiraba un ambiente de mejora en las relaciones con la Europa del Este.

Las transformaciones internas de las potencias europeas

El thatcherismo rompió con décadas de un cierto aletargamiento en la política británica, poco fina a la hora de enfrentarse a un programa económico riguroso. Muchas de las propuestas de Margaret Thatcher eran fórmulas bien conocidas y asentadas entre los sectores conservadores y que ella cohesionó con una argamasa moral. Firme partidaria de la libertad económica, la primera ministra británica no dudó en apostar hasta las últimas consecuencias por reducir a la mínima expresión las empresas públicas y reformular la política impositiva para bajar las cargas fiscales. Aspiraba así a devolver al Reino Unido a una posición de preeminencia en el concierto de las naciones no sólo europeo sino mundial, insuflando a los ciudadanos los valores tradicionales de amor al trabajo, patriotismo y defensa a ultranza de los derechos individuales,

lesionados, en su opinión, por el laborismo[19]. A pesar de todo lo anterior, no le falta razón a Tony Judt cuando sentencia que la singularidad de la primera ministra y su escasa consideración hacia sus compañeros de partido hipotecaron el futuro inmediato del conservadurismo británico[20].

También Margaret Thatcher tuvo una implicación notable en los procesos de cambio dentro de la Europa comunista que finalmente conducirían a la disolución de aquel sistema. En 1984 viajó a Hungría, el país donde precisamente se había puesto en marcha una reforma –si bien muy matizada– de su política económica. Evidentemente, la presencia de la Dama de Hierro evidenciaba el apoyo británico a cualquier síntoma de liberalización más allá del Telón de Acero. Tres años después se desplazó a la Unión Soviética, donde los primeros pasos de la perestroika de Gorbachov parecían auspiciar el inicio de una senda de mejora en las relaciones entre ambos bloques[21]. Además, no debe olvidarse que este viaje, conociendo el firme talante anticomunista de la primera ministra, manifestaba su voluntad de diálogo; al menos, así lo entendió la sociedad británica, que la premió al reelegirla en las urnas en aquel mismo año de 1987[22].

Inmersa en una ola de impopularidad por introducir un controvertido impuesto conocido como *poll tax,* en noviembre de 1990, tras tres mandatos al frente del Gobierno, Thatcher se vio obligada a apartarse del poder por las presiones de su propio partido[23]. La sucedió en Downing Street su ministro de Hacienda, John Major, que en realidad continuó lo sustancial de su política[24]; de ahí que, entre 1983 (Thatcher había llegado a la presidencia del Gobierno en 1979) y 1997 hubiera una secuencia de medidas gubernamentales encaminadas a transformar la economía británica para mejorar su productividad y, sobre todo, su competitividad. Además, esta política pretendía recortar poder a los sindicatos, cuya influencia, a los ojos de los conservadores, había sido excesiva desde el consenso de posguerra. La privatización alcanzó no sólo a los últimos núcleos industriales propiedad del Estado, sino también a una parte de la Administración; con la idea de incentivar la actividad económica en general se remodeló el sistema tributario y se

redujeron los impuestos. Aun así, las consecuencias sociales dejaron mucho que desear: en una de cada cinco familias el desempleo afectó a todos sus componentes, mientras los salarios llegaron, incluso, a descender en los sectores menos cualificados[25].

Donde sí modificó Major la trayectoria marcada por Thatcher fue en la relación del Reino Unido con Bruselas. Aunque en teoría crítico –como ella– con cualquier avance institucional que supusiera una pérdida de soberanía de los Estados miembros, y sobreponiéndose a la tradicional división de los conservadores entre partidarios y detractores de la CEE, el primer ministro británico logró implicar a su país en los dos grandes hitos de la construcción europea de aquellos años, los Tratados de Maastricht y Ámsterdam, si bien mantuvo la libra esterlina al margen de la Unión Monetaria.

A finales de 1993, y después de años de recrudecimiento de la violencia, el endémico problema de Irlanda del Norte entró en vías de solución. John Major y Albert Reynolds, jefe del ejecutivo de Belfast, firmaron la Declaración de Downing Street, una llamada a Gobierno, unionistas y separatistas irlandeses para volver a la mesa del diálogo y acabar con un conflicto que sectores crecientes de la población consideraban anacrónico. Al parecer, las presiones norteamericanas sobre los distintos actores implicados habían surtido efecto: a finales de agosto de 1994 Gerry Adams, líder del partido nacionalista irlandés Sinn Féin, anunció el alto el fuego del Ejército Republicano Irlandés (IRA) y en octubre los paramilitares unionistas hicieron lo mismo. Ahora Major podía conversar con las partes en una situación más cómoda y con mayores expectativas de éxito a pesar de las evidentes dificultades de un proceso que se adivinaba largo y complejo.

Por su parte, los laboristas parecían empezar a salir de la postración de la mano de Tony Blair, que en 1995 lograba reformar los estatutos del Partido para eliminar los resabios socialistas y abogar por un modelo económico renovado pero cercano a la economía social de mercado alemana. Iniciaba así su andadura el «nuevo laborismo», una versión adaptada a los tiempos que corrían y que a la larga iba a reportar grandes beneficios a su líder[26].

Al margen de los acontecimientos que cambiaron el mundo, el año 1989 revistió en Francia un significado particular. De la mano del presidente François Mitterrand, la conmemoración del bicentenario de la Revolución francesa tuvo dos metas: por una parte, afianzar el ya de por sí profundo patriotismo francés y dotar con ello de mayor popularidad al presidente gracias a sus faraónicos proyectos urbanísticos; por otra, revitalizar la imagen de París como capital cultural por antonomasia. La remodelación y ampliación del museo del Louvre (incluida la polémica pirámide instalada a la entrada) y la prolongación de los Campos Elíseos hasta el arco de La Defensa constituyeron los ejemplos más señalados de su nueva visión de la ciudad.

Después de la peculiar fórmula de la cohabitación[27], las elecciones presidenciales de mayo de 1988 habían dado la victoria a François Mitterrand con un 54 por 100 de los sufragios en segunda vuelta frente al 46 por 100 obtenido por Jacques Chirac[28]. Indudablemente, la gran sorpresa había tenido lugar en la primera ronda de votaciones, cuando el candidato del Frente Nacional, Jean-Marie le Pen, logró el 14,39 por 100 de los votos[29]. Consecuencia de los resultados fue que Chirac abandonase la presidencia del Gobierno, encargada a continuación por el nuevo presidente al socialista Michel Rocard. Al no disponer el ejecutivo de mayoría suficiente en la Asamblea, fue necesario convocar nuevas elecciones tan sólo un mes más tarde, en junio. Sin embargo, aun cuando la victoria fue para el Partido Socialista, este no logró el control de la cámara. La debilidad, pues, continuó; a ello contribuyó también el agravamiento del problema de la inmigración ilegal, atizado en la calle por las soflamas del Frente Nacional. Al menos, la economía pasaba por un periodo de bonanza, tal como se desprendía de los datos de la OCDE: el crecimiento, algo superior al 3 por 100 en 1990, se situaba por encima de la media comunitaria[30].

El contexto internacional no jugaba a favor de la política francesa. La caída del Muro y la reunificación alemana eran para Francia temas muy delicados, como lo era la guerra de Irak. Vacilante, el Gobierno trataba de mantener su apoyo a la coalición internacional sin olvidar su política tradicional de buena amistad con los países árabes. Por si

fuera poco, el escándalo planeó sobre el Elíseo al airearse la sospecha de financiación ilegal en la campaña socialista de 1988 a la presidencia. Rocard dimitió en mayo de 1991[31].

Mientras empeoraba la economía, la solidez del Partido Socialista comenzaba a erosionarse a causa de la indefinición programática, a la que no era ajeno el malestar provocado por la corrupción interna: en las elecciones legislativas de 1993 perdió nada menos que 200 escaños en la Asamblea Nacional y quedó a merced de gaullistas y liberales. En estas circunstancias asumió la presidencia del Gobierno Édouard Balladur, que se mostraría inflexible con la corrupción e iniciaría una política liberalizadora para tratar de adaptar los actores económicos a las exigencias del mercado.

El esfuerzo no sirvió para que la izquierda recuperase la confianza de sus votantes y, sumida en una crisis sobre qué orientación adoptar en el nuevo escenario, perdería dos años después, en 1995, la elección presidencial, cuando, enfrentado a Lionel Jospin, triunfase el gaullista Jacques Chirac, un hombre de larga trayectoria política como alcalde de París, ministro en varias ocasiones e incluso presidente del Gobierno[32]. Bajo su mandato, y a pesar de los vaivenes propios de la cohabitación, la política económica supo mantener el rumbo marcado por Bruselas para alcanzar los criterios del Tratado de Maastricht como vía hacia la Unión Económica y Monetaria. Además, el Gobierno moderado y proeuropeo de Balladur logró sacar las finanzas públicas de su desastrosa situación.

Dentro del entorno de influencia francesa, también con la nueva década desapareció el singular caso de Andorra, regida desde hacía setecientos años por la máxima autoridad gala y el obispo de la Seo de Urgel. El 14 de marzo de 1993 los habitantes del pequeño principado aprobaron masivamente en referéndum una constitución democrática. Los copríncipes cedieron al pueblo andorrano la soberanía que ostentaban desde tiempos medievales y pocos meses después, a finales de julio, Andorra pasó a ocupar el puesto número 184 de la lista de países integrantes de la ONU.

Como consecuencia de los intensos debates subsiguientes a la caída del Muro de Berlín, el sistema de partidos italiano se vio

profundamente sacudido a comienzos de los años noventa. El 3 de febrero de 1991 Achille Occhetto daba fin a una historia de setenta años: el Partido Comunista Italiano, una de las fuerzas ideológicas europeas más importantes a lo largo de toda la Guerra Fría, se disolvía. Mientras los sectores más renovadores fundaban el Partido Democrático de la Izquierda (PDS), la minoría nostálgica se agrupó en el Partido de Refundación Comunista (PRC)[33].

En este contexto de efervescencia política coincidente con las transformaciones de la primera Posguerra Fría, las elecciones celebradas en abril de 1992 no supusieron una convocatoria más[34]. A la inestabilidad reinante respondió la población con una notable afluencia a las urnas (la participación alcanzó el 67 por 100) y, como cabía esperar, la corrupción pasó factura a quienes habían sido los principales actores del sistema político italiano desde 1945. La Democracia Cristiana obtuvo el 29,7 por 100 de los votos: era la primera vez en su historia que no llegaba al 30 por 100. El Partido Socialista (PSI) descendió hasta el 13,6 por 100, superado por los excomunistas del PDS con un 16 por 100; Refundación llegó al 5,6 por 100 de los votos escrutados. Sin embargo, la gran sorpresa fue el crecimiento de un partido regional cuyo mensaje se fundamentaba en una crítica acerba a la corrupción del sistema, identificado con la Administración centralizada en Roma y con el lastre que acarreaba a las regiones del Norte el mantener una infraeconomía subvencionada en el Sur. Con un 8,7 por 100 de los votos, la Liga Norte (LN) llegó a los cincuenta y cinco diputados.

La difícil situación afectó también a la más alta institución del Estado, la presidencia de la república. El 25 de abril de 1992 dimitió Francesco Cossiga; sus funciones fueron asumidas por Oscar Luigi Scalfaro hasta una nueva elección. El enfrentamiento entre las distintas fuerzas parlamentarias impidió una salida rápida, lo cual redundó en un deterioro todavía mayor de la ya de por sí maltrecha imagen del país. Después de quince votaciones no hubo acuerdo hasta que al mes siguiente un dramático acontecimiento ajeno a la vida política, el asesinato del juez Falcone –un auténtico desafío de la mafia al núcleo del poder judicial y, por tanto, al del propio Estado–, animó a los diputados a apoyar masivamente a Scalfaro. El

Gobierno fue encargado al socialista Giuliano Amato, el cual, además de luchar más activamente contra la mafia, preparó un plan económico de tres años con el fin de oxigenar una economía fuertemente gravada por los problemas derivados del abultado déficit público, afrontando al mismo tiempo la aplicación del Tratado de Maastricht. Mientras tanto, en febrero de 1993, la Operación Manos Limpias continuaba sacudiendo a la opinión pública italiana: tres ministros (uno del Partido Liberal, otro de la Democracia Cristiana y un tercero del Partido Socialista), así como los alcaldes de Roma y Milán, se vieron obligados a presentar la dimisión al salpicarles diversos escándalos de corrupción[35].

Dos meses más tarde, en abril, con el sistema de partidos todavía convaleciente de la crisis iniciada en 1989, tuvo lugar un referéndum para –entre otras cosas– cambiar la ley electoral, que para muchos era la principal causa de la endémica debilidad del régimen político italiano y, en consecuencia, de la corrupción generalizada. Por una amplísima mayoría fue aprobado el texto de la reforma, según el cual el 75 por 100 de los puestos del Senado y de la Cámara de Diputados serían elegidos por el sistema mayoritario simple. Inmediatamente después, tal como había prometido, Amato dimitió y fue reemplazado por Carlo Azeglio Ciampi al frente del ejecutivo. Sin militancia política y conocido por sus buenos oficios al frente del Banco de Italia, Ciampi colocó en los ministerios de mayor peso (Economía, Justicia) a personalidades al margen de los depreciados partidos. Con él siguió siendo objetivo prioritario el saneamiento de la economía, algo lógico si se tiene en cuenta que la deuda exterior italiana suponía una tercera parte de la deuda total de los doce socios comunitarios. Entre sus medidas más polémicas, pero a la postre necesarias, Ciampi puso las bases para comenzar la privatización de la enorme estructura empresarial dependiente del Estado.

Las elecciones legislativas previstas para el 24 de marzo de 1994 se celebraron conforme a la nueva legislación. La debacle de los viejos partidos –que buena parte de la población identificaba con el fraude–, unida al nuevo mecanismo electoral, hacían muy difícil prever los resultados. Quizá el mejor situado era el PDS, cuyos

dirigentes, una vez desprovisto el partido del ropaje comunista, habían adoptado un discurso de izquierda muy moderado y capaz, según los analistas, de convencer al electorado. También había que tener en cuenta la posibilidad de que el PDS atrajera el voto de los socialistas desencantados con la degradación del PSI, al borde de la desaparición después de las múltiples acciones judiciales contra sus cuadros más corruptos. Por su parte, en las regiones septentrionales la Liga Norte aspiraba a continuar creciendo a costa de todos con el mismo mensaje victimista respecto a Roma a fuerza de abogar, por un lado, por la dignificación de la política y, por otro, por la creación de una confederación de territorios soberanos, es decir, por la refundación del Estado.

Sin embargo, todo el escenario trazado por los expertos se vino abajo cuando dos meses antes de la convocatoria Silvio Berlusconi, conocido empresario de los medios de comunicación y de muchos otros negocios, creó su propia formación política, Forza Italia, para concurrir a las elecciones. Con enorme habilidad, el magnate mediático logró capitanear Alianza por la Libertad, una coalición en la que participaban también los posfascistas de Alianza Nacional (AN)[36], la Liga Norte y otros dos grupúsculos[37]. El éxito fue rotundo al obtener 366 de los 630 escaños en juego, una mayoría absoluta frente a los 213 logrados por la Alianza del Progreso, que a su vez agrupaba al PDS, a Los Verdes, restos del Partido Socialista, republicanos y alguna que otra pequeña formación[38].

Los ocho meses que duró el Gobierno Berlusconi no sirvieron para sanear la vida política ni para garantizar una mayor estabilidad institucional. Si ya de por sí eran profundas las diferencias ideológicas entre AN y la Liga Norte –unitarios los primeros, federalistas o confederalistas los segundos; discrepantes también en la forma de entender la política social y el reparto de recursos–, a ello había que añadir las que separaban a estas del partido de Berlusconi, carente de toda cohesión interna y marcado por el carisma de su líder. En consecuencia, las conversaciones para formar gobierno entre los miembros de la coalición se demoraron casi dos meses.

La pretensión de la reforma electoral había sido superar la crisis de credibilidad del sistema tras los abundantes casos de corrupción encontrados en los partidos históricos, pero el efecto fue precisamente el contrario: en noviembre de 1993 el poder judicial inició actuaciones contra el presidente del Gobierno y poco después la Liga Norte sometía al ejecutivo a una moción de censura. Azotado por la corrupción, el país no parecía ver una salida a la crisis institucional. Mientras la economía acusaba sus efectos y la lira perdía valor, las manifestaciones de protesta se sucedieron por todo el país hasta que finalmente, dos días antes de Navidad, Berlusconi presentó su dimisión para poder formar nuevo Gobierno. En este, Forza Italia obtuvo nueve carteras –entre ellas, la de Justicia, lo cual no dejaba de ser una paradoja teniendo en cuenta la situación de su líder–; el resto quedó en su mayor parte distribuido entre la Liga Norte y Alianza Nacional. Era evidente, pues, que con el mismo presidente y la misma coalición el nuevo ejecutivo iba a arrastrar los mismos problemas, eso sí, con la lección aprendida. Por ello centró su atención en la recuperación de la economía y de la confianza de la población: aprobó varias medidas destinadas a controlar de manera más eficaz el déficit público y continuó por la senda privatizadora de las empresas estatales. Como no podía ser menos, también la guerra contra la corrupción se hizo presente en el frontis de su programa.

La contrapartida de esta política estaba en las previsibles reducciones de los presupuestos para las cuestiones sociales, lo cual iba a ser muy mal recibido tanto por los sindicatos como por la población en general. Por su parte, la oposición avivó las sospechas que recaían sobre el primer ministro, para muchos más interesado en preservar su entramado empresarial que en sacar al país del atolladero. Las suspicacias, cuando no enfrentamientos abiertos, entre los miembros del ejecutivo fueron agravándose y en junio de 1994 la Liga Norte se desmarcó de la coalición. Aunque Berlusconi abogó por las elecciones anticipadas a causa de esta ruptura de compromiso, el presidente Scalfaro llamó a formar gobierno a Lamberto Dini, que hasta entonces había ocupado el Ministerio del Tesoro. Con una evidente vocación de transición, Dini convocó a una

serie de expertos sin filiación política clara con el objetivo de salvar el presupuesto y recuperar la deteriorada imagen en el exterior. Mientras tanto, cabía esperar que el panorama político volviera a discurrir por ciertos cauces de normalidad.

La Europa comunitaria reacciona: hacia el Tratado de Maastricht

En el ámbito de la CEE, el Acta Única Europea, firmada en febrero de 1986 y vigente desde el 1 de julio de 1987, había supuesto un auténtico hito en el proceso de construcción comunitaria y sus objetivos explícitos habían consistido en establecer un mercado interior y financiero único, incrementar los vínculos económicos, fortalecer la cohesión social e impulsar la cooperación política de los socios. De acuerdo con estos planteamientos, el 31 de diciembre de 1992 se levantaron los controles aduaneros intracomunitarios sobre mercancías, personas, servicios y capitales y el 1 de enero de 1993, conforme al artículo 13 del Acta, entró en vigor el mercado único, etapa que superaba al anterior mercado común. Al mismo tiempo, el Acta Única dispuso la ampliación de las competencias comunitarias a nuevos campos de actuación, sobre todo en el terreno de las políticas social, medioambiental y de investigación y desarrollo tecnológico[39].

Tanto la Declaración Solemne del Consejo Europeo de Stuttgart de junio de 1983 como los acuerdos de 1986 constitutivos del Acta Única Europea habían reactivado el proceso hacia la Unión Económica y Monetaria (UEM), fundamentado en la coordinación y convergencia de las economías nacionales. El 27 de junio de 1988 el Consejo Europeo de Hannover dio el visto bueno a un comité de expertos que analizara las fases de su desarrollo. Bajo la dirección de Jacques Delors –entonces presidente de la Comisión Europea–, el equipo concluyó los trabajos en abril de 1989, dos meses antes de que el Consejo Europeo de Madrid, celebrado los días 14 y 16 de junio, decidiera convocar una Conferencia Intergubernamental (CIG) para fijar en el 1 de julio de 1990 el inicio de la primera etapa de la UEM. Un año más tarde, el Consejo Europeo de Dublín convocaba a

su vez dos Conferencias Intergubernamentales que tendrían lugar simultáneamente a partir de diciembre: una sobre la UEM y otra sobre la Unión Política. El Consejo de Maastricht de 9 y 10 de diciembre de 1991 pondría fin a ambas.

De esta forma, el Tratado firmado por los Doce el 7 de febrero de 1992 en la localidad holandesa de Maastricht abría las puertas a un periodo cualitativamente distinto de los previos al crear la Unión Europea y proporcionar para ello un nuevo impulso al desarrollo socioeconómico[40], a la coordinación de asuntos de Justicia e Interior, al establecimiento de una Política Exterior y de Seguridad Común y al fomento de los valores comunes de una ciudadanía europea. Como ha escrito Dusan Sidjanski, «cuarenta años de integración económica han abierto la vía a la integración política»[41].

Sin embargo, de cara a la consecución de estos objetivos, la unificación de los dos Estados alemanes repercutía en la crisis de toda Europa. Ante el ingente traspaso de recursos públicos (que en 1992 y 1993 constituyeron casi los dos tercios del PIB de los nuevos *Länder*), debido en parte a la tibia respuesta de los capitales privados, el crecimiento del déficit impulsó al *Bundesbank* a incrementar los tipos de interés, política seguida en otros países del continente. Obligada al enorme esfuerzo de absorber la deteriorada economía de Alemania del Este, el déficit presupuestario había golpeado a la floreciente economía alemana, motor de la europea. Las tasas de desempleo alcanzaron cifras desconocidas dentro del espacio comunitario (cuatro millones de parados en Alemania), y ante los problemas sociales generados por los elevados índices de desempleo, los Gobiernos europeos se sintieron tentados de romper la austeridad presupuestaria que requería la aplicación del tratado.

Estas complicaciones financieras, la pérdida del empuje del resto de los países europeos en consonancia con el fracaso de una pronosticada mejora en la economía de Japón y Estados Unidos, las dificultades para la aplicación del Tratado de Maastricht después de la negativa danesa (expresada en el referéndum de 2 de junio de 1992) y la precariedad del Sistema Monetario Europeo auguraban momentos difíciles para lograr la tan ansiada Unión Monetaria. A

finales de julio, para poder mantenerse, el maltrecho Sistema Monetario Europeo optó por extender la banda de fluctuación de sus monedas, justamente lo contrario de lo que preveía el Tratado de Maastricht. Pocos meses después, en septiembre, el Reino Unido e Italia abandonaban el SME y Portugal, España e Irlanda procedían a devaluar sus respectivas monedas. Con todo, los mercados financieros tendieron a normalizarse y los Gobiernos europeos asumieron que la moneda única continuaba siendo la mejor opción, incluso, aunque la crisis económica y los desajustes del SME golpearan, sin derribar, el proyecto de unión monetaria[42].

La ampliación al Norte

A pesar de los obstáculos para la aprobación del Tratado de Maastricht, con un cierto reforzamiento del euroescepticismo en algunos sectores sociales –reflejado en el alto índice de abstención de las cuartas elecciones al Parlamento Europeo, en junio de 1994–, los primeros años de la década de los noventa contemplaron, junto a la profundización en las estructuras comunitarias, una nueva ampliación, esta vez hacia el centro y norte de Europa. El Gobierno alemán puso todo su empeño en este proceso, pensando ya en una posible integración de los países de la antigua Europa del Este tras la debacle del sistema comunista.

En efecto, con la caída del Muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, Austria, Suecia, Noruega y Finlandia estaban en condiciones de reconducir su política exterior, marcada hasta entonces por un neutralismo mediatizado por la URSS y por las prácticas de la Guerra Fría. Dado el hecho de que se trataba de países económicamente avanzados y poco poblados, las negociaciones para la adhesión fueron muy rápidas.

Concretamente en Austria, los cambios operados por Gorbachov tras su llegada a la Secretaría General del PCUS en 1985 hicieron perder relevancia a la política de neutralidad, de la que el país había obtenido indudables ventajas en los años setenta. En cambio, en el nuevo contexto europeo, con una Europa comunitaria cada vez más

fuerte e integrada y ante la crisis terminal del bloque comunista, la pequeña república corría un cierto riesgo de aislamiento, una percepción muy extendida entre la elite política. El corolario fue el consenso logrado entre las fuerzas políticas y sociales para, con la anuencia de Moscú, presentar el 17 de julio de 1989 su candidatura como miembro de pleno derecho de las Comunidades. Con el fin de motivar a una opinión pública muy imbuida todavía de los principios neutralistas, los argumentos utilizados por las autoridades no fueron tanto económicos como de seguridad y de preservación de la paz. Así, la ambigua relación de Austria con las Comunidades desde el mismo nacimiento de estas desaparecía ante los desafíos de una Europa que comenzaba a distanciarse del escenario de la Guerra Fría[43].

Las negociaciones fueron muy rápidas y, tras entrar el 1 de enero de 1995, el primer lustro de integración fue aprovechado por el Gobierno de Austria para reforzar su presencia en todas las estructuras comunitarias con el objetivo puesto en formar parte de la primera Europa lo antes posible, participando, por ejemplo, en la Unión Económica y Monetaria al cumplir los criterios de convergencia y firmar los Acuerdos Schengen de 1985 sobre eliminación de controles en las fronteras comunes. También se benefició de la integración su economía productiva al alcanzar, gracias a la inversión directa de capitales foráneos, niveles de competitividad y productividad todavía más altos de los que ya tenía[44].

La impronta de la socialdemocracia en la vida política de Suecia durante la posguerra había sido decisiva en la configuración de su política europea. Bien en solitario o bien a la cabeza de Gobiernos de coalición, el Partido Socialdemócrata había estado al frente desde 1945 hasta 1975, entre 1982 y 1991 y después de 1994. Como en el caso finlandés, su estrategia de no alineamiento, apoyada por las principales fuerzas políticas, había sido la tónica general, y a partir de la integración trataría de ocupar un espacio como mediador en los conflictos surgidos después de la caída del Muro.

La ostensible mejora de las relaciones Este-Oeste rebajó también la permanente tensión en la que se había mantenido la política

sueca de seguridad desde 1945. A ello se unía el hecho de que la economía del país no sólo no lograba remontar después de los difíciles años ochenta, sino que su crisis se agudizaba. El momento era, pues, clave, y por ello en el verano de 1990 los partidos conservador y liberal, en unión con los empresarios industriales, tomaron la iniciativa e hicieron una declaración de apoyo al ingreso pleno de Suecia en la CEE.

El final de la Guerra Fría fue, en consecuencia, el contexto necesario para que la adhesión volviera a formar parte de los intereses gubernamentales. Sin embargo, aun cuando las circunstancias eran muy favorables, las divisiones en el Partido Socialdemócrata volvieron a ralentizar el impulso europeísta hasta que, ante la gravedad de la crisis económica, el aumento del paro y las nefastas consecuencias de todo ello para el Estado del bienestar, el Gobierno de Ingvar Carlsson se sobrepuso a las disputas internas y el 1 de julio de 1991 solicitó la adhesión de Suecia a las Comunidades. Firmado en Oporto el 2 de mayo de 1992, el acuerdo entre la UE y los países de la EFTA sobre la creación del Espacio Económico Europeo permitiría conseguir un primer nivel de acoplamiento entre la economía de una y otra zona (excepción hecha de la pesca y los productos agrícolas), lo cual iba a suponer un primer acicate para el proceso de integración de los años siguientes.

En febrero de 1993, fecha en que comenzaron las conversaciones, el Gobierno sueco estaba formado por una coalición de centroderecha encabezada por el conservador Carl Bildt. Gracias, también, a ello el proceso de negociación fue rapidísimo: en marzo de 1994, poco más de un año después, el Tratado de Adhesión quedaba listo para su aprobación. Aunque la complicada marcha hacia la Unión parecía haberse resuelto con rapidez, faltaba todavía el consentimiento popular, una consulta muy temida por las elites políticas y económicas del país, dado el escaso entusiasmo proeuropeo de la sociedad sueca. Celebrado ocho meses después, el 13 de noviembre, el referéndum dio la victoria al sí, aunque por una exigua mayoría del 52,3 frente al 46,8 por 100. La opinión pública mostraba la contradictoria posición de sus Gobiernos, especialmente

del Partido Socialdemócrata, que había vuelto al poder en ese mismo año. De hecho, tras de la entrada del país en la Unión el 1 de enero de 1995, la tibieza de su política respecto de la Unión Económica y Monetaria y su firme apoyo a la cooperación intergubernamental frente a la legislación supranacional constituyeron rasgos propios de su tradicional escepticismo en cuestiones comunitarias.

La necesidad de mantener buenas relaciones con la Unión Soviética y los temas de seguridad marcaron la agenda finlandesa durante los años de la Guerra Fría hasta que el Nuevo Pensamiento lanzado por Gorbachov desde Moscú favoreció una mayor autonomía decisiva en las cuestiones de política exterior de los países sometidos directa o indirectamente a los dictados del Kremlin. En septiembre de 1985 Finlandia había aprovechado la nueva coyuntura para ingresar en la EFTA; a finales de 1988, bajo la persistente insistencia de sus grupos de presión financieros y comerciales, el Gobierno había enviado al Parlamento un informe sobre la situación real de la integración económica del país en la Europa occidental. Para no descuidar la política de neutralidad, los redactores del documento habían argumentado que la EFTA debía seguir siendo su espacio principal de cooperación.

Sin embargo, la petición austriaca de ingreso en la CEE en el verano de 1989 y, sobre todo, la de Suecia en 1991 supusieron un duro golpe para las expectativas de futuro que Helsinki tenía puestas en sus socios. Durante aquellos años del cambio de década el Gobierno finlandés había sido un firme defensor del Área Económica Europea, impulsada en 1989 por Delors, el presidente de la Comisión. La propuesta comunitaria había sido muy bien recibida porque se ajustaba perfectamente a la política tradicional del país, siempre a la búsqueda de acuerdos mercantiles ventajosos sin obligaciones políticas. Así daba satisfacción a los grupos económicos, que podrían acceder fácilmente al mercado comunitario, sin tener como contrapartida la implicación en una política común de seguridad, exterior, o siquiera económica. Al dar Suecia un paso adelante y solicitar su adhesión a las Comunidades, Finlandia corría el peligro de quedarse sola en el nuevo mapa europeo dentro de una

EFTA vaciada de contenido, por lo que en enero de 1992 el Gobierno de centroderecha salido de las elecciones de marzo del año anterior presentó al Parlamento un nuevo informe donde, razonando los cambios ocurridos, venía a solicitar de manera implícita la aprobación de la Asamblea para iniciar conversaciones con Bruselas. Con el visto bueno del Parlamento, el 18 de marzo de 1992 el ejecutivo finlandés presentó su candidatura de ingreso en las Comunidades. Las negociaciones comenzaron un año después.

Teniendo en cuenta que el país había asumido una buena parte de la legislación económica exigida por Bruselas (regulación del mercado interno y de los flujos de capital, criterios de convergencia, etcétera), los principales problemas del proceso fueron la agricultura y la inveterada política de neutralidad finlandesa[45]. La Comisión temía que Helsinki se opusiera en algún momento a la Política Exterior y de Seguridad Común, uno de los grandes retos de entonces. Sin embargo, la inestabilidad de Rusia y de la Europa central y oriental provocó que se extendiera entre la sociedad y, por supuesto, entre la elite política la idea de que la entrada en la Unión Europea favorecería el anclaje dentro de un sistema de seguridad más sólido. Al respecto fue determinante el fallido golpe de Estado de agosto de 1991, ya que una vuelta a la ortodoxia comunista en Moscú habría podido dañar la soberanía finlandesa. La crisis económica del país, derivada también en parte de la caída de su comercio con el gigante eslavo, inclinó a la opinión pública hacia la integración. De este modo, la seguridad, la neutralidad cada vez más limitada al estricto campo militar y la continuidad europeísta fueron los valores defendidos por los partidos políticos para solicitar el apoyo popular a la integración.

El referéndum consultivo celebrado el 16 de octubre de 1994, con una participación cercana al 75 por 100 de los censados, supuso una victoria del sí de casi el 57 frente al 43 por 100. Salvo la antigua izquierda comunista y un sector de Los Verdes, todas las fuerzas políticas apoyaron la entrada[46]. La precavida aproximación de Finlandia a la CEE, propia del contexto de la Guerra Fría, quedó resuelta cuando el 1 de enero de 1995 el país ingresó en la Unión

Europea con la intención de convertirse rápidamente en parte de su «núcleo duro»[47].

En el momento de iniciarse las negociaciones con Austria, Finlandia, Noruega y Suecia, tanto el ministro danés de Asuntos Exteriores Niels Helveg Petersen como el comisario para la Ampliación Hans van den Broek expresaron su certeza de que el proceso en marcha serviría, entre otras cosas, para dotar de mayor fortaleza y cohesión a la UE. En el Parlamento Europeo reunido el 20 de enero de 1993 la presidencia danesa de la Unión se mostró convencida de que las negociaciones podrían cerrarse rápidamente, teniendo en cuenta que una buena parte del trabajo ya se había realizado con la firma del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Tres semanas más tarde, el 11 de febrero, el Parlamento Europeo se mostró favorable a la ampliación que comenzaba a negociarse. Los cuatro países solicitantes «habían dado a entender que su interés en ser miembros de la Unión procedía de su deseo de participar en el proceso de toma de decisiones de la Unión a través de la integración en los órganos de gobierno de la Unión, y no quedar, como era ahora el caso a través del EEE, como meros receptores pasivos de las decisiones comunitarias»[48].

Sin trastocar el ritmo institucional, la ampliación al norte equilibraba el mapa europeo después de la incorporación de Grecia, España y Portugal a mediados de los ochenta. Con quince miembros, y después del Compromiso de Ioánnina, de marzo de 1994, la Unión lograba dar una solución consensuada a las nuevas mayorías cualificadas y a las minorías de bloqueo. Además, en contraste con la ampliación hacia los países del Sur, menos desarrollados, el ingreso de Austria, Finlandia y Suecia, socios con un elevado desarrollo económico y social, engrosaba las arcas comunitarias además de ganar la Unión en experiencias sobre políticas sociales y de cooperación, muy avanzadas en el ámbito nórdico. Poco poblados y muy ricos, las autoridades comunitarias entendieron que las conversaciones para la adhesión de estos países no impedirían profundizar en la integración; más bien, al contrario, podrían contribuir a dinamizarla. En este sentido, en el Consejo Europeo de

Lisboa de junio de 1992 los Doce habían fijado como condición para los candidatos que asumieran el Tratado de Maastricht al mismo tiempo que el *acquis communautaire.* Incluso el recurrente tema de la neutralidad de los tres candidatos encajó en la nueva arquitectura europea después del desplome del Muro, cuando la redefinición de sus políticas exteriores y de defensa tuvo cabida en la Política Europea de Seguridad Común (PESC).

De este modo, los días 24 y 25 de junio de 1994 los primeros ministros de Finlandia, Suecia, Noruega y Austria firmaron solemnemente, en el Consejo Europeo de Corfú, sus respectivos Tratados de Adhesión. Sólo Noruega volvió a retirarse del proyecto europeísta cuando, en el referéndum celebrado el 27 y el 28 de noviembre de aquel año, el 52,4 por 100 de los sufragios dio el no a la adhesión: el sector pesquero y la agricultura seguían condicionando la actitud noruega[49]. En cambio, a lo largo de aquel otoño fueron sancionados los tratados de Austria, Suecia y Finlandia, que se incorporaron el 1 de enero de 1995[50].

Un nuevo rasgo caracterizaba esta ampliación al centro y norte de Europa: al contrario que en las anteriores, los recién llegados ya no se integrarían en las Comunidades Europeas sino en la Unión Europea. Aceptaban así no sólo los viejos tratados comunitarios de 1951 y 1957, sino también los comprendidos en el Acta Única Europea de 1986 y en el Tratado de la Unión Europea de 1992, con todo su novedoso e importante acervo encaminado a la convergencia monetaria y económica: un proyecto en consonancia con el espíritu comunitario de mostrarse como una área abierta y no como una «fortaleza cerrada»[51].

El desafío de la frontera sur

El 22 de diciembre de 1989, mientras terminaba de celebrarse el bicentenario de la Revolución francesa, París fue testigo de una conferencia interministerial para relanzar el entendimiento euroárabe. Mitterrand se había implicado por completo en esta iniciativa y en la alocución final de dicho encuentro lo expresó con

claridad: «La ambición natural que tuvimos hace quince años de dotarnos de un marco de referencia no ha podido realizarse verdaderamente y, hay que admitirlo, el diálogo entre árabes y europeos lleva paralizado diez años. Por eso he deseado sacarlo del atolladero y, elevándolo a un nivel político, dar su verdadero sentido a este diálogo que nos es tan necesario a unos como a otros»[52].

Así fraguaba, finalmente, una vieja idea del mandatario francés: el establecimiento de un marco permanente de diálogo entre Europa y el norte de África en torno a las cuestiones de cooperación, desarrollo socioeconómico y estabilidad en la región. Como fruto del esfuerzo (aunque, a la postre, sin grandes resultados efectivos), en 1990 nacía en Roma el Grupo 5 + 5, integrado por España, Francia, Italia, Portugal y, más tarde, Malta, así como la Unión del Magreb Árabe (UMA), constituida desde febrero de 1989 por Marruecos, Mauritania, Argelia, Túnez y Libia.

Por lo que se refiere a esta última iniciativa, la liberalización de la economía en los años ochenta había promovido un espíritu de mayor colaboración entre estos cinco países del norte de África que, además, debían afrontar en mayor o menor medida los desafíos del islamismo, cuya capacidad de inocular su mensaje entre la población joven y desocupada constituía un reto común a todos ellos. Por otra parte, los nuevos tiempos demandaban una colaboración más estrecha si pretendían desempeñar un papel más activo en las relaciones internacionales. De este modo, tras una serie de reuniones preparatorias celebradas a lo largo de diciembre de 1988, la cumbre de jefes de Estado magrebíes inaugurada en Marrakech el 15 de febrero de 1989 decidió la creación de la Unión del Magreb Árabe, cuyo tratado constitutivo se firmó al día siguiente.

En el nacimiento y primer desarrollo de la UMA estaban muy presentes las cuestiones económicas y, sobre todas ellas, la colaboración estrecha entre los países miembros con el fin de establecer un espacio económico propio, con fuerza suficiente para negociar con las Comunidades Europeas, replantear las políticas comerciales y evitar su excesiva dependencia de mercados foráneos[53]. En aquellos años casi el 65 por 100 de las importaciones magrebíes provenía de la CEE y el 70 por 100 de las

exportaciones se dirigía hacia el mismo lugar[54]. La iniciativa cumplía, pues, un papel fundamental a la hora de dar respuesta a la creación del Mercado Único Europeo, prevista para 1992. De hecho, la mayor parte del articulado del Tratado de Marrakech seguía las pautas del comunitario: consagraba las cuatro libertades básicas, la cooperación multilateral en todos los ámbitos, la profundización en políticas comunes, etcétera.

Sin embargo, a pesar de la buena voluntad, las numerosas dificultades para llevar a la realidad los planteamientos de la UMA –desde la enorme discrepancia legislativa entre los países que la componían hasta la diferencia radical de posiciones respecto al futuro del Sahara Occidental– impidieron un desarrollo efectivo del tratado. Las cumbres subsiguientes celebradas en Cartago (Túnez), en enero de 1990; en Argel, en julio de ese mismo año, y en Ras Lanuf (Libia), en marzo del año siguiente, fracasaron en alcanzar acuerdos relevantes. Como concluye Antonio Marquina, «la integración de los Estados del Magreb no parece ser una idea movilizadora que haya tenido un impacto especial ni en la opinión pública ni en los empresarios de los diversos Estados. Lanzar una propuesta de integración cuando los intercambios económicos entre los Estados no superaban el 3 por 100 sólo se explica en función de actitudes de reacción ante el desafío europeo»[55]. A ello debemos agregar su potencialidad a la hora de eliminar fricciones o abrir cauces de diálogo sobre problemas enquistados, pero poco más.

Al calor de este ambiente de cooperación surgieron otros ensayos[56]. Auspiciado fundamentalmente por Italia y España, el proyecto de una Conferencia para la Seguridad y Cooperación en el Mediterráneo se había presentado en Palma de Mallorca en septiembre de 1990. El documento centraba su atención en la necesidad mutua de las realidades europea y mediterránea, como la historia y la geografía habían mostrado sobradamente. Las dos orillas del *Mare Nostrum* eran interdependientes, y los restantes países de la Comunidad Económica Europea debían asumir que la proximidad había generado durante siglos tanto encuentros como desencuentros; hora era, pues, de que las autoridades de Bruselas pusieran todo su empeño en elaborar instrumentos de concertación

y de cooperación para dotar a la región de estabilidad como garantía de entendimiento. Aunque la conferencia suscitó muchos recelos, a finales de junio de 1992 acudieron a Málaga representantes de quince países. Como era de prever, en la Declaración Final el voluntarismo de los discursos se impuso a la operatividad a falta de la potestad necesaria para proponer soluciones y ejecutar acciones efectivas. A la altura de 1994, según indicaba el profesor Khader:

> La Conferencia para la Seguridad y Cooperación en el Mediterráneo sigue siendo todavía un proyecto, principalmente debido a las reticencias estadounidenses y británicas y al alto grado de conflictividad propio de la región, sobre todo en Oriente Próximo. Las debilidades vinculadas a los principios observados en el eje paneuropeo de seguridad deben, en todos los casos, dar que pensar acerca de la efectividad (y no sobre la oportunidad ética) de una estructura comparable en una región en la que la estabilidad estatal e interestatal es aún menor que en Europa[57].

Tras la disolución de la Unión Soviética, la imposibilidad de solucionar el contencioso árabe-israelí, la guerra de Kuwait, los problemas de legitimidad internacional de Libia; en definitiva, los nuevos desafíos del orden internacional en la década de los noventa afectaron a todos estos proyectos, que no terminaron de arrancar. Ni siquiera la Política Mediterránea Renovada (PMR) de la CEE, presentada por la Comisión en su comunicación al Consejo de 17 de noviembre de 1989, avanzó más allá de la cooperación y ayuda al desarrollo dentro de unos parámetros tradicionales. A finales de junio de 1990 la Comisión presentó una serie de propuestas de actuación para el periodo comprendido entre 1992 y 1996 con el fin de impulsar el programa de la PMR. En los cuatro años contemplados para el desarrollo del proyecto se hablaba de un «co-desarrollo de las dos orillas», para lo cual pretendía implicar no sólo a las autoridades sino también a los distintos sectores sociales en programas sectoriales –como el MED-campus, el MED-medias y el MED-urbs–, pero lo cierto es que ninguno de los intentos recibió el impulso suficiente para ofrecer resultados visibles. Únicamente prosperó el comercio entre ambas orillas, la forma más tradicional de relación, y no la que pretendía fomentar la Política Mediterránea Renovada[58].

En todo caso, la idea de fortalecer la cooperación o, incluso, la asociación entre la Europa comunitaria y Marruecos, apoyada por España en 1992, podía enmarcarse dentro de los nuevos retos de fin de siglo a los que no era ajeno, ni mucho menos, el fin del orden bipolar. Ante los desajustes del orden internacional después de 1989, la tarea pendiente para Europa en el norte de África consistía en fijar sus poblaciones para evitar el flujo migratorio masivo e irregular y dotar de mayor estabilidad a la orilla sur del Mediterráneo con el fin de eliminar brotes integristas que pudieran penetrar en el Viejo Continente a través de las permeables fronteras. Ahí radicaba el mayor interés para establecer un foro permanente sobre seguridad, ayudar materialmente a estos países del norte de África y promover un desarrollo sostenido que, a su vez, incidiera en la democratización efectiva[59]. Por ello, la Asociación Euromediterránea, denominación oficial del Proceso de Barcelona puesto en marcha en 1995, aspiraba a fortalecer sus vínculos con el área y dar un salto cualitativo al pasar de las políticas de ayuda a las de una mayor integración.

En efecto, fue la Conferencia Euromediterránea de ministros de Asuntos Exteriores celebrada en Barcelona el 27 y el 28 de noviembre de 1995, durante la presidencia española de la UE, la que incluyó en su declaración de clausura las tres grandes metas de la política mediterránea. En primer lugar, el documento abogaba por la creación de una zona de paz basada en principios fundamentales como el Estado de derecho y la democracia representativa. En segundo término, la mejora económica aparecía formulada como una aspiración a medio plazo, en el horizonte de 2010, año en el que se entendía que la Unión y sus socios mediterráneos podrían inaugurar un espacio de libertad comercial plena. Por último, se pretendía fomentar el conocimiento mutuo entre las partes y fortalecer la sociedad civil en los países meridionales implicados.

En resumen, el objeto principal de la conferencia era poner las bases para crear paulatinamente una región política y económica estable, reflejo de la posibilidad de entendimiento entre dos civilizaciones diferentes, además de un hecho económico trascendental: hacer del Mediterráneo una zona de libre comercio

para el año 2010, un objetivo que, como sabemos, no iba a cumplirse en el plazo previsto.

Ante la escasa entidad y proyección de estas iniciativas, en los primeros años noventa Estados Unidos de América optó por fortalecer su posición en el Mediterráneo, estrechando aún más las relaciones con sus aliados tradicionales: Marruecos, Israel, Jordania, además de Arabia Saudita y los Estados del golfo Pérsico. Una vez concluida la presión soviética en la zona, el control del suministro energético resumía el objetivo central de la política norteamericana mientras trataba de neutralizar a Estados incómodos como Siria, Libia e Irak.

Las relaciones atlánticas

El 22 de noviembre de 1990 fue una fecha clave para las relaciones entre las Comunidades Europeas y Estados Unidos. Aquel día se firmó la Declaración Transatlántica, documento político de gran peso en la creación de un marco estable para definir los futuros ejes de actuación conjunta[60]. El momento era especialmente delicado en las relaciones dado el reto al que debían enfrentarse: la caída de las dictaduras comunistas en el este de Europa justo cuando las Comunidades parecían progresar de forma decidida en la integración monetaria y en el diseño de una Política Exterior y de Seguridad Común[61].

En sintonía con la actitud comunitaria de avalar las transiciones iniciadas en la Europa central y oriental, la Declaración establecía como objetivo conjunto la promoción de los valores democráticos, el libre mercado y la defensa de la paz y de los derechos humanos. Además, y en estrecha relación con estas consideraciones de índole general, la Declaración subrayaba la importancia del trabajo coordinado para derrotar al terrorismo internacional así como para poner coto al tráfico de armas y de drogas y terminar con los negocios ilegales. En otro orden de cosas, los firmantes sellaban su compromiso de cumplir los acuerdos de la OCDE y el GATT,

fortalecer el desarrollo de la educación y la ciencia y proteger el medio ambiente[62].

Un paso adelante en el desarrollo de la Declaración fue la aprobación, en la Cumbre Unión Europea-Estados Unidos celebrada en Madrid en diciembre de 1995, de la Nueva Agenda Transatlántica (NAT) y del Plan de Acción Conjunta. Tanto en su espíritu como en su contenido la agenda venía a certificar el final del orden internacional de la Guerra Fría y a reconocer el nuevo mapa europeo tras comprobar con satisfacción cómo los antiguos países sovietizados estaban resolviendo sus procesos de transición y consolidación democráticas. Comercio y seguridad constituían las cuestiones básicas sobre las que versarían las cuatro líneas de actuación futura: primero, la promoción de la paz, la estabilidad, la democracia y el desarrollo en el mundo; segundo, los retos transnacionales; tercero, la contribución al fortalecimiento del comercio internacional; cuarto, el fomento de relaciones más estrechas entre las partes.

La Nueva Agenda Transatlántica no era un acuerdo vinculante. Los socios atlantistas optaron por un marco de relación más amplio; así, en principio, se evitaba crear grandes expectativas que, de no ser cumplidas de inmediato, pudieran dañar seriamente la viabilidad del proyecto. Por su parte, el Plan de Acción Conjunta esgrimía tres grandes retos: en primer lugar, la defensa a ultranza de la democracia, el Estado de derecho, la estabilidad y la seguridad en el mundo; un segundo capítulo incluía la lucha contra el tráfico de drogas, la emigración ilegal y el terrorismo. Por último, el plan pretendía convertir el ámbito atlántico en un puente privilegiado para mejorar las relaciones con otras áreas geográficas[63].

A su vez, en relación con los retos transnacionales, la Nueva Agenda Transatlántica centraba la atención en tres focos principales: la lucha contra el terrorismo y, en general, contra los delitos cometidos por bandas internacionales; la cooperación en la defensa del medio ambiente y la protección contra enfermedades contagiosas. Especial interés merecía el primer capítulo por entrar de lleno en una de las cuestiones que comenzaban a ser candentes en la década de los noventa: el terrorismo sin fronteras[64].

En cuanto a las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Europa, la NAT no hizo sino contribuir a clarificar, mediante la creación de un «mercado transatlántico», el marco en el que se desarrollaban tradicionalmente. El volumen de exportaciones e importaciones era verdaderamente espectacular. A finales de los años noventa los intercambios constituían el 37 por 100 del comercio mundial de bienes y el 45 por 100 del correspondiente a servicios.

Como cuarto objetivo del proyecto[65], se procuró fomentar relaciones más estrechas favoreciendo el diálogo entre parlamentarios norteamericanos y comunitarios, así como influir en las respectivas opiniones públicas para resaltar entre la población la trascendencia de la Nueva Agenda. En definitiva, se trataba de fortalecer las relaciones entre la sociedad civil, un paso más allá del meramente institucional, y desde 1995 se llevaron a cabo reuniones bajo el formato de «diálogos» sobre distintos temas. También entonces Estados Unidos y la Unión Europea firmaron un Acuerdo sobre Enseñanza Superior y Formación Profesional con el fin de financiar programas de becas, proyectos tecnológicos e intercambio de alumnos y profesores, entre otras actividades.

Inevitablemente, uno de los focos de atención en las relaciones transatlánticas de los primeros años noventa tenía que encontrarse en la rápida descomposición de la Unión Soviética y del sistema del socialismo real en Europa, punto y final de la Guerra Fría. Ante la necesidad de dar una respuesta coordinada a la solicitud de apoyo a los países que habían estado al otro lado del Telón de Acero, el fortalecimiento de las relaciones euronorteamericanas sirvió para limar las asperezas heredadas de la presidencia Reagan.

Como hemos visto en su momento, las autoridades comunitarias, con el beneplácito estadounidense, procedieron sistemáticamente a firmar Acuerdos de Asociación con Polonia, Hungría, Checoslovaquia (luego con la República Checa y Eslovaquia), Rumanía, Bulgaria e incluso con nuevos estados independientes procedentes de la antigua URSS (Letonia, Lituania y Estonia) y de la ex-Yugoslavia (Eslovenia). Cuatro principios regían su articulado: el libre comercio, la ayuda económica y financiera, la cooperación científica y técnica y la creación de foros permanentes para el diálogo político. Sin duda,

el marco establecido por la Unión demostraba la voluntad comunitaria de integrar a estos países bajo el paraguas de la democracia pluripartidista, el Estado de derecho y la economía de mercado con vistas a una previsible integración plena aunque, por supuesto, sin determinar fechas[66]. No sería sino hasta el Consejo Europeo de Luxemburgo, celebrado en diciembre de 1997, cuando los incuestionables avances en el proceso de consolidación democrática de toda el área tuvieran su respuesta en el visto bueno para el comienzo de las negociaciones de adhesión.

Estados Unidos favoreció este proceso ayudando a la financiación de las transiciones y promoviendo contactos en materia de seguridad: un primer hito importante fue la inclusión de estos países en el Consejo de Cooperación Noratlántico a partir de 1995, paso previo en el estrechamiento de sus vínculos con la OTAN. En realidad, la apuesta de la Administración demócrata de Bill Clinton por un «wilsonismo práctico», proclive al robustecimiento y expansión de los valores democráticos en el mundo y a la reducción de la tensión internacional en las áreas más conflictivas, se acomodaba muy bien a los intereses de los Gobiernos elegidos libremente en aquellos primeros años de la década de los noventa. Con el fin de lograr estos objetivos, el Gobierno norteamericano no desatendió las relaciones con su antiguo enemigo, la Federación Rusa, sucesora formal de la Unión Soviética. Combinando hábilmente la firmeza en los principios con una contribución económica muy bien recibida en las deterioradas arcas de la otrora potencia mundial, Clinton obtuvo como resultado un clima de entendimiento y buena relación que, en sintonía con los intereses eurooccidentales, condujo, incluso, a la constitución en el año 1997 de un Consejo Permanente Conjunto entre la OTAN y Rusia.

[1] De la amplia bibliografía existente sobre aquellos años conviene citar tres obras sintéticas y enjundiosas: R. Collins, *Transforming America: Politics and Culture during the Reagan Years,* Nueva York, Columbia University Press, 2006; G. Troy, *The Reagan Revolution: a Very Short Introduction,* Oxford, Oxford University Press, 2009 y D. R. Farber, *Rise and Fall of Modern Conservatism: a Short History,* Princeton, Princeton University Press, 2010, pp. 159-207.

[2] «Así pues, desde los años ochenta se asistió al desarrollo de un conjunto de fenómenos económicos que favorecieron la hegemonía estadounidense. En primer lugar, la formación o consolidación de oligopolios a escala mundial que afectó a la multiplicación de compras y fusiones de empresas en los países desarrollados. En segundo lugar, la racionalización a escala mundial y regional del aparato productivo de las multinacionales. La mayor especialización de sus unidades de producción llevó a una profundización de la división internacional del trabajo». M. Huguet, «Reagan y el neoliberalismo europeo», en J. M. Beneyto, R. Martín de la Guardia y G. Á. Pérez Sánchez (dirs.), *Europa y Estados Unidos. Una historia de la relación atlántica en los últimos cien años,* Madrid, Biblioteca Nueva, 2005, p. 251.

[3] Véase N. A. Graebner, R. D. Burns y J. M. Siracusa, *Reagan, Bush, Gorbachev: Revisiting the End of the Cold War,* Westport (Connecticut), Praeger Security International, 2008, pp. 76-88.

[4] Sobre las relaciones con Gorbachov, véase *ibidem,* pp. 89-112.

[5] Al menos desde 1984, Siria permitía actuar –e incluso asistía– a grupos chiitas que hostigaban a Israel. Cuando estas milicias capturaron a varios norteamericanos, la CIA se vio obligada, con el consentimiento de Reagan, a entrar en contacto con las autoridades iraníes para lograr su liberación. A cambio de la libertad de sus ciudadanos, Washington consintió en vender armas a Teherán además de suministrar información secreta sobre los movimientos del ejército iraquí.

[6] «El reaganismo y el thatcherismo fueron en esencia el mismo enfoque básico de libre mercado aplicado en circunstancias diferentes. Un importante componente del thatcherismo fue la desregulación del mercado laboral, mientras que el mercado laboral en Estados Unidos ya estaba desregulado […]. Ambos se proponían ofrecer un marco de estabilidad monetaria dentro del cual los individuos y las empresas pudiesen llevar a cabo sus proyectos con la menor cantidad de impedimentos que fuese posible y la mayor renta que pudiese conceder el mercado». J. O'Sullivan, *El Presidente, el Papa y la Primera Ministra. Un trío que cambió el mundo,* cit., p. 397.

[7] Para una acertada síntesis de la evolución del republicanismo durante aquellos años, véase M. D. Brewer y J. M. Stonecash, *Dynamics of American Political Parties,* Cambridge (Reino Unido), Cambridge University Press, 2009, pp. 104-144.

[8] Para un buen repaso a la política de la Casa Blanca respecto a América Latina en los años ochenta y primeros noventa, véase H. J. Wiarda, *Democracy and its Discontents: Development, Interdependence, and U. S. Policy in Latin America,* Lanham (Maryland), Rowman & Littlefield, 1995, pp. 15-65.

[9] Cit. en P. Lozano Bartolozzi, *De los imperios a la globalización: las relaciones internacionales en el siglo xx,* Pamplona, EUNSA, 2001, p. 777.

[10] Sobre las conversaciones y acuerdos alcanzados por norteamericanos y soviéticos durante la década de los ochenta y hasta la firma del START I, véase C. Taibo, *Las fuerzas armadas en la crisis del sistema soviético,* Madrid, Los Libros de la Catarata, 1993, pp. 216-229.

[11] El 30 de noviembre de 1992 la Asamblea General de la ONU daría el visto bueno para prohibir la fabricación, almacenamiento y uso de armas químicas, tal como se había

consensuado en la Conferencia sobre Desarme celebrada en Ginebra dos meses antes. Más tarde, en enero del año siguiente, ciento veinticinco estados firmarían solemnemente en París el Tratado sobre Prohibición de Armas Químicas, entre los cuales no figuraban dos de los países que más incómodos iban a resultar para el nuevo orden: Irak y Corea del Norte. De igual forma, como vieja herida abierta todavía por cicatrizar, las naciones árabes se negarían a firmar el documento mientras Israel no hiciera lo mismo.

[12] G. H. W. Bush, *Toward a New World Order,* U. S. Department of State Dispatch 1, 3 (17-IX-1990), p. 91. Para una interpretación de los hechos acontecidos entre 1989 y 1993, véase G. H. W. Bush y B. Scowcroft, *A World Transformed,* Nueva York, Knopf, 1998.

[13] Según Roberto Mesa, especialista en Relaciones Internacionales y buen conocedor del Oriente Próximo y Medio, no era un nuevo orden internacional lo que se estaba gestando, «sino la sustitución del viejo y agotado sistema bipolar por otro de signo monopolar, de carácter militar, encabezado por Estados Unidos; y acompañado por un sistema multipolar, de estructura económica, en el que el liderazgo mundial ya no es único, sino compartido». R. Mesa, *Palestina y la paz en Oriente Medio,* Madrid, Ediciones Beramar, 1994, p. 108.

[14] Como escribe Michael Ignatieff, en el marco del «Imperio Humanitario» Estados Unidos no olvidaba lo esencial: su política imperial; de ahí que se mostrase «como multilateral cuando lo desea y unilateral cuando debe, y emplea su poder para diseñar una nueva división internacional del trabajo en la que Estados Unidos lleva a cabo los combates, los canadienses, franceses, británicos y alemanes patrullan las zonas fronterizas y los holandeses, suizos y escandinavos aportan la ayuda humanitaria». *El nuevo imperio americano. La reconstrucción nacional en Bosnia, Kosovo y Afganistán,* Barcelona, Paidós, 2003, p. 24.

[15] Según David Held, la Guerra del Golfo sirvió al Gobierno norteamericano para potenciar su estrategia de liderazgo por vías multilaterales. *La democracia y el orden global: del Estado moderno al gobierno cosmopolita,* Barcelona, Paidós, 1997, p. 124. Por su parte, Mary Kaldor considera que «[…] 1989 marcó el principio de lo que pudiera llamarse sociedad civil global, es decir, el momento en que la guerra y hacer la guerra comenzó a ser mucho menos importante para determinar las relaciones entre Estados […]». En aquellas circunstancias Estados Unidos era el último Estado-nación con capacidad para actuar unilateralmente. *La sociedad civil global. Una respuesta a la guerra,* Barcelona, Tusquets, 2005, pp. 151-152 y 165.

[16] Los problemas derivados del abultado déficit público de la época Bush aparecen estudiados en I. W. Morgan, *The Age of Deficits: Presidents and Unbalanced Budgets from Jimmy Carter to George W. Bush,* Lawrence, University Press of Kansas, 2009, pp. 122-156.

[17] J. S. Nye, *La paradoja del poder norteamericano,* Madrid, Taurus, 2003, p. 63.

[18] Véase J. Dumbrell, *Clinton's Foreign Policy: between the Bushes, 1992-2000,* Londres, Routledge, 2008, pp. 146-164.

[19] De la amplísima bibliografía sobre el periodo conviene destacar M. Holmes, *Thatcherism, Scope and Limits, 1983-1987,* Londres, Macmillan, 1989 y P. Riddell, *The Thatcher Decade,* Oxford, Basil Blackwell, 1989. En español podemos citar la biografía de H.

Young, periodista político de *The Sunday Times, The Guardian* y *Newsweek,* titulada *Margaret Thatcher. La mujer de hierro,* Buenos Aires, Javier Vergara Editor, 1992.

[20] «En la década posterior a su retirada de la política, los herederos de Margaret Thatcher en el timón conservador comenzaron el declive con el monótono aburrimiento transmitido por John Major, transitaron por la incompetencia engreída con William Hague y llegaron a su fase de ineptitud terminal con Ian Duncan Smith. Después del largo reinado de la Reina Sol se produjo un diluvio de mediocridad». T. Judt, *Postguerra. Una historia de Europa desde 1945,* cit., p. 787.

[21] Sobre la relación del Reino Unido con la Unión Soviética durante aquellos años, véase P. Cradock, *In Pursuit of British Interests: Reflections on Foreign Policy under Margaret Thatcher and John Major,* Londres, John Murray, 1997, pp. 86-120.

[22] Especial impacto causó a Thatcher su visita a Polonia en noviembre de 1988. Allí pudo comprobar el grado de descomposición del régimen comunista tras reunirse tanto con las autoridades, encabezadas por el general Jaruzelski, como con la oposición. Hasta la Dama de Hierro se conmovió en Gdańsk cuando, al llegar a una iglesia, la multitud concentrada en el lugar se levantó y unánimemente entonó *Que Dios nos devuelva nuestra Polonia libre*. Sobre los recuerdos de este viaje a Polonia, véase M. Thatcher, *Los años de Downing Street,* Madrid, Aguilar, 1994, pp. 777-782.

[23] Para una síntesis de la evolución del Partido Conservador durante la época de Thatcher y Major, véase T. Bale, *The Conservative Party: from Thatcher to Cameron,* Cambridge (Reino Unido), Polity, 2010, pp. 22-66.

[24] Sobre el legado de Thatcher en la década de los noventa, véase E. J. Evans, *Thatcher and Thatcherism,* Londres, Routledge, 2004, pp. 123-146.

[25] Véase S. Hogg y J. Hill, *Too close to call: Power and Politics, John Major in No. 10,* Londres, Little Brown, 1995.

[26] La modernización del laborismo en los años ochenta y primeros noventa aparece estudiada en R. Heffernan, *New Labour and Thatcherism: Political Change in Britain,* Basingstoke (Reino Unido), Macmillan, 2000, pp. 65-84.

[27] La reflexión más aguda sobre los primeros momentos se encuentra en M. Duverger, *La cohabitation des Français,* París, Presses Universitaires de France, 1987.

[28] Sobre las relaciones de Mitterrand con los políticos franceses de su época se encuentran enjundiosas reflexiones en J. M. Cuenca Toribio, *La Francia actual. Política y políticos,* Córdoba, Universidad de Córdoba, 2006, pp. 113-157.

[29] Para un estudio de la base electoral de este sorprendente resultado de la extrema derecha, véase N. Mayer, *Ces Français qui votent Le Pen,* París, Flammarion, 2002.

[30] Sobre la evolución política de la Francia de Mitterrand entre 1988 y 1995, véase J. W. Friend, *The Long Presidency: France in the Mitterrand Years, 1981-1995,* Boulder (Colorado), Westview Press, 1998, pp. 113-156.

[31] Sobre la gestión de Rocard, véase P. Favier y M. Martin-Roland, *La décennie Mitterrand. 3. Les défis (1988-1991),* París, Éditions du Seuil, 1996, pp. 15-71.

[32] Acerca de la importancia de esta convocatoria y sus consecuencias conviene acudir a R. Elgie (ed.), *Electing the French President: the 1995 Presidential Election,* Nueva York, St. Martin's Press, 1993.

[33] Sobre la crisis del sistema de partidos italiano entre 1989 y 1991, véase G. Galli, *I partiti politici italiani (1943-2004),* Milán, Biblioteca Universale Rizzoli, 2001, pp. 344-376.

[34] Respecto a los cambios en el sistema de partidos ante esta convocatoria electoral, véase A. Lepre, *Storia della Prima Repubblica. L'Italia dal 1943 al 2003,* Bolonia, Il Mulino, 2004, pp. 336-347.

[35] En febrero de 1991 las acciones emprendidas por el juez Di Pietro también habían alcanzado a un número muy elevado de políticos en activo –más de setenta– pertenecientes, sobre todo, a las dos grandes fuerzas del espectro parlamentario. Aunque en un principio el escándalo había afectado tan sólo a dirigentes socialistas, pronto hizo tambalear las estructuras de la Democracia Cristiana. Sobre la profunda crisis de la república resultan interesantes las reflexiones de E. Galli della Loggia, *La morte della patria,* Roma-Bari, Laterza, 1996 y, del mismo autor, *L'identità italiana,* Bolonia, Il Mulino, 1998.

[36] La evolución de la derecha italiana, con especial atención al caso del Movimiento Social Italiano y su transformación en Alianza Nacional, aparece estudiada en R. Chiarini, *Destra italiana dall'unità d'Italia a Alleanza Nazionale,* Venecia, Marsilio, 1995.

[37] Sobre las características de los tres partidos principales de la coalición, véanse las esclarecedoras observaciones de uno de los mejores conocedores de la historia de la derecha italiana: P. Ignazi, *Partiti politici in Italia,* Bolonia, Il Mulino, 2008, pp. 11-31 y 82-102.

[38] Para un análisis del sistema de partidos (desde la «galaxia posdemocristiana» a las formaciones de izquierda) a mediados de los noventa y su evolución posterior, véase L. Bardi, P. Ignazi y O. Massari, *I partiti italiani. Iscritti, dirigenti, eletti,* Milán, Università Bocconi Editore, 2007.

[39] Para una primera aproximación, véase C. Malo de Molina, *El Acta Única Europea,* Valencia, Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana (IMPIVA), 1989.

[40] La Comisión fue muy optimista en las cifras de crecimiento previstas como consecuencia de la firma del Tratado de la Unión Europea. En 1993 el PIB debería haber aumentado un 2,5 por 100 mientras los índices de paro se habrían situado en un 9,25 por 100. La realidad disipó estas y otras expectativas, puesto que al finalizar aquel año el PIB había disminuido un 0,5 por 100 y el desempleo alcanzaba el 11 por 100.

[41] D. Sidjanski, *El futuro federalista de Europa. De los orígenes de la Comunidad Europea a la Unión Europea,* Barcelona, Ariel, 1998, p. 241.

[42] C. Alonso Zaldívar, *Variaciones sobre un mundo en cambio,* cit., p. 155.

[43] Véase M. Gehler y W. Kaiser, «A Study in Ambivalence: Austria and European Integration, 1945-1995», *Contemporary European History* 6, 1 (1997), pp. 75-99.

[44] Véase M. Pfaffermayr, «Austria's Performance within an Integrating European Economy», en M. Gehler, A. Pelinka y G. Bischof (eds.), *Österreich in der Europäischen Union: Bilanz seiner Mitgliedschaft,* Viena, Böhlau, 2003, pp. 201-218.

[45] Véase A. Kuosmanen, *Finland's Journey to the European Union,* Maastricht, European Institute of Public Administration, 2001, pp. 29-42.

[46] Véase D. Arter, «The EU Referendum in Finland on 16 October 1994: a vote for the West, not for Maastricht», *Journal of Common Market Studies* 33, 3 (1995), pp. 361-387.

[47] Véase T. Paavonen, «From Isolation to the Core: Finland's Position towards European Integration, 1960-1995», *Journal of European Integration History* 7, 1 (2001), pp. 53-75.

[48] F. Granell, «La ampliación de la Unión Europea», *Política Exterior* VIII, 40 (agosto-septiembre de 1994), p. 75.

[49] La misma negativa se había producido más de dos décadas antes, el 16 de septiembre de 1972.

[50] Para un estudio más detallado de la ampliación de la UE a estos países, véanse los capítulos correspondientes en W. Kaiser y J. Elvert (eds.), *European Union Enlargement. A Comparative History,* Londres, Routledge, 2004, pp. 131-188.

[51] F. Granell, «La ampliación de la Comunidad», *Política Exterior* VII, 34 (verano de 1993), p. 66.

[52] Cit. en B. Khader, *Europa y el Mediterráneo. Del paternalismo a la asociación,* Barcelona, Icaria, 1995, p. 48.

[53] Véase P. Balta, «L'UMA et le défi de la CEE», en B. López García, G. Martín Muñoz y M. Hernando de Larramendi (eds.), *Elecciones, participación y transiciones políticas en el norte de África,* Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1991, pp. 29-38.

[54] M. Kabunda Badi, *La integración africana. Problemas y perspectivas,* Madrid, Agencia Española de Cooperación Internacional, 1993, p. 197.

[55] A. Marquina, «La Unión del Magreb Árabe», en A. Marquina (ed.), *El Magreb: concertación, cooperación y desafíos,* Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1993, p. 123.

[56] Entre ellos, el Foro de Estados del Mediterráneo fue propuesto por el presidente de Egipto Hosni Mubarak; a su primera reunión, celebrada en Alejandría en julio de 1994, asistieron representantes de diez países.

[57] B. Khader, *El muro invisible,* Barcelona, Icaria, 1995, p. 41.

[58] Aunque no pudiera llevarse a la práctica, la PMR tenía «un importante contenido político que se plasma en la declaración sobre la importancia que la CEE concede al respeto de los derechos humanos y a la promoción de los valores democráticos en la cuenca mediterránea. La intensificación del diálogo político es uno de los objetivos de la PMR y la Comisión sostuvo que la Comunidad debe favorecer la evolución hacia el pluralismo democrático y el fortalecimiento de las fuerzas del mercado. En esa línea, el apoyo financiero que se viene dando a los países que han emprendido la vía de las reformas económicas auspiciadas por el FMI y por el Banco Mundial tiene un importante contenido político». C. Echeverría Jesús, «Origen, evolución y perspectivas de la cooperación entre la Comunidad Europea y los países de la Unión del Magreb Árabe», en A. Marquina (ed.), *El Magreb: concertación, cooperación y desafíos,* cit., p. 216.

[59] Así lo explica, entre otros, B. Khader, *Europa y el Mediterráneo. Del paternalismo a la asociación,* cit.

[60] Un repaso de los cambios en las relaciones políticas entre ambas partes desde los años cincuenta se encuentra en K. Featherstone y R. H. Ginsberg, *The United States and the European Union in the 1990s. Partners in Transition,* Londres, Macmillan Press, 1996, pp. 77-113.

[61] Para una aguda reflexión sobre la ampliación de la Unión y la Política Exterior y de Seguridad Común, véase H. Sjursen, «Enlargement and the Common Foreign Security Policy: Transforming the EU's External Identity?», en K. Henderson (ed.), *Back to Europe. Central and Eastern Europe and the European Union,* cit., pp. 37-51.

[62] B. Carrión Ramírez, B. Becerril Atienza e I. Cartagena Núñez, «Las relaciones institucionales entre la Unión Europea y los Estados Unidos en nuestros días: análisis de la Nueva Agenda Transatlántica», en J. M. Beneyto, R. Martín de la Guardia y G. Á. Pérez Sánchez (dirs.), *Europa y Estados Unidos. Una historia de la relación atlántica en los últimos cien años,* cit., pp. 299-314.

[63] Véase A. L. Gardner, *A New Era in US-EU Relations?: the Clinton Administration and the New Transatlantic Agenda,* Aldershot (Reino Unido), Ashgate, 1997.

[64] En otro orden de cosas, el medio ambiente fue motivo de constante preocupación y disensiones entre los socios euroatlánticos. Tras la firma de la Nueva Agenda las posiciones no se acercaron; en diciembre de 1997, mientras la práctica totalidad de los países europeos iba a ratificar el Protocolo de Kioto con el fin de estabilizar las concentraciones de gas invernadero en la atmósfera, Estados Unidos no iba a hacerlo, alegando la necesidad de estudios más pormenorizados y profundos. El desencuentro continuaría después de la llegada de George W. Bush a la presidencia norteamericana en 2001.

[65] B. Carrión Ramírez, B. Becerril Atienza e I. Cartagena Núñez, «Las relaciones institucionales entre la Unión Europea y los Estados Unidos en nuestros días: análisis de la Nueva Agenda Transatlántica», cit., pp. 319-321.

[66] Sobre las dificultades del proceso, véase N. Pietri, «Les difficultés présentes de l'élargissement de l'Union Européenne à l'Est», en M. M. Tavares Ribeiro (coord.), *Olhares sobre a Europa,* Coimbra, Quarteto, 2002, pp. 36-50; J. M. Palacios y P. Arana, «Consolidación democrática e integración internacional: el caso de la Europa del Este», *Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol* 43/44 (primavera-verano de 2003), pp. 149-163.

V. El fracaso de la seguridad colectiva

El nuevo orden mundial, que anunciaba la defunción de aquel fundamentado sobre el equilibrio de fuerzas, surgió bajo la garantía del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y del poder norteamericano para velar por el establecimiento de la paz en todos los rincones de la Tierra. Sin embargo, la ilusión de este nuevo orden comenzó a difuminarse muy rápidamente, en los primeros años de la década de los noventa. Apenas se apagaban los rescoldos de la Guerra Fría cuando viejos y nuevos conflictos se extendieron por gran parte del planeta y vinieron a demostrar que ni la ONU ni las potencias mundiales eran capaces de garantizar sus promesas de paz y de mejora socioeconómica para los menos favorecidos.

Tensiones en el mosaico islámico

La permanente cuestión palestina y la situación en Oriente Próximo

Desde la creación del Estado de Israel en 1948, la evolución de Oriente Próximo ha estado marcada de forma indeleble por la disputa entre árabes y judíos a propósito de Palestina, cuyas consecuencias para la desestabilización de la región han revestido trascendencia mundial. Sin duda alguna, pues, los cambios operados en el escenario internacional a finales de los ochenta iban a influir de forma decisiva en los intentos de resolver un conflicto enquistado durante décadas. En febrero de 1986 las autoridades jordanas habían decretado la expulsión de los dirigentes de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) establecidos en Ammán por negarse a realizar concesiones de cualquier tipo en las conversaciones con Israel. La respuesta jordana para neutralizar las protestas de los palestinos de Cisjordania fue rápida: cambios en la composición del Parlamento para acoger una amplia representación de ellos, anuncio de un extenso programa para reactivar la economía de la zona y concesión de ayudas a los sectores más vulnerables de

aquella sociedad. El plan de choque pretendía ganar la voluntad de la población para fortalecer su lealtad a la Corona hachemita y rebajar la influencia que sobre ella ejercía la OLP. Así se allanaría el camino de la negociación con Israel partiendo del principio de un control conjunto de Cisjordania.

En efecto, el 11 de abril de 1987 –en un plazo de tiempo relativamente breve, a tenor de la complejidad de la situación– Israel y Jordania firmaron el Acuerdo de Londres. A nadie se le ocultaba la trascendencia del compromiso alcanzado en la capital británica, ya que rompía con la tradicional posición asumida por los países árabes de que fuera una conferencia internacional, bajo el paraguas del Consejo de Seguridad de la ONU, la que dictase la solución del conflicto. En Londres, por el contrario, el Gobierno jordano había aceptado la negociación directa con Israel para tratar de encontrar una salida, lo cual, evidentemente, reducía el papel de las restantes partes interesadas. Sin embargo, la negativa de los conservadores del Likud a apoyar a Shimon Peres, su socio en el Gobierno israelí, limitó por completo la efectividad del acuerdo y obligó a Jordania a cambiar de actitud para recomponer sus deterioradas relaciones con el resto de los países árabes, incluida Siria.

Este complicado escenario se agravó en los años finales de la década con el desarrollo de una forma de protesta masiva contra la presencia israelí en tierra palestina denominada en árabe *intifada,* prueba de la continuidad del apoyo a la OLP mostrado por los palestinos de los Territorios Ocupados. Desde diciembre de 1987 las imágenes de cientos de palestinos de todas las edades lanzando piedras en manifestaciones casi diarias contra los carros blindados israelíes llegaron a todo el mundo y familiarizaron a la opinión internacional con este vocablo. El fenómeno era, además, relativamente novedoso, ya que sobrepasaba la propia acción de la OLP, que a menudo se mostraba incapaz de controlar estos movimientos espontáneos[1].

Los levantamientos amenazaron, incluso, la seguridad de toda Jordania: el 28 de julio de 1988 la situación llegó a tal extremo que el propio rey Husein anunció la supresión del programa de desarrollo económico para Cisjordania y poco después, el día 31, declaró

oficialmente el fin de los vínculos político-administrativos que unían Jordania y Cisjordania, una decisión de enorme relevancia. Según sus propias palabras, con este gesto «se afirmaba la identidad palestina en todas sus facetas»; asimismo, el rey apostaba por un Estado propio para Palestina donde la OLP encarnase «la identidad nacional sobre el suelo palestino»[2].

El error de cálculo de Ammán respecto a la OLP había resultado fatal para sus planes. Las autoridades tenían ahora que retroceder en su política hasta los albores de 1986. Indudablemente, la OLP contaba –y lo hacía en gran medida– en Oriente Próximo, y no podía ser desplazada, ni mucho menos sustituida, en la toma de decisiones sobre los Territorios Ocupados de Cisjordania y Gaza. Las elecciones celebradas en Jordania en 1989 mostraron la ruptura de la unidad política después de tres décadas: aunque todavía el 45 por 100 de los escaños fue a parar a los fieles al régimen, la izquierda y los distintos grupos islamistas se quedaron a tan sólo 2,5 puntos de distancia. Por otra parte, ese mismo año el Gobierno jordano hubo de acudir al FMI para tratar de solucionar el deterioro de sus finanzas. A cambio de la ayuda crediticia se vio obligado a llevar a cabo un programa de ajuste quinquenal y, a pesar de todo, al año siguiente continuaba en el ranquin de los países más endeudados del mundo[3].

Mucho perdió también el laborismo israelí, frustrada su apuesta por la baza jordana en la resolución del conflicto. El Likud, crecido ante los acontecimientos, radicalizó aún más sus tradicionales posiciones a favor de controlar militarmente los Territorios Ocupados y continuar la lucha contra la OLP. Sin embargo, los conservadores no consiguieron beneficiarse del fracaso de Peres tanto como esperaban y tras las elecciones legislativas celebradas en noviembre de 1988 ganaron en el Parlamento cuarenta escaños, tan sólo uno más que los laboristas. El Likud tuvo así la oportunidad de formar Gobierno. Presidido por Isaac Shamir, en él quedó Peres relegado al Ministerio de Finanzas mientras el laborista Isaac Rabin retenía la importante cartera de Defensa.

Precisamente en aquel mes de noviembre un acontecimiento de enorme relevancia animó a la Administración Reagan a seguir

perseverando en sus esfuerzos de potenciar las conversaciones para alcanzar la paz. El día 15 Yaser Arafat admitió desde Argel el derecho a la existencia del Estado de Israel y pocas semanas después, ya en diciembre, la Casa Blanca decidió entablar un diálogo con la OLP[4]. En efecto, con el reconocimiento del líder palestino se había salvado uno de los escollos más difíciles para la reactivación de contactos entre Israel y la Autoridad Palestina. No todas las partes reaccionaron de igual modo y esta trascendental iniciativa quedó pronto oscurecida por la reacción del Gobierno de Tel Aviv, para quien la OLP continuó siendo un grupo terrorista. Sin embargo, algo había cambiado en la comprensión internacional del conflicto: a finales de aquel año de 1988 ciento cuatro países habían reconocido a Palestina como Estado y la ONU había elevado el rango de la representación de la OLP, dejando de lado su calidad de mero observador[5].

Los canales de comunicación entre palestinos y laboristas siguieron abiertos y en febrero de 1989 se celebró una reunión con representantes de la OLP en Jerusalén. Por su parte, en mayo, para no quedar a la zaga de la iniciativa de Washington, Shamir propuso su propio plan. En él abogaba por negociar por separado con cada uno de los países árabes de la zona, siempre que reconocieran al Estado judío y le garantizaran la seguridad. Como contrapartida ofrecía la celebración de elecciones municipales que permitieran a los palestinos la gestión de los asuntos locales. Realmente, la propuesta era muy pobre y sólo intentaba satisfacer el empeño norteamericano por reactivar las conversaciones de paz. Resultaba evidente para cualquier observador que la OLP no podía aceptar unas concesiones tan limitadas.

La inutilidad de la propuesta de Shamir no pasó desapercibida en la Casa Blanca. El 22 de mayo de 1989, fruto del cambio en la política exterior norteamericana, más favorable con el nuevo presidente Bush a un entendimiento con los países árabes, el secretario de Estado James Baker pronunció en Washington un duro alegato en contra de la obstinación israelí respecto a Palestina: «Ha llegado el momento de que Israel renuncie de una vez por todas a la visión irrealista de la tierra de Israel. Israel debe renunciar a la

anexión, interrumpir su política de asentamientos, permitir la reapertura de las escuelas en los territorios y tender la mano a los palestinos, sus vecinos, que merecen disponer de derechos políticos»[6].

Ese mismo día la Liga Árabe readmitía a Egipto en el seno de su organización. Los esfuerzos diplomáticos realizados a lo largo de los últimos cinco años habían rendido sus frutos. No sólo esto: en el escenario internacional que se estaba fraguando la política egipcia representaba el modelo de mediador deseado por Estados Unidos. Aunque el gigante americano no iba a retirar el apoyo incondicional a su aliado israelí, las palabras de Baker marcaban el inicio de una nueva etapa en la que Washington aspiraba a convertirse en una pieza fundamental en el camino hacia la paz. De hecho, pocos días después de aquella intervención, la Liga Árabe aceptaba la Resolución 242 de la ONU reconociendo el derecho a existir del Estado de Israel.

Todavía sobre la mesa el Plan Shamir, Baker no olvidó su compromiso de apoyar una solución global para el conflicto de Oriente Próximo y el 10 de octubre de 1989 presentó su propio plan. Esta vez la clave consistía en incluir a la OLP en las negociaciones, si bien en el juego de presiones los norteamericanos aceptaron finalmente que la delegación estuviera compuesta tan sólo por palestinos de Cisjordania y Gaza. La decepción se apoderó de la OLP, la cual, por boca de Arafat, insistió en recuperar el marco de Camp David como el más adecuado para avanzar en las conversaciones. Por su parte, el Gobierno de Unidad Nacional en Israel no varió un ápice su firme resolución de no negociar con la OLP y, poco después, mientras el Gobierno judío aprobaba un nuevo asentamiento, el Likud desbarataba el Plan Baker al negarse a aceptar la propuesta norteamericana de que los negociadores palestinos de los Territorios Ocupados estuvieran presentes en la reuniones preparatorias.

Ante la inflexibilidad de los conservadores, el Partido Laborista abandonó el Gobierno, por lo que en junio de 1990 Shamir se vio abocado a formar uno nuevo con la extrema derecha y los judíos ortodoxos. Inmediatamente, como consecuencia, el acercamiento de

posiciones entre las partes para llegar a un acuerdo quedó neutralizado.

La posición de Tel Aviv no influyó en la Casa Blanca: su política de oposición a los asentamientos en los Territorios Ocupados continuó durante los años siguientes e incluso se intensificó tras la derrota de Irak como agradecimiento al apoyo que los países árabes habían prestado a la coalición internacional. Sin su concurso, la acción norteamericana hubiera quedado completamente deslegitimada en aquella región; de hecho, la Guerra del Golfo había trastocado lo que hasta entonces había sido la manifestación del orden mundial en la zona. La moderación del régimen de Damasco, la perfecta sintonía entre Washington y Riad y el mayor entendimiento entre norteamericanos y soviéticos respecto a la situación en Oriente Medio cambiaban –al menos en parte– el escenario, favoreciendo el espíritu pacificador. Así, el final de esta guerra impulsó la recuperación del diálogo para resolver el conflicto de Oriente Próximo. El cambio en el contexto internacional había sido una vez más determinante. En efecto, la Unión Soviética se había convertido en aliada circunstancial de Estados Unidos y, rompiendo su discurso tradicional, pasaba a ofrecer a Washington una colaboración activa en un momento en que esta disponía de capacidad para hacer valer sus propuestas. Los países más reticentes a suscribir las tesis norteamericanas –y, entre ellos, Siria como caso paradigmático– atravesaban un momento de debilidad, como la propia OLP. Ante este hecho, teniendo en cuenta que incluso Israel había transigido para que se reanudasen las negociaciones, la perspectiva de dialogar parecía la mejor. Aun así, comenzaban a percibirse síntomas preocupantes que con el paso de los años acabarían teniendo graves repercusiones: a lo largo de 1990 el grupo islamista Hamás fue ganando influencia entre distintos sectores sociales palestinos; todavía más, algunos países del golfo Pérsico como Kuwait comenzaron a transferir a este grupo mayores ayudas económicas que a la OLP[7].

Los cambios en la URSS no fueron los únicos que influyeron en Siria, que se vio sacudida por las consecuencias de la Revolución Islámica de Irán. Huelgas, manifestaciones y asesinatos se

multiplicaron en los meses siguientes al intensificar los Hermanos Musulmanes las campañas de acoso al Gobierno del partido Baaz y al extender sus acciones, desde marzo de 1980, a ciudades como Alepo, Homs y Hasake. A los ataques respondían las fuerzas armadas sirias con una guerra sucia, generando así una espiral de violencia inusitada. Con el fin de intimidar más a los islamistas, a finales de julio de aquel mismo año de 1980 se decretó la pena de muerte para quienes formaran parte de los Hermanos Musulmanes. La atmósfera de guerra civil se enseñoreó del país. En el otoño apareció un Frente Islámico cuyo fin era coordinar las acciones de los insurgentes: logró extender sus atentados por todo el territorio nacional e incluso, a principios de 1982, con el apoyo de oficiales del ejército, pergeñó un plan para derrocar al presidente Hafez al-Asad. Los leales al presidente lograron desactivarlo pero, como secuela del intento, los sublevados lograron en la ciudad de Hama hacerse con el poder y rechazar durante tres semanas a las fuerzas gubernamentales. El enfrentamiento se saldó con más de diez mil muertos, cifra muy abultada por la sangrienta represión de la revuelta. El levantamiento sunnita había sucumbido ante el Estado sirio[8].

Los tradicionales vínculos amistosos del régimen sirio con la URSS explicaban el debilitamiento de su posición en Oriente Próximo y Medio al producirse el desplome soviético. No obstante, ya durante los años de perestroika Gorbachov había variado su percepción de la política que convenía seguir en aquella región; cambio que no era sino un aspecto más del Nuevo Pensamiento gorbachoviano. Las ayudas militares a Damasco se vieron reducidas ostensiblemente mientras el Kremlin ordenaba a sus diplomáticos que dispusieran un acercamiento al resto de los países árabes, con los cuales se habían reducido los contactos en beneficio del aliado sirio: Jordania, Arabia Saudita, Egipto y Omán. Con este viraje estratégico la URSS quería desempeñar un papel más influyente a través de acuerdos que potenciaran las vías económica, tecnológica y comercial, siempre con el fin de limitar sus costosísimas inversiones militares en la región[9].

En este sentido, aunque por vía indirecta, el Nuevo Pensamiento sirvió para que al-Asad, buscando nuevos horizontes para salir del aislamiento a que le abocaba la política del Kremlin, tendiera puentes a sus vecinos: ya en febrero de 1986, por ejemplo, firmó el restablecimiento de relaciones con Jordania. Por su parte, Washington también movía ficha en la región. El presidente Ronald Reagan había incluido a Siria dentro de los países que colaboraban con el terrorismo antioccidental. Por si esto fuera poco, en 1980 Damasco había firmado con Moscú un Tratado de Amistad y Cooperación, lo cual suponía en la práctica la llegada de material militar en apoyo al régimen de al-Asad y, por tanto, un nuevo elemento de inestabilidad en Oriente Próximo, como también lo era la permanente intervención siria en los asuntos del Líbano[10].

La llegada de George H. W. Bush al poder en el contexto de la desintegración del mundo soviético facilitó una primera aproximación entre Estados Unidos y Siria. El nuevo presidente rebajó la dureza de las declaraciones de su predecesor –para quien, como acabamos de ver, Damasco cobijaba a terroristas– y abogó por iniciar un diálogo en el nuevo marco internacional que se abría. Por su parte, el régimen sirio dio muestras de una cierta flexibilidad en sus posiciones al permitir a grupos independientes su entrada en el Parlamento tras las elecciones de 1990 y la vuelta al país a algunos opositores. Continuó el férreo control sobre los medios de comunicación, pero el discurso antioccidental, persistente hasta entonces en su radicalidad, fue perdiendo peso.

Este giro en la política de Damasco culminó en marzo de aquel año de 1990, cuando, por mediación de Jimmy Carter, las autoridades sirias hicieron saber su interés por comenzar a dialogar con Israel con el fin de avanzar hacia una salida para el conflicto árabe-israelí. A finales de noviembre el presidente norteamericano y Hafez-al-Asad mantuvieron en Ginebra una entrevista que ponía fin a más de una década de profundas desavenencias, un periodo oscuro durante el cual no se había producido ningún acercamiento significativo.

El final de la Guerra Fría, pues, aparecía en Oriente Próximo y Medio bajo la tutela de Washington con los objetivos de dejar a

Sadam Husein fuera del juego de fuerzas regionales y dotar de estabilidad a la zona, logrando el control sobre la proliferación de armas. Una vez más, la ONU quedaba relegada en la práctica mientras Yaser Arafat trataba de recomponer su maltrecha organización volviendo a la mesa de negociaciones. Por su parte, desde 1986 y hasta 1993 Tel Aviv estableció relaciones diplomáticas plenas con la Unión Soviética, y posteriormente con la Federación Rusa, así como con todos los países de la antigua Europa sovietizada, los países bálticos, las repúblicas de Asia central, China, Vietnam, India y buena parte del África subsahariana[11]. Era evidente que el nuevo contexto internacional favorecía la ruptura del tradicional aislamiento del Estado sionista, impulsándolo al diálogo.

De este modo, la década comenzó con buenos augurios para resolver el secular conflicto del Oriente Próximo –ahora más que nunca, palestino-israelí–. Los buenos oficios de la diplomacia internacional, con Estados Unidos a la cabeza, dieron finalmente sus frutos, no sin sobresaltos previos por la insistencia del Gobierno israelí en continuar su política de asentamientos[12]. El 30 de octubre de 1991, con la presencia de George Bush y Mijail Gorbachov[13], se inauguró en Madrid la Conferencia de Paz para Oriente Próximo; participaron delegaciones de Israel, Líbano, Siria, Egipto y una conjunta jordano-palestina. La Conferencia –cuya primera fase se celebró en la capital de España durante cinco días– tenía su fundamento en las resoluciones de las Naciones Unidas 242 y 338, que databan de 1967 y 1973, respectivamente. La segunda remitía a la primera, en la cual se exhortaba a Israel a retirarse de los Territorios Ocupados y consagraba el derecho de todos los Estados de la zona a vivir en paz y con fronteras seguras; en todo momento se insistía para que ambas partes entablaran negociaciones de paz[14].

Ciertamente, el momento era crucial. Al margen de las dificultades obvias, el mero hecho de que se entablasen conversaciones bilaterales entre Israel y los países árabes implicados en el conflicto palestino resultaba de enorme trascendencia. Si los palestinos mantenían la declaración de Arafat de noviembre de 1988 y renunciaban a continuar sus llamamientos a la desaparición del

Estado de Israel (presentes en la Carta de la OLP), y si Israel, a su vez, admitía la posibilidad de autogobierno para Palestina y firmaba tratados de paz con sus vecinos árabes, el resultado podría transformar la realidad de la región.

Sin duda, uno de los escollos más difíciles de sortear era el de las relaciones sirio-israelíes: poco avanzaron desde la Conferencia de Madrid hasta la primavera de 1992. La esperanza de mejora vino en junio de la mano del triunfo de los laboristas de Isaac Rabin. Al frente de un gobierno de coalición, Rabin manifestó su intención de fijar en el proceso de paz el principal reto de su política. Con el permanente auspicio de Washington, de los contactos y las negociaciones con sirios y egipcios salió un compromiso de profundo calado: Israel estaba dispuesto a retirarse del Golán. Al margen de las graves repercusiones políticas internas que esta decisión podía tener para los laboristas, la seguridad del país exigía ciertas compensaciones de Damasco, entre ellas, el reconocimiento sincero de que las relaciones entre ambos Estados entrarían en un proceso de normalización. Los costes no eran menos importantes para la política siria, cuya posición tradicional en el conflicto árabe-israelí se vería muy erosionada: de ser así, al-Asad tendría que romper relaciones con los islamistas de Hezbolá y, por tanto, variar también su estrategia respecto a Irán[15].

Ante un desafío de esta envergadura, las conversaciones no terminaron de fructificar. Si de todo ello se comenzó a hablar en Madrid, pocas semanas después, en diciembre de 1991, se siguió hablando en Washington y el 17 de agosto de 1993, tras veinte meses de conversaciones, se acordó en Oslo firmar la denominada «Declaración de Principios sobre Acuerdos Interinos de Autonomía». Por este acuerdo la OLP aceptaba las resoluciones 338 y 242 del Consejo de Seguridad de la ONU, reconociendo así el derecho del Estado de Israel a su existencia pacífica y a su seguridad, mientras el Estado judío, por su parte, aceptaba a la OLP como representante legítimo del pueblo palestino. Este reconocimiento mutuo y explícito entre Israel y la OLP constituyó todo un éxito y una auténtica esperanza.

Muy poco después, el 13 de septiembre de ese mismo año, se signaba formalmente en la Casa Blanca un acuerdo, calificado de histórico, entre Israel y la OLP. Bajo la atenta mirada de Clinton, Rabin y Arafat, los respectivos responsables de Exteriores Shimon Peres y Mahmud Abas firmaron la Declaración de Principios. Esta contemplaba la autonomía no completa para la Franja de Gaza y para Jericó en Cisjordania, zonas que quedaban parcialmente sometidas a una autoridad palestina; a Israel competía la seguridad, defensa y economía de los territorios, en principio, durante los cinco años siguientes.

La firma de la Declaración abría las puertas a una futura devolución de territorios y resultaba de enorme relevancia como fundamento sobre el que habría de asentarse la desactivación del conflicto. Algunos de los asuntos más espinosos, como la retirada de los asentamientos o la cuestión del Estado palestino, quedaban pospuestos. Israel controlaba la situación; en el caso de que algo fallase todo volvería al punto de partida[16]. Al día siguiente, el 14 de septiembre de 1993, y en el mismo escenario de Washington, los representantes de Jordania e Israel firmaron un auténtico proyecto de paz: la Agenda Común, elaborada después de casi de dos años de conversaciones a partir de la Conferencia de Madrid.

Los contactos se mantuvieron activos hasta culminar el 25 de julio de 1994 con un encuentro, auspiciado por Clinton, entre el rey Husein y el primer ministro Rabin, en cuya declaración conjunta manifestaron explícitamente aceptar el final de la beligerancia y adherirse a las ya citadas resoluciones 242 y 338 de la ONU. El documento, que cerraba un periodo de casi medio siglo de pugna entre ambos Estados, condujo a la firma de un tratado de paz tres meses después, el 26 de octubre de 1994[17]. Habían pasado quince años desde que, en 1979, Israel hiciera lo mismo con otro país árabe, la república de Egipto.

También continuaron avanzando las relaciones de Tel-Aviv con las autoridades palestinas: el 28 de septiembre de 1995 se firmó en Taba (Egipto) el Acuerdo Oslo II, por el que se establecía la retirada del ejército israelí de los Territorios Ocupados. Asimismo, se concedía la autonomía a otros siete municipios –entre ellos, Nablus,

Belén y Yanín– y se posibilitaba la celebración de elecciones para elegir el Consejo Nacional Palestino y al presidente de los territorios autónomos. De cumplirse este acuerdo, la Autoridad Nacional Palestina controlaría casi el 30 por 100 de Cisjordania y, con ello, el 85 por 100 de la población de la zona. Aunque, una vez más, algunas cuestiones trascendentales fueron pospuestas (por ejemplo, el trazado definitivo de los límites fronterizos y el estatuto de la ciudad de Jerusalén[18]), el avance fue decisivo. Además, pese a la dura oposición parlamentaria, el primer ministro israelí logró sacar adelante una declaración donde expresamente se aceptaba el establecimiento de la Autoridad Palestina en Gaza y Jericó para que, en una fase posterior, pasase a controlar las demás ciudades ocupadas.

Por supuesto, esta política contó con muchos detractores en Israel, donde, desde el nombramiento de Rabin como primer ministro en 1992, el empeño por llegar a un entendimiento real con la OLP había enconado la agresividad de importantes sectores de la población judía. La oposición conservadora del Likud y de otras fuerzas de carácter extremista creció incesantemente durante estos meses.

Respecto a las relaciones de Israel con Siria –muy reticente a los acuerdos con los palestinos y los jordanos, ya que la dejaban en una situación de acusada debilidad–, las presiones internacionales y el temor a verse apartada del juego en Oriente Próximo facilitaron a lo largo de 1995 la continuidad de las conversaciones[19]. El 24 de mayo los representantes sirios aceptaron finalmente un documento poco definido pero alentador, teniendo en cuenta las circunstancias. En efecto, los Objetivos y Principios de los Acuerdos de Seguridad, de sólo una página, hacían una llamada a la prudencia para evitar, por encima de todo, cualquier fricción que pudiera desencadenar un conflicto bilateral, así como a reconocer la necesidad de alcanzar un acuerdo de seguridad equitativo[20].

Los recelos de Siria resultaron a la postre menos peligrosos que el rechazo de la mayor parte de los colonos israelíes a ceder un ápice de terreno ocupado. El final de esta escalada de acusaciones al primer ministro por su debilidad y su dejación ante la OLP adquirió

tintes trágicos. El 4 de noviembre de 1995 uno de estos colonos, Yigal Amir, acababa con la vida de Isaac Rabin, que había despreciado la fuerza movilizadora del fundamentalismo, precisamente una de las características del nuevo orden mundial en gestación. Fue un triste final para la campaña de acoso al primer ministro israelí, que había llegado, incluso, a ser criticado por algún rabino por contravenir los preceptos de la religión. Su sucesor, Shimon Peres, carecía de su sentido estratégico y de su conocimiento de la realidad de la región. Llegado al Gobierno con el apoyo masivo del Parlamento, Peres se encontró con una red de contactos tejida personalmente por Rabin para llevar a cabo una política de acercamiento a los palestinos en la cual él no tenía cabida al desconocer cuáles habían sido los compromisos alcanzados. Respecto a las relaciones con Siria, por ejemplo, las negociaciones fueron progresivamente desactivadas y en marzo de 1996, tras una oleada de atentados y de asesinatos selectivos, Peres paralizó las conversaciones.

Mientras tanto, la derecha, representada por el Likud de Benjamin Netanyahu, ganaba popularidad en Israel reafirmando la tradicional línea de confrontación con los palestinos. El espejismo de un acuerdo se disolvía en el aire, y la vigencia de un conflicto heredado de la Guerra Fría iba a mantenerse a lo largo de su posguerra[21].

La retirada de Afganistán, síntoma de la enfermedad soviética

No le faltaba razón a Brzezinski cuando en 1980 pronosticó que el enfrenamiento entre Estados Unidos y la URSS se dirimiría en la periferia del núcleo central de la Guerra Fría, esto es, en la franja que desde Somalia y Etiopía llega a Afganistán. Según el asesor presidencial, la Casa Blanca debía centrar sus esfuerzos en debilitar la presencia soviética en toda esa zona y, ciertamente, no cabe duda de que la ayuda prestada por los norteamericanos y los saudíes a los muyahidines –o combatientes islámicos– para que hostigaran al ejército soviético iba a terminar surtiendo el efecto deseado.

En septiembre de 1979 la URSS había invadido Afganistán en socorro del régimen comunista de aquel país, intervención condenada por la Conferencia Islámica. Gracias, precisamente, al apoyo diplomático recibido por sus hermanos de religión y a la ayuda militar prestada por diversos países (entre ellos, Pakistán e Irán, pero también China y Estados Unidos), los muyahidines declararon la guerra a los comunistas afganos y a sus aliados soviéticos. A mediados de la década de los ochenta, ante los desastres sufridos por el Ejército Rojo y en virtud del Nuevo Pensamiento de Gorbachov en política exterior, las diplomacias soviética y estadounidense comenzaron a pactar una solución para el conflicto. Finalmente, el 14 de abril de 1988 el secretario general de la ONU y los ministros de Asuntos Exteriores de la URSS, Estados Unidos, Pakistán y Afganistán llegaron a un acuerdo sobre el fin de la intervención soviética en este último país, de tal modo que entre el 15 de mayo de 1988 y el 15 de marzo de 1989 se efectuó la evacuación de las unidades militares que Moscú tenía allí desplegadas[22].

Con la salida de los soviéticos, sin embargo, no llegó la paz. Los muyahidines siguieron combatiendo hasta lograr en abril de 1992 la caída del último Gobierno comunista dirigido por Mohamed Najibulá. Poco tiempo después, en diciembre, la *Loya Jirga* o Gran Asamblea proclamaba a Burhanudin Rabani presidente de la república aun sin haber logrado el apoyo de todos los grupos guerrilleros. Después de catorce años de conflicto Afganistán era un Estado absolutamente destruido y con más de un millón de muertos en combate; un país que seguía en guerra, convertida ahora en una lucha fratricida de carácter étnico, tribal y religioso entre las diferentes facciones, cada cual más radical. El nuevo dirigente no consiguió granjearse ni el respeto ni el apoyo de las distintas tribus y, dentro del descontrol generalizado, el movimiento talibán[23], el grupo muyahidín más integrista, se hizo paulatinamente con la situación y produjo un éxodo de unos cinco millones de afganos que salieron del territorio en dirección a los países limítrofes, especialmente, hacia Irán y Pakistán. A la altura del otoño de 1994 los talibanes, gracias al apoyo y colaboración de Pakistán –en donde muchos de sus

militantes habían estado refugiados–, se habían hecho con la mitad del territorio afgano. Dos años más tarde, el 27 de septiembre de 1996, tomaron la capital, Kabul.

Rápidamente, mediante la coerción de las costumbres, la represión generalizada y la eliminación física en ejecuciones sumarias (entre otras muchas, la del antiguo presidente Najibulá), los talibanes procedieron a someter a sus rivales étnicos, políticos y religiosos y a imponer a continuación la *Sharía*[24]. De este modo, en 1998, tras más de un lustro de guerra civil abierta, los talibanes (que en mayo de ese mismo año se habían retirado de la Conferencia de Afganistán para la Paz, auspiciada por la ONU en noviembre de 1996) controlaban las dos terceras partes del país. Antes habían tenido que aislar en las montañas del nordeste a la Alianza del Norte, compuesta por muyahidines de etnias diversas –uzbekos, hazaras o tayikos– leales, al menos en teoría, al presidente Rabani, única autoridad de Afganistán reconocida desde junio de 1992 por la ONU.

La guerra de Afganistán sirvió también para demostrar al resto del mundo la peligrosa potencialidad de la llamada de los talibanes a las armas en favor de sus hermanos musulmanes. Esta solidaridad había originado una verdadera internacional islamista, pues debemos considerar que entre 1979 y 1989 los cálculos más fidedignos hablan de cerca de 50.000 combatientes extranjeros, desde egipcios hasta pakistaníes, desde argelinos hasta uigures chinos[25]. Así, pues, los movimientos integristas armados irrumpieron en el escenario internacional con inusitada virulencia, convirtiéndose en uno de los más peligrosos factores de desestabilización en el orden de la Posguerra Fría.

Irán a la muerte del ayatolá Jomeini

A finales de los años setenta la situación de Irán no parecía muy propicia para el triunfo de una revolución como la patrocinada por los ayatolás. El país había estado sometido a un drástico proceso de modernización económica y de occidentalización de las costumbres.

Aunque las diferencias sociales seguían siendo extremas, la sociedad estaba muy urbanizada y ostentaba una *renta per capita* muy elevada para la región (en torno a una media de 2.000 dólares). En general, el programa impulsado por el sah había sido favorablemente acogido por el pueblo y las estructuras político-administrativas parecían sólidas; el régimen de Reza Pahlevi había mantenido una espléndida relación –traducida en un incuestionable apoyo– con Estados Unidos y Europa occidental. Sin embargo, una parte importante de la población rural había quedado inmune a los ensayos modernizadores; de hecho, cuando a finales de los años setenta bajó el precio del petróleo y las diferencias entre los grupos privilegiados por el desarrollo económico y el resto de los iraníes se hizo más tajante, aumentó la conflictividad. La respuesta de las autoridades consistió en endurecer el sistema represivo contra quienes desde distintos puntos de vista alzaban su protesta contra Pahlevi[26].

La relativa tranquilidad que respiraba el sah tras recibir el apoyo del presidente Carter al inicio, si bien tibio, de algunas medidas democratizadoras se tornó en grave preocupación cuando en abril de 1978 los comunistas asumieron el poder en Afganistán, su permanentemente convulso vecino. En aquel momento las autoridades norteamericanas ya conocían la dolencia que iba a terminar con la vida de Mohamed Reza Pahlevi. El sah tenía cáncer, y su prematura desaparición podía dejar a Irán a la deriva hasta caer en manos de los movimientos izquierdistas crecidos al calor de la mayor tolerancia fomentada a instancias de Washington. En esta tesitura, la Casa Blanca comenzó a barajar el apoyo a dirigentes religiosos pensando en un Irán sin los Pahlevi. Como cabía esperar, se impuso la lógica de la Guerra Fría y ante la perspectiva de un Irán comunista fácilmente manejado por Moscú, la opción más viable para los intereses norteamericanos en la zona consistió en neutralizar en la medida de lo posible a los grupos izquierdistas en favor de los líderes islámicos.

Todo sucedió mucho más rápidamente de lo imaginado, hasta el punto de que incluso los informadores de los servicios secretos occidentales, sobre todo norteamericanos, quedaron fuera de juego.

En el verano de 1978 la conflictividad social aumentó exponencialmente y el sah reaccionó a finales de agosto nombrando primer ministro a Yafar Sharif Emamí con un objetivo meridiano: proceder a la democratización de las instituciones de poder (legalización de partidos, convocatoria de elecciones, compromiso con la defensa de los derechos humanos) para incorporar a la oposición dentro del sistema.

Los intentos resultaron tardíos y poco convincentes para unas masas que, dejando a un lado el temor a la represión, se lanzaban a la calle pidiendo sin ambages el final del régimen[27]. Los mulás, capaces de hacerse oír en todo el país, mostraban abiertamente sus críticas furibundas al sistema mientras desde París el ayatolá Jomeini apelaba a los chiitas a desobedecer a las autoridades. En estas circunstancias tuvo lugar el «viernes negro», el 8 de noviembre de 1978, cuando el gobernador militar de Teherán ordenó disolver una manifestación de opositores conducidos por líderes religiosos que acabó en una matanza. Los intentos de formar gobiernos de coalición nacional para evitar la catástrofe no fructificaron y, a pesar de lo delicado de la situación, el sah se mostró en desacuerdo con la petición que desde distintos sectores se le hacía de nombrar un Consejo de Regencia y perder prerrogativas –entre otras, el mando de las fuerzas armadas– en favor del Gobierno. Ante la gravedad de los acontecimientos, la Casa Blanca le insistió en que abandonase el país y, finalmente, el 16 de enero de 1979 el sah viajó a Estados Unidos después de pasar por Egipto. Menos de un mes después, el 1 de febrero, Jomeini, cuyas alocuciones desde Francia habían resultado determinantes para la marcha del proceso revolucionario, aterrizaba en Teherán. Nadie podía imaginar la trascendencia histórica de su llegada, que iba a desbaratar el ya de por sí precario equilibrio de Oriente Medio[28].

Durante aquel primer mes surtieron efecto las llamadas del ayatolá a los soldados y a la policía para que sumaran sus fuerzas a la revuelta popular y acabaran con los residuos del poder militar del sah. La Revolución Islámica comenzaba a dar sus primeros pasos: cualquier atisbo «occidentalizador» se convirtió en objeto de persecución; los velos fueron paulatinamente reintegrados a la vida

cotidiana[29]. El descontrol sobre el arsenal de armas facilitó su reparto indiscriminado entre la población mientras grupos radicales arrasaban bancos y otros locales que simbolizaban el poder occidental y procedían a ejecuciones sumarias.

Al acabar el año era evidente que la estrategia norteamericana en Irán había fracasado con estrépito. La fuerza islámica emergente había roto el *statu quo* de la Guerra Fría y mostraba su implacable rostro tanto con los grupos de izquierda como con los baluartes de la modernización occidentalizadora. Una dictadura teocrática se cernía sobre la antigua Persia. Las masivas manifestaciones contra el poder «demoníaco» de Estados Unidos culminaron el 4 de noviembre de aquel mismo año de 1979 con la toma de la embajada norteamericana por cientos de personas, en su mayoría estudiantes: cincuenta y dos rehenes permanecerían en cautiverio durante 444 días. Ante las exigencias de Teherán, centradas en la extradición del sah, y la negativa norteamericana a satifacerlas, el Gobierno de Washington puso en marcha varios planes para liberar a sus compatriotas, pero ninguno prosperó. Irán se había convertido en una auténtica pesadilla para Jimmy Carter; de hecho, esta ineptitud para reconducir la situación en Oriente Medio le pasó factura en su propio país, donde el deterioro de su imagen pública fue incesante.

Finalmente, fueron acontecimientos sobrevenidos los que ayudaron a resolver la crisis de los rehenes después de casi quince meses: el 22 de septiembre de 1980 Irak atacó a su vecino iraní, dando comienzo a un largo conflicto armado de ocho años de duración. Dos meses después, en noviembre, el republicano Ronald Reagan, gobernador de California, derrotaba a Carter en las elecciones presidenciales. En enero el veterano exactor de Hollywood llegó a la Casa Blanca decidido a recuperar los valores de vida norteamericanos y el prestigio internacional de Estados Unidos como gran potencia. Su impulso a las negociaciones para liberar lo antes posible a los ciudadanos norteamericanos fructificó pronto. El régimen de Jomeini había dado ya muestras suficientes de su firme resolución de desafiar a la potencia estadounidense, pero en aquel momento otras preocupaciones más urgentes, como la de detener la ofensiva iraquí, le llevaron a aceptar la salida de los rehenes a

cambio de que Washington permitiese la liberación de los cuantiosos activos iraníes (cifrados en miles de millones de dólares) hasta entonces custodiados en territorio federal[30]. De esta manera, el 20 de enero de 1981, momentos después de que Reagan tomara posesión de su cargo, terminó el cautiverio de los rehenes.

La encarnizada guerra iranoiraquí sirvió para apuntalar el régimen de Jomeini, que apelaba constantemente al sacrificio y a la muerte en combate como medio para alcanzar el Paraíso: el espíritu era mucho más importante que la cotidianeidad de la vida y la lucha por aquel ideal caló en una generación de iraníes. Por su parte, Sadam Husein había calculado mal sus posibilidades al estar convencido de que un ataque sorpresa en la región sudoeste, una zona muy rica en petróleo, obligaría a Jomeini a aceptar la soberanía iraquí sobre algunos territorios disputados históricamente entre ambos países. La inestabilidad interna de Irán, donde todavía existían movimientos activos de oposición y alzamientos independentistas en zonas del Kurdistán y Baluchistán, le hizo albergar esperanzas. El presidente iraquí había infravalorado el furor bélico encarnado en decenas de miles de jóvenes conducidos al sacrificio por las arengas del ayatolá. No es difícil entender el sentimiento que albergarían pocos años después los terroristas islámicos teniendo presentes estos recuerdos del inicio de la guerra entre Irán e Irak:

> Cada noche la televisión [iraní] mostraba jóvenes reclutas con sus pañuelos rojos, y sus llaves para el Cielo alrededor del cuello, subiendo en autobuses que se dirigían a los campos de batalla. Algunos no eran más que unos adolescentes; llevaban consigo pequeños Coranes, junto con retratos del ayatolá Jomeini y el imán Alí, primer imán chiita. Algunos se llevaban sus sudarios. El ejército iraquí había colocado minas en las fronteras y el mando iraní utilizaba esos jóvenes reclutas como detectores humanos de minas, enviándolos a las planicies en sucesivas oleadas a fin de despejar el campo de batalla para los soldados que vendrían luego[31].

Las presiones internacionales –sobre todo después de la Resolución 598 de Naciones Unidas, que el 20 de julio de 1987 instaba a las partes a poner fin a las hostilidades– y el peso creciente de la asistencia norteamericana a Sadam hicieron mella en el régimen iraní. El 18 de julio de 1988, ante un acuerdo inminente,

el ayatolá Jomeini expresó en una alocución radiofónica lo que verdaderamente pensaba sobre el final de la guerra: «Juré luchar hasta la última gota de mi sangre y, aunque tomar esta decisión es como beber un cáliz de veneno, debo someterme a la voluntad de Dios»[32]. Más de un millón de muertos y heridos y dos millones y medio de refugiados, además de unas cifras desorbitadas de pérdidas económicas y en infraestructuras, fueron la consecuencia inmediata de una guerra que, como era de prever, empeoró la situación. El Gobierno islámico extremó la vigilancia sobre todos los aspectos de la vida social para evitar cualquier atisbo de liberalidad en las costumbres y, sobre todo, cualquier conato de protesta como consecuencia del empeoramiento del nivel de vida, según mostraba la brusca caída de los índices económicos durante el transcurso de la contienda. Agotados los combatientes por el esfuerzo, el 22 de septiembre de 1988 acordaron la paz. Los ocho años de guerra habían resultado completamente inútiles, ya que las fronteras no se modificaron; incluso, Sadam devolvió los 1.500 km^2 de territorio iraní que había ocupado.

En este contexto, el 3 de junio de 1989 murió Jomeini. A pesar de la opacidad interna, el mundo asistió a sus funerales con la esperanza, adelantada por algunos analistas, de que la desaparición del líder de la Revolución trajera cambios importantes en la estructura del poder. La Asamblea de Expertos nombró sucesor a Alí Jameneí mientras Hashemí Rafsanyaní asumía la jefatura del Gobierno[33]. Las esperanzas de paz y estabilidad se confirmaron cuando en agosto de 1990 Sadam Husein aceptó los Acuerdos de Argel de 1975 respecto a los límites fronterizos entre ambos países.

Una vez terminada la guerra, hasta las autoridades religiosas fueron conscientes de la necesidad de recapitalizar la industria y romper el aislamiento internacional para mejorar la deteriorada economía del país. Rafsanyaní se lanzó a la puesta en marcha de un ambicioso plan de privatizaciones que, sin embargo, generó un alto grado de corrupción. La deuda externa continuó multiplicándose y las expectativas puestas en el petróleo no se cumplieron. La inflación perjudicó al rial, moneda, por otra parte, carente de entidad y reconocimiento.

La incapacidad de remontar la crisis no impidió que Rafsanyaní resultara reelegido en 1993. En definitiva, la desaparición de Jomeini no supuso alteración alguna en el sistema de dominación. El éxito del ayatolá había venido acompañado del acceso al poder de clérigos chiitas de su confianza, cuya visión del nuevo régimen estaba fundamentada exclusivamente en la Ley Islámica revelada en el Libro Sagrado, en el Corán, como canon ético y legislativo ordenador de la sociedad. Por tanto, la legitimidad del nuevo Estado no dependía de la voluntad popular, de la soberanía del pueblo, sino directamente de Alá. La Constitución iraní expresaba con meridiana claridad estos principios teocráticos, por lo cual todo atisbo de democratización quedaba reducido a espejismo. Como decía su artículo cuarto, «todas las leyes y decretos civiles, penales, fiscales, económicos, administrativos, culturales, militares, políticos y otros cualesquiera deberán ser promulgados basándose en los preceptos islámicos»[34].

Bajo estos presupuestos, es evidente que las máximas instancias decisorias del país no eran electas. El líder supremo, guía de la sociedad iraní que tenía en sus manos la jefatura de las fuerzas armadas, designaba a los doce expertos en la Ley Islámica que integraban el Consejo de Guardianes de la Revolución. Juntos constituían el Consejo de Vigilancia, encargado de decidir si las leyes de la Asamblea y las interpretaciones de la Constitución se ajustaban a la Ley Islámica así como de dar el visto bueno a los aspirantes a candidatos a la presidencia de la república[35]. Sin embargo, frente a lo que pudiera esperarse en un sistema aparentemente controlado por la férrea alianza entre el poder religioso y el militar, desde 1990 aparecerían manifestaciones de descontento en distintos sectores sociales –jóvenes universitarios, mujeres[36], trabajadores golpeados por la crisis económica–, síntomas que revelaban la existencia de fisuras en el régimen teocrático[37].

La toma del poder por los chiitas en Irán también preocupó seriamente a los regímenes musulmanes del golfo Pérsico. A quienes habían sufragado movimientos islamistas les surgía ahora un competidor incómodo. A partir de este momento Irán y Arabia Saudita, convertidos en referencia del mundo islámico, rivalizaron

por el predominio en la región. La guerra de Afganistán, desarrollada entre 1979 y 1989, el conflicto iranoiraquí, entre 1980 y 1988, y la guerra de Kuwait, entre 1990 y 1991, pospusieron las posibilidades de expansión de estas revoluciones, pero no las eliminaron. La región iniciaba la Posguerra Fría sin que remitieran los síntomas del enfrentamiento que la había asolado durante toda la década de los ochenta.

Guerra en el golfo Pérsico

El 2 de agosto de 1990 unidades de vanguardia del ejército iraquí invadieron Kuwait, llevando de nuevo la inestabilidad al corazón de Oriente Medio. Sadam Husein había dado la orden por considerar que el emirato era una provincia de Irak. La ocupación del territorio se hizo efectiva en veinticuatro horas. La mayoría de los miembros de la familia del soberano kuwaití, Jabir al-Sabah, logró refugiarse en Arabia Saudita mientras unos trescientos mil ciudadanos huían de su país. Pocos días después Sadam anunció la incorporación de Kuwait como decimonovena provincia de Irak.

Aquel mismo día 2 de agosto, los ministros de Asuntos Exteriores de la Organización de la Conferencia Islámica, que celebraban una cumbre en El Cairo, recibieron con estupor una noticia que desbarataba por completo la supuesta unidad del mundo árabe. Los más preocupados fueron los saudíes, los cuales, temerosos ante el posible avance de las tropas de Sadam hacia su territorio, solicitaron el día 7 ayuda al Gobierno norteamericano.

Por la primera vez después de la Segunda Guerra Mundial un país miembro de la ONU (como era Kuwait desde 1963, dos años después de la independencia) era invadido y anexionado por otro país. Esta violación del derecho internacional pareció a los ojos de los países occidentales –incluso en el mundo árabe moderado– especialmente grave, teniendo en cuenta no sólo la importancia geoestratégica de la zona en conflicto sino también la ruptura en ella del *statu quo* con el ascenso político de una potencia hostil a sus intereses; una potencia que, además, pasaba a controlar de forma

automática las mayores reservas de petróleo y a convertirse en el segundo productor mundial, con las consecuencias económicas que ello podía suponer.

El 29 de noviembre de 1990, a instancias de Estados Unidos y sus aliados, la Resolución 678 del Consejo de Seguridad de la ONU exigió a Sadam que antes del 15 de enero de 1991 retirase todas sus tropas del territorio invadido y asimismo autorizó el uso de la fuerza en el caso de que no lo hiciera[38]. La jugada le había salido mal al dictador iraquí; a la respuesta de las Naciones Unidas se unió la de la Liga Árabe, que condenaba con vehemencia el ataque y declaraba un embargo económico completo sobre Irak[39].

El 17 de enero de 1991, visto que durante cinco meses las recomendaciones y resoluciones de Naciones Unidas –doce, comenzando con la n.º 660– no habían amedrentado a Sadam Husein, el Consejo de Seguridad permitió a la coalición internacional formada contra Irak por Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Arabia Saudita y los restantes países del Golfo, Egipto, Siria y Marruecos, que iniciase la guerra para terminar con la invasión[40]. Indudablemente, para el orden mundial posterior a 1989, la primera Guerra del Golfo mostró el poder hegemónico de Estados Unidos, cuyas tropas constituyeron el grueso de los 600.000 efectivos de la coalición internacional desplegada con motivo del conflicto. La Guardia Republicana, fuerza de elite del ejército iraquí, mostró su debilidad ante el bombardeo aéreo de los aliados que se prolongó durante varias semanas con el fin de despejar el terreno a las fuerzas de infantería. Las infraestructuras militares y civiles del país fueron en gran parte destruidas.

De este modo, la operación militar por tierra y aire conocida como «Tormenta del Desierto» cumplió en poco tiempo todos sus objetivos, y en la madrugada del 28 de febrero de 1991 se suspendieron las hostilidades al liberarse Kuwait tras la retirada iraquí. El día 3 de marzo se decretaba oficialmente el alto el fuego al aceptar Irak el cumplimiento íntegro de la Resolución 686 de la ONU –la llamada «Resolución de Rendición», que incluía las doce anteriores–, así como todas las condiciones de la coalición para poner fin a la acción armada. Completando la anterior, la Resolución

687 de 3 de abril atribuyó la total responsabilidad del conflicto al régimen Baaz iraquí[41], el cual, no obstante, logró sobreponerse a las revueltas internas. En efecto, sin apoyo militar, las sublevaciones surgidas al calor de la intervención internacional en el sur de Irak y en el Kurdistán fracasaron. Los levantamientos en las ciudades de mayoría chiita como Karbala, Basora y Amara resultaron fallidos ante el despliegue de la Guardia Republicana: los cálculos aproximados hablan de cincuenta mil chiitas iraquíes que se refugiaron en Arabia Saudita y de varios miles que huyeron a Irán. Por su parte, a comienzos de abril, y después de obtener algunas victorias de cierta importancia que habían dado alas al movimiento, la resistencia kurda cedió finalmente y la represión resultante hizo reaccionar a las Naciones Unidas.

Para terminar con esta brutal reacción de Sadam Husein, y una vez expulsados sus ejércitos de Kuwait, la ONU impuso al régimen iraquí un embargo comercial y la obligación de destruir, bajo su supervisión, el armamento químico, biológico y nuclear que tuviese. Al mismo tiempo, para impedir que fueran reprimidos los opositores al dictador iraquí en el interior del país, Estados Unidos y el Reino Unido –respaldados por la Resolución 688 de la ONU de 5 de abril de 1991– establecieron dos zonas de exclusión aérea: una en el norte, por encima del paralelo 36, como protección de la población kurda; y otra en el sur, por debajo del paralelo 32, como protección de la población chiita.

El temor del presidente Bush a que la fragmentación de Irak hiciera aún más complicada la vuelta a una cierta estabilidad en Oriente Medio permitió que Sadam se mantuviese al frente del Estado. Indudablemente, la capacidad del dictador para preservar la estructura de poder después de la derrota de 1991 testimoniaba la solidez del sistema que había edificado durante décadas. Su desafiante actitud ante la ONU, Estados Unidos y sus aliados, tratando de impedir la inspección de sus arsenales militares y negándose en 1992 a la oferta de Naciones Unidas de autorizarle a vender petróleo para pagar la compra de medicinas y productos de primera necesidad, constituía una prueba más de que sus intenciones expansionistas y militaristas no habían variado un ápice.

Las duras sanciones de la ONU y las deudas de guerra impedían al régimen iraquí exportar petróleo para obtener divisas; además, quedaban muy restringidas las importaciones que se le permitía hacer, y con todo ello las consecuencias derivadas de la escasez recayeron en una población fustigada por toda clase de penurias[42]. Sólo gracias al sistema de clanes y al nepotismo imperante pudo Sadam conservar el timón del Estado sin que su forma de ejercer el poder absoluto se viera apenas afectada. Partiendo de esta situación, era de esperar que a lo largo de la Posguerra Fría Irak se convirtiera en un problema de creciente gravedad.

Finalmente, el 4 de abril de 1995, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, mediante la Resolución 986, autorizó en Irak la Operación Petróleo por Alimentos y Medicinas. Como pudo comprobarse después, la medida no favoreció a la población y multiplicó la corrupción del régimen hasta tal punto que Sadam Husein, después de un referéndum celebrado sin garantías democráticas el 15 de octubre de 1995, se arrogó un nuevo mandato presidencial hasta el año 2002. Pese a las advertencias militares de Estados Unidos y el Reino Unido y las sanciones impuestas por la ONU, el líder iraquí siguió plantando cara a la comunidad internacional. La situación no dejó de degradarse y aumentó la tensión entre el dictador y la ONU: en diciembre de 1998, ante la falta de colaboración de las autoridades iraquíes, la Comisión Especial de Naciones Unidas para el Control del Desarme de Irak (UNSCOM) abandonaba el país.

El líder iraquí había pensado que el fin del viejo orden mundial podía constituir una coyuntura favorable para satisfacer sus ambiciones territoriales y en su afán creía, incluso, haber logrado una cierta aquiescencia de otros países árabes. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario: el nuevo contexto internacional hizo posible que se formara una amplísima coalición en contra de la invasión de Kuwait. La confusión del momento no había beneficiado a Sadam, sino que la reacción a su política agresiva había puesto de acuerdo a los más dispares Gobiernos. Esta respuesta era, precisamente, la demostración palmaria del fin del enfrentamiento entre bloques que

había caracterizado los años de la Guerra Fría[43]. En palabras de Gema Martín Muñoz, «la Guerra del Golfo de 1991 fue el escenario a partir del cual la superpotencia victoriosa comenzaba a establecer las nuevas reglas del orden monopolar y que, en el caso de Oriente Medio, se iba a traducir en la voluntad firme de refundar esta región tratando de convertirla en un protectorado político-militar estadounidense al servicio de los intereses estratégicos de Israel»[44]. Ciertamente, la guerra del Golfo puso punto y final a un mito político establecido durante el proceso de descolonización: el panarabismo. El «desorden árabe» al que alude la profesora Martín Muñoz se manifestó con claridad ante el masivo apoyo de países árabes a la intervención capitaneada por Estados Unidos. La propia invasión del territorio kuwaití por Sadam Husein evidenció el irredentismo –y no la solidaridad– de algunos líderes árabes.

Sin embargo, aunque la intervención militar había contado con el apoyo explícito de la mayor parte de los Gobiernos de todo el planeta, incluidos los de la mayoría de los países árabes, la opinión pública no se mostró homogéneamente favorable. Muchos musulmanes consideraron la invasión de Irak por los aliados como una injerencia; de hecho, hay constancia de que el sentimiento antioccidental creció ostensiblemente entre amplias capas de la población. Muchos saudíes wahabistas, incluso, interpretaron la intervención norteamericana como un subterfugio para reforzar su presencia en la península Arábiga y, por tanto, inmiscuirse en la tierra santa del islam. Esta consideración, unida a que el partido Baaz iraquí era uno de los pocos movimientos que todavía reclamaban la unidad del mundo árabe para contrarrestar la influencia de Occidente, tendría repercusiones de enorme trascendencia a medio plazo para el orden de la Posguerra Fría al reforzar la identificación del mal con el infiel occidental en general y con el estadounidense en particular[45].

Tampoco Arabia Saudita, el más fiel de los aliados norteamericanos en el golfo Pérsico, se vio libre de las protestas. Ante los problemas sociales derivados de la bajada del precio del crudo en una economía tan absolutamente dependiente de este recurso, y ante el creciente malestar por la ostentosa forma de vida

del rey y su corte, la guerra de Irak actuó de catalizador en el fortalecimiento de los grupos islamistas. Ni siquiera la Casa Real, aureolada por su función de protectora de La Meca, se salvó de los ataques de los yihadistas, para quienes la presencia, durante la guerra, de tropas extranjeras en territorio saudita violentó los santos lugares del mundo islámico: el atentado de Riad en 1995 demostraría la fuerza de estos movimientos y su preparación para las acciones terroristas[46].

La convulsa situación de Oriente Medio durante los años ochenta había afectado a la posición de Arabia Saudita en el juego de fuerzas de la región. Sus efectivos militares eran considerablemente menores que los de los iraquíes o iraníes, los cuales no abandonaban sus recelos ante la deriva de la política de su vecino común al entenderla como subsidiaria de los intereses de Estados Unidos. Es más, el Irán de los ayatolás había pasado del discurso crítico en la teoría a alentar movimientos prochiitas en la zona oriental de Arabia. Los factores de inestabilidad inducidos por estas circunstancias convencieron a Riad de la amenaza que se cernía sobre su régimen, al tiempo que no olvidaba las apetencias territoriales tanto de iraníes como de iraquíes. En definitiva, la tensión y las políticas agresivas de Teherán y Bagdad se habían convertido en un peligro real no sólo para la voluntad de la monarquía saudí de desempeñar un papel influyente en la región, sino también para su propia seguridad. Aun cuando no participó directamente en la guerra entre Irán e Irak, la teoría del mal menor condujo a Riad a apoyar económicamente al régimen de Sadam Husein, máxime después de que en 1984 las fuerzas iraníes atacaran buques petrolíferos sauditas que se encontraban fuera de la zona de guerra.

Por todo ello, a lo largo de la década de los ochenta el rey Fahd había fomentado las relaciones económicas y militares con la superpotencia en previsión de que la situación empeorase. Al fin y al cabo, las autoridades sauditas percibían las amenazas soviética e islámica proveniente de Irán como uno de los problemas más graves para su estabilidad desde hacía mucho tiempo. Ello no obstante, su decisión era también arriesgada, ya que importantes sectores de la sociedad toleraban con disgusto el excesivo protagonismo de

Washington en los asuntos del país, corriente de opinión que el islamismo podía encargarse de alimentar. En todo caso, el apoyo de la Administración Reagan fue innegable y difícilmente pudo ocultarse bajo la propaganda oficial saudí, que persistía en jugar la carta de su islamidad.

La invasión de Kuwait aumentó exponencialmente el riesgo de un conflicto regional y el rey Fahd hubo de optar por la ayuda occidental, fundamentalmente norteamericana, para preservar su independencia. El Gobierno permitió que el territorio sirviese de base para las acciones bélicas de la coalición. El sentimiento de humillación y dependencia respecto de Estados Unidos prendió con rapidez entre la población, que culpaba a las autoridades de su pésima gestión en los asuntos públicos: su incapacidad había conducido a necesitar de una potencia extranjera para salvaguardar con garantías la soberanía nacional. Un argumento como este fue fácilmente explotado por los grupos más radicales: el enemigo no era, en realidad, Irak o Sadam Husein, sino Estados Unidos, y las conciencias no se aquietaron ni siquiera cuando en enero de 1991 una de las personalidades más relevantes del mundo religioso saudita, Shaij Abd al-Aziz ibn Baz, lanzó una fetua contra Sadam, abriendo así las puertas al ataque contra el Estado iraquí[47].

En definitiva, el régimen saudí había tratado de conjugar su celo por preservar incólumes los fundamentos religiosos, culturales y políticos de su peculiar sistema de organización y una tendencia claramente aislacionista respecto al mundo occidental con unos vínculos económicos y comerciales muy estrechos con Estados Unidos[48]. La Guerra Fría fue el marco perfecto para este modelo de relación prolongado con la caída del régimen soviético y el final de la presión de los regímenes árabes de carácter socialista. Sin embargo, según acabamos de ver, la primera Guerra del Golfo había introducido un elemento de inestabilidad al exacerbar las tensiones sociales[49].

En resumen, entre el verano de 1990 y la primavera de 1991 la toma de posición ante el conflicto desbarató el sistema de alianzas tejido entre los países árabes, provocando situaciones impensables poco tiempo antes tales como el hecho de que Egipto, Arabia

Saudita e Israel aparecieran, bajo el auspicio norteamericano, unidos en contra de Irak, prueba de la capacidad de penetración de los norteamericanos en Oriente Próximo y Medio.

El difícil sendero de la paz en India y Pakistán

Los años centrales de la década fueron trágicos para la India. Los violentos enfrentamientos entre comunidades religiosas hinduistas y sijs, desencadenadas a partir del asalto del ejército al Templo Dorado de Amritsar entre el 3 y el 6 de julio de 1984, desestabilizaron el país hasta el punto de que la primera ministra Indira Gandhi fue asesinada por miembros sijs de su escolta. Le sucedió en el poder su hijo Rajiv, que al frente del Partido del Congreso obtuvo aquel mismo año una gran victoria electoral y centró su programa de actuación en la economía, promoviendo la liberalización del sistema y aumentando las inversiones en infraestructuras de transporte para ir acercando al país a las exigencias del mercado internacional. Sin embargo, la política inversora influyó en el aumento de la deuda exterior en un ambiente de creciente malestar social. Las consecuencias pudieron apreciarse en las elecciones de 1989, cuando una variopinta gama de partidos agrupados en el Frente Nacional logró apartar del poder a la saga Gandhi.

Ni la vida política ni la económica encontraron respiro en los albores de los noventa: a la crisis de la economía, las tensiones sociorreligiosas y la apremiante necesidad de cubrir las expectativas de una población que superaba los novecientos millones de almas se unieron la Guerra del Golfo y el conflicto latente de Pakistán por la herida abierta de Cachemira, agravada en los primeros meses de 1990. En efecto, el 19 de enero de aquel año el Gobierno indio tomó Cachemira bajo su control directo y meses después, en julio, dio poderes extraordinarios a las fuerzas armadas para que intervinieran en la región. El motivo era una continua y creciente oleada de violencia, atizada por declaraciones de mandatarios pakistaníes para quienes el alzamiento se trataba de una «campaña de

resistencia»[50]: no debemos olvidar que al acabar la Guerra de Afganistán los combatientes yihadistas habían trasladado sus fuerzas operativas a Cachemira para animar a sus hermanos musulmanes contra el vecino indio[51].

En este ambiente enrarecido, a finales de mayo de 1991 Rajiv Gandhi moría en un atentado. La conmoción ante su asesinato granjeó al Partido del Congreso un importante éxito en las elecciones de aquel año, lo que permitió a P. V. Narasimha Rao ejercer el poder durante el siguiente quinquenio. Generar confianza en los inversores, sanear la hipotecada hacienda y privatizar parte del entramado económico público para incrementar la productividad de la industria forjaron su programa de gobierno; de igual forma, resultó muy provechosa su acción exterior, consistente en potenciar las relaciones tanto con Estados Unidos y la Unión Europea como con China para incorporar al país al elenco de las potencias emergentes en el nuevo tablero internacional.

Como para su eterno contendiente, la vida política y económica de Pakistán tampoco transcurrió con tranquilidad en aquella época. En circunstancias todavía por aclarar, el 17 de agosto de 1988 fallecía en accidente aéreo el general Zia-ul Haq, que durante una década había logrado mantenerse al frente del Estado después de que en julio de 1977 suspendiera la Constitución e implantara la ley marcial. Su desaparición llevó a la primera línea del escenario político a las dos fuerzas más representativas, el Partido del Pueblo, de Benazir Bhutto, y la Liga Musulmana, de Nawaz Sharif: en las elecciones de noviembre de aquel mismo año de 1988 venció aquella y dos años después la relevó este para, en octubre de 1993, retornar Bhutto victoriosa como primera ministra. Las constantes denuncias de corrupción en unos y otros Gobiernos lastraron la necesaria institucionalización de la democracia, tesitura agravada por los continuos desencuentros entre la presidencia del Estado y la del Gobierno.

En el terreno económico, las acciones reformistas para atraer capital extranjero y potenciar la industria nacional y el sector servicios fueron valoradas internacionalmente, pero los presupuestos del país siguieron asfixiados por el peso del gasto militar. Ello impidió

desarrollar con eficacia políticas sociales, sobre todo las encaminadas a acabar con la pobreza y erradicar el analfabetismo, una lacra que en el año 1995 todavía afectaba a la mitad de la población adulta.

El sudeste asiático, entre la opulencia y la miseria

Los «cuatro dragones»

La década que concluiría con «el Gran Cambio» registró un crecimiento económico espectacular en la zona asiática del Pacífico, donde, en casos concretos, las transacciones comerciales entre algunos de los países del área desplazaron en intensidad a las realizadas con Estados Unidos y Europa occidental, mercados de los que dependían tradicionalmente. En los medios de comunicación en general y en las publicaciones especializadas en particular comenzaron a aparecer alusiones a los «cuatro dragones» (Taiwán, Corea del Sur, Singapur y Hong Kong) por su enorme capacidad de desarrollo en aquel contexto[52]. El lugar que habían logrado alcanzar estos cuatro territorios en el reparto de exportaciones mundiales era sobresaliente: del 2 por 100 en 1970 habían llegado al 9,2 por 100 en 1992[53]. La relevancia de este ascenso era todavía mayor si consideramos que los productos vendidos fuera de sus fronteras eran manufacturas con Estados Unidos como principal destino (salvo, lógicamente, el caso de Hong Kong, donde China superaba a los norteamericanos).

Así, con el final de la Guerra Fría los analistas económicos internacionales certificaron la existencia en el sudeste asiático de un área extraordinariamente dinámica, ajena –como había estado– a los exagerados gastos militares de algunos de sus países vecinos o de las grandes potencias y atenta, en cambio, a invertir en educación e investigación. En el éxito del crecimiento económico radicó, en buena medida, la consolidación de sus procesos democratizadores, coincidentes en el tiempo: en Taiwán y Corea del Sur, desde finales

de los ochenta y en Hong Kong y Singapur, a comienzos del decenio siguiente[54].

Inevitablemente, a finales de los años ochenta la evolución de los «dragones asiáticos» obligó a reformular algunas viejas concepciones respecto al Tercer Mundo. Su indudable éxito económico, acompañado de un proceso de reformas políticas democratizadoras, los convirtió en un ejemplo concreto y contrastado de cómo Estados insertos en una área pobre podían alcanzar un desarrollo socioeconómico equiparable con el de los países más avanzados. Ciertamente, sus circunstancias particulares no podían trasladarse a otros ámbitos, pero servían de reflexión. Las hábiles reformas agrarias puestas en marcha desde principios de la década propiciaron el paso de mano de obra y capitales al secundario, sector que acaparó buena parte de las ayudas económicas foráneas resultantes del interés geoestratégico de la región durante la Guerra Fría. Además, el Estado intervino en la economía para proteger las industrias nacionales, mientras el alto valor de las exportaciones capacitó a la industria para diversificarse y competir internacionalmente en tecnología y manufacturas punta tales como ordenadores y otros componentes electrónicos[55]. En definitiva, el crecimiento económico del sudeste asiático se convirtió en un modelo, si no de imitación, sí al menos digno de tenerse en cuenta en otras áreas del planeta poco desarrolladas por aquel entonces[56].

En cambio, el proceso de integración regional política y económica de la zona no estuvo exento de claroscuros. La Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), fundada en 1967 –en plena Guerra Fría– bajo el auspicio de Estados Unidos y dentro de la doctrina general de aislar al enemigo comunista en aquel continente, perdía entidad después de veinte años. En 1989 sus países integrantes –Malasia, Tailandia, Indonesia, Brunei, Filipinas y Singapur– presentaban una base productiva similar (excepto la de Singapur, más desarrollada), por lo que el flujo de exportaciones e importaciones dentro de la asociación no era muy relevante. Con todo, el cambio del contexto internacional, el ejemplo de los «dragones» y el proceso de globalización de la economía los impulsó

en los últimos meses de 1991 a dar el salto hacia la formación de una zona de libre comercio con el fin de fortalecer los intercambios y estimular el crecimiento económico de sus participantes. Con el mismo objetivo de potenciar aquella región económica había quedado constituido en 1989 el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en el cual, además de los países del ASEAN a finales de 1991 figuraban otros como Australia –a quien se debió la iniciativa–, Japón, Estados Unidos, Canadá, la República Popular China, Hong Kong y Taiwán. En este caso, pues, los lazos económicos servían para conciliar intereses de países antes enfrentados en una de las zonas más conflictivas de la Guerra Fría.

Frente a los «dragones», inestabilidad permanente

Después de 1991, aunque retiraron efectivos y desmantelaron bases, la presencia de Estados Unidos en el sudeste asiático siguió siendo determinante para el futuro de la región. El poderío económico de la superpotencia se dejó sentir con más fuerza si cabe tanto en los aliados tradicionales –que continuaron unidos por vínculos militares– como en el resto. En Camboya, la invasión de los vietnamitas en diciembre de 1978 había puesto fin al sanguinario régimen del Jemer Rojo y había enconado las ya de por sí tensas relaciones entre los bloques. A través de la frontera con Tailandia los norteamericanos apoyaron distintos movimientos disidentes, desde los partidarios de la monarquía hasta efectivos republicanos dispersos e, incluso, excombatientes del Jemer: es más, en junio de 1982 nació una suerte de «gobierno de coalición de la Camboya democrática» que operaba en el norte del territorio. Mientras tanto, los jemeres mantenían posiciones en el noroeste del país, lo que obligaba a Vietnam a lanzar ataques armados cada cierto tiempo, con el consiguiente desgaste de recursos humanos y materiales. De hecho, en agosto de 1985 el Gobierno vietnamita se comprometió a abandonar Camboya en 1990. Un viraje de esta naturaleza estaba en consonancia con lo que iba a ocurrir pocos meses después, ya en 1986, durante la celebración del VI Congreso del Partido Comunista,

cuando se acordó un cambio de estrategia política y económica de amplio alcance.

Mientras tanto, las conversaciones entre las distintas fuerzas opuestas a la ocupación de Camboya parecían fructificar. En diciembre de 1987, en un acto inusitado de gran repercusión mediática internacional, el príncipe Sihanouk mantuvo una reunión con Hun Sen, antiguo ministro de la República Popular de Camboya, para hablar sobre el futuro del país tras la previsible salida del ejército vietnamita. La Unión Soviética, principal aliado de Vietnam, estaba de acuerdo con la retirada y presionaba para que las conversaciones de paz incluyeran al Jemer Rojo, sin el cual era obvio que se perpetuaría la inestabilidad en el área. La ostensible mejora de las relaciones entre Pekín y Moscú facilitó a su vez el reencuentro entre dirigentes chinos y vietnamitas. Así, en enero de 1989 se produjo un acercamiento en el marco de una reunión más amplia de responsables de Asuntos Exteriores de varios países comunistas. No era un encuentro al más alto nivel, pero el cambio de actitud era, de por sí, un hecho cuyas consecuencias se dejaban entrever.

En este contexto de profundos cambios en las relaciones sinosoviéticas y con la voluntad expresada en las resoluciones del último congreso del Partido Comunista de Vietnam respecto a la ampliación y fortalecimiento de relaciones con todo el mundo, en abril de 1989 el Gobierno de Hanoi anunció formalmente la evacuación definitiva, a lo largo del mes de septiembre, de las últimas tropas desplegadas en territorio camboyano. Tal como habían diseñado para encauzar la nueva vida política de Camboya de acuerdo con las transformaciones internas que se operaban dentro de su propio país, los dirigentes vietnamitas apostaron por Hun Sen para que dirigiera la transición. El antiguo jemer enfrentado a Pol Pot legalizó la propiedad privada y abolió la pena de muerte y en aquel septiembre de 1989 la República Popular de Camboya dejó de existir para dar paso al Estado de Camboya.

La normalización de las relaciones entre Pekín y Hanoi facilitó una mínima estabilidad al país, y la labor diplomática de Japón, uno de sus principales donantes, desembocó en octubre de 1991 en la celebración en París de una conferencia internacional donde la ONU

se encargó de asumir la preparación de elecciones libres. Sin embargo, aunque se constituyó un Gobierno de transición donde todas las facciones –incluidos los Jemeres Rojos– estaban representadas, Hun Sen se resistió a ceder el poder incluso cuando las elecciones de 1993 le obligaron a compartirlo con los partidarios de Sihanouk[57]. Cuatro años después, en julio de 1997, el enfrentamiento político desembocaría en un nuevo conflicto armado.

El caso de Birmania fue particular dentro de la ola democratizadora del sudeste asiático en los ochenta. A mediados de la década el general Ne Win, en el poder desde el golpe de Estado por él dirigido en 1962, propuso en un congreso del Partido Comunista abrir una vía hacia la democracia pluripartidista, más acorde con los tiempos que corrían. Sus camaradas no sólo rechazaron cualquier atisbo de cambio, sino que propugnaron seguir avanzando por la senda socialista. El profundo empeoramiento del nivel de vida revitalizó las protestas sociales, sobre todo entre los estudiantes. A pesar de recurrir al ejército, que en numerosas ocasiones infligió una dura represión, ninguno de los sucesores de Win pudo enderezar el curso de los acontecimientos.

En septiembre de 1988, mientras el caos se adueñaba de Birmania, un golpe de Estado a cargo de oficiales de las fuerzas armadas depuso al presidente Maung, estableció la ley marcial y convocó elecciones. Las esperanzas de un futuro democrático estaban depositadas en Aung San Suu Kyi, reconocida internacionalmente por su defensa de los derechos y las libertades –especialmente, de las minorías de Birmania–, así como por sus excelentes relaciones con muchos de los Gobiernos occidentales. Pronto, sin embargo, pudo comprobarse que las intenciones de los militares discurrían por otros derroteros. El inicio de una auténtica transición se posponía ante unos cambios puramente cosméticos: en el verano de 1989, con el objeto de eliminar los últimos vestigios de la colonización británica, el país pasó a denominarse Myanmar.

Las autoridades militares querían presentar al mundo un país seguro y atractivo para la inversión de capitales, pero fue la represión generalizada de la disidencia y la opresión de toda una

sociedad las que se instalaron en el poder y saltaron a la opinión pública mundial, iniciando así una nueva y sangrienta etapa de la ya de por sí prolongada dictadura. Aunque aceptaron celebrar unas elecciones legislativas que en mayo de 1990 darían una victoria aplastante a las fuerzas políticas opositoras dirigidas por Aung San Suu Kyi –en arresto domiciliario desde julio de 1989–, los militares hicieron caso omiso del resultado y respondieron negándose a ceder cualquier cota de poder e impidiendo el diálogo para trazar la senda de la democratización[58]. Tampoco cedieron un ápice cuando en 1991 la sociedad internacional tuvo conocimiento del carácter represivo del régimen al ser concedido el Premio Nobel de la Paz a la disidente birmana, que se había negado a salir del país. Al año siguiente la Junta Militar prohibió en la práctica la actividad de los partidos políticos y endureció las medidas contra cualquier asomo de oposición. Sólo los intereses geoestratégicos de China e India y las boyantes relaciones económicas con la primera de estas repúblicas le permitieron mantenerse en el poder[59].

Los regímenes comunistas no fueron los únicos en tambalearse a mediados de los años ochenta. La ola democratizadora también afectó a las dictaduras proclives a Washington, y en 1986 se vino abajo el sistema de poder que la familia Marcos había urdido en Filipinas durante las décadas anteriores. El control de los recursos, el reparto de los altos puestos de la Administración del Estado y la corrupción general eran hechos tan probados y conocidos por la población del archipiélago como tolerados por la potencia norteamericana con el fin de mantener en pie aquel pilar básico dentro de la estrategia de la Guerra Fría por el dominio del Pacífico.

Al igual que el resto del mundo, el depauperado pueblo filipino comprobó la suntuosidad de las mansiones de los Marcos y los famosos tres mil pares de zapatos de la primera dama, que pronto se convirtió en el epítome del despilfarro y la amoralidad de estos sistemas autoritarios. La rebelión encabezada por el general Fidel Ramos con el apoyo de amplios sectores sociales y de la Iglesia católica –institución muy valorada entre las capas populares–, unida a las manifestaciones pacíficas y masivas que desde 1983 recogían

los medios de comunicación, ofreció al exterior la impresión cierta de una elite gubernamental en descomposición, incapaz en los últimos momentos de sustraerse a la presión internacional. De hecho, las elecciones de 1986 fueron una de las convocatorias más seguidas *in situ* por miles de observadores internacionales para evitar unas prácticas fraudulentas que, a pesar de todo, resultaron eficaces. El escándalo fue de tal envergadura que hasta la Administración norteamericana negó cualquier tipo de apoyo a Ferdinand Marcos, a excepción del helicóptero con el que se trasladaría a Hawai para morir allí unos años después. Corazón Aquino, conocida opositora al régimen junto con su marido antes de que fuera asesinado por orden del dictador, asumió la presidencia de la República a finales de abril. Al año siguiente, pese a los difíciles comienzos de un proceso de democratización jalonado por diversos intentos de golpe de Estado, Aquino, que se mantuvo en el cargo hasta 1992, logró sacar adelante una nueva Constitución, garante de los derechos democráticos[60].

Extremo Oriente en el cambio del sistema internacional

Tiananmen, la negra primavera de Pekín

Cualquier cifra que se dé sobre China resulta difícilmente comprensible para la mentalidad de un occidental. Con 9,6 millones de km^2, el territorio es mucho mayor que la Unión Europea de los Veintisiete y casi tan grande como la Europa que va del Atlántico a los Urales. La diversidad étnica, cultural y religiosa presente en las inmensas regiones de la República Popular demanda una política unitaria que a su vez no renuncie a preservar toda esta riqueza. Por todo ello, los Gobiernos posmaoístas fueron bastante prudentes en el juego de relaciones entre el centro y la periferia con el fin de neutralizar tendencias separatistas cuyo efecto hubiera sido nefasto para el camino de reformas que había emprendido. La dirección del Partido Comunista en los asuntos públicos era la clave de bóveda del

edificio institucional y durante los años ochenta este férreo control no varió en absoluto.

Desde diciembre de 1978, fortalecido en el Comité Central del Partido Comunista, Deng Xiaoping manejaba todos los resortes del poder y desde finales de 1982 ocupaba las presidencias de la Comisión Militar Central del Estado y de la Comisión Central de Asesoramiento. Sus ideas sobre la modernización económica marcaron la senda reformista que supo conjugar con un férreo autoritarismo político. Cualquier indicio de cambio en la dirección política del Estado, y por tanto, del Partido, terminó por desaparecer tras comprobar Deng las caóticas consecuencias de la perestroika[61]: según el líder chino, la política de Gorbachov era la demostración palmaria de lo que China no debía hacer, y ello a pesar de que algunos dirigentes consideraban que el éxito de las transformaciones económicas exigía cierta flexibilización del omnipresente control del Partido[62].

En la Administración estatal y económica Deng propició la especialización de los cuadros medios, mucho mejor dispuestos, como veremos, que la generación anterior para asumir la remodelación interna del gigante asiático. Precisamente, si este plan aportaba un valor añadido para el mantenimiento del sistema, dicho valor radicaba en el trabajo, en aplicar los conocimientos adquiridos a cada sector concreto, cuya eficacia se debía mejorar sin que ello viniese acompañado de pretensión alguna de poder. Deng era consciente de la importancia de preparar al país para el nuevo milenio a la vez que se evitaba cualquier tipo de conflicto dentro de la elite; de ahí la primacía otorgada a esta suerte de tecnocracia gris, satisfecha del puesto que ocupaba en el engranaje de la maquinaria estatal, pero sin aspiraciones a su control ejecutivo.

En 1985 la revista *Time* había nombrado a Deng «Hombre del Año», y precisamente por aquellas fechas otro personaje iba a saltar a las páginas de la actualidad para poner en evidencia alguna de las carencias más flagrantes del régimen chino. El líder religioso tibetano, el Dalái Lama, dio un vuelco a su tradicional aislamiento espiritual para lanzarse a buscar apoyos internacionales a la causa del Tíbet independiente. Dotado de una gran habilidad para jugar

con los medios de comunicación, su imagen fue cobrando una atención creciente en las televisiones del mundo: jefes de Gobierno y de la oposición, representantes de las organizaciones no gubernamentales, actores famosos: todos parecían hacer suya la causa de un Tíbet sometido a los dictados de Pekín. Como en otras ocasiones de la historia, la imagen de un pequeño pueblo hostigado por un gran imperio provocaba sentimientos de solidaridad en la elite biempensante de Occidente[63], y en 1989 el Dalái Lama obtenía el premio Nobel, oscureciendo así la imagen reformista de las autoridades chinas a los ojos del mundo. La actitud de estas ante las posibles repercusiones del acontecimiento dentro del Tíbet consistió en reprimir las manifestaciones de entusiasmo y pasar a la ofensiva criticando al Congreso de Estados Unidos y al Parlamento Europeo, instituciones que habían sucumbido al atractivo del Dalái y que, menos prudentes que la presidencia norteamericana, habían pedido explicaciones a Pekín.

En efecto, muchos de los tópicos movilizadores de aquel comienzo de fin de siglo funcionaron a la perfección para crear un referente idílico de un país aureolado por el budismo e instalado en la cultura de la no violencia y el igualitarismo social primigenio; en fin, todo un paraíso en la tierra destruido por la rapiña de China. La cuestión tibetana supuso un excelente banderín de enganche para las fuerzas anticomunistas en su afán por minar la credibilidad del gigante asiático, pero se presentó en un momento no propicio para Estados Unidos: tanto Reagan, unos años antes, como Bush, entonces, procuraban un acercamiento estratégico a Pekín, y por ello Washington mostró mucha cautela al respecto.

En el otro extremo de la contemporaneidad, el asombroso desarrollo económico del territorio de Hong Kong y de la república de Taiwán, ejemplos muy próximos y bien conocidos por el líder chino, ocupó una parte nada desdeñable del pensamiento del dirigente a la hora de afrontar lo que iba a constituir el peculiar modelo de crecimiento de su país. De 1980 datan las Zonas Económicas Especiales, áreas situadas por ley al margen de los principios socialistas para dotarlas de infraestructuras acomodadas a las exigencias de los intercambios comerciales abiertos al resto del

mundo y así fomentar la llegada de capitales extranjeros. De igual forma, la política de Deng respecto a la colonia británica fue muy pragmática. En 1984 las autoridades de Londres y Pekín acordaron el día 1 de julio de 1997 como la fecha en que desaparecería definitivamente la colonia como tal para incorporarse a la República Popular de China en calidad de Región Administrativa Especial. A partir de entonces y durante cincuenta años el Gobierno chino habría de respetar el sistema económico, financiero y de libertades tal y como lo recibía del Reino Unido. Sin duda, la aceptación de estas condiciones por parte del régimen comunista era fruto de la enorme importancia del enclave para la economía general del país como receptor de inversiones foráneas y suministrador de servicios.

Por otra parte, el VII Plan Quinquenal, previsto para el periodo 1986-1990, concedía una especial relevancia a los avances tecnológicos, tanto en la formación de personal cualificado en los sectores punta de la economía como en la inversión en desarrollo aplicado a la industria para lograr no ya sólo un crecimiento cuantitativo, sino una excelencia que le permitiera competir en los mercados mundiales. En esta línea de actuación el plan concretó sus objetivos en algunos campos: automatización, robótica, energía nuclear, biotecnología e inteligencia artificial, sectores donde la exigencia de recursos era superlativa y donde la posibilidad de poner unos cimientos sólidos desde el principio resultaba esencial para rentabilizar la inversión y optimizar los resultados. De este modo, en los últimos años ochenta se abrieron varias decenas de laboratorios especializados y centros de investigación con el fin de reducir paulatinamente la distancia tecnológica con Occidente. El principal problema de aquellos años de enorme crecimiento era, sin duda, el energético; a pesar de su notable potencial, China no lograba despegar en este terreno y hubo de recurrir a grupos extranjeros, por ejemplo, para la explotación de petróleo. La escasez de energía frenó la capacidad productiva del país, y la situación se agravó por el deterioro de las instalaciones, fuente permanente de pérdida de eficacia de la industria.

A pesar de estas dificultades, el volumen de la producción condujo a una verdadera invasión de productos chinos en el mercado

mundial de textiles, juguetes y papelería, entre otros sectores. En 1989 los intercambios con Estados Unidos superaron los diez mil millones de dólares, lo que le convirtió en su tercer socio comercial. Mientras, la fuerza expansiva y los métodos a veces poco ortodoxos provocaron las quejas norteamericanas hasta el punto de que en 1991 acusaron a Pekín de burlar las reglas internacionales.

En 1993 el crecimiento medio de la economía china alcanzó el 13 por 100, de tal manera que, a pesar de las enormes diferencias sociales y regionales, en tan sólo doce años la *renta per capita* se había multiplicado por diez. En líneas generales, empero, los cientos de millones de agricultores continuaban viviendo al margen de los cambios producidos por la gran expansión. Si en las ciudades industrializadas y en los grandes centros comerciales la forma de vida superaba, en determinados casos, los niveles occidentales, en el campo eran frecuentes los problemas derivados del hambre y la desnutrición o la falta de infraestructuras de transporte y energía eléctrica. El Gobierno fue incapaz de frenar los flujos migratorios internos desde las zonas rurales hacia las grandes ciudades, agravado el problema por los medios insuficientes con que estas contaban para acoger con unas garantías mínimas a los más de treinta millones de personas que se calcula que se establecieron en los núcleos urbanos más industrializados entre 1985 y 1990[64].

Unos años antes, en 1987, Zhao Ziyang había llegado a la Secretaría General del Partido Comunista con el apoyo explícito de Deng. Si bien no era partidario del modelo occidental de democracia, su intervención en el XIII Congreso del Partido Comunista, de octubre de aquel mismo año, reveló unos ímpetus reformadores más avanzados de lo que pensaban, entre otros muchos, el propio Deng y el primer ministro Li Peng. Aunque ambiguos, sus planteamientos anunciaban una mayor separación de las funciones del Partido y del Estado, una lucha sin cuartel contra la corrupción y una cierta liberalización en los ámbitos culturales y periodísticos; en definitiva, una suerte de «perestroika a la china».

Ello no obstante, la capacidad de Deng para influir en el desarrollo de las sesiones del congreso y trazar el camino para el futuro se dejó sentir. La llegada de caras nuevas, mucho más jóvenes, al Comité

Central quería dar a entender que el rejuvenecimiento físico era también de ideas, y el propio Deng abandonó este órgano para simbolizar el cambio, pero no hizo lo mismo en la Dirección de la Comisión Militar.

Así, pues, desde mediados de los años ochenta el Gobierno siguió la senda liberalizadora dentro del ámbito económico al facilitar paulatinamente que determinadas empresas se despegaran del control político con el fin de permitirles buscar financiación y gestionar sus intereses con los beneficios obtenidos. Se dieron, incluso, pasos en la flexibilización del mercado laboral y del sistema de precios de algunos productos. El crecimiento económico favoreció el incremento salarial y la demanda interna hasta el punto de desbordar la capacidad producir bienes[65]. La consecuencia más negativa fue que se dispararon tanto la inflación como los precios, lo cual golpeó con fuerza las rentas de los trabajadores. Animada por la facilidad de obtener ganancias especulativas, la corrupción, firmemente instalada desde principios de los años ochenta, extendió su radio de acción entre los cuadros medios y altos del Partido que tenían relación directa con los sectores productivos[66].

Si por un lado las reacciones de adhesión a las propuestas reformistas del XIII Congreso no se hicieron esperar entre los elementos más activos de la sociedad –en especial, los estudiantes–, por otro las desigualdades económicas y los flagrantes casos de corrupción impulsaron a estos mismos sectores a una crítica que trascendía los límites impuestos desde el sistema[67]. Durante la primavera de 1989 las protestas fueron subiendo de tono en algunas ciudades del país mientras las huelgas hacían acto de presencia, algo extraño en el régimen chino, al menos hasta entonces. El secretario general del Partido Comunista Hu Yaobang, que había dimitido en enero de 1987 por las presiones del Politburó contra su excesivo celo reformista, moría el 15 de abril de 1989 de un ataque cardiaco. Como símbolo de una época, quien había tolerado la agitación estudiantil en los años 1985 y 1986, convertido ahora en referente de la lucha por las libertades, desaparecía apenas un mes antes de que el Gobierno extinguiera la llama que él había contribuido a avivar. Ante el suceso, las autoridades se pusieron en

guardia por temor a que reverdeciesen los movimientos opositores. No les faltaba razón: grupos numerosos de estudiantes acudieron a depositar flores blancas en el Monumento a los Mártires instalado en la plaza de Tiananmen.

En este contexto, a finales de aquel mes de abril de 1989 nació la Asociación Autónoma de Estudiantes, entre cuyas peticiones figuraba la libertad de expresión y la mejora en la dotación de las universidades. Una manifestación de decenas de miles de personas recorrió Pekín el día 27 ante el estupor de los sectores más recalcitrantes del régimen, encabezados por Peng. La actitud dialogante mostrada por Zhao Ziyang desató las iras de sus oponentes mientras las marchas estudiantiles se sucedían sin cesar. Días después, el 13 de mayo, cerca de dos mil estudiantes se declararon en huelga de hambre en el centro de la plaza de Tiananmen, lo cual se convirtió en una noticia que recorrió el mundo y que puso a prueba el grado de tolerancia del Partido Comunista. La sentada acabó tornándose un espectáculo de masas por donde deambulaban o en el que se instalaban periodistas, trabajadores industriales u otros grupos de estudiantes.

Una ayuda inopinada, al menos para alentar entre los congregados la esperanza de un cambio real en el país, fue la visita de Mijail Gorbachov a China entre el 15 y el 17 de aquel mes de mayo. Simbólicamente, su presencia parecía confirmar el inicio de una transición, sobre todo entre los más optimistas. No fue así, sino más bien todo lo contrario. El 20 de mayo el Gobierno declaró la ley marcial, que estaría en vigor hasta el 10 de enero del año siguiente. Deng ya había decidido acabar con la protesta tiempo atrás; la imagen de Tiananmen convertida, por la fuerza de los medios de comunicación, en la de la lucha por la libertad no debía continuar so peligro de que los focos de protesta se extendieran por todo el país. Durante varios días los pekineses lograron impedir de forma pacífica el avance de las tropas hacia el centro de la capital, algo verdaderamente inusitado. Sin embargo, la escultura de escayola que emulaba la Estatua de la Libertad y que habían colocado los insurgentes en la plaza de Tiananmen tenía los días contados. La noche del 3 al 4 de junio las tropas del Ejército Popular de Liberación

acabaron con la resistencia de quienes con tanto ímpetu habían desafiado al poder comunista. La característica opacidad del régimen chino impide incluso hoy en día conocer datos mínimamente fidedignos sobre el alcance de la represión. Quizá fueran unos dos mil muertos o tres mil, como afirmó la Cruz Roja; la mayor parte de los cuerpos desaparecieron y fueron quemados por el ejército.

Deng y sus acólitos habían tenido muy presente la deriva de la Unión Soviética, el callejón sin salida al que había conducido, según su análisis, la falta de criterio de Gorbachov, y no querían repetir la experiencia. El Partido Comunista amplió de manera implacable su campaña de intoxicación, negando lo sucedido y escudándose en su pretendida defensa de las costumbres y formas de vida tradicionales chinas. La propaganda venía a equiparar la organización con la milenaria esencia del país, por lo que criticarla implicaba atentar contra la identidad nacional[68]. Por otra parte, la caída en desgracia de Zhao Ziyang no se hizo esperar[69]. El 22 de mayo, acusado de «conspiración burguesa», fue obligado a dimitir, depuesto de la Secretaría General del Partido y sustituido por el hasta entonces alcalde de Shanghái, Jiang Zemin, que gozaba de la confianza del Comité Central y del primer ministro[70].

A pesar de las voces críticas levantadas en Occidente por líderes políticos y sindicales, por periodistas e intelectuales, por numerosos grupos y asociaciones, los discursos a favor de la defensa de los derechos humanos y la democratización quedaron pronto relegados ante el surgimiento de otros escenarios internacionales más convulsos. Dos meses más tarde, la invasión de Kuwait y la crisis del Golfo favorecieron el olvido y el Gobierno chino pudo recomponer tranquila y progresivamente sus relaciones exteriores. En concreto, respecto a la Unión Soviética, la visita de los dirigentes chinos a Moscú en abril de 1990 puso fin al distanciamiento provocado por la política de Gorbachov. Excepción hecha de la venta de armas, el embargo decretado por las Comunidades Europeas sólo duró hasta octubre de 1990. Con Estados Unidos, la necesidad de adaptarse a las circunstancias también impuso sus valores. Poco duraron los efectos de la rimbombante condena del presidente Bush a lo ocurrido y del amplio apoyo del Congreso a las sanciones

económicas y a la paralización de las relaciones intergubernamentales. A finales de 1990 el presidente Clinton recuperó el diálogo y, aun cuando insistió en la necesidad de un giro en la actitud del Gobierno chino respecto a la protección de los derechos humanos, pudo más el afán de neutralizar el déficit comercial norteamericano con el gigante asiático. En 1992 la poderosa McDonald's instaló una de sus hamburgueserías junto a la plaza de Tiananmen. En ningún momento llegó China a estar aislada a consecuencia de lo allí perpetrado[71].

El pragmatismo permeó la política exterior china durante la década de los ochenta, más preocupada por consolidar sus vínculos comerciales con el área del Pacífico que por reivindicar y apoyar las acciones de los movimientos revolucionarios del planeta. Las transformaciones operadas durante aquellos años fueron determinantes para arrumbar los lazos de solidaridad con el Tercer Mundo y sustituirlos por la hegemonía económica. Así, además de mejorar ostensiblemente el diálogo con Japón, en 1991 China formalizó relaciones con la ya citada Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), un ámbito política y económicamente muy influido por Estados Unidos y donde Pekín pretendía ganar cotas de poder a través de su presencia comercial. El afán chino de lograr un estatus de gran potencia había chocado irremediablemente con los intereses norteamericanos.

En principio, el final de la Guerra Fría y la mayor presencia estadounidense en el panorama mundial parecían obrar en contra del régimen político de Pekín, máxime considerando los estrechos vínculos de Washington con Japón, Corea del Sur y Taiwán. Sin embargo, desde finales de los años ochenta las autoridades chinas habían roto su tradicional política de aislamiento (acercamiento de posiciones con el Kremlin, apuesta por el multilateralismo), actitud que favoreció su implicación progresiva en los asuntos geoestratégicos, con buenos resultados. Así, al favorecer la distensión alcanzando acuerdos fronterizos con las repúblicas asiáticas exsoviéticas y mediando en la crisis nuclear coreana, ofrecía muestras de responsabilidad y madurez política.

En este nuevo contexto de relaciones impulsadas por las autoridades comunistas tomaba cariz propio la cuestión de Taiwán, legado de la Guerra Fría. Justificada su independencia desde 1949 por su éxito económico y por el anticomunismo del Kuomintang, el control efectivo del país estaba en manos de la vieja guardia de este partido. A los ojos de Estados Unidos, la isla constituía una pieza importante en el tablero estratégico internacional, pero los aires democratizadores de finales de los ochenta iban a afectar, indudablemente, a su futuro. A lo largo de la década los grupos de oposición se hicieron más visibles, impregnando su discurso de declaraciones a favor de la defensa de los derechos humanos y exigiendo una liberalización del sistema. Además, a comienzos de 1988 murió Chiang Ching-kuo, el cual, como su padre –el líder histórico Chiang Kai-chek–, había regido los destinos de la isla con un autoritarismo favorecido por el contexto de la Guerra Fría. Le sucedió Lee Teng-hui, el primer taiwanés en alcanzar tan alta magistratura. Partidario de introducir cambios reformistas, al año siguiente permitió la legalización de varios partidos políticos –incluido el Partido Democrático Progresista, defensor de la independencia de la isla– aun cuando dicha propuesta resultaba sediciosa dentro del sistema legal establecido. En las elecciones parciales celebradas en diciembre de 1989 para cubrir una parte de la Asamblea Nacional el Kuomintang resultó la fuerza más votada con casi el 60 por 100 de los sufragios, pero el Partido Democrático Progresista superó el 30 por 100, éxito que supuso la introducción de un componente modernizador en el sistema taiwanés[72].

El fortalecimiento paulatino de las instituciones democráticas, auspiciado por el propio Teng-hui, continuó imparable a pesar de que la debilidad de la oposición tanto política como sindical después de tantas décadas de férreo control era un óbice en el camino iniciado. Consciente de las ineluctables transformaciones en el panorama internacional y en el propio sudeste asiático, el presidente se impuso a sus inclinaciones autoritarias, fruto de la educación política que había recibido, y atendió muchas de las exigencias de la oposición. La limpieza con la que en 1992 se desarrollaron las primeras elecciones completamente libres fue una muestra más de la

voluntad de Teng-hui: el Kuomintang sólo consiguió el 53 por 100 de los votos, mientras que el Partido Democrático Progresista alcanzó el 31 por 100.

Otro de los fenómenos más sobresalientes derivados del final de la Guerra Fría en esta zona fue el cambio de actitud en estos dos Estados que reivindicaban para sí la legitimidad de representar la nación china. En efecto, desde 1949 los Gobiernos de Pekín y Taipei sólo admitían la existencia de una única nación, por lo que los contactos entre ellos habían quedado prácticamente paralizados durante cuarenta años. Por el contrario, al finalizar la década de 1980 pudieron apreciarse algunos gestos de buena voluntad entre ambas partes. Así se constata la visita, en mayo de 1989, de una delegación ministerial taiwanesa a la capital continental con motivo de una reunión del Banco Asiático de Desarrollo, hecho inusitado hasta entonces. Por otra parte, desde 1987 distintas empresas taiwanesas venían haciendo inversiones en las Zonas Económicas Especiales hasta el punto de que la provincia costera de Fujian, donde resultaban especialmente importantes, vio progresivamente aumentada su dependencia económica de la isla[73].

En este sentido, y volviendo al gigante asiático, no cabe duda de que los avances económicos también tuvieron en China una influencia directa en la política exterior, y no sólo por su necesidad de estrechar relaciones diplomáticas con otros países para asegurarse el suministro de gas y petróleo o para colocar sus productos en nuevos mercados. Una joven generación de analistas y de políticos chinos, muchos de ellos sin haber asumido responsabilidades previas ni haber vivido la época maoísta, comenzaron a ocupar cargos en los órganos centrales y regionales del Partido y, a través de ellos, hicieron pública su voluntad de garantizar una mayor implicación de la República Popular en la geoestrategia internacional. Para los jóvenes investigadores de la Academia de Ciencias Sociales o de la Escuela del Partido, China tenía ante sí el desafío de alcanzar en el escenario mundial el puesto de relieve que por historia, pujanza económica, extensión y situación le correspondía[74].

Como antes indicábamos, con el fin de marcar distancias con Estados Unidos, la ampliación de la cobertura de embajadas y consulados por todo el mundo se desarrolló bajo los postulados de la paz y la no injerencia en asuntos internos. Con un pragmatismo muy elocuente Pekín estableció en los últimos años relaciones, por ejemplo, con Filipinas y Camboya, dejando a un lado la intensa carga ideológica a la que décadas atrás había sometido su acción en el extranjero. La nueva doctrina del «beneficio mutuo» inspiró la política exterior del país con el objetivo de cerrar numerosos acuerdos de cooperación con países americanos, africanos y, por supuesto, asiáticos, poniendo de manifiesto su apuesta por ejercer un *soft power* en sus relaciones externas. La impresión generalizada de que su integridad nacional corría peligro ante un supuesto ataque enemigo comenzó a desaparecer con la progresiva normalización de sus relaciones con los países fronterizos: primero, en 1988, con la India y después, en años sucesivos, con la Unión Soviética, Indonesia, Vietnam y Corea del Sur.

De este modo, el resurgimiento chino contaba con un componente geoestratégico añadido de consecuencias imprevisibles. La Posguerra Fría elevó a Estados Unidos a la categoría de hiperpotencia y colocó a su Gobierno en una situación de ambigüedad respecto a China en tanto en cuanto, como hemos indicado con anterioridad, Washington observaba con inquietud la mayor influencia que iba adquiriendo Pekín en todo el mundo y que elevaba a la República Popular a una posición de competidor cada vez más activo en todos los ámbitos. La cuerda existente entre el entendimiento y la confrontación continuó tensa.

Tiananmen trazó el arco máximo hasta donde estaban dispuestos a llegar los líderes comunistas en su política de reformas, pero también demostró que a los estudiantes universitarios no los secundaban ni los cientos de millones de campesinos ni las clases profesionales emergentes de las ciudades costeras[75]. Por tanto, no hubo consecuencias trascendentales para el orden político. El movimiento estudiantil no estaba coordinado y carecía de vínculos estrechos con los sectores reformistas dentro de la estructura del poder; de ahí su efímera presencia pública. Incluso, los grupos más

jóvenes y renovadores del Partido, seguidores de Zhao Ziyang, consideraron poco efectiva la reacción estudiantil y se mostraron favorables a tratar de avanzar por la vía reformista dentro de la propia organización.

A lo largo de su trayectoria política Deng Xiaoping siempre afirmó su convicción de que el Partido debía mantener el monopolio de la acción sobre la sociedad, argumentando la imposibilidad de establecer un modelo político de corte occidental como la democracia, sometido fácilmente a intereses espurios. De hecho, este monopolio permitió a la figura de Deng salir indemne de la revuelta estudiantil hasta que murió en febrero de 1997. Aunque algunos analistas vieron en los acontecimientos de Tiananmen el final de su vida política, la realidad fue muy distinta. Ciertamente, el líder chino abandonó los cargos de responsabilidad que ostentaba, pero sus peones siguieron ocupando a su sombra los puestos clave en la estructura del Estado: el tenaz Li Peng continuó como primer ministro mientras, en 1993, Jiang Zemin fue nombrado presidente de la República, una magistratura que no se había cubierto desde hacía años. Cuatro años después, coincidiendo con la muerte de Deng, el veterano Li fue sustituido por Zhu Rongji al frente del ejecutivo. Aunque comunista convencido, su firme apuesta por las transformaciones económicas le alejaban un tanto de las posiciones excesivamente conservadoras de su predecesor. De hecho, el XIV Congreso del Partido Comunista, celebrado en octubre de 1992, reafirmó las líneas directrices de la política de Deng a favor de una peculiar «economía socialista de mercado»: desaparición progresiva de los obstáculos a la libre competencia –en cuyo marco tendrían que actuar las grandes empresas estatales– y ralentización del crecimiento económico. No se podía hablar de impulso a la democratización política en tanto en cuanto el Partido continuaba arrogándose la dirección de los asuntos del Estado[76].

Las tribulaciones de Japón

El 7 de enero de 1989 moría el emperador Hiro Hito tras sesenta y cuatro años de reinado. Como cierre simbólico de toda una era, el óbito coincidió en el tiempo con el inicio de cambios trascendentales para el país. En efecto, durante ese mismo año y el siguiente iba a estallar la burbuja económica japonesa: además de la disminución de la demanda interna, la elevadísima capacidad productiva necesitaba ajustes profundos tales como la introducción de nuevas tecnologías para reactivar su competitividad. En consecuencia, entre 1992 y 1995 el crecimiento económico se aproximó a cero; sin duda, se trataba de los años más críticos desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Aquel periodo vio también desintegrarse el sistema político basado en la primacía del Partido Liberal Democrático (PLD). Unida a la profunda crisis inmobiliaria de 1990, la corrupción, espoleada por algunos medios informativos, había resultado a la postre determinante. Así, en 1993 terminaba una época –inaugurada en 1955– al perder por primera vez el poder el PLD, de talante anticomunista y pronorteamericano, sumido como estaba en una lucha entre facciones que desembocó en la escisión. En agosto de aquel año fue elegido primer ministro Hosokawa Morihiro, fundador del Nuevo Partido. La convulsión política continuó hasta el extremo de que en junio de 1994 el socialista Murayama Tomiichi alcanzó tan alta magistratura con el apoyo del PLD. El tradicional reparto de la política japonesa entre los conservadores del PLD, siempre en el poder, y los socialistas, siempre en la oposición, se había roto; un fenómeno verdaderamente impensable poco tiempo antes y sólo explicable en el contexto de la Posguerra Fría. A ello debe añadirse el deterioro del conocido como «triángulo de hierro», estructura básica del poder japonés de posguerra sustentado por el empresariado, la elite política y la burocracia, cuya mezcla de intereses trascendía el mundo de los partidos políticos e, incluso, los Gobiernos. La crisis económica suscitó la desconfianza de los dos últimos sectores hacia el Partido Liberal, cuya mala gestión consideraban que ponía en peligro el modelo de crecimiento. Ello no obstante, ni la aspiración a reducir el sector público –privatizando algunos monopolios estatales como el de las telecomunicaciones– ni

el surgimiento de nuevos grupos de presión en un Japón inserto en el proceso de globalización e influencia extranjera pudieron acabar con el equilibrio de poderes del «triángulo», aunque sí lo hicieron más inestable[77].

Durante aquellos años la política exterior japonesa centró sus objetivos en intentar un puesto de mayor relevancia en la región, haciendo oídos sordos a la llamada internacional sobre la actitud de China en Tiananmen. A los gobiernos japoneses les preocupaba el final de la Guerra Fría en un sentido muy concreto: la sólida alianza con los norteamericanos mantenida frente al enemigo soviético durante más de cuatro décadas podía peligrar. De hecho, un artículo publicado en *Newsweek* el 27 de febrero de 1989 resumía el sentir extendido entre los especialistas del área, para quienes, inevitablemente, se acabaría produciendo un choque de intereses entre Estados Unidos y Japón debido a las crecientes aspiraciones de Tokio de controlar el Pacífico. Contra todo pronóstico, la crisis económica y política japonesa impidió que así sucediera[78].

Donde la Guerra Fría no acaba: el paralelo 38, una herida que aún supura

Los ochenta fueron años tumultuosos en Corea del Sur debido al aumento de las protestas populares contra el sometimiento de su país a los dictados de Washington y, por ende, contra el régimen autoritario imperante. El despegue de las clases medias como consecuencia de una mejora general de las rentas estimuló sus afanes por participar en la política. Ciertamente, durante la dictadura de Chun Doo-hwan –que transcurrió entre 1980 y 1988– se consolidaron las bases de la mejora socioeconómica[79], y fue dentro de este sistema donde, con el beneplácito de la Casa Blanca, las propias autoridades facilitaron el inicio de la democratización.

En junio de 1987, por designación de Doo-hwan, llegó al poder Roh Tae-woo, general en la reserva. Con una trayectoria forjada en los principios de la Guerra Fría, no parecía la persona más adecuada para iniciar un proceso de reformas. Sin embargo, desde el

momento en que tomó las riendas del poder su actitud reflejó una nueva manera de enfrentarse al rumbo por el que transcurrían las relaciones internacionales. Ya en sus primeras declaraciones afirmó su deseo de ampliar el marco de las libertades formales, convocar elecciones locales y desarrollar una nueva ley electoral. Pocos meses después, en octubre, los coreanos aprobaron por una amplia mayoría un texto constitucional que recortaba las atribuciones presidenciales, sobre todo, la de disolver la Asamblea Nacional[80]. Era un gran triunfo para el legislativo y para la división de poderes en un país cuya historia reciente había estado marcada por la centralización de competencias en la magistratura presidencial. El 16 de diciembre de aquel año de 1987 se celebraron elecciones directas a la presidencia; de ellas, con el 35 por 100 de los votos, salió victorioso Tae-woo, del Partido de la Justicia Democrática, seguido con siete puntos menos por Kim Young-sam, del Partido de la Reunificación Democrática[81]. Su voluntad reformista y la debilidad de una oposición dividida habían allanado a Tae-woo el camino hasta ser elegido en las urnas. Aunque en las elecciones legislativas de abril de 1988 su formación política iba a ser la más votada, no pudo obtener la mayoría absoluta, lo cual redundó positivamente en el fortalecimiento del juego democrático, ya que el partido en el Gobierno hubo de dialogar y pactar con las distintas fuerzas parlamentarias[82].

El espíritu olímpico fue esgrimido por Seúl para iniciar una aproximación no sólo a Corea del Norte, sino también a China en particular y al mundo del socialismo real en general. En julio de 1988, unos días antes de la inauguración de las olimpiadas, el presidente, cambiando el discurso oficial que había caracterizado las décadas anteriores, instó a una ampliación en todos los ámbitos de las relaciones con los países comunistas de su entorno y pidió llegar a un acuerdo para reconocer las dos delegaciones coreanas en la ONU. Todo hacía pensar que la desactivación progresiva del enfrentamiento entre bloques operada tras llegar Gorbachov a la Secretaría General del PCUS iba a terminar afectando a la situación de la península de Corea, una herida abierta en 1953 y que todavía supuraba. De este modo, el año 1989 fue clave en la

democratización en uno de los escenarios más señalados de la Guerra Fría, al menos al sur del paralelo 38. Con todo, el legado de décadas de autoritarismo no podía desaparecer de la noche a la mañana y la república se vio obligada a sufrir durante un tiempo algunos residuos de la dictadura tales como el sistema represivo.

El deshielo de las relaciones con el ámbito de influencia soviética fue un hecho consumado nada más empezar a liberalizarse las relaciones de Moscú con sus aliados; de estos, el 1 de febrero de 1989 Hungría fue el primero en reconocer a la República de Corea del Sur. Pasaría casi año y medio hasta que, en junio de 1990, Gorbachov hiciese lo mismo tras reunirse en San Francisco con Roh Tae-woo[83]. Las relaciones entre ambos países quedaron oficialmente establecidas tres meses después, con el consiguiente rechazo de las autoridades norcoreanas, conscientes, no obstante, de que una parte sustancial de sus suministros provenía de la URSS. El buen entendimiento que se desprendía de las reuniones mantenidas por los dos líderes impulsó la rápida aproximación de sus países; de hecho, desde comienzos de 1989 –antes, por tanto, del establecimiento de relaciones diplomáticas plenas– las inversiones de empresas surcoreanas privadas en territorio ruso se habían incrementado considerablemente. En este mismo sentido, con mucha mayor celeridad quedaron establecidas las relaciones entre China y Corea del Sur, anunciadas en 1992 a la vista del crecimiento del comercio entre ambos países durante los últimos cuatro años hasta superar, con creces, el valor de los intercambios entre China y Corea del Norte.

El presidente mantuvo sus compromisos en favor de la apertura democrática y en 1992, una vez terminado su mandato, apoyó la candidatura de Kim Young-sam, el primer civil en llegar a la presidencia desde hacía tres décadas. Esta sintonía con quien había sido su máximo rival político puede comprenderse después de que en 1990 el Partido de la Justicia Democrática y el Partido de la Reunificación Democrática hubieran unido sus fuerzas para crear una sola formación, el Partido Liberal Democrático, de discurso mucho más moderado y más ajustado a las demandas de una sociedad moderna.

De otra parte, y tras consultar a Seúl, Estados Unidos entabló en Pekín conversaciones directas con el Gobierno de Pyongyang. La cuestión del armamento nuclear acaparó la discusión. Si los norcoreanos pedían la desnuclearización de la península, Washington insistía en que aceptaran la revisión de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Las conversaciones se estancaron y fue imposible llegar a un acuerdo. Sin embargo, el gran cambio inducido por la disolución del orden de la Guerra Fría se dejó sentir cuando en septiembre de 1990 el presidente Bush manifestó su voluntad de permitir la entrada de Corea del Norte en la ONU, siempre y cuando los demás miembros aceptaran lo mismo para Corea del Sur. De este modo, justamente un año después los dos Estados vecinos entraban a formar parte de las Naciones Unidas, cerrando así una brecha abierta desde hacía décadas. Con todo, aunque en enero de 1992 ambas Coreas firmaron una declaración conjunta a favor del control de la energía nuclear con fines armamentísticos, en la práctica Pyongyang no renunció a avanzar en su programa.

Después de 1991, como en otros ámbitos geográficos donde los Estados socialistas habían sobrevivido gracias a la generosidad soviética, la impenetrable dictadura norcoreana parecía llegar a su fin. La falta de recursos financieros para pagar la subida de precios del carbón y el petróleo proporcionados por la Federación Rusa afectó drásticamente a todos los sectores. En especial, la caída de la producción agrícola golpeó de forma directa a una población que veía el inicio de la década de los noventa no con esperanzas de mejora, sino bajo la amenaza del hambre. Por si fuera poco, la rigidez del sistema favorecía un reparto desigual de los alimentos según los criterios establecidos por el Gobierno en función del grado de sumisión al régimen, lo cual arrojó a la miseria y a la muerte a cientos de miles de norcoreanos y obligó a otros tantos a emigrar a China[84].

Cada vez más aislada ante la mejora inequívoca de las relaciones de Corea del Sur con China, con la Unión Soviética y, una vez extinta esta, con la Federación Rusa, la vecina del Norte se vio obligada a presenciar cómo su endeble economía sufría aún más por la pérdida de las ventajas que durante la confrontación de bloques le habían

ofrecido chinos y soviéticos. Cerrándose a cualquier tipo de influencia reformista, el régimen comunista de Pyongyang apostó por la carrera nuclear como medio de justificar su anacronismo[85]. A pesar de las presiones internacionales, incluidas las del Gobierno chino, su único –y sólo en parte– valedor, en marzo de 1993 Kim Il-sung anunció el abandono del Tratado de No Proliferación Militar, cortando de raíz con la exigencia de que los inspectores internacionales visitaran sus instalaciones nucleares. Así se enterraba el espíritu conciliador que, como antes hemos comentado, había llevado a los Gobiernos de las dos Coreas a firmar en diciembre de 1991 un acuerdo de cooperación y no agresión para estrechar los vínculos de todo tipo e, incluso, a expresar su voluntad conjunta de desnuclearizar la península.

La caída del Muro de Berlín y la unificación alemana quedaban muy lejos del Extremo Oriente y, desde luego, en el caso de Corea no se dieron pasos significativos que recordasen a lo que estaba ocurriendo en Europa. Por el contrario, el régimen norcoreano fue refractario a cualquier atisbo de liberalización. La vía coreana al socialismo propiciada por Kim Il-sung dio lugar a una frenética carrera propagandística para convertirlo en la quintaesencia del comunismo mundial en un momento en que estos sistemas se desplomaban o cambiaban de naturaleza. Desde finales de los años ochenta, el cierre absoluto del país para evitar cualquier contagio de lo ocurrido en la Unión Soviética o en la Europa del Este, unido al culto a la personalidad del líder, lo aislaron del mundo, tendencia que se mantuvo también a partir de julio de 1994, cuando, a la muerte de Kim, le sucedió su hijo.

África en las postrimerías de la Guerra Fría

Durante los años ochenta y primeros noventa se albergaron auténticas esperanzas sobre la posibilidad de que los procesos democratizadores, fruto de las protestas populares y de la pérdida de legitimidad de algunas autocracias, fraguasen en algunos países árabes. Sin embargo, ante una situación que podía írsele de las

manos, el poder constituido reaccionó ya con prácticas represivas, ya jugando la carta del diálogo con ciertos sectores de la oposición. Más aún, ante la presencia de la amenaza islamista, estos Gobiernos volvieron a recuperar el apoyo de las potencias occidentales, que preferían a las elites tradicionales para que preservasen cierta estabilidad. Como escriben dos excelentes conocedores del mundo árabe, la democratización resultaba muy difícil en aquellos ámbitos puesto que eran grupos muy reducidos los que tenían el control de la situación:

> Estas elites accedieron al poder después de liberarse del dominio colonial y vencer en la competición por el control de los Estados. Desde entonces consiguieron una gran estabilidad, cerrando las puertas a la renovación de las elites desde el exterior del grupo […]. En la mayoría de los casos, además, el poder del Estado se basa en la renta y en la coerción, por lo que la supeditación de los demás actores a aquellos que controlan el Estado es todavía mayor[86].

Salvo la explosión islamista, nada puso en entredicho la continuidad de las autocracias en los países árabes del norte de África y en el Oriente Medio y cuando, como en el caso de Argelia, se produjo un vuelco por las urnas, el respaldo internacional al golpe de timón preparado por el Ejército para evitar el triunfo de los radicales sirvió a estos regímenes de acicate para mantenerse en el poder. En ninguno de ellos, a pesar de los intentos, hubo un cambio de sistema motivado por la fuerza de los movimientos islamistas, ni tampoco estos lograron transformar las sociedades donde actuaban.

El islamismo, factor de inestabilidad en el norte de África

Desde la segunda mitad de los años ochenta la introducción de medidas económicas liberalizadoras llevada a cabo por los Gobiernos del norte de África permitió albergar esperanzas de que una posible mejora de sus respectivas situaciones influyera en el crecimiento y redistribución de las rentas, así como en el adelgazamiento del aparato estatal, arrastrando ineluctablemente a las dictaduras imperantes a cambios democratizadores. Estas políticas no sólo afectaron a países como Túnez –donde los índices macroeconómicos

mejoraron en los primeros años noventa gracias, en buena medida, a las indicaciones del FMI–, sino también en Libia, cuyo aislamiento internacional desde 1986 tras el bombardeo norteamericano comenzó a romperse, a lo largo de 1989, mediante la introducción de ciertas reformas capaces de flexibilizar el rígido control ejercido por Muamar el Gadafi sobre la vida del país. En Marruecos, fiel aliado de Estados Unidos, aquellos años pusieron en evidencia su escaso respeto por los derechos humanos y la mano férrea con la que el rey Hasán II había conducido los asuntos internos; aun así, también su régimen quiso ofrecer al mundo una imagen remozada al aprobar la Constitución de 1993, de carácter más abierto.

Sin embargo, la idea extendida en los foros académicos y políticos del momento sobre la existencia de una línea de continuidad entre reforma económica y democratización resultó errada. El crecimiento económico, donde lo hubo, no sirvió para equilibrar las graves diferencias sociales y la amenaza del fenómeno islamista acabó por convertirse en una realidad añadida a los problemas estructurales de la región. Debido a su importancia durante la Guerra Fría, Argelia y Egipto –el primero con su halo de triunfo sobre Francia tras lograr la descolonización y edificar un régimen socialista, y el segundo por su difusión del panarabismo nasserista en Oriente Medio y Próximo– constituyeron ejemplos suficientemente significativos de los profundos cambios, tanto internos como de percepción desde el exterior, que el nuevo orden internacional iba a precipitar.

A mediados de la década el Frente de Liberación Nacional de Argelia era una cáscara vacía, sin ninguna capacidad de reacción, tal como pudo observarse en los disturbios populares ocurridos en 1988. Eso sí, como dueñas absolutas del poder desde la independencia del país, sus elites habían impedido el desarrollo de cualquier atisbo de disidencia. La corrupción política, las flagrantes diferencias socioeconómicas y el crecimiento de la pobreza durante la década anterior no obtuvieron respuesta alguna cuando, fallecido Bumedian en 1979, fue sustituido en la jefatura del Estado por Chadli Benyedid. En aquel año de la Revolución Islámica en Irán los ayatolás llamaron a todos los desheredados del mundo musulmán a

que, recuperando la dignidad perdida y con el apoyo incondicional del Profeta, se levantaran contra los regímenes espurios y alzaran la bandera del islam. En las particulares condiciones de Argelia estos alegatos encontraron una buena acogida y arraigaron lenta y calladamente hasta alcanzar proporciones inimaginadas desde el Gobierno.

Por aquellas fechas la economía argelina dependía casi en su totalidad de los recursos provenientes del gas natural y del petróleo y sus derivados, de ahí que la reducción de sus precios a lo largo de aquellos años –y, sobre todo, entre 1986 y 1988– pusiera en el disparadero a las autoridades por no ser capaces de frenar el descontento social consiguiente. La bajada del precio del petróleo en la primera de estas fechas bastó para reducir al 50 por 100 los ingresos del país. Si durante las décadas anteriores las subvenciones a los productos de primera necesidad y el crecimiento del aparato del Estado habían generado, gracias a la llegada de petrodólares, una sociedad más bien apática y poco reivindicativa, los problemas de liquidez repercutían ahora directamente sobre la base de legitimidad del régimen.

Las sublevaciones del Frente de Liberación Nacional ocurridas en 1988 evidenciaron el final de la época –tan propia de la Guerra Fría– de férreo control iniciada en 1965 por unos grupos que habían capitalizado la lucha por la independencia y que habían fracasado ostensiblemente en su programa de socialismo modernizador para el país. El sistema económico se mostró incapaz de absorber el creciente paro, agravado a su vez por la explosión demográfica. El resultado fue la proliferación de masas de pobres en los barrios degradados de la periferia de las ciudades argelinas. En 1984 el Estado había abierto un proceso de liberalización económica cuyas repercusiones, lejos de dinamizar la economía, pusieron en serio riesgo las ayudas prestadas a la población a través de los servicios sociales. La pérdida de valor del petróleo golpeó las expectativas de progreso al mismo tiempo que la burocracia política y económica no sólo no renunciaba a algunos de sus privilegios sino que, en aquel periodo de profunda crisis, trataba de afianzarlos, alejándose todavía más de la forma de vida de sus compatriotas. Por otro lado, en 1988

las tres cuartas partes de los veintitrés millones de argelinos no llegaban a treinta años de edad (diez años después los menores de veinticinco suponían un 58,2 por 100 del total[87]) y la mitad de los jóvenes estaba buscando su primer empleo. Estos sectores juveniles, para quienes el recurso simbólico a la revolución anticolonialista y al régimen socialista del FLN era una vaga imagen inculcada en la escuela, aspiraban a mejorar su nivel de vida en un momento en que las perspectivas de futuro no eran precisamente halagüeñas y la corrupción entre la clase dirigente producía un rechazo cada vez más generalizado.

La reacción de Benyedid llegó muy tarde: el 19 de septiembre de 1988 lanzó un incendiario discurso contra quienes obstaculizaban las reformas dentro del Partido y de la Administración y apeló al pueblo a apoyar el programa renovador y denunciar los casos de corrupción. Sin embargo, pocas semanas después, entre el 5 y el 10 de octubre, las manifestaciones y revueltas producidas se reprimieron duramente mediante la intervención del ejército, y la brecha entre el pueblo y su Gobierno siguió aumentando por momentos.

Con la intención de dar nuevos aires a un sistema que se agotaba, el 12 de octubre –el mismo día en que se levantó el Estado de sitio– Benyedid anunció públicamente su disposición para llevar a cabo una rápida reforma de la Constitución que pudiera someterse a referéndum cuanto antes. El presidente buscó la alianza con los representantes de los sectores sociales más reivindicativos, incluidos los integristas, con el fin de dar una salida a la crisis a la vez que apostaba por soluciones democratizadoras para el país: los partidos políticos fueron legalizados, el sistema procedió a cierta liberalización económica y los medios de comunicación dispusieron de mayor libertad para informar de la situación[88]. Un aspecto muy novedoso del proyecto de reforma constitucional era el cambio en la designación del Gobierno. Como hasta el momento, era competencia del presidente, el cual podía ahora nombrar un gabinete cuyos miembros no militasen en el FLN. A pesar de las voces críticas, el VI Congreso del Frente, celebrado en noviembre de aquel año de 1988, asumió las propuestas de Benyedid y a finales de febrero de 1989 se aprobó la nueva Constitución. Además de garantizar las libertades

individuales y suprimir las referencias al socialismo, el texto creaba un Tribunal Constitucional e introducía el voto directo para elegir al presidente de la República[89].

Desde 1989 el Gobierno argelino acudió al Fondo Monetario Internacional para obtener asesoramiento con el fin de reestructurar una economía en franco declive, pero el difícil comienzo del proceso de liberalización del mercado, la devaluación del dinar y el crecimiento de la inflación repercutieron muy negativamente, una vez más, en los menos favorecidos, que vieron cómo mermaban las subvenciones que hasta entonces habían recibido del Estado. En 1989 el 40 por 100 de los veinticuatro millones de argelinos eran menores de quince años y la población urbana superaba ya el 50 por 100. El paro ascendió vertiginosamente, de un 18 a un 26 por 100 de la población activa entre 1984 y 1993, y a un 28 por 100 en 1995[90].

Aunque los postulados que iba a defender el Frente Islámico de Salvación, todavía sin este nombre, gozaban de una larga trayectoria desde la independencia argelina a través de asociaciones religiosas de ayuda a los pobres, de creación y mantenimiento de centros culturales, etcétera, el FIS nació oficialmente tras la sublevación de octubre de 1988 y al amparo de la Constitución aprobada en febrero de 1989, respetuosa con el pluripartidismo. Su programa electoral abogaba por la solidaridad entre los pueblos islámicos para ejercer en el orden internacional una posición de fuerza fundamentada en la *Sharía,* como les correspondía numérica y culturalmente[91]. Después de analizar con profundidad el tema, Sami Naïr resume los rasgos distintivos del militante del FIS, paradigma de la descomposición social y política del Estado poscolonial:

> Por una parte están tangencial o totalmente excluidos de la sociedad, por otra, están desestructurados y no tienen cohesión interna [...]. Mayoritariamente joven, el electorado del FIS es sobre todo masculino, y a menudo víctima de una escolarización interrumpida. Más urbano que rural –o más bien es el punto de intersección de la urbe y el campo–, tiene dificultad en insertarse en la ciudad, de la que permanece al margen. Está desarraigado –aunque no sea pobre–, no pertenece a las comunidades religiosas o tribales tradicionales[92].

En aquel ambiente de desorientación e incertidumbre era lógico que el Frente Islámico de Salvación, emulando a sus correligionarios de Egipto, ofreciera medidas contundentes, rápidas y muy populares, erigiéndose en el defensor de las masas marginadas por el poder a través de la creación de redes informales de solidaridad. Ante el caos y la debilidad del poder instituido, el FIS prometió un cambio regenerador en función del rearme moral que brindaba el islam.

La estrategia dio sus frutos. Después de haber triunfado en los comicios locales y regionales de 1990, el Gobierno preparó con celeridad una ley electoral con el fin de controlar el ascenso de los islamistas. Fue aprobada por el Parlamento el 2 de abril de 1991 y su inmediata aplicación iba a afectar a la convocatoria prevista para dos meses después. Al reducir la representación de las áreas urbanas, donde el FIS gozaba de mayor apoyo, la nueva norma resultó claramente lesiva a los intereses de este.

A pesar de estos esfuerzos, a medida que avanzaba el año 1991 se hacía más evidente el desgaste del FLN, una estructura de poder debilitada que, ante la huelga general convocada por los islamistas, hubo de posponer hasta el 26 de diciembre la celebración de elecciones. A pesar de todos los obstáculos trabados por el poder para impedir la victoria islamista, el resultado de la votación fue desolador para el partido de la independencia argelina. Sus viejas aspiraciones no sólo a transformar radicalmente el país, sino a capitanear los movimientos anticolonialistas y socialistas árabes, habían pasado a la historia.

En efecto, en la primera vuelta de las elecciones legislativas celebradas en diciembre el Frente Islámico de Salvación se alzó con una victoria rotunda, el 47 por 100 de los votos y 188 escaños frente al 23,38 por 100 y dieciséis escaños del Frente de Liberación Nacional, que se veía relegado a la tercera posición[93]. Según las cifras oficiales –que, probablemente, adelgazaban las reales–, habían dado su voto a la opción islamista más de 3.200.000 argelinos[94]. Al margen de la mayor o menor limpieza del recuento electoral, las primeras elecciones libres en Argelia habían dinamitado el régimen del FLN. La elevada abstención, del 41 por 100, fue muestra

inequívoca del hartazgo del electorado ante la persistencia de la crisis económica y de la endémica corrupción.

El apoyo masivo al FIS estaba estrechamente relacionado con su apuesta por convertirse en una alternativa global al sistema heredado de la descolonización. Ante la pasividad e impotencia del Estado y gracias a la capacidad de movilización del islamismo, los años de la creación y consolidación de redes de ayuda a los más desprotegidos habían erigido a estos grupos, que ahora cosechaban su primer gran triunfo, en salvadores y paladines de la identidad perdida por culpa de la corrupción y el occidentalismo. No dejaba de ser paradójico que el país donde el mito del socialismo panárabe había sido, durante las décadas de la Guerra Fría, el espejo donde se miraban tantos partidos y organizaciones revolucionarias del Tercer Mundo, ofreciese ahora esta cálida bienvenida al integrismo radical.

Para muchos el golpe de Estado era inminente: en enero de 1992 los militares anularon el resultado de las elecciones, obligaron a Benyedid a dimitir y dejaron fuera de la ley al FIS. Poco había durado la semilla democratizadora en la excolonia francesa; sin embargo, nadie pareció preocuparse demasiado. Se había evitado que un partido fundamentalista tomara el poder en Argelia, y las potencias europeas se sintieron aliviadas, por lo que no denunciaron la conculcación de los principios democráticos que ello había supuesto[95].

El golpe de mano instauró un denominado «Alto Comité de Estado», donde bajo el amparo del Ejército se dieron cita distintos sectores de la sociedad y las instituciones argelinas; allí se encontraban también destacados simpatizantes de los grupos religiosos islámicos, como el influyente Haddan Tidjani. Encabezado por Muhamad Budiaf, uno de los pocos dirigentes históricos del FLN limpio de acusaciones de malversación, el comité tenía como objetivo constituir una fuerza política de nuevo cuño capaz de enderezar la situación del país y atraer al régimen vigente a los sectores menos violentos del islamismo. Esta fue la finalidad de su Reagrupamiento Nacional Patriótico; sin embargo, el atentado mortal contra Budiaf, perpetrado en julio –seis meses después del golpe–, reveló la fragilidad de la estructura de poder tanto por el empuje del

terrorismo islámico como por la oposición dentro de las instituciones del Estado a cualquier cambio real que pusiera en tela de juicio el control económico y político que tradicionalmente ejercían grupos provenientes del antiguo FLN. El atentado mostró asimismo la capacidad de respuesta del Grupo Islamista Armado (GIA): la ilegalización del FIS había provocado la radicalización de multitud de jóvenes procedentes de los barrios marginales de las grandes ciudades azotadas por el paro y que habían roto con los dirigentes del propio FIS para dar el salto a la acción terrorista.

El GIA había nacido en enero de 1993 para luchar no sólo contra los miembros de las fuerzas armadas o los funcionarios del FLN: cualquier persona cuyo pensamiento o forma de vida no se adecuara a las exigencias del islam tal como él las interpretaba podía convertirse en objetivo de sus acciones. Los sectores más críticos con esta deriva fundamentalista –periodistas, intelectuales y, por supuesto, los extranjeros– eran blanco de su estrategia de muerte y destrucción. Fortalecido durante 1994, el GIA inició su declive pronto, al año siguiente, cuando sus atentados, cometidos generalmente en núcleos urbanos, provocaron un acusado rechazo entre la población y esta, amparada por el Estado, procedió a constituir unidades de autodefensa que generaron aún más violencia[96].

Sin duda alguna, la aparición del GIA alentó una nueva intervención militar. En enero de 1994, después de unos meses de desconcierto, el Ejército se hizo con las riendas del poder[97]. Fue designado presidente Liamin Zerual, antiguo ministro de Defensa, con la misión de convocar elecciones presidenciales para noviembre del año siguiente y cerrar así la crisis institucional. Mientras continuaba la represión contra el terrorismo islamista, en enero de 1995 los grupos de oposición crearon la «Plataforma de Roma», con novedosas propuestas:

> La iniciativa contiene una triple novedad: ser un proyecto conjunto de la oposición política más representativa en la consulta electoral y que agrupa partidos islámicos, laicos, socialdemócratas y, por su extensión, parte de la opinión bereber. Lo que significa que el FIS se muestra capaz de consensuar con partidos políticos no islamistas, a la vez que ya no está solo. La segunda reside en que es una iniciativa

> basada en el acuerdo entre diversas fuerzas, lo que constituye una novedad en la evolución institucional argelina. Y la tercera es que se pone en tela de juicio el papel que debe desempeñar en la salida de la crisis. Es decir, no se trata de crear una agrupación frentepopulista, sino de hacer extensivo el pacto político al poder establecido[98].

Zerual jugó sus cartas con habilidad; si bien no aceptó las iniciativas de la Plataforma, tampoco excluyó de los preparativos electorales a los partidos, con lo que confirmó una imagen de firme liderazgo en la lucha contra la insurgencia armada a la par que dialogante para fortalecer las instituciones estatales. El resultado fue una importante movilización en la fecha de los comicios (acudieron a las urnas casi las tres cuartas partes del censo electoral) y una rotunda victoria –con el 61 por 100 de los votos– de Zerual, único candidato a la presidencia de la república.

Ciertamente, estos primeros años de la década de los noventa liquidaron otro de los mitos fraguados durante la Guerra Fría: una Argelia cohesionada socialmente, defensora del laicismo y avanzadilla de las prácticas socialistas en el mundo árabe. La profunda crisis económica, agravada por la desaparición de la Unión Soviética, y la corrupción extendida por casi todas las instituciones del Estado permitieron una silenciosa pero perseverante labor del islamismo, que fue radicalizándose paulatinamente en el contexto surgido después de 1989. La permanente inestabilidad, nada ajena a este nuevo orden, fue el colofón de aquellos años; desde entonces, consolidado en el poder por una Constitución aprobada a finales de 1996, el régimen de Zerual derivaría hacia un autoritarismo aún mayor.

En el caso de Egipto, la profunda crisis del Estado benefactor fue muy visible en los años ochenta. El gasto público sufrió un recorte severo al reducirse de un 63 a un 43,5 por 100 del PNB entre 1981 y 1990. Descendiendo a aspectos más concretos, en ese mismo decenio el precio de la electricidad subió un 30 por 100 y los gastos sanitarios sufragados por el Estado pasaron de un 5 a un 1,9 por 100 entre 1965 y 1989[99]. Amplias capas sociales quedaron marginadas del desarrollo económico y fueron presa fácil de las

llamadas islamistas. Además, la ambigüedad tanto de Nasser como de Sadat hacia los Hermanos Musulmanes (a pesar de que eran ilegales) abonó el terreno para la expansión no sólo de este movimiento, sino de escisiones todavía más radicales[100]. Cuando, en aquel contexto crítico de finales de la década, el presidente Hosni Mubarak se propuso normalizar la actividad de los Hermanos garantizándoles su participación plena en la vida política del país, estos adquirieron en poco tiempo tanta fuerza que entre 1990 y 1993 el propio presidente volvió a reformar la legislación para apartarlos de la carrera hacia el poder.

Al frente de la república desde 1981, Mubarak era el líder del Partido Nacional Democrático, sucesor de la Unión Socialista Árabe auspiciada por Nasser en 1962. El control del aparato del Estado y el apoyo del Ejército le resultaron cruciales en los años noventa, momento en que procedió a un cambio liberalizador desde las tradicionales posturas socialistas. El Gobierno supo conjugar sabiamente las recomendaciones del FMI y del Banco Mundial con la preservación de una parte del sector público a la vez que aprovechó sus excelentes relaciones con Estados Unidos hasta convertirse en aquella década en uno de los principales destinatarios de la ayuda financiera y militar norteamericana.

De esta forma, Egipto fue el primer país musulmán en iniciar una apertura política y económica, seguida del régimen tunecino de Ben Ali en 1987 y de Benyedid en Argelia al año siguiente. Sin embargo, las transiciones fomentadas por las elites pretendían mantener a estas en los puestos clave de decisión, impidiendo desde el principio la operatividad de las reformas. Si bien es cierto que Mubarak relajó la censura, permitiendo incluso críticas abiertas a la corrupción del régimen, así como la existencia de partidos políticos –eso sí, siempre minoritarios en las convocatorias electorales–, no lo es menos que cuando las cosas no transcurrieron por el camino establecido de antemano por el poder, este reaccionó paralizando el proceso. Así ocurrió en Egipto tanto en 1987 como en 1990, años en los que Mubarak convocó sendos referéndums para disolver la Asamblea del Pueblo y abrir un proceso electoral siempre favorable a su causa. En la segunda de estas ocasiones, la oposición al partido gobernante

boicoteó la convocatoria denunciando su manipulación por medio del poder judicial, vinculado al presidente: con todo, el 29 de noviembre de 1990 el Partido Nacional obtendría casi el 80 por 100 de los votos[101].

El país no se libró de la amenaza fundamentalista: ya en los primeros años noventa se cometieron atentados, primero contra la población extranjera y después contra miembros del Gobierno. Mubarak conjugó la represión con la tolerancia hacia algunas actividades de los Hermanos Musulmanes, pero el tradicional laicismo del régimen se mostró incapaz de atajar el inicio de una progresiva islamización de la sociedad.

Las esperanzas frustradas en el África subsahariana

Los procesos de democratización abiertos tras el final de la Guerra Fría no condujeron a una estabilidad mínimamente duradera en el complejo rompecabezas africano. En la inmensa mayoría de los casos los Gobiernos mantuvieron formas autoritarias de poder, con la sospecha –si no la evidencia– de la corrupción cerniéndose sobre ellos. En realidad no existió una renovación auténtica de las elites, que siguieron estrechamente relacionadas con situaciones de abuso de todo tipo y apoyadas por el estamento militar, salvaguarda del poder siempre y cuando este no menoscabase sus intereses[102]. La dependencia de la ayuda económica externa aumentó de forma ostensible mientras en muchos países del África subsahariana se acentuaron los conflictos entre pueblos, ofreciendo una vez más en la historia reciente una imagen de artificio, de Estados construidos sobre el interés colonial y escasamente articulados.

Al respecto, en repetidas ocasiones a lo largo de su mandato el secretario general de las Naciones Unidas Boutros Boutros-Ghali habló de «Estados fallidos»[103]. Aunque sin definir con claridad lo que este concepto suponía para la ONU, se refería de forma general a aquellos países donde las operaciones de mantenimiento de la paz revestían una dificultad especial debido a la falta de autoridad clara, lo cual impedía a la comunidad internacional encontrar un

interlocutor legítimo para entablar el diálogo. A ello se unían la destrucción de las estructuras económicas y político-institucionales y la ausencia de esperanzas en una sociedad desintegrada y sometida durante años al pillaje, el asesinato y la emigración forzosa. En el continente africano, ejemplos como los de Somalia, Angola y Mozambique respondían perfectamente a esta caracterización.

Podría pensarse que la aparición de los Estados fallidos fue una consecuencia más del final de la Guerra Fría; sin embargo, en nuestra opinión, lo que esta hizo al desaparecer fue simplemente desvelar a los ojos del mundo un fracaso latente durante décadas: el malogrado intento de construir un aparato político-administrativo y económico, proceso ensayado una y otra vez a partir de la descolonización e incapaz de fraguar. Un cierto desinterés de las superpotencias por el África subsahariana ante el cambio en el escenario global provocó la rápida descomposición interna de Estados sometidos prácticamente desde su independencia a enfrentamientos armados internos impulsados o agravados por las apetencias de soviéticos y norteamericanos[104]. Enviando a las elites material armamentístico y generosas ayudas económicas, ni unos ni otros consiguieron más que corromperlas hasta límites insospechados. Surgieron así sistemas de control político y militar en manos no ya de Gobiernos con una legitimidad obtenida por las urnas, sino de grupos de poder que sobrevivieron al final del enfrentamiento de bloques. Estos habían buscado patrimonializar el precario Estado heredero de la descolonización destruyendo las tambaleantes bases de convivencia, militarizando la sociedad y acaparando los recursos económicos hasta colapsar la vida nacional.

El resultado fue, como decíamos, el fracaso del Estado-nación, pero no solamente en el caso extremo de los Estados fallidos, sino también en muchos otros países africanos que mantenían en pie una estructura administrativa elemental, donde el control no había degenerado en guerras intestinas, pero el poder continuaba vinculado a un hombre fuerte o a un grupo étnico. El contexto de la Guerra Fría favoreció la extinción del vínculo colonial directo, pero la debilidad de los Estados surgidos los hizo presa fácil de los afanes intervencionistas de las dos superpotencias a la hora de asegurarse

recursos energéticos y una posición geoestratégica preeminente. Luego, el final del orden internacional nacido después de 1945 contribuyó decisivamente a hacer aún más frágiles las ya de por sí febles estructuras políticas y económicas de numerosos países del África subsahariana como Ruanda, Somalia, Angola, Sudán y Chad.

La gravedad de la situación creada (pensemos en el escenario africano o en los Balcanes) sirvió de acicate a la ONU, cuyo Consejo de Seguridad instó al secretario general a pergeñar un plan de actuación para este tipo de casos. Así, el 17 de junio de 1992 se presentó el documento *Una Agenda para la Paz,* en el cual se destacaban algunas ideas para fortalecer la diplomacia preventiva y los instrumentos al alcance de la Organización con el fin de agilizar el desarme en zonas inestables y utilizar la sanción económica y el envío de efectivos para disuadir a los contendientes. Su meta consistía en cimentar, en aquellos países donde fuera necesario intervenir, un edificio gubernamental que garantizase los derechos fundamentales y de este modo redujese al máximo la posibilidad de problemas en el futuro. Ciertamente, durante los primeros años noventa parecía existir un consenso general de que la ONU ocupara el puesto que le correspondía, según su Carta Fundacional, como marco de referencia ineludible para desactivar los conflictos internacionales, fomentar las buenas prácticas democráticas y garantizar los derechos y libertades por encima de los intereses de cualquier potencia. En esta línea, la «intervención humanitaria» y las «operaciones de pacificación» –denominaciones acuñadas una vez concluida la Guerra Fría– constituyeron mecanismos esperanzadores. Sin embargo, en un breve lapso de tiempo y, sobre todo, tras el fracaso en Angola y Somalia, la propia Organización fue consciente de que las dificultades no sólo no se resolvían sino que, por el contrario, se hacían casi insalvables en el nuevo contexto internacional que se avizoraba[105].

Desde 1990 el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, el Consejo de Europa, la Unión Europea y Estados Unidos harían uso del principio de «condicionalidad política» para enfrentarse, dentro del nuevo orden, a las demandas de ayuda en África. La democracia sin paliativos debería ser el régimen adoptado por los países del

continente si querían obtener ayudas financieras: el respeto de los derechos humanos en general y de las minorías en particular, el pluripartidismo, el funcionamiento transparente de las instituciones: en definitiva, la constatación de un Gobierno representativo constituía, ineludiblemente, la base sobre la que construir el edificio del desarrollo económico. A mediados de diciembre de 1989 se firmó el IV Convenio de Lomé (Togo) entre las Comunidades Europeas y setenta y un países subdesarrollados de África, el Caribe y el Pacífico. El acuerdo, que entraría en vigor el 1 de marzo de 1990, concedía especial importancia al respeto de los derechos humanos como factor primordial en la cooperación. Años más tarde, en la reunión de 1995, la garantía de estos se unió, incluso, a las exigencias de democratización: la aportación europea al despegue económico de estos países exigía en contrapartida Gobiernos comprometidos con el Estado de derecho.

Con un Estado sin normas claras que cumplir al servicio de toda la comunidad, resultaba contraproducente seguir alimentando la voracidad de líderes o grupos de interés cuyo único objetivo en décadas había sido patrimonializar la Administración, favorecidos por el diseño de la estrategia sobre África que Washington y Moscú habían trazado durante la Guerra Fría. Como en el este de Europa, la caída del Muro de Berlín había alentado a las instituciones europeas e internacionales a extender y fortalecer la democracia mediante ayudas técnicas bien gestionadas y dirigidas a sectores clave de los países africanos en vías de transición (policía, sistema tributario, poder judicial). Ciertamente, como recuerda Rodríguez-Piñero, hubo algunos avances:

> En Zambia, el presidente Kenneth Kaunda se vio obligado a convocar elecciones multipartidistas en 1991 por efecto directo de la presión de los donantes occidentales, inusitadamente organizados bajo el liderazgo del Banco Mundial. En Malaui, tras la retirada del Banco Mundial de la mitad de su ayuda financiera en 1992 por las acusaciones de corrupción e ilegitimidad del régimen, Kamuzu Banda se vio obligado a convocar un referéndum sobre la continuidad de su partido único, cuyo resultado negativo llevó a la convocatoria de elecciones multipartidistas en 1994[106].

Sin embargo, las esperanzas de cambio político se frustraron en muchos de los países africanos, donde la existencia del pluripartidismo no llegó a garantizar ni una democracia efectiva ni la estabilidad del sistema. Un caso extremo fue Sudán. En mayo de 1983 John Garang fundó el Ejército y Movimiento de Liberación de los Pueblos de Sudán con el fin de presionar por la vía militar al régimen de Jartum para obligarlo a que el Norte, musulmán, compartiera el poder con el Sur, animista y cristiano. En aquel escenario de Guerra Fría, las fuerzas de Garang obtuvieron el apoyo de Etiopía y, por ende, de la Unión Soviética, frente a la incuestionable ayuda de los Estados árabes del golfo Pérsico al Gobierno constituido. En lucha constante y con la autoridad cada vez más diluida entre grupos tribales y religiosos incapaces de contener el avance de las fuerzas del Sur, el 30 de junio de 1989 triunfó un golpe de Estado dirigido por Omar Hasán Ahmad al-Bachir, cabecilla del denominado «Frente Nacional Islámico»: su máximo ideólogo, Hasan al-Turabi, proponía llevar a cabo una «Revolución Nacional de Salvación» que liquidase cualquier programa secularizador del sistema político sudanés para dotar a este de un carácter plenamente islámico. Aquel mismo día 30 de junio el Gobierno legítimo, ante la incapacidad de derrotar a los rebeldes del Sur, había llegado a un acuerdo con ellos para suspender las leyes islámicas en vigor con el fin de impulsar las negociaciones de paz[107]. Desde entonces hasta nuestros días, la guerra no ha cesado. El enfrentamiento entre el poder islamista instalado en Jartum y las guerrillas cristianas del sur fracturó irremediablemente al país en distintas zonas, controladas a su vez por grupos de distinto origen étnico y religioso. Al año siguiente la Comisión Europea decidió suprimir la ayuda a aquel país.

Con el golpe de 1989 las repercusiones internacionales del conflicto variaron ostensiblemente: lo que había comenzado como un enfrentamiento propio de la Guerra Fría pasaba a convertirse en una contienda en la que se dirimía el triunfo del islamismo militante. Para las nuevas autoridades no cabía ningún tipo de transacción, sino la derrota absoluta de las fuerzas de Garang con el fin de imponer el imperio de la ley coránica en todo el territorio de Sudán.

La guerra se recrudeció, favorecida por la división entre tribus dentro del movimiento, algunas de las cuales llegaron, incluso, a aceptar la ayuda de los islamistas para acabar con el férreo control de Garang. El caos se apoderó definitivamente del sur de Sudán mientras el conflicto adquiría los rasgos característicos de la Posguerra Fría: Irán era el apoyo económico del régimen de Jartum, el cual, a su vez, suministraba armamento a las guerrillas de carácter islamista contrarias a los gobiernos de Uganda y Etiopía[108]. Estos, como reacción, y apoyados por Washington, empezaron en 1993 a financiar el movimiento de Garang. A los ojos de Norteamérica Sudán se presentaba como meca del terrorismo internacional; de allí provenían grupos de fundamentalistas que actuaban en otras regiones inestables del planeta. De esta forma Sudán, que hasta entonces se había limitado a ser un país entre muchos otros, aislado y ajeno a la gran política internacional, se volvió una pesadilla para el orden de Posguerra Fría[109].

Tampoco fructificaron tanto como se esperaba en África los conocidos «Planes de Ajuste Estructural», inspirados en las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial desde los primeros años ochenta[110]. Con ellos se pretendía reducir drásticamente la intervención de las Administraciones estatales en la economía –causa, según los organismos internacionales, de la corrupción generalizada y de la ausencia de estímulos para la inversión– y sentar las bases de una estructura económica equilibrada y con capacidad de crecimiento. Sin embargo, al perder recursos, las redes clientelares generadas en torno a los poderes poscoloniales se resintieron y optaron, en la mayor parte de los casos, por incrementar el grado de violencia, desestabilizando aún más las ya de por sí precarias instituciones. Por si esto fuera poco, el recorte de las ayudas directas e indirectas –mediante precios subvencionados– a la población agravó la depauperada existencia de esta. Ante el derrumbe del Estado, quienes detentaban el poder acabaron convertidos en una facción armada más en busca de medios de supervivencia.

El caso de Somalia es paradigmático. Entre 1988 y 1989 la Unión Soviética de Gorbachov suprimió el apoyo militar y económico al

dictador comunista Siad Barre, incapaz entonces de preservar su sangriento régimen. Si durante la Guerra Fría había sido fácil discernir entre la autoridad establecida y la oposición alzada en armas –al margen de la legitimidad de una u otra– y conocer las causas de índole económica, política o de ambos tipos a la vez que llevaban a los diversos grupos armados a hacer la guerra, el nuevo contexto internacional complicó la perspectiva. La práctica desaparición del Estado generó situaciones caóticas e incontrolables que favorecieron la irrupción y el fortalecimiento de bandas cuyos fines no eran los convencionales hasta entonces. Carentes, algunos de ellos, de objetivos políticos tales como la toma del poder, dedicaron sus acciones al mero pillaje. La población civil quedó expuesta a la arbitrariedad absoluta; ya no estuvo sometida a un régimen tiránico dentro del cual al menos conocía su estrecho margen de acción, sino que en ausencia de autoridad estatal su dignidad humana desapareció arrollada por las conculcaciones flagrantes y cotidianas de sus derechos infligidas por las facciones en lucha.

No todo fue fracaso: el fin de la Guerra Fría alimentó las esperanzas de resolver conflictos endémicos en el África subsahariana, como en efecto ocurrió con la guerra civil en Etiopía y en Angola y con el régimen de *apartheid* sudafricano. Por tanto, el nuevo escenario internacional surtió efectos positivos en países donde los procesos de democratización auspiciados por la ONU infundieron nuevo aliento a un África tan necesitada de él. Sin embargo, pronto iba a desaparecer el espejismo, y la guerra continuaría siendo la condición de vida más habitual para decenas de millones de africanos[111]. De igual forma, poco quedaría del espíritu integrador entre los países del continente, una aspiración simbolizada en la Organización para la Unidad Africana y animada desde la época de las independencias por sus líderes históricos: «A pesar de la existencia de una tradición panafricana y de numerosas organizaciones regionales, esta vía de consolidación de espacios económicos no ha sido considerada»[112]. Ni las autoridades nacionales, ni las instituciones económicas y financieras internacionales, ni los países donantes lograrían mantener una

posición firme e inequívoca respecto a la integración a finales de los años ochenta y principios de los noventa.

Con todo, el cambio de la coyuntura mundial varió la percepción de las grandes potencias respecto a África. Es cierto que, como hemos señalado, el continente perdió interés a los ojos de estas pero, por otra parte, la extensión y gravedad de las matanzas suscitó un rechazo absoluto en la opinión pública, estimuló las corrientes humanitarias, defendidas por las ONG, y obligó a replantear la actuación de los organismos internacionales y de los gobiernos para acabar con la indisimulada connivencia que algunos de los dirigentes políticos y económicos de dichas potencias habían mostrado.

Entre 1990 y 1994 el Consejo de Seguridad autorizó tres intervenciones militares de carácter humanitario en África: Somalia, Liberia y Ruanda. Así, en esta nueva faceta de injerencia, la acción norteamericana en el exterior se desplegó por primera vez no el escenario del golfo Pérsico, ni tampoco en los Balcanes, sino en el Cuerno de África. El Consejo de Seguridad de la ONU, por la Resolución 794 de 3 de diciembre de 1992, dio el visto bueno a la utilización de «todos los medios necesarios» para establecer unos mínimos de seguridad e iniciar así las operaciones de ayuda. Fue la primera vez que la ONU autorizó una intervención armada en un país sin el permiso de sus autoridades[113].

Ante las cámaras de televisión, que transmitieron la operación como si de un espectáculo de masas se tratase, no había pasado una semana cuando, el día 9, aterrizaron en Mogadiscio unidades militares norteamericanas. Así demostraba el mundo su reacción a la evidente descomposición del país iniciada a mediados de los años ochenta, tras la caída del dictador Barre, en el poder desde 1969. El repliegue soviético en África, fruto del Nuevo Pensamiento gorbachoviano, abrió la espita de los enfrentamientos entre grupos armados a cuya cabeza se encontraban «señores de la guerra» con la lucha como forma de vida. El resultado consistió en un territorio arrasado y el empeoramiento de las condiciones de vida en uno de los países más pobres de la Tierra[114].

El panorama de Somalia ofrecía descarnadamente la cara más amarga del final de la Guerra Fría. Ni la Organización de las

Naciones Unidas ni la publicitada intervención de las fuerzas armadas capitaneadas por Estados Unidos lograron, a pesar de sus esfuerzos, pacificar el país. Teniendo en cuenta la enorme disparidad entre las partes contendientes, se produjeron, incluso, hechos insólitos que iban a inducir a una reflexión sobre las nuevas formas de hacer la guerra. Por ejemplo, en octubre de 1993 unidades de elite del ejército estadounidense fracasaron estrepitosamente al tratar de detener a Mohamed Farah Aidid, uno de los más sanguinarios líderes guerrilleros. Además de perderse dos helicópteros, dieciocho soldados norteamericanos resultaron muertos y más de setenta, heridos. El desastroso final del operativo culminó con unas imágenes que recorrieron el mundo mostrando cómo algunos de los cuerpos sin vida eran arrastrados por las polvorientas calles de Mogadiscio.

El fiasco de la intervención fue, por tanto, completo; las fuerzas desplegadas no lograron acabar con las facciones enemigas ni tampoco mejorar las míseras condiciones de la población. Años después, en marzo de 1995, salían del país los últimos cascos azules bajo la protección de soldados italianos y norteamericanos. La hiperpotencia estadounidense no había conseguido satisfacer su afán de convertirse en el gendarme internacional en uno de los puntos más pobres de África, acogido hasta hacía relativamente poco a la protección de la URSS. Como recuerda la película *Black Hawk derribado,* la nítida distinción entre amigo y enemigo, propia de la Guerra Fría, y muchas de las viejas tácticas de combate se habían disuelto o habían perdido su eficacia en numerosas zonas conflictivas del mundo, donde la Administración norteamericana debería a partir de ahora plantearse con más cuidado las «intervenciones humanitarias» si no quería verse sacudida hasta los cimientos por espectáculos como el de Somalia.

Caso singular fue Liberia, puesto que, frente a los países de su entorno, había logrado mantenerse estable desde su independencia en el siglo XIX. Sin embargo, en abril de 1980 el primer golpe de Estado que sufría en su historia elevaba al sargento Samuel Doe a la presidencia de la República. Doe logró hacerse con las riendas del país, aunque los enfrentamientos armados contra una guerrilla cada

vez más fuerte arruinaron su precaria economía a lo largo de la década. La guerra civil acabó con la vida de Doe y llevó al poder a Charles Taylor, líder del Frente Nacional Patriótico de Liberia (NPFL), la principal fuerza guerrillera. Sólo a partir de los primeros meses de 1993, con una acción firme de la Fuerza de Interposición del Oeste Africano encabezada por Nigeria, fue posible empezar a pensar en la paz y en la posterior reconstrucción del país[115].

Durante la primavera de 1994 las matanzas de tutsis por los hutus en Ruanda ocuparon una gran parte de la información internacional y golpearon las conciencias de millones de personas por la espeluznante brutalidad mostrada. Tras el derribo del avión presidencial el 6 de abril de 1994, que produjo la muerte del dictador ruandés Juvénal Habyarimana –en el poder desde 1973– y del jefe de Estado de Burundi, Cyprien Ntaryamira, comenzó el asesinato masivo de la minoría tutsi[116]. En menos de cuatro meses el número de masacrados se acercó al millón de personas, aunque, por supuesto, las cifras no han podido fijarse con precisión[117].

Después de algunos años de cierta estabilidad, favorecida por la economía de explotación cafetera, la corrupción se había instalado en las instituciones del país, como en tantos otros casos del África subsahariana. En Ruanda, además, el empeoramiento de la situación a lo largo de los años ochenta iba a tener particulares repercusiones en tanto en cuanto el presidente Habyarimana, miembro de la mayoría hutu, se había apoyado en las tribus de su etnia localizadas en el norte del país mientras se negaba a aceptar que retornasen del exilio decenas de miles de tutsis, temeroso de que pudieran poner en peligro su posición. En estas circunstancias, a mediados de aquella década grupos de tutsis habían fundado el denominado Frente Patriótico Ruandés (FPR), que hostigaba a las fuerzas armadas del país desde dentro del propio territorio.

Las consecuencias de los acontecimientos de 1989 alcanzaron también al remoto país africano. En aquel otoño cayó el precio del café en los mercados mundiales, y con ello vino la ruina de la economía ruandesa. La creciente conflictividad social y la mayor presión del Frente Patriótico obligaron al régimen a tomar medidas

drásticas: desde comienzos de 1991, a través de la creación de grupos armados perfectamente organizados, procedió a eliminar tanto a tutsis como a hutus opositores[118]. El recrudecimiento del conflicto hizo intervenir a Estados Unidos y Francia, los cuales, bajo el manto legitimador de la Organización para la Unidad Africana y sin las exigencias ideológicas de la Guerra Fría, promovieron las conversaciones de paz entre Habyarimana y el FPR, que habían comenzado el 12 de julio de 1992 –dos días después se alcanzó el alto el fuego– y que culminaron en los Acuerdos de Arusha, firmados en esta localidad tanzana el 3 de agosto de 1993.

El contenido esencial de los acuerdos fijaba un periodo de transición con un gobierno ampliamente representativo de todas las fuerzas en liza para dar paso, en un segundo momento, a un régimen parlamentario democrático[119]. Sin embargo, el asesinato del presidente ruandés desencadenó el genocidio, que los hutus estaban bien preparados para cometer. Ante la pasividad de los líderes mundiales, sólo a finales de junio de 1994 el Consejo de Seguridad de la ONU instó el envío de 2.500 soldados franceses. La capacidad de maniobra de estos y, un mes después, la entrada del Frente Patriótico Ruandés en la capital acabaron por desarticular los restos del régimen y pusieron fin a la masacre. Como era de esperar, las tornas cambiaron radicalmente. Temiendo las represalias, casi dos millones de hutus emprendieron una penosa huida hacia Zaire. Pronto iba a hacerse tristemente célebre el campo de Goma, una macrociudad de refugiados que sobrevivían en penosas condiciones. Aunque menos llamativo, el horror no cesó: se sospecha que el nuevo presidente ruandés Paul Kagame envió al campo fuerzas clandestinas para que se infiltrasen y procediesen a la eliminación de hutus.

El fracaso de la ONU ante un genocidio de dimensiones fuera de lo común puso de manifiesto con crudeza el final de las esperanzas sobre la eficacia de las organizaciones supranacionales a la hora de sustentar el orden internacional de la Posguerra Fría[120]. El Elíseo fue sospechoso de inoperancia en función de sus intereses y de su buena relación con el régimen de Habyarimana. En efecto, Francia preservaba su tradicional área de influencia colonial en África sin

parecer que le afectaran los cambios en el contexto internacional. A comienzos de los años noventa había bases militares francesas en Senegal, Costa de Marfil, Chad, Gabón y la República Centroafricana, entre otros lugares, además de permanecer vigentes más de una veintena de acuerdos militares; en realidad, Francia era el único país europeo con capacidad efectiva para realizar operaciones directas en buena parte del continente africano.

Nuevas perspectivas en el África austral. El régimen de apartheid toca a su fin

En la década de los ochenta variaron ostensiblemente las relaciones de fuerza en el África Austral. En Rodesia-Zimbabue la minoría blanca hubo de resignarse a perder el poder ante la oposición de la población negra, coaligada en un Frente Patriótico. El clima social del país no pudo distenderse debido al autoritarismo creciente de Robert Mugabe, líder emergente que después de 1982 daba los primeros pasos para constituir un partido único y edificar un sistema socialista. A la luz de cómo se estaba desarrollando la ocupación de África del Sudoeste-Namibia, era indudable que Sudáfrica perdía su aliado rodesiano –convertido ahora en enemigo– en un momento especialmente delicado. A nada condujeron las innumerables conversaciones bajo los auspicios de la ONU para llegar a un acuerdo pacífico entre la guerrilla independentista del SWAPO y el Gobierno de Pretoria. En enero de 1983 el territorio de África del Sudoeste pasó al control total de la República de Sudáfrica, pero a mediados de la década la presión internacional –sobre todo, norteamericana– y las pérdidas económicas y demográficas llevaron a Pretoria a reconsiderar su posición.

Por fin, en abril de 1989, bajo la supervisión de las fuerzas de la ONU, se inició el proceso de independencia de Namibia, uno de cuyos hitos fue la celebración de elecciones en el mes de noviembre. El SWAPO ganó con holgura al obtener el 57 por 100 de los votos, aunque, al no conseguir la mayoría aplastante que esperaba, hubo de pactar con otros grupos políticos. Así se cumplió el deseo del

Gobierno sudafricano, que había mantenido una intensa campaña propagandística para denunciar la existencia en territorio angoleño de campos de concentración donde el SWAPO practicaba la tortura y cometía asesinatos. Con todo, la independencia era ya irreversible y se proclamó el 21 de marzo de 1990.

El presidente de Estados Unidos Ronald Reagan fue partidario de sostener la guerrilla de UNITA para continuar socavando el régimen del Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA), de filiación marxista-leninista y en el poder desde la independencia concedida por Lisboa en 1975[121]. La guerra civil había devastado el país, que subsistía con la ayuda de la Unión Soviética y Cuba, ofreciendo al mundo una nueva herida abierta por la Guerra Fría: en 1988, mientras La Habana disponía de unos cincuenta mil soldados desplegados por el territorio del país, Pretoria contaba por su parte con unos diez mil efectivos de apoyo a UNITA[122]. En el nuevo orden mundial el enconamiento de las relaciones entre la guerrilla y el Gobierno provocaba un rechazo cada vez más firme donde confluían por un lado la perspectiva humanitaria y por otro los intereses económicos en la zona. Dentro de este marco, en junio de 1989 el presidente de Angola y el líder de UNITA firmaron en territorio zaireño el alto el fuego. La trascendencia de este hecho vino confirmada por la presencia en el acto de casi una veintena de jefes de Estado africanos, muestra inequívoca de las aspiraciones pacifistas de muchos de los gobernantes del continente.

Aunque el líder guerrillero Jonas Savimbi, fortalecido por el apoyo de Bush, abandonó pronto el marco del acuerdo y la guerra se reanudó, soviéticos y norteamericanos parecían finalmente dispuestos a cerrar el conflicto cuando antes. Bajo su presión se alcanzaron en 1991 los Acuerdos de Bicesse (Portugal), que abrieron paso a la convocatoria de elecciones pluripartidistas. Ganadas por el MPLA, Savimbi alegó fraude electoral y retomó las armas hasta que en 1994 se alcanzó un nuevo acuerdo: el Protocolo de Lusaka (Zambia), firmado el 20 de noviembre, favorecía el desarme de UNITA, la incorporación de los miembros que así lo desearan a las fuerzas armadas angoleñas y la voluntad de democratizar el poder. Para entonces el balance de la guerra se estimaba en unas 400.000

muertes directas, al margen de las provocadas por las carencias de todo tipo. La República de Angola, que en 1993 ingresaba unos 4.000 millones de dólares gracias a la exportación de petróleo, dedicaba la mitad de su presupuesto a la compra de armas, impidiendo que la riqueza de su subsuelo sirviera para alimentar a una población que malvivía de la ayuda internacional[123]. Como dice el profesor Pierre Grosser, «Angola fue menos un Vietnam cubano que un Vietnam sudafricano»[124]. En efecto, la sociedad sudafricana desaprobaba la participación en la guerra –sobre todo, los jóvenes– y el escaso interés por el conflicto se transformó en crítica abierta no sólo a la intervención sino a la militarización del régimen político de Pretoria: como veremos a continuación, el *apartheid* tenía los días contados.

La sangría económica derivada de la intervención de Sudáfrica en el área austral se prolongó también en Mozambique hasta marzo de 1984, cuando Pieter Botha y Samora Machel acordaron que las autoridades mozambiqueñas expulsaran del país y negaran el asilo a los opositores al régimen de Pretoria, mientras este abandonaba la ayuda prestada a la Resistencia Nacional de Mozambique (RENAMO), grupo armado que luchaba en contra de la dictadura de Machel. El aislamiento internacional de su partido, el Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO), y la pérdida constante de territorio ante la RENAMO hicieron que las autoridades marxistas reconsiderasen su posición y aceptaran, ya con la nueva década, el inicio de un diálogo sobre la paz[125]. Financiando –y presionando– a la RENAMO para que pudiera transformarse en una fuerza política y competir en unas futuras elecciones libres, los países occidentales desempeñaron un importante papel en la resolución del conflicto y capitanearon, al mismo tiempo, el ONUMOZ, un proyecto internacional para construir un Estado mozambiqueño capaz de integrar a toda la población después de tres décadas de guerra. Algo semejante a lo ocurrido en Angola puso en jaque todo el proceso: la RENAMO no quiso reconocer su derrota electoral en octubre de 1994. Sin embargo, las serias advertencias de líderes tanto occidentales como africanos sirvieron para apaciguar los ánimos y comenzar la democratización[126].

La intervención armada más o menos constante en Namibia, Angola y Mozambique, las sanciones internacionales y la creciente tensión interna hicieron mella en la economía sudafricana: en 1989 la deuda externa alcanzó los 21.000 millones de dólares. Ello no obstante, el apoyo del electorado blanco a la candidatura del Partido Nacional no se resintió y este, una vez más, venció en los comicios celebrados en septiembre de aquel año. De todas formas, las circunstancias propias del país y el contexto internacional habían variado radicalmente desde la primera victoria del partido en 1948. El nuevo primer ministro, Frederik W. de Klerk, y su gabinete dieron pronto un giro sorprendente a los planteamientos tradicionales de la organización que representaban: en un discurso pronunciado el 2 de febrero de 1990, De Klerk abogó por legalizar a los partidos y sindicatos de la oposición, liberar a los presos políticos e iniciar un diálogo con el Congreso Nacional Africano (CNA), paradigma de la resistencia negra al régimen racista durante las décadas precedentes. Nueve días después, tras veintisiete años, abandonaba la cárcel Nelson Mandela, el líder carismático del Congreso[127].

A pesar del lastre causado por tan larga etapa de segregación racial, la buena voluntad de las partes facilitó el rápido entendimiento. En agosto de ese mismo año de 1990, gracias a los recientes Acuerdos de Pretoria, el CNA deponía las armas a la espera de los cambios prometidos por De Klerk. Las leyes anti-*apartheid* comenzaron a aprobarse en el Parlamento mientras la tensión crecía ahora en el seno de la comunidad negra, sobre todo entre los zulúes agrupados en la organización Inkhata y los partidarios del Congreso: en Natal las luchas provocaron una auténtica masacre.

La creación de Namibia también sirvió para mejorar las relaciones externas del régimen de Pretoria y liquidar un asunto espinoso que, además, generaba cuantiosos gastos militares. Por fin, en abril de 1989 y con la supervisión de fuerzas de la ONU, comenzó el proceso de independencia de Namibia, cuyo principal hito estuvo en la celebración de elecciones en el mes de noviembre. Tres meses después quedó aprobado un texto constitucional que, al menos en teoría, consolidaba los principios democráticos de la nueva república. Con todo, el peso de Pretoria se mantendría en el sector económico

gracias a la participación del capital sudafricano en las empresas dedicadas a la explotación minera[128].

La independencia de Namibia en abril de 1989, la liberalización de la economía de Zimbabue en 1990 y los aires de reconciliación entre las fuerzas enfrentadas en Mozambique y Angola constituyeron jalones importantes en el camino hacia la normalización política y económica del sur del continente africano. De Klerk convocó elecciones multirraciales para el 27 de abril de 1994. La victoria del Congreso Nacional Africano y el acceso de Nelson Mandela al poder hicieron pensar en una convulsión social a gran escala que finalmente, gracias a la moderación de la gran mayoría de las fuerzas políticas, no llegó a producirse. Con la nueva Constitución, aprobada por consenso a principios de mayo de 1996, culminaba el diálogo entre partes hasta hacía poco irreconciliables, ofreciendo así al nuevo orden de la Posguerra Fría una solución pacífica digna de encomio.

Hacia la normalidad democrática en América Latina

> La crisis alcanzó plenamente a estos países como consecuencia de la quiebra de ambos apoyos: la elevación de los tipos de interés aplicados a la deuda externa y el fin del ciclo desarrollista basado en las exportaciones. Los Estados se endeudaron masivamente para pagar los créditos antes suscritos a bajo interés y para reflotar los créditos privados de empresas que eran nacionalizadas ante su declaración de quiebra. El nivel de endeudamiento llegó hasta el punto de que los Estados se vieron incapaces de pagar los intereses y mucho menos amortizarlos, por lo que el bloqueo económico fue total. La crisis de los años ochenta provocó un estancamiento generalizado, disparó las tasas de inflación e hizo caer la *renta per capita* de la región un 8,3 por 100 entre 1980 y 1990. Razones suficientes para que esta gran depresión haya sido denominada la «década perdida»[129].

El resumen realizado por el profesor Isidro Sepúlveda describe perfectamente la situación del continente americano al sur del río Grande tras producirse el colapso soviético y recomponerse el entramado de relaciones internacionales. Los responsables de estos países debían centrar la atención en reducir el desmesurado volumen de la deuda exterior, herencia de la «década perdida», si querían afrontar el futuro con ciertas garantías de éxito. Por si ello no fuera suficiente, el endeudamiento no había servido para amortiguar las duras condiciones de vida de la mayoría de la población, más bien al contrario, ya que la pobreza había aumentado. Finalizadas con estrepitoso fracaso las utopías colectivistas, las políticas de ajuste económico y las prácticas liberalizadoras comenzaron a extenderse por las sedes gubernamentales mientras el final de las sangrientas luchas entre las guerrillas y las fuerzas de la autoridad legítima, en Centroamérica, y los procesos de democratización, en el Cono Sur, abrían una puerta a la esperanza en los umbrales de la nueva década.

México, por la vía del neoliberalismo

Los primeros síntomas de cambio político en México tuvieron lugar en 1989: en las elecciones de la Baja California el candidato del Partido de Acción Nacional (PAN), Ernesto Ruffo Appel, venció al designado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI)[130]. Tan

sólo un año antes el nuevo presidente del país, Carlos Salinas de Gortari, había enfilado la política económica de su mandato por la senda neoliberal pese a haber sido elegido por el PRI. Después de todo, para esta formación, en el poder desde los años veinte, no resultó muy difícil justificar esta nueva orientación: es indiscutible que el Gobierno de Salinas mostró una extraordinaria habilidad tanto para operar dentro de las poderosas facciones de su partido como para alcanzar acuerdos con el opositor PAN, todo ello con el objetivo de promover la liberalización de la economía y la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado junto a Canadá y Estados Unidos y con efecto a partir del 1 de enero de 1994[131]. Lo mismo hizo con Colombia y Venezuela, y no menos significativos fueron algunos gestos del presidente Salinas en el terreno internacional tales como la normalización de los lazos con el Vaticano al restablecer las relaciones diplomáticas bilaterales.

El nuevo clima se plasmó en la entrevista que Bush y Salinas mantuvieron a finales de 1989. Los medios de comunicación hablaron del «espíritu de Houston» (aludiendo a la ciudad en que tuvo lugar la reunión) y de las posibilidades de un salto cualitativo en la colaboración política entre ambos vecinos. De hecho, el encuentro resultó decisivo, precisamente, para el futuro del TLCAN, un acuerdo de integración superador del libre comercio al incorporar materias tales como servicios financieros e inversiones[132]. Lo definían su carácter intergubernamental –de ahí que el entendimiento entre los jefes del ejecutivo fuera indispensable para que funcionara bien– y sus objetivos de seguridad en las fronteras; a los ojos de Salinas, además, representaba una oportunidad para que su influencia positiva en la economía mexicana potenciase la política de reformas por él emprendida. Con unos seis billones de dólares de producción conjunta y unos trescientos setenta millones de personas, el TLCAN se convirtió en el mayor bloque comercial del mundo[133].

Salinas de Gortari fue un presidente popular, que recorrió México buscando el contacto directo con la población. Al margen de los reproches a su forma de entender la política –cercana, según algunas voces, al más rancio populismo–, lo cierto es que llevó a

cabo reformas de calado para asegurar la limpieza del proceso electoral y dotar de mecanismos que garantizasen la solvencia del sistema bancario. Por otra parte, el presidente derivó importantes recursos dentro del Programa Nacional de Solidaridad para apoyar las acciones del cooperativismo rural y mejorar la situación del campesinado.

Pese a todos los esfuerzos, y como en otros ámbitos latinoamericanos, la corrupción y el gasto público exagerado –sobre todo durante el año anterior a las elecciones, como medio de atraer a los votantes– impidieron la efectividad de las medidas que se pretendía introducir, y aunque se fortalecieron la estructura económica y la capacidad exportadora del país, las enormes desigualdades regionales se mantuvieron e incluso aumentaron. De hecho, la miseria extrema de algunas regiones conduciría al resurgimiento de la guerrilla: con un exitoso golpe de efecto, el mismo día que entraba en vigor el TLCAN el autodenominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) emprendió una acción subversiva en el estado de Chiapas, uno de los más pobres del país, y logró tomar cuatro municipios y asesinar a dos dirigentes del PRI local. A los ojos del mundo quedaban expuestas las extremas desigualdades sociales existentes en un país que aspiraba a desempeñar un papel político y económico relevante en todo el continente.

Aun cuando le faltó una acción bélica continuada, el Ejército Zapatista representó un cambio importante dentro de los movimientos revolucionarios de la inmediata Posguerra Fría. Ante el derrumbe del Muro y el descrédito del socialismo real, el discurso indigenista sustituyó en gran parte los presupuestos ideológicos del internacionalismo comunista como manifestación de rechazo al sistema capitalista. En esta fase de sustitución de legitimidades, las vagas pero efectistas propuestas del subcomandante Marcos, el líder del EZLN, estaban llamadas a tener un gran eco entre los desorientados intelectuales de Occidente y más aún en los grupos revolucionarios de América Latina, en busca de una nueva identidad menos comprometida con la extinta Unión Soviética. Las negociaciones entre el EZLN y el Comisionado de Paz designado por

el Gobierno no fructificaron y el problema continuaba pendiente de resolución cuando, en diciembre de 1994, Ernesto Zedillo accedió a la presidencia de la República, desde donde continuó la firme defensa de la liberalización económica y del TLCAN. Aunque su actitud fue más comprensiva y dialogante y el alto el fuego parecía invitar al acuerdo, el nuevo Gobierno ordenó la detención del subcomandante Marcos, nombre bajo el cual se ocultaba Sebastián Guillén Vicente[134]. El conflicto siguió abierto, pero la situación se recondujo –al menos en parte– con los Acuerdos de San Andrés de Larrainzar (en el propio estado de Chiapas), de febrero de 1996.

A pesar de la espectacular irrupción de los zapatistas y del deterioro de la imagen internacional del Gobierno mexicano, la sustancial ayuda de Estados Unidos y, en menor medida, del FMI, permitió que la economía mexicana enderezase su rumbo rápidamente, si bien la crisis de 1994-1995 y su «efecto tequila» fueron un primer aviso para navegantes de que el sistema capitalista triunfante tras el enfrentamiento de la Guerra Fría continuaba sometido a constantes vaivenes. La otra cara de la moneda fue la aprobación, en 1996, de una nueva legislación electoral después de que las principales fuerzas políticas alcanzasen un acuerdo para modernizar y democratizar el sistema; la ley contemplaba la autonomía del órgano electoral respecto del Gobierno y controlaba la financiación de los partidos.

El final pactado de las guerrillas en Centroamérica

Si la disolución de la URSS condicionó el devenir de las organizaciones de izquierda en Latinoamérica, empezando por la pérdida de pulso de los partidos comunistas de Chile y de Uruguay –tan relevantes en el pasado–, todavía mayor impacto internacional tuvo el declive de las guerrillas, santo y seña de los movimientos revolucionarios en todo el mundo desde que, décadas antes, Fidel Castro y Ernesto «Che» Guevara emprendieran sus primeras acciones hasta que, en 1991, las tropas soviéticas se retiraran de Cuba[135]. Poco después desaparecía en El Salvador el Frente

Farabundo Martí de Liberación Nacional, uno de los más pugnaces grupos guerrilleros, y lo hacía no mediante la victoria por las armas, como tantos habían vaticinado, sino en la mesa de negociaciones tras avenirse a firmar un acuerdo de paz. Alfredo Cristiani había accedido a la presidencia del país tras las elecciones de marzo de 1989 con una voluntad decidida de distender las relaciones con la guerrilla. El mandatario apostó en sus discursos públicos por entablar el diálogo lo antes posible, lo cual suscitó una actitud favorable de la guerrilla a la vez que una oposición rotunda del Ejército[136]. El Frente era consciente de que su estrategia de lucha armada para la toma del poder era una vía muerta. No podía contar con la ayuda soviética, el modelo sandinista se desvanecía y la población salvadoreña, harta de sufrir las consecuencias de un enfrentamiento fratricida, llevaba tiempo lejos de las quimeras revolucionarias y prefería una alternativa pacífica. La guerra había provocado unos ochenta mil muertos.

Con el apoyo del resto de presidentes de América Central y de otros Gobiernos como los de España, México y Colombia, las negociaciones para la paz se iniciaron en abril de 1990, mientras el empresariado salvadoreño presionaba para lograr cuanto antes una pacificación real en la que se pudiera reconducir la economía. Finalmente, en enero de 1992, las conversaciones concluyeron satisfactoriamente con el Acuerdo de Chapultepec (México). También en Guatemala firmaron la paz, en 1991, los movimientos guerrilleros y el Gobierno, aunque la estabilidad política no llegó al país y la tendencia autoritaria de Jorge Serrano, elegido presidente ese mismo año, llevó a suspender la Constitución y dio paso a una serie de golpes militares que reactivaron alguno de los grupos guerrilleros.

En la misma región centroamericana, una de las graves deficiencias del flamante régimen proclamado en 1979 por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) tras vencer por las armas a las fuerzas somocistas fue definir su prioridad tomando los intereses del Frente como valor absoluto en vez de favorecer una verdadera transición a la democracia; por si esto fuera poco, la actitud de Washington, radicalmente contraria a los postulados defendidos por los sandinistas, alimentó la entrada de Nicaragua en la órbita

soviética. Tanto la URSS como la República Democrática de Alemania y Cuba arroparon a los dirigentes del país en su afán por consolidar un Estado socialista en Centroamérica. Aprovechando el odio popular al Gobierno de Anastasio Somoza, los nuevos dueños de Nicaragua procedieron a juzgar, encarcelar y eliminar no sólo a conocidos partidarios del antiguo dictador, sino también a miles de posibles rivales políticos, acusados de connivencia con aquel. Además, en los años inmediatos unas doscientas mil personas fueron transferidas de su domicilio y lugar de trabajo por su supuesta ayuda a la resistencia armada que había surgido en contra del poder omnímodo del FSLN.

El aumento constante de los efectivos del ejército y de la policía, controlados por el Frente, parecía completamente desproporcionado para las dimensiones del país; el argumento de las autoridades se basaba en una previsible invasión de Estados Unidos. De hecho, el Gobierno norteamericano no había permanecido impasible. A tenor de la declaración condenatoria de la Corte Internacional de junio de 1986, Washington había violado el espacio aéreo nicaragüense en numerosas ocasiones, suministrado ayuda militar y financiera a la «Contra» e intentado asfixiar la economía del país mediante el embargo, prácticas todas ellas reprobadas por dicho tribunal[137]. La justificación norteamericana de esta política se encuadraba en la conocida y persistente retórica de la lucha por la democracia y las libertades frente a un régimen terrorista que obtenía buena parte de sus recursos gracias al tráfico de drogas.

En 1988 el fracaso de la centralización económica en Nicaragua era palmario[138]. Los sandinistas, que ya habían recurrido a préstamos internacionales, se vieron obligados a devaluar la moneda y proceder a una cierta liberalización de los precios, medidas que repercutieron negativamente en una población ya de por sí empobrecida (al año siguiente los gastos sociales iban a ser recortados todavía más). Las circunstancias eran tan críticas que la dirección del FSLN hubo de reconsiderar algunas de las posiciones que hasta entonces había mantenido como si fueran intocables. En aquel año de 1988 el presidente Daniel Ortega se avino a negociar directamente con la «Contra», a la que prometió el perdón y el derecho a participar en la política nacional si deponía las armas. El

cambio de actitud era drástico y los motivos, evidentes. En primer término, Gorbachov prefería solucionar por la vía política y no militar en los conflictos exteriores en los que la URSS estaba presente. Por otra parte, los índices económicos de Nicaragua continuaban deteriorándose mientras la inflación se desbocaba y el descontento campesino crecía por momentos. En tercer lugar, los demás países centroamericanos estaban convencidos de que el sandinismo impedía que la situación mejorase en el área. En consecuencia, los Gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras presionaron al de Nicaragua para asumir entre todos un compromiso que impeliese a esta a democratizarse y, con ello, a traer la paz, propuesta que fructificaría en 1987 en el Acuerdo de Esquipulas (Guatemala) firmado por estos cinco países.

Sin duda, la derrota electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional, golpeado su régimen por una profunda crisis económica y por una oposición armada que contaba con el apoyo de Estados Unidos, marcó a comienzos de los años noventa el final del sueño revolucionario en América Latina. El Frente moderó su estrategia revolucionaria y aceptó la alternancia en el poder: con la llegada de Violeta Chamorro a la presidencia la implantación del socialismo por la vía de la insurgencia armada pasaba a la historia. Chamorro había ganado las elecciones en febrero de 1990, y con ello también la guerra había llegado a su fin. Ese verano los «contras» comenzaron a desarmarse; atrás quedaba la muerte de unas treinta mil personas. La nueva dirigente del país inició su mandato con gran cautela, abogando por un diálogo continuo con el Frente que iba, incluso, a generarle conflictos con las autoridades de Estados Unidos hasta el punto de que en 1992 estas paralizarían las ayudas económicas al país[139].

En definitiva, el final de la Guerra Fría constituyó el contexto preciso para concluir con las luchas intestinas que asolaban Centroamérica[140], y la integración social y política de las guerrillas ayudó a suturar las heridas abiertas durante décadas de enfrentamientos. La inestabilidad institucional y los graves problemas de unas economías de alcance limitado, además de empobrecidas, golpearon a los Gobiernos democráticamente

elegidos. A la guerrilla sucedió la rémora del narcotráfico –cuyo radio de influencia se vio ampliado por la falta de perspectivas de una gran parte de la población– y la violencia manifestó su oscura realidad por otros medios. Sin embargo, a pesar de estos obstáculos, las autoridades fortalecieron las relaciones diplomáticas y comerciales en la región, aprovechando de este modo los beneficios de un nuevo mundo globalizado[141].

En el Caribe, la imagen de aislamiento de Cuba en el nuevo escenario internacional quedó patente en la reunión del Consejo de Ayuda Económica Mutua celebrada en Sofía en enero de 1990. La absoluta dependencia económica de la URSS pasaba factura al régimen de Fidel Castro. Aunque en abril del año anterior Gorbachov había viajado al país caribeño, dando así a entender las magníficas relaciones entre ambos países, la impermeabilidad cubana a las reformas propuestas por la perestroika enojaban al secretario general del PCUS, que había dejado clara a Castro su intención de eliminar los precios políticos en los intercambios comerciales mutuos. La disolución de la Unión Soviética golpeó aún más la ya de por sí maltrecha economía cubana, que entre 1992 y 1993 experimentó una crisis sin precedentes. A ello contribuía la actitud de Estados Unidos, mucho más flexible en otros antiguos ámbitos de influencia soviética.

Una incierta estabilidad en Sudamérica

El año 1989 resultó un hito en el camino hacia la democratización plena de Brasil. La Constitución aprobada en 1988 abrió las puertas a la convocatoria electoral para noviembre del año siguiente, punto final de las largas décadas de autoritarismo e injerencia del Ejército, cuyas consecuencias habían sido, como en otros países de su entorno, la fragilidad de las instituciones y la crisis económica. Sin embargo, y también en consonancia con otros procesos democratizadores, el nuevo sistema se vio pronto sacudido por casos de corrupción: las elecciones celebradas el 17 de diciembre de 1989 auparon a la presidencia a Fernando Collor de Mello, líder de una

pequeña organización fundada poco tiempo antes, el Partido de Reconstrucción Nacional. Su juvenil presencia y el apoyo de los sectores de centroderecha, temerosos de una posible victoria del dirigente del Partido de los Trabajadores Luiz Inácio Lula da Silva, le valieron un triunfo que luego sería refrendado en las elecciones estatales[142]. Como en algunos de los países vecinos, su política siguió las propuestas neoliberales, comenzando por las privatizaciones del enorme conglomerado de empresas de propiedad estatal y tratando por todos los medios de controlar la inflación. Inmediatamente se desataron, azuzadas por la prensa, las sospechas de corrupción y tráfico de influencias, que pusieron en tela de juicio la limpieza de su elección. Algunas evidencias llevaron al Congreso a iniciar una investigación y en septiembre de 1992 Collor fue apartado de su cargo, que pasó a las manos del vicepresidente Itamar Franco.

Con una inflación del 6.000 por 100 en 1993, el Gobierno de Franco nombró ministro de Hacienda al sociólogo Fernando Henrique Cardoso, conocido internacionalmente desde finales de los años sesenta por ser uno de los teóricos marxistas más influyentes en Latinoamérica. Cardoso había evolucionado hacia posiciones mucho más moderadas: en 1987 había sido uno de los miembros fundadores del Partido Socialdemócrata y ahora, en su nuevo puesto, tenía la oportunidad de poner en práctica sus nuevos planteamientos, cada vez más cercanos a las tesis neoliberales. El Plan «Real» introdujo una nueva moneda homónima, de paridad con el dólar, con el fin de cortar de raíz el proceso inflacionista y poner las bases para privatizar los vastos entramados industriales y energéticos propiedad del Estado. Indudablemente, sus medidas contribuyeron a estabilizar la economía, además de atraer capital foráneo. El vertiginoso éxito impulsó a Cardoso a ganar con holgura las elecciones presidenciales de 1994 y a tratar de satisfacer, desde enero de 1995, las grandes expectativas que había generado tanto dentro como fuera del país.

Las elecciones presidenciales de 1990 en Perú iniciaron un cambio de rumbo cuyas consecuencias pudieron verse a lo largo de toda la

década. La inmensa mayoría de los analistas internacionales erró al predecir la victoria del candidato Mario Vargas Llosa, a cuyo atractivo personal se unía el reconocimiento internacional como escritor y el extenso apoyo concitado en las cancillerías occidentales. Sin embargo, la política desarrollada por Alberto Fujimori, triunfador en aquella convocatoria sin haber presentado un programa concreto de actuación, despertó el interés de Estados Unidos[143]. Fujimori dejó la economía en manos de especialistas de convicciones liberales asesorados por el Fondo Monetario Internacional a la vez que emprendía una exitosa campaña de acoso y derribo a una de las guerrillas más sangrientas del continente, Sendero Luminoso. Las imágenes de Abigael Guzmán, el histórico líder terrorista, detenido y en prisión junto con parte de la plana mayor de su banda, recorrieron el mundo[144].

Sin embargo, si modélico fue el golpe a Sendero Luminoso para el futuro de los movimientos armados de extrema izquierda del continente, no lo fue menos la deriva autoritaria del Gobierno de Fujimori, un fenómeno que también se repetía en otros países del entorno. En abril de 1992, amparándose en las trabas que la oposición ponía a sus reformas, ordenó la disolución del Congreso; pocos meses después estableció un Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional y procedió a elaborar una Constitución hecha a su medida y que sería aprobada en octubre de 1993. Sus primeros éxitos en el campo de la economía y, como acabamos de señalar, sus espectaculares golpes a Sendero Luminoso, hábilmente utilizados por la propaganda oficial, lo convirtieron en un personaje extraordinariamente popular a pesar del crecimiento imparable de la pobreza. La extrema facilidad con que se permitió la entrada de capital foráneo casi desmanteló la endeble industria peruana, lo cual, unido a los bajos sueldos y al agravamiento de la corrupción en todos los niveles, minó la estabilidad del sistema económico. La fuerza renovadora con que Fujimori había inaugurado su mandato se esfumó en unos meses y el asentamiento firme de la democracia en Perú tuvo que seguir esperando.

La década de los noventa, letal para las organizaciones terroristas, coincidía, por tanto, con la puesta en práctica de programas económicos neoliberales en lo que se entendía que debía ser la transformación definitiva de las estructuras socioeconómicas de América Latina. Asimismo, los primeros años noventa vieron también el fin del sistema tradicional de partidos implantado, como en Perú, en muchos de estos países. En Colombia desapareció el bipartidismo sin que César Gaviria, líder del Partido Liberal y presidente de la República desde mayo de 1990, pudiera poner coto al narcotráfico y a la guerrilla –fenómenos estrechamente relacionados– a pesar de su vehemente apuesta por el diálogo.

Tampoco salieron bien parados los principales partidos políticos de Venezuela tras el segundo mandato del presidente Carlos Andrés Pérez, que transcurrió entre 1989 y 1993. En febrero de aquel año el presidente anunció un «gran viraje», previsto mediante un programa de austeridad presupuestaria y liberalización de la economía. El Gobierno no sólo terminó con la tradicional política de subvencionar los productos de primera necesidad con los beneficios obtenidos de la venta del petróleo, sino que perdió interés en sectores básicos para la población tales como la sanidad y la educación mientras crecía la inseguridad, sobre todo en la periferia de las grandes ciudades[145]. A finales de mes la respuesta popular a los planteamientos gubernamentales era un auténtico clamor. Durante veinte días tanto Caracas como otras ciudades sufrieron revueltas que, reprimidas por el ejército, costaron la vida de cientos de personas. La política neoliberal no era bien recibida en uno de los países hasta el momento más estables institucionalmente. La asfixiante deuda externa –de unos 20.000 millones de dólares por aquellas fechas– no pudo encauzarse ni siquiera con el seguimiento de los planes trazados por el Fondo Monetario Internacional. La pérdida de poder adquisitivo de los venezolanos, la inflación incontrolada, la corrupción y el descontento social salpicaron el periodo de levantamientos civiles y conatos de golpe de Estado, de graves consecuencias para el futuro del país.

Nuevos aires políticos en el Cono Sur

Después del fin de la dictadura militar y el subsiguiente proceso de transición, la cita electoral de 1987 supuso un nuevo hito en la consolidación democrática de Argentina al marcar el rumbo hacia la alternativa política. La Unión Cívica Radical no consiguió conservar la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados debido al empuje peronista de nueva generación, empeñado en despojar al Partido Justicialista de algunos rasgos anacrónicos como su excesiva vinculación a los sindicatos.

Durante los últimos años de la presidencia de Raúl Alfonsín el Gobierno intentó reducir la elevada deuda externa, así como controlar la inflación mediante la puesta en marcha de los denominados «Plan Austral» y «Plan Primavera», que no lograron los objetivos deseados de estabilidad financiera. Alfonsín había optado por fortalecer los lazos con la Europa comunitaria –muy especialmente con España– esperando mejorar los intercambios comerciales y renegociar la deuda. Por otro lado, tampoco había descuidado la relación con sus vecinos, sobre todo con Uruguay y Brasil, en previsión de un proceso de integración regional que, una vez fortalecidas las instituciones democráticas en la zona, contribuyera a desarrollar las economías nacionales.

Dos años después de las legislativas de 1987 los comicios dieron la razón a quienes desde tiempo atrás vaticinaban el final del ciclo del radicalismo en el poder. Sin duda, el agravamiento de la crisis económica desde febrero de 1989 mostró con crudeza la imposibilidad del Gobierno de enderezar la situación. Aquel año resultó catastrófico para Argentina; mimado por la prensa internacional como la figura clave de la transición a la democracia, Alfonsín había perdido toda capacidad de acción. La inflación desorbitada parecía acompañar a la descomunal deuda externa, que ascendía a unos 65.000 millones de dólares. La desastrosa gestión de los radicales, puesta de manifiesto en multitud de huelgas, manifestaciones e, incluso, conatos de golpe de Estado, servía en bandeja la victoria al partido peronista[146]. El 14 de mayo, después de un verano marcado por nuevos fracasos económicos del

ejecutivo, el justicialismo jugó su baza más populista para desbancar a la Unión Cívica. El tándem Menem-Duhalde obtuvo el 47,4 por 100 de los votos en las presidenciales (con una elevada participación, el 85,3 por 100) frente al 32,4 por 100 de Angeloz-Casella[147].

Tras las palabras era necesaria la acción. Después del paso de varios ministros por la cartera de Economía, el artífice de la tan deseada estabilidad fue Domingo Cavallo, aunque el giro ideológico respecto del peronismo tradicional era evidente[148]: las privatizaciones de empresas públicas y la reforma de la burocracia del Estado se vieron acompañadas de una política monetaria de paridad entre el dólar americano y el peso, así como del apoyo al marco de cooperación regional con la incorporación de Argentina a Mercosur. La inflación, que había llegado al 200 por 100 mensual en 1989, se vio primero frenada para quedar bajo control a mediados de los noventa[149].

Como parecía lógico, las elecciones legislativas de 1993 dieron el triunfo al peronismo, y tras el pacto con los radicales de Alfonsín para llevar a cabo la reforma electoral, de nuevo venció Menem en 1995 con casi el 50 por 100 de los votos válidos. El año 1989 fue, pues, un jalón en la historia reciente de Argentina ya que desde entonces los electores pasaron factura a una Unión Cívica Radical castigada por su falta de criterio, lastrada por los conflictos internos y sin capacidad de reacción. En las citadas elecciones de 1995 la UCR, el gran partido de la transición democrática, pasó a ocupar el tercer puesto en las preferencias de los argentinos con tan sólo el 17 por 100 de los votos, por detrás del 29,2 por 100 del Frente por un País Solidario (FREPASO), una coalición de fuerzas democristianas y socialistas moderadas fundada en diciembre del año anterior. Tras esta victoria continuó la tendencia de Menem a fortalecer el presidencialismo con tintes populistas mientras los escándalos de corrupción comenzaban a salpicarle hasta convertirse en la nota dominante de su segundo mandato. Sin duda, una de sus actuaciones más criticadas iba a ser la amnistía general concedida en octubre de 1989 después de reiteradas presiones de la institución militar. Como consecuencia de las leyes de «Punto Final» y «Obediencia Debida», en diciembre de 1990 quedaron exonerados

de culpa algunos de los integrantes de las Juntas Militares de la dictadura, entre ellos, el almirante Massera y los generales Videla y Viola[150].

En Uruguay, el retorno de la democracia llevó a la presidencia de la república a Julio María Sanguinetti, líder del Partido Colorado[151]. Sanguinetti ejerció su mandato entre 1985 y 1990, en un contexto muy difícil para un Gobierno cuya primera misión consistía en dotar de efectividad a las instituciones democráticas mientras el Ejército permanecía al acecho y la izquierda convocaba una y otra vez a la huelga contra el deterioro de la situación económica[152]. Sin embargo, el partido en el poder no estuvo solo: el apoyo del Partido Nacional, también con una larga trayectoria y por aquel entonces en la oposición, supuso cierto alivio. Así fue posible aprobar una amnistía a los implicados en el régimen militar, pero la medida terminó por desbordar al ejecutivo. La movilización del izquierdista Frente Amplio, espoleado por una ley tan impopular, condujo al Gobierno a una solución singular: la convocatoria de un referéndum sobre la cuestión, cuyos resultados le fueron favorables. Con todo, el tradicional bipartidismo tenía los días contados. Tras las elecciones de 1989, favorecido por las disensiones de los colorados, el candidato del Partido Nacional Luis Alberto Lacalle se alzó con el triunfo en la presidencia, pero la alcaldía de Montevideo –donde se concentran casi la mitad de la población y la mayor parte de su tejido económico– pasó al Frente Amplio, el cual, pilotado por Tabaré Vázquez, había hecho su perestroika particular presentándose como una fuerza moderada y desbaratando así la práctica seguida por los dos partidos tradicionales de identificarlo con la izquierda radical.

El autoritarismo continuó siendo el rasgo característico de la vida política en Paraguay después de las largas décadas de Alfredo Stroessner en el poder. Su destitución no vendría de manos de un proceso de transición, sino de un golpe de Estado protagonizado el 2 de febrero de 1989 por un hombre hasta entonces de su confianza, el general Andrés Rodríguez. Sus declaraciones a favor de un sistema liberal, defensor de los derechos humanos y plenamente democrático no pasaron de la pura retórica ya que, en realidad,

Rodríguez no permitió la organización de grupos opositores. Así aseguró la victoria del Partido Colorado, cuya connivencia con el régimen militar y la Administración del Estado era ya tradicional.

En Chile, las medidas económicas de corte neoliberal aplicadas por los gobiernos militares de Augusto Pinochet fueron avaladas por Milton Friedman, que en sus conferencias comenzó a hablar del «milagro chileno». Ciertamente, la constricción del gasto público, los procesos privatizadores y la política de incentivos a las empresas mediante la reducción de impuestos rindieron excelentes resultados hasta el punto de que tras el mes de marzo de 1990, cuando Pinochet abandonó la presidencia del país y ocupó su lugar Patricio Aylwin, apenas hubo cambios sustanciales al respecto. El crecimiento del PIB a lo largo de los años ochenta y primeros noventa hizo despegar la economía chilena muy por encima del resto de países sudamericanos. No estaba lejos de la realidad el optimismo con que Javier Pinedo percibía el país en los primeros años de la década:

> Hacia mediados de 1991 Chile vivía un estado de ánimo que se puede caracterizar como positivo. La transición del gobierno militar al democrático se desarrollaba con éxito y seguía lo previsto. Se mantenían los índices económicos heredados de los uniformados y al mismo tiempo (aunque con prudencia) se avanzaba en resolver oscuros aspectos relativos a las violaciones de los derechos humanos [...]. En este contexto, fue surgiendo una imagen de país como moderno y confiable. Un país posible[153].

Aylwin había vencido en las elecciones celebradas el 15 de diciembre de 1989 a la cabeza de la Concertación de Partidos por la Democracia, una amplia coalición de fuerzas políticas moderadas entre las que figuraban la Democracia Cristiana y el Partido Socialista. La Constitución de Pinochet, todavía en vigor, hacía de la presidencia del país una institución fuerte, aunque en la práctica le sustraía el control del ejército. Aylwin fue muy hábil en su relación con el dictador –que mantenía el rango de comandante supremo y senador de la república– y ello le permitió emprender la senda reformista con aún mayores garantías de éxito.

La creación, el 24 de abril de 1990, de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, auspiciada por el presidente Aylwin, tenía

un reto claro: restañar las heridas abiertas en la sociedad chilena, muy dividida por los años de dictadura. A fin de conocer hasta qué punto se habían violado los derechos humanos durante aquellos años, la Comisión debía indagar en la represión desencadenada tras instalarse Pinochet en el poder[154]. Presidida por el abogado Raúl Rettig y compuesta por otros siete miembros, su investigación abarcaba las muertes y desapariciones ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. En sus conclusiones finales el Informe Rettig enumeraba las víctimas –2.279 muertos o desaparecidos– y colocaba en el centro del poder represivo a la Policía Política, la DINA, considerada como una institución que había actuado por encima de la ley. Poco después, en enero de 1992, el Gobierno estableció una Corporación Nacional de Reparación y Conciliación con el fin de dar contenido práctico a las recomendaciones de la Comisión y satisfacer, al menos económicamente, a las familias de los muertos y desaparecidos y a quienes habían sido perseguidos por la dictadura.

Por otra parte, la política económica de Aylwin buscó matizar el programa económico liberal para alcanzar un «crecimiento con equidad», como decían las campañas gubernamentales. El objetivo era ampliar todo lo posible los gastos sociales sin desequilibrar los presupuestos con el fin de preservar la estabilidad macroeconómica y, por tanto, generar en los inversores extranjeros expectativas sobre un sistema sólido y pujante. La economía chilena respondió muy bien a esta terapia: en 1992 el crecimiento fue asombroso, de un 10 por 100, y en los dos años siguientes, del 6 y el 4 por 100, respectivamente; la *renta per capita* llegó a los 3.700 dólares en 1996, el triple que diez años antes, y también se logró que disminuyeran los índices de pobreza[155].

Los artífices de la buena marcha del país fueron premiados por los electores y en diciembre de 1993 Eduardo Frei, candidato de la Concertación, sobrepasó el 58 por 100 de los votos, un respaldo todavía mayor que el conseguido por Aylwin cuatro años antes. Frei seguiría los pasos de su predecesor y consolidaría de esta manera la exitosa transición chilena.

Los intentos de integración

El Gobierno de Estados Unidos fue un decidido defensor de las políticas neoliberales introducidas en México, Argentina, Perú y Brasil, por poner sólo algunos ejemplos, así como de los procesos de integración. De esta forma, al convertirse en una especie de mentor económico, pretendía ganarse la confianza de unos países sometidos durante décadas a Gobiernos dictatoriales a cuyo sostenimiento no había sido ajena la política norteamericana. La desaparición de la URSS y el debilitamiento de los movimientos insurgentes de izquierda auspiciados por aquella auguraban un periodo de mayor sosiego en el cual las economías emergentes de algunos de estos países conducirían, según esta lógica, a una mayor estabilidad del sistema democrático. La cooperación regional interamericana debía servir de instrumento básico para el despegue económico; por ejemplo, en diciembre de 1994 Washington impulsó el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) al igual que un año antes había propiciado el TLCAN. La finalidad de estas iniciativas no era otra que liberalizar, en la medida de lo posible, los intercambios comerciales eliminando barreras arancelarias y coordinando las distintas políticas sobre esta materia para promover la cohesión económica de los pueblos americanos y, por ende, la mejora de sus relaciones globales.

La Unión Europea también apostó por los procesos de integración en América Latina al inicio de la Posguerra Fría en función de una estrategia reformada respecto a la década anterior. En un mundo globalizado estos procesos favorecerían la seguridad de las inversiones europeas ahora que las privatizaciones de los grandes consorcios públicos resultaban muy atractivas para el capital en mercados cada vez más liberalizados. Por otra parte, la integración regional en el Nuevo Continente parecía querer ampliar sus intereses al introducir en sus agendas cuestiones no sólo económicas sino también medioambientales y políticas, todas ellas de una extraordinaria potencialidad en el caso de concretarse a medio plazo. La Unión Europea se convertía así en un actor muy atento a la evolución de los movimientos integradores con las expectativas

puestas en robustecer los lazos con estas entidades supranacionales. En esta línea de actuación, la Comisión y el Consejo establecieron en 1994 una estrategia novedosa denominada «Fortalecimiento de la Asociación». Con ella se proponían ampliar el marco de las relaciones y promover los acuerdos de cuarta generación para alcanzar tratados de libre comercio con Chile, México y Mercosur. La estrategia, conducente a intensificar el diálogo político entre la Unión y las áreas regionales de América Latina, agilizaría los Acuerdos de Asociación con estas siempre y cuando el grado de integración fuera suficiente y atendiera a los planes de cooperación interregionales.

Frente a lo esperado, las prometedoras perspectivas de los primeros años noventa se frustraron por distintas causas, principalmente por la debilidad intrínseca de los procesos de integración, sometidos a problemas estructurales, y por la difícil situación económica de los países participantes. En efecto:

> El escenario de la integración latinoamericana se caracteriza por la incertidumbre y la proliferación de compromisos comerciales, algunos de ellos, difíciles de conciliar, al mismo tiempo que no se afrontan los problemas acumulados durante años, como la debilidad y la falta de eficacia de las instituciones, la persistencia de barreras al comercio o la ausencia de mecanismos de corrección de las asimetrías[156].

El principio de supranacionalidad no gozaba, pues, de gran predicamento entre los Gobiernos de América Latina, que al optar por defender sus competencias soberanas imprimieron a las instituciones de integración regional una sensación de debilidad e impotencia. En consecuencia, durante la década de los noventa la integración se basó en las necesidades y demandas coyunturales de los Estados implicados y careció de una visión de conjunto, así como de un alcance a medio y largo plazo.

Al impulso a la integración económica no fue ajeno el excesivo endeudamiento externo de las economías latinoamericanas a mediados de los años ochenta. El contexto internacional de distensión entre los bloques y la prosperidad económica de las Comunidades Europeas situaron el concepto de integración en el centro del debate político y económico en gran parte del continente americano. La cooperación interregional era percibida por muchos

intelectuales y gobernantes como el medio más adecuado a la hora de solventar la crisis y fortalecer un modelo de crecimiento integral, capaz no sólo de satisfacer las aspiraciones nacionales de mejora, sino también de dotar de competencias reales a las áreas de integración regional. El PIB por habitante a finales de la década apenas había variado respecto a la anterior, y había que escapar de la situación descrita por Osvaldo Hurtado, expresidente de Ecuador, en una conferencia pronunciada en Buenos Aires en 1989: «Excepto en el tema de la deuda externa, no hay ninguna otra materia en la que América Latina tenga algún papel en el mundo»[157].

En el Tratado de Asunción de marzo de 1991, donde se acordó la creación de Mercosur, se afirmaba que «la ampliación de las actuales dimensiones de [los] mercados nacionales, a través de la integración, constituye condición fundamental para acelerar [los] procesos de desarrollo económico con justicia social». El documento añadía que el programa diseñado contemplaba «la evolución de los acontecimientos internacionales, en especial, la consolidación de grandes espacios económicos y la importancia de lograr una adecuada inserción internacional para sus países»[158]. Tras el final de la Guerra Fría parecía evidente que los mandatarios de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay tomaban conciencia de la necesidad de dar una respuesta conjunta e integrada a la globalización económica si querían afrontar el nuevo siglo con garantías de éxito.

El Tratado de Asunción aspiraba a constituir un auténtico mercado común, para lo cual el Programa de Liberación Comercial era uno de sus mecanismos principales. La reducción arancelaria progresiva aplicada a los intercambios comerciales entre sus miembros debía concluir a finales del año 1994, fecha fijada para constituir una zona de libre comercio; pero en la práctica estas perspectivas no pudieron cumplirse hasta justo cuatro años más tarde, el 31 de diciembre de 1998. Con todo, el ideal de un mercado común tendría que esperar todavía más, ya que los anexos del tratado no contemplaban los instrumentos necesarios para concretarlo: faltaba cómo coordinar las distintas políticas macroeconómicas de los Estados, aceptar la libre circulación de capital y personas, poner en marcha una legislación común, etcétera.

Tampoco daría los frutos esperados la Comunidad Iberoamericana de Naciones, constituida el 19 de julio de 1991 en Guadalajara de México por diecinueve Estados latinoamericanos además de España y Portugal. En ella desempeñó un papel crucial la apuesta española por estrechar los lazos con el Nuevo Continente y ganar presencia en aquel espacio internacional después de las transiciones democratizadoras operadas en la mayor parte de la región. El fundamento de una colaboración económica y cultural traspasaba el ámbito interestatal para alcanzar una auténtica acción integrada. Sin duda, la consecuencia más positiva de este proyecto serían las cumbres de los jefes de Estado y Gobierno celebradas anualmente desde su fundación, en las que se hacía balance de los logros y se proponían nuevos objetivos. Sin embargo, a mediados de la década la realidad mostraba que la retórica y el aparato desplegados en las cumbres se imponían a los resultados concretos.

[1] Una obra muy documentada para explicar el inicio de este movimiento es Z. Schiff y E. Yahari, *Intifada,* París, Stock, 1991.

[2] Cit. en I. Álvarez-Ossorio, *El proceso de paz de Oriente Medio. Historia de un desencuentro,* Madrid, Agencia Española de Cooperación Internacional, 1999, pp. 193-194.

[3] G. Martín Muñoz, *El Estado árabe. Crisis de legitimidad y contestación islamista,* Barcelona, Bellaterra, 1999, pp. 132 y 223.

[4] Entre las numerosas biografías de Arafat conviene destacar, por su tono mesurado y su abundante documentación, S. K. Aburish, *Arafat: from Defender to Dictator,* Nueva York, Bloomsbury Publishing, 1999, así como S. K. Aburish, *Yasser Arafat,* París, Saint-Simon, 2003.

[5] M. Á. Bastenier, *Israel-Palestina. La casa de la guerra,* Madrid, Taurus, 2002, p. 149.

[6] J. Baker, *The Politics of Diplomacy,* Nueva York, Putnam & Sons, 1994, p. 536.

[7] M. Camau, A. E. Hilal Dessouki y J.-C. Vatin (dirs.), *Crise du Golfe et ordre politique au Moyen-Orient,* París, Centre National de la Recherche Scientifique, 1993, pp. 223-240.

[8] «La estrategia de Hafez al-Asad entre 1970 y 2000 se aposentó en un concepto ubicuo y maquiavélico de la acción de gobierno: además de presidir la república, el Baaz y las fuerzas armadas, ideó una cadena de mando que empezaba y terminaba en su persona, esto es, que los máximos responsables del ejército y los diversos servicios de inteligencia dependían directamente de él». I. Álvarez-Ossorio e I. Gutiérrez de Terán, «La república hereditaria siria: el fracaso de una transición», en F. Izquierdo Brichs (ed.), *Poder y regímenes en el mundo árabe contemporáneo,* Barcelona, CIDOB, 2009, p. 267.

[9] E. Bazhanov, «The Middle East Policy under Gorbachev and Yeltsin», en B. Rubin, J. Ginat y M. Maoz (eds.), *From War to Peace. Arab-Israel Relations, 1973-1993,* Brighton,

Sussex Academic Press, 1994, pp. 212-217.

[10] La delicada situación en el Líbano pareció entrar en vías de solución cuando los Acuerdos de Taef (Arabia Saudita), firmados el 22 de octubre de 1989, pusieron fin a la guerra civil y establecieron un nuevo marco de convivencia. Elegido presidente del país al mes siguiente, el cristiano maronita Elias Haraui nombró primer ministro al musulmán Selim al-Hoss; diez meses más tarde, en septiembre de 1990, se aprobó una Constitución pensada para lograr la reconstrucción y la reconciliación nacional. Ello no obstante, la tutela siria siguió dejándose sentir como contrapeso a la presencia israelí al sur del país.

[11] J. B. Culla, *La tierra más disputada. El sionismo, Israel y el conflicto de Palestina,* Madrid, Alianza, 2005, p. 340.

[12] El 18 de abril de 1991 James Baker, muy enojado, se quejaba ante Shamir y Sharon: «Este es un acto deliberado que pretende sabotear la paz. Si persistís en construir más asentamientos no obtendréis más garantías bancarias [de Estados Unidos]». Cit. en I. Álvarez-Ossorio, *El proceso de paz de Oriente Medio. Historia de un desencuentro,* cit., p. 279.

[13] Sobre el papel desempeñado por la diplomacia española en aquel trascendental encuentro, véase, M. Á. Moratinos y B. León, «España y el proceso de paz de Oriente Próximo en el periodo 1975-1995», en I. Álvarez-Ossorio e I. Barreñada (eds.), *España y la cuestión palestina,* Madrid, Los Libros de la Caratata, 2003, pp. 105-124.

[14] En palabras del titular de la Dirección General de África, Asia y Pacífico del Ministerio de Asuntos Exteriores M. Alabart, «en Madrid, en octubre de 1991, se enterraron cuarenta y cuatro años de enfrentamiento, cincuenta y seis planes de paz y cuatro guerras sangrientas, y se logró, finalmente, conciliar dos concepciones contrapuestas presentes hasta el momento en las cancillerías», cit. en M.ª D. Algora Weber y J. F. González Noriega (coords.), *Palestinos e israelíes: cincuenta años de partición del territorio. La Unión Europea en el Proceso de Paz del Próximo Oriente (Madrid, 24 y 25 de febrero de 1999),* Madrid, Fundación Humanismo y Democracia, 1999, p. 30.

[15] La estrategia siria respecto a Israel aparece tratada en A. Drysdale y R. A. Hinnebusch, *Syria and the Middle East Peace Process,* Nueva York, Council on Foreign Relations Press, 1991, pp. 98-148.

[16] Como afirma Shlomo Ben-Ami, «Oslo no fue un tratado de paz: sólo ofreció un marco de común acuerdo para una solución a un intrincado conflicto nacido hace un siglo». «El proceso de paz árabe-israelí y sus derivaciones geoestratégicas», *Política Exterior* IX, 43 (febrero-marzo de 1995), p. 91.

[17] Las relaciones diplomáticas plenas se establecieron un mes después, el 27 de noviembre.

[18] Para un resumen acertado de la Jerusalén dividida por enfrentamientos religiosos y étnicos, véase S. Tamari, «Jerusalén: una ciudad disputada en una geografía sagrada», en I. Álvarez-Ossorio (ed.), *Informe sobre el conflicto de Palestina. De los Acuerdos de Oslo a la Hoja de Ruta,* Madrid, Ediciones del Oriente y el Mediterráneo, 2003, pp. 179-207.

[19] Para un examen de la evolución del conflicto a partir de los enfrentamientos armados de 1948, 1967 y 1973, así como de la indispensable participación de Siria en el

proceso de paz, véase M. Maoz, *Syria and Israel: from War to Peace-making,* Oxford (Reino Unido), Clarendon Press, 1995.

[20] Véanse P. Seale, «The Syria-Israel Negotiations: Who is Telling the Truth?», *Journal of Palestine* 29, 2 (2000), pp. 65-77 y R. G. Rabil, *Embattled Neighbors. Syria, Israel & Lebanon,* Boulder (Colorado), Lynne Rienner, 2003, pp. 199-240.

[21] Como síntesis ponderada de cincuenta años de conflicto en esta región, véase H. Laurens, *Paix et guerre au Moyen-Orient,* París, Armand Colin, 1999.

[22] J. M. de Faramiñán Gilbert y J. Pardo de Santayana y Gómez de Olea, *El conflicto de Afganistán,* Madrid, Ministerio de Defensa, 2010, pp. 29-50.

[23] Los talibanes o «buscadores de la verdad» eran musulmanes sunnitas, la mayoría de etnia pastún, y originarios de Kandahar. En las zonas por ellos ocupadas imponían la *Sharía* como única ley y el rigorismo en las costumbres mediante la coacción, o incluso la eliminación directa, de quienes no aceptaban su política centrada en erradicar cualquier influencia occidental en la vida pública o privada.

[24] Para una primera aproximación al movimiento talibán, véase M. Griffin, *El movimiento talibán en Afganistán,* Madrid, Los Libros de la Catarata, 2001.

[25] G. Etienne, *Imprevisible Afganistán,* Barcelona, Bellaterra, 2002, p. 66.

[26] Sobre el Irán de Reza Pahlevi resultan muy esclarecedoras las reflexiones de R. Kapuściński, *El Sha o la desmesura del poder,* Barcelona, Anagrama, 2007.

[27] Sobre la importancia de las clases populares en el movimiento inspirado por Jomeini, véase F. Khosrokhavar, *L'islamisme et la mort. Le martyre révolutionnaire en Iran,* París, L'Harmattan, 1995.

[28] El proceso previo a la Revolución aparece minuciosamente descrito en Ch. Kurzman, *The Unthinkable Revolution in Iran,* Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 2004.

[29] Para un estudio de la Revolución iraní como movimiento contrario a la modernización occidental desde sus mismos orígenes, véase S. A. Arjomand, *The Turban for the Crown: the Islamic Revolution in Iran,* Bridgewater (Nueva Jersey), Replica Books, 2001.

[30] N. Farzamnia, *Irán. De la Revolución Islámica a la Revolución Nuclear,* Madrid, Síntesis, 2009, p. 167.

[31] S. Ebadi, *El despertar de Irán,* Madrid, Aguilar, 2007, pp. 77-78.

[32] Cit. en N. Farzamnia, *Irán. De la Revolución Islámica a la Revolución Nuclear,* cit., p. 187.

[33] Sobre la continuidad, a partir de 1979, de la elite religiosa en el control del poder, véase E. P. Rakel, *Power, Islam and Political Elite in Iran: a Study on the Iranian Political Elite from Khomeini to Ahmadinejad,* Leiden, E. J. Brill, 2009.

[34] Cit. en N. Farzamnia, *Irán. De la Revolución Islámica a la Revolución Nuclear,* cit., p. 212.

[35] Sobre el régimen islámico en Irán véase T. Alsaif, *Islamic Democracy and its Limits: the Iranian Experience since 1979,* Londres, Saqi, 2007.

[36] La disparidad entre el papel tradicional que el sistema iraní otorga a la mujer y las aspiraciones de una generación nacida ya después de la Revolución Islámica aparece

magníficamente estudiada en F. Adelkhah, *La revolución bajo el velo. Mujer iraní y régimen islamista,* Barcelona, Bellaterra, 1996.

[37] Desde la perspectiva de finales de siglo, Farhad Khosrokhavar y Olivier Roy comentaban: «La crisis de la "República Islámica" no es simplemente una crisis política iraní. Es también la crisis de un concepto: el del Estado islámico […]. El punto de arranque es el callejón sin salida del islamismo, es decir, del proyecto político de una sociedad islámica. El desprestigio del islamismo se debe, sobre todo, a su incapacidad para hallar soluciones concretas a los problemas de la sociedad iraní». *Irán, de la revolución a la reforma,* Barcelona, Bellaterra, 2000, p. 61.

[38] Sobre la actitud norteamericana ante la crisis, véase S. A. Yetiv, *Explaining Foreign Policy: U.S. Decision-Making and the Persian Gulf War,* Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2004.

[39] Ch. Tripp, «Symbol and Strategy: Iraq and the War for Kuwait», en W. F. Danspeckgruber y Ch. Tripp (eds.), *The Iraqi Aggression against Kuwait,* Boulder (Colorado), Westview Press, 1996, pp. 21-38.

[40] Fruto del cambio que se estaba produciendo en las relaciones entre las superpotencias, la URSS también había adoptado hasta entonces una posición muy cercana a la norteamericana respecto a la resolución del conflicto. Véase F. J. Peñas, «La URSS, la gestación de la crisis del golfo Pérsico y el orden mundial», cit.

[41] R. Bermejo García, «La acción de las Naciones Unidas ante los recientes conflictos internacionales: crisis y perspectivas», en A. Herrero de la Fuente (coord.), *Reflexiones tras un año de crisis,* Valladolid, Universidad de Valladolid, 1996, pp. 108-114.

[42] Véase P. Conlon, *United Nations Sanctions Management: a Case Study of the Iraq Sanctions Committee 1990-1994,* Ardsley (Nueva York), Transnational Publishers, 2000.

[43] Más aún: como hemos visto, la derrota de Irak abrió las puertas a un momento especialmente optimista respecto a la solución del conflicto palestino-israelí.

[44] G. Martín Muñoz, «Democracia y ocupación militar en Oriente Medio», *Ayer. Revista de Historia Contemporánea* 65, 1 (2007), pp. 69-70. Esta interpretación aparece desarrollada con mayor profundidad en G. Martín Muñoz, *Iraq. Un fracaso de Occidente,* Barcelona, Tusquets, 2003.

[45] Sobre la percepción de esta guerra en el mundo musulmán, véase J. Piscatori, «Religion and Realpolitik: Islamic Responses to the Gulf War», en J. Piscatori (ed.), *Islamic Fundamentalism and the Gulf Crisis,* Chicago, American Academy of Arts and Sciences, 1991, pp. 1-27.

[46] Sobre el crecimiento de la oposición islamista al régimen saudita, véase M. Fandy, *Saudi Arabia and the Politics of Dissent,* Londres, Macmillan, 1999.

[47] Sobre todos estos argumentos, véase P. W. Wilson y D. F. Graham, *Saudi Arabia: the Coming Storm,* Nueva York, M. E. Sharpe, 1994.

[48] «El saudí es un estado rentista por excelencia […], una economía basada en la exportación de petróleo sin elaborar; intervención pública del Gobierno basada en los ingresos obtenidos de la exportación; políticas presupuestarias principalmente de gasto y con el objetivo de legitimar el régimen; economía no productiva y basada en la renta petrolífera que mantiene al sector servicios y a las importaciones; y dependencia directa de

la economía respecto de los precios del petróleo». E. Soler i Lecha y L. Zaccara, «Arabia Saudí: familia, religión, ejército y petróleo», en F. Izquierdo Brichs (ed.), *Poder y regímenes en el mundo árabe contemporáneo,* cit., p. 231.

[49] Véase R. Bronson, «Understanding U.S.-Saudi Relations», en P. Aarts y G. Nonneman (eds.), *Saudi Arabia in the Balance: Political Economy, Society, Foreign Affairs,* Londres, Hurst & Co., 2005, pp. 372-398.

[50] P. Tonchev, *Pakistán. El Corán y la espada,* Madrid, Los Libros de la Catarata, 2006, p. 124.

[51] Véase A. Jamal, *Shadow War: the Untold Story of Jihad in Kashmir,* Nueva York, Melville House Publising, 2009.

[52] Véase S. M. Goldstein (ed.), *Minidragons. Hong Kong, Singapore, South Korea, Taiwan. Fragile Economic Miracles in the Pacific,* Boulder (Colorado), Westview Press, 1991.

[53] P. Bustelo, *Los cuatro dragones asiáticos. Economía, política y sociedad,* Madrid, ESIC Editorial, 1994, p. 28.

[54] Sobre la relación entre los avances económicos y la democratización, véase T. W. Robinson, *Democracy and Development in East Asia: Taiwan, South Korea and the Philippines,* Washington, The American Enterprise Institute Press, 1991.

[55] Véase E. F. Vogel, *The Four Little Dragons. The Spread of Industrialization in East Asia,* Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 1992.

[56] Resulta al respecto de gran interés C. Dixon, *South East Asia in the World-Economy,* Cambrigde (Reino Unido), Cambridge University Press, 1991.

[57] M. A. Martin, *Cambodia. A Shattered Society,* Berkeley, University of California Press, 1994, pp. 279-297.

[58] Los movimientos de protesta y la represión del régimen están estudiados en V. Boudreau, *Resisting Dictatorship: Repression and Protest in Southeast Asia,* Cambridge (Reino Unido), Cambridge University Press, 2004, pp. 84-102 y 190-214.

[59] Para una aproximación general véase J. Haacke, *Myanmar's Foreign Policy: Domestic Influences and International Implications,* Londres, International Institute of Strategic Studies, 2006.

[60] Véase R. Blanco Andrés, El Estado en Filipinas. Marco político y relaciones internacionales (1986-2010), Barcelona, Bellaterra, 2012.

[61] Para un resumen de su vida, obra y pensamiento, véase R. Evans, *Deng Xiaoping and the Making of Modern China,* Londres, Hamish Hamilton, 1993.

[62] Sobre las reformas económicas introducidas en la década de los ochenta, sobre todo en sus últimos años, véase D. J. Solinger, *China's Transition from Socialism. Statist Legacies and Market Reforms, 1980-1990,* Nueva York, M. E. Sharpe, 1993.

[63] Véase D. Anand, *Geopolitical Exotica: Tibet in Western Imagination,* Mineápolis, University of Minnesota Press, 2007.

[64] R. Lew, «Los cambios sociales en la China posmaoísta», *Cuadernos del Este* 13 (1994), pp. 107-126.

[65] Sobre la importancia de las reformas económicas a finales de los ochenta, véase G. White, *Democracy and Economic Reform in China,* Brighton, Institute of Development Studies, 1991.

[66] K. Lieberthal, *Governing China. From Revolution to Reform,* Nueva York, W. W. Norton & Company Inc., 1995, pp. 269-271.

[67] El desfase entre las transformaciones políticas y económicas aparece estudiado en P. Nolan, *Transforming China: Globalization, Transition and Development,* Londres, Anthem, 2004, pp. 45-102.

[68] De entre la amplia bibliografía sobre los sucesos de Tiananmen cabe destacar C. Calhoun, *Neither Gods nor Emperors: Students and the Struggle for Democracy in China,* Berkeley, University of California Press, 1994 y F. Deng, *Unintended Outcomes of Social Movements: the 1989 Chinese Student Movement,* Nueva York, Routledge, 2010.

[69] Las impresiones personales del protagonista aparecen recogidas en Z. Ziyang, *Prisoner of the State: the Secret Journal of Zhao Ziyang,* Londres, Simon & Schuster, 2009.

[70] Sobre los difíciles momentos posteriores a Tiananmen y la recomposición de la acción política llevada a cabo por Zemin, véase J. Fewsmith, *China since Tiananmen: from Deng Xiaoping to Hu Jintao,* Nueva York, Cambridge University Press, 2008, pp. 165-230.

[71] «El impacto de la matanza de Tiananmen pronto se volatilizó en un Occidente obnubilado por el acopio de divisas». J. M. Cuenca Toribio, *Historia y actualidad 3,* Madrid, Actas, 2009, p. 254.

[72] S. Long, *Taiwan: China's Last Frontier,* Londres, Macmillan, 1991, pp. 180-202.

[73] P. Bustelo, *Los cuatro dragones asiáticos. Economía, política y sociedad,* cit., pp. 80-81.

[74] Para una visión general del engranaje político chino, véase T. Saich, *Governance and Politics of China,* Nueva York, Palgrave Macmillan, 2004.

[75] La poderosa impronta del socialismo, el rápido y tardío proceso de industrialización, centrado en regiones muy concretas, y el control absoluto ejercido por el Estado sobre el proceso de modernización económica son factores que han retrasado la reacción social al autoritarismo. Véase T. Wright, *Accepting Authoritarianism: State-Society Relations in China's Reform Era,* Berkeley, University of California Press, 2010.

[76] D. Shambaugh, *China's Communist Party. Atrophy and Adaptation,* Berkeley, University of California Press, 2009, pp. 128-160. Para una visión de la nueva etapa abierta resulta de gran interés G. Lin, «Ideology and Political Institutions for a New Era», en G. Lin y X. Hu (eds.), *China after Jiang,* Washington D. C., Woodrow Wilson Center Press, 2003, pp. 39-68.

[77] Véase E. S. Krauss, *Japan's Democracy: How Much Change?,* Nueva York, Foreign Policy Association, 1995.

[78] Cit. en J. S. Nye, *La paradoja del poder norteamericano,* cit., p. 28.

[79] H. Baeg Im, «The Rise of Bureaucratic Authoritarianism in South Korea», *World Politics* 39, 2 (enero de 1987), pp. 231-257.

[80] Véase S. Kim, *The Politics of Democratization in Korea. The Role of Civil Society,* Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2000, pp. 105-136.

[81] S. Han, «South Korea. Politics in Transition», en L. Diamond, J. J. Linz y S. M. Lipset (eds.), *Democracy in Developing Countries: Asia,* Boulder (Colorado), Lynne Rienner, 1989, pp. 267-303.

[82] La relación entre el crecimiento económico y el proceso de democratización aparece tratada en T. Yan Kong, *The Politics of Economic Reform in South Korea. A Fragile Miracle,* Londres, Routledge, 2000, pp. 111-143.

[83] P. Grosser, *1989. L'année où le monde a basculé,* París, Perrin, 2009, p. 95.

[84] Para los años que median entre 1995 y 1998 algunas fuentes hablan de hasta tres millones de norcoreanos muertos a causa del hambre. F. Terry, «Corea del Norte. Alimentando el totalitarismo», en F. Weissman (ed.), *A la sombra de las guerras justas. El orden internacional y la acción humanitaria,* Barcelona, Icaria, 2004, p. 91.

[85] Sobre la estrecha relación entre el nepotismo de Kim Il-sung, la reiterada conculcación de los derechos humanos y el delirante militarismo del régimen, véase I. Jeffries, *Contemporary North Korea: a Guide to Economic and Political Developments,* Londres, Routledge, 2010, pp. 46-80.

[86] F. Izquierdo Brichs y A. Kemou, «La sociología del poder en el mundo árabe contemporáneo», en F. Izquierdo Brichs (ed.), *Poder y regímenes en el mundo árabe contemporáneo,* cit., p. 53.

[87] *Anuario Internacional CIDOB 2006,* Barcelona, CIDOB, 2007, p. 551.

[88] Sobre las dificultades de este proceso de reforma, véase G. Martín Muñoz, «Argelia en transición: del partido único al pluralismo político», *Revista Awraq* 12 (1991), pp. 93-134.

[89] Véase G. Martín Muñoz, «La nueva Constitución argelina: hacia la III República», *Revista de Estudios Políticos* 67 (1990), pp. 261-296.

[90] Fondo Monetario Internacional, *Algeria: Stabilization and Transition to the Market,* Washington D. C., FMI, 1998, p. 4.

[91] P. Balta, *El islam,* Barcelona, Salvat, 1996, pp. 173-175.

[92] S. Naïr, *Mediterráneo hoy. Entre el diálogo y el rechazo,* Barcelona, Icaria, 1996, p. 75.

[93] S. Naïr, *En el nombre de Dios,* Barcelona, Icaria, 1995, p. 66.

[94] G. Kepel, *La Yihad. Expansión y declive del islamismo,* Barcelona, Península, 2001, p. 283.

[95] Sobre el aumento de la violencia –entre 30.000 y 100.000 muertos, según versiones– tras la irrupción de los militares en el proceso electoral, véase P. Dévoluy y M. Duteil, *La poudrière algérienne. Histoire secrète d'une république sous influence,* París, Calmann-Lévy, 1994.

[96] La ruptura provocada en el GIA por las disensiones internas llevaría en el verano de 1996 a que su más destacado dirigente, Yamal Zitouni, fuera asesinado por sus propios correligionarios. Sobre los atentados terroristas y la inestabilidad general, véase L. Martínez, «Algérie: les massacres de civils dans la guerre», *Revue Internationale de Politique Comparée* 8, 1 (2001), pp. 43-58.

[97] Para una sugerente visión general de la evolución política argelina, sobre todo en los años ochenta y primeros noventa, véase L. Addi, *L'Algérie et la démocratie: Pouvoir et crise du politique dans l'Algérie contemporaine,* París, La Découverte, 1994.

[98] M.ª J. Merinero Martín, *Incertidumbres en el siglo XXI. Una mirada política,* Cáceres, Universidad de Extremadura, 1998, p. 53.

[99] S. Naïr, *Mediterráneo hoy. Entre el diálogo y el rechazo,* cit., pp. 65-66.

[100] Sobre el islamismo egipcio en los años ochenta y noventa como uno de los movimientos más fuertes en todo el ámbito musulmán, véase N. Ayubi, *El islam político. Teorías, tradición y rupturas,* Barcelona, Bellaterra, 1996, pp. 109-138.

[101] G. Martín Muñoz, *Política y elecciones en el Egipto contemporáneo (1922-1990),* Madrid, Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe (ICMA), 1992, p. 425.

[102] Visto como una institución de poder por la frecuencia con que han triunfado los golpes de Estado militares en esta región del planeta, el Ejército perpetúa en su seno las divisiones sociales, culturales y tribales de sus miembros, y son estas luchas intestinas las que, una vez trasladadas a las altas instancias de Gobierno, agravan la ya de por sí inestable situación del país. S. Decalo, *Coups and Military Rule in Africa: Motivations and Constraints,* New Haven, Yale University Press, 1976, p. 6.

[103] Cit. en P. A. Fernández Sánchez, «La soberanía poliédrica», en VVAA, *Soberanía del Estado y Derecho Internacional. Homenaje al profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo,* Sevilla, Universidades de Sevilla, Córdoba y Málaga, 2005, tomo I, pp. 605-609.

[104] Resulta enormemente esclarecedor el ejemplo de la URSS, que abandonó sus intereses en Mozambique, Angola y Etiopía debido, en gran parte, a la gravedad de sus problemas económicos. Y. Polsky, «Russia's Policy toward Africa», en M. Agonafer (ed.), *Africa in the Contemporary International Disorder: Crises and Possibilities,* Lanham (Maryland), United Press of America, 1996, pp. 192-195.

[105] El profesor A. Remiro Brotóns advierte de los peligros de este tipo de intervenciones, ya que «los Estados que recurren a la fuerza, una de dos: o bien lo hacen sin autorización del Consejo de Seguridad, que es preceptivo, o bien reclaman el control absoluto de su empleo, incurriendo en ilícitos o… buscando taparlos. Cuando es este el caso, la *injerencia humanitaria* es sólo el retoño de las viejas *intervenciones de humanidad* con que las grandes potencias buscaban respetabilidad para sus acciones de poder y de dominación». *Civilizados, bárbaros y salvajes en el nuevo orden internacional,* Madrid, McGraw-Hill, 1996, p. 33.

[106] L. Rodríguez-Piñero Royo, «Del partido único al "buen gobierno": el contexto internacional de los procesos de democratización en el África Subsahariana después de la Guerra Fría», en F. J. Peñas (ed.), *África en el sistema internacional: cinco siglos de frontera,* Madrid, Los Libros de la Catarata, 2000, p. 241.

[107] A. M. Lesch, «The Destruction of Civil Society in the Sudan», en A. R. Norton (ed.), *Civil Society in the Middle East,* Leiden, E. J. Brill, 1996, vol. II, p. 163.

[108] Sobre la fuerza del movimiento islámico en Sudán como ejemplo para otros grupos de la misma índole, véase N. Ayubi, *El islam político. Teorías, tradición y rupturas,* cit., pp. 152-163.

[109] G. Prunier y R. Gisselquist, «The Sudan: a Successfully Failed State», en R. I. Rotberg (ed.), *State Failure and State Weakness in a Time of Terror,* Cambridge (Massachusetts), World Peace Foundation, 2003, pp. 101-128.

[110] «A la altura de 1980 muchos países tuvieron que hacer frente a una deuda inmensa y siempre en aumento a la banca internacional […] y a organizaciones como el Fondo Monetario Internacional. Cada vez tenían que dedicar un mayor porcentaje de los

beneficios de sus exportaciones al pago de la deuda, con lo cual les quedaba poco para el gasto necesario, y no digamos ya para la inversión. En 1980 Uganda dedicó el valor del 5 por 100 de sus exportaciones al pago de esta deuda; en 1990 dedicó el 66 por 100. Kenia pasó en esas mismas fechas del 16 al 34 por 100 y Costa de Marfil, del 25 al 60 por 100. Amenazados por la bancarrota, muchos países solicitaron al FMI prórrogas que les permitieran distanciar los pagos. El FMI impuso unas condiciones drásticas que fueron conocidas como "ajuste estructural"». F. Cooper, *Africa since 1940. The Past of the Present,* Cambridge (Reino Unido), Cambridge University Press, 2002, p. 115.

[111] «Las guerras no sólo han interrumpido el proceso de cambio, sino que han creado también las condiciones en las que el militarismo reglamentado ha debilitado los Estados, las instituciones y las actitudes pluralistas». M. Huband, *África después de la Guerra Fría. La promesa rota de un continente,* Barcelona, Paidós, 2004, p. 201.

[112] A. Santamaría Pulido, «África en las relaciones económicas internacionales», en F. J. Peñas (ed.), *África en el sistema internacional: cinco siglos de frontera,* cit., p. 124.

[113] A. Iglesias Velasco, «El principio de injerencia y la asistencia humanitaria en Somalia», *Tiempo de Paz* 32-33 (primavera-verano de 1994), pp. 43-57.

[114] Véase R. G. Patman, *The Soviet Union in the Horn of Africa. The Diplomacy of Intervention and Disengagement,* Cambridge (Reino Unido), Cambridge University Press, 1990.

[115] F. Weissman, «Liberia: derrière le chaos, crises et interventions internationales», *Relations Internationales et Stratégiques* 23 (1996), pp. 82-99; véase también, para una visión general, M. Huband, *The Liberian Civil War,* Londres, Frank Cass, 1998.

[116] Según algunas interpretaciones el atentado pudo haber sido cometido por hutus radicales como respuesta a la actitud más pacificadora del presidente Habyarimana hacia la oposición del Frente Patriótico Ruandés, como veremos a continuación. Sobre las distintas versiones del magnicidio, véase G. Prunier, *The Rwanda Crisis: History of a Genocide,* Londres, Hurst & Co., 1995, pp. 213-229.

[117] Aunque publicada muy poco después de los acontecimientos, una de las obras que mejor explican las causas y desarrollo del genocidio ruandés sigue siendo P. Erny, *Rwanda 1994: clés pour comprendre le calvaire d'un peuple,* París, L'Harmattan, 1994.

[118] M. Mubyabo Ngeleka y N. Tshibambe, «Democracia y conflicto étnico hutu-tutsi en Ruanda», *Tiempo de Paz* 34-35 (1994), pp. 40-53.

[119] B. D. Jones, «The Arusha Peace Process», en H. Adelman y A. Suhrke (eds.), *The Path of a Genocide: the Rwanda Crisis from Uganda to Zaire,* New Brunswick (Canadá), Transaction Publishers, 1999, pp. 136-138.

[120] Véase G. Prunier, *The Rwanda Crisis: History of a Genocide,* cit., pp. 192-312.

[121] Sobre la actuación de las fuerzas militares extranjeras en Angola durante la década de los ochenta véase K. Somerville, *Foreign Military Intervention in Africa,* Londres, Pinter Publishers, 1990, pp. 148-157.

[122] Véase Ch. Messiant, «Angola: the Challenge of Statehood», en D. Birmingham y Ph. M. Martin (eds.), *History of Central Africa. Volume III: The Contemporary Years since 1960,* Londres, Longman, 1998, pp. 131-165.

[123] M. Huband, *África después de la Guerra Fría. La promesa rota de un continente,* cit., p. 83.

[124] P. Grosser, *1989. L'année où le monde a basculé,* cit., p. 141.

[125] J. S. Saul, «Inside from the Outside? Mozambique's Un/Civil War», en T. M. Ali y R. O. Matthews, *Civil Wars in Africa. Roots and Resolution,* Londres, Ithaca, 1999, pp. 135-145.

[126] Para una relación más detallada de las similitudes y diferencias entre ambos casos, véase A. Malaquias, *The UN in Mozambique and Angola. Lessons Learned,* Dordrecht, Kluwer Publishers, 1996.

[127] Sobre la negociación entre el régimen de Pretoria y el movimiento opositor en general y el Congreso Nacional Africano en particular, véase A. Sparks, *Tomorrow is Another Country: the Inside Story of South Africa's Negotiated Revolution,* Londres, Mandarin, 1996.

[128] El cambio en la diplomacia y en las relaciones con los demás países de la región durante el mandato de De Klerk está recogido en R. Pfister, *Apartheid South Africa and African States: from Pariah to Middle Power, 1961-1994,* Londres, Tauris Academic Studies, 2005, pp. 125-142.

[129] I. Sepúlveda, «América Latina», en J. Avilés e I. Sepúlveda, *Historia del mundo actual. De la caída del Muro a la Gran Recesión,* Madrid, Síntesis, 2010, pp. 177-178.

[130] Respecto al deterioro progresivo del PRI en los años noventa y los crecientes éxitos de la oposición, sobre todo del PAN, véase T. A. Eisenstadt, *Courting Democracy in Mexico. Party Strategies and Electoral Institutions,* Cambridge (Reino Unido), Cambridge University Press, 2004, pp. 130-161.

[131] Sobre la voluntad gubernamental de establecer una relación más estrecha con el norte de América a finales de los años noventa, véase F. E. González González, *Dual Transitions from Authoritarian Rule: Institutionalized Regimes in Chile and Mexico, 1970-2000,* Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2008, pp. 214-228.

[132] El TLCAN surgió «cuando cada uno de los países que lo integran compartió situaciones que favorecieron el esfuerzo de concertación: en el ámbito multilateral, la relativa declinación comercial y de competitividad de Estados Unidos en favor del bloque europeo comunitario; el auge del crecimiento comercial de las economías del litoral pacífico, expresado en el dinamismo de la APEC [Cooperación Económica Asia-Pacífico], y la lentitud del proceso multilateral de liberalización comercial que se manifiesta en la Ronda Uruguay y en el GATT». R. Buzo de la Peña, «Reflexiones sobre la inserción de México a la economía norteamericana e internacional», en G. A. de la Reza (coord.), *México: más allá del TLCAN. Competitividad y diversificación de mercados,* México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2004, pp. 90-91.

[133] P. H. Smith, «Opciones estratégicas para América Latina», en J. S. Tulchin y R. H. Espach (eds.), *América Latina en el nuevo sistema internacional,* Barcelona, Bellaterra, 2004, p. 77.

[134] Sobre su controvertida y mitificada figura, véase B. de la Grange y M. Rico, *Marcos: la genial impostura,* México, Aguilar, 1998.

[135] Respecto a los graves problemas socioeconómicos y de consolidación democrática en Centroamérica tras la desaparición de las guerrillas resultan de interés los trabajos

compilados en R. Sieder (ed.), *Central America: Fragile Transitions,* Londres, Macmillan, 1996.

[136] Ch. D. Brockett, *Political Movements and Violence in Central America,* Cambridge (Reino Unido), Cambridge University Press, 2005, pp. 324-329.

[137] Véase W. M. LeoGrande, *Our Own Bakyard: The United States in Central America, 1977-1992,* Chapelhill, University of North Carolina Press, 1997.

[138] Pese a los intentos de frenar la socialización de la economía, el fracaso fue completo entre 1985 y 1987. P. Ryan, *The Fall and Rise of the Market in Sandinista Nicaragua,* Montreal, McGill-Queen's University Press, 1995, pp. 162-204.

[139] Véase D. Close, *Nicaragua. The Chamorro Years,* Boulder (Colorado), Lynne Rienner, 1999. En las pp. 11-36 resultan muy esclarecedoras las reflexiones sobre los problemas que el legado sandinista acarreó a la presidenta.

[140] La influencia estadounidense en aquellos años queda recogida en F. Rojas y L. Solís, «Central America and the United States», en H. Muñoz y J. S. Tulchin (eds.), *Latin American Nations in World Politics,* Boulder (Colorado), Westview Press, 1996, pp. 105-128.

[141] R. Grasa, «Centroamérica en el sistema internacional de Postguerra Fría», en A. S. Cardenal y S. Martí i Puig (comps.), *América Central, las democracias inciertas,* Madrid, Tecnos, 1998, pp. 49-57.

[142] Para la evolución política del país en la década de los noventa véanse los estudios incluidos en V. Palermo (comp.), *Política brasileña contemporánea: de Collor a Lula en años de transformación,* Buenos Aires, Siglo XXI Iberoamericana, 2003.

[143] R. Valenzuela, «Transformación del sistema político peruano», en W. Hofmeister y J. Thesing (eds.), *Transformación de los sistemas políticos en América Latina,* Buenos Aires, CIEDLA, 1996, p. 316-317.

[144] Puede encontrarse un buen análisis de la trayectoria de la banda armada en T. Hidalgo Morey, *Sendero Luminoso. Subversión y contrasubversión. Historia y tragedia,* Lima, Aguilar, 2004.

[145] D. Suárez, «La segunda transición democrática en Venezuela», en Á. Anderle y J. Girón (eds.), *Estudios sobre transiciones demócraticas en América Latina,* Oviedo, Universidad de Oviedo, 1997, p. 143.

[146] Sobre el menemismo véase M.ª Á. Yannuzzi, *La modernización conservadora. El peronismo de los 90,* Buenos Aires, Editorial Fundación Ross, 1995.

[147] Véase D. Nolte, «De la larga agonía de la Argentina peronista a la reconversión menemista. Trasformaciones del sistema político argentino durante la primera presidencia de Carlos Menem», *América Latina Hoy* 11-12 (1995), pp. 31-52.

[148] «Este sistema dejó una impronta notable en el modo de funcionamiento de la política y de la sociedad: dado que el mantenimiento del poder se alejó cada vez más de las opciones ideológicas o simplemente programáticas, la política en general, pero sobre todo el peronismo, fue convirtiéndose en una maquinaria de enorme plasticidad, capaz de sostener las ideas más diversas en tanto que garantizan el ejercicio del poder». L. de Privitellio, «A un paso del precipicio: la política argentina entre 1976 y 2008», *Ayer* 73, 1 (2009), p. 65.

[149] Sobre esta cuestión véase A. Margheritis, *Ajuste y reforma en la Argentina (1989-1995). La economía política de las privatizaciones,* Buenos Aires, GEL, 1999.

[150] Sobre la centralización del poder en la figura de Menem, los problemas de corrupción y los enfrentamientos dentro del peronismo de los años noventa, véase V. Palermo y M. Novaro, *Política y poder en el gobierno de Menem,* Buenos Aires, Grupo Editorial Norma, 1997.

[151] Resulta muy provechosa la lectura de sus reflexiones sobre las transiciones en Iberoamérica. J. M.a Sanguinetti, *El temor y la impaciencia. Ensayo sobre la transición democrática en América Latina,* Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1991.

[152] Véase L. Macadar, *Restauración democrática y política económica. Uruguay 1985-1989,* Montevideo, Banda Oriental, 1993.

[153] Cit. en G. Cáceres Quiero, «El "modelo chileno": un producto de la intersección entre dictadura y democracia (1975-1998)», en J. del Alcàzar y N. Tabanera (coords.), *Estudios y materiales para la historia de América Latina 1955-1990,* Valencia, Universitat de València, 1998, p. 53.

[154] C. Basombrío, *Educación y ciudadanía. La educación para los Derechos Humanos en América Latina,* Santiago de Chile, IDEDDHH-CEAAL, 1991, pp. 76-96.

[155] M. A. Garretón, «Las transiciones de América Latina a examen», en J. Tusell y Á. Soto (eds.), *Historia de la transición (1975-1986),* Madrid, Alianza, 1996, p. 55.

[156] C. del Arenal y J. A. Sanahuja, «La integración regional en América Latina: los condicionantes externos», en J. Vidal-Beneyto (coord.), *Progreso sostenible e integración regional en América Latina. Programa PAL,* Valencia, Fundación Amela, 2006, p. 42.

[157] Cit. en O. Hurtado, «Aspectos políticos de la integración latinoamericana», *Integración Latinoamericana. BID/INTAL* 153 (enero-febrero de 1990), p. 4.

[158] Cit. en J. J. Torres, *El concepto "integración latinoamericana": contenidos, reformulaciones y continuidades,* Buenos Aires, Dunken, 2008, p. 53.

VI. El nuevo orden/desorden internacional

El entierro de la Conferencia de Yalta

La caída de la Unión Soviética elevó inmediatamente a Estados Unidos a la condición de hiperpotencia en tanto en cuanto su capacidad militar le permitía desplegarse en cualquier punto del planeta. Sin embargo, el poderío militar no significó una indiscutible hegemonía mundial. Aun considerando sus graves problemas estructurales, la nueva Federación Rusa mantuvo una gran influencia en el Cáucaso y en el este de su antiguo imperio; China se vio favorecida por el cambio de posiciones en el juego de fuerzas mundial e, incluso, la Unión Europea abrió rápidamente las puertas a los antiguos países sovietizados del Viejo Continente, ampliación que podría llegar a crear un mercado unificado más poderoso aún que el norteamericano. En Asia central el cambio rápido de las alianzas mostró como en ningún otro espacio el esfuerzo de las potencias por reubicarse. Moscú trató denodadamente de no perder influencia mientras Estados Unidos consideraba aquel territorio como un eslabón de enorme importancia en su afán por controlar una posible expansión del fundamentalismo islámico, a la vez que Europa situaba en aquella área una parte sustancial de sus intereses energéticos: se calcula que en tan sólo Kazajistán las reservas de petróleo del mar Caspio alcanzaban los 200.000 millones de barriles, frente a los 600.000 millones constatados en el golfo Pérsico[1]. En efecto, como resumiría Kenneth Waltz unos años después, «al igual que la naturaleza aborrece el vacío, la política internacional aborrece el desequilibrio de poder»[2].

Estados Unidos salió de la Guerra Fría con su inmensa maquinaria bélica todavía más fortalecida en comparación con el resto de los países y, por si esto fuera poco, con el halo victorioso que le otorgaba una legitimidad añadida a la vista del catastrófico rastro económico, social e incluso moral que había dejado el mundo comunista en su desaparición. La primera Guerra del Golfo mostró el

poder no sólo militar sino también político y diplomático de Washington para condicionar la actuación de Gobiernos y regímenes radicalmente diferentes a la hora de aceptar la puesta en marcha de una coalición internacional capitaneada por los norteamericanos. La intervención en Kuwait superaba con creces una firme voluntad de restablecer el equilibrio en un punto concreto del planeta; antes bien, cifraba su intención general en la determinación de la Casa Blanca de desempeñar el papel de garante –y, llegado el caso, de instaurador– de su propio concepto de orden mundial.

Según Zbigniew Brzezinski, antiguo asesor del presidente Carter y reputado investigador y analista de las relaciones internacionales, la Posguerra Fría colocaba a Estados Unidos en una situación privilegiada para fortalecer el control del eje euroasiático; de hecho, poco después de que publicase su libro *The Grand Chessboard* (1997)[3] los norteamericanos habían logrado instalar bases militares en varias repúblicas del Asia central exsoviética, además de fortalecer su posición en Oriente Medio mediante su intervención en Irak y Afganistán. Visto como medio de asegurar el equilibrio internacional, tal como defendían muchos realistas a finales de la década de los setenta, el sistema bipolar se vino abajo[4]. Era una situación, sin embargo, que para autores como Parag Khanna acabaría por abrumar a la política norteamericana en el exterior debido a una agenda excesivamente abultada: «[…] Contraterrorismo, expansión comercial, seguridad energética, resolución de conflictos»[5]. En efecto, los Gobiernos estadounidenses posteriores a 1991 no pudieron llevar a cabo su idea de un «dominio imperial de bajo coste», para lo cual hubieran querido regir las relaciones internacionales de forma indirecta sin tener que edificar «una nueva arquitectura imperial –nuevas alianzas militares, nuevas instituciones legales, nuevos organismos internacionales para el desarrollo– para que un mundo poscolonial y postsoviético pudiera reemplazar lo que Roosevelt y Churchill habían creado para el mundo posterior a Hitler»[6].

Ante el espectáculo de la rápida desintegración de la URSS, muchos analistas olvidaron la potencia militar rusa, heredera principal de las fuerzas y de los arsenales soviéticos. Casi todos

consideraban que, en el nuevo contexto surgido a finales de 1991 por la disolución del Pacto de Varsovia, la Federación Rusa no supondría una amenaza para la seguridad europea. Sin embargo, la Federación era una gran potencia nuclear con fuerza suficiente como para amenazar, incluso, a Estados Unidos.

Para la reordenación geopolítica del mundo, la desaparición del imperio de los soviets dejó conflictos abiertos en buena parte de sus antiguas zonas de dominación, desde el Báltico al Cáucaso, desde Bielorrusia a las repúblicas de Asia central. Algunos de ellos, convertidos en focos permanentes de inestabilidad hasta nuestros días, hundían sus raíces en cuestiones de identidad religiosa, nacional o ambas cosas a la vez, dado que el fin de la Guerra Fría trasladó el enfrentamiento ideológico-político a este nuevo terreno. La transparencia del conflicto Este-Oeste dejó, pues, paso a un escenario mucho más complejo donde los actores estatales y regionales encontraban un puesto desde el que influir en su entorno, quebrando en parte el poder hegemónico norteamericano. En efecto, el momento ofrecía un escenario en donde actuaba un elevado número de Estados, con consideración legal para intervenir en los asuntos internacionales, pero con escasa o nula legitimidad democrática dentro de sus fronteras. En el espacio postsoviético, por ejemplo, muchas de las antiguas elites comunistas conservaron el poder, acomodándose a unas más que discutibles formas democráticas. La ausencia de modernización en las instituciones y la marginación de la mayor parte de la población en los procesos de transición fortalecieron a grupos dedicados a todo tipo de actividades ilícitas, en muchas ocasiones en connivencia con el poder establecido.

La desmembración de la Unión Soviética y de la Federación Yugoslava recordaba viejos tiempos en los que el nacimiento y el entierro de Estados, unidos a los cambios en la delimitación de fronteras, habían causado trágicos acontecimientos. Como en otros momentos históricos, determinadas comunidades trataron de sacar provecho de la confusión generada para constituir presuntos Estados étnica y religiosamente uniformes, al margen de los costes que ello pudiera acarrear[7]. Aunque tarde, la Unión Europea y Estados

Unidos se mantuvieron firmes a la hora de rechazar la autodeterminación de minorías nacionales o religiosas cuya pretensión era construir países a su medida. Con todo, los años noventa abrían la puerta a la creación forzosa de organizaciones político-administrativas con entidad estatal, a la búsqueda posterior de la legitimación internacional.

Si bien la posesión de armamento nuclear continuó siendo una exhibición de poder en el orden posterior a 1991, el papel económico de los estados como medio de influir en un mundo donde el control de los recursos, sobre todo energéticos, adquiría un protagonismo todavía mayor, ganó más fuerza aún. Al respecto, el «finalismo» de Francis Fukuyama aspiraba a que en un futuro el final de las guerras estuviera relacionado con cálculos de naturaleza económica. Así, el fortalecimiento de la democracia en el mundo vendría como consecuencia de que los poderes, siguiendo un juicio racional, apelasen a la negociación por todos los medios posibles antes de llegar a un enfrentamiento cuyas repercusiones serían enormemente perjudiciales en términos económicos. Las políticas trazadas para solucionar problemas técnicos de todo tipo y así mejorar la vida de los ciudadanos lograrían imponerse en cualquier escenario conflictivo[8]. En este sentido, el éxito económico de la Unión Europea redundó en una creciente capacidad –al menos, en teoría– de intervenir en el exterior pero, a la vez, su dependencia energética ofrecía su flanco más débil. Ante la Europa de comienzos de los años noventa se presentaba, además, una serie de problemas que debía afrontar. El primero de ellos, y no menor, era el conjugar la profundización en las estructuras comunitarias con la ampliación solicitada por los países hasta ese momento sovietizados. Además, quedaba todavía por ver cómo iba a encajar la Alemania unificada en el nuevo diseño de la Unión Europea, así como, por supuesto, la reformulación de las relaciones con un vecino tan poderoso como la Federación Rusa.

En los países comunitarios la estructura social no varió sustancialmente, aunque sí comenzaron a apuntar tendencias ya perceptibles a principios de los años noventa: el nuevo concepto de familia, el aumento del desempleo y la creciente intensidad de la

inmigración procedente tanto de la Europa excomunista como del resto del mundo. La rápida caída del Telón de Acero obligó a los Gobiernos, pero también a amplios sectores sociales de las Comunidades Europeas, a replantearse preguntas sobre los límites de Europa, los fundamentos culturales y los principios sobre los cuales debería continuar construyéndose la sociedad civil. El mito de la izquierda comunista como fuerza liberadora, referencia de tantos partidos, organizaciones sindicales y grupos sociales europeos, también se vino abajo. Como explica Mary Fulbrook:

> Una de las maneras de afrontar la crisis posmoderna en Europa fue un nuevo interés por la cultura no europea y poscolonial, y más específicamente por la superación del tradicional eurocentrismo de las artes. *«Magiciens de la Terre»,* una exposición de cien artistas de todo el mundo en el Centro Georges Pompidou en 1989, intentó marcar esta globalización cultural. Señalaba críticamente las limitaciones del progreso occidental al tiempo que buscaba una respuesta global a la crisis[9].

En vez de rebuscar entre las ruinas que sobre el solar europeo había dejado el sistema comunista al derrumbarse, los desengañados progresistas se refugiaban en el escapismo acudiendo a la llamada de lo exótico.

Pocos años después de 1989, reflexionando sobre las consecuencias de la caída del Muro, el politólogo Giovanni Sartori consideraba que el final del comunismo había dejado a la democracia sin alternativa posible en tanto en cuanto había quedado demostrado que la legitimidad de un gobierno reposaba sobre la libre elección de los ciudadanos; sin embargo, a pesar de la enorme trascendencia de lo ocurrido, en realidad sólo se había pasado una página de la historia, «[…] el libro del futuro está más abierto que nunca»[10]. En efecto, el fracaso del marxismo suponía el final de la ideología por antonomasia del siglo xx, lo cual no implicaba en modo alguno la desaparición de las ideologías[11]. Por otro lado, los conceptos de «derecha» e «izquierda» sufrieron de golpe una drástica inversión de su contenido de referencia. Los comunistas pasaron a ser «conservadores» y «ortodoxos» mientras los anticomunistas ganaban la vitola de progresistas. El giro fue radical en numerosos guardianes de la fe revolucionaria; reconvertidos en

líderes nacionalistas, pasaron a ser estrictos defensores de sus fronteras y tradiciones nacionales y transformaron las políticas colectivistas en privatizadoras. La vieja izquierda comunista dejó huérfanos a los movimientos políticos tercermundistas, muchos de los cuales habían tenido entre sus aspiraciones el modelo soviético. En aquel contexto era previsible, pues, la desorientación de la izquierda, tal como la describe el historiador Ernst Nolte: «Contra el marxismo se podía discutir, pero contra la nada se discute mal. Y en este momento entreveo sobre todo una izquierda que se desgarra, que va a la deriva, mecida alternativamente por la demagogia populista, el negativismo sin provecho (la crítica a todo coste), el *cupio dissolvi* y la agitación activista»[12].

Como acabamos de sugerir, la caída del Muro alentó a cientos de miles de personas del Este a buscar lo más rápidamente posible la mejora de sus condiciones de vida emigrando al «paraíso occidental»; una masa de población atraída por el desarrollo económico de este ámbito que se sumaba a los importantes contingentes llegados a Europa occidental a lo largo de la década desde lugares muy diversos, sobre todo, desde las antiguas colonias de Asia y África, cuyos habitantes acudían ahora a las metrópolis. La libre circulación por Europa fruto del espacio Schengen facilitó los flujos migratorios después de 1990 de tal modo que entre 1989 y 1995 los cálculos, siempre difíciles de contrastar, estimaban en más de cuatro millones las personas que llegaron al Viejo Continente debido a lo que los medios de comunicación denominaron el «efecto llamada». Una nota característica que distinguió este fenómeno de otros momentos fue el destino de estos emigrantes. Aunque los países más avanzados económicamente constituyeron el foco principal, muy pronto, ya en aquellos primeros años noventa, los que comenzaban no sólo a despuntar sino a crecer con rapidez, como España e Irlanda, empezaron a recibir inmigrantes en menos tiempo y en mucho mayor número. Entre las causas de esta afluencia masiva estaba también la formulación de políticas migratorias más restrictivas en Gran Bretaña, Suecia y Holanda.

No sólo en Europa: la facilidad y el abaratamiento de los costes del viaje y la proliferación de redes organizadas para el tráfico de

personas favorecieron esta auténtica tendencia globalizadora en la que nuevos y viejos destinos se amalgamaron en función de los atractivos económicos. Indonesia, Malasia y Corea del Sur, entre otros, fueron países receptores, lo mismo que los estados del golfo Pérsico, adonde acudieron inmigrantes de la India, Pakistán y Bangladés.

El continente asiático y el Pacífico representaban el área con mayor crecimiento económico; sin embargo, aun cuando su comercio aumentaba de forma espectacular, los países de la región apenas habían avanzado en la integración, ni siquiera en la cooperación militar o económica. El peso de un legado histórico de discordia entre China y Japón, el problema de la división de Corea o la hostilidad con la que el propio Japón era percibido por sus vecinos impedían un equilibrio regional estable. La primacía, por tanto, de los intereses nacionales por encima de las fórmulas de asociación debía conducir a la diplomacia norteamericana a potenciar los lazos bilaterales con China y Japón, una colaboración no exenta de dificultades a causa de los conflictos comerciales y de los recelos hacia la presencia militar norteamericana en el Pacífico.

Con todo, el escenario mundial en los primeros años noventa ofrecía suficientes indicios como para pensar que las grandes potencias estaban decididas, en la medida de sus posibilidades, a reducir e incluso resolver los conflictos existentes y a evitar otros en el futuro. Ya el 5 de diciembre de 1990, poco antes de abandonar el cargo que ocupaba desde 1982, el secretario general de la ONU Javier Pérez de Cuéllar habló de la ocasión que se presentaba para alcanzar una mayor capacidad de acción:

> Las posibilidades reales que tienen ahora las Naciones Unidas están sometidas a prueba por la acción colectiva, sin precedentes, decidida por el Consejo de Seguridad en el caso de la invasión de Kuwait por Irak. Sigo firme en mi convicción de que si estas medidas se basan en un sentido de equidad y aparecen con este distintivo, si se perciben como la consecuencia de un compromiso colectivo disciplinado y no implican el abandono del esfuerzo diplomático para negociar una solución en conformidad con los principios de la Carta, las Naciones Unidas pasarán felizmente la prueba[13].

Fue muy llamativo el apoyo a la ONU expresado por la Cumbre del G-7 de 1991 para que desempeñase un papel decisivo en la diplomacia internacional y fomentase la cooperación en todos los ámbitos. Poco tenía que ver esta actitud con las reticencias –cuando no la crítica abierta– que los miembros del G-7 durante la década de los ochenta habían mostrado hacia la intervención de las Naciones Unidas por considerarla siempre contraria a sus intereses.

En efecto, el final de la Guerra Fría abrió las puertas a una confianza mayor en la eficacia de las acciones desarrolladas a partir de las resoluciones de la ONU para intervenir en muchos de los conflictos heredados de la época anterior e intentar así neutralizarlos y evitar otros futuros. El liderazgo de Estados Unidos parecía compatible con la presencia universal de las Naciones Unidas en un contexto no condicionado por el enfrentamiento de bloques. De hecho, en aquellos primeros años noventa las acciones de la ONU aumentaron de modo considerable, tanto en misiones de pacificación como para reforzar la vigilancia de los acuerdos de alto el fuego o crear zonas seguras destinadas a desplazados y otras poblaciones vulnerables. Incluso, el empleo de la fuerza en las relaciones internacionales exigía una teoría justificativa de la acción moralmente aceptable por las sociedades, puesto que en aquellos años las potencias carecían de motivación para nuevas conquistas[14].

Correspondió a Boutros Boutros-Ghali estimular como secretario general de la ONU esa incipiente atmósfera de optimismo ante el nuevo contexto internacional. Para ello dedicó sus primeros esfuerzos a redactar *Una Agenda para la Paz*, presentada en junio de 1992 y considerada, como ya hemos visto, el gran plan renovador de los fines de la Organización para adaptarlos a la Posguerra Fría. Fue elaborada –y de ahí su trascendencia– por indicación de la cumbre celebrada en Nueva York a finales de enero de aquel año y que reunió a los jefes de Estado y de Gobierno de los países integrantes del Consejo de Seguridad. La reunión pretendía poner las bases de un acuerdo para garantizar un orden más pacífico y estable. De este modo, el programa de las Naciones Unidas se ajustó a los deseos de las potencias de trasladar la cooperación y el diálogo fluido al ámbito

internacional para evitar conflictos reiterando la voluntad de reducir el armamento y aislar a los países que hicieran peligrar la seguridad regional o mundial. Incluso, el texto abordaba de forma directa algunas de las reformas institucionales de la Organización con mayor insistencia reclamadas en distintos foros y que afectaban al Consejo de Seguridad y la estructura financiera[15].

Sin embargo, lo sustancial de la *Agenda* pronto terminaría por frustrarse: la diplomacia preventiva y el mantenimiento de la paz a través de fuerzas de interposición fracasaron estrepitosamente ante los terribles episodios de las guerras balcánicas y los conflictos de los Grandes Lagos, Angola y el Cuerno de África, como hemos tenido ocasión de ver en el capítulo anterior. El único resultado positivo, si podemos hablar en estos términos, fue la decisión del Consejo de Seguridad por la Resolución 827, de 25 de mayo de 1993, de dar carta de naturaleza al Estatuto del Tribunal Internacional para la persecución de los responsables de las violaciones del derecho humanitario internacional cometidas en los territorios de la antigua Yugoslavia, con sede en La Haya. De igual forma actuó el Consejo de Seguridad al crear por la Resolución 955, de 8 de noviembre de 1994, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Si la ONU había tratado de encontrar en el continente africano su puesto como garante de la paz una vez finalizada la Guerra Fría, los acontecimientos desencadenados en los primeros años noventa habían diluido estas esperanzas.

De manera mucho más realista, para Henry Kissinger el orden internacional que se presagiaba a principios de los noventa pasaba inevitablemente por la primacía norteamericana, europea, de China, Japón y Rusia y quizá de la India. Lo más interesante de este nuevo tablero mundial era, probablemente, la dispersión de potencias por los distintos continentes, hecho que introducía una carga de complejidad añadida a las relaciones internacionales[16]. Eran muchos los actores con capacidad de actuación autónoma, y más numerosos aún los pequeños Estados con voluntad de ejercer mayor influencia en su área regional. Estados Unidos debería desempeñar un papel de mediador para tratar de equilibrar los distintos poderes regionales, siempre bajo un principio realista (el mismo que, según

Kissinger, permitió a Washington jugar con el sistema de alianzas dependiendo de las necesidades estratégicas) y no bajo postulados universalistas, cuya aplicación introduciría vacilaciones en la acción exterior, un repliegue norteamericano y la prolongación innecesaria del desorden internacional[17].

Según esta perspectiva, pues, la multiplicación de conflictos ponía de manifiesto que la extensión de la democracia no impide la guerra, y muchas veces los compromisos alcanzados por los Estados superan con creces las posibilidades reales de actuación. Ello genera frustración e incertidumbre en la sociedad, mientras que antes, bajo el control de las superpotencias, la amenaza nuclear había producido, paradójicamente, seguridad en un orden internacional edificado sobre la contención. Después de 1989 el riesgo de una guerra nuclear y los conflictos localizados –y, de una u otra manera, sometidos al control de los más poderosos– también tendieron a desaparecer, pero fueron sustituidos por otros mucho más difíciles de resolver porque afectaban a países o regiones que incluían también territorios en paz. De este modo, el concepto de «guerra» se difuminó y extendió; los conflictos, en realidad, siguieron quedando localizados si bien, a la vez, más globalizados, y es precisamente esta indefinición, tan lejana de la nítida distinción entre amigo y enemigo propia de la Guerra Fría, la que dificultó su erradicación[18]. La nueva situación dejó al descubierto la radicalidad de las numerosas tensiones entre lo que John Lewis Gaddis denominó «fuerzas de integración» y «fuerzas de fragmentación»[19]; aunque de forma subrepticia, unas y otras venían enfrentándose desde los años setenta y ochenta para emerger con claridad a partir de 1991. Estas últimas –entre las que se encontraban los nacionalismos, las desigualdades socioeconómicas tanto en el Tercer Mundo como en los ámbitos más desarrollados, el descontento social y la inadaptación de millones de emigrantes, así como las diferencias religiosas y culturales– actuaron como factores ora retardatarios, ora inhibidores de la «integración», una integración favorecida por aquellas fuerzas que servían de estímulo a los procesos globalizadores, sobre todo en el terreno económico, entre ellas, por ejemplo, el vertiginoso crecimiento de los

sistemas de comunicación. En la relación conflictiva de unas y otras fuerzas, pues, comenzaba a cobrar sentido un nuevo orden internacional[20].

En efecto, la globalización hizo más interdependientes las distintas áreas regionales y Estados del mundo. El final del sistema soviético facilitó la liberalización económica y los intercambios comerciales, proceso favorecido, además, por los avances tecnológicos, que influyeron de forma determinante en la reducción de costes en el sistema de transportes. Con el comienzo de la década de los noventa y la desarticulación de la mayoría de las economías socialistas, cualquier país o, incluso, área regional cerrada sobre sí misma carecería de empuje y quedaría anclada en el pasado. No sólo en el ámbito comercial influyó la globalización; las formas del quehacer político también se vieron muy afectadas en tanto en cuanto los dirigentes, salvo casos excepcionales, tuvieron que facilitar las conexiones y la entrada de flujos de capital y de servicios para poder competir con cierta solvencia en el mercado internacional y lograr, gracias a una cierta socialización de los beneficios, el apoyo de la población. Este proceso, que parecía irreversible, suscitó un amplio debate, y continúa haciéndolo. Para sus detractores se trataba, sencillamente, de una nueva adaptación del capitalismo en su versión más perversa en pro de recortar los logros del Estado del bienestar en beneficio de las grandes multinacionales y en detrimento de los menos privilegiados, que continuaban empobreciéndose; por su parte, los defensores del libre comercio como único pilar del crecimiento económico y, por ende, de la mejora de oportunidades y del aumento de los beneficios y las rentas, veían la globalización como algo necesario y propio del devenir mundial posterior a 1989[21].

En este contexto, el poder disuasorio militar veía mermada su influencia frente al ascenso de fuerzas emergentes como los intereses económicos. Como escribe Silviu Brucan, «los bloques o áreas económicas están sustituyendo a las alianzas militares; los expertos predican el advenimiento de una guerra económica, y el adagio clásico de Clausewitz debe ahora leerse: "la guerra es la continuación del comercio por otros medios"»[22]. Las diferencias de

criterio expuestas en las reuniones del G-7, por ejemplo, avalaban este desplazamiento del poder efectivo hacia el control y distribución de los recursos y las capacidades productivas. Al respecto cabe hacer una breve reflexión sobre la hegemonía de la geopolítica en las décadas posteriores a 1945 y los cambios ocurridos tras 1991. El enfrentamiento sistémico de bloques había hecho del dominio directo o indirecto de las distintas piezas del tablero mundial la esencia del orden anterior; en gran medida, los demás factores de índole cultural, nacional o económica quedaban supeditados a esa lógica. Sin embargo, en los años noventa la variabilidad constituía una nota característica muy relevante: en ocasiones, los problemas derivados de crisis económicas y financieras acaparaban la atención mundial mientras, poco después, un conflicto localizado o las consecuencias de un desastre natural o de los flujos de refugiados movilizaba a los líderes mundiales o regionales. También en este sentido la nitidez del enfrentamiento Este-Oeste tendía a diluirse.

Visto lo anterior, era de esperar que otros focos de fricción sustituyeran o ampliaran los hasta entonces existentes. Tras el final de la Guerra Fría los conflictos regionales se multiplicaron, sobre todo en el antiguo espacio de influencia soviética. Los levantamientos nacionalistas, cuya naturaleza aunaba el celo religioso y la recuperación de símbolos patrióticos silenciados durante la época comunista, salpicaron algunas de las zonas secularmente más problemáticas, pero no sólo estas. Los insurgentes ponían en entredicho tanto la fuerza de la hiperpotencia norteamericana como el tradicional predominio ruso y, todavía más, los principios y valores occidentales, que entendían como corruptores de su idiosincrasia. El discurso de estos movimientos en Chechenia, Afganistán, Bosnia, Kosovo y Argelia, entre otros, amalgamaba la llamada a la solidaridad entre los musulmanes y el rechazo a Occidente, utilizando métodos terroristas para infligir golpes de efecto cuyas repercusiones internacionales favorecieran la unidad de acción entre todos ellos. El germen de una red de organizaciones terroristas, coordinadas gracias a la facilidad de acceso a las nuevas tecnologías, esperaba poner en jaque a Estados Unidos de América y a sus aliados.

Ante un enemigo de estas características tenía que cambiar, necesariamente, la forma de afrontar el problema. Al menos, así parecía indicarlo, por ejemplo, la operación de carácter humanitario desplegada por los norteamericanos en Somalia en diciembre de 1992 bajo el amparo de Naciones Unidas. En aquella ocasión, la Posguerra Fría demostró cómo en uno de los lugares más pobres del planeta los sofisticados sistemas utilizados por el ejército fracasaban ante un enemigo disperso y desorganizado. Según un informe de la propia ONU, en 1993 había en el mundo quince lugares con presencia de cascos azules: las fronteras de Israel (1.269 efectivos), Líbano (5.216), Irak y Kuwait (1.187), Georgia (20), India y Pakistán (39), Camboya (38), Somalia (22.289), Mozambique (6.754), Angola (81), Ruanda (2.206), Liberia (374), Sahara Occidental (336), El Salvador (310), Haití (1.267), la antigua Yugoslavia (30.500) y Chipre (1.235)[23]. La enumeración ofrecía un panorama clarificador de los conflictos de la inmediata Posguerra Fría, donde se incluían tanto los heredados del periodo anterior (por ejemplo, Oriente Medio, Mozambique, Angola, Chipre, el Sahara) como los surgidos en el nuevo contexto internacional (casos de la antigua Yugoslavia, Ruanda o Georgia). En todos estos lugares los factores desestabilizadores eran estructurales, pero habían cobrado mayor fuerza tras los últimos acontecimientos. En gran medida, el orden emergente no sólo no había sido capaz de desactivar algunos de los focos de tensión permanente durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, sino que también había sumado otros derivados de las cambiantes circunstancias posteriores a 1989.

Pongamos, por ejemplo, el caso concreto de África. Considerado como apertura hacia un futuro de revitalización y renacimiento del continente gracias a las esperanzas de transformación que las nuevas circunstancias internacionales permitían albergar, el optimismo sobre el fin de la Guerra Fría en África decayó pronto[24]. A pesar de algunos cambios sustanciales introducidos a comienzos de los años noventa, el continente africano en general y el África subsahariana en particular continuaron mostrando los rasgos más crudos del subdesarrollo, ya que casi dos tercios de los países más pobres del mundo se localizaban en esta región. Por aquellos años, a

las lacras del hambre, el analfabetismo, la contaminación y la miseria de todo tipo se unió la pandemia del sida, que alcanzó cotas de gravedad hasta entonces desconocidas. Como escribe Mark Huband, «el final de la Guerra Fría ha dejado a África huérfana de superpotencias, pero consciente de que ahora tiene por primera vez en sus manos su propio destino como continente de naciones. Ha sido un nacimiento marcado por la decepción, las esperanzas truncadas y el derramamiento de sangre»[25].

Precisamente, en 1989 el Banco Mundial presentó un documento que sería muy debatido entre todos los sectores conocedores de la realidad africana, desde analistas políticos y económicos hasta líderes políticos. El texto, titulado *África subsahariana. De la crisis al desarrollo sostenible,* atribuía esencialmente el fracaso de los planes de relanzamiento económico y de las políticas de ajuste estructural a los Gobiernos africanos por su incapacidad a la hora de gestionarlos. La corrupción, la falta de voluntad reformista o, incluso, la desidia de las elites de poder habían conducido a una situación de agotamiento del modelo de ayuda a los países africanos; de ahí que el Banco Mundial instara –como por entonces hacían las antiguas potencias coloniales y otras instituciones financieras internacionales– a apostar por una transformación política real y profunda si los países afectados querían continuar recibiendo asistencia económica y técnica.

La debilidad del Estado y el elevado número de conflictos activos, fruto de décadas de guerras civiles, golpes de mano y dictaduras de toda condición, exigían algo más que unos cambios en el contexto de la Posguerra Fría, ya que la pérdida de valor del continente en la nueva estrategia internacional no auguraba buenos tiempos para la defensa de la democracia y de los derechos humanos. Si dejamos a un lado el norte de África, en 1989 sólo Botsuana, las Islas Mauricio y Gambia podían presentar un régimen político de carácter más o menos pluripartidista, y aunque a lo largo de los primeros años noventa se constataron procesos de democratización en Benín, Cabo Verde, República Centroafricana, Congo, Guinea-Bissau, Lesoto, Madagascar, Malaui, Mali, Mozambique, Namibia, Níger, Santo Tomé,

Seychelles, Sudáfrica y Zambia, muchos de ellos se frustraron poco después[26].

El despertar del mundo islámico

El fracaso modernizador de los procesos descolonizadores, el deterioro del discurso panarabista, el afianzamiento de tendencias despóticas y dictatoriales en los Estados poscoloniales, la escasa equidad socioeconómica y el desencanto general de buena parte de la población golpearon las conciencias de amplios sectores del mundo musulmán. Algunos de sus intelectuales achacaron esta crisis permanente a la corrupción occidental que había penetrado en el islam, y es en este antioccidentalismo donde subyace el origen de los nuevos movimientos islamistas de finales del siglo xx. Los inmensos beneficios generados por las riquezas energéticas o por las transferencias financieras norteamericanas o soviéticas –dependiendo del interés estratégico de la Guerra Fría– habían apuntalado a algunos Estados comprometidos con el suministro de alimentos y servicios a bajo coste a las capas populares de la sociedad mientras estas aceptaban el sistema sin oponerse a él, un pacto tácito de naturaleza paternalista ahora quebrado por el fin de la Guerra Fría[27].

La ruptura de unidad de criterio entre los países árabes –si es que existía alguna unidad de criterio después de los Acuerdos de Camp David de 1978– desapareció por completo con la Revolución iraní de 1979 y con las dificultades económicas que atravesaron estos países productores de petróleo entre 1982 y 1986 por la bajada del precio del crudo. Las nefastas consecuencias para economías tan dependientes de esta fuente energética, unidas a la inestabilidad de 1989-1991, incidieron en la pérdida de valor estratégico del área en términos de la Guerra Fría. Los Estados árabes mostraron su parte más débil: el crecimiento de sus economías durante determinados periodos no se había correspondido con un desarrollo social equilibrado[28]. Ante el brusco giro de los acontecimientos, amplias masas populares afectadas por la pérdida de los mínimos ofrecidos

hasta entonces por los Gobiernos de sus países se alejaron rápidamente de las autoridades para asumir planteamientos que se les antojaban liberadores de su situación y que procedían de los movimientos islamistas bajo la consigna de «Islamicemos la modernidad»[29].

Los países islámicos habían avanzado muy lentamente y de forma muy matizada en el reconocimiento de los derechos humanos. Al no aceptar la Declaración Universal de 1948 por considerarla fundamentada en una mentalidad y unos valores netamente occidentales, los distintos foros donde fue tratada esta cuestión demoraron el acuerdo hasta septiembre de 1981, cuando en París se dio luz verde a la Declaración Islámica Universal de los Derechos del Hombre, a propuesta del Consejo Islámico para Europa. Por su parte, en agosto de 1990, la Conferencia Islámica aprobó en El Cairo otra declaración de características similares. La naturaleza de estas declaraciones respecto de la de 1948 era completamente distinta. Para los islámicos, la noción de «derechos humanos» dependía ahora directamente de los deberes para con Alá, de ahí que sólo cobrasen sentido dentro de la *Sharía,* la Ley Islámica, cuyos pilares eran el Corán, la *Sunna* y el *Fiqh,* compilación del derecho musulmán. No existía voluntad ni libertad autónoma del hombre, y, por tanto, los derechos carecían de contenido positivo, histórico, logrado después de siglos de avances y retrocesos[30].

Por si esto no bastase, el contexto histórico sirvió para potenciar la tendencia violenta y radical del islamismo, el yihadismo, cuyas acciones terroristas multiplicaron su radio de acción de ámbito nacional en la década de los ochenta al convertirlo en internacional en la década siguiente. Los yihadistas fueron incapaces de forzar cambios de envergadura en los países donde llevaron a cabo sus atentados (Egipto y Argelia, sobre todo) y, favorecidos por el fracaso soviético en Afganistán y la omnipresencia norteamericana en la primera Guerra del Golfo, centraron el objetivo de sus acciones en el «enemigo lejano»[31]. En efecto, dentro de la sociedad internacional de la inmediata Posguerra Fría el islamismo encarnaba la defensa de una forma de entender la vida política, social, económica y cultural contrapuesta al modelo occidental, esto es, al liberalismo capitalista

y también al socialismo en un sentido amplio, entendidos ambos como partes de una misma forma de dominio. No es una mera especulación: las prospectivas realizadas apuntaban al hecho de que, en el caso de haber elecciones libres en los países árabes, la inmensa mayoría de la población votaría a formaciones claramente antioccidentales.

Por su parte, y ante el final de la Guerra Fría, el mundo occidental comenzó a percibir de forma diferente la situación del islam y descubrió con mayor clarividencia la falla existente entre los países desarrollados del mundo capitalista y los demás, dentro de los cuales se hallaban los Estados con mayoría musulmana. En estos últimos la falta de expectativas de la población joven desplazó su centro de interés desde la occidentalización hacia el fundamentalismo islámico como reacción contra la política de Estados Unidos y sus aliados en el área y contra la incapacidad de los Gobiernos para solucionar problemas estructurales[32]. El final de la Guerra Fría, la muerte de Jomeini y la penetración del islam en Europa a través de la emigración contribuyeron a familiarizar a las sociedades desarrolladas con términos como «integrismo» o «fundamentalismo islámico». Lo que hasta hacía poco tiempo parecía un fenómeno exótico, reducido a una forma de reacción contra un excesivo protagonismo de las formas de vida occidentales en algunos países lejanos, pronto mostró su capacidad de expansión, su virulenta dialéctica y su incidencia en el panorama internacional como elemento desestabilizador. La reactualización y la preeminencia otorgadas a valores religiosos extremadamente tradicionales, considerados superiores al elenco de derechos y deberes propios de cualquier sistema democrático, convertían al islam así entendido en un instrumento potencialmente destructivo. De este modo, la modernidad, en el sentido lato de la palabra, se convertía en el enemigo, en el agente causante de la pérdida de arraigo, de la herencia secular. El modelo de vida occidental –y no tanto una manera u otra de hacer política o economía– era, en consecuencia, la perversión de todos los auténticos valores. Eso sí, más allá de una nueva interpretación de los textos sagrados, «el islamismo es un movimiento político y social que aspira, a pesar de su discurso de

inspiración religiosa, a transformar un sistema político y/o social, y no a propagar una nueva religión»[33].

Los cambios producidos habían dejado huérfanos a los movimientos panarabistas de carácter socialista cuya meta había sido la modernización de sus sociedades y la edificación de Estados laicos. Deslegitimados ideológicamente y sin ayuda económica, técnica ni militar de la URSS, los dirigentes musulmanes que habían optado por esta vía quedaron desprovistos ante sus pueblos del halo de luchadores por la libertad y la independencia de sus respectivos países. Los Estados poscoloniales daban cabida a enormes desigualdades socioeconómicas, haciendo patente su fracaso a la hora de satisfacer las demandas de los pueblos para que se llevasen a cabo mejoras de todo tipo. Ante la incertidumbre, comenzó a sonar el tiempo del pasado, el retorno al Libro Sagrado como único medio para acabar con la frustración y, por tanto, la búsqueda de formas políticas y económicas teóricamente basadas en la tradición islámica. La estrecha dependencia respecto de las superpotencias o respecto de sus antiguas metrópolis –según los casos–, unida a la incapacidad de sus elites para mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos, mantuvo a estos Estados en una estabilidad precaria, sometidos al juego de las relaciones entre bloques característico de la Guerra Fría. Al concluir esta, el balance que podían hacer era en general pésimo: escasa o nula democratización, subdesarrollo económico, amplias capas depauperadas[34]. En efecto, en esta región del planeta tanto los sistemas de influencia capitalista como los socialistas revistieron un sesgo profundamente autoritario, y fue precisamente esta falta de instituciones plenamente democráticas una de las causas principales de su fracaso político y de su incapacidad de alcanzar un crecimiento económico equilibrado[35].

En los años ochenta y primeros noventa algunos países como Egipto y Argelia trataron de poner en práctica políticas liberalizadoras que, carentes de coherencia interna y de efectividad, resultaron deficientes y generaron graves problemas en la ya de por sí delicada situación de su economía, incidiendo en el fortalecimiento de partidos o grupos islamistas cuyo objetivo era la toma del poder para demoler lo poco que se había construido hasta entonces[36].

En un primer momento, sin embargo, los cambios en el terreno económico fueron bien recibidos tanto por los expertos como por los Gobiernos occidentales, convencidos de que este trascendental paso vendría seguido de una apertura política: es más, el optimismo con el que se esperaba la democratización incluía a las fuerzas islamistas, vistas como un posible factor estabilizador, una suerte de «democracia cristiana a la musulmana», si se nos permite la expresión; una ingenuidad que los hechos, por desgracia, pronto se encargaron de desmentir. Como escribe la profesora Martín Muñoz, «la capacidad de movilización popular que los islamistas mostraron en la Guerra del Golfo y la experiencia argelina, a continuación, fueron dos factores clave en el cierre del sistema con respecto a la relativa apertura democrática que se había emprendido años antes en esos países»[37]. En efecto, en aquellas circunstancias los fundamentalistas pusieron en el centro de su actuación política a la religión, fuente de principios y valores despreciados por los modernizadores laicos pero capaz, en cambio, de dar esperanza a millones de desheredados en tanto aspiraban a establecer en la Tierra el orden querido por Alá, esto es, a instaurar una teocracia para gobernar las sociedades.

Partiendo de unas premisas ajenas al léxico y a las instituciones de corte occidental, el islamismo comenzaba a postularse como una auténtica alternativa a las formas político-jurídicas de los Estados-nación poscoloniales en el mundo musulmán. El triunfo de la Revolución Islámica en Irán y la caída de la Unión Soviética fueron hitos que sirvieron de estímulo a estas corrientes para organizarse y hacer frente al enemigo. El caso iraní ofrecía a los demás un ejemplo que seguir; ya no era una mera especulación o un deseo, sino que el final del orden de la Guerra Fría abría un mundo de posibilidades a estos movimientos, al «islam político»[38]. Bajo estos supuestos, Irán era por excelencia el modelo del fracaso occidentalizador impulsado por el sah y patrocinado por Estados Unidos; constituía, pues, la ocasión real y concreta de forjar un Estado islámico, incluso en aquellas fechas de principios de los ochenta en las que la Unión Soviética todavía mantenía su vigor. No era solamente Irán, al cual los chiitas de todo el mundo podían tomar como punto de

referencia: en su vertiente sunnita wahabista Arabia Saudita, tradicional aliado norteamericano en la región del Golfo, era un Estado islámico, inspirador, protector y patrocinador del islam como su vecino persa. Precisamente este ejemplo demostraba con clarividencia el diferente tratamiento que de manos de Occidente recibía el fundamentalismo en función de los intereses políticos prevalentes en un momento concreto: en muchos aspectos, Irán y Arabia Saudita tenían muchos rasgos en común: ambos eran regímenes profundamente antidemocráticos, donde la ley religiosa prevalecía sobre cualquier código civil. Es más, en Arabia Saudita las mujeres eran objeto de un trato más vejatorio que en Irán: no podían ir solas por la calle, los índices de analfabetismo eran muy elevados, etc.; sin embargo, al tratarse de un aliado tradicional de Occidente, la imagen que proyectaba carecía de los negros tintes del fundamentalismo iraní.

Del enfrentamiento Este-Oeste a la falla Norte-Sur: a propósito de Huntington

Los conflictos provocados tras la disolución de la URSS enseñaron la lección al nuevo Gobierno norteamericano: el escenario internacional había cambiado, pero Estados Unidos no podía renunciar a su papel de gran potencia militar. Con todo, la Guerra del Golfo le ofreció la posibilidad de encabezar una coalición basada en un amplio consenso entre Estados después de que Sadam Husein violara flagrantemente la legalidad internacional. La naturaleza de la guerra había variado en relación con los años anteriores y los estrategas norteamericanos debían contar con ello si querían demostrar que su país renunciaba a intervenir, ya fuera de forma directa o más solapada, con el fin exclusivo de servir a sus propios intereses[39]. Después de 1991 las causas explicativas de las guerras derivadas, por ejemplo, del enfrentamiento entre bloques, de las luchas por mantener o acabar con el colonialismo, de las apetencias económicas, etc., habían quedado arrumbadas ante la potencialidad de la pugna entre las civilizaciones por sus distintas

formas de entender el mundo, tal como ilustraban las guerras étnicas de la ex-Yugoslavia o del Cáucaso y el emergente poder del fundamentalismo islámico, por citar tan sólo algunos ejemplos. Ante estos nuevos retos, también tuvo que cambiar la política de Clinton respecto a la adoptada por su predecesor[40].

Como vamos a ver a continuación, esta fue la respuesta de Huntington a la nueva realidad internacional. Resultaba paradójico que, precisamente cuando podía tener una capacidad de influencia mucho mayor que durante los años de la Guerra Fría, el mundo occidental tuviera que olvidar sus aspiraciones universalistas (la defensa y extensión de la democracia liberal, los derechos humanos, el mercado) para centrarse en su propio ámbito de actuación dejando al resto de países que resolvieran sus problemas por sí mismos. En última instancia, sería la fórmula para que, pasado el tiempo, los demás acercaran sus posiciones a las occidentales, siempre y cuando se les permitiera preservar sus propios valores[41].

En efecto, el conocido analista Samuel P. Huntington investigó las causas del posible conflicto futuro entre civilizaciones al margen de que fuera discutible su clasificación de estas en occidental, eslava-ortodoxa, islámica, japonesa, confuciana, hindú, latinoamericana y africana[42]. Entre las razones por él aducidas, quizá fuera la principal la diferente visión que cada una de ellas tenía del mundo, esto es, las diversas percepciones sobre las relaciones humanas, sobre el valor de determinados conceptos como la libertad, la igualdad, la autoridad, el papel de la mujer y del hombre en la sociedad, etc. Estas visiones tenderían a entrar en colisión en un mundo más global donde los intercambios proliferaban exponencialmente. Si sobre cuestiones económicas, políticas o sociales, de forma general, se podían alcanzar posiciones cercanas o incluso comunes, sobre estos distintos valores y concepciones era muy difícil llegar a acuerdos o consensos.

En el futuro, Estados Unidos y los países de Europa occidental tendrían que fomentar la cooperación sincera y estrecha entre ellos, así como integrar en sus esfuerzos a los países del Este y del continente americano, con quienes los unían indudables lazos

culturales. Tampoco deberían descuidar las relaciones con Japón y Rusia y, en general, con las regiones asiáticas donde el modelo de vida occidental era valorado por la población. Por supuesto, el control armamentístico habría de figurar entre sus prioridades con el fin de supervisar un posible crecimiento del arsenal en los territorios potencialmente más conflictivos. Por último, Occidente debía comprender la necesidad de conseguir a largo plazo una convivencia pacífica con los demás sin perder los principios y valores de su forma de estar en el mundo. En definitiva, para Huntington la civilización occidental debía mantener la primacía en el escenario internacional; la búsqueda de aliados y la voluntad de compartir sus ideales con el resto del mundo demostraba que, una vez conseguida la victoria de los principios, se hacía necesario convencer de que el sistema democrático liberal, fundamentado sobre ellos, era el que mejor se adecuaba a las condiciones del nuevo orden[43].

El proceso de globalización abría las puertas a la vía de fortalecer los procesos modernizadores presentes en buena parte del planeta pero, como contrapartida, tendía a reafirmar viejas identidades, entre ellas, las religiosas. Algunos individuos buscaban certezas en interpretaciones radicales de carácter religioso cuya finalidad era preservar su propia identidad, vapuleada por una realidad cambiante. Además, el mundo extraeuropeo quería organizar su futuro mediante fórmulas políticas, económicas y de relaciones sociales al margen de lo que entendía como una omnipresencia occidental, y con frecuencia este rechazo se volvía odio. La universalización de los valores occidentales, el hecho de que se convirtieran en los únicos posibles –por ejemplo, la voluntad de extender la democracia como forma óptima de gobierno, acompañada de la primacía económica–, generaba respuestas beligerantes entre quienes no los compartían. En efecto, «el mundo se hace más pequeño y la proximidad acentúa las diferencias. La modernización social y económica aleja la identidad nacional y acerca la identidad cultural que, al igual que la religión, es excluyente: no se puede pertenecer a dos o más, al menos simultáneamente»[44].

Una parte de las críticas recibidas por Huntington puso de manifiesto lo ineluctable del proceso por él trazado: la evolución de las civilizaciones hacia el conflicto. La división ideológica de la Guerra Fría permitió que emergieran en Europa las diferencias entre la cristiandad en sus dos versiones, ortodoxa y occidental, y entre ellas y el islam. Huntington daba a entender que a tenor de la historia y, sobre todo, de la realidad posterior a la caída del Muro, podría darse una alianza entre varias civilizaciones o entre todas en contra de Occidente. La hipótesis de futuro chocaba, no obstante, con algunas evidencias. Para llevar a cabo su estudio, el analista norteamericano consideraba cada civilización como si fuera un compartimento estanco, cohesionado internamente, sin fracturas, cuando cualquier investigación –por poco pormenorizada que fuera– de China, India o los países musulmanes hacía patentes las tajantes divisiones que existían dentro de esas presuntas unidades de acción. A esta interpretación se le escapaban, además, algunas consideraciones sobre muchas de las grandes transformaciones ocurridas en los primeros años noventa, especialmente las derivadas del proceso de globalización.

Por ejemplo, al considerar la primera Guerra del Golfo como un caso evidente de lucha entre dos civilizaciones, Huntington parecía olvidar que el control estratégico de un recurso tan importante como el petróleo había desempeñado un papel fundamental en el conflicto. El mero recuento del elevado número de países islámicos que habían apoyado a la coalición contra Irak desbarataba el argumento de conflicto entre civilizaciones, desplazado por el enfrentamiento entre distintos intereses económicos. El juego de poderes entre civilizaciones para establecer un nuevo equilibrio en tensión parecía muy alejado de la realidad en los años posteriores a la publicación del libro de Huntington. No obstante, la identificación, tras la Guerra Fría, de nuevos focos de fricción en torno a principios relacionados con elementos de civilización era plausible; ahí radicaba su potencialidad interpretativa. De hecho, para Huntington uno de los más graves problemas de la situación internacional era la inexistencia dentro de la civilización musulmana de un Estado poderoso con capacidad defensiva nuclear y cuya legitimidad y

fuerza fueran suficientes como para erigirlo en garante del orden; esto es, dicho en clave de Guerra Fría, la inexistencia de un enemigo solvente junto al cual Estados Unidos pudiera liderar un nuevo equilibrio de poder.

Por otro lado, el tan criticado Huntington se mostraba mucho más cauteloso y ponderado de lo que se le ha reprochado: en ningún momento adoptaba una posición de superioridad de la civilización occidental respecto a las demás, sino que asumía el equilibrio entre civilizaciones llamadas a continuar en la historia, ante lo cual era necesario buscar puntos de encuentro y de adaptación cultural. Es más, los procesos de modernización que, según su interpretación, terminarían inevitablemente con las dictaduras no podían identificarse en exclusividad con el patrón democrático occidental[45]. La modernización es factible sin occidentalización. Como escribe Carlos Alonso Zaldívar, en función de las explicaciones de Lee Kuan Yew, el inspirador de las transformaciones democratizadoras en Singapur:

> No hay que olvidar que, empezando por Japón y siguiendo por Corea y Singapur, por no citar ya a China, la experiencia de crecimiento de estos países se ha hecho por vías distanciadas de los modelos ortodoxos predicados por Occidente. No se trata de que hayan negado punto por punto esos modelos, de hecho han repetido escrupulosamente algunos de sus elementos; pero han introducido variantes decisivas combinando una gran proyección exportadora con proteccionismo doméstico, mercado con interacción estatal y equilibrio presupuestario con buenos índices de educación y salud, con el resultado de acercarse a (o sobrepasar, como Japón) los niveles de vida occidentales. Negar la importancia de los valores asiáticos a la experiencia de crecimiento de estos países indica poca voluntad de entenderlos[46].

Si la Guerra Fría había concluido con el enfrentamiento Este-Oeste, el concepto operativo de «países del Tercer Mundo» o de «países no alineados», en función de su origen, bien se desvanecía, bien sufría una transformación radical. Probablemente la Guerra del Golfo resultó a estos efectos más letal que la propia disolución de la URSS. El apoyo de la mayor parte de los países incluidos bajo esta etiqueta a la coalición internacional hacía añicos no sólo el sueño panarabista –si es que quedaba algo de él–, sino también la posibilidad de quedar al margen de las grandes potencias.

[1] P. Khanna, *El segundo mundo. Imperios e influencia en el nuevo orden mundial,* Barcelona, Paidós, 2008, p. 142. En general, en el centro de Asia «China está ganando el nuevo "gran juego" porque está construyendo la nueva Ruta de la Seda, adoptando lo mejor de las estrategias que los británicos y los rusos utilizaron el siglo pasado: conservar los Estados tapón y aliados, como hicieron los primeros, pero sin el brusco estilo de los segundos. Los intereses de Estados Unidos y de la Unión Europea en Asia central (contraterrorismo, seguridad energética, democratización) todavía superan con mucho la capacidad de los dos imperios para alcanzarlos». *Ibidem,* p. 175.

[2] K. Waltz, «Structural Realism after Cold War», *International Security* 25, 1 (verano de 2000), p. 28.

[3] Z. Brzezinski, *El gran tablero mundial. La supremacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos,* Barcelona, Paidós, 1998.

[4] Valga como ejemplo la interpretación de K. Waltz, *Theory of International Politics,* Reading (Massachusetts), Addison-Wesley, 1979. Como escribió Igor Ivanov, embajador ruso en España entre 1991 y 1998 y luego ministro de Exteriores, «Al término de la Guerra Fría, las relaciones internacionales se quedaron sin los mecanismos tradicionales de mantenimiento de la estabilidad propios de aquella época». *La nueva diplomacia rusa. Diez años de política exterior,* Madrid, Alianza, 2002, p. 72.

[5] P. Khanna, *El segundo mundo. Imperios e influencia en el nuevo orden mundial,* cit., p. 416.

[6] M. Ignatieff, *El nuevo imperio americano. La reconstrucción nacional en Bosnia, Kosovo y Afganistán,* cit., p. 20.

[7] En efecto, a mediados de la década de los noventa la violencia contra la población civil había provocado que el número de bajas militares quedase reducido a un 20 por 100 del total. «Lo que consideramos efectos secundarios indeseables e ilegítimos de las viejas guerras se ha vuelto esencial en la manera de luchar en las nuevas». M. Kaldor, «Introduction», en M. Kaldor y B. Vashee (eds.), *Restructuring the Global Military Sector. Vol. I. New Wars,* Londres, Pinter, 1997, p. 3.

[8] En 1992 Fukuyama publicó *The End of History and the Last Man,* traducido de forma inmediata a multitud de idiomas (en español, *El fin de la Historia y el último hombre,* Barcelona, Planeta, 1992). En él argumentaba que el fracaso de los totalitarismos del siglo XX traería como consecuencia la hegemonía de la democracia liberal y el capitalismo como únicas alternativas política y económica, respectivamente. Sobre cómo se elaboró este texto, las réplicas y contrarréplicas que suscitó y la evolución del pensamiento de su autor a partir de él, véase I. Sanmartín Barros, *Entre dos siglos. Globalización y pensamiento único,* Madrid, Akal, 2007, pp. 205-237.

[9] M. Fulbrook, *Europa desde 1945,* Barcelona, Crítica, 2002, p. 200.

[10] G. Sartori, *La democracia después del comunismo,* Madrid, Alianza, 1993, p. 29. En palabras de J. M. Cuenca Toribio, «la Historia, pues, está lejos de haber arribado a su conclusión. La del comunismo como inspirador de una realidad política plasmada en la Europa central y del Este es, en definitiva, una conquista más de la causa de la libertad. Aún quedan muchas más por acortar el dominio de la injusticia. ¿Será el orden de la

democracia capitalista su único motor?». *Historia y actualidad. Clío en la posada,* Madrid, Actas, 2002, p. 18.

[11] Aunque fracasara en la práctica, el peso histórico del comunismo era demasiado abultado como para prever que pudiera desaparecer rápidamente: «Así, hacia finales del milenio se puede decir que unos setenta años del siglo xx han sido, en realidad, la era del comunismo, ya que el comunismo representó durante esos años el desafío más potente y determinante de toda la tradición histórica en el seno del sistema liberal. Pero nunca como hoy constatamos la ironía de la historia: la ideología que tenía la desorbitada pretensión de anticipar el futuro de toda la humanidad se ha revelado como algo del pasado». E. Nolte, *Después del comunismo. Aportaciones a la interpretación de la historia del siglo xx,* cit., p. 47.

[12] *Ibidem,* p. 116.

[13] Cit. en J. C. Pereira Castañares y P. A. Martínez Lillo, *La ONU,* Madrid, Arco Libros, 2001, p. 88.

[14] R. Cooper, *The Postmodern State and the World Order,* cit., p. 22.

[15] Sobre estos problemas, véase Á. Viñas, «El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: la larga marcha hacia la ampliación», *Cuadernos de Historia Contemporánea* 17 (1995), pp. 41-59. Muchos autores son críticos con la naturaleza del Consejo de Seguridad: «Lejos de representar a todos los miembros de la ONU, es decir, a la comunidad internacional en su conjunto, el Consejo se ha convertido […] en un instrumento de las grandes potencias y, en particular, en una de las instancias disponibles para articular y ejecutar la política exterior de aquel de entre sus miembros aupado a la condición de *primus inter pares:* los Estados Unidos». A. Remiro Brotóns, *Civilizados, bárbaros y salvajes en el nuevo orden internacional,* cit., p. 202.

[16] El desarrollo de este planteamiento puede encontrarse en H. Kissinger, *Diplomacy,* Nueva York, Simon & Schuster, 1994.

[17] Corroborando las palabras de Kissinger, el gran viajero y analista internacional Robert D. Kaplan reflexionaba: «Iría en contra de mi propia experiencia si afirmara que tenemos una solución general para estos problemas. No tenemos el control. A medida que las sociedades se hacen más populosas y complejas, la idea de que una clase dirigente mundial, como la ONU, pueda dirigir la realidad desde arriba, es tan absurda como que la "ciencia" política pueda reducir todo esto a una "ciencia"». *The Ends of the Earth. A Journey at the Dawn of the Twenty-First Century,* Londres, Random House, 1997, p. 436.

[18] «En el nuevo mundo el adversario ya no puede identificarse por adelantado. El adversario es ahora la inestabilidad y puede materializarse en una gran variedad de disfraces». R. W. Tucker y D. C. Hendrickson, *The Imperial Temptation. The New World Order and America's Purpose,* Nueva York, Council of Foreign Relations Press, 1992, p. 27.

[19] Para una explicación detallada de estos conceptos, véase J. L. Gaddis, *The United States and the End of the Cold War,* Oxford (Reino Unido), Oxford University Press, 1992.

[20] «El enfrentamiento de bloques que caracterizaba al mundo después de 1945 y que, con su corolario de peligro de guerra nuclear, domina la historia de la posguerra, suponía un enfrentamiento sistemático que en algunos casos impidió el estallido de determinados problemas –caso de los nacionalismos en Europa del Este, de los problemas fronterizos en

el Tercer Mundo, de la irrupción de la opinión pública en la arena internacional– y, sobre todo, hurtó al sistema de Estados occidentales y al mercado capitalista mundial una gran parte del planeta que estaba dominada por un sistema de estados *socialistas* y una economía planificada». F. J. Peñas Esteban, *Occidentalización, fin de la Guerra Fría y relaciones internacionales,* cit., pp. 198-199.

[21] J. N. Bhagwati, *In Defense of Globalization,* Oxford, Oxford University Press, 2004.

[22] S. Brucan, «El orden mundial tras el fracaso del comunismo y la Guerra del Golfo (Panorámica desde el Este)», en S. Brucan, A. G. Frank, J. Galtung e I. Wallerstein (eds.), *El orden mundial tras la crisis de la Guerra del Golfo,* Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1993, p. 10.

[23] Cit. en P. Lozano Bartolozzi, *De los imperios a la globalización: las relaciones internacionales en el siglo xx,* cit., p. 864.

[24] J. W. Harbeson, «Introducing Africa in World Politics: a Mind Renewal, Deepening Crisis?», en J. W. Harbeson y D. Rothchild (eds.), *Africa in World Politics: Post-Cold War Challenges,* Boulder (Colorado), Westview Press, 1995, pp. 7-8.

[25] M. Huband, *África después de la Guerra Fría. La promesa rota de un continente,* cit., p. 17.

[26] L. Rodríguez-Piñero Royo, «Del partido único al "buen gobierno": el contexto internacional de los procesos de democratización en el África Subsahariana después de la Guerra Fría», en F. J. Peñas (ed.), *África en el sistema internacional: cinco siglos de frontera,* cit., p. 209.

[27] G. Martín Muñoz, *El Estado árabe. Crisis de legitimidad y contestación islamista,* cit., p. 205.

[28] La cuestión demográfica no era baladí: ya en 1992 los menores de catorce años constituían el 47 por 100 de la población de las orillas sur y este del Mediterráneo, frente a una franja comprendida entre el 12 y el 25 por 100 en el Mediterráneo norte. A Turquía, Egipto y los países del Magreb, principales focos de emigración en aquellos años, les correspondía entre un 35 y un 50 por 100 de dicho sector. S. Naïr, *Mediterráneo hoy. Entre el diálogo y el rechazo,* cit., p. 35. Partiendo de estos datos, y a la luz de la acogida favorable de las corrientes islamistas entre la juventud, las consecuencias a medio plazo eran fáciles de imaginar.

[29] B. Étienne, *El islamismo radical*, Madrid, Siglo XXI de España, 1996, pp. 102-121. En el caso concreto del norte de África, «Si el islamismo "radical" en el Magreb tiene un rostro diversificado según los países, es, sin embargo, fruto de una época (los años setenta) y el resultado de una inmensa esperanza frustrada (el desarrollo para todos), puesto que no deberíamos olvidar que el islamismo no es una reacción contra la modernización de las sociedades musulmanas, es un producto de esta "modernización"». B. Khader, *El muro invisible,* cit., p. 82.

[30] Véanse P. Buendía, «La Declaración de los Derechos Humanos en el islam. Texto y comentario» e I. Gutiérrez de Terán Gómez-Benita, «La Declaración de 1948 y el concepto islámico de los Derechos Humanos», en R. Martín de la Guardia y G. Á. Pérez Sánchez (dirs.), *Los derechos humanos, sesenta años después (1948-2008),* Valladolid, Universidad de Valladolid, 2009, pp. 265-286 y 287-309, respectivamente.

[31] Sobre esta interpretación, véase F. A. Gerges, *The Far Enemy. Why Jihad Went Global,* Cambridge (Reino Unido), Cambridge University Press, 2005.

[32] «Occidente se encuentra de este modo confrontado a las consecuencias de su propia representación estratégica: al no haber dado antes importancia a los problemas y actores regionales, comprueba tardíamente que los problemas en cuestión, que se han vuelto explosivos, han generado cambios profundos entre los actores». B. Khader, *El muro invisible,* cit., p. 95.

[33] B. Ghalioun, *Islam y política. Las traiciones de la modernidad,* Barcelona, Bellaterra, 1999, p. 82.

[34] «La modernización laica, en cualquiera de sus versiones, solamente benefició a las elites dirigentes de los Estados, y la liberalización y la crisis económica de los años ochenta y noventa ha degenerado en un sistema social menos integrador y más diferenciador –en materia asistencial y educativa, por poner dos ejemplos–, desacreditando y socavando la legitimidad de los Estados modernos laicos del islam». J. L. Neila Hernández, «Islam e islamismo en el horizonte internacional de fin de siglo», *Historia Abierta* 25 (noviembre de 1999), p. 100.

[35] Así lo explica G. Corm, *Le Proche-Orient éclaté, 1956-1991,* París, Gallimard, 1991.

[36] Sobre este fenómeno, véase S. Naïr, «Las causas del crecimiento del islamismo», en VVAA, *Geopolítica del caos,* Barcelona, Temas de Debate, 1999, pp. 314-321.

[37] G. Martín Muñoz, *El Estado árabe. Crisis de legitimidad y contestación islamista,* cit., p. 113.

[38] Así denominaba el periodista Ryszard Kapuściński a estos grupos cuyo objetivo era que el islam se convirtiese en el eje central del Estado; muy relacionado con él, del «islam militante» procedían los terroristas dispuestos a conseguir este fin por cualquier medio. «Del Muro de Berlín a las Torres Gemelas», *Claves de Razón Práctica* 117 (noviembre de 2001), pp. 34-41.

[39] En 1995, por ejemplo, la «Operación Restaurar la Democracia» en Haití fue en general muy bien recibida por el giro radical que introducía respecto a la agresividad con que Estados Unidos había actuado en el Caribe en épocas anteriores. En esta ocasión, el objetivo consistió en restituir en sus funciones a un presidente elegido democráticamente (que, incluso, había reconocido a Cuba antes de ser depuesto) y en conceder, además, una generosa ayuda económica.

[40] «Clinton tardó en intervenir en Bosnia precisamente para distanciarse del todo de lo que había sido la línea de actuación de Bush. El primer paso fue olvidarse de James Baker, que en junio de 1991 todavía se empeñaba en mantener la vieja Federación Yugoslava […]. Tuvo que encontrar una forma de justificar la política de mantener unida la república bosnio-herzegovina y, desde 1994, intentar poner en marcha la nueva federación croato-musulmana». E. Tarnawski, *De la geopolítica a la antipolítica,* Granada, Documentos de Trabajo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 1997, p. 46.

[41] Argumentos similares expuso Alain Minc en *La nueva Edad Media,* Madrid, Temas de Hoy, 1994. El recuerdo de aquella época oscura, a caballo entre el final de Roma y el inicio del Renacimiento, sirvió al autor francés para caracterizar los años posteriores a 1989-1991 como de desorden en el ámbito internacional. A falta de criterios universalmente aceptados,

cada pueblo, país o etnia pretendía elevar los suyos propios a categoría. La ausencia de diálogo, de intercambio fluido, marcaba las tendencias de nuevas –o viejas, según se mirase– formas de ver el mundo (los nacionalismos, el islamismo, etc.), nefastas para lograr un mínimo equilibrio internacional.

[42] Huntington había publicado el artículo «The Clash of Civilizations?», *Foreign Affairs* 72, 3 (verano de 1993), pp. 22-49 y tres años después lo amplió hasta convertirlo en libro (en español, *El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial,* Barcelona, Paidós, 2001).

[43] Según Huntington, el orden internacional obedecía a «un sistema *unimultipolar* formado por una superpotencia y varias potencias principales. La solución de los problemas internacionales requiere la actuación de una única superpotencia, pero siempre en combinación con otros Estados; la única superpotencia puede, sin embargo, vetar determinadas acciones conjuntas de esos mismos Estados. Estados Unidos es el único país que tiene preeminencia en todas las esferas de poder –económica, militar, diplomática, ideológica, tecnológica y cultural– con el alcance y la capacidad para promover sus intereses virtualmente en cualquier parte del mundo». S. P. Huntington, «La superpotencia solitaria», *Política Exterior* XIII, 71 (septiembre-octubre de 1999), p. 40.

[44] B. Pendás, *Teorías políticas para el siglo xxi*, Madrid, Síntesis, 2007, p. 75.

[45] «El triunfo de la democracia como única forma de gobierno legítima ha ido de la mano de la multiplicación de las formas de entenderla. Desde una perspectiva histórica, construimos y deconstruimos tradiciones de pensamiento a las que atribuimos el calificativo de democráticas y que tienen pocos elementos comunes, sólo quizá el énfasis en la necesidad de que exista alguna institución que permita cierta participación popular». E. García Guitián, «La repercusión política del pluralismo valorativo», en P. Badillo O'Farrell (coord.), *Pluralismo, tolerancia, multiculturalismo. Reflexiones para un mundo plural,* Madrid, Akal, 2003, pp. 109-110.

[46] C. Alonso Zaldívar, *Variaciones sobre un mundo en cambio,* cit., p. 245.

Bibliografía

Aarts, P. y Nonneman, G. (eds.), *Saudi Arabia in the Balance: Political Economy, Society, Foreign Affairs,* Londres, Hurst & Co., 2005.

Aburish, S. K., *Arafat: from Defender to Dictator,* Nueva York, Bloomsbury Publishing, 1999.

—, *Yasser Arafat,* París, Saint-Simon, 2003.

Addi, L., *L'Algérie et la démocratie: Pouvoir et crise du politique dans l'Algérie contemporaine,* París, La Découverte, 1994.

Adelkhah, F., *La revolución bajo el velo. Mujer iraní y régimen islamista,* Barcelona, Bellaterra, 1996.

Adelman, H. y Suhrke, A. (eds.), *The Path of a Genocide: the Rwanda Crisis from Uganda to Zaire,* New Brunswick (Canadá), Transaction Publishers, 1999.

Adomeit, H., «Gorbachev and German Unification: Revision of Thinking, Realignment of Power», *Problems of Communism* 39, 4 (julio-agosto de 1990), pp. 1-24.

Afanasiev, Y., «Russian Reform is Dead: Back to Central Planning», *Foreign Affairs* 73, 2 (marzo-abril de 1994), pp. 21-26.

Agonafer, M. (ed.), *Africa in the Contemporary International Disorder: Crises and Possibilities,* Lanham (Maryland), United Press of America, 1996.

Aguilera de Prat, C. R., *La crisis del estado socialista. China y la Unión Soviética durante los años ochenta,* Barcelona, PPU, 1994.

—, «Rusia y la CEI, ¿relaciones de política exterior o interior?», *Revista CIDOB d'Afers Internacionals* 42 (1998), pp. 7-20.

Alcàzar, J. del y Tabanera, N. (coords.), *Estudios y materiales para la historia de América Latina 1955-1990,* Valencia, Universitat de València, 1998.

Algora Weber, M.ª D. y González Noriega, J. F. (coords.), *Palestinos e israelíes: cincuenta años de partición del territorio. La Unión Europea en el Proceso de Paz del Próximo Oriente (Madrid, 24 y 25 de febrero de 1999),* Madrid, Fundación Humanismo y Democracia, 1999.

Ali, T. M. y Matthews, R. O., *Civil Wars in Africa. Roots and Resolution,* Londres, Ithaca, 1999.

Alonso Guinea, F., *Hungría. A las puertas de la Unión Europea. Un modelo de transición al mercado,* Madrid, Erica, 2000.

Alonso Zaldívar, C., *Variaciones sobre un mundo en cambio,* Madrid, Alianza, 1996.

Alsaif, T., *Islamic Democracy and its Limits: the Iranian Experience since 1979,* Londres, Saqi, 2007.

Álvarez-Ossorio, I., *El proceso de paz de Oriente Medio. Historia de un desencuentro,* Madrid, Agencia Española de Cooperación Internacional, 1999.

— (ed.), *Informe sobre el conflicto de Palestina. De los Acuerdos de Oslo a la Hoja de Ruta,* Madrid, Ediciones del Oriente y el Mediterráneo, 2003.

Álvarez-Ossorio, I. y Barreñada, I. (eds.), *España y la cuestión palestina,* Madrid, Los Libros de la Caratata, 2003.

Anand, D., *Geopolitical Exotica: Tibet in Western Imagination,* Mineápolis, University of Minnesota Press, 2007.

Anderle, Á. y Girón, J. (eds.), *Estudios sobre transiciones demócraticas en América Latina,* Oviedo, Universidad de Oviedo, 1997.

Andor, L., *Hungary on the Road to the European Union: Transition in Blue,* Westport (Connecticut), Praeger, 2000.

Andreescu, G. y Molnár, G., *The Transylvanian Question,* Bucarest, Polirom, 1999.

Andreff, W., «El capitalismo ruso», *Vanguardia Dossier. 9. Rusia. Democracia y autocracia* (2004), pp. 39-40.

Andrés Sanz, J. de, «La disolución del Parlamento en septiembre de 1993, ¿un autogolpe en la transición rusa?», *Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol* 41/42 (otoño de 2002-invierno de 2003), pp. 7-23.

—, «Partidos, sistema de partidos y cultura política en la nueva Federación Rusa», *Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol* 26/27 (invierno-primavera de 1999), pp. 31-47.

Andrés Sanz, J. de; Chaves, P. y Luengo, F. (eds.), *La ampliación de la Unión Europea. Economía, política y geoestrategia,* Barcelona, El Viejo Topo, 2002.
Anuario Internacional CIDOB 2006, Barcelona, CIDOB, 2007.
Arikan, H., *Turkey and the EU: an Awkward Candidate for EU Membership?,* Aldershot, Ashgate, 2006.
Arjomand, S. A., *The Turban for the Crown: the Islamic Revolution in Iran,* Bridgewater (Nueva Jersey), Replica Books, 2001.
Arter, D., «The EU Referendum in Finland on 16 October 1994: a vote for the West, not for Maastricht», *Journal of Common Market Studies* 33, 3 (1995), pp. 361-387.
Aslund, A. (ed.), *The Post-Soviet Economy. Soviet and Western Perspectives,* Londres, Pinter, 1992.
Avilés, J. y Sepúlveda, I., *Historia del mundo actual. De la caída del Muro a la Gran Recesión,* Madrid, Síntesis, 2010.
Ayubi, N., *El islam político. Teorías, tradición y rupturas,* Barcelona, Bellaterra, 1996.
Ayuso Canals, J., *La América que deja Reagan,* Madrid, Espasa-Calpe, 1988.
Azcárate, M., «*Perestroika* y Socialismo», *Sistema* 93 (1989), pp. 3-12.
Badillo O'Farrell, P. (coord.), *Pluralismo, tolerancia, multiculturalismo. Reflexiones para un mundo plural,* Madrid, Akal, 2003.
Baeg Im, H., «The Rise of Bureaucratic Authoritarianism in South Korea», *World Politics* 39, 2 (enero de 1987), pp. 231-257.
Bahrmann, H. y Links, Ch., *Wir sind das Volk. Die DDR im Aufbruch: eine Kronik,* Berlín, Aufbau, 1990.
—, *The Fall of the Wall: the Path to German Reunification,* Berlín, Links, 1999.
Bale, T., *The Conservative Party: from Thatcher to Cameron,* Cambridge (Reino Unido), Polity, 2010.
Baker, J., *The Politics of Diplomacy,* Nueva York, Putnam & Sons, 1994.
Balta, P., *El islam,* Barcelona, Salvat, 1996.
Barbé, E., *La seguridad en la nueva Europa,* Madrid, Los Libros de la Catarata, 1995.

Barbé, E. y Johansson-Nogués, E. (eds.), *Beyond Enlargement: the New Frontiers of the Enlarged European Union,* Barcelona, Instituto Universitario de Estudios Europeos, 2003.
Bardi, L.; Ignazi, P. y Massari, O., *I partiti italiani. Iscritti, dirigenti, eletti,* Milán, Università Bocconi Editore, 2007.
Barker, P. (ed.), *The Party of Democratic Socialism in Germany. Modern Post-Communism or Nostalgic Populism?,* Ámsterdam-Atlanta (Georgia), Rodopi, 1998.
Barlinska, I., *La sociedad civil en Polonia y Solidaridad,* Madrid, CIS, 2006.
Bartlett, W., *Croatia: between Europe and the Balkans,* Londres, Routledge, 2003.
Basombrío, C., *Educación y ciudadanía. La educación para los Derechos Humanos en América Latina,* Santiago de Chile, IDEDDHH-CEAAL, 1991.
Bastenier, M. Á., *Israel-Palestina. La casa de la guerra,* Madrid, Taurus, 2002.
Bataković, D. T., *Yougoslavie. Nations. Religions. Idéologies,* Lausana, L'Âge d'Homme, 1994.
Ben-Ami, S., «El proceso de paz árabe-israelí y sus derivaciones geoestratégicas», *Política Exterior* IX, 43 (febrero-marzo de 1995), pp. 89-101.
Beneyto, J. M.; Martín de la Guardia, R. y Pérez Sánchez, G. Á. (dirs.), *Europa y Estados Unidos. Una historia de la relación atlántica en los últimos cien años,* Madrid, Biblioteca Nueva, 2005.
Bennett, V., *Crying Wolf. The Return of War to Chechnya,* Londres, Macmillan, 1999.
Bhagwati, J. N., *In Defense of Globalization,* Oxford (Reino Unido), Oxford University Press, 2004.
Birmingham, D. y Martin, Ph. M. (eds.), *History of Central Africa. Volume III: The Contemporary Years since 1960,* Londres, Longman, 1998.
Blanc Altemir, A., *Conflictos territoriales, interétnicos y nacionales en los Estados surgidos de la antigua Unión Soviética,* Valencia, Tirant Lo Blanch, 2004.

—, *La herencia soviética. La Comunidad de Estados Independientes y los problemas sucesorios,* Madrid, Tecnos, 2004.
Blanco Andrés, R., *El Estado en Filipinas. Marco político y relaciones internacionales (1986-2010),* Barcelona, Bellaterra, 2012.
Blazina, V., «Mémoricide ou la purification culturelle: la guerre contre les bibliotèques de Croatie et de Bosnie-Herzégovine», *Documentation et Bibliotèques* 42 (1996), pp. 149-164.
Boudreau, V., *Resisting Dictatorship: Repression and Protest in Southeast Asia,* Cambridge (Reino Unido), Cambridge University Press, 2004.
Brewer, M. D. y Stonecash, J. M., *Dynamics of American Political Parties,* Cambridge (Reino Unido), Cambridge University Press, 2009.
Brockett, Ch. D., *Political Movements and Violence in Central America,* Cambridge (Reino Unido), Cambridge University Press, 2005.
Brown, A. (ed.), *Political Culture and Communist Studies,* Armonk (Nueva York), M. E. Sharpe, 1985.
— (dir.), *New Thinking in Soviet Politics,* Londres, Macmillan, 1992.
—, *Seven Years that Changed the World. Perestroika in Perspective,* Oxford (Reino Unido), Oxford University Press, 2007.
Brown, A. y Shevtsova, L. (eds.), *Gorbachev, Yeltsin and Putin: Political Leadership in Russia's Transition,* Washington D. C., Carnegie Endowment for International Peace, 2001.
Brucan, S.; Frank, A. G.; Galtung, J. y Wallerstein, I. (eds.), *El orden mundial tras la crisis de la Guerra del Golfo,* Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1993.
Brzezinski, Z., *Out of Control,* Nueva York, Scribner's Sons, 1993.
—, «La gran transformación», *Política Exterior* VIII, 38 (abril-mayo de 1994), pp. 5-20.
—, *El gran tablero mundial. La supremacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos,* Barcelona, Paidós, 1998.
Burg, S. L. y Shoup, P. S., *The War in Bosnia-Herzegovina. Ethnic Conflict and International Intervention,* Armonk (Nueva York), M. E. Sharpe, 1999.
Bush, G. H. W. y Scowcroft, B., *A World Transformed,* Nueva York, Knopf, 1998.

Bustelo, P. *Los cuatro dragones asiáticos. Economía, política y sociedad,* Madrid, ESIC Editorial, 1994.
Calhoun, C., *Neither Gods nor Emperors: Students and the Struggle for Democracy in China,* Berkeley, University of California Press, 1994.
Camau, M.; Hilal Dessouki, A. E. y Vatin, J.-C. (dirs.), *Crise du Golfe et ordre politique au Moyen-Orient,* París, Centre National de la Recherche Scientifique, 1993.
Caracuel Raya, M. A., *Los cambios de la OTAN tras el fin de la Guerra Fría,* Madrid, Tecnos, 2004.
Cardenal, A. S. y Martí i Puig, S. (comps.), *América Central, las democracias inciertas,* Madrid, Tecnos, 1998.
Carrère d'Encausse, H., *El triunfo de las nacionalidades. El fin del imperio soviético,* Madrid, Rialp, 1991.
Chiarini, R., *Destra italiana dall'unità d'Italia a Alleanza Nazionale,* Venecia, Marsilio, 1995.
Close, D., *Nicaragua. The Chamorro Years,* Boulder (Colorado), Lynne Rienner, 1999.
Collins, R., *Transforming America: Politics and Culture during the Reagan Years,* Nueva York, Columbia University Press, 2006.
Collins, S. D., *German Policy-Making and Eastern Enlargement of the EU during the Kohl era: Managing the agenda?,* Mánchester, Manchester University Press, 2002.
Colombo, F., *La tercera posguerra. Conversaciones sobre el poscomunismo,* Barcelona, Tusquets, 1991.
Conlon, P., *United Nations Sanctions Management: a Case Study of the Iraq Sanctions Committee 1990-1994,* Ardsley (Nueva York), Transnational Publishers, 2000.
Cooper, F., *Africa since 1940. The Past of the Present,* Cambridge (Reino Unido), Cambridge University Press, 2002.
Cooper, R., *The Postmodern State and the World Order,* Londres, Demos, 2000.
Cordell, K. (ed.), *Poland and the European Union,* Londres, Routledge, 2000.
Corm, G., *Le Proche-Orient éclaté, 1956-1991,* París, Gallimard, 1991.

Cornudella i Llamarca, M.ª M., «La transición rumana hacia la democracia: Constitución, Partidos y Elecciones», *Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol* 26/27 (invierno-primavera de 1999), pp. 169-194.
Cradock, P., *In Pursuit of British Interests: Reflections on Foreign Policy under Margaret Thatcher and John Major,* Londres, John Murray, 1997.
Cucó, A., *El despertar de las naciones. La ruptura de la Unión Soviética y la cuestión nacional,* Valencia, Publicaciones de la Universidad de Valencia, 1999.
Cuenca Toribio, J. M., *Historia y actualidad. Clío en la posada,* Madrid, Actas, 2002.
—, *La Francia actual. Política y políticos,* Córdoba, Universidad de Córdoba, 2006.
—, *Historia y actualidad 3,* Madrid, Actas, 2009.
—, *Intelectuales y políticos contemporáneos,* Sevilla, Universidad de Sevilla, 2010.
Culla, J. B., *La tierra más disputada. El sionismo, Israel y el conflicto de Palestina,* Madrid, Alianza, 2005.
Ćosić, D., *La Yougoslavie et la question serbe,* Lausana, L'Âge d'Homme, 1992.
Daniels, R. V., *The End of the Communist Revolution,* Londres, Routledge, 1993.
Danspeckgruber, W. F. y Tripp, Ch. (eds.), *The Iraqi Aggression against Kuwait,* Boulder (Colorado), Westview Press, 1996.
Daudet, Y. y Mehdi, R. (dirs.), *Les Nations Unies et l'Ex-Yougoslavie,* París, Pedone, 1998.
Dawisha, K. y Parrott, B. (dirs.), *The Consolidation of Democracy in East-Central Europe,* Cambridge (Reino Unido), Cambridge University Press, 1997.
— (eds.), *Politics, Power, and the Struggle for Democracy in South-East Europe,* Cambridge (Reino Unido), Cambridge University Press, 1997.
Decalo, S., *Coups and Military Rule in Africa: Motivations and Constraints,* New Haven, Yale University Press, 1976.

Delgado Idarreta, J. M. y Andrés Cabello, S. (eds.), *La Rioja, España, Europa,* Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2006.
Deng, F., *Unintended Outcomes of Social Movements: the 1989 Chinese Student Movement,* Nueva York, Routledge, 2010.
Dévoluy, P. y Duteil, M., *La poudrière algérienne. Histoire secrète d'une république sous influence,* París, Calmann-Lévy, 1994.
Dezcallar, R., «La Rusia ex soviética», *Política Exterior* XIII, 70 (julio-agosto de 1999), pp. 101-118.
Diamond, L.; Linz, J. J. y Lipset, S. M. (eds.), *Democracy in Developing Countries: Asia,* Boulder (Colorado), Lynne Rienner, 1989.
Diekmann, K. y Reuth, R. G., *Helmut Kohl: yo quise la unidad de Alemania,* Barcelona, Círculo de Lectores, 1997.
Díez Espinosa, J. R. y Martín de la Guardia, R., *Historia contemporánea de Alemania (1945-1995),* Madrid, Síntesis, 1995.
Dixon, C., *South East Asia in the World Economy,* Cambridge (Reino Unido), Cambridge University Press, 1991.
Drysdale, A. y Hinnebusch, R. A., *Syria and the Middle East Peace Process,* Nueva York, Council on Foreign Relations Press, 1991.
Duch, J. P. y Tello, C. (comps.), *La polémica en la URSS. La perestroika seis años después,* México, Fondo de Cultura Económica, 1995.
Dumbrell, J., *Clinton's Foreign Policy: between the Bushes, 1992-2000,* Londres, Routledge, 2008.
Duverger, M., *La cohabitation des Français,* París, Presses Universitaires de France, 1987.
Ebadí, S., *El despertar de Irán,* Madrid, Aguilar, 2007.
Eisenstadt, T. A., *Courting Democracy in Mexico. Party Strategies and Electoral Institutions,* Cambridge (Reino Unido), Cambridge University Press, 2004.
Elgie, R. (ed.), *Electing the French President: the 1995 Presidential Election,* Nueva York, St. Martin's Press, 1993.
Ellman, M. y Kontorovich, V., *The Disintegration of the Soviet Economic System,* Londres, Routledge, 1992.
Erny, P., *Rwanda 1994: clés pour comprendre le calvaire d'un peuple,* París, L'Harmattan, 1994.
Etienne, G., *Imprevisible Afganistán,* Barcelona, Bellaterra, 2002.

Étienne, B., *El islamismo radical*, Madrid, Siglo XXI de España, 1996.
Evans, E. J., *Thatcher and Thatcherism,* Londres, Routledge, 2004.
Evans, R., *Deng Xiaoping and the Making of Modern China,* Londres, Hamish Hamilton, 1993.
Fandy, M., *Saudi Arabia and the Politics of Dissent,* Londres, Macmillan, 1999.
Faramiñán Gilbert, J. M. de y Pardo de Santayana y Gómez de Olea, J., *El conflicto de Afganistán,* Madrid, Ministerio de Defensa, 2010.
Farber, D. R., *Rise and Fall of Modern Conservatism: a Short History,* Princeton, Princeton University Press, 2010.
Farzamnia, N., *Irán. De la Revolución Islámica a la Revolución Nuclear,* Madrid, Síntesis, 2009.
Favier, P. y Martin-Roland, M., *La décennie Mitterrand. 3. Les défis (1988-1991),* París, Éditions du Seuil, 1996.
Featherstone, K. y Ginsberg, R. H., *The United States and the European Union in the 1990s. Partners in Transition,* Londres, Macmillan Press, 1996.
Fejtö, F., *La transition en Europe. Économie privée et action publique,* París, La Documentation Française, 1993.
Ferfila, B. y Phillips, P., *Slovenia: on the Edge of the European Union,* Lanham (Maryland), University Press of America, 2000.
Fewsmith, J., *China since Tiananmen: from Deng Xiaoping to Hu Jintao,* Nueva York, Cambridge University Press, 2008.
Figel, J. y Roth, W. (eds.), *Slovakia on the Road to EU Membership,* Baden-Baden, Nomos, 2002.
Flores Juberías, C. (ed.), *Estudios sobre la Europa oriental,* Valencia, Publicaciones de la Universidad de Valencia, 2002.
— (dir.), *Europa, veinte años después del Muro,* Madrid, Plaza y Valdés, 2009.
Fondo Monetario Internacional, *Algeria: Stabilization and Transition to the Market,* Washington D. C., FMI, 1998.
Fricke, K.-W., *Opposition und Widerstand in der DDR. Ein politischer Report,* Colonia, Verlag Wissenschaft und Politik, 1984.
Friend, J. W., *The Long Presidency: France in the Mitterrand Years, 1981-1995,* Boulder (Colorado), Westview Press, 1998.

Fritsch-Bournazel, R., «L'ostpolitik et l'effet Gorbatchev», *Politique Internationale* 37 (otoño de 1987), pp. 201-215.
—, *Europa und die deutsche Einheit,* Stuttgart, Bonn Aktuell, 1991.
Fukuyama, F., *El fin de la Historia y el último hombre,* Barcelona, Planeta, 1992.
Fulbrook, M., *Anatomy of a Dictatorship: Inside the GDR, 1949-1989,* Nueva York, Oxford University Press, 1995.
—, *Europa desde 1945,* Barcelona, Crítica, 2002.
Furet, F., *El pasado de una ilusión. Ensayo sobre la idea comunista en el siglo xx,* México, Fondo de Cultura Económica, 1995.
Gaddis, J. L., *The United States and the End of the Cold War,* Oxford (Reino Unido), Oxford University Press, 1992.
Galeotti, M., *The Age of Anxiety. Security and Politics in Soviet and Post-Soviet Russia,* Nueva York, Longman, 1995.
Galli, G., *I partiti politici italiani (1943-2004),* Milán, Biblioteca Universale Rizzoli, 2001.
Galli della Loggia, E., *La morte della patria,* Roma-Bari, Laterza, 1996.
—, *L'identità italiana,* Bolonia, Il Mulino, 1998.
Garde, P., *Vie et mort de la Yougoslavie,* París, Fayard, 1992.
Gardner, A. L., *A New Era in US-EU Relations?: the Clinton Administration and the New Transatlantic Agenda,* Aldershot, Ashgate, 1997.
Garrard, J. y Garrard, C., *Russian Orthodoxy Resurgent*. *Faith and Power in the New Russia,* Princeton, Princeton University Press, 2008.
Garrido Rubia, A., «La consolidación de la democracia en Europa Oriental: una perspectiva comparada», *Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol* 41/42 (otoño de 2002-invierno de 2003), pp. 97-132.
Gehler, M. y Kaiser, W., «A Study in Ambivalence: Austria and European Integration, 1945-1995», *Contemporary European History* 6, 1 (1997), pp. 75-99.
Gehler, M.; Pelinka, A. y Bischof, G. (eds.), *Österreich in der Europäischen Union: Bilanz seiner Mitgliedschaft,* Viena, Böhlau, 2003.
Gélédan, A., *Transitions à l'Est,* París, Le Monde-Édition, 1995.

GERGES, F. A., *The Far Enemy. Why Jihad Went Global,* Cambridge (Reino Unido), Cambridge University Press, 2005.
GERNER, M., *Partei ohne Zukunft? Von der SED zur PDS,* Múnich, Tilsner, 1994.
GHALIOUN, B., *Islam y política. Las traiciones de la modernidad,* Barcelona, Bellaterra, 1999.
GIRÓN, J. y PAJOVIĆ, S. (eds.), *Los nuevos Estados de la antigua Yugoslavia,* Oviedo, Universidad de Oviedo, 1999.
GLAESSNER, G. J., *Der schwierige Weg zur Demokratie. Vom Ende zur deutschen Einheit,* Opladen, Westdeutscher Verlag, 1992.
—, *The Unification Process in Germany: from Dictatorship to Democracy,* Londres, Pinter, 1992.
GOLDSTEIN, S. M. (ed.), *Minidragons. Hong Kong, Singapore, South Korea, Taiwan. Fragile Economic Miracles in the Pacific,* Boulder (Colorado), Westview Press, 1991.
GONIN, J. M., y GUEZ, O., *La caída del Muro de Berlín: crónica de aquel hecho inesperado que cambió el mundo,* Madrid, Alianza, 2009.
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, F. E., *Dual Transitions from Authoritarian Rule: Institutionalized Regimes in Chile and Mexico, 1970-2000,* Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2008.
GONZÁLEZ MARTÍN, R. y MARTÍN DE LA GUARDIA, R., *Chechenia, el infierno caucásico. Historia de un conflicto inacabado,* Alzira (Valencia), Edicions La Xara, 2012.
GORBACHOV, M., *Perestroika. Mi mensaje a Rusia y al mundo entero,* Barcelona, Ediciones B, 1990.
—, *El golpe de agosto. La verdad y sus consecuencias,* Barcelona, Ediciones B, 1991.
—, *Memoria de los años decisivos (1985-1992),* Madrid, Acento Editorial, 1993.
GRAEBNER, N. A.; BURNS, R. D. y SIRACUSA, J. M., *Reagan, Bush, Gorbachev: Revisiting the End of the Cold War,* Westport (Connecticut), Praeger Security International, 2008.
GRANELL, F., «La ampliación de la Comunidad», *Política Exterior* VII, 34 (verano de 1993), pp. 65-80.
—, «La ampliación de la Unión Europea», *Política Exterior* VIII, 40 (agosto-septiembre de 1994), pp. 60-78.

Grass, G., *Alemania, una unificación insensata,* Madrid, Aguilar, 1990.
—, *Ein Schnäppchen namens DDR. Letzte Reden vom Glockengeläut,* Fráncfort del Meno, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1990.
Griffin, M., *El movimiento talibán en Afganistán,* Madrid, Los Libros de la Catarata, 2001.
Grosser, D.; Bierling, S. y Kurz, F. (eds.), *Die sieben Mythen der Wiedervereinigung,* Múnich, Ehrenwirth, 1991.
Grosser, P., *1989. L'année où le monde a basculé,* París, Perrin, 2009.
Haacke, J., *Myanmar's Foreign Policy: Domestic Influences and International Implications,* Londres, International Institute of Strategic Studies, 2006.
Harbeson, J. W. y Rothchild, D. (eds.), *Africa in World Politics: Post-Cold War Challenges,* Boulder (Colorado), Westview Press, 1995.
Heffernan, R., *New Labour and Thatcherism: Political Change in Britain,* Basingstoke, Macmillan, 2000.
Held, D., *La democracia y el orden global: del Estado moderno al gobierno cosmopolita,* Barcelona, Paidós, 1997.
Heller, Á. y Fehér, F., *De Yalta a la «Glasnost»,* Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1992.
—, *El péndulo de la modernidad. Una lectura de la era moderna después de la caída del comunismo,* Barcelona, Ediciones Península, 1994.
Henderson, K. (ed.), *Back to Europe. Central and Eastern Europe and the European Union,* Londres, UCL Press, 1999.
Heraclides, A., *Security and Co-operation in Europe: the Human Dimension, 1972-1992,* Londres, Frank Cass, 1993.
Herles, W., *Geteilte Freude. Das erste Jahr der dritten Republik: eine Streitschrift,* Múnich, Kindl Verlag, 1992.
Herrero de la Fuente, A. (coord.), *Reflexiones tras un año de crisis,* Valladolid, Universidad de Valladolid, 1996.
Herrero de la Fuente, M., «La influencia de Solidaridad en el desarrollo del pluralismo político en Polonia», *Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol* 26-27 (1999), pp. 97-125.
Herzog, R., «Die Grundkoordinaten deutscher Aussenpolitik: Gekürzte Fassung einer Rede anlässlich der 40-Jahr-Feier der deutschen

Gesellschaft für Auswärtige Politik am 11. März 1995», *Internationale Politik* 4 (1995), pp. 3-11.
Heym, S., *Stalin verlässt den Raum,* Leipzig, Reclam, 1990.
Hidalgo Morey, T., *Sendero Luminoso. Subversión y contrasubversión. Historia y tragedia,* Lima, Aguilar, 2004.
Hochleitner, E., «The Political Criteria of Copenhagen and their Application to Turkey. An Analysis and Assessment», *Cuadernos Europeos de Deusto* 33 (2005), pp. 121-151.
Hofmeister, W. y Thesing, J. (eds.), *Transformación de los sistemas políticos en América Latina,* Buenos Aires, CIEDLA, 1996.
Hogg, S. y Hill, J., *Too close to call: Power and Politics, John Major in No. 10,* Londres, Little Brown, 1995.
Holden, G., *Soviet Military Reform,* Londres, Pluto, 1991.
Holmes, L., *Post-Communism. An Introduction,* Cambridge (Reino Unido), Polity, 1997.
Holmes, M., *Thatcherism, Scope and Limits, 1983-1987,* Londres, Macmillan, 1989.
Hottiaux, L. y Liponska-Laberou, J., *La Politique européenne de défense,* París, L'Harmattan, 2000.
Huband, M., *The Liberian Civil War,* Londres, Frank Cass, 1998.
—, *África después de la Guerra Fría. La promesa rota de un continente,* Barcelona, Paidós, 2004.
Hudson, G. E. (ed.), *Soviet National Security Policy under Perestroika,* Boston, Unwin Hyman, 1989, pp. 47-69.
Hunter, A. (ed.), *Rethinking the Cold War,* Filadelfia, Temple University Press, 1998.
Huntington, S. P., «The Clash of Civilizations?», *Foreign Affairs* 72, 3 (verano de 1993), pp. 22-49.
—, «La superpotencia solitaria», *Política Exterior* XIII, 71 (septiembre-octubre de 1999), pp. 39-54.
Hurtado, O., «Aspectos políticos de la integración latinoamericana», *Integración Latinoamericana. BID/INTAL* 153 (enero-febrero de 1990), pp. 1-8.
Iglesias Velasco, A., «El principio de injerencia y la asistencia humanitaria en Somalia», *Tiempo de Paz* 32-33 (primavera-verano de 1994), pp. 43-57.

Ignatieff, M., *El nuevo imperio americano. La reconstrucción nacional en Bosnia, Kosovo y Afganistán,* Barcelona, Paidós, 2003.
Ignazi, P., *Partiti politici in Italia,* Bolonia, Il Mulino, 2008.
Ingham, H. e Ingham, M. (eds.), *European Union Expansion to the East. Prospects and Problems,* Cheltenham, Edward Elgar, 2002.
Inotai, A., «Tareas y retos específicos de la ampliación "oriental" de la Unión Europea», *Lamusa. Pensamiento, Universidad y Red* 2 (2003-2004), pp. 49-54.
Ivanov, I., *La nueva diplomacia rusa. Diez años de política exterior,* Madrid, Alianza, 2002.
Izquierdo Brichs, F. (ed.), *Poder y regímenes en el mundo árabe contemporáneo,* Barcelona, CIDOB, 2009.
Jackson, G., *Civilización y barbarie en la Europa del siglo xx,* Barcelona, Planeta, 1997.
Jamal, A., *Shadow War: the Untold Story of Jihad in Kashmir,* Nueva York, Melville House Publising, 2009.
Janué i Miret, M., *La nova Alemanya. Problemes i reptes de la unificació,* Gerona, Eumo Editorial, 2002.
Jarausch, K. H., *The Rush to German Unity,* Nueva York, Oxford University Press, 1994.
— (ed.), *After Unity. Reconfiguring German Identities,* Oxford (Reino Unido), Berghahn Books, 1997.
Jarausch, K. H. y Gransow, V. (eds.), *Uniting Germany. Documents and Debates 1944-1993,* Oxford (Reino Unido), Berghahn Books, 1994.
Jeffery, Ch. y Sturm, R. (eds.), *Federalism, Unification and European Integration,* Londres, Frank Cass, 1993.
Jeffries, I., *Contemporary North Korea: a Guide to Economic and Political Developments,* Londres, Routledge, 2010.
Jones, Ch. D., *Soviet Influence in Eastern Europe: Political Autonomy and the Warsaw Pact,* Nueva York, Praeger, 1981.
Jowitt, K., *New World Disorder. The Leninist Extinction,* Berkeley, University of California Press, 1992.
Juan Pablo II, *Vi racconto la mia vita,* Ciudad del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2009.
Judt, T., *Postguerra. Una historia de Europa desde 1945,* Madrid, Taurus, 2006.

KABUNDA BADI, M., *La integración africana. Problemas y perspectivas,* Madrid, Agencia Española de Cooperación Internacional, 1993.
KAISER, K., *Deutschlands Vereinigung: Die internationalen Aspekte,* Bergisch Gladbach, Bastei-Lübbe, 1991.
KAISER, K. y BRÜNING, M. (eds.), *East-Central Europe and the EU: Problems of Integration,* Bonn, Europa Union Verlag, 1996.
KAISER, W. y ELVERT, J. (eds.), *European Union Enlargement. A Comparative History,* Londres, Routledge, 2004.
KALDOR, M., *Las nuevas guerras. Violencia organizada en la era global,* Barcelona, Tusquets, 2001.
—, *La sociedad civil global. Una respuesta a la guerra,* Barcelona, Tusquets, 2005.
KALDOR, M. y VASHEE, B. (eds.), *Restructuring the Global Military Sector. Vol. I. New Wars,* Londres, Pinter, 1997.
KALINKA, W. y SCHELL, M., *Stasi und kein Ende: die Personen und Fakten,* Fráncfort del Meno, Ullstein, 1991.
KAPLAN, R. D., *The Ends of the Earth. A Journey at the Dawn of the Twenty-First Century,* Londres, Random House, 1997.
KAPUŚCIŃSKI, R., «Del Muro de Berlín a las Torres Gemelas», *Claves de Razón Práctica* 117 (noviembre de 2001), pp. 34-41.
—, *El Sha o la desmesura del poder,* Barcelona, Anagrama, 2007.
KAZANCIGIL, A. (dir.), *La Turquie au tournant du siècle,* París, L'Harmattan, 2004.
KEPEL, G., *La Yihad. Expansión y declive del islamismo,* Barcelona, Península, 2001.
KEREN, M. y OFER, G. (eds.), *Trials of Transition. Economic Reform in the Former Communist Bloc,* Boulder (Colorado), Westview Press, 1992.
KHADER, B., *Europa y el Mediterráneo. Del paternalismo a la asociación,* Barcelona, Icaria, 1995.
—, *El muro invisible,* Barcelona, Icaria, 1995.
KHANNA, P., *El segundo mundo. Imperios e influencia en el nuevo orden mundial,* Barcelona, Paidós, 2008.
KHOSROKHAVAR, F., *L'islamisme et la mort. Le martyre révolutionnaire en Iran,* París, L'Harmattan, 1995.

KHOSROKHAVAR, F. y ROY, O., *Irán, de la revolución a la reforma,* Barcelona, Bellaterra, 2000.
KIM, S., *The Politics of Democratization in Korea. The Role of Civil Society,* Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2000.
KISSINGER, H., *Diplomacy,* Nueva York, Simon & Schuster, 1994.
KORTE, K., *Deutschlandpolitik in Helmut Kohls Kanzlerschaft: Regierungsstil und Entscheidungen 1982-1989,* Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1998.
KRAUSS, E. S., *Japan's Democracy: How Much Change?,* Nueva York, Foreign Policy Association, 1995.
KROOTH, R. y VLADIMIROVITZ, B., *Quest for Freedom. The Transformation of Eastern Europe in the 1990s,* Jefferson (Carolina del Norte), McFarland & Comp. Inc., 1993.
KRULIC, J., *Histoire de la Yougoslavie. De 1945 à nos jours,* Bruselas, Éditions Complexe, 1993.
KULL, S., *Burying Lenin. The Revolution in Soviet Ideology and Foreign Policy,* Boulder (Colorado), Westview Press, 1992.
KUOSMANEN, A., *Finland's Journey to the Eropean Union,* Maastricht, European Institute of Public Administration, 2001.
KURSKI, J., *Lech Wałęsa: Democrat or Dictator?,* Boulder (Colorado), Westview Press, 1993.
KURZMAN, CH., *The Unthinkable Revolution in Iran,* Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 2004.
LA GRANGE, B. y RICO, M., *Marcos: la genial impostura,* México, Aguilar, 1998.
LAPP, P. J., *Die Blockparteien im politischen System der DDR,* Melle, Ernst Knoth, 1988.
—, *Ausverkauf. Das Ende der Blockparteien,* Berlín, Das Neue Berlin, 1998.
LAURENS, H., *Paix et guerre au Moyen-Orient,* París, Armand Colin, 1999.
LAVIGNE, M., «Perspectivas sobre el futuro de la reforma económica en la antigua Unión Soviética», *Cuadernos del Este* 7 (1992), pp. 91-110.
LEAMAN, J., *The Political Economy of Germany under Chancellors Kohl and Schröder: Decline of the German Model?,* Nueva York,

Berghahn Books, 2009.
Leebaert, D. y Dickinson, T. (dirs.), *Soviet Strategy and New Military Thinking,* Cambridge (Reino Unido), Cambridge University Press, 1992.
LeoGrande, W. M., *Our Own Backyard: The United States in Central America, 1977-1992,* Chapelhill, University of North Carolina Press, 1997.
Lepre, A., *Storia della Prima Repubblica. L'Italia dal 1943 al 2003,* Bolonia, Il Mulino, 2004.
Lew, R., «Los cambios sociales en la China posmaoísta», *Cuadernos del Este* 13 (1994), pp. 107-126.
Lieberthal, K., *Governing China. From Revolution to Reform,* Nueva York, W. W. Norton & Company Inc., 1995.
Lieven, A., *The Baltic Revolution: Estonia, Latvia, Lithuania and the Path to Independence,* New Haven, Yale University Press, 1994.
—, *Chechnya. Tombstone of Russian Power,* New Haven, Yale University Press, 1999.
Lin, G. y Hu, X. (eds.), *China after Jiang,* Washington D. C., Woodrow Wilson Center Press, 2003.
Lindner, B., *Die demokratische Revolution in der DDR 1989/90,* Bonn, Bundeszentrale für Politische Bildung, 1998.
Lion Bustillo, J., «La diplomacia francesa ante la unificación alemana (1989-1990)», *Revista de Historia Actual* 1 (2003), pp. 127-139.
—, *La reunificación alemana y la seguridad europea,* Alzira (Valencia), Edicions La Xara, 2008.
Long, S., *Taiwan: China's Last Frontier,* Londres, Macmillan, 1991.
López García, B.; Martín Muñoz, G. y Hernando de Larramendi, M. (eds.), *Elecciones, participación y transiciones políticas en el norte de África,* Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1991.
López Jiménez, J. A., «Las relaciones interétnicas en la Moldavia postsoviética: Gagauzia y Transnistria (1990-1994)», *Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol* 28/29 (verano-otoño de 1999), pp. 23-50.
Lozano Bartolozzi, P., *De los imperios a la globalización: las relaciones internacionales en el siglo xx,* Pamplona, EUNSA, 2001.

Lydall, H., *Yugoslavia in Crisis,* Oxford (Reino Unido), Oxford University Press, 1989.
Macadar, L., *Restauración democrática y política económica. Uruguay 1985-1989,* Montevideo, Banda Oriental, 1993.
Magaš, B., *The Destruction of Yugoslavia. Tracking the Break-up, 1980-1992,* Nueva York, Verso, 1993.
Maier, Ch., *Dissolution: The Crisis of Communism and the End of East Germany,* Princeton, Princeton University Press, 1997.
Malaquias, A., *The UN in Mozambique and Angola. Lessons Learned,* Dordrecht, Kluwer Publishers, 1996.
Malleret, T. y Delaporte, M., *L'Armée rouge face à la Perestroika,* Bruselas, Éditions Complexe, 1991.
Malo de Molina, C., *El Acta Única Europea,* Valencia, Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana (IMPIVA), 1989.
Mandelbaum, M. (ed.), *The New European Diasporas: National Minorities and Conflict in Eastern Europe,* Nueva York, Council of Foreign Relations Press, 2000.
Maoz, M., *Syria and Israel: from War to Peace-making,* Oxford, Oxford Clarendon Press, 1995.
Margheritis, A., *Ajuste y reforma en la Argentina (1989-1995). La economía política de las privatizaciones,* Buenos Aires, GEL, 1999.
Marquina, A. (ed.), *El Magreb: concertación, cooperación y desafíos,* Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1993.
Marsh, D., *Germany and Europe. The Crisis of Unity,* Londres, Mandarin, 1994.
Martin, E., *Zwischenbilanz, Deutschlandpolitik der 80er Jahre,* Stuttgart, Bonn Aktuell, 1986.
Martin, M. A., *Cambodia. A Shattered Society,* Berkeley, University of California Press, 1994.
Martín de la Guardia, R., «La frontera oriental de Europa. Nuevas perspectivas para viejos problemas», *Saitabi* 55 (2005), pp. 123-141.
—, «Los orígenes del Partido del Socialismo Democrático (1989-1993): el ave fénix roja en Alemania», *Ayer. Revista de Historia Contemporánea* 60, 4 (2005), pp. 285-308.

MARTÍN DE LA GUARDIA, R. y PÉREZ SÁNCHEZ, G. Á., *La Europa del Este, de 1945 a nuestros días,* Madrid, Síntesis, 1995.
—, *Derechos humanos y comunismo,* Madrid, Arco Libros, 1999.
—, «Derechos humanos y guerra en Bosnia-Herzegovina», *Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol* 26/27 (invierno-primavera de 1999), pp. 293-308.
— (coords.), *Revista de Estudios Europeos (monográfico Polonia)* 26 (septiembre-diciembre de 2000), pp. 3-62.
— (eds.), *Los países de la antigua Europa del Este y España ante la ampliación de la Unión Europea / The Former Eastern European Countries and Spain in Relation to the European Union Enlargement,* Valladolid, Universidad de Valladolid, 2001.
— (coords.), *Revista de Estudios Europeos (monográfico República Checa)* 29 (septiembre-diciembre de 2001), pp. 3-64.
— (coords.), *La Europa del Este. Del Telón de Acero a la integración en la Unión Europea,* Madrid, Biblioteca Nueva, 2002.
— (coords.), *Revista de Estudios Europeos (monográfico Rumanía)* 32 (septiembre-diciembre de 2002), pp. 3-100.
— (coords.), *Revista de Estudios Europeos (monográfico Hungría)* 35 (septiembre-diciembre de 2003), pp. 3-121.
— (coords.), *Revista de Estudios Europeos (monográfico Países Bálticos)* 38 (septiembre-diciembre de 2004), pp. 3-76.
— (coords.), *Revista de Estudios Europeos (monográfico Bulgaria, Rumanía, Croacia y Turquía)* 42 (enero-abril de 2006), pp. 3-173.
— (dirs.), *Los derechos humanos, sesenta años después (1948-2008),* Valladolid, Universidad de Valladolid, 2009.
—, *La Europa báltica. De repúblicas soviéticas a la integración en la Unión Europea (1991-2004),* Madrid, Síntesis, 2010.
MARTÍN MUÑOZ, G., «La nueva Constitución argelina: hacia la III República», *Revista de Estudios Políticos* 67 (1990), pp. 261-296.
—, «Argelia en transición: del partido único al pluralismo político», *Revista Awraq* 12 (1991), pp. 93-134.
—, *Política y elecciones en el Egipto contemporáneo (1922-1990),* Madrid, Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe (ICMA), 1992.

—, *El Estado árabe. Crisis de legitimidad y contestación islamista,* Barcelona, Bellaterra, 1999.
—, *Iraq. Un fracaso de Occidente,* Barcelona, Tusquets, 2003.
—, «Democracia y ocupación militar en Oriente Medio», *Ayer. Revista de Historia Contemporánea* 65, 1 (2007), pp. 69-103.
Martínez, L., «Algérie: les massacres de civils dans la guerre», *Revue Internationale de Politique Comparée* 8, 1 (2001), pp. 43-58.
Martínez Laínez, F., «Crimea: la península rebelde», *Revista Española de Defensa* 88 (junio de 1995).
Mayer, N., *Ces Français qui votent Le Pen,* París, Flammarion, 2002.
McCGwire, M., *Perestroika and Soviet National Security,* Londres, The Brookings Institution Press, 1991.
Mendiluce, J. M.ª, «Esperanzas y riesgos en Bosnia», *Política Exterior* X, 54 (noviembre-diciembre de 1996), pp. 63-78.
Merinero Martín, M.ª J., *Incertidumbres en el siglo xxi. Una mirada política,* Cáceres, Universidad de Extremadura, 1998.
Merkl, P. H., *German Reunification in the European Context,* University Park (Pensilvania), Pennsylvania State University, 1993.
Mesa, R., *Palestina y la paz en Oriente Medio,* Madrid, Ediciones Beramar, 1994.
Michta, A. A., *East Central Europe after the Warsaw Pact. Security Dilemmas in the 1990s,* Nueva York, Greenwood Press, 1992.
Miller, J., *Mikhail Gorbachev and the End of Soviet Power,* Londres-Nueva York, St. Martin's Press, 1993.
Milošević, M., *El trigo de la guerra. Nacionalismo y violencia en Kosovo,* Madrid, Espasa, 2001.
Minc, A., *La nueva Edad Media,* Madrid, Temas de Hoy, 1994.
Monedero, J. C. (comp.), *El retorno a Europa. De la perestroika al Tratado de Maastricht,* Madrid, Editorial Complutense, 1993.
Montes, M. O., *La transición postcomunista en la Federación Rusa,* Córdoba (Argentina), Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Córdoba, 2007.
Morgan, I. W., *The Age of Deficits: Presidents and Unbalanced Budgets from Jimmy Carter to George W. Bush,* Lawrence, University Press of Kansas, 2009.

Morlino, L., *Cómo cambian los regímenes políticos,* Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1985.
Morris, E., *Dutch: a Memoir of Ronald Reagan,* Nueva York, Random House, 1999.
Morrison, J., *Boris Yeltsin: from Bolshevik to Democrat,* Nueva York, Penguin Books, 1992.
Mubyabo Ngeleka, M. y Tshibambe, N., «Democracia y conflicto étnico hutu-tutsi en Ruanda», *Tiempo de Paz* 34-35 (1994), pp. 40-53.
Münch, I. von (ed.), *Dokumente der Wiedervereinigung Deutschlands,* Stuttgart, Kröners Taschenbuch, 1991.
Muñoz, H. y Tulchin, J. S. (eds.), *Latin American Nations in World Politics,* Boulder (Colorado), Westview Press, 1996.
Naïr, S., *En el nombre de Dios,* Barcelona, Icaria, 1995.
—, *Mediterráneo hoy. Entre el diálogo y el rechazo,* Barcelona, Icaria, 1996.
Neila Hernández, J. L., «Islam e islamismo en el horizonte internacional de fin de siglo», *Historia Abierta* 25 (noviembre de 1999), pp. 2-5.
Nelson, D. N., «The Costs of Demilitarization in the USSR and Eastern Europe», *Survival* 4 (julio-agosto de 1991), pp. 312-326.
Nolan, P., *Transforming China: Globalization, Transition and Development,* Londres, Anthem, 2004.
Nolte, D., «De la larga agonía de la Argentina peronista a la reconversión menemista. Trasformaciones del sistema político argentino durante la primera presidencia de Carlos Menem», *América Latina Hoy* 11-12 (1995), pp. 31-52.
Nolte, E., *Después del comunismo. Aportaciones a la interpretación de la historia del siglo xx,* Barcelona, Ariel, 1995.
Norton, A. R. (ed.), *Civil Society in the Middle East,* Leiden, E. J. Brill, 1996, vol. II.
Núñez de Prado, S., «Turquía. La llamada del desencuentro entre dos culturas», *Revista de Estudios Europeos* 42 (2006), pp. 71-88.
Nye, J. S., *La paradoja del poder norteamericano,* Madrid, Taurus, 2003.
Offe, C., «¿Capitalismo como objetivo democrático? La teoría democrática frente a la triple transición en la Europa central y oriental», *Debats* 40 (junio de 1992), pp. 38-47.

O'Sullivan, J., *El Presidente, el Papa y la Primera Ministra. Un trío que cambió el mundo,* Madrid, Gota a Gota, 2006.
Paavonen, T., «From Isolation to the Core: Finland's Position towards European Integration, 1960-1995», *Journal of European Integration History* 7, 1 (2001), pp. 53-75.
Palacios, J. M. y Arana, P., «Consolidación democrática e integración internacional: el caso de la Europa del Este», *Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol* 43/44 (primavera-verano 2003), pp. 149-163.
Palazuelos, E., *La economía soviética más allá de la Perestroika,* Madrid, Ediciones Ciencias Sociales, 1990.
Palermo, V. (comp.), *Política brasileña contemporánea: de Collor a Lula en años de transformación,* Buenos Aires, Siglo XXI Iberoamericana, 2003.
Palermo, V. y Novaro, M., *Política y poder en el gobierno de Menem,* Buenos Aires, Grupo Editorial Norma, 1997.
Papacosma, S. V. y Heiss, M. A. (eds.), *NATO in the Post Cold War Era: Does it Have a Future?,* Nueva York, St. Martin's Press, 1995.
Patman, R. G., *The Soviet Union in the Horn of Africa. The Diplomacy of Intervention and Disengagement,* Cambridge (Reino Unido), Cambridge University Press, 1990.
Pavlowitch, S. K., *Tito: Yugoslavia's Great Dictator: a Reassessment,* Londres, Hurst, 1992.
Pedersen, T., *France, Germany and the Integration of Europe,* Londres, Pinter, 1998.
Pendás, B., *Teorías políticas para el siglo xxi,* Madrid, Síntesis, 2007.
Peñas, F. J., «La URSS, la gestación de la crisis del golfo Pérsico y el orden mundial», *Cuadernos del Este* 2 (1991), pp. 83-92.
— (ed.), *África en el sistema internacional: cinco siglos de frontera,* Madrid, Los Libros de la Catarata, 2000.
Peñas Esteban, F. J., *Occidentalización, fin de la Guerra Fría y relaciones internacionales,* Madrid, Alianza, 1997.
Pereira Castañares, J. C., y Martínez Lillo, P. A., *La ONU,* Madrid, Arco Libros, 2001.
Petrov, N., «Partidos políticos y perspectivas de la democracia», *Vanguardia Dossier. 9. Rusia. Democracia y autocracia* (2004), pp.

31-37.
Pettai, V. y Zielonka, J. (eds.), *The Road to the European Union. Vol. 2. Estonia, Latvia and Lithuania,* Mánchester, Manchester University Press, 2003.
Pfister, R., *Apartheid South Africa and African States: from Pariah to Middle Power, 1961-1994,* Londres, Tauris Academic Studies, 2005.
Piscatori, J. (ed.), *Islamic Fundamentalism and the Gulf Crisis,* Chicago, American Academy of Arts and Sciences, 1991.
Poch de Feliu, R., *Tres días de agosto. Golpe y revolución en la URSS,* Barcelona, La Vanguardia, 1991.
—, *La gran transición. Rusia, 1985-2002,* Barcelona, Crítica, 2003.
Pond, E., *After the Wall. American Policy Toward Germany,* Nueva York, Twentieth Century Foundation, 1990.
—, *Beyond the Wall. Germany's Road to Unification,* Washington D. C., The Brookings Institution, 1993.
Pouli-Pleros, I., *L'intégration des pays de l'Europe Centrale et Orientale dans une Europe en transition,* Bruselas, Bruylant, 2002.
Pridham, G.; Herring, E. y Sanford, G. (eds.), *Building Democracy? The International Dimension of Democratization in Eastern Europe,* Nueva York, St. Martin's Press, 1994.
Privitellio, L. de, «A un paso del precipicio: la política argentina entre 1976 y 2008», *Ayer* 73, 1 (2009), pp. 47-72.
Prunier, G., *The Rwanda Crisis: History of a Genocide,* Londres, Hurst & Co., 1995.
Rabil, R. G., *Embattled Neighbors. Syria, Israel & Lebanon,* Boulder (Colorado), Lynne Rienner, 2003.
Rakel, E. P., *Power, Islam and Political Elite in Iran: a Study on the Iranian Political Elite from Khomeini to Ahmadinejad,* Leiden, E. J. Brill, 2009.
Ramet, S. P., *Nationalism and Federalism in Yugoslavia,* Bloomington-Indianápolis, Indiana University Press, 1992.
Ratesh, N., *Romania: the Entangled Revolution,* Nueva York, Praeger, 1991.
Rauschning, D., «Der deutsch-deutsche Staatsvertrag als Schritt zur Einheit Deutschlands», *Aus Politik und Zeitgeschichte* 33 (1990), pp. 3-16.

Reeves, R., *President Reagan: the Triumph of Imagination,* Nueva York, Simon & Schuster, 2005.
Remiro Brotóns, A., *Civilizados, bárbaros y salvajes en el nuevo orden internacional,* Madrid, McGraw-Hill, 1996.
Revel, J.-F., *El renacimiento democrático,* Barcelona, Plaza & Janés-Cambio 16, 1992.
Reza, G. A. de la (coord.), *México: más allá del TLCAN. Competitividad y diversificación de mercados,* México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2004.
Riddell, P., *The Thatcher Decade,* Oxford (Reino Unido), Basil Blackwell, 1989.
Ridley, J., *Tito,* Londres, Constable, 1994.
Robinson, D. Z., *The Strategic Defense Initiative: its Effects on the Economy and Arms Control,* Nueva York, New York University Press, 1987.
Robinson, T. W., *Democracy and Development in East Asia: Taiwan, South Korea and the Philippines,* Washington, The American Enterprise Institute Press, 1991.
Rojo, L. Á.; Sánchez Asiaín, J. A. y Mas-Colell, A., *Reforma económica y crisis en la URSS,* Madrid, Espasa-Calpe, 1991.
Roper, S. D. y Chinn, J., «Ethnic Mobilization and Reactive Nationalism: the Case of Moldova», *Nationalities Papers* 23, 2 (1995), pp. 291-326.
Rotberg, R. I. (ed.), *State Failure and State Weakness in a Time of Terror,* Cambridge (Massachusetts), World Peace Foundation, 2003.
Roux, M., «Guerre civile et enjeux territoriaux en Yougoslavie», *Hérodote. Revue de Géographie et de Géopolitique* 63 (octubre-diciembre de 1991), pp. 14-40.
Rubin, B.; Ginat, J. y Maoz, M. (eds.), *From War to Peace. Arab-Israel Relations, 1973-1993,* Brighton, Sussex Academic Press, 1994.
Rumiantsev, O., «Reforma constitucional en la Federación Rusa», *Economía Exterior* VII, 33 (1993), pp. 85-98.
Rupesinghe, K.; King, P. y Vorkunova O. (eds.), *Ethnicity and Conflict in a Post-Communist World. The Soviet Union, Eastern Europe and China,* Londres-Nueva York, St. Martin's Press, 1992.

RUPNIK, J. (dir.), *De Sarajevo à Sarajevo. L'échec yougoslave,* Bruselas, Éditions Complexe, 1992.
RUPNIK, J. y ZIELONKA, J. (eds.), *The Road to the European Union. Volume 1. The Czech and Slovak Republics,* Mánchester, Manchester University Press, 2003.
RYAN, P., *The Fall and Rise of the Market in Sandinista Nicaragua,* Montreal, McGill-Queen's University Press, 1995.
SAICH, T., *Governance and Politics of China,* Nueva York, Palgrave Macmillan, 2004.
SAIKAL, A. y MALEY, W. (dirs.), *Russia in Search of its Future,* Cambridge (Reino Unido), Cambridge University Press, 1995.
SAKWA, R. y WEBBER, M., «The Commonwealth of Independent States: Stagnation and Survival, 1991-1998», *Europe-Asia Studies* 51, 3 (1999), pp. 379-415.
SAMANIEGO BONEU, M. (coord.), *Reflexiones sobre Europa,* Siena, Centro di Ricerca sull'Integrazione Europea-Università degli Studi di Siena, 2003.
SANGUINETTI, J. M.ª, *El temor y la impaciencia. Ensayo sobre la transición democrática en América Latina,* Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1991.
SANMARTÍN BARROS, I., *Entre dos siglos. Globalización y pensamiento único,* Madrid, Akal, 2007.
SAPIR, J., *¿Adiós al sistema soviético?,* Madrid, Acento, 1993.
SARTORI, G., *La democracia después del comunismo,* Madrid, Alianza, 1993.
SCHIFF, Z. y YAHARI, E., *Intifada,* París, Stock, 1991.
SCHOEPFLIN, G., *Politics in Central and Eastern Europe,* Oxford (Reino Unido), Basil Blackwell, 1995.
SCHRÖDER, R., «The Role of the Protestant Church in German Unification», *Daedalus* 123/1 (invierno de 1994), pp. 251-261.
SEALE, P., «The Syria-Israel Negotiations: Who is Telling the Truth?», *Journal of Palestine* 29, 2 (2000), pp. 65-77.
SEEBACHER-BRANDT, B., *Die Linke und die Einheit,* Berlín, Siedler, 1991.
SEELY, R., *Russo-Chechen Conflict, 1800-2000: a Deadly Embrace,* Londres, Frank Cass, 2001.

Seiffert, W., *Die Deutschen und Gorbatschow: Chancen für einen Interessenausgleich,* Erlangen, Straube, 1989.
Sell, L., *Slobodan Milosevic and the Destruction of Yugoslavia,* Durham (Carolina del Norte), Duke University Press, 2000.
Shambaugh, D., *China's Communist Party. Atrophy and Adaptation,* Berkeley, University of California Press, 2009.
Shevardnadze, E., *El futuro pertenece a la libertad,* Barcelona, Ediciones B, 1991.
Sidjanski, D., *El futuro federalista de Europa. De los orígenes de la Comunidad Europea a la Unión Europea,* Barcelona, Ariel, 1998.
Sieder, R. (ed.), *Central America: Fragile Transitions,* Londres, Macmillan, 1996.
Sixsmith, M., *Moscow Coup. The Death of the Soviet System,* Londres, Simon & Schuster, 1991.
Solinger, D. J., *China's Transition from Socialism. Statist Legacies and Market Reforms, 1980-1990,* Nueva York, M. E. Sharpe, 1993.
Solzhenitsyn, A., *El «problema ruso» al final del siglo xx,* Barcelona, Tusquets, 1995.
Somerville, K., *Foreign Military Intervention in Africa,* Londres, Pinter Publishers, 1990.
Soto Carmona, Á. *et al.* (eds.), *Historia de la transición y consolidación democrática en España (1975-1986),* Madrid, UNED, 1995, vol. II.
Sparks, A., *Tomorrow is Another Country: the Inside Story of South Africa's Negotiated Revolution,* Londres, Mandarin, 1996.
Staar, R. F., *Transition to Democracy in Poland,* Nueva York-Londres, St. Martin's Press, 1998.
Stark, H., *Les Balkans. Le retour de la guerre en Europe,* París, Institut Français des Relations Internationales, 1993.
—, *Helmut Kohl, l'Allemagne et l'Europe: la politique d'intégration européenne de la République fédérale 1982-1998,* París, L'Harmattan, 2004.
Stein, J. P. (ed.), *The Politics of National Minority Participation in Post-Communist Europe: State Building, Democracy and Ethnic Mobilization,* Armonk (Nueva York), East West Institute-M. E. Sharpe, 2000.

SUCKUT, S. y STARITZ, D., «Alte Heimat oder neue Linke? Das SED-Erbe und die PDS-Erben», *Deutschland Archiv* 24, 10 (1991), pp. 1038-1051.
SÜSS, W. (ed.), *Die Bundesrepublik in den achtziger Jahren. Innenpolitik, Politische Kultur,* Opladen, Leske + Budrich, 1991.
SZILÁGYI, I., *Hungría y el mundo,* Veszprém, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2001.
SZPORLUK, R., «The Burden of History Made Lighter by Geography?», *Problems of Communism* XXXIX, 5 (julio-agosto de 1990), pp. 45-48.
TAIBO, C., *Unión Soviética. La quiebra de un modelo,* Madrid, Los Libros de la Catarata, 1991.
—, *Las fuerzas armadas en la caída del sistema soviético,* Madrid, Los Libros de la Catarata, 1993.
—, «El conflicto de Chechenia: una guía de urgencia», *Cuadernos Bakeaz* n.º 7 (febrero de 1995).
—, *La Rusia de Yeltsin,* Madrid, Síntesis, 1995.
—, *Guerra en Kosova. Un estudio sobre la ingeniería del odio,* Madrid, Los Libros de la Catarata, 2001.
—, «El conflicto de Chechenia», *Ayer. Revista de Historia Contemporánea* 65, 1 (2007), pp. 131-151.
TARNAWSKI, E., *De la Geopolítica a la antipolítica,* Granada, Documentos de Trabajo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 1997.
TAVARES RIBEIRO, M. M. (coord.), *Olhares sobre a Europa,* Coimbra, Quarteto, 2002.
TAYLOR, F., *El Muro de Berlín: 13 de agosto de 1961-9 de noviembre de 1989,* Barcelona, RBA, 2009.
TERPAN, F., *La politique étrangère et de sécurité commune de l'Union Européenne,* Bruselas, Bruylant, 2003.
THATCHER, M., *Los años de Downing Street,* Madrid, Aguilar, 1994.
THAYSEN, U., *Der Runde Tisch. Oder: Wo blieb das Volk,* Opladen, Westdeutscher Verlag, 199O.
TIRASPOLSKY, A. y MINK, G., «La maison commune européenne», número monográfico, *Le Courrier des Pays de l'Est* 349 (1989).
TONCHEV, P., *Pakistán. El Corán y la espada,* Madrid, Los Libros de la Catarata, 2006.

TORRES, J. J., *El concepto "integración latinoamericana": contenidos, reformulaciones y continuidades,* Buenos Aires, Dunken, 2008.
TROY, G., *The Reagan Revolution: a Very Short Introduction,* Oxford (Reino Unido), Oxford University Press, 2009.
TUCKER, R. W. y HENDRICKSON, D. C., *The Imperial Temptation. The New World Order and America's Purpose,* Nueva York, Council of Foreign Relations Press, 1992.
TULCHIN, J. S. y ESPACH, R. H. (eds.), *América Latina en el nuevo sistema internacional,* Barcelona, Bellaterra, 2004.
TUSELL, J. y SOTO, Á. (eds.), *Historia de la transición (1975-1986),* Madrid, Alianza, 1996.
VALDÉS, F. y TARASOV, O., «La Comunidad de Estados Independientes: génesis y perspectivas», *Política Exterior* VII, 33 (1993), pp. 25-46.
VEIGA, F., *La trampa balcánica,* Barcelona, Grijalbo, 1995.
—, *Slobo. Una biografía no autorizada de Milošević,* Barcelona, Debate, 2004.
VIDAL-BENEYTO, J. (coord.), *Progreso sostenible e integración regional en América Latina. Programa PAL,* Valencia, Fundación Amela, 2006.
VIÑAS, Á., «El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: la larga marcha hacia la ampliación», *Cuadernos de Historia Contemporánea* 17 (1995), pp. 41-59.
VOAS, J., *Soviet Attitudes towards Ballistic Missile Defence and the ABM Treaty,* Oxford (Reino Unido), Brassey's for the International Institute for Strategic Studies, 1990.
VOGEL, E. F., *The Four Little Dragons. The Spread of Industrialization in East Asia,* Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 1992.
VOLTEN, P. (comp.) *Uncertain Futures: Eastern Europe and Democracy,* Boulder (Colorado), Westview Press, 1990.
VVAA, *La Comunidad Europea y sus vecinos del Este,* Luxemburgo, Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 1991.
VVAA, *Le livre noir de l'ex Yougoslavie. Purification ethnique et crimes de guerre,* París, Arléa, 1993.
VVAA, *Geopolítica del caos,* Barcelona, Temas de Debate, 1999.

VVAA, *La Unión Europea sigue creciendo,* Luxemburgo, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 2001.
VVAA, *Soberanía del Estado y Derecho Internacional. Homenaje al profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo,* Sevilla, Universidades de Sevilla, Córdoba y Málaga, 2005, tomo I.
WALKER, R., *Six Years that Shook the World. Perestroika, the Impossible Project,* Mánchester, Manchester University Press, 1993.
WALLACE, C.; CHMOULIAR, O. y SIDORENKO, E., *The Eastern Frontier of Western Europe: Mobility in the Buffer Zone,* Viena, Institute of Advanced Studies, 1997.
WALTZ, K., *Theory of International Politics,* Reading (Massachusetts), Addison-Wesley, 1979.
—, «Structural Realism after Cold War», *International Security* 25, 1 (verano de 2000), pp. 5-41.
WEIDENFELD, W. y KORTE, K. (eds.), *Handwörterbuch zur deutschen Einheit,* Fráncfort del Meno, Campus, 1992.
WEISSMAN, F., «Liberia: derrière le chaos, crises et interventions internationales», *Relations Internationales et Stratégiques* 23 (1996), pp. 82-99.
— (ed.), *A la sombra de las guerras justas. El orden internacional y la acción humanitaria,* Barcelona, Icaria, 2004.
WEIZSÄCKER, R. VON, *De Alemania a Europa. El impulso de la Historia,* Barcelona, Galaxia Gutenberg, 1995.
WENDT, H., «Die Deutsch-Deutschen Wanderungen. Bilanz einer 40jährigen Geschichte von Flucht und Ausreise», *Deutschland Archiv* 24, 4 (1991), pp. 386-395.
WHITE, G., *Democracy and Economic Reform in China,* Brighton, Institute of Development Studies, 1991.
WHITE, S., «The Election to the USSR Congress of People's Deputies March 1989», *Electoral Studies* 9,1 (1990), pp. 59-66.
WIARDA, H. J., *Democracy and its Discontents: Development, Interdependence, and U. S. Policy in Latin America,* Lanham (Maryland), Rowman & Littlefield, 1995.
WILSON P. W. y GRAHAM, D. F., *Saudi Arabia: the Coming Storm,* Nueva York, M. E. Sharpe, 1994.

WINTERS, P. J., «Ein neues Demokratiegefühl. Die Volkskammer ist nicht mehr sprachlos», *Deutschland Archiv* 22, 12 (1989), pp. 1331-1339.
WOLLE, S., «In the Labyrinth of the Documents: the Archival Legacy of the *SED*-State», *German History* 10, 3 (1992), pp. 352-365.
WOODBY, S., *Gorbachev and the Decline of Ideology in Soviet Foreign Policy,* Boulder (Colorado), Westview Press, 1989.
WRIGHT, T., *Accepting Authoritarianism: State-Society Relations in China's Reform Era,* Berkeley, University of California Press, 2010.
YAN KONG, T., *The Politics of Economic Reform in South Korea. A Fragile Miracle,* Londres, Routledge, 2000.
YANNUZZI, M.ª Á., *La modernización conservadora. El peronismo de los 90,* Buenos Aires, Editorial Fundación Ross, 1995.
YELTSIN, B., *El líder de la nueva URSS. Memorias,* Madrid, Ediciones Temas de Hoy, 1990.
YETIV, S. A., *Explaining Foreign Policy: U.S. Decision-Making and the Persian Gulf War,* Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2004.
YOUNG, H., *Margaret Thatcher. La mujer de hierro,* Buenos Aires, Javier Vergara Editor, 1992.
ZAPATER ESPÍ, L. T., *El nacionalismo ruso. La respuesta euroasiática a la globalización,* Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, 2005.
ZEMAN, Z. A. B., *The Making and Breaking of Communist Europe,* Oxford (Reino Unido), Basil Blackwell, 1991.
ZIYANG, Z., *Prisoner of the State: the Secret Journal of Zhao Ziyang,* Londres, Simon & Schuster, 2009.
ZORGBIBE, CH., *Histoire de l'OTAN,* Bruselas, Éditions Complexe, 2002.

Mapas



Mapa 1. Los dos Estados alemanes hasta 1991.



Mapa 2. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (elaborado a partir de J. Swift, *Atlas histórico de la Guerra Fría,* Madrid, Akal, 2008, p. 111).



Mapa 3. La Federación Rusa y las repúblicas autónomas *(elaborado a partir de R. Overy, Atlas histórico del siglo xx, Madrid, Akal, 2009, p. 142)*.



Mapa 4. Europa central y sudoriental (*ca.* 1995).



Mapa 5. La fragmentación de Yugoslavia y la guerra (a partir de 1991) *(elaborado a partir de A. Sellier y J. Sellier, Atlas de los pueblos de Europa Central, Madrid, Acento, 1995)*.

VIVIR JUNTOS EN BOSNIA-HERZEGOVINA antes de 1991

Más del 50% de la población era:

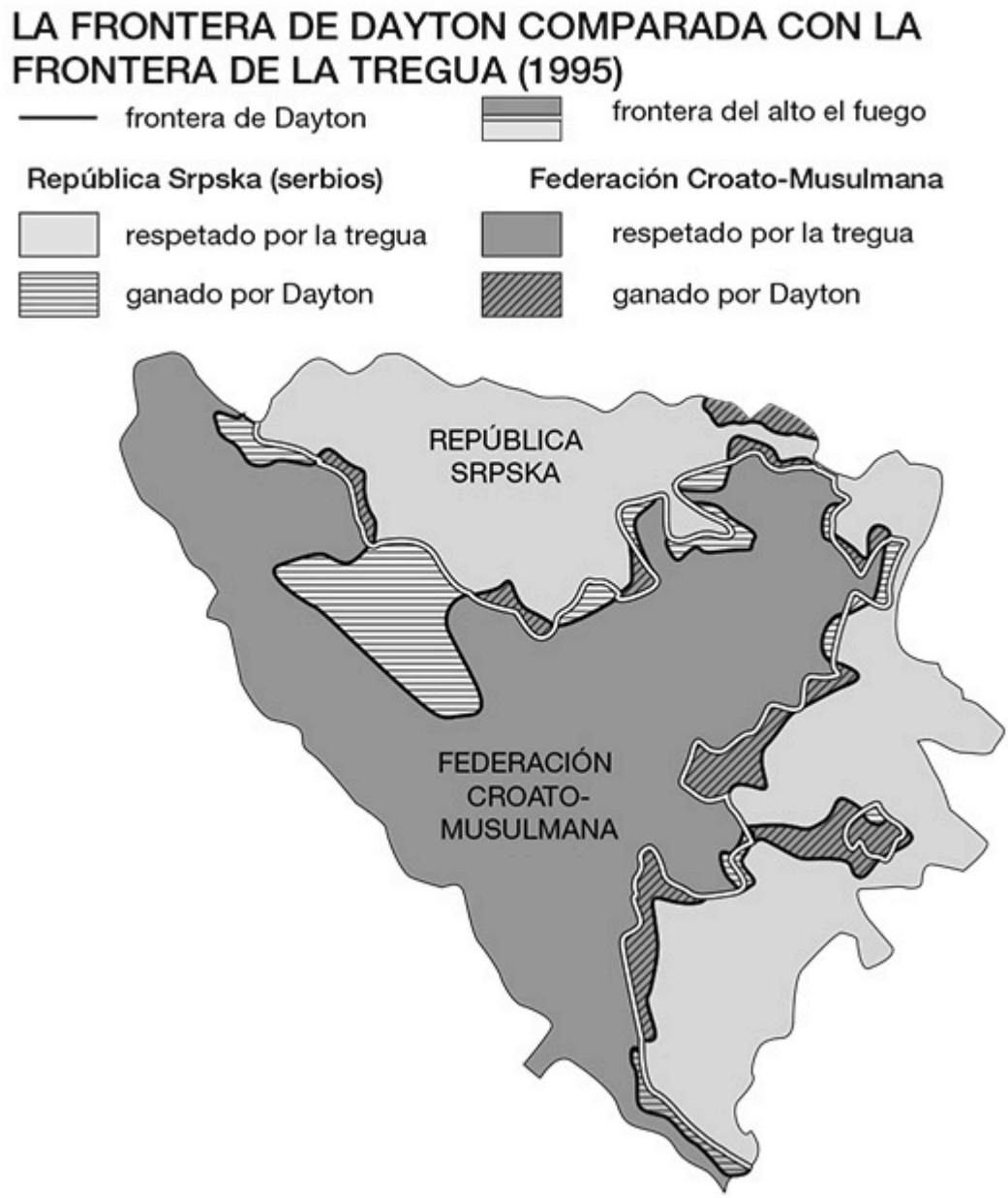
serbia

croata

musulmana

ningún grupo étnico mayoritario



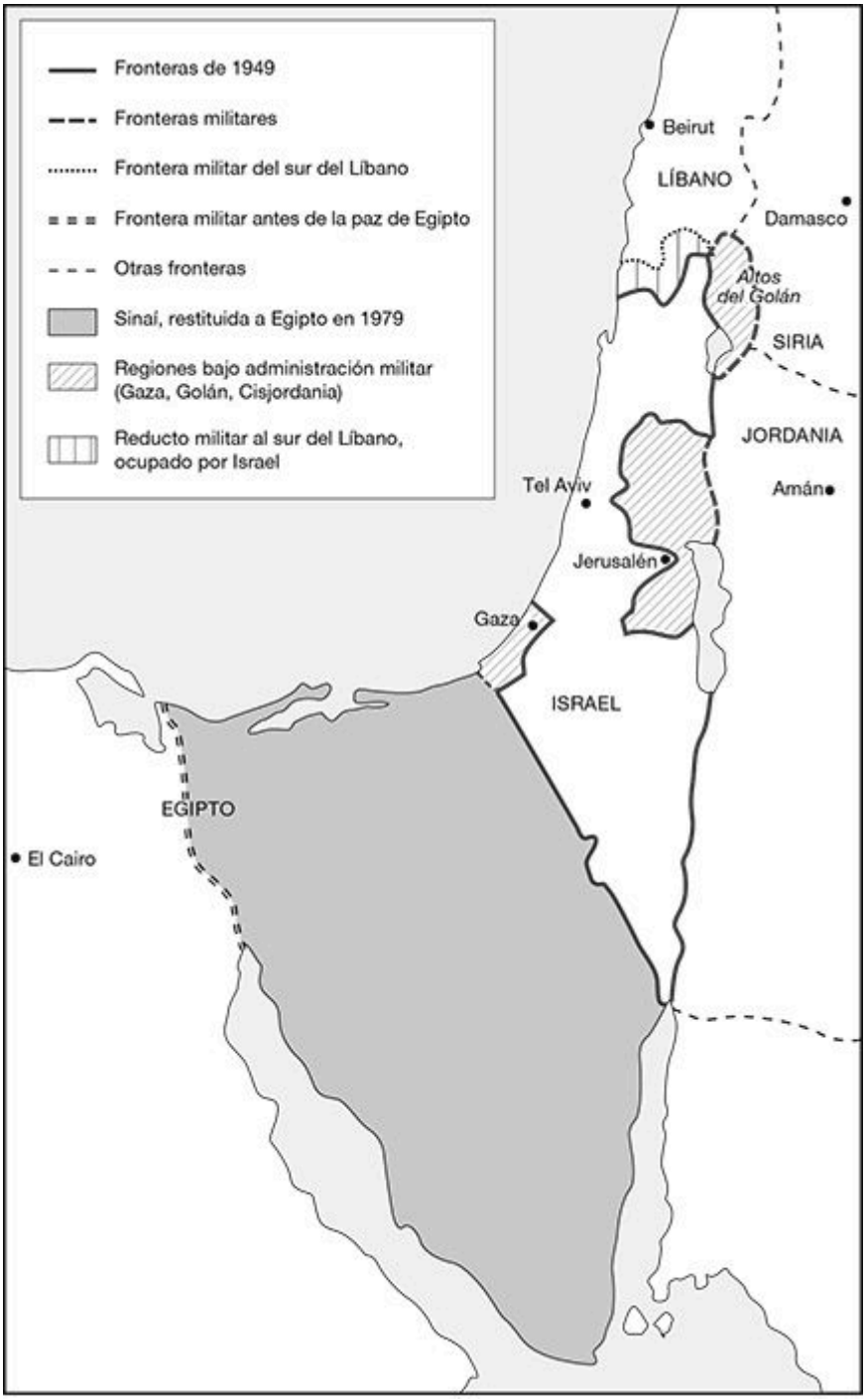


Mapa 6. Bosnia-Herzegovina, 1991-1995 (elaborado a partir de D. Smith, *Atlas de la guerra y de la paz,* Madrid, Akal, 1999, p. 35).

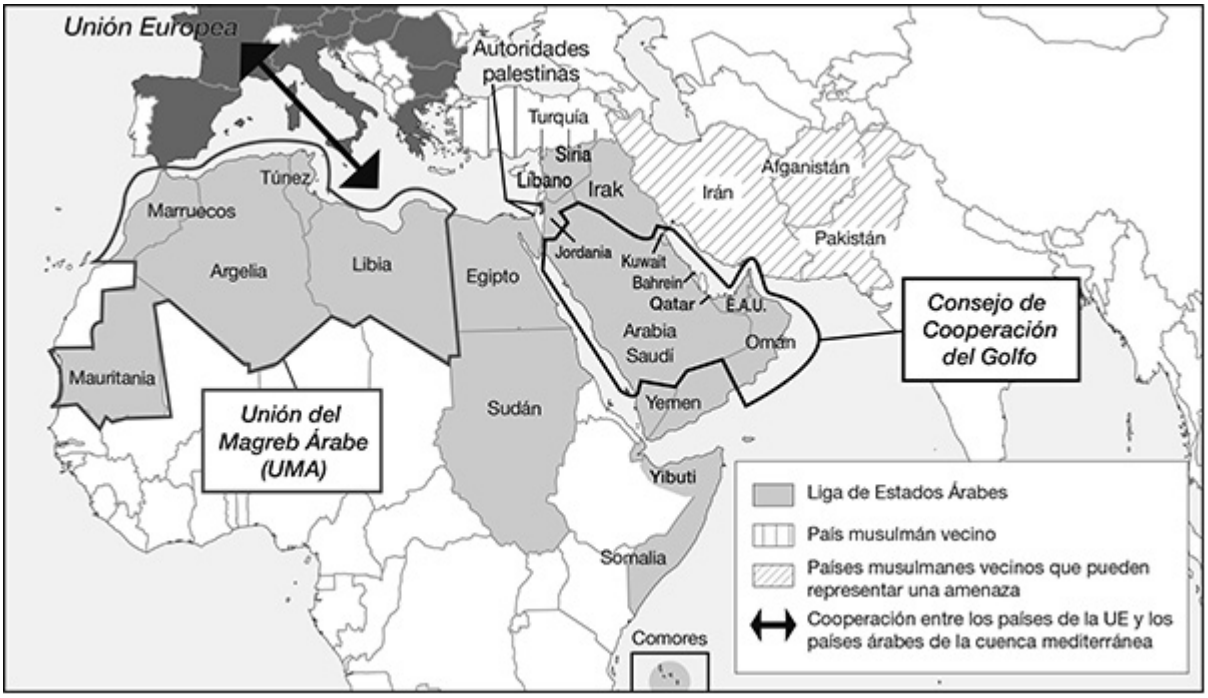
A partir de 1986 la Comunidad Económica Europea (desde 1995 la Unión Europea) se amplió más allá de Europa occidental para crear una estructura de alcance continental de miembros plenos y asociados.



Mapa 7. La Unión Europea de los Quince *(elaborado a partir de R. Overy, Atlas histórico del siglo xx, Madrid, Akal, 2009, p. 146)*.



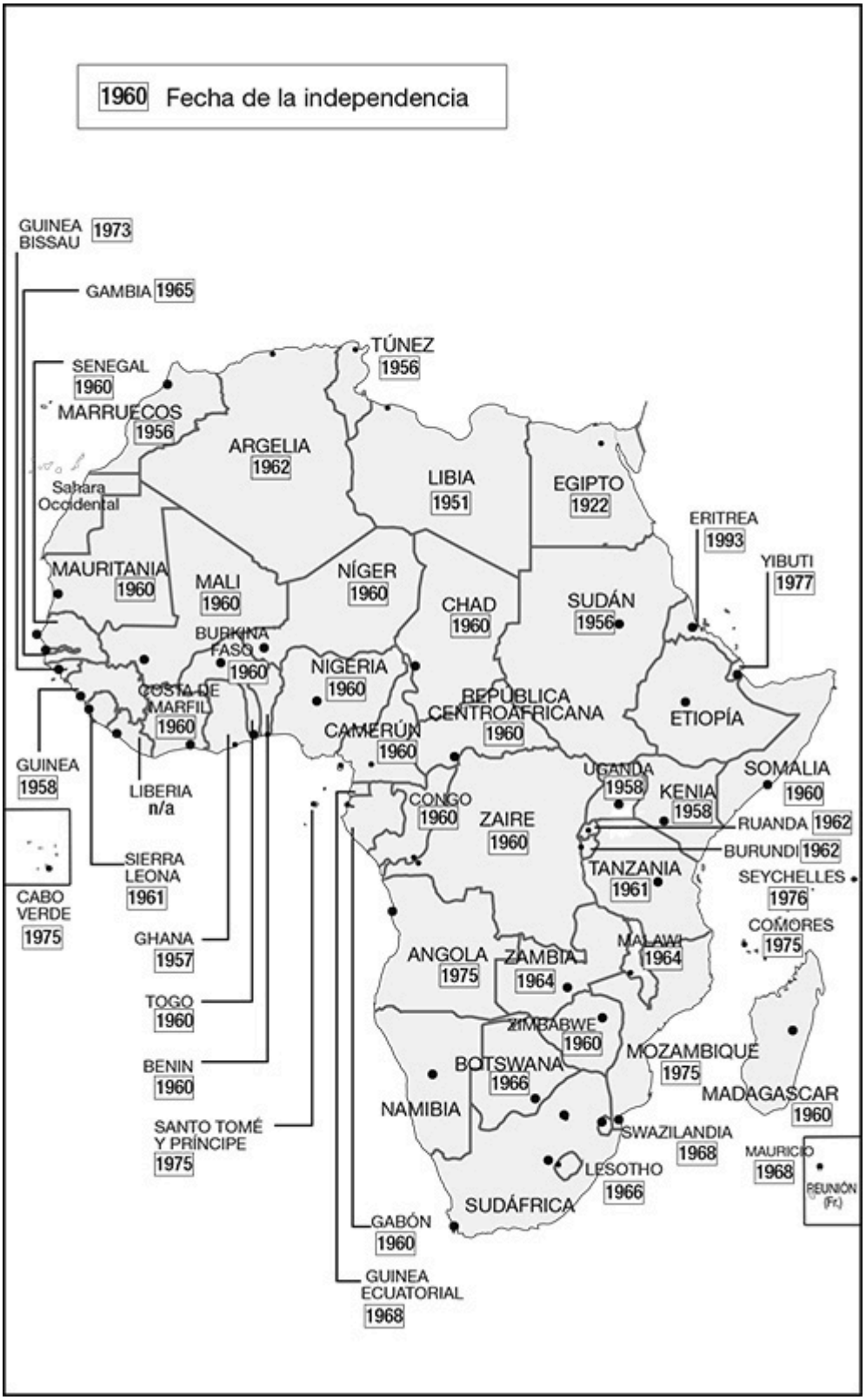
Mapa 8. Fronteras políticas y militares de Israel antes de 1994 (elaborado a partir de A. Espino López, *Atlas histórico del colonialismo,* Madrid, Síntesis, 2010, p. 265).



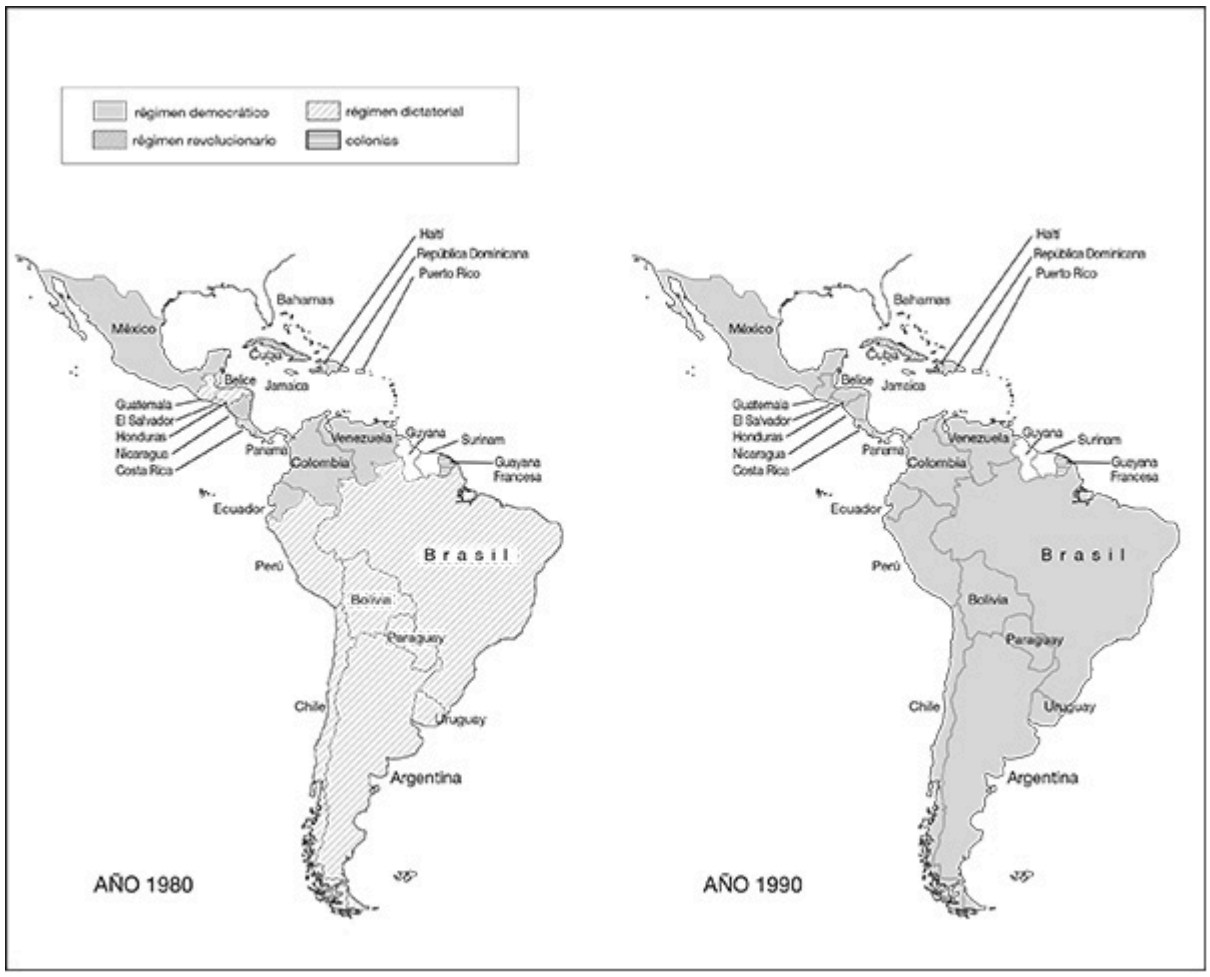
Mapa 9. El mundo árabe (elaborado a partir de P. Boniface y H. Védrine, *Atlas du Monde Global,* París, Armand Colin y Fayard, 2010, p. 124).



Mapa 10. Asia.



Mapa 11. África *ca.* 1995.



Mapa 12. Regímenes políticos en América Latina.